

01056



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

10/03/05

ACCIONES DE LA POLITICA EXTERIOR NORTEAMERICANA
POR EL CONTROL DEL ESPACIO ANDINO Y AMAZONICO

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

P R E S E N T A :

YENISEY RODRIGUEZ CABRERA



MEXICO

2005

m343960



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

SÍNODO

Dr. John Saxe-Fernández, asesor

Dra. María Cristina Rosas

Mtra. Berenice Ramírez

Dr. Severo Salles De Albuquerque

Dr. Raúl Ornelas

Wem kann man das zueignen?

Y.R.C.

Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf Nichts gestellt, auf nichts als auf Sich. Stelle Ich denn meine Sache gleichfalls auf Mich, der Ich so gut wie Gott das Nichts von allem Andern, der Ich mein Alles, der Ich der Einzige bin. Ich bin [nicht] Nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts, das Nichts, aus welchem Ich selbst als Schöpfer Alles schaffe.

Fort denn mit jeder Sache, die nicht ganz und gar Meine Sache ist! Ihr meint, Meine Sache müsse wenigstens die "gute Sache" sein. Was gut, was böse? Ich bin ja selber Meine Sache, und Ich bin weder gut noch böse. Beides hat für Mich keinen Sinn.

*Das Göttliche ist Gottes Sache, das Menschliche Sache des Menschen. Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie usw; sondern allein das Meinige, und sie ist keine allgemeine, sondern ist einzig, wie Ich einzig bin: **Mir geht nichts über Mich!***

Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, 1844.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO I IIRSA: MARCO REFERENCIAL	
A. ESTADOS UNIDOS ANTE LA CRISIS DE SUCESIÓN HEGEMÓNICA	10
a) La disputa por la hegemonía en el mundo	10
b) El debate de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo de la posguerra fría	26
c) La política exterior de los Estados Unidos ante la crisis del capitalismo mundial	37
B. LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA	48
a) Los ajustes de la política exterior norteamericana frente a la vulnerabilidad estratégica	49
b) El libre comercio en las Américas	53
c) El papel de las corporaciones transnacionales en el libre comercio	63
C. LA IMPORTANCIA DE LA IMPERATIVA INTEGRACIÓN FÍSICA SURAMERICANA	69
a) El control del espacio como objetivación del poder	70
b) El problema del territorio en Sudamérica	76
CAPÍTULO II ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA (IIRSA)	
A. LA HISTORIA DE LA IIRSA	87
a) Rastreado los orígenes de la IIRSA	87
b) Los avances institucionales y materiales para la concreción de la IIRSA	103
c) El contenido político de los cambios jurídicos	107
B. ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO DE LOS EJES DE DESARROLLO DE LA IIRSA	115
a) Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname (Eje del Escudo Guayanés)	119
b) Eje Interocéanico Brasil-Bolivia-Paraguay-Perú-Chile (Eje Interoceánico Central)	125
c) Eje Multimodal del Amazonas (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú) (Eje del Amazonas)	134
d) Eje Andino (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La paz)	140
e) Eje Perú-Brasil (Eje Perú-Brasil-Bolivia)	150
CAPÍTULO III LA IIRSA EN LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA Y LA GEOPOLÍTICA REGIONAL	
A. EL ARCO ANDINO Y LA CUENCA AMAZÓNICA EN EL PLANTEAMIENTO GEOPOLÍTICO Y GEOECONÓMICO DE LOS ESTADOS UNIDOS	
a) La importancia geoestratégica de la IIRSA	159
b) La IIRSA y el dominio de los ríos	171
c) El control sobre los energéticos: el petróleo, el gas y el carbón	192
d) las riquezas de la Amazonia	214
e) La IIRSA y la militarización de los Estados Unidos en los países de la cuenca amazónica	229

B LOS CAMBIOS EN LA GEOPOLÍTICA REGIONAL	241
a) El lugar de Brasil en la geopolítica regional	242
b) La IIRSA y el libre comercio regional	253
CONCLUSIONES	268
ANEXO DE MAPAS	278
FUENTES DE INFORMACIÓN	285

INTRODUCCIÓN

En los últimos años los países que conforman la región andina y amazónica —Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil—en el subcontinente sudamericano han adquirido una particular relevancia en el discurso académico y en el análisis político. Varias son las razones por las que estos países han sido el blanco del interés tanto de los gobiernos como de los estudiosos de lo social. En primer lugar, tenemos el ascenso al gobierno de grupos políticos marginados en décadas pasadas que, independientemente de los resultados concretos que hayan tenido al interior de sus países y del lado del espectro político en que se mueven, han evidenciado la crisis de los viejos partidos políticos y la emergencia de un activismo popular singular. Hugo Chávez en Venezuela; Álvaro Uribe en Colombia; Lucio Gutiérrez en Ecuador; Alejandro Toledo en Perú; Carlos Mesa en Bolivia y Luis Inacio Lula sorprendieron al momento de ser elegidos por no formar parte de la clase política convencional. En segundo lugar encontramos la presencia de movilización popular que en algunos casos ha logrado deponer presidentes, como en Bolivia y recientemente en Ecuador; ha logrado imponer presidentes, como en el caso de Venezuela, Ecuador y Brasil; y ha logrado que el presidente los coloque en el plano de enemigos internos en una guerra civil como en el caso de Colombia con las FARC y el ELN enfrentados al ejército oficial.

Sin embargo, no es únicamente su convulsa situación política la que convierte a esta zona en el foco de atención hemisférico y hasta mundial: América Latina y el Caribe en general y en el Arco Andino y la Cuenca Amazónica en particular se han convertido en espacios geopolíticos y geoeconómicos muy codiciados ya que en ella se localizan importantes recursos naturales estratégicos para el óptimo desarrollo del modelo capitalista actual, como el petróleo, el carbón y el gas y varios minerales cuya explotación beneficia a un reducido grupo de corporaciones transnacionales, y para la supervivencia humana, como el agua, el oxígeno, los recursos forestales, la biodiversidad, etc. Además posee puntos geoestratégicos elementales para el control militar de todo el hemisferio occidental. La importancia del espacio andino-amazónico no niega la de otras áreas dentro de la misma Sudamérica o de América Latina pero su riqueza en términos de recursos naturales y su singular posición en el mapa lo vuelven un espacio de poder deseado por las grandes potencias. De esta manera, aunque en muchas ocasiones se intente explicar la situación latinoamericana a partir de sus contradicciones internas, lo cierto es que los países latinoamericanos ni están solos en el mundo ni puede entenderse de forma ajena

al actuar político de otras naciones, sobre todo de los Estados Unidos, cuya importancia dada a esta subregión no es gratuita.

De acuerdo a la magnitud de los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, se puede estar tentado a decir que conforman un parangón en la historia moderna y que fueron tan profundos que hasta trastocaron la política exterior estadounidense hacia América Latina. Esto es sólo parcialmente cierto, pues la verdad es que, aparte del discurso donde los “terroristas” se convirtieron en el principal enemigo, no hubo cambios sustanciales en los objetivos a corto, mediano y largo plazo, como la formación de una fuerza multilateral militar en el hemisferio, la conformación de un área de libre comercio en el continente, el control militar de los territorios con recursos naturales estratégicos, etc. Pero si bien es cierto que el 11 de septiembre no es una fecha significativa *per se* pues continúa marcando la disminución relativa de la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo, no lo es menos que sí es relevante porque se convierte en el momento crucial para una importante contraofensiva que busca invertir el debilitamiento estadounidense y reconstruir un Nuevo Orden Mundial centrado en ese país. En este sentido se inscriben tanto la ofensiva a Afganistán como la invasión a Irak, que permitieron que el imperialismo mostrara con mayor claridad su cara militar.

El Imperio contraataca: aunque la reactivación económica estadounidense en tiempos recientes haya ayudado a conjurar la idea de la declinación de esa gran potencia, la crisis de sucesión hegemónica que se vive en las relaciones internacionales lo obliga a controlar los espacios geopolíticos y geoeconómicos para recuperar su lugar como gran potencia líder del mundo capitalista. Esta tarea no es fácil: el capitalismo que en la Guerra Fría era uno frente al socialismo se fracturó al mismo tiempo que caía el bloque soviético, aflorando así las diferencias entre los distintos modelos de producción capitalista seguidos en Asia, Europa y los propios Estados Unidos e iniciando una competencia intercapitalista, competencia nada limpia en tanto que los Estados Unidos han venido recurriendo al uso de instrumentos militares y de inteligencia para compensar sus desventajas y en la que el control del espacio andino-amazónico se inscribe, pues parte de las actuales debilidades de Estados Unidos radica en su *vulnerabilidad estratégica*, su imposibilidad de satisfacer sus requerimientos básicos de materias primas de importancia para el funcionamiento del capitalismo.

A pesar de los pregoneros del fin de la historia y de la geografía, los territorios de la región andino-amazónica, que poseen recursos naturales estratégicos vitales para el funcionamiento de una gran potencia y para el mantenimiento de su poder, están incluidos en los planes de la política exterior norteamericana ya que la posesión esos recursos apunta hacia la concreción de sus objetivos geopolíticos —el dominio militar sobre lugares geoestratégicos, el control sobre las vías y los ríos más

importantes, la posesión segura de combustibles fósiles, la propiedad sobre las más grandes reservas de agua dulce y de biodiversidad, entre otros— y geoeconómicos —la propiedad y/o explotación y comercialización de dichos recursos a manos de las corporaciones transnacionales, vehículos de la política exterior norteamericana— ya no sólo frente a la competencia intercapitalista actual sino frente a la escasez de recursos que plantea escenarios caóticos en el futuro.

De esta manera y en consonancia con el discurso del libre comercio, el cual se ha convertido en el instrumento político privilegiado para la intromisión estadounidense en la organización de las políticas económicas en los países latinoamericanos, se presentó en Sudamérica la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), proyecto que plantea una integración física fundamental para la real conexión comercial y política de los países sudamericanos, aunque la mayoría de los planes se enfoquen hacia el área andina y amazónica donde la infraestructura es irregular, por decir lo menos. A pesar de que aparece como una iniciativa sudamericana, el financiamiento de la IIRSA lo realizan organismos financieros internacionales públicos y privados donde el capital norteamericano aparece, lo que indudablemente liga esta propuesta a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos en la región. Pero aun cuando vaya antecedida por el discurso de la integración y el libre comercio, la IIRSA se presenta como la posibilidad más factible a corto plazo para los Estados Unidos para ocupar y controlar el territorio andino-amazónico sin la necesidad de realizar una ocupación armada de gran nivel.

Así, de acuerdo a lo expuesto, en esta trabajo se plantea abordar el análisis de las implicaciones geopolíticas y geoeconómicas de la integración física de los países sudamericanos propuesta por la IIRSA, especialmente en los países del arco andino y la cuenca amazónica, en términos de la importancia del plan para el cumplimiento de los objetivos geoestratégicos planteados en la política exterior estadounidense hacia América Latina y también de la alteración que este proyecto en ejecución trae a la correlación de fuerzas regional. Así si bien el enfoque central apunta a la explicación de la IIRSA como un instrumento de la política exterior norteamericana para la apropiación de recursos naturales estratégicos, la ocupación de territorios geoestratégicos y el fortalecimiento de su hegemonía en la región, no se pueden dejar de lado las alteraciones que estas acciones provocan no tanto al interior de los Estados sudamericanos como en la geopolítica regional y hemisférica.

Es importante aclarar que la situación interna de los países involucrados en el proyecto de la IIRSA —Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, dentro del Arco Andino y Brasil, con el que los países anteriores comparten la cuenca amazónica— interesa a este trabajo únicamente, primero, cuando las acciones de sus gobiernos se crucen con los dos ejes de la política exterior norteamericana marcados como *principales: la necesidad interna de las élites político-empresariales de la Unión*

Americana de mantener su hegemonía en la región y la necesidad del capitalismo norteamericano de hacer frente a una situación de vulnerabilidad estratégica que lo deja en desventaja en la crisis de sucesión hegemónica actual y que sólo mejoraría satisfaciendo sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y segundo, cuando las transformaciones espaciales provocadas en la ejecución de los planes de la IIRSA alteren la correlación de fuerzas al interior de la región sudamericana.

Dicho esto, el propósito de esta investigación es explicar y analizar las implicaciones geopolíticas y geoeconómicas de la ejecución de los proyectos incluidos en la Integración de la Infraestructura Regional de Sur América en los países del Arco Andino y Brasil, tanto para la geopolítica hemisférica como para la geopolítica regional así como la relación de esta iniciativa con los objetivos geoestratégicos planteados en la política exterior estadounidense hacia América Latina. En el primer capítulo se intentará esclarecer la forma en la cual se ha venido planeando y organizando la política exterior norteamericana en general y el proyecto panamericano de integración en particular con relación a América Latina en los últimos años, con miras a encontrar las formas mediante las que esa política contempla la necesidad de construcción de una infraestructura en la región sudamericana que facilitaría la apropiación de recursos naturales estratégicos y la ocupación de territorios geoestratégicos a partir de la unión física real entre los países de la región; además, se explicarán las razones por las que el arco andino y la cuenca amazónica se han convertido en territorios codiciados y susceptibles o vulnerables para la construcción de una infraestructura. En el segundo capítulo se realiza un análisis geoestratégico puntual desde la geopolítica y la geoeconomía de los ejes de desarrollo propuestos en la iniciativa de la IIRSA, además de que se exponen los nexos entre esta propuesta de construcción de una infraestructura regional y los planes de política exterior de Estados Unidos en la región, aclarando el papel de los organismos internacionales en la promoción de la misma y la construcción de un marco jurídico ad hoc a la propuesta. Finalmente, partiendo del análisis de cada uno de los ejes de desarrollo de IIRSA, en el capítulo tres se elabora un análisis de la importancia geopolítica y geoeconómica del arco andino y la cuenca amazónica para los dos ejes de la política exterior norteamericana marcados como principales (la necesidad interna de las élites político-empresariales de la Unión Americana de mantener su hegemonía en la región y la necesidad del capitalismo norteamericano de hacer frente a una situación de vulnerabilidad estratégica) y se expone la situación de la geopolítica regional a partir de la ejecución de los proyectos de la IIRSA, dando particular importancia al caso de Brasil, potencia regional.

CAPÍTULO I

IIRSA: MARCO REFERENCIAL

A. ESTADOS UNIDOS ANTE LA CRISIS DE SUCESIÓN HEGEMÓNICA

La naturaleza de las relaciones de Estados Unidos con América Latina y las acciones de la política exterior de aquella potencia en los países latinoamericanos en las últimas décadas, así como la aparición de la propuesta para la construcción y fortalecimiento de una infraestructura regional en Sudamérica, no pueden entenderse sin la revisión del contexto mundial y hemisférico en el que han tenido lugar y sin la caracterización de los procesos socio-históricos en los que se construye nuestro devenir. Por eso, resulta indispensable hacer una revisión, primero, de la actual correlación de fuerzas internacionales, donde el poder hegemónico está siendo disputado por las grandes potencias; después, de la discusión sostenida al interior de los Estados Unidos sobre la hegemonía después de la bipolaridad; finalmente, de la situación norteamericana ante la crisis del capitalismo mundial y los lineamientos generales de la política exterior norteamericana en la posguerra fría.¹

a) LA DISPUTA POR LA HEGEMONÍA EN EL MUNDO

Aunque el término hegemonía (ηγεμονία) surgió de la teoría militar², con el paso del tiempo se convirtió en un concepto multifacético utilizado sin mucho rigor científico pero siempre relacionado con el ejercicio del poder. Durante varios siglos y especialmente durante la conformación de los Estado-Nación, *hegemonía* fue la palabra usada en la literatura política para designar una relación entre Estados o, en sentido más general, entre comunidades políticas de igual especie, de las cuales una de

¹ Independientemente de las implicaciones que tenga este concepto en términos de discurso e ideología en otros contextos, en este trabajo lo ubicaremos en los años posteriores a la desintegración material del bloque “socialista” por el hecho de que, aunque se reconoce que la descomposición interna de los dos bloques de poder empezó desde muchos atrás, el fin de la bipolaridad ha implicado una transformación fundamental en las relaciones internacionales que ha conducido ineluctablemente a un cambio en las estrategias de las grandes potencias, a una ruptura de las concepciones geopolíticas que prevalecieron más de cuatro décadas. Este cambio estratégico global inaugura una época que descubre la ausencia de un hegemón por primera vez en muchos años.

² El término *hegemonía* tiene dos orígenes: la palabra griega *eghestai*, que significa “conducir”, “ser guía”, “ser jefe”; y el verbo griego *ehgemoneno* que significa “guiar”, “preceder”, “conducir” y del cual deriva “estar al frente”, “comandar”, “gobernar”. Por *eghemonia* (ηγεμονία), el antiguo griego entendía la dirección suprema del ejército. *Egemone* era el

ellas ejerce la dirección política sobre otra o sobre todas las otras, a las que inspira dirección política o la impone porque es dominante en virtud de su superioridad económica y militar. Esas características se convertían en su mayor potencial de intimidación y coerción, al cual se unía la capacidad de proponerse como modelo por su prestigio y por su superioridad cultural. La hegemonía implicaba un reconocimiento de los otros Estados hacia el hegemón como dirigente legítimo. Según Norberto Bobbio, la hegemonía en ese tiempo podía ser definida, en última instancia, como una forma de poder *de facto* que en el *continuum* influencia/dominio ocupaba una posición intermedia, oscilante entre uno y otro polo. (1976:728)

En los estudios alemanes relacionados con la razón de Estado, la *hegemonía* era vista como un canon de interpretación histórica y la colocaban en el centro de sus reflexiones sobre la historia europea y mundial, unido al concepto de *equilibrio*. Más tarde Gioberti, escritor del *risorgimento* italiano, sentó las bases de la evolución del término porque lo emancipó de su significado de supremacía militar y lo utilizó para describir situaciones de superioridad moral y civil pero no fundadas necesariamente en la posesión de la fuerza sino en la tradición. Así, el término *hegemonía* pasa a la Teoría Política del siglo XX y aunque históricamente siempre fue un concepto de aplicación en el campo internacional, durante ese siglo el término *hegemonía* se utilizó en explicaciones de lo interestatal, terreno para el que algunas teorías marxistas redefinieron el concepto dándole otro sentido: los términos de las relaciones hegemónicas no son de las entidades estatales sino de los grupos sociales operantes en las formaciones sociales dominantes.

Esta importancia creciente de la hegemonía en la Ciencia Política ocurrió por la conciencia de la cada vez mayor centralidad de los aparatos ideológicos en la sociedad industrial de masas, cuando la integración social deja de aparecer como el resultado producto exclusivo o prevaleciente de la fuerza material de los órganos coercitivos y represivos y adquiere mayor importancia el problema del consenso, de la adhesión a un sistema de valores y de creencias, a una concepción del mundo. De esta forma, el concepto de hegemonía asume en la problemática marxista un lugar muy importante. Según ésta, la clase dominante que detenta el poder político institucionalizado a través de los instrumentos de la información directa e inmediata, difunde una concepción del mundo unitaria que legitima el propio dominio, presentándolo como natural, necesario, en los intereses de todos. La clase dominante ejerce una dirección no sólo política sino intelectual y moral, cultural y gracias a este consenso difuso, la sociedad capitalista pudo ocultar sus contradicciones y el carácter opresivo del dominio de clase. El

conductor, el guía y también el comandante del ejército. En el tiempo de la guerra del Peloponeso se habló de la ciudad hegemónica a propósito de la ciudad que dirigía la alianza de las ciudades griegas en lucha entre sí.

estudio de la *hegemonía* dentro del marxismo se expresó en dos corrientes: la de Antonio Gramsci y la estructuralista de Nicos Poulantzas³.

Gramsci utilizó el término de *hegemonía política* para expresar el sello de la sociedad civil sobre la sociedad política en dos situaciones: en la formación de la opinión pública y en la división de poderes. Así, se puede distinguir la hegemonía que expresa la primacía ideológica y económica de una clase y la que se prolonga normalmente por la hegemonía política. Es muy importante aclarar que para Gramsci, la hegemonía no es dominación: ésta es la utilización predominante o exclusiva de la sociedad política en sus relaciones con las clases subalternas, cuando la sociedad política no logra llegar a un buen arreglo con determinados grupos de la sociedad civil.⁴ A su vez, Poulantzas afirma que la hegemonía consiste en la polarización-estructuración de los intereses específicos y contradictorios de las diversas clases o fracciones de clase del bloque de poder, o sea, en la constitución de los intereses económicos-corporativos en intereses políticos que representan los intereses generales comunes de los mismos y consienten la explotación económica y la dominación política. Tal función hegemónica se extiende a la sociedad entera: quien es hegemón en el bloque en el poder es hegemón en toda la sociedad.⁵

Pero si bien es cierto que las definiciones de Gramsci y Poulantzas explican de manera muy clara el proceso de la hegemonía en las sociedades nacionales, no es menos verdadero que de ninguna manera fueron concebidas como categorías para explicar los procesos políticos de la sociedad internacional en tanto que ésta carece de una organización de tipo estatal, con un gobierno mundial y

³ Según Gramsci, la *hegemonía* es parte de un proceso que denota la capacidad de convencer, de establecer consensos y de generalizar la propia concepción del mundo, concepción que emana o se construye justamente en el proceso de trabajo. Es obra de una clase fundamental, la clase dirigente, que está en una situación preeminente en un doble nivel: a nivel estructural porque es la clase fundamental en el campo económico y a nivel superestructural en tanto que posee la dirección ideológica por intermedio del bloque intelectual. El concepto de hegemonía en Gramsci poseía cuatro aspectos esenciales: una base de clase y una expresión cultural-ideológica; la organización de la hegemonía a manos de los intelectuales; el énfasis en la "base social" de la hegemonía, o sea, en la necesidad que tiene la clase fundamental de apoyarse en la sociedad civil; y el análisis de las relaciones de fuerza en el seno del sistema hegemónico (Portelli, 1997:81). Mientras tanto, la interpretación del concepto de *hegemonía* de Nicos Poulantzas se refiere a la dominación ideológica o la capacidad de ejercerla y trata de argumentar contra lo que él consideró como una degeneración subjetiva e histórica respecto al marxismo/leninismo. Poulantzas defendió la concepción marxista de ubicar a la hegemonía en la estructura. Para él, el concepto de hegemonía sirve principalmente para situar las relaciones de clase con el bloque en el poder. Siguiendo el razonamiento de que el Estado político no traduce al nivel político los intereses de las clases dominantes sino la relación de esos intereses con los de las clases dominadas, afirma que una formación social está constituida por el cruzamiento de modos de producción: de ello deriva la coexistencia, en el campo de la lucha de clase, de más clases y fracciones de clases, de las cuales una o alguna son políticamente dominantes y constituyen el bloque en el poder. El concepto de hegemonía se aplica a una clase o fracción de clase al interior del bloque en el poder que diseña la forma de su poder sobre otras clases o fracciones.

⁴La hegemonía en los estudios de Gramsci es considerada como un proceso muy complejo donde se negocian las prioridades de la sociedad civil y las de la sociedad política, que son distintas en cada bloque histórico. Para ahondar en el tema véase Hughes, Portelli, *Gramsci y el bloque histórico*, Ed. Siglo XXI, 19ª ed., México, 1997, 162 pp. o Antonio Gramsci, *Cuadernos de la cárcel*, Ed. ERA, México, 1981, 6v.

con un modo de producción homogéneo. Ha sido un error recurrente el de muchos estudiosos de lo internacional aplicar de manera mecánica este concepto marxista de hegemonía cuando intentan explicar el predominio de una nación o grupo de naciones sobre las otras. Si esa categoría se saca de su contexto original —donde existe un bloque histórico cuya superestructura está caracterizada por la lucha de intereses de la sociedad civil y la sociedad política— y se quiere hacer válida en el plano internacional, se torna inaplicable. Por ello, debe quedar claro que la hegemonía a la que se hace alusión en este trabajo no es la que estudió Gramsci cuando el fascismo se adueñó de Italia.

Tras las dos grandes conflagraciones que tuvieron lugar en el siglo XX, los estudiosos de las relaciones internacionales retomaron la connotación de “liderazgo” de la hegemonía y se le empezó a utilizar como sinónimo de capacidad de dirección en el sistema internacional. (Bobbio, *Op. Cit.*:729) El concepto de hegemonía empleado en este trabajo se acerca más a esta noción y se le considera como *la supremacía o presión que un Estado ejerce sobre otro u otros, que puede tener carácter regional, continental o mundial*. De ahí deriva que un *poder hegemónico sea un poder que no está sometido a otro, que no esté supeditado a otro poder* dentro de su zona de influencia, ya sea local, regional o mundial. El término de *hegemonía* se emplea aquí para denotar situaciones de dominación, de fuerza, de poder, fundada en la superioridad militar, económica y/o política.⁶

En el plano mundial, el hegemón —Estado que detenta la hegemonía— diseña unas relaciones interestatales de poder que prescinden de cualquier reglamentación jurídica. Como afirma Gearoid O Tuathail, un poder hegemónico mundial es por definición un “rule writer” para la comunidad mundial, pues de forma concomitante a su poder material está el poder para representar la política mundial en ciertas maneras. (1998:82). Así, el hegemón ordena el espacio internacional donde se define el drama central de la política internacional y crea las condiciones mediante las cuales los demás Estados adoptan y aceptan las políticas del hegemón.

La competencia por la hegemonía mundial se produce entonces a través de la capacidad para determinar las normas generales del funcionamiento del sistema en su conjunto para que se mantenga el orden que le conviene al hegemón. Esto implica el mantenimiento de un liderazgo global que comprenda varios aspectos. En primer lugar, en lo económico, que comprende, entre otras cosas, la superioridad tecnológica y la capacidad para fijar las reglas de la organización de la división

⁵Para profundizar sobre la concepción estructuralista de Poulantzas véase Nicos Poulantzas, *Hegemonía y dominación en el Estado Moderno*, Ed. Pasado y Presente, 4ª ed., México, 1977, 161 pp.

⁶ Algunos autores marxistas plantean que la hegemonía se basa en la economía del hegemón y que los factores políticos y militares sirven para apuntalarla. Así, definen a la hegemonía económica como la capacidad para determinar el paradigma tecnológico sobre el cual se asienta la reproducción material global y para establecer los modos de su implantación generalizada. Entre esos medios se encuentran los militares, que son elementos sancionadores de jerarquías y de monopolización de recursos a nivel internacional.

internacional del trabajo. En segundo término, en lo cultural, pues la hegemonía en este ámbito le permite imponer su propio modo de vida material y social en el mundo. Luego, en lo militar para mantener y consolidar su poder y para disuadir a los posibles retadores. Finalmente, en lo espacial, que es donde a fin de cuentas se define la jerarquía que guardan los diferentes territorios en torno de la división internacional del trabajo.

En el ámbito de la política internacional, los Estados que tienen posibilidades políticas y materiales para competir por la hegemonía son llamados *grandes potencias*. Este término, que data de principios del siglo XIX, parece haberse usado por primera vez por Lord Castlereagh, un primer ministro británico, en el contexto de un triunfo sobre Francia. Más tarde Rudolf Kjellen, el mismo al que se atribuye la creación del concepto “Geopolítica”, lo retomó para los países con tres características principales: espacialidad, libertad de movimiento y cohesión interna. (O’ Loughlin, 1994:100). Durante la guerra fría, la principal característica definitoria de una gran potencia era la capacidad militar, la cual era capaz de imponer un orden a los demás miembros de la sociedad internacional. Sin embargo, la definición de gran potencia se ha transformado por las particularidades del actual (des)orden mundial. Después de la guerra fría, cuando ningún Estado posee un liderazgo reconocido por todo el mundo, el concepto gran potencia se refiere a un Estado fuerte con la capacidad de movilizar los recursos humanos y materiales del país en la consecución de objetivos globales. (Rosas, 1999:19).

Para que un Estado sea considerado como potencia debe poseer ciertas características en términos de poder. En la actualidad, el aparato militar sigue siendo muy importante pero no es el único. Además de tomarlo en cuenta como factor de poder, podemos agregarle las capacidades económicas (a ambos recursos, el militar y el económico se les suele definir como *hard power*) y también el desarrollo científico-tecnológico y la capacidad de influir al mundo a través de múltiples canales (*soft power*). Según María Cristina Rosas, “la base material y humana de las grandes potencias debe ser, por tanto, vasta de manera que el país o conjunto de países en cuestión sea(n) capaz(es) de proyectar liderazgo tanto a nivel regional como global”. (*Ibid*:10)

Atendiendo a lo anterior, uno de los mejores criterios para medir el poder de las grandes potencias en la posguerra fría es el que ofrece Samuel Kim. Según este autor, los elementos que intervendrían para caracterizar a una gran potencia serían los siguientes: Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Bruto per cápita, Índice de Desarrollo Humano, número de cabezas nucleares estratégicas, gasto militar, venta de armas, reservas internacionales en divisas convertibles, asistencia oficial para el desarrollo, participación en el presupuesto total de la ONU, poder de voto en el FMI, poder de voto en el BM, número de patentes importantes y lugar que ocupa a nivel mundial. (*Ibid*:20).

De esta forma, según María Cristina Rosas, se consideran grandes potencias en la actualidad a los Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón y Rusia.⁷

A lo largo de la historia, la hegemonía mundial ha sido soportada por la superioridad militar reforzada por la posesión de productos estratégicos. Sin embargo, la internacionalización del capitalismo ha obligado a una reestructuración del esquema del poder mundial que implica el replanteamiento en el orden económico del mercado mundial, de la división internacional del trabajo, de las bases tecnológicas de la producción⁸, de las formas de competencia⁹ y de la relación entre el Estado-Nación y el capital transnacional. Asimismo, ha puesto en entredicho el papel del Estado como sujeto de la hegemonía, como había sido hasta ahora.

Ante la creciente importancia de las corporaciones transnacionales y de los grandes flujos de capital que circulan a diario en las economías más poderosas, se ha tendido a considerar que el Estado está dejando de ser el único y principal sujeto de hegemonía para abrir paso al capital transnacional. La anterior es en realidad una falsa discusión pues el capital se puede expresar en ambas formas. Cuando lo hace bajo la forma de Estado, lo utiliza para apropiarse de los recursos estratégicos mundiales en detrimento de otros Estados Nacionales y para abrir espacios que permitan el despliegue de capitales. Cuando lo hace bajo la forma de empresa, el capital no reconoce fronteras políticas, culturales o geográficas. Sus límites están marcados por su capacidad productiva. No obstante la expansión en términos de ganancias y de territorio que han tenido las empresas transnacionales, es factible decir que sólo el Estado puede presentarse como portador de un proyecto “nacional” que es a los ojos de todos, legítimo. De aquí que el sujeto de la hegemonía siga siendo el Estado Nación.

En las relaciones internacionales actuales las grandes potencias se sitúan como un reducido grupo de países con poder económico y político que se disputa permanentemente el control de las

⁷ Como se puede observar, la cuestión espacial no es tomada en cuenta por Kim como un factor de poder en el entendido de que la expansión territorial ha dejado de ser una de las aspiraciones de las grandes potencias, quienes, según esto, ya no aspiran a “conquistar” grandes extensiones territoriales como la hacían en el pasado porque ahora lo territorial ha perdido importancia a manos de lo temporal. Esta consideración no es más que una especie de cortina de humo para no criticar a los geopolíticos de Estado de las grandes potencias que siguen pensando en los términos anteriores sólo que ahora sus países ya no “ocupan” directamente los territorios, pues lo hacen a través del adiestramiento de las fuerzas armadas locales, del control de los gobiernos nacionales y la policía local y de organismos como el FMI y el BM. Probablemente ya no penetren de manera tan evidente los ejércitos y las guerras tiendan a tecnologizarse, pero no es por falta de ganas sino porque no se quieren enfrentar a una población más crítica. Si bien es cierto que ahora la hegemonía se apoya mucho en la construcción ideológica para generalizar su concepción del mundo, también lo es que aquélla no se puede lograr si no se materializa en el espacio geográfico.

⁸ El perfeccionamiento técnico y las innovaciones tecnológicas permiten mayor integración de los recursos y procesos productivos, fortalecen los grandes liderazgos y han propiciado una redefinición o reafirmación de la hegemonía en todos los terrenos y niveles.

⁹ Cuando hablo de cambio en las formas de competencia me refiero al nuevo tipo de enfrentamiento con relación a la obtención de mejor tecnología, de redes productivas más eficientes y de mayor control de los recursos estratégicos mundiales.

poblaciones, de los territorios, de los recursos y los mercados del resto de las naciones de acuerdo a las estrategias marcadas por los grupos de poder que los gobiernan. La Unión Europea posee actualmente una influencia considerable en Europa Oriental, el norte de África y zonas de Medio Oriente mientras que el poder de los Estados Unidos predomina en América Latina y China y Japón controlan el Asia Central e Indochina así como el sur y este de Asia. Estas grandes potencias dictan las políticas económicas y sociales que los otros países deberán seguir, a través de organismos internacionales donde sólo ellas tienen voz y voto.

La apertura de las economías de los países no desarrollados impulsada desde las oficinas del FMI en Washington ha provocado una competencia mayor entre las grandes potencias, pues el poder de penetración económica y financiera de cada una de ellas es casi similar. De esta forma, en los últimos años ha tendido a verse al mercado como el espacio a través del cual se incide en el ejercicio del poder y se construye la hegemonía. Este mercado no es un ente abstracto ni mucho menos: es una construcción de los países más poderosos para perpetuar y fortalecer el modelo capitalista de producción. Por ello, la hegemonía mundial y la capacidad que tienen los países para negociar en los distintos espacios internacionales depende cada vez más del nivel de participación económica en este mercado construido *ad hoc* a las necesidades del capital.

Así, las relaciones económicas internacionales, donde se ubica el mercado, se han convertido en el ámbito primordial de confrontación y diferenciación políticas. Sin embargo, no se piense que esta preeminencia del mercado en el análisis social hace a un lado a las explicaciones de la Ciencia Política clásica: a final de cuentas, la construcción de la hegemonía implica poder y éste no puede ser ajeno ni al capitalismo ni a cualquier otra relación social, como las relaciones económicas internacionales, que no se gestan en la nada, y como la propia hegemonía. La hegemonía entonces estará determinada no sólo por la condición de ser el país más rico del mundo sino por la influencia que se pueda ejercer sobre otras economías y por la capacidad de sobresalir en la disputa entre los países poderosos que compiten por la influencia sobre los territorios estratégicos y países viables para tener acceso a recursos naturales indispensables para el correcto funcionamiento de la maquinaria capitalista.

Las largas y tensas negociaciones entre las grandes potencias para determinar las reglas que rigen las relaciones económicas en el mundo muestran que no existe un liderazgo claro ni una exclusividad del poder por parte de un solo Estado¹⁰. Esta circunstancia evidencia una especie de

¹⁰ Varias son las pruebas de la realidad internacional para demostrar la ausencia de liderazgo internacional y de estrecho margen de negociación entre grandes potencias. En el ámbito diplomático, amén de observar la obsolescencia de la ONU como organismo de promoción de la paz, pudimos ser testigos de la falta de apoyo de la Unión Europea como bloque a la invasión de Irak realizada por Estados Unidos. En el ámbito comercial, podemos encontrar las fallidas reuniones al interior de la OMC, organismo desde donde se dictan las reglas del comercio internacional. En la quinta reunión ministerial de 2003

multipolaridad, pues si bien los Estados Unidos son aún una enorme potencia militar, tienen que aceptar compromisos y zonas de influencia de otros países en expansión en todos los ámbitos. Esto ha dado pie a una situación que algunos estudiosos denominan *crisis de sucesión hegemónica*.

Los primeros en percatarse de la pérdida de poder hegemónico de los Estados Unidos en el mundo fueron algunos economistas y neorrealistas como Kindleberger, Krasne, Keohane y Gilpin, quienes desarrollaron la Teoría de la Estabilidad Hegemónica, teoría desarrollada por estos académicos estadounidenses en los años setenta, justo en la década en la que el orden financiero acordado en Breton Woods y sostenido por el dólar norteamericano empezaba a tornarse crítico. La hipótesis principal de esta teoría era que los regímenes estables, particularmente en las relaciones económicas internacionales, dependen de un hegemón que establezca reglas y normas y entonces dirija el funcionamiento de todos utilizando su capacidad de impulsar a otros miembros para que se acoplen al régimen bajo su poder hegemónico. Advertían además que la capacidad hegemónica desaparecería a manos de los intereses que desafían al hegemón, pero que finalmente esto desestabilizaría el régimen internacional. (Evans, 1990:152)

Así, la hegemonía se empezó a plantear en Norteamérica más en los términos de la Economía Política que en los de la Política Internacional del realismo.¹¹ Según estos teóricos, cuyas aseveraciones pronto dieron lugar a lo que se conocería como neorrealismo, en el sistema internacional el liderazgo debe ser ejercitado por un hegemón, que será el Estado con la capacidad suficiente para ejercer este rol, pero ese liderazgo se debe materializar en el dominio en asuntos más económicos que militares. Los otros Estados deben definir su posición: o lo apoyan o se le oponen o les es indiferente. Ese apoyo se llama *consenso hegemónico*, en el cual, por cierto, sólo participan las grandes potencias o los países industrializados del Primer Mundo; los del Tercer Mundo no son considerados en tanto no buscan retar al hegemón.

La Teoría de la Estabilidad Hegemónica de los neorrealistas ha venido definiendo desde entonces a la economía en términos de posesión de los recursos materiales. Según Keohane, los poderes hegemónicos deben tener el control sobre cuatro grupos de recursos: materias primas, fuentes de capital, mercados y ventajas competitivas en la producción de bienes de valor elevado. (Saxe-

salieron a flote los conflictos entre los Estados Unidos y la Unión Europea pues Bruselas pretende sancionar a Washington por ofrecer incentivos fiscales a los exportadores que infringen los acuerdos de la OMC, mientras que Washington ha amenazado con abrir un caso en la OMC contra la UE por su moratoria contra de los alimentos genéticamente manipulados, lo que dificultó la llegada a un acuerdo.

¹¹ El realismo siempre ha visto a la hegemonía como un concepto en términos más militares que económicos. Aunque las cuestiones de la economía son importantes, el realismo recalca que la habilidad de un hegemón para dirigir las relaciones internacionales deriva tanto de la manera en que se ubica en el plano internacional como de las formas que busque para lograr sus metas. Para los realistas, la hegemonía es entonces el dominio político absoluto de un Estado sobre otro y la situación donde un Estado —el hegemón— es dominante en el sistema internacional.

Fernández y Brüger, 1999:290). De esta forma, cuanto más domine la economía política mundial un poder de esta clase, tanto más cooperativas serán las relaciones interestatales, pues sostiene que las guerras entre los estados centrales son menos frecuentes y menos severas cuando existe una potencia hegemónica fuerte que actúa como equilibrador y que garantice la estabilidad de la estructura del poder mundial.

Otro de los teóricos de la Estabilidad Hegemónica, Hughes, advierte que las ventajas derivadas del liderazgo hegemónico tienen su base en la capacidad del líder para proveer defensa, tecnología y otros beneficios. Sugiere además, que una combinación del control y liderazgo por parte del hegemón, facilita los sistemas de libre comercio, el libre flujo de la tecnología, los acuerdos sobre asuntos ambientales y un amplio espectro de relaciones pacíficas y cooperativas entre Estados. Da la idea entonces de que a mayor poder, corresponde una mayor estabilidad. (*Ibid*:291)

De esta forma desde la década de lo setenta hasta la actualidad, cuando el poder de los Estados Unidos se ve más erosionado y su influencia decae cada vez más, estos académicos han discutido el rol de los poderes hegemónicos para mantener la estabilidad internacional y las posibilidades de arreglos políticos fuertes sin un hegemón queriendo convencer al mundo de que es mejor el orden actual que la inestabilidad. Estos neorrealistas no esconden el *sustratum* del conservadurismo: la maximización del orden es la minimización del conflicto.

La Teoría de la Estabilidad Hegemónica, que intenta justificar la existencia de un hegemón —Estados Unidos— en el sistema mundial para el mantenimiento de la paz, no toma en cuenta la dificultad de la gran concentración de poder en el hegemón requerida para mantener la estabilidad y la previsión de beneficios suficientes para todos los actores internacionales. Por ello, basándose en los ciclos históricos de Fernand Braudel y el sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, algunos autores como Christopher Chase-Dunn, Bruce Podobnik y el mismo Wallerstein, explican la crisis de sucesión hegemónica de manera más realista.

Como resultado de la preocupación entre los principales teóricos del sistema-mundo, a principios de una década vital de reajustes del capital en el mundo, en 1994, se llevó a cabo un encuentro donde los estudiosos de la política, la historia y la economía debatieron sobre el tema de la crisis de sucesión hegemónica. Las principales dudas surgidas giraban en torno a la posibilidad de que una nueva estructura supranacional emergiera y fuera capaz de estabilizar y pacificar las relaciones entre las potencias centrales; a la alternativa de que una forma anárquica de competencia en el plano militar y económico se entronara, lo cual devendría una larga crisis mundial; y a la posibilidad de que la raza humana soportara esta larga crisis en tanto que los niveles de consumo aumentaban junto con el riesgo de agotar los recursos del planeta. Algunos pensaban que Estados Unidos seguiría siendo el líder

—que no el hegemón¹²— mientras otros veían prospectos más probables en Europa Occidental y en Asia, pero todos coincidían en que la hegemonía de los Estados Unidos era cosa del pasado.

En este tenor se advirtió que el sistema internacional sufrió un relajamiento con motivo del fin de la guerra fría. Eso propició que varios países tengan ahora la posibilidad de promover sus intereses sin la presión hegemónica y rígida que ejercieron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos intereses están estrechamente relacionados con el deseo de apropiarse de los mercados nacionales de los países que pertenecieron al bloque socialista y de consolidar el dominio sobre las economías de los países en desarrollo¹³. Este panorama llevó a muchos estudiosos a pensar que la competencia económica, más que la militar, se convertirá en la base de la *geopolítica*¹⁴.

¹² De acuerdo a Terry Boswell en un artículo titulado *American World Empire or declining hegemon*, cuando se habla de una crisis en la sucesión hegemónica, hay una diferencia fundamental entre liderazgo y hegemonía. Según él, el liderazgo es principalmente un concepto militar que hace referencia a la habilidad de proyectar los intereses y el poder alrededor del mundo. Los *líderes* del mundo tienen una alta concentración de armas con alcance global que deja lejos a sus más cercanos competidores. Mientras tanto, la hegemonía es considerada como una construcción mucho más compleja que es más un *proceso político y económico* que un *hecho*, por el cual el hegemón decide el comportamiento de la economía mundial y tiene posibilidades de apuntalarlo, lo cual ya ningún Estado en la actualidad está logrando ni está teniendo la capacidad para crear un nuevo orden. Advierte así que todos los hegemones son líderes mundiales pero no todos los líderes logran la hegemonía. (Boswell, 2004)

¹³ Cabe hacer la aclaración de que la autora de este trabajo se inscribe en la crítica realizada a este concepto desde la década de los setenta, cuando se empezó a cuestionar su validez para describir el estado de una economía, pues parecía que el modelo ideal para todos los países era el de las economías industrializadas, con la capacidad de destrucción ambiental y desigualdad social que implica. Sin embargo, se le utiliza a falta de otro concepto que remita a la idea que se quiere dar al referirse a los países pobres o no ricos, aclarando que no comparte esa connotación.

¹⁴ Aunque no es objeto de este trabajo discutir si la Geopolítica es una ciencia, una disciplina o un “arte”, como la llaman los militares; si pertenece al campo de la Geografía o de la Política; si su objeto de estudio se encuentra enmarcado dentro de las ciencias sociales o en las ciencias naturales, es importante aclarar a qué nos referimos cuando usamos esta palabra, ya sea como sustantivo o como adjetivo. La Geopolítica, es, por un lado, el conjunto de fenómenos de la realidad que se presentan en torno a la influencia de los elementos geográficos sobre las relaciones internacionales y de manera más específica, en los fenómenos que tienen lugar en el campo de la política internacional. Por otro lado, la geopolítica es la perspectiva científica que estudia estos fenómenos no solamente de acuerdo a la influencia de la geografía en la formulación de las políticas exteriores de los distintos Estados —las que se articulan en torno a los intereses de los distintos grupos en el poder y no en torno al interés general— y en el intento de esclarecimiento de las razones históricas por las cuales determinados Estados están interesados en la apropiación de ciertos recursos naturales y en el control de puntos específicos en el planeta, sino que intenta explicar de la manera más clara posible las características espaciales de la organización económica, política y social para facilitar la búsqueda de alternativas al orden espacial vigente. La Geopolítica no se puede reducir al campo de lo militar, como ha sido la constante hasta ahora. Es verdad que la inexistencia de un orden internacional incita a las grandes potencias a hacer prevalecer sus intereses mediante la fuerza, pero no es menos cierto que el fenómeno de la guerra y las armas en la actualidad tiene su esencia en la naturaleza conflictiva del capitalismo para reproducirse con la menor cantidad de obstáculos posible.

Si se quiere hacer una profundización sobre la naturaleza y el origen de este concepto, así como su evolución a lo largo de los siglos, se pueden consultar varios libros tanto de los autores clásicos como de estudiosos sobre el tema como los siguientes: para el periodo de la geopolítica clásica, consúltese *Politische Geographie*, de Friedrich Ratzel, padre de la geopolítica que desarrolló el término *Lebensraum*; *The Influence of Seapower Upon the History*, de Alfred Mahan; y *The Geographical Pivot of History*, de Sir Halford Mckinder. Para mejor entender el periodo de la llamada “geopolítica del fascismo o contrafascismo”, léase a Karl Haushoffer e Isaiah Bowman. Para el periodo de la geopolítica de la guerra fría, revítese a George Kenan y Henry Kissinger. Finalmente, para estudiar la Geopolítica Crítica y la Nueva Geopolítica, léase a Ives Lacoste y Geroid O Thuatail. Si se prefiere, se puede acudir al Capítulo I de la tesis de licenciatura presentada por la autora de este trabajo, que lleva por nombre “Proyección hegemónica de los Estados Unidos en América Latina. Análisis geopolítico y geoeconómico del Plan Colombia”, donde se hace un análisis y recuento de las principales corrientes de la geopolítica.

Tanto Chase Dunn como Podobnik dicen que si bien Japón y Alemania —las dos potencias con las economías más fuertes en el periodo inmediato al fin de la guerra fría— no pueden ahora permitirse el lujo de retar a los Estados Unidos porque dependen de la protección militar de este país en cuestión de vías marítimas internacionales para el acceso a materias primas cruciales, en un periodo de conflicto comercial extremo como el que parece vislumbrarse, los Estados Unidos estarían en posibilidad de ejercer represalias cerrando las vías marítimas, por lo que Japón y Alemania tendrían que rearmarse. Como no habría un hegemonía definido, advierten que las posibilidades de que se acerque una próxima guerra mundial aumentan de manera considerable. Según Immanuel Wallerstein, la declinación temporal de la hegemonía norteamericana hace surgir la posibilidad de un serio conflicto militar, pues la situación no es muy distinta de las situaciones de multipolaridad que antecedieron a la Primera y Segundas Guerras Mundiales.

Los argumentos de los tres autores citados se basan en los ciclos económicos que duran entre cincuenta y sesenta años, conocidos como Ola Kondratieff (Ola K)¹⁵ y que han operado sincrónicamente por lo menos durante los últimos dos siglos. La ola actual de descenso empezó alrededor de 1967 y 1973; así el punto cúspide del ascenso se espera para 2025. Para ese momento, el poder hegemónico de los Estados Unidos estará erosionado. Así, la expansión y el reacomodo del proceso económico aunados a la cada vez mayor escasez de materias primas, a la competencia en sectores como la informática y la biotecnología, a la degradación ecológica, a los conflictos intrarregionales y a los problemas entre el centro y la periferia, serán las causas de una confrontación enmarcada en una situación de sucesión hegemónica, donde la única forma de ganar la hegemonía es la fuerza. Esta noción de secuencia hegemónica parte de que todos los sistemas mundiales jerárquicos exhiben un ciclo de centralización política seguido de una fase de descentralización (sistema surgimiento-decadencia).

Esta tesis de una futura confrontación entre grandes potencias para encontrar al próximo hegemón se apoya también en la “Teoría de los Recursos de la Guerra” de Joshua Goldstein, según la cual los Estados son máquinas de guerra que siempre tienen el deseo de utilizar la fuerza militar pero como las guerras son costosas, los hombres de Estado tratan de evitarlas cuando sus ingresos son bajos

¹⁵ En 1926 el economista ruso N.D. Kondratieff identificó largas olas compuestas de una fase de auge en los precios seguida por una fase de deflación. Él estudió el comercio inglés y observó que los periodos de expansión ocurrirían en un ciclo de aproximadamente 50 años. La teoría del sistema-mundo incorporó el concepto de los ciclos de Kondratieff, atribuyendo los ciclos de expansión y estagnación a la operación del sistema capitalista. Durante las fases de crecimiento, el capital se invierte en el desarrollo y uso de nueva tecnología pero el resultado de toda esta inversión es la sobreproducción, lo cual da paso al fin de la fase decrecimiento. Durante las fases de estagnación, las oportunidades de prosperar son mínimas y el capital no invierte en el proceso productivo. Mientras tanto, la economía se reestructura para prepararse para la asimilación del próximo conjunto de innovaciones que iniciarán la próxima fase de la expansión económica.

y se lanzan a ellas cuando son altos. Por eso, será en el punto cumbre de la Ola K cuando se realice esta confrontación por la hegemonía mundial.

Finalmente, otros teóricos que también sostienen que en la actualidad se vive una crisis de sucesión hegemónica, como Joseph S. Nye, Richard Hass y Paul Kennedy, ven el remedio a esta situación en el establecimiento de un Estado Mundial donde los medios de coerción sean más grandes que los de cualquier coalición o en la continuación o revitalización de la hegemonía estadounidense siempre que ésta se consiga de manera pacífica. Esto representaría, según ellos, el mal menor en un mundo que no soportaría una confrontación con el tipo de armas que existen en la actualidad. Su explicación, sin embargo, carece de una importante consideración que sí toman en cuenta los teóricos del sistema-mundo: la posibilidad de una confrontación de tipo militar que termine por solucionar la crisis e imponga un nuevo hegemón, lo cual nos lleva ineluctablemente al cruce de dos realidades cercanas: la crisis de sucesión hegemónica y la guerra, pero no una convencional sino una relacionada con la posesión y control de los recursos naturales necesarios no sólo para el correcto funcionamiento del capitalismo actual sino para la vida humana.

La guerra ha sido un componente central en la solución de las crisis de sucesión hegemónica a lo largo de la historia. La confrontación armada ha sido una constante histórica en la solución de los conflictos internacionales y por encima de consideraciones que la ubican como parte integrante de la naturaleza humana conflictiva, la continuidad del enfrentamiento bélico a lo largo de la historia moderna no la descartan en estos momentos de convulsión por la ausencia de un hegemón. Sin embargo, las dimensiones que posee la guerra en la actualidad son incalculables y el acercamiento hacia ella puede hacerse desde distintas perspectivas que van desde la ética, pasando por la política hasta la meramente económica sin que ninguna de ellas sea excluyente de las demás.

De acuerdo a Fernando Mires en un libro en el que analiza el fenómeno de la guerra desde la filosofía política a partir del Proyecto sobre la Paz Perpetua de Immanuel Kant, la guerra no es lo contrario de la paz sino que es la no-guerra, que no es lo mismo (2001:93). Advierte además que no es la sociedad, como generalmente se piensa, la que viene de la guerra sino que a la inversa, la guerra viene de la sociedad porque evidentemente la guerra no es una actividad irracional sino que es realizada de acuerdo a planes, estrategias y tácticas para conseguir un fin preciso por medio de la aplicación inteligente de la violencia, con un cálculo previo de ganancias y pérdidas. Es decir, las guerras dependen también de determinadas correlaciones de fuerza que se miden tanto en el plano político como en el militar, lo que le lleva a hacer una afirmación categórica: **entrar en una guerra es una decisión política.** (*Ibid*:94) La maldad humana no viene de la falta de inteligencia sino que es precisamente ésta la que le permite conseguir sus objetivos al precio de la destrucción de sus

adversarios. Por ello, la política se encuentra presente no antes de las guerras sino también la guerra misma.

Aunque la guerra no puede ser considerada de la misma manera para distintos tiempos y espacios, lo cierto es que en la actualidad mantiene su esencia, muy bien descrita por Karl Von Clausewitz en el siglo XIX. De acuerdo con él, el propósito inmediato de la guerra es derribar al adversario e incapacitarlo de ese modo para ofrecer mayor resistencia (1999:9). De ahí que la guerra sea, en consecuencia, un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario, al que sabemos más débil. Para enfrentarse con la fuerza del otro, la fuerza propia recurre a las creaciones de la ciencia, que potencia a niveles inconmensurables a la fuerza física, que se convierte en un medio para imponer nuestra voluntad al enemigo. Pero la guerra, siguiendo a Clausewitz, no es un acto aislado, no consiste en un golpe sin duración ni posee nunca resultados absolutos. Así, no resulta fortuito que sea este general quien haya acuñado una de las frases más famosas sobre esta actividad humana: *“La guerra es la mera continuación de la política por otros medios*. La guerra no es simplemente un acto político sino un verdadero *instrumento político*, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios... (por lo que) todas las guerras deben ser consideradas como actos políticos. (Ibid:24. El subrayado es mío). De lo anterior se puede deducir que la guerra es violencia estudiada y calculada; no es un acto aislado y no ocurre de repente. La subordinación del criterio político bajo el militar es un absurdo pues la política ha producido la guerra. Ella (la política) es la inteligencia, la guerra sólo su instrumento y no al revés.

El nacimiento de las relaciones de producción capitalista puso las condiciones para que existiera una nueva forma de guerra donde el todo social —no sólo el referente a lo propiamente militar— se involucrara en el destino de la misma y donde la guerra formaba parte indisoluble del actuar de los Estados en el campo internacional, lo que la convirtió en un poderoso instrumento político. A ello obedece la noción de Clausewitz de “guerra total” que integra lo militar en lo político como una totalización más vasta. Clausewitz advertía que se debían desarrollar estrategias de guerra que fueran también componentes de los objetivos más generales de la nación con horizontes temporales que a su vez se extendieran más allá de su propia guerra:

“...la guerra es sólo una parte del intercambio político y, por lo tanto, en ninguna forma constituye una cosa independiente en sí misma. (...) la guerra no es otra cosa que la continuación del intercambio político con una combinación de otros medios. De acuerdo con esto, la guerra nunca puede separarse del intercambio político y si, al considerar el asunto, esto sucede en alguna parte, se romperán en cierto sentido todos los hilos de las diferentes relaciones y tendremos ante nosotros una cosa sin sentido, carente de objetivo”. (Clausewitz, *Op. Cit:565-566*)

En este sentido la aportación de Clausewitz es importante porque reconoce a la guerra como extensión de la política, no como algo extraordinario, como era considerada antes. Ya a principios del siglo XX, Lenin advierte que la unidad de lo político y lo militar ya no es vista desde la perspectiva de la guerra sino como una teoría general del desarrollo capitalista y la revolución proletaria. Así, fusiona la lucha política, económica y cultural con la militar para la toma del poder estatal. Además, agrega algo a la famosa frase de Karl von Clausewitz: la guerra es la prolongación de la política por otros medios (a saber, por *medios violentos*). (Clausewitz, 1969:8).

Ya en tiempos más cercanos, Liddell Hart, estratega estadounidense, afirma en su famoso libro *Strategy* que, “el objetivo de la guerra es obtener una paz mejor... la paz que la nación desea. No hay que concentrarse en la victoria de la guerra, pues esto puede llevar a una mala paz” (1991:326). De ello Paul Kennedy concluye que la palabra *victoria* se ha ensanchado, pues ahora no sólo significa ganar sino que el estado de paz sea mejor después de la guerra que antes; asimismo infiere que el objetivo de la guerra está directamente relacionado con los fines y los medios estatales y que hay que tomar en cuenta otros aspectos para considerarse vencedor de una confrontación: la presión del poder financiero y presión diplomática, comercial y ética, sobre todo.

Las aportaciones más importantes de Hart en cuanto al cambio en la concepción de la guerra, van en muchos sentidos: primero, en ver la guerra como una totalidad (o sea, que toma en cuenta todos los aspectos) y como algo complejo y multilateral; segundo, en distinguir la *Gran Estrategia* de las estrictas estrategias operacionales para ganar una batalla en particular o una campaña, como se venía conceptualizando hasta ahora. Esta definición más amplia de la estrategia comprende mucho más de lo que pasa en el campo de batalla. Toma en cuenta ciertos factores no cubiertos en la historia militar tradicional: la importancia en el manejo de los recursos nacionales en orden de lograr un buen balance entre fines y medios: “en la era de las operaciones de guerra industriales y tecnológicas, el componente económico de la gran estrategia ocupa un lugar no menos crítico” ¹⁶ (Kennedy, 1991:5). También considera el rol vital de la diplomacia para mejorar la posición de un Estado y el asunto de la moral nacional y la cultura política, el cual es de importancia no solamente en el campo de batalla sino también en el estado de ánimo de la población para soportar los propósitos de la guerra o el costo de las fuerzas militares en tiempos de paz. Esta noción de guerra de Lidell Hart resulta de vital importancia puesto que a final de cuentas la confrontación bélica deviene *estado permanente* en tanto mientras no hay confrontación directa hay preparación de guerra.

¹⁶ De esta consideración se desprende la ya famosa tesis de Kennedy expuesta en su libro *The Rise and Fall of the Great Powers*, que afirma que el desarrollo de la tecnología militar de una potencia puede socavar las bases de su seguridad económica. Por ello, la Gran Estrategia no puede dejar de lado el desarrollo del proceso productivo de una Gran potencia.

Si, como se vió, la ausencia de un poder hegemónico desestabiliza las relaciones internacionales y acentúa el carácter anárquico de la sociedad internacional, entonces podemos hablar de que en este contexto de crisis de sucesión hegemónica los conflictos se recrudecen, ya que por un lado se observan los intentos de los retadores hegemónicos por desafiar el poder decadente de los Estados Unidos y por el otro, se pueden ver los esfuerzos de este país por recuperar el territorio perdido. Sin embargo, las guerras que se avecinan parecen tener motivaciones de índole muy elemental: el control y la posesión de los recursos naturales estratégicos elementales para el fortalecimiento del capitalismo y para la supervivencia así como el control de los espacios geoestratégicos. Esto no significa que las guerras de décadas pasadas no hayan tenido esta motivación; lo que se quiere acentuar es que ante la crisis del poder mundial es cada vez más difícil ocultar el objetivo real de las ocupaciones y los enfrentamientos armados que ocurren en el mundo, sobre todo cuando la poderosa retórica de alto contenido moral que se difunde acerca del respeto a los derechos humanos, a la libertad y a la democracia intenta hacer ocultar el fin último de las guerras contemporáneas.

La relación entre los recursos naturales estratégicos y los territorios geoestratégicos, y el poder de una gran potencia no puede ser de ninguna manera mecánica o casuística: es dialéctica y real. Durante muchos años se ha impulsado desde la academia la idea de que el poder de las grandes potencias es una especie de sumatoria de diversos “factores” que intervienen en un “escenario” global. Se dice que el “factor geográfico”, dentro del cual congregan tanto al territorio como a los recursos naturales, ya no es el “factor determinante” en este mundo de alta tecnología y que es el factor comercial y financiero el que “determina” el poder de una gran potencia. Si esto fuera verdad, los Estados Unidos no tendrían que ocupar el Golfo Pérsico, los Europeos no mantendrían el control sobre grandes territorios africanos, los chinos no apostarían sus tropas cerca del Mar del Sur, donde hay depósitos de petróleo y gas y Japón no dirigiría sus ejércitos hacia territorios cercanos ricos en energéticos ni apoyaría a Estados Unidos en sus aventuras bélicas por el Medio Oriente.

Los recursos naturales y los espacios estratégicos no se convierten en elementos de poder por gracia de fuerzas sobrehumanas: han adquirido una enorme importancia en un contexto histórico recesivo para el capitalismo mundial y crítico para la existencia humana en tanto la vida en este planeta está amenazada no sólo por la cantidad de armas capaces de destruir al mundo sino también por la capacidad destructiva de un sistema económico que genera necesidades fútiles y que ha alterado el equilibrio ambiental del planeta. Así, mientras la tecnología de la guerra posee unos niveles de destrucción muy altos y se acentúa una situación de contradicción que no se pueda superar, la solución de los conflictos no puede ser pacífica. A decir de John Saxe-Fernández esta solución “nunca ha sido pacífica y consecuentemente, la guerra sigue siendo el elemento central de organización de la

civilización contemporánea y el eje articulador de lo que llamamos modernidad. Es lo que llamaban destrucción creativa, pues ha sido a través de la destrucción que el capitalismo ha resuelto muchos de sus problemas y ya son cinco siglos de modernidad” (2004:140). En conclusión: mientras exista el capitalismo seguirá habiendo guerras por recursos.

La actual y potenciada competencia intercapitalista que rige las relaciones internacionales ha intensificado la competencia por el acceso a los recursos naturales. Cualquier interrupción en el suministro de recursos tendría graves consecuencias para el capitalismo. De acuerdo con Michael Klare, no se estaría tan errado al momento de hacer análisis de lo internacional si se considera al sistema internacional en términos de depósitos de recursos en disputa (2001:155). Conforme crece la población mundial, el apetito por las materias primas vitales aumentará con mayor rapidez de la que la naturaleza puede satisfacer por lo que a medida que la escasez de materias primas cruciales como el agua y los energéticos aumente en frecuencia e intensidad, será más fuerte la competencia por el acceso a los suministros restantes de esos bienes.

Para los militares de las grandes potencias, la preocupación por controlar los recursos naturales estratégicos posee una particular importancia: mientras los militares pueden hacer poco por promover directamente el comercio o por asegurar la estabilidad financiera —lo cual no significa que no contribuyan a afianzar un orden desestabilizador de las economías internas que por un lado genera la pobreza y por el otro reprime la organización contestataria— ellos sí pueden jugar un papel central en la protección de las fuentes de los recursos. Como estos recursos, a decir de los funcionarios de seguridad de las grandes potencias, pueden estar en riesgo por problemas nacionales, requieren resguardo físico. Así mientras la diplomacia y las sanciones económicas pueden ser afectivas en promover otras metas económicas, sólo el poder militar puede asegurar el continuo flujo de recursos y otros materiales estratégicos en áreas distantes en tiempos de guerras y crisis.

No queda lugar para las dudas: la crisis de sucesión hegemónica y la escasez de recursos naturales estratégicos se intersectan en un punto posible y probable aunque no deseable: la guerra, para la cual los Estados Unidos y sus retadores hegemónicos están preparados, aunque no lo esté ni el planeta ni la gente que lo habita.



La exposición en este trabajo de las principales teorías acerca de la crisis de sucesión hegemónica y de su relación con la guerra que se discuten en el ámbito académico no tienen por fin apoyar una postura o la otra sino observar cómo está siendo explicado el mundo en un momento de crisis múltiple como el actual y cómo dos posturas aparentemente opuestas como las de Wallerstein y Nye terminan pensando en la misma solución: la aparición de un hegemón que controle el mundo y que

dicte las reglas a seguir. Si bien ambas teorías nos sirven para describir la situación de la hegemonía en las relaciones internacionales, también son útiles para evidenciar la forma de concebir al mundo que tiene las grandes potencias y sus teóricos.

Por ello aunque en este trabajo no se esté de acuerdo con las aseveraciones finales de ambas posturas —pues no cree que la forma de vida que llevan la mayor parte de los habitantes de este planeta sea precisamente lo más cercano a la “paz”— sí se considera que se vive un momento especial en las relaciones internacionales, pues el establecimiento de un modelo económico poco justo que anima la distribución desigual de la riqueza y la desesperación de millones de habitantes necesita de la fuerza para sostenerse. La fuerza que dan los medios militares no es desdeñada por ninguna de las grandes potencias ni para acabar con la disidencia ni para delinear en otros territorios las condiciones que les sean más afines para su expansión y fortalecimiento en un contexto de sucesión hegemónica por el deterioro del poder del último hegemón, Estados Unidos, que busca a toda costa el mantenimiento del lugar privilegiado que ha tenido en el mundo hasta ahora.

b) EL DEBATE DE LA HEGEMONÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDO DE LA POSGUERRA FRÍA

Los cambios ocurridos en la esfera internacional —especialmente la desaparición de su “principal” enemigo, la URSS— plantearon un debate en los ámbitos académicos y gubernamentales acerca de la hegemonía norteamericana, pues aparentemente este país había ganado la guerra al “socialismo” a costa de su bienestar interno. La discusión, sin embargo, no era nueva sino más bien una continuación de la polémica de la declinación de su economía en comparación con la de las otras potencias capitalistas, suscitada años atrás y que puso sobre la mesa el problema de que la decadencia interna pronto se traduciría en la pérdida de la hegemonía a nivel mundial.¹⁷

Cuando terminó la euforia del triunfo indudable del capitalismo —que se apoderó de los norteamericanos y que las llevó a creerse cosas tan inverosímiles como “el fin de la historia” por el triunfo de los valores occidentales en todo el mundo¹⁸—, la clase dirigente norteamericana se encontró con una realidad interna poco grata. A pesar de las medidas aplicadas por el gobierno reaganiano que

¹⁷ En este tenor encontramos las tesis contenidas en el libro de Paul Kennedy “The rise and fall of the Great Powers”, donde hacía hincapié en que tarde o temprano, debido a algo que él llamaba *sobredimensionamiento estratégico* de Estados Unidos por la *excesiva extensión imperial* (demasiados compromisos en el exterior hechos en una época de bonanza económica pero que la economía norteamericana no podía ya afrontar) Estados Unidos dejaría de ser el hegemón en el mundo.

¹⁸ El hecho de que el absurdo del Fin de la Historia pueda haber parecido creíble pone de manifiesto la situación de la vida intelectual y política de fin de siglo.

introdujeron el neoliberalismo a los Estados Unidos con el fin de reducir el déficit fiscal, el desequilibrio en la balanza comercial, la inflación y toda una serie de índices macroeconómicos que ponían en desventaja a su país en la competencia intercapitalista, la situación no sólo no mejoró sino que empeoró. Además, la carrera militar emprendida por Reagan cometió el grave error de considerar a la tecnología militar como una variable independiente que contenía en sí misma la clave de su dinámica. Esto llevó al grado de que ningún objetivo político podía corresponder a su potencial destructivo o justificar su utilización en un conflicto armado. Así, el excesivo gasto militar, con todos sus efectos multiplicadores, que era el mecanismo tradicional de estimulación económica, no funcionó.

En la posguerra fría, los Estados Unidos se encontraron con que cerca de la mitad de los instrumentos financieros negociables del Tesoro estaban en manos foráneas y que en momentos de tensión podían ser arrojados por sus tenedores, entre los que destacan Japón y el Reino Unido. Esta vulnerabilidad económica de los Estados Unidos que le planteaban los cambios del capitalismo, se acentuaba con el hecho de que de ser el acreedor más importante del mundo había pasado a ser la nación más deudora del mundo, pues su ya estructural déficit en cuenta corriente le obliga a financiarlo con inversiones extranjeras.¹⁹ Estados Unidos ya no podía seguir viéndose como el hegemon del sistema mundial puesto que depende de las transferencias y los préstamos de sus propios competidores para equilibrar su comercio y cubrir sus déficits presupuestales.

El déficit crónico de la balanza comercial está estrechamente relacionado con la operación en el extranjero de un sin número de compañías cuya aparición, desaparición, expansión, reducción, fusión, separación, redimensión y reestructuración tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, afecta a los empleados norteamericanos que no saben dónde trabajarán al día siguiente. Este traslado de industrias al extranjero ha hecho que desde hace décadas los norteamericanos no gocen de los beneficios de las intermitentes reactivaciones de su economía. Esta exportación del trabajo a regiones de gran represión y bajos salarios ha socavado las oportunidades de trabajo productivo dentro de los propios Estados Unidos.

A diferencia de otros tiempos, el capital industrial ya no es el cimiento de la economía norteamericana pues lo que importa ahora es optimizar los rendimientos a corto plazo deshaciéndose de activos de valor y vendiéndolos para obtener ganancias rápidas. El PIB de Estados Unidos ha sufrido grandes transformaciones: los servicios aumentan su peso relativo en detrimento del sector industrial, lo cual afectó las ventas externas, pues la industria es el área dominante del comercio internacional. El aparato productivo de la Unión Americana ha perdido peso. Según datos extraídos del World Factbook

¹⁹ En el año 2000 el déficit estadounidense de cuenta corriente promedió más de 1000 millones de dólares por día, alcanzando el porcentaje de 4.4% del PIB (Clairmont, 2003:18)

de la CIA, la estructura del PNB de los Estados Unidos en 2004 (año hasta el que se tenían fechas disponibles) era la siguiente: agricultura, 1.4%; industria, 26.1%; servicios, 72.5%. (CIA, 2005) Esta terciarización excesiva explica su pérdida de peso en los intercambios globales; hoy en día, Estados Unidos es más un superpolo financiero que industrial. Cabe aclarar que la afirmación de que las cifras de la economía estadounidense muestran una gran desproporción entre los tres sectores de la economía con ventajas para el tercero, el sector servicios, de ninguna manera significa que la autora de este trabajo esté en consonancia o suscriba las teorías económico-financieras tan en boga en la actualidad, las cuales explican la situación del capitalismo norteamericano en la actualidad partiendo de su inmersión en la lógica de una denominada “Tercera Revolución Industrial” y de la ubicación de este país a la vanguardia de la Nueva Economía, una donde la tecnología aplicada al movimiento financiero, que no al proceso productivo, incrementa considerablemente el capital a pesar de la decadencia de la industria pesada norteamericana.

Esta preocupación sobre la terciarización excesiva de la economía estadounidense parte de la problemática planteada por James Petras en su libro “Imperio o República”, donde el argumento principal parte de la consideración de que ante la competencia intercapitalista y ante la crítica situación de la economía interna, el gobierno norteamericano tomó la decisión de apoyar sólo a las industrias que le generan mayores ganancias, que al mismo tiempo son las que están íntimamente relacionadas con el manejo y administración de recursos naturales estratégicos, como la industria automotriz, la bélica, la aeroespacial, la petrolera y la de biotecnología, entre otras, que son capaces de generar mayores ganancias en poco tiempo. De esta forma, el Estado norteamericano se asegura de controlar el mercado de estas industrias a nivel mundial y por otro lado, se cuida de mantener sanos los activos de estas empresas que producen mercancías con un alto valor agregado. Sin embargo, esto significa que la *otra* industria norteamericana, la que no está en los planes de Seguridad Nacional está emigrando hacia lugares donde la mano de obra es más barata, lo que va en detrimento del empleo en Estados Unidos.

Esta creciente *terciarización* no implica que los sectores primario y secundario no estén generando ganancias ni que estén fuera de las consideraciones estratégicas del gobierno norteamericano. A diferencia de lo exigido por organismos internacionales como el Banco Mundial hacia los países latinoamericanos, el campo estadounidense goza de una salud inmejorable, lo cual no pone en peligro la soberanía alimentaria como en aquéllos. Al contrario, la administración Bush se ha mostrado generosa en los subsidios otorgados a los campesinos y se ha negado sistemáticamente a retirarlos aun cuando esa situación pone en peligro las negociaciones de acuerdos comerciales como el de la OMC. La industria norteamericana tampoco se encuentra propiamente en crisis y menos la

automotriz y la petrolera, que según cifras de Fortune, son las que más facturan en el mundo. En todo caso es la pequeña y la mediana industria la que se encuentra amenazada en los Estados Unidos.

Esa terciarización tampoco quiere decir que su economía esté más allá de las nociones clásicas de la Economía Política y que haya logrado zafarse del proceso de producción-distribución-cambio-consumo de mercancías sin el cual las sociedades no podrían existir. Estados Unidos no está dejando de producir las mercancías necesarias para la subsistencia humana; en todo caso algunas las está produciendo en lugares donde obtiene mayores ventajas de tipo fiscal y ecológico, fuera de las fronteras de la Unión Americana. No está dejando de producir combustibles, ni alimentos, ni textiles, ni aparatos electrónicos ni autos. Además, la terciarización que mencioné no excluye el hecho de que las nuevas tecnologías, las que más capitales reciben en la Bolsa de Valores, hayan dado mayor impulso a las agresiones militares de los Estados Imperiales por medio de la guerra de alta tecnología.

El aumento en el porcentaje del sector servicios en el PIB no significa que este sector sea el más estratégico ni el único y mayor beneficiado de la política económica. Su incremento y porcentaje abrumador evidencian una estrategia norteamericana para nivelar la balanza de pagos, que es altamente deficitaria (-541 millones de millones de dólares hasta el 2004 según datos de la CIA) y que desde hace unas décadas hacia acá se ha convertido en el instrumento preferido de las autoridades económicas de ese país para promover sus exportaciones y ser competitivos en el mercado mundial. Sin embargo, cuando la situación se torna peligrosa, la cuenta de capital, engrosada por el capital de cartera que va directamente al sector servicios, sale al recate de la Balanza de Pagos y logra hacerla menos desequilibrada.

La terciarización habla también de la complicidad entre las corporaciones transnacionales y el gobierno norteamericano. Al propiciar la salida de Estados Unidos de ciertas empresas productoras de mercancías de alto valor agregado permite la descompensación en la balanza de pagos pero posiciona a sus empresas fuera de sus fronteras, con todos las implicaciones geoeconómicas que esto implica. Aparte de eso, estas empresas resultan beneficiadas con el estímulo gubernamental a la inversión en cuenta de capital que permite a las empresas estar sobrevaloradas. Además, las empresas que se dedican a vender servicios gozan de las ventajas que les proporciona una Bolsa de valores que privilegia las ganancias rápidas en detrimento del empleo y de la economía real. Finalmente, la terciarización tampoco implica que los indicadores económicos de la crisis norteamericana sufran cambios significativos: el desempleo de 6% es el más alto de las últimas décadas en la historia de este país; su endeudamiento es el mayor del mundo (está tasado en 1.4 trillones de dólares); y su balanza de pagos es la más deficitaria del mundo en desarrollo. Esta terciarización no es de ninguna manera el

resultado de la ubicación de Estados Unidos más allá de la era industrial. Los estadounidenses, al igual que los demás seres del mundo, ni viven ni comen de servicios.

En conclusión, esta terciarización de la que habla Petras no se inscribe en la lógica de la existencia de una Tercera Revolución Industrial basada en la revolución en las tecnologías de comunicación, la computación y el crecimiento en los sistemas de información, que el propio Petras critica en una reciente publicación donde habla de la revolución informática, la globalización y otras fábulas imperiales. En este sentido Petras afirma que revolución tecnológica no es tal porque no ha transformado al capitalismo en el sentido de que le haya proporcionado un nuevo ímpetu dinámico al desarrollo de las fuerzas productivas, sino que más bien estas nuevas tecnologías se han adaptado a ciertos intereses financieros establecidos así como a otras actividades no productivas para reforzar la tendencia al estancamiento, pues los nuevos sistemas informáticos han tenido un impacto negativo sobre el crecimiento de la productividad en el sentido de que desvían un monto desproporcionado del capital invertido de actividades más productivas hacia otras actividades “de servicios” (como la especulación financiera) reforzándolas y obstaculizando al mismo tiempo el crecimiento de la productividad. (2001b:337)

En la actualidad, al interior de los Estados Unidos se puede observar el declive de los niveles de vida de las capas medias y bajas, fenómeno bautizado por algunos como la *tercermundización* de la economía y la sociedad norteamericana por la creciente concentración del capital, por el ensanchamiento de la brecha rico-pobres y por el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Los indicadores económicos, sociales, culturales, institucionales y otros alertan de la decadencia de este país. El déficit comercial crónico, el endeudamiento público creciente, la expansión de la especulación financiera, el aumento de la masa de pobres, la ruptura de la estructura de ingresos con descensos del salario real y alto nivel real de desocupación son el marco en el cual se desenvuelve la vida de los norteamericanos. La pobreza, pues, ha sido el resultado de los procesos de concentración de ingresos, precarización laboral y deterioro de salarios reales. En 1997, Estados Unidos contaba con 35.5 millones de pobres, el 13.3% de la población. En términos absolutos, la pobreza creció cerca de 43% en veinte años. (Beinstein, 2000:134)

La respuesta del Estado norteamericano a la pobreza ha ido de acuerdo a los preceptos de la sociedad capitalista del orden: el repliegue del estado social, el desmantelamiento de los programas de asistencia y la proliferación de formas represivas. Si bien es cierto que durante las administraciones de William Clinton el desempleo pareció bajar, no es menos verdadero que las estimaciones del nivel de empleo en los Estados Unidos no toman en cuenta las tasas de encarcelación en el país. Muchos analistas ubican mínimamente un millón de personas que están a la espera de un juicio y más de un

millón y medio en la cárcel (la mayoría, jóvenes negros y latinos), gente que estaría buscando trabajo si las políticas penales se parecieran a las de otro país capitalista del primer mundo. Según John Gray, a principios de 1997, alrededor de uno de cada cinco estadounidenses adultos varones estaban tras las rejas y alrededor de 1 de cada 20 estaba bajo libertad vigilada o bajo palabra. Los negros tienen aproximadamente 7 veces más probabilidades de entrar en prisión que los blancos. De estos presos, aproximadamente 400 mil, lo estaban por razones relacionadas con el asunto de las drogas. (Gray, 2000:151) El control de los problemas sociales ha encontrado en la fuerza del Estado la mejor solución para el mantenimiento de un orden injusto.

Las reformas al sistema de seguridad social iniciadas en las administraciones de Reagan y concluidas en la primera presidencia de Clinton, han colocado a los Estados Unidos en estadísticas antes insospechadas. Como carece de un sistema nacional de salud, ese país ocupa el último lugar entre las naciones desarrolladas en mortalidad infantil, esperanza de vida y visitas al médico. En virtud de ello, Oxfam América —famosa organización no gubernamental por su ayuda en los países más pobres— anunció a principio de la década de los noventa, que llevaría a cabo acciones en los propios Estados Unidos. (Rosas, 1993:20). Durante el periodo de Clinton en la presidencia, el número de trabajadores sin seguro médico se incrementó en 5 millones y se recortó a millones de mujeres los pagos básicos de seguridad social. Además, se les obligó a trabajar por el salario mínimo sin servicios médicos ni estancias infantiles. (Petras, 2001a:27)

En cuestiones de educación, las cifras no presentan tampoco un panorama halagador: uno de cada cinco estadounidenses es analfabeto y entre 23 y 84 millones de yanquis son analfabetos funcionales.²⁰ (Cason y Brooks, 1999) Además, la industria del entretenimiento que enriquece a las grandes cadenas de medios de comunicación masiva ha creado una cultura juvenil anti intelectual que privilegia la “diversión” por encima de la reflexión seria. Si en los últimos años el gobierno norteamericano ha hecho caso de estas cifras alarmantes ha sido porque las empresas se quejan de que gastan cada vez más en formación y capacitación para un personal con capacidades mínimas para las matemáticas básicas y la literatura convencional.

A *contrario sensu* de lo que se piensa comúnmente, la clase media norteamericana —de la que se jactaban las élites porque constituía la mayoría de la población y llevaba a su expresión cumbre el anhelo aristoteliano de la obra *La política*— está desapareciendo y sus estándares de vida se parecen más a los de países no desarrollados. Como afirma John Gray,

²⁰ Analfabeto funcional, concepto de la jerga de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas, hace referencia a la persona que puede leer pero que es incapaz de entender lo leído.

“Los Estados Unidos de la actualidad no son el régimen de igualdad democrática descrito y elogiado por De Tocqueville. Tampoco es la sociedad de oportunidades en expansión que encargaba el New Deal de la Posguerra. Es un país dividido por conflictos de clase, movimientos fundamentalistas y guerras raciales de baja intensidad”. (2000:167)

Sin embargo, la población norteamericana es una de las más desinformadas²¹ y no sabe qué sucede y ni siquiera se percata de que no sabe. Es una sociedad despolitizada donde muchas personas aprueban que el poder del Estado actúe con dureza contra aquellos que puedan amenazarles, desde el interior y el exterior, sin pensar en alguna otra alternativa posible. Esta despolitización, hija de la ignorancia, la pobreza, la estulticia, la desesperanza, el autoritarismo de los partidos y la ruptura del pacto social, se ha traducido también en el abstencionismo. Por William Clinton sólo votó el 45% del electorado. De ellos, sólo un 43% votó por él. En la elección presidencial del 2000, una de las más polémicas de la historia, el abstencionismo alcanzó al 46% del padrón²².

Este fenómeno de la pauperización de las capas medias y bajas y el sacrificio de su seguridad económica —resultado del retroceso²³ en los beneficios ya conseguidos que ha dado lugar a evidentes niveles de desigualdad económica— ha correspondido con el proyecto de remodelación de la sociedad para adaptarla a los imperativos de la competencia intercapitalista y ha involucrado el uso del poder corporativo en colusión con el gobierno federal.

El hecho de que Washington estuviera dispuesta a proyectar el poderío militar como primer recurso una vez terminada la guerra fría es indicio más de debilidad que de fuerza, pues cuando un hegemon verdaderamente lo es no necesita recurrir a los medios coercitivos para que los demás realicen su voluntad. Ser un poder hegemónico significa que se tiene la capacidad para definir las reglas del juego geopolítico y que se obtiene lo que se desea gracias únicamente a la presión política (respaldada por una gran capacidad militar, por supuesto). En definitiva, Estados Unidos no es más la potencia hegemónica de antaño aunque su balanza de pagos y los indicadores financieros intenten mostrar lo contrario. Su poder interno debería provenir de los cimientos materiales, la orientación estructural y la composición del capital, no de las finanzas.

Las cifras que evidencian la crítica situación interna de los Estados Unidos contrasta enormemente con las cifras que muestran a ese país como la economía más fuerte del mundo actual, si no se considera en conjunto a la Unión Europea, claro. Esto plantea una problemática para la

²¹ Cosa contradictoria, pues en los Estados Unidos se realiza la mayor cantidad de tirajes de periódicos y revistas.

²² Según el Proyecto de los no Votantes de Harvard University, en un sondeo realizado conjuntamente con el diario *The Washington Post*, 38 por ciento de los no votantes dijo estar disgustado con la política electoral --casi uno de cada cuatro ciudadanos con derecho a voto-- y 44 por ciento dice no estar interesado en la política. (Cason y Brooks, 2000)

²³ En los Estados Unidos se le conoce como *Roll Back* y hace alusión a las contrarreformas internas que desmantelaron el Estado Benefactor.

caracterización de la hegemonía pues como hemos visto hasta ahora ésta se ha abordado desde el punto de vista de la proyección del poder hacia el exterior que daba por hecha la fortaleza interna y no contemplaba que dicha proyección no tuviera fuertes bases al interior. Una vez más la realidad supera las explicaciones que hasta ahora se han dado dentro de la academia para la cuestión de la hegemonía. Esto, pues, lleva a cuestionarse seriamente qué es el poder hegemónico mundial en estos tiempos.

Al igual que Kennedy, aunque en sentido diferente, Immanuel Wallerstein afirma que los Estados Unidos son un poder hegemónico en decadencia. Dentro de los mismos Estados Unidos, la derecha dice que esta afirmación es verdadera sólo en el sentido de que últimamente este país no ha hecho sentir su poder suficientemente. Según él, los Estados Unidos fueron el hegemón entre 1945 y 1970, más o menos y “le tomó 30 años aprender a asumir sus responsabilidades. Desperdió los siguientes 30 años lamentando la pérdida de su gloria y maniobrando en el intento de conservar cuanto poder fuera posible” (Wallerstein, 2001). Sin embargo, la realidad nos hace discrepar en algunos aspectos afirmados por Wallerstein. La historia de las relaciones internacionales nos ha enseñado que en cuestiones de política internacional no hay medias tintas: una nación es o no es la hegemónica a nivel global, por lo que no cabe hablar de *hegemonía en decadencia*. Los Estados Unidos podrán ser una gran potencia militar, política e ideológica, pero ya no el hegemón.

Hasta hace poco tiempo, se sostenía que la hegemonía global era el complemento de la prosperidad nacional, pues el poderío global aseguraba el acceso a bienes, mercados y mano de obra barata pero la realidad norteamericana muestra que cada vez hay más motivos para dudar de los efectos benignos del poderío global en la economía nacional. Al abordar el estudio de la hegemonía en la actualidad ya no se puede ver a los Estados Unidos como una unidad: en su seno se distinguen dos grupos de características contrarias. Por un lado, tenemos a una población empobrecida y por otro a un pequeño grupo de privilegiados a cuyos intereses sienta muy bien la llegada de las políticas neoliberales.

A este respecto, James Petras plantea en *República e Imperio* que ante la erosión y pérdida de la hegemonía norteamericana en el mundo, la búsqueda del predominio mundial por parte de las clases políticas y capitalistas estadounidenses, ya sea en su forma militar o ideológica o con base en un nuevo marco económico mundial, depende cada vez más de la apropiación de los recursos nacionales. De esta forma, dirigen los fondos estatales a promover la expansión en el extranjero en vez de destinarlos a programas sociales y disminuyen los salarios y los niveles de vida nacionales para sostener altas de rentabilidad y de participación en el mercado en el escenario mundial.

El sistema político norteamericano, ligado históricamente a los intereses de la clase empresarial y dominado en la actualidad por una élite que sostiene estructuras orientadas al exterior y que forja las

prioridades de la política nacional, trazó una estructura fiscal regresiva que reconcentra el ingreso²⁴ y terminó por crear una sociedad de dos niveles donde la mayoría está vinculada a instituciones nacionales decadentes mientras que una minoría privilegiada da cauce a la acumulación a través de las redes financieras mundiales, del aprovechamiento de recursos naturales estratégicos y de los avances tecnológicos. A decir de Petras,

“al acercarse el final del siglo XX, ha surgido en Estados Unidos una nueva estructura de clases con dos ejes: uno anclado al sector productivo orientado al mercado internacional; el otro, al sector improductivo de la economía nacional”. (1998:4)

Puesto que los sectores del capitalismo norteamericano son internacionales, las necesidades de este sector han ido forjando al Estado, que se muestra más como un fiel representante de la clase empresarial que como un depositario del poder de unos electores cuyos intereses son bien distintos. Esta fuga de los recursos públicos para sostener la competitividad en el exterior y el crecimiento del poder y la riqueza de los actores volcados al extranjero, hace necesaria la decadencia interna, pues los recursos que se obtienen a partir de la recaudación fiscal no alcanzan para las dos cosas. Así, “a medida que el imperio se expande, la república decae” (*Ibid*:7).

Las cosas, pues, no son tan simples como las presentó Paul Kennedy en su momento. La declinación como potencia de los Estados Unidos no es una decadencia general sino algo muy complejo, pues las experiencias de diferentes sectores de la economía estadounidense varían: algunos se expanden, otros decaen, otros registran pocos cambios. *Quizá la economía de los Estados Unidos se están debilitando pero no sus empresas*. Mientras que la industria estadounidense decae, la participación de las empresas norteamericanas en la producción manufacturera es estable o hasta ha aumentado como resultado de su incorporación al extranjero. Las transacciones financieras se manejan desde el centro, bajo la dirección de una mano muy visible: la del Estado que privilegia a las grandes empresas transnacionales.

Sin embargo, el Estado de la gran potencia norteamericana no apuntala a todas las transnacionales. En la lista de las privilegiadas figuran aquellas ligadas directamente a los sectores estratégicos, a los que van a permitir la consecución de la Gran Estrategia²⁵. Como ya se vio, ante la

²⁴ Hay que recordar que Ronald Reagan reformó el sistema fiscal y el financiero. Redujo los impuestos a la clase empresarial amparado en la necesidad de incrementar la productividad y aumentar los incentivos a la producción y salvó a los bancos de la quiebra inyectándoles dinero público. La política económica de Estados Unidos continuaba siendo lo que hasta entonces: una mezcla de medidas proteccionistas, intervencionistas y de libre mercado dirigidas a satisfacer las necesidades de quienes la instrumentan.

²⁵ Cuando en este trabajo se habla de *estrategia*, se hará alusión al cúmulo de estrategias que elaboran las grandes potencias para promover en el exterior los intereses de los grupos de poder que las gobiernan ya sea que la confrontación sea patente (como en el caso de las guerras) o ya sea que se trate de un conflicto velado (como en el caso de la búsqueda de la supremacía económica). Este conjunto de estrategias planeadas más para la paz que para la guerra, se puede agrupar dentro

creciente competencia intercapitalista, las élites de la Unión Americana han optado por desviar recursos de la economía nacional y así obtener mayores participaciones en el mercado mundial. Las corporaciones transnacionales se convierten así en instrumentos para recuperar el campo perdido.

Un sistema de empresa privada no puede sobrevivir sin una amplia intervención del gobierno, necesaria tanto para regular mercados volátiles como para proteger al capital privado de los efectos destructivos del mercado. Se otorgan así enormes subsidios públicos para los sectores elegidos de la industria. Para nadie es un secreto que los Departamentos de Estado y Defensa norteamericanos están ligados a las corporaciones transnacionales, en particular las mineras, petroleras, ferrocarrileras o contratistas del Departamento de Defensa y otras estratégicas. Las transnacionales dependen entonces de los gobiernos y de los subsidios que reciben de los pueblos de su propios Estado-Nación y la historia de los Estados Unidos lo corrobora. Ahora, ante el derrumbe de su sector secundario, el Estado se está abocando a fortalecer a los sectores que produzcan bienes con mayor valor agregado, como el de la biotecnología, la informática, las telecomunicaciones y la electrónica o a los que le permitan mantener y fortalecer su poder en el mundo, como el del petróleo, la petroquímica la metalurgia y las armas.

Para poner algunos ejemplos, cabe decir que actualmente las empresas líderes en comercialización y refinación de petróleo, con 45% de las ventas mundiales y 50% de las ganancias son estadounidenses. De los 8 productos básicos de la industria química, que tradicionalmente había sido un área de desarrollo de los capitales europeos, Estados Unidos ocupan en dos el primer lugar y en cuatro más, el segundo. DuPont y Monsanto, empresas líderes en biotecnología son proveedores directos del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, al igual que Microsoft e Intel. La compañía Lockheed Martin se salvó de la quiebra gracias a los enormes créditos con garantía del Estado que se le otorgaron. Esta misma compañía y la Boeing-McDonald no podrían sobrevivir sin los subsidios que reciben a través del sistema del Pentágono y otras fuentes. (Fortune, 2003) Queda demostrado que las corporaciones transnacionales no están estancadas ni en declive; al contrario, están en pleno crecimiento y expansión pues invierten dentro de circuitos internacionales.

El apoyo público a las corporaciones transnacionales se ha visto reflejado en los indicadores económicos. Después de los años de recesión, la economía norteamericana se ha reactivado, lo cual le permitió competir en mejores términos con otras grandes potencias aunque esto sea a costa del bienestar interno. Quizá los Estados Unidos no tienen ya el poder hegemónico necesario como para moldear el sistema económico internacional *ad hoc* a sus intereses, pero sí tiene el poder de veto para evitar una reforma de la economía mundial que contravenga los intereses de las élites internas.

de lo que los intelectuales del poder llaman *Gran Estrategia*. Para mayor profundización sobre el tema léase Liddell Hart, *Strategy*, Ed. Meridian, 2ª ed., New York, 1991, 426 pp.

Aún con la pérdida de hegemonía a nivel internacional —es claro que a nivel regional sí es el hegemon— y el reajuste global del capitalismo, los Estados Unidos poseen características que les permiten tener un papel relevante en el mundo. Para empezar, la influencia que poseen en organismos internacionales clave como el FMI, el BM, la ONU y la OMC, les permite dirigir los asuntos que son de su interés por los cauces más adecuados; además, el empuje a los sectores estratégicos²⁶ le permite ser el generador de alta tecnología y *know how* más importante del orbe. En términos militares, sigue manteniendo el presupuesto para la defensa más alto del mundo, es el principal exportador de armas y posee, después de China, el segundo ejército más grande del mundo. (The World Bank, 2004:304). Además tiene el complejo militar e industrial más completo de la Posguerra fría a partir de las fusiones y reconversiones.²⁷ En cuanto a recursos naturales, Europa Occidental y Japón tienen una situación mucho más vulnerable que los Estados Unidos. Estos cuentan con yacimientos propios de una buena parte de los productos básicos, incluidos el petróleo y tiene una industria química de primera línea. Además de ello, su ventaja militar y las amplias redes de producción que han desplegado sus empresas en el mundo le han valido para apropiarse los recursos mundiales mientras conserva sus yacimientos en calidad de reservas.

²⁶ Según Andrés Barreda y Ana Esther Ceceña, los recursos naturales estratégicos para la producción capitalista se ubican en dos rubros centrales: la producción de tecnología de punta y el mantenimiento de la industria actual y la reproducción de la fuerza de trabajo. Así, los recursos naturales utilizados como elementos básicos para la reproducción del aparato productivo son estratégicos porque se utilizan para el desarrollo de la misma industria de bienes de tecnología de punta: son materias primas fundamentales para mantener y revolucionar la estructura tecnológica. Dentro de la producción de la tecnología de punta encontramos a la microelectrónica, que requiere de una serie de metales que para las telecomunicaciones y la industria militar son estratégicos. La microelectrónica permite además la confluencia del Estado y los capitales privados como en las empresas Hughes Aircraft, Boeing, British Aerospace, Thomson, Mitsubishi Heavy Industries, Ford Aerospace, RCA, etc. En esta rama se puede ver de forma muy clara cómo el Estado y ciertas empresas, a partir del reconocimiento de las actividades esenciales para el control global de la economía, comprometen a la sociedad en su conjunto en el desarrollo de la tecnología correspondiente. Sin embargo, el mantenimiento de la supremacía mundial no sólo requiere el desarrollo de actividades de frontera o vanguardia sino que tiene que garantizar la reproducción global de toda la estructura productiva del capitalismo. Esta reproducción material está fundamentada en las materias primas minerales y químicas y en los energéticos. Dentro de los recursos naturales necesarios encontramos a los minerales básicos conforman el *esqueleto metálico* del edificio productivo y son la base de otro tipo de bienes necesarios para la producción. Por eso son estratégicos. Según Ana Esther Ceceña, en primer lugar encontramos al acero; luego el plomo, zinc, aluminio, cobre, estaño, níquel, titanio, molibdeno, magnesio, tungsteno, cromo, manganeso, platino y cobalto. (Ceceña, 1994:137)

De acuerdo a varios especialistas en cuestiones económicas y militares, una de las maneras de medir la solidez del desarrollo industrial de una nación consiste en evaluar la cantidad y calidad de los recursos naturales básicos o energéticos que emplea, siendo, los dos renglones fundamentales los concernientes a los minerales metálicos y los químicos básicos de origen orgánico o inorgánico. Entre los recursos naturales minerales básicos encontramos al acero, que se utiliza en las industrias: militar, aeroespacial, de telecomunicaciones y microelectrónica y a los diez minerales básicos: níquel, bauxita-aluminio, hierro, plomo, zinc, cobre, estaño, molibdeno, magnesio, titanio. (*Ibid.*:139) Dentro de los energéticos que dan vida a la industria del capitalismo encontramos, además del petróleo y el carbón, las fuentes alternativas como el agua y el aire. El petróleo es a la vez energético y materia prima esencial de la química orgánica. De ahí su importancia, pues el estudio de este recurso natural de orden estratégicos resulta central en cualquier intento por explicar la actual etapa histórica.

²⁷ Para hacerlas más competitivas, los empleos de esta industria se redujeron pero en los últimos años sus utilidades se incrementaron.

Los Estados Unidos siguen siendo importantes porque tienen aún mucho poder, porque son el eje del sistema de alianza occidental —frágil, pero existente, que cierra filas cuando es necesario— y el centro financiero de la actual economía. Lo que hagan o dejen de hacer es mucho más importante que lo que decida cualquiera de las otras grandes potencias. Pero para recuperar el poder perdido y para fortalecer su papel en un mundo con condiciones políticas, sociales y económicas muy distintas a las de la Guerra Fría, los gobiernos de los Estados Unidos han tenido que adaptar su política exterior a las necesidades e intereses de una élite cobijada en el Estado que se niega a perder espacios de poder en el mundo.

c) LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE LA CRISIS DEL CAPITALISMO MUNDIAL

La conjuración de la amenaza ‘comunista’ en el mundo obligó al gobierno de los Estados Unidos a replantear sus estrategias de proyección hegemónica a nivel global. Los gobernantes de este país sabían que la desaparición del enemigo común entre las potencias capitalistas abría paso a una confrontación más abierta y descarnada entre ellas, porque después de cuatro décadas, el sistema capitalista había pasado por un reajuste global que las colocaba como directas competidoras con grandes ventajas. En ese tiempo, Europa Occidental transitó hacia la integración y Japón se convirtió en un poderoso inversionista a nivel mundial. La consolidación de Europa como unidad comercial y política ha transformado la relación de poder con los Estados Unidos. Si comparamos los montos del PIB de los Estados Unidos y los de la Unión Europea, ésta sería la primera economía global: mientras el PIB de los Estados Unidos fue en 2004 de 10.99 trillones²⁸ de dólares, el de la Unión Europea en conjunto fue de 11.05 trillones de dólares. (CIA, 2005)

El reajuste global del sistema capitalista se empezó a gestar desde el fin de la paridad oro-dólar que regía el sistema económico internacional y ha tenido consecuencias hasta nuestros días. Entre 1974 y 1982, el capitalismo sufrió una crisis profunda que condujo a la estanflación, (estancamiento con inflación). Debido a este periodo de estancamiento, los países capitalistas disminuyeron costos reduciendo mano de obra y trasladando sus industrias a países de salarios bajos. A su vez, esto tuvo otras consecuencias: la acentuación del desempleo como rasgo estructural del capitalismo y la transnacionalización de la producción incentivada por los adelantos tecnológicos de la tercera

²⁸ Cabe decir que los trillones estadounidenses equivalen a los billones en nuestro país, o sea a millones de millones.

revolución industrial que colocó a la informática, la biotecnología, la tecnología espacial, las nuevas energías y los nuevos materiales como los rubros de mayor potencial en la nueva etapa capitalista.

En este periodo los Estados Unidos sufrieron varios reveses políticos relacionados con la aparición de un Tercer Mundo más combativo. Entre 1973 y 1979 los precios del petróleo, el combustible del capitalismo, se multiplicaron por 10 debido a la determinación de varios proveedores de Medio Oriente molestos por la intervención norteamericana en su región. Esta situación en un lugar ya problemático de por sí, empezó a plantear la vulnerabilidad económica al interior de los Estados Unidos, la necesidad de diversificar las fuentes de extracción de petróleo y la búsqueda de un combustible alternativo a los hidrocarburos. Además, mostró la dependencia de los Estados Unidos hacia los recursos naturales estratégicos de los países del Tercer Mundo.

El aumento en los precios del petróleo y el descontrol de la emisión de dólares generó un excedente de capital que no se invirtió en sectores productivos sino en instrumentos financieros. Ante el estancamiento generalizado, se empezó a invertir en éstos pues se obtenían ganancias mayores y de manera más rápida. Esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad: se dice que en 1971, el 90% de las transacciones financieras internacionales tenía que ver con la economía real y 10% era especulativo; para 1995, el 95% del capital era especulativo, con movimientos diarios que superan la suma de las reservas en divisas de las 7 mayores potencias industriales. (Chomsky, 2000:24). Entre estos instrumentos financieros se encontraban bonos de deuda que permitieron la inyección de grandes cantidades de capital a las economías de los países en desarrollo, pues se prestaban con una tasa de interés mínima pero variable.

Tras el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos a principios de la década de los ochenta, las naciones de la América Latina y del mundo en desarrollo quedaron fuertemente endeudadas, sobre todo con la banca privada de dicho país. Para poder hacer frente a sus acreedores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) otorgaron préstamos de miles de millones de dólares, pero poniendo toda una serie de condicionamientos con el fin de recuperar su dinero en el menor lapso posible y, sobre todo, de institucionalizar un modelo económico altamente funcional para la mayor y más rápida obtención de ganancia del capital.

Amparados en las firmas de las cartas de intención, el FMI, el BM y el Grupo de los 7 países más ricos del orbe (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá) se han convertido en lo que Noam Chomsky denomina “gobierno mundial de facto”, el cual responde a las necesidades de los consorcios transnacionales, los bancos internacionales y otras instancias similares y se ha encargado de institucionalizar en el tercer mundo una serie de políticas económicas que tienden a la privatización de empresas gubernamentales y a la apertura de las fronteras de estos países para los

bienes y servicios que llegan del primer mundo. Además, estas instituciones que no son agentes independientes sino reflejo de la distribución de poder en la sociedad se han encargado de difundir y materializar los valores que corresponden a una sociedad del orden.

La declinación de la tasa global de ganancias y el desplazamiento de la economía mundial de una fase de expansión a una de estancamiento en las décadas de los setenta y ochenta tuvo otra importante secuela: el sacudimiento y erosión de la ideología socialdemócrata que la desaparición del socialismo real enterró. Así, en los Estados Unidos, como en la mayoría de los países capitalistas del Primer Mundo, bajo el manto de la crisis económica, los gobiernos dieron rienda suelta a políticas reaccionarias. De esta forma, la nueva derecha se convirtió en una corriente política e ideológica que avanzaba sin obstáculos contraponiéndose al desarrollo del Estado benefactor en los países capitalistas avanzados y que fue capaz de llevar adelante una verdadera lucha ideológica a nivel mundial encaminada a revalorizar el papel histórico del capital, la iniciativa privada y del mercado y promover la intervención estatal como un obstáculo.

La ideología de la nueva derecha, como cualquier otra, lleva consigo una carga de valores sobre los cuales se debe construir el tejido social. El primero y el más importante es el valor del orden, entendido en términos de la construcción social de Hobbes, donde la mayor amenaza es la inseguridad. El principal objetivo de vivir en sociedad es el orden, no importando que éste se consiga a costa de la fuerza o mediante mecanismos poco democráticos. Por ello, no pone en cuestión la dominación ni la desigual distribución de la riqueza, pues cree en la máxima “a cada cual según su mérito”, lo que origina la división de la sociedad en ganadores y perdedores. Como no pone en cuestión la dominación, considera disruptivo cualquier valor o comportamiento que altere el orden. El valor del orden en la globalización intentará conseguir a través de cualquier medio la minimización del conflicto y la maximización del orden. Cuando se enaltecen los valores del orden, los medios democráticos para decidir sobre la vida social se ven disminuidos en tanto que para minimizar el conflicto no hace falta tomar en cuenta la opinión de los demás.

En el tipo de sociedad que desean los gobiernos conservadores, la libertad negativa predomina. Este tipo de libertad, a diferencia de la positiva,²⁹ apunta al hecho de que cada individuo realice lo que desee sin que el poder del Estado lo reprima ni le impida su libertad de conciencia, de creencia y, sobre todo, de propiedad. Es la libertad de NO hacer algo que no quieras, o en palabras de E. F. Carril, “es el

²⁹ Sería conveniente aclarar la diferencia entre la libertad negativa y la positiva. Según Norberto Bobbio, “por libertad negativa se entiende, en el lenguaje político, la situación en la cual un sujeto tiene la posibilidad de obrar y de no obrar, sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros sujetos. En cambio, por libertad positiva se entiende, la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse determinado por la

poder de hacer lo queelijamos, sin interferencia de la acción de otras personas” (1967:133). Es la libertad privada, que en términos de Milton Friedman se traduciría en la libertad de elegir sin que ningún otro miembro de la comunidad ni el Estado nos indiquen que estamos haciendo algo malo. Este tipo de libertades tiene un límite: la ley. Por ello es tan importante estar en esas posiciones de poder que permitan la presencia a la hora de enunciar las leyes, que como se sabe, son una de las formas más evidentes de transmisión de la ideología de cierta clase social a toda la población. Si alguien se niega a cumplirla, inmediatamente se usa la coerción.

Además del orden y de la libertad negativa, la ideología de la derecha está imbuida por el individualismo entendido como lo contrario del comunitario. Se niega todo valor que implique la cohesión de los individuos dentro de su sociedad y se evita que el individuo reconozca su existencia a partir de su pertenencia a un grupo social. Aquí encuentra cabida el discurso norteamericano que defiende los derechos humanos pues éstos captan sólo la experiencia de las culturas e individuos para quienes el ejercicio de la elección personal es más importante que la cohesión social, el control del riesgo económico y otros bienes colectivos. En este tipo de sociedad, el individuo debe hacerse responsable sólo de sí mismo, pues tiene que abrirse camino en un mundo cada vez más “competitivo” donde no todos pueden estar arriba y ser triunfadores. Si, como afirmamos, no cuestiona la dominación, considera como natural un orden social donde los desfavorecidos son fracasados. No en vano cuando se critica al neoliberalismo, hijo putativo de la nueva derecha, se hace referencia al *darwinismo social*.

En los Estados Unidos la nueva derecha pasó del mero campo ideológico al campo de la práctica del poder cuando el republicano Ronald Reagan empezó a gobernar a principios de la década de los ochenta. De esta forma, el viraje a la derecha tanto en la política interna como en la política exterior fue anterior al fin de la Guerra Fría, lo que permitió perfilar a los gobiernos posteriores, republicanos o no, dentro del cauce conservador. Así, al dar forma a una cultura pública en la que ya no es posible diferenciar los imperativos del libre mercado de los intereses de las corporaciones estadounidenses y de las demandas de libertad individual, Reagan estableció no sólo la agenda exterior del siguiente presidente sino que instauró una nueva forma de guerra e intervencionismo que se ha exacerbado hasta el día de hoy.

Si se hace un seguimiento puntual de la política exterior norteamericana, podemos observar que el substrato de esa política es el *excepcionalismo*. En política internacional, el excepcionalismo se refiere a las suposiciones hechas frecuentemente por diplomáticos, políticos y académicos de que el Estado propio es diferente o inocente en sus acciones en contraste con la conducta interesada de los

voluntad de otros. Esta forma de libertad se llama también autonomía”. Ver Norberto Bobbio, *Igualdad y libertad*, pp 97-100.

otros Estados. (O' Tuathail y Dalby, 1994:8) El excepcionalismo nacional tiene la creencia de que el país propio tiene una misión o destino único en el mundo. Desde su creación como Estado, la política exterior norteamericana se ha inscrito en términos de un excepcionalismo nacional enraizado en el hecho de que la formación histórica de este país realizó en condiciones ideales de seguridad exterior, ventaja que no poseyeron ninguno de los países de la vieja Europa, quienes incluso hasta ahora, han tenido que luchar contra las ambiciones territoriales de sus vecinos.

Este excepcionalismo ha estado basado desde su formación hasta nuestros días, en ciertas consideraciones. La primera, que los Estados Unidos han seguido patrones de desarrollo histórico muy distintos a los de las otras naciones, refiriéndose especialmente a las europeas. Según los personajes que han manejado la política exterior, los Estados Unidos son la tierra de la libertad porque sus primeros pobladores —como si hubiesen llegado a territorios vacíos— fueron personas perseguidas por problemas políticos y religiosos. La segunda, que esa diferencia es perpetua e inmutable. La tercera, la creencia en su superioridad. Los Estados Unidos son el país elegido, una tierra distinta y excepcional; además, esa tierra y quienes viven ahí tiene una misión sagrada y un destino único dentro del mundo. Este excepcionalismo recubre una mitología que los lleva a considerarse como habitantes de una tierra de libertad y un santuario de la misma.

El excepcionalismo norteamericano forma parte de la idiosincrasia del pueblo norteamericano y ha sido vital para la cohesión social interna cuando las élites deciden sacrificarlo para conseguir sus objetivos en el exterior. Basados en su excepcionalidad, los Estados Unidos se han concebido siempre a sí mismos como el líder del 'mundo libre', figura que les da la autoridad moral para promover la remoción de los líderes de otros pueblos aun cuando estos mismos los eligieron. Así, ese excepcionalismo ha sido usado continuamente a lo largo de la historia para justificar numerosas intervenciones norteamericanas en el mundo y también ha servido para esconder la expansión imperial de los Estados Unidos en el continente americano y el crecimiento de su imperio comercial y su hegemonía militar en el siglo XX y en el actual.

El papel que han jugado los Estados Unidos en el concierto internacional ha cambiado con el tiempo y se ha adecuado a las circunstancias históricas anteponiendo siempre el interés de la clase empresarial. Cuando hubo que fortalecer la industria propia, las fronteras se cerraron y la política exterior norteamericana ondeó la bandera del aislacionismo. Cuando su producción necesitó promoverse en el exterior, se abandonó el aislacionismo y se abrazó el internacionalismo —sobre todo después de la II Guerra Mundial y la conformación del bloque “comunista” en Europa del este— mediante el cual los Estados Unidos han querido defender la libertad en todos los confines del globo. El tiempo y la necesidad de expansión del capital han hecho que las élites de este país hayan llegado al

punto de considerar a la seguridad internacional como su seguridad nacional³⁰ y que de ese tiempo para acá hayan venido creando estrategias —o grandes estrategias— para asegurar la privilegiada posición de sus intereses en el mundo, amparados siempre tras la defensa de la libertad y la democracia.

El cambio en las condiciones geopolíticas globales ocurrido años antes y después del fin de la guerra fría, planteó al gobierno norteamericano la necesidad de ajustar su gran estrategia para los años venideros y la oportunidad para corregir los errores del pasado. Los cambios en el capitalismo global y el fin de la confrontación bipolar y la diversidad de conflictos nacionales que le sucedieron develaron el reduccionismo de la guerra fría, tanto en la definición de la seguridad como en la indagación de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales que acontecían en varios lugares del mundo.

Los cambios llevaron a Estados Unidos a replantear su seguridad, pues ya no era capaz de operar aisladamente, al margen de otros países, al menos en las cuestiones económicas y financieras, que eran las más evidentes para revelar la vulnerabilidad norteamericana. Los Estados Unidos seguían teniendo la mayor y mejor equipada infraestructura bélica y amplios espacios de poder en los organismos internacionales pero no tenían ya el suficiente dinero. Además, dentro del replanteamiento de la defensa de la seguridad en el concierto internacional se incluía la búsqueda de un nuevo argumento que justificara la canalización de un alto monto para la manutención del amplio aparato burocrático que maneja la política exterior así como para las acciones intervencionistas en otros países. Cuando acabó la guerra fría, terminó también el papel de la ideología como causa de la guerra. En este tenor, la guerra fría fue muy útil para prestar un buen servicio a los grupos en el poder, pues permitió un eficiente mecanismo de control de la población que justificó acciones criminales en el extranjero con fórmulas sencillas. Así, los problemas que quedaron al descubierto con el fin de la bipolaridad — los de índole local que no eran nuevos, que habían venido ocurriendo en el mundo en desarrollo durante el tiempo que duró la guerra fría— ayudaron a perfilar al Tercer Mundo y sus problemas como los enemigos más probables.

En lo que respecta a la economía, aún con la pérdida de poder de los Estados Unidos en el mercado internacional, para cuando la URSS se desintegraba, el declinismo —la percepción de que el poder y la prosperidad de Estados Unidos se estaban apagando— había quedado eliminado pues la inyección de capital proveniente del mundo en desarrollo —tanto por concepto de servicio de deuda como por las ganancias de las corporaciones transnacionales que se habían apropiado de las empresas

³⁰ La seguridad nacional es una de las consideraciones más importantes al momento en que los grupos en el poder delimitan la política exterior y se refiere, primero que nada, al fortalecimiento del Estado en todos los ámbitos (económico, político, social cultural, militar) para evitar la erosión de su poder y su extinción. Cuando se traslapa al plano internacional, la seguridad está más bien relacionada con la estabilidad y el control del conflicto entre las naciones. Para los Estados Unidos,

públicas más rentables en los diversos procesos de privatización— había reactivado la economía estadounidense. A los ojos del espectador común, el mundo parecía estar convergiendo hacia los valores e instituciones estadounidenses. El libre mercado, el respeto a la propiedad privada y el alcance universal de sus instituciones democráticas se convirtieron pronto en sinónimos en la mente pública de los Estados Unidos.

Pero las cosas no eran tan sencillas y la clase política estadounidense estaba consciente de ello. El fin de la confrontación este-oeste había acabado con el enemigo común: desde ese momento, cada una de las potencias capitalistas tendría que luchar contra las otras, sin contar con el fortalecimiento y acelerado crecimiento de una potencia de economía híbrida: China. Con el regreso a escena de las rivalidades de las grandes potencias, la política internacional “tradicional” se reafirmó. Así, la desintegración de la URSS no inauguró una nueva era de armonía post-histórica, como lo plantearon los intelectuales orgánicos del *establishment* norteamericano.

Si bien lo anterior es cierto, no es menos verdadero que la desintegración de la URSS le dio un gran impulso al poderío de los Estados Unidos porque eliminó el mayor contrapeso a las aspiraciones imperiales estadounidenses. De esta manera, quienes pretendan hacer algo alternativo enfrentan ahora una mayor hostilidad de parte de ese país. La poderosa posición de los Estados Unidos se evidenció en la votación realizada en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU para intervenir por primera vez en Irak, cuando sus condiciones fueron respaldadas por todos, hasta por la URSS, que, ocupada en sus problemas internos, mejor se abstuvo de votar. A partir de estas consideraciones, el gobierno norteamericano, con George Bush padre a la cabeza, decidió tomar parte activa en lo que sería su concepción de Nuevo Orden Mundial.

La prioridad de Bush fue buscar el control hegemónico de nuevo. La guerra del Golfo Pérsico mostró que su idea de definir un nuevo orden mundial se centraba en el poderío militar, en el que los mercados, ingresos y recursos se definían no con base en el poderío del mercado y las finanzas sino del predominio político militar³¹. En un discurso recogido por *Public Papers of the President of the United States* después de la guerra del Golfo, que puede considerarse como una declaración de principios y una guía para la política exterior de la posguerra fría, se pueden leer lo siguiente:

“Recent events have surely proven that there is no substitute for American leadership. In face of tyranny, let no one doubt American credibility and reliability. Let no one doubt our staying power... For America to lead,

la seguridad se verá siempre amenazada por cualquier limitación al control sobre los recursos y los mercados en todo el mundo.

³¹ Según Fortune 25 corporaciones de Estados Unidos ligadas al negocio militar se beneficiaron con el conflicto del Golfo. Entre las más conocidas estaban IBM, General Motors, Ford, Chrysler, General Electric, Raytheon, Intel, Boeing y McDonnell Douglas. (Fortune, *Op. Cit*)

America must remain strong and vital. Our world leadership and domestic strength are mutual and reinforcing, a woven piece, strongly bound as Old Glory. (Bush, 1998:132 y 134)

En este documento se dejaba claro que los pilares del Nuevo Orden mundial serían la democracia, el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, unilateralismo militar. Además, se caracterizaba a los modernos enemigos del orden mundial emergente: el narcotráfico, el terrorismo y el nacionalismo exacerbado. La violencia que provendría de las armas necesitaba una justificación externa.

Aparte de la promoción de los intereses de la industria militar que significó la aventura del Golfo, ésta sirvió para asegurarse una vez más el control del Oriente Medio, zona donde podemos ubicar las principales reservas petroleras del mundo (65%). Si ya de por sí la defensa del petróleo en lugares lejanos de la geografía norteamericana es un asunto de seguridad nacional, en la administración Bush había que esperar un énfasis en tal asunto. Para nadie es un secreto que los intereses directos de la familia Bush y los de sus colaboradores más cercanos están íntimamente ligados a tan disputado energético.³²

La política exterior de George Bush trazó las líneas a seguir en el futuro pensando en términos del destino manifiesto y el excepcionalismo norteamericano. Sin embargo, tal como él lo había mencionado, además de fortalecer las alianzas militares —uno de sus objetivos primordiales era afianzar acuerdos de control de áreas favorables a los Estados Unidos, entre ellos la OTAN— y de consolidar las reformas democráticas en el globo, los Estados Unidos debían crear las condiciones necesarias para sostener su competitividad a nivel internacional apropiándose de recursos nacionales e intensificando la explotación de zonas tradicionales de hegemonía —como América Latina— con acuerdos de libre comercio.

La continuidad característica de la política exterior norteamericana se hizo evidente con la llegada de William Clinton, un demócrata, a la presidencia. Sus objetivos correspondían con los del gobierno anterior. Aunque en su gabinete no figuraban personas tan cercanas a la industria armamentista, Clinton no redujo considerablemente el presupuesto para la defensa, como él mismo había ofrecido en su campaña. Además, siguió adelante con los planes del libre comercio en el hemisferio occidental aun cuando sus electores lo impugnaban. En su segundo periodo presidencial, tomó cuerpo la doctrina de los *Rogue States* que fue delineada por Dick Cheney en 1990, en el documento “Defense Strategy for the 1990’s”, donde afirmaba la existencia de Rogue States (“Estados bribones”) armados con ojivas nucleares: Corea del Norte, Irán, Irak, India y Paquistán. Se consolidaba

³² La empresa Brown&Root Services, subsidiaria de Halliburton de Houston, la compañía de servicios en los campos petroleros más grandes del mundo, obtuvo por concepto de consultorías en asuntos militares y geopolíticos 8.9 millones de dólares, justo cuando el hoy vicepresidente Cheney era Secretario de Defensa. (Hernández, 2001)

así la tesis de que la amenaza a la paz mundial no podía venir de otro lugar que no fuera el Tercer Mundo, donde se puede ubicar la pobreza, la falta de democracia, las migraciones, el narcotráfico, el deterioro ecológico, etc.

Tras una dudosa elección que puso al descubierto un sistema político añejo y tramposo donde no gana el candidato presidencial con mayor número de votos, llegó a la presidencia George Bush hijo, de quien desde el principio de su gestión ha llevado a la política exterior de regreso a un enfoque más tradicional sobre los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. George Bush entró con una agenda muy definida: retomar la construcción de un escudo antimisiles para defender a su país de los ataques de los Estados Bribones; fortalecer la alianza militar con la OTAN; llegar a acuerdos en todos los sentidos con China y la URSS; concluir el plan de libre comercio con todo el hemisferio occidental y, después de la crisis energética de California al principio de su gestión, asegurarse de conformar un bloque energético con sus vecinos del TLCAN para tener fácil acceso a sus recursos en caso de emergencia energética nacional.

El gabinete de Bush hijo —del cual se dice que no eligió él sino su vicepresidente— está conformado por personas que trabajaron con su padre, que se caracterizan por ser de la línea más dura en política exterior y que están fuertemente ligados con intereses militares y petroleros. En primer lugar está Dick Cheney, vicepresidente y hombre de confianza de su padre. Cheney tenía en sus manos asuntos vitales como el replanteamiento de la política exterior y la reforma del sector energético.³³ La Defensa del país con el presupuesto más grande del mundo³⁴ estaba a cargo de Ronald Rumsfeld, quien hace más de 30 años llevó a Cheney al gobierno estadounidense en la administración Nixon. Collin Powell quien era el jefe del Estado Mayor Conjunto en la presidencia de Bush padre, cuando Cheney era Secretario de Defensa, se convirtió en el Secretario del Departamento de Estado Norteamericano. Condolezza Rice³⁵ llegó a ser la Consejera Nacional de Seguridad, y a pocos días de iniciar la gestión republicana, advirtió que la prioridad de los Estados Unidos era crear el ejército del siglo XXI con fuerzas más ligeras y letales, más móviles y ágiles y capaces de disparar con precisión a grandes distancias, pues su país es el único garante de la paz y la estabilidad mundiales. El hombre de Bush en la ONU sería John Dimitri Negroponte, personaje clave de Reagan para combatir los movimientos guerrilleros en Centroamérica.

³³ Cuando Cheney dejó el cargo de Secretario de Defensa con la entrada de Clinton, trabajó como director en jefe de Halliburton, empresa de la cual obtuvo un sueldo cercano a 10 millones de dólares más 40 millones adicionales en acciones. Esta compañía contribuyó con 250 mil dólares a la campaña presidencial de George Bush hijo. Además una de sus subsidiarias, firmó en 1999 un contrato de trabajo con el cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos con un valor de 731 millones de dólares por concepto de consultorías. (Hernández, 2001)

³⁴ Después del ataque terrorista del 11 de septiembre, la administración republicana propuso la asignación de 45 mil 500 millones de dólares para defensa.

Como se puede observar, ha existido continuidad de los planteamientos de política exterior, desde que terminó la guerra fría aunque haya ligeros matices en el discurso. Pero hay un asunto en el que ni republicanos ni demócratas —ambos partidos conformados, a fin de cuentas, por personas que defienden, ya sea en uno u otro lado, los intereses del capital transnacional— han transigido: obtener, a costa de lo que sea, aunque sea el bienestar interno, el control de los recursos naturales más esenciales que cada vez son más escasos.

Los Estados Unidos importan el 60% del total de petróleo que consumen, de ahí que no resulte extraño la importancia dada, en todas las administraciones, al Asia central y a su potencial riqueza petrolera. Algunos autores, como Michael Klare en su libro *Resource Wars: The new landscape of global conflict*, manejan que hubo un cambio en la geografía estratégica de los Estados Unidos hacia el Asia central y que hay ahora un nuevo énfasis en la protección al suministro de recursos vitales, sobre todo el petróleo y el gas natural. Al decir de Klare, cuando la guerra fría termina, los recursos naturales se vuelven vitales. Dice además, que “la competencia económica rige las relaciones internacionales y por lo mismo se ha intensificado la competencia por el acceso a esas vitales riquezas económicas” (Klare, 2001:165). Esta proposición es muy discutible: en primer lugar, porque el hecho de que años pasados no fuera tan evidente la lucha entre los países capitalistas no quiere decir que no hubiera competencia por los recursos naturales. Esta lucha es añeja ya y ni siquiera tiene en el siglo XX su origen. En segundo lugar, los Estados Unidos no enfocaban sus planteamientos estratégicos hacia el Asia central por el hecho de que varios países de esta región se encontraban bajo la influencia del bloque soviético y porque además, se tiene el dato de que en el Medio oriente se encuentran el 65% de las reservas mundiales petroleras.

Sin embargo, Klare tiene razón cuando afirma que cualquier interrupción en el suministro de recursos naturales tendría graves consecuencias económicas y en el consumo global de energía, pues es un hecho que con el paso de los años esos recursos se vuelven más escasos y más codiciados. Aunque a muchos académicos les parezca que los recursos naturales ya no son relevantes porque su valor agregado es nulo, es cierto que los funcionarios encargados de preservar la Seguridad en los Estados Unidos han puesto la vista en la competencia por las materias primas que su aseguramiento y control se han convertido en intereses vitales. Se ha vuelto una necesidad mantener la estabilidad y la seguridad en áreas clave de la producción.

Entre las materias primas más cotizadas e importantes se encuentran, además del petróleo, otros minerales, el agua y las maderas preciosas y no sólo los Estados Unidos están luchando por poseerlos:

³⁵ Rice fue integrante del consejo de directores de Chevron, empresa petrolera.

China, Japón y los países de Europa Occidental también están haciendo de los recursos naturales una prioridad. Así, ante la escasez de los recursos por el aumento demográfico y el criminal deterioro del medio ambiente, se está acentuando en todo el globo la consideración del espacio en términos de depósitos de recursos en disputa. Por ello, concluye Klare

“ A medida que la escasez de materias primas cruciales aumente en frecuencia e intensidad, será más fuerte la competencia por el acceso a los suministros restantes de esos bienes”. (*Ibid*:159)

El colapso de la URSS, la aparente desaceleración económica de Europa, la crisis que no acaba en el sudeste asiático y la rápida recuperación económica de los Estados Unidos lograda a costa del financiamiento público a las corporaciones transnacionales y a las redes financieras de igual carácter, hacen que las élites de este país crean que ha ganado una batalla geoestratégica histórica y siguen pensando en el del excepcionalismo americano para justificar sus acciones. Pero para nadie es un secreto que esta pronta recuperación ha sido a costa de su propia población y que la estructura de poder que afianza los intentos por recuperar la hegemonía de los Estados Unidos está conformada por el ejército y toda la comunidad de inteligencia³⁶. En el actual periodo de multipolaridad económica y de crisis de sucesión hegemónica, los gobiernos de Estados Unidos piensan que sólo se podrán imponer por medio de las armas. Como siempre, los aspectos estratégico-militares subyacen en el desarrollo de las relaciones económicas internacionales.

La llegada de George Bush hijo y la invasión a Irak en el 2003, marcó un regreso de los asuntos militares al primerísimo plano de la política exterior, cosa que no es rara considerando que el gabinete está conformado por los mismos funcionarios de Bush padre. A pocos días de llegar a la Casa Blanca, Bush hijo dijo que las tropas de Estados Unidos no estaban listas para responder a un conflicto mayor. Para resolver esto, propuso aumentar el presupuesto para la defensa y reducir los despliegues militares en el extranjero, particularmente los implicados en operaciones de paz donde no haya petróleo de por medio. Collin Powell, jefe del Departamento de Estado, criticó fuertemente a la administración Clinton por dejar un ejército desmejorado. A su vez, Donald Rumsfeld, jefe del Departamento de Defensa, cuestionó la estrategia de Clinton de preparar a un ejército de 1.4 millones de miembros para afrontar dos guerras a la vez y advirtió al Congreso norteamericano que las fuerzas armadas están subfinanciadas y sobreutilizadas³⁷. Además, junto con el coronel Chuck Carpenter, subdirector de

³⁶ En los Estados Unidos la Comunidad de Inteligencia está conformada por distintos organismos cuyo entramado de intereses muestra, además, que en las decisiones de seguridad nacional no entran solamente los aspectos meramente militares.

³⁷ El presupuesto contemplado para el gasto militar de Estados Unidos en el 2001 ascendía a no menos 375 mil millones de dólares, más lo destinado a este rubro tras los ataques del 11 de septiembre. En 2004, tras la invasión a Irak, el presupuesto ascendió a \$401.7 mil millones de dólares aunque algunas organizaciones sociales norteamericanas afirman que los gastos

Planeación y Programación del Comando Espacial anunciaron sus planes para la construcción a futuro de un escudo antimisiles.

Ahora menos que nunca se puede seguir ocultando que bajo las estrategias para establecer el orden mundial, destruir a los Estados Bribones antes de que ellos los ataquen y salvar al mundo de los narcotraficantes y el terrorismo, subyace la creencia de que los Estados Unidos deben mantener lo que es en esencia un protectorado militar en regiones económicamente importantes, para asegurar que el comercio vital y las relaciones financieras estadounidenses no vayan al traste a causa de trastornos políticos. Bajo la persistente idea del excepcionalismo norteamericano que debe encabezar la cruzada mundial por la democracia y la libertad, subsiste una doble moral, pues los líderes de los Estados Unidos condenan a otros pero recurren a acciones encubiertas, sabotaje y amenazas sin antes escucharlos, promoviendo más bien el “haz como lo digo, no como lo hago”. Ellos no son democráticos en su política exterior: ni siquiera al interior de su propio país se discuten de manera abierta los asuntos de seguridad nacional.

El endurecimiento actual de las políticas norteamericanas hacia el combate de los enemigos que vienen del Tercer Mundo, como el narcotráfico, la migración y el terrorismo, no hacen más que reflejar la vocación belicista de los grupos en el poder, ligados estrechamente al negocio de las armas, del petróleo, del capital especulativo y del capital de las corporaciones transnacionales. Este orden internacional que propician los Estados Unidos, a decir de Marcos Roitman, “genera una violencia extrema incontrolable y sin intenciones por parte de las élites de ser encauzada hacia soluciones pacíficas o negociadas, pues provocar una guerra puede servir de excusa para imponer con más fuerza la ideología del capitalismo mundial.” (Roitman, 2001) A este recrudecimiento de las acciones de tipo bélico —ya sean directas o indirectas— de la política exterior norteamericana tras el fin de la guerra fría, debido a la modificación de la posición relativa de su poder en el mundo y a sus efectos, no escapó América Latina.

B. LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA

Si bien es cierto que en la creación y organización de la política exterior de las grandes potencias en general y la de los Estados Unidos en particular imperan lineamientos que le dan cierto

totales de los fondos federales destinados a cuestiones militares y de defensa alcanzan 1 millón 926 mil millones de dólares. (War Resisters League, 2005) Mientras tanto, el Departamento de Educación recibirá sólo 57.3 mil millones de dólares en el 2005. (Department of Education, 2005)

cariz de *continuidad*, cualidad que muestra la capacidad de proyección de poder y posicionamiento internacional a futuro de su clase política, no lo es menos que la política exterior se configura y ejecuta atendiendo a los requerimientos inmediatos de la propia política interna. Así, ya sea como herramienta para desviar la atención de los ciudadanos sobre problemas económicos o políticos del país o ya sea como instrumento para paliar dificultades económicas circunstanciales, la política exterior estadounidense se ha caracterizado por su capacidad para adaptarse y conformarse según las exigencias coyunturales aunque, dicho sea de paso, sin abandonar ciertas líneas generales que trascienden la temporalidad y la orientación partidaria, que no política, del gobierno en turno.

El cambio estratégico global que devino crisis de sucesión hegemónica ha urgido a los gobiernos estadounidenses de las tres últimas décadas a tomar decisiones sobre los ajustes necesarios en su política exterior hacia América Latina a fin de mantener su hegemonía regional y proyectar su poder hacia el mundo. Uno de los cambios más importantes es el relacionado con la conformación y ejecución de una nueva política comercial externa que al mismo tiempo que resuelva las contradicciones al interior de la propia economía, sirva para satisfacer los intereses geopolíticos y geoeconómicos que le permitan posicionarse mejor en el concierto internacional.

Para mejor entender las razones por las que la política exterior norteamericana de los últimos años ha privilegiado el tema del comercio en sus relaciones con América Latina y cómo éste se inscribe no tanto en el campo del mero intercambio de bienes y servicios como en las esferas de la geopolítica y la geoeconomía, así como para aclarar la forma en que la construcción de un sistema infraestructural en Sudamérica se inscribe en el proyecto geoestratégico norteamericano, es necesario exponer primero, la situación de vulnerabilidad estratégica que atraviesa la Unión Americana; después, la forma en que el libre comercio contribuye a reducir esta vulnerabilidad; finalmente, el papel de las corporaciones transnacionales como los principales agentes del libre comercio en América Latina.

a) LOS AJUSTES DE LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA FRENTE A LA VULNERABILIDAD ESTRATÉGICA

El cambio estratégico global que siguió al fin de la guerra fría afectó la situación regional en varios sentidos. La intensificación de la competencia económica-financiera entre los principales polos de poder y la desaparición del bloque soviético y del “socialismo” como una alternativa al capitalismo, por un lado y una situación económica y política latinoamericana mucho más compleja que en tiempos de la Guerra Fría, por otro, ubican a la región en una circunstancia distinta a los ojos de los Estados

Unidos y permiten que las presiones hegemónicas de ese país se exacerbén. La posguerra fría desató fuerzas y condiciones geoestratégicas que redefinen el trato de esa gran potencia hacia América Latina.

Sin lugar a dudas, los ajustes en el capitalismo global ocurridos desde principios de la década de los setenta fueron más severos para los países con economías más débiles. Los gobiernos de los países latinoamericanos de manera muy irresponsable contrataron enormes créditos durante los últimos años de la década citada dada la abundancia de capitales en el circuito internacional y lo barato que resultaba contraerlos. Sin embargo, aunque las tasas de interés con las que se contrató ese dinero eran relativamente bajas, también eran variables. Así, cuando en 1981 la administración de Ronald Reagan aumentó el gasto público financiándolo a través de préstamos del mercado de dinero y no con un aumento de impuestos o creación monetaria porque se dispararía la inflación norteamericana, las tasas de interés aumentaron y el dólar se sobrevaluó. Esto provocó el aumento de las tasas de interés a nivel mundial y esto a su vez repercutió en el monto del servicio de deuda de los países de América Latina. En 1982, América Latina debía a la banca privada internacional más de 300 mil millones de dólares. (Schatan, 1998:22)

Debido al enorme monto de la deuda, el sistema financiero internacional —manejado por la banca privada de un puñado de países— estaba en peligro de colapsarse. Esto fue impedido por los gobiernos de las grandes potencias a partir del establecimiento de *programas de ajuste estructural*³⁸(PAE), monitoreados directamente en los países latinoamericanos por miembros del FMI. Los PAE fueron el vehículo ideal mediante el cual los Estados Unidos pudieron establecer en América Latina una especie de gobiernos paralelos que no rinden cuentas a nadie en el ámbito nacional y que pasan desapercibidos a los ciudadanos. La administración pública de los países latinoamericanos pasó así directamente a funcionarios extranjeros que operan de acuerdo a los intereses del capital transnacional norteamericano.

A través de los PAE, los Estados Unidos siguen ejerciendo el dominio en los intercambios económicos y políticos. Este poder se ejerce en términos militares, financieros, tecnológicos y culturales que se materializan en la desnacionalización, desregulación y la privatización. Entre las medidas del ajuste estructural más nocivas para las naciones latinoamericanas sobresale la privatización de las empresas que eran manejadas por el Estado, entre las que sobresalían las que explotaban los

³⁸ El ajuste estructural en América Latina fue el conjunto de medidas económicas mediante las que la banca privada mayoritariamente norteamericana aseguraba el crecimiento económico de los países deudores para que las deudas pudieran ser pagadas con mayor rapidez al mismo tiempo que las corporaciones transnacionales aseguraban la venta de sus exportaciones en los mercados latinoamericanos. Según Miguel García Reyes y Mercedes Agudelo, un Programa de Ajuste Estructural incluye las siguientes medidas: devaluación de la moneda, liberalización del mercado de cambios, promoción de las exportaciones, reducción de la demanda interna para liberar recursos para la exportación, reducción general de créditos,

recursos naturales en general y los recursos naturales estratégicos en particular. Aunque la justificación del FMI —representante de los intereses económicos norteamericanos y organismo que recibe la mayor parte de su presupuesto de los Estados Unidos, donde además tiene su sede— para privatizar las empresas se basaba en la consideración de que el Estado se debe retirar de la actividad económica³⁹, lo cierto es que fue la medida esperada durante largos años por el gobierno norteamericano para ‘recuperar’ con legalidad lo que los gobiernos populistas nacionalizaron en décadas pasadas.⁴⁰

Las corporaciones transnacionales se convirtieron de esta forma en uno de los vehículos centrales para continuar el expansionismo norteamericano en la región. La historia de las nacionalizaciones de los años treinta y cuarenta le había mostrado a los artífices de la política exterior norteamericana el obstáculo en el que se puede convertir un Estado fuerte⁴¹. Por eso era importante dejar fuera de la administración pública las empresas de los rubros que más le interesaban. De esta forma, con la privatización de las empresas estatales, las decisiones económicas de carácter estratégico quedaban fuera del alcance de los gobiernos latinoamericanos, pues se privatizaron los sectores más dinámicos y estratégicos de las economías de América Latina: el del petróleo, el minero, el de la petroquímica, el de las telecomunicaciones, los ferrocarriles, la electricidad, los puertos, etc., que pasaron directamente a manos de corporaciones transnacionales. Así fue como se privatizó la minera más grande del mundo, Vale Do Rio Doce (VDRD) de Brasil, la petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvs) ⁴², Telmex, Sicartsa y Ferronales en México, parte de Ecopetrol en Colombia, etc.

Las razones por las cuales los Estados Unidos están acaparando los sectores geoestratégicos de los países latinoamericanos se encuentran en el hecho cada vez más evidente de que la economía norteamericana enfrenta un serio problema de abastecimiento de recursos naturales. Esta situación de *vulnerabilidad estratégica* se traduce en la dependencia norteamericana de materias primas esenciales

recortes en los subsidios, reducción de los servicios sociales, **desmantelamiento de las empresas paraestatales**, reducciones en el personal del sector público y la reforma fiscal. (1997:53)

³⁹ Hecho que como vimos no sucede en el caso estadounidense, donde el Estado interviene de forma permanente para promover a las corporaciones transnacionales en el exterior utilizando recursos públicos.

⁴⁰ Para conocer más de acerca de las nacionalizaciones en las épocas de oro del populismo latinoamericano revisar, entre otros, Carlos M. Vilas, *El populismo latinoamericano: un enfoque estructural*; Thomas Skidmore, *Las dimensiones económicas del populismo en argentina y Brasil*, y Víctor E. Bravo et al. *Alianza de clases y dominación: México, 1930-1946* en, Carlos, Vilas comp., *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, Ed. CONACULTA, Col. Claves de América Latina, México, 1995, pp. 119-149; 219-261 y 309-339. Véase también Francisco Entrena Durán, *México: del caudillismo al populismo estructural*, Ed. EEHA, Sevilla, 1995, 230 pp.; Octavio Ianni, *La formación del Estado populista en América Latina*, Ed. ERA, México, 1975, 177 pp. y Héglio Tindrade, *Una perspectiva del populismo en Brasil* en Guy Hermet et al., *Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos*, Ed. COLMEX, México, 2001, 275-300 pp.

⁴¹ Entendiendo al Estado como gobierno, no como una relación social.

⁴² Si bien esta compañía no se vendió completamente, si permite la inversión extranjera en ciertos niveles de producción. En 1997 tuvo ventas por 22 mil 120 millones de dólares, lo que la coloca en el primer lugar de las 200 grandes empresas

para el funcionamiento del capitalismo global: petróleo, gas, sustancias petroquímicas, acero, manganeso, níquel, platino, estaño, zinc, bauxita, berilio, cromo, cobalto, mercurio, titanio, cobre, etc. Esta incertidumbre en la disponibilidad de materias primas hace más difícil las relaciones entre los países latinoamericanos y su vecino del norte, pues la situación lo hace propenso a controlar y apropiarse las secciones geoestratégicas más importantes, como los yacimientos de gas y los petroleros, la cuenca amazónica, el Caribe, etc. y si bien es cierto que ni la preocupación por hacerse de estas zonas ni las intenciones de apropiárselas son nuevas, no es menos verdadero que el actual contexto de crisis de sucesión hegemónica hace que los Estados Unidos estén más interesados en controlar los puntos más importantes del hemisferio si pretende seguir siendo hegemón en la región y si quiere proyectar su hegemonía hacia el mundo entero.

Hace ya mucho años, a mediados de la década de los setenta en plena crisis de los energéticos, los laboratorios Battelle-Columbus desarrollaron algo que denominaron *Índice de Vulnerabilidad* en ciertos recursos estratégicos. Este indicador nos puede dar una idea de la importancia que tiene en la política exterior norteamericana el estudio a fondo de las condiciones de los recursos naturales estratégicos más importantes para su supervivencia como gran potencia, ubicados en América Latina. Además nos prueban cómo una corporación —aunque se vista de organización sin ánimo de lucro⁴³— realiza sus actividades apoyada por el subsidio gubernamental. Este índice incluía varios aspectos a tomar en cuenta para la elaboración de las estrategias de la política exterior: disponibilidad de reservas domésticas; disponibilidad de sustitutos; número y localización de fuentes externas; ideología de suministradores externos; número de productores; capacidad de producción actual y futura; restricciones formales; consumo de energía; tiempo requerido para la producción; usos del Departamento de Defensa estadounidense como porcentaje total para los Estados Unidos (Saxe, s.f.:23)

William Perry, ministro de Defensa entre 1994 y 1997, aceptaba que la relevancia de América Latina cubre un aspecto muy importante en las consideraciones económicas, políticas y militares para la elaboración de la política exterior norteamericana, pues “nuestra dependencia del área para materias

exportadoras en América Latina. VDRD de Brasil se ubica en el lugar 10 de esta lista. La lista completa de las empresas se puede encontrar en Cristina Rosas, *La economía internacional en el siglo XXI*, Ed. FCPyS, México, 2001, p. 215.

⁴³ Los laboratorios Battelle se autodefinen como una corporación sin fines de lucro (nonprofit [non-stock] corporation). Fue creada por Gordon Battelle, un importante empresario de la industria del acero, en 1925 en Ohio bajo el capítulo 1719 de las leyes de ese estado, las cuales permiten la organización con fines caritativos. Según Battelle, su status de corporación sin fines de lucro no la exenta de pagar impuestos locales, estatales y federales. Los laboratorios Battelle tienen un personal que consta de 7,500 científicos, ingenieros y otros especialistas. Cada año, miles de proyectos sobre tecnología están en progreso en varias operaciones comerciales. Estos proyectos son financiados por cerca de 2,000 compañías y las agencias gubernamentales norteamericanas, especialmente el Departamento de Defensa y la NASA. El volumen de las ventas de Battelle se acerca a 1 billón de dólares cada año. Los rubros de la industria dentro de los cuales trabaja son el farmacéutico, el agroquímico, el de la energía, el medio ambiente, los transportes y la salud. Además, trabaja de forma cercana con los

primas cruciales como petróleo, hierro, bauxita y manganeso es un hecho obvio de la vida internacional”. (1985:187). Por eso, sigue Perry, la capacidad para proporcionar un nivel adecuado de control y vigilancia en el Mar Caribe, los accesos al Canal de Panamá y las aguas adyacentes del Atlántico y el Pacífico, “es básica para la defensa nacional de Estados Unidos”. (*Ibid*:189)

Ante esta situación de *vulnerabilidad estratégica*, los Estados Unidos han encontrado algunas alternativas. En primer lugar, intensificar el uso de los recursos domésticos internos, si es que los poseen; en segundo lugar, aumentar el intercambio comercial, con la implícita desigualdad entre las partes que comercian; en tercer lugar, ocupar materialmente los lugares fuera de sus fronteras donde se encuentran los recursos, ya sea por medios no militares como la privatización y militares, ya sea que estos medios militares sean directos (ocupación del ejército norteamericano) o indirectos (apoyo militar con entrenamiento, armas y asesorías a los gobiernos extranjeros). Como las necesidades de recursos de los Estados Unidos sólo pueden satisfacerse con depósitos localizados fuera de sus fronteras nacionales, la segunda y la tercera alternativas han guiado hasta ahora la política exterior norteamericana hacia América Latina de los últimos años.

b) EL LIBRE COMERCIO EN LAS AMÉRICAS

Los cambios en el capitalismo global y la conformación de un nuevo orden mundial estuvieron permeados por un fenómeno económico que alentaba el libre comercio, pero que a diferencia de otros tiempos, cuando se proponía un libre intercambio de bienes y servicios entre distintas naciones de todas partes del mundo, éste se circunscribía al área geográfica más cercana. Esta idea de libre comercio, *ad hoc* a la ideología de la nueva derecha que gobernaba en la mayoría de los países capitalistas, fue retomada por el gobierno norteamericano pero en otro sentido: controlar el comercio del continente americano como una extensión más de su hegemonía en la región.

Según las teorías clásicas liberal del comercio exterior, al conjunto de estrategias y acciones que el Estado elabora para orientar al comercio con otras naciones a fin de conseguir la satisfacción del “interés nacional”⁴⁴, que implica la subsistencia del Estado, el bienestar de la población y la

sistemas de defensa, la fuerza aérea y la naval. Para mayor información del trabajo de estos laboratorios, consultar la página de Internet <http://www.battelle.org>.

⁴⁴ El debate entre la naturaleza particular y nacional del denominado “interés nacional” en los estudios sobre Política Exterior ha sido uno de los más intensos a lo largo del tiempo. Por un lado, están los teóricos tradicionales que argumentan que el interés nacional es formulado desde el gobierno, ya sea por el poder ejecutivo y/o legislativo, atendiendo a las necesidades de la nación para proporcionarle a la población comprendida dentro del territorio estatal, los requerimientos sociales, económicos y políticos que vayan encaminados a preservar, primero la existencia y después la fortaleza del Estado.

consecución de la seguridad nacional, se denomina *política comercial externa*. Según estas mismas consideraciones, cada Estado decide, en pleno ejercicio de su soberanía, los bienes y servicios que intercambiará, además de determinar la cantidad y la clase de mercancías y servicios que pueden entrar y salir del país; todo ello de acuerdo a sus intereses nacionales. Se afirma, además, que cada vez más la seguridad económica de los gobiernos nacionales se asienta en la política comercial externa, que es la que le permite a una nación “bajo condiciones de libre mercado producir e intercambiar bienes y servicios para aumentar la renta de los ciudadanos”(Mandel, 1994:37), en tanto que, en teoría, a mayor comercio, corresponde mayor empleo y mayor bienestar.

Para formular estas estrategias, el Estado debe tomar en cuenta tres aspectos: el destino de las ganancias del comercio, la estructura en la que se va a basar ese comercio y los términos de intercambio.(Krugman, 1990:25) El destino de las ganancias del comercio exterior es normalmente la prioridad al planear la política comercial externa. Las divisas obtenidas del intercambio comercial se destinan, en teoría, a aumentar la producción o comprar mayores insumos para seguir produciendo mercancías cuyo destino es la exportación. La estructura en la que se va basar el comercio exterior es también vital, porque con base en ella, el Estado se da cuenta de sus posibilidades de comerciar, ya que aquella le va a permitir una menor o mayor producción de bienes y un menor o mayor intercambio de los mismos, lo que finalmente se relaciona con el número de empleos creados para satisfacer las necesidades de una sociedad. Finalmente, los términos del intercambio comercial deben quedar muy claros. El Estado impone o no aranceles, cuotas, reglas técnicas o administrativas y control de cambios a fin de detener o agilizar el comercio internacional según su conveniencia.

De acuerdo a los teóricos contemporáneos del comercio exterior, la política comercial externa de la actualidad tiene fines más complejos que los que le asignaba la teoría clásica. Para empezar, se ha convertido en un importante instrumento de la política fiscal: si se desea que los ingresos del gobierno se incrementen, se reducen las importaciones; a su vez, si se desea que los ingresos salgan a fin de evitar sobrevaluaciones de la moneda o altos niveles de inflación, se aumentan las importaciones. En segundo lugar, se conserva su papel de herramienta para equilibrar la balanza de pagos pero se coordina el derrame de divisas con la política monetaria. Y, si bien no toma en cuenta ni el tipo de empleos que genera ni el monto de las remuneraciones, se considera también a la política comercial

Dado que el interés nacional, fundamento de la política exterior, es planteado desde instancias donde despachan políticos que fueron elegidas por medios democráticos (elección popular), se puede decir que aquél es legal y legítimo. Sin embargo, otros estudiosos del fenómeno opinan que el interés nacional tiene un carácter marcadamente subjetivo, pues está determinado por un momento histórico favorable o desfavorable al grupo en el poder, quien es finalmente quien delinea la política exterior atendiendo a sus propios intereses. Para mayor profundización del tema consultar Ricardo Valero, “La política exterior de México: contexto y realidades” y Blanca Heredia “La relación entre política interna y política exterior:

externa como un instrumento para crear fuentes de empleo, ya sea en el país que organiza dicha política o en otro donde las condiciones del empleo sean más convenientes para el capital. Finalmente, se le reconoce como una variable a manejar por cuestiones *estratégicas*. La imposición de aranceles a ciertos países y la negación a aceptar ciertas mercancías en el mercado porque dañan la industria local son algunas de las maniobras que se pueden realizar para no perder márgenes de maniobra dentro del Estado y fuera de él.

Estos enunciados que han servido para formar teóricamente a las generaciones de estudiosos del comercio y para ‘estudiar’ el comportamiento del comercio a lo largo del tiempo, como si las condiciones del comercio internacional fueran siempre las mismas, dejan a un lado consideraciones fundamentales relacionadas con el ejercicio del poder de las personas que gobiernan. Si bien es cierto que la política comercial externa representa para las grandes potencias una posibilidad para hacerse de ganancias en el intercambio comercial y contribuye a la estabilidad monetaria, no lo es menos que no deja de ser parte de la política exterior, a la que se subordina. Así, si ésta apunta a satisfacer la necesidad interna de las élites político-empresariales de la Unión Americana de mantener su hegemonía en la región y la necesidad del capitalismo norteamericano de hacer frente a una situación de vulnerabilidad estratégica que lo deja en desventaja en la crisis de sucesión hegemónica actual y que sólo mejoraría satisfaciendo sus intereses geopolíticos y geoeconómicos, no será única y principalmente la corrección en la balanza comercial deficitaria estadounidense el principal objetivo que oriente su actuar comercial hacia el exterior.⁴⁵

Dadas las evidentes debilidades en el plano estratégico, la política comercial externa de los Estados Unidos ha venido sufriendo importantes transformaciones desde la crítica década de los setenta. A decir de los estudiosos del tema⁴⁶, este país ha pasado del multilateralismo clásico al bilateralismo propio de épocas de exacerbación de la competencia intercapitalista, cuando resulta más conveniente el intercambio comercial con los países más cercanos geográficamente o con las naciones

una definición conceptual” en Humberto Garza Elizondo *Fundamentos y Prioridades de la Política*, Ed. COLMEX, México, 1986, pp. 21-38 y 115-133.

⁴⁵ Para tener una idea de la maraña de intereses que intervienen en la elaboración de la política comercial externa estadounidense, hay que echar un vistazo a las instituciones que la configuran: a) La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos; b) el Departamento de Agricultura; c) el Departamento de Comercio, del cual dependen la Administración de Comercio Internacional, los Servicios Comerciales Externos, la Unidad de Política Internacional, la Unidad de Desarrollo del Comercio, la Administración de las Importaciones y el Buró de la Administración de las exportaciones; d) el **Departamento de Defensa**; e) el Departamento del Trabajo; f) el **Departamento de Estado**; g) la Comisión Legislativa de Comercio Internacional; h) el Banco de Importaciones y Exportaciones; i) la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Para mayores referencias ver www.whitehouse.gov.

⁴⁶ La principal de ellos y cuyo trabajo se toma como base para esta afirmación es María Cristina Rosas, estudiosa de la política comercial externa estadounidense dos veces galardonada con el Premio “Jesús Silva Herzog”, del IIE. Sobre el tema léase María Cristina Rosas, *Crisis del multilateralismo clásico; política comercial externa estadounidense y zonas de libre comercio*, Ed. IIE/FCPyS/UNAM, México, 1995, 287 pp.

cuyos productos sean más estratégicos o cuyo mercado sea más amplio. No resultó fortuito que las rondas del GATT comenzaran a estancarse justo cuando su principal patrocinador empezaba a perder hegemonía en la economía internacional ni que ante el resurgimiento económico europeo y asiático empezaran a fortalecerse las regiones y las zonas de libre comercio que empezaban a conformar. La política comercial externa de los Estados necesitaba ajustes para reorientar su lugar de potencia hegemónica en el mundo en general y en el hemisferio occidental en particular, pues es justo este territorio el área natural de influencia a decir de los planteamientos geopolíticos del gobierno norteamericano.

Así, aunque en la actualidad el discurso gubernamental tanto de los países latinoamericanos como de los Estados Unidos hable de los acuerdos de libre comercio como convenios en materia puramente comercial y/o económica, lo cierto es que el comercio entre los países es un instrumento político básico para la proyección de los intereses nacionales en el exterior, que las negociaciones comerciales entre dos o más países se resuelven de acuerdo a los intereses del grupo que este momento detenta el poder en el país más fuerte —Estados Unidos, en este caso— y que los más recientes acuerdos de libre comercio van más allá de meros convenios de intercambio de bienes y servicios y se convierten en estrategias claramente dirigidas a recuperar y fortalecer la hegemonía estadounidense en la región, la cual pasa obligatoriamente por el control de territorios y de recursos naturales estratégicos. Robert Zoellic, representante comercial de los Estados Unidos en el exterior lo expresó bien: “los países que buscan acuerdos de libre comercio con Estados Unidos deben pasar una inspección en más que criterios de economía y comercio para ser elegibles. Como mínimo, dichos países deben cooperar con los Estados Unidos en sus objetivos de política exterior y seguridad nacional, como parte de los criterios con los que se guiarán para seleccionar a los potenciales socios de tratados de libre comercio”. (Visca, 2004)

La política comercial externa de los Estados Unidos de las dos últimas décadas, herramienta básica de su política exterior, no se circunscribe al ámbito de lo comercial y mucho menos ha sido planteada y ejecutada para satisfacer necesidades internas de la población de la propia Unión Americana como la creación de empleos y la reducción del enorme déficit presupuestal que hasta ahora sólo se ha compensado con los flujos de capital financiero, pues después de quince años de acuerdos comerciales bilaterales ni la balanza comercial ha llegado a ser positiva ni se han creado mejores empleos para los norteamericanos. La política comercial ha sido pensada en los términos de los grupos gobernantes y de los intereses económicos que representan, por lo que la promoción del libre comercio fuera de sus fronteras está directamente relacionada con su pérdida de poder mundial y con la necesidad de reposicionarse en el esquema capitalista global, empezando por redefinir las relaciones

políticas con América Latina, el área natural de influencia de la política exterior estadounidense desde la evocación de la célebre Doctrina Monroe en los primeros años del siglo XIX.

Tras la implantación de los PAE en América Latina, esta región se convirtió en una importante exportadora de capitales⁴⁷ y los Estados Unidos, a su vez, se convirtieron en el mayor inversionista en nuestros países. Esta situación, en el contexto de la competencia intercapitalista y del reconocimiento de la deplorable economía norteamericana en relación con otras economías, hizo que este país revalorara su política de seguridad y que colocara a América Latina no sólo como abastecedora segura y barata de recursos naturales —que era el papel que había venido jugando hasta ahora— sino como una porción geográfica segura ante la exigencia de mercados más amplios para su producción, de reservas tributarias seguras y de fuerza de trabajo barata. América Latina se convertía así en una región económicamente importante como mercado para inversiones y exportaciones de los Estados Unidos, como suministrador de materias primas y como socio industrial y hasta financiero.

Dado lo conveniente y favorable que resultaba una América Latina endeudada y gobernada por personas afines a la ideología neoliberal, el gobierno de los Estados Unidos empezó a articular un esquema de exclusividad comercial y de inversiones con el fin de acabar de institucionalizar y “norteamericanizar” los vínculos comerciales y financieros que tenía con esa región. En este escenario, George Bush padre lanza la Iniciativa para la Américas el 27 de junio de 1990. En este documento se contemplaban tres puntos esenciales: el comercio, el flujo de inversiones y la deuda externa. Además, se hacía manifiesta la intención de crear una zona de libre comercio que se extendiera ‘desde el puerto de Anchorage, en Alaska, hasta la Tierra del Fuego’.

Esta Iniciativa para las Américas, que quería conformar una zona hemisférica de Libre Comercio y fomentar la inversión extranjera, hacía explícita una decisión que el gobierno norteamericano había tomado pocos años antes, ante las transformaciones económicas y políticas mundiales: se acababa la asistencia financiera a la región. Esta decisión no se tomó porque, de manera súbita, el gobierno estadounidense descubrió que la prosperidad en el hemisferio vendría del comercio y no de la asistencia. Lo que sucedió fue que la economía de ese país necesitaba ampliar sus mercados ante sus bajos niveles de productividad. Además, ya no tenía suficientes recursos como para seguir aportando ayuda de la misma forma en que lo hacía antes, cuando el peligro del “comunismo” estaba latente. Sin este pretexto, el Congreso ya no autorizaba la ayuda económica tan fácilmente. Este cambio

⁴⁷ Según un estudio de John Saxe, en el periodo comprendido entre 1976 y 1997, América latina exportó a otras regiones un total de 2 billones 51 mil 619.1 millones de dólares por concepto de transferencia de excedentes, cifra que se desglosa con el pago del servicio de la deuda, pérdidas por intercambios, fuga de capitales, utilidades netas y errores y omisiones. (Saxe y Petras, 2001:111).

de parecer marcó un hito para la región: desaparecía el concepto de asistencia al desarrollo y su lugar lo venía a llenar uno más acorde a la ideología imperante: inversión directa o indirecta.

La iniciativa de Bush iba entonces encaminada a cumplir dos objetivos fundamentales. Primero, reforzar los PAE en América Latina y hacer de esa porción del hemisferio un socio todavía más compatible con sus intereses, prometiendo ya no el desarrollo sino un crecimiento económico sostenido que aliviaría los problemas de migración y narcotráfico. Así, al amparo de la Iniciativa se destinaron créditos para financiar la deuda externa de Bolivia, Perú y Colombia, lugares donde el cultivo de enervantes se hacía presente con mayor fuerza. Segundo, asegurar a largo plazo mercados donde colocar productos e inversiones, enfrentar mejor la competencia intercapitalista y recuperar parte de su hegemonía perdida.

Este intento de crear un medio favorable para que las corporaciones estadounidenses apuntaladas con dinero público por el Estado pudieran contrarrestar la influencia de la formación de otros bloques —el europeo y el del sudeste asiático—, tenía a su favor la dominación de la gran potencia sobre un continente ya ocupado por el capital transnacional, ocupación y dominación que pronto se expresó en el predominio del capital de las empresas de los Estados Unidos en distintas ramas de la producción —sobre todo en las estratégicas— así como sobre la moneda, el comercio y las finanzas. Bajo estos supuestos, México⁴⁸ se convirtió en la plataforma de lanzamiento de un plan que al mismo tiempo que acentuaba la hegemonía norteamericana en la región, proyectaba su poder hacia el mundo donde ni Europa, ni China ni Japón cedían a cuadrarse a los designios estadounidenses.

Si bien los supuestos sobre los que se pretendía integrar al continente bajo la égida de los Estados Unidos iban de acuerdo al momento histórico por el que atravesaba este país, la idea de unir al continente no era nada novedosa. En diversos momentos de su historia los Estados Unidos han expresado en términos geográficos las necesidades materiales exigidas por su evolución hacia gran potencia y por el auge del capitalismo. Este impulso para establecer una zona de exclusividad comercial y de inversiones desde la cual proyectar su poder militar ha sido un deseo invariable del planteamiento geopolítico a lo largo del tiempo.

La Iniciativa de las Américas de Bush se inscribe así dentro del proyecto panamericano, un elemento de continuidad más dentro de la política exterior estadounidense. La Primera Conferencia Internacional Americana realizada en 1889 es el antecedente más lejano de la actual estrategia librecambista e integracionista de los Estados Unidos en nuestro continente, pues ahí se oficializaron

⁴⁸ Aunque México fue el primer país latinoamericano que entabló un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, existe el antecedente del Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-Canadá de 1988 que marcó la entrada al hemisferio de los procesos de regionalismo.

las tesis del panamericanismo apoyado en la Doctrina Monroe, que contrariaba los ideales del bolivarismo.⁴⁹ Los tiempos en que se convocó dicha conferencia coinciden con un momento en que se efectúa una reversión en los términos del intercambio mundial. A decir de Salvador Morales,

“Frente a la balanza de pagos desfavorable y deplorable y el desangramiento de las reservas áureas, el imperativo canalizado por Bleine⁵⁰ e ‘inconfiable al juego del liberalismo espontáneo’” era el intercambio controlado por Estados Unidos. *No hay dudas... que se imponen imperativos geopolíticos cuando se decreta que el supremo interés de los negocios constituye el “nuevo interés hemisférico” y se decreta la asesoría natural de Estados Unidos en función de su riqueza, su experiencia empresarial, su poderío militar, su presencia internacional y su estabilidad política.* (1994:71. El subrayado es mío)

No quedan dudas tampoco de que el capitalismo norteamericano siempre ha necesitado de la presencia del Estado para el buen funcionamiento del sistema y que este Estado siempre contempla una salida externa en las mejores condiciones a las contradicciones en el nivel interno.

Siguiendo las pautas marcadas por Bush de ajustarse a los planteamientos geopolíticos y empresariales y aún en contra de varios grupos de electores demócratas, en 1994 William Clinton convocó a la primera reunión hemisférica desde 1967, a los 33 jefes de Estado *elegidos democráticamente* —Fidel Castro no fue invitado— con el objetivo de discutir problemas que atañían a todo el continente. Así, se llevó a cabo la I Cumbre de las Américas en Miami del 9 al 11 de diciembre. Aquí, los Estados Unidos realizaron la presentación formal de un acuerdo de libre comercio que abarcaba todo el continente, al que se denominaría Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Este acuerdo era planteado por la potencia del norte como una especie de premio a los países latinoamericanos por haber seguido a pie juntillas los PAE para la región, mediante los cuales se había conseguido un incremento en el intercambio comercial.

En esta primera cumbre, previa a la primera crisis que puso en jaque la economía mexicana y las de la región, se concretó la Iniciativa para las Américas de Bush: los 34 presidentes acordaron crear en todo el continente una zona de libre comercio. Se fijó un plazo de 10 años que se cumpliría en el 2005 para terminar las negociaciones comerciales. Así, el hemisferio se convertiría en el mercado más

⁴⁹ En la historia del continente americano han existido dos proyectos de integración: el panamericano y el latinoamericano. El primero, basado en los ideales del monroísmo y del Destino Manifiesto y el segundo, apoyado en los ideales de Simón Bolívar entre otros pensadores latinoamericanos como José Martí. Dados sus orígenes, ambos plantean la integración de forma muy distinta. El **panamericanismo** propone una unión de las naciones latinoamericanas con los Estados Unidos y el predominio de una nación sobre las otras desde una perspectiva hegemónica. Se materializa con la conformación de la OEA, donde los Estados Unidos asumen la responsabilidad de la defensa del continente definiendo como enemigo a todo el que contravenga sus intereses. El panamericanismo se extiende en el sentido militar y se incorpora al léxico de la unión el concepto de “seguridad hemisférica”. El **Bolivarismo**, en cambio, plantea una unión entre países latinoamericanos con el predominio de la igualdad, desde una perspectiva internacionalista y teniendo como base la ideología bolivariana. Se intentó materializar por primera vez en el Congreso de Panamá de 1824, pero no tuvo los resultados esperados.

grande del mundo: 850 millones de consumidores y 13 mil millones de productos y servicios. (Gaete, 2001:726). Además, se formó además un comité Tripartito para acelerar las negociaciones, conformado por la OEA, el BID y la CEPAL y se acordaron una serie de reuniones ministeriales para discutir a fondo los aspectos que entrarían en el acuerdo.

Poco antes de la realización de la segunda cumbre, en 1997 durante la tercera reunión ministerial, se pone de manifiesto que Brasil no está dispuesto a acatar el ALCA sin negociarlo. Propone que este acuerdo coexista con tratados bilaterales y subregionales (llámese Mercosur) y que los países pudieran negociar o adherirse al ALCA individualmente o como miembros de un grupo de integración subregional. En 1998 se realiza la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile y en ella las divergencias entre los Estados Unidos y Brasil sobre la forma de construir el ALCA alcanzaron su punto máximo, pues Brasil aboga por la consideración de los intereses nacionales y regionales y las cuestiones sociales en un momento especialmente difícil para las economías sudamericanas por la crisis brasileña y la argentina. William Clinton llegó a esta reunión sin el *fast track*⁵¹ del Congreso para acelerar la negociación del acuerdo –de hecho no lo consiguió en los 6 años que promovió el proyecto– y eso dificultó aún más las cosas. Sin embargo, el panorama se oscureció aún más cuando en agosto de 2000, Henrique Cardoso, presidente de Brasil, convoca a una reunión cumbre de Jefes de Estados Sudamericanos con el fin de conversar acerca de problemáticas comunes⁵².

Desde la Iniciativa para las Américas presentada por Bush en 1990 hasta la llegada al poder de George Bush hijo, en 2001, se celebraron en torno al ALCA dos cumbres hemisféricas, 6 reuniones de ministros de comercio y muchas más de grupos de trabajo y de acercamiento entre empresarios, grupos civiles organizados y otros actores sociales que por un lado, no parecen adelantar demasiado, pero por el otro, demuestran que el proyecto sigue adelante.

En abril de 2001 se realizó en Quebec la III Cumbre de las Américas, que es especialmente importante por los acuerdos que se tomaron, que no estaban precisamente relacionados con el libre comercio. Se acordó incluir en el ALCA una cláusula propuesta por Canadá para garantizar la democracia representativa por la cual quedarían excluidas del acuerdo las naciones no democráticas.⁵³

⁵⁰ James Bleine fue un político del estado de Maine que reelaboró las doctrinas de Jefferson, Adams y Monroe para adaptarlas al proceso de expansión imperialista de los Estados Unidos que convocó a la Conferencia de 1889 con el fin de hallar mercados a la cuantiosa producción a la que el mercado interno no podía dar ya cabida.

⁵¹ Procedimiento que permite al ejecutivo de Estados Unidos negociar acuerdos comerciales con otras naciones y presentarlos al congreso para su aceptación o rechazo y sin modificaciones al acuerdo original.

⁵² Se dice que en realidad Cardoso llamó a esta reunión en el marco del apoyo económico norteamericano al Plan Colombia, como una forma de hacer contrapeso a la influencia militar que los Estados Unidos empezaban a tener ahí.

⁵³ Recuérdense los problemas ocasionados en la elección del Perú, cuando los Estados Unidos se querían deshacer de Fujimori, que ya no convenía a sus intereses; los dolores de cabeza del imperio por las bravatas de Chávez y el caso de Cuba. El 6 de septiembre de 2001, de acuerdo con lo discutido en la III Cumbre, el consejo permanente de la OEA aprobó

Con relación a esta disposición, Cristina Rosas advertía que la cláusula democrática no funcionaría de forma simétrica ya que las débiles economías de América Latina no podrían exigirle a los Estados Unidos y a Canadá mayor democracia cuando tienen prácticas electorales dudosas, llaman a elecciones antes de tiempo y/o no respetan los derechos de los migrantes y las minorías étnicas. (Gazcón, 2001:14)

En esta cumbre también se renovó el compromiso de combatir la producción y el tráfico de drogas y el crimen organizado. Se acordó acabar con la certificación y sustituirla por un mecanismo multilateral en la OEA, el MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) con el que se evaluaría conjunta y objetivamente el problema. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia pidieron que se renovaran las preferencias comerciales de las que ya gozan por su cooperación en la lucha antidrogas. Asimismo, se recalcó el compromiso de que las negociaciones terminen a más tardar en enero de 2005 para que el acuerdo entre en vigencia en diciembre de ese año; se rechazó la idea de crear una moneda única o conformar instituciones políticas tipo Parlamento Europeo, decidiendo una vez que podemos ser consumidores pero no ciudadanos; y se anunció que la integración de un proyecto regional de energía que comprende ahora sólo a los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se piensa extender a todo el hemisferio. Dentro de lo extraoficial, la prensa mencionó que en las conclusiones de la cumbre se incluiría un capítulo que le daba a las transnacionales el derecho a colocarse por encima de los gobiernos nacionales.

Sin embargo no todo fue tan favorable para los Estados Unidos. Al igual que Clinton, George Bush llegó sin el fast track para la negociación del acuerdo⁵⁴. Los sindicatos y los ambientalistas estadounidenses han exigido a sus representantes que no se firme ningún acuerdo sin negociar antes sobre los temas que les conciernen. Además, en la Cumbre de Quebec, Brasil no garantizó el respaldo al ALCA y lo condicionó a una serie de concesiones comerciales. A diferencia de México, Colombia y otros países de la región, las naciones del Mercosur, entre las que se incluye Brasil, no dependen tanto del comercio norteamericano. Además, Brasil está promoviendo una zona de libre comercio sudamericana que una al Mercosur con los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). La postura de Brasil no significa que no quiera negociar pero sí que quiere hacerlo en condiciones favorables, aunque esto parece muy difícil cuando el PNB de los Estados Unidos alcanza casi los 11 billones de dólares y su economía equivale a 65% de lo que produce el continente. (CIA,

por unanimidad el borrador de la Carta Democrática que considera la suspensión de cualquier país miembro donde haya una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático. Se aprobó hasta ese mes porque en el mes de junio del mismo año Venezuela se había opuesto. La firma del acuerdo de la cláusula democrática se opacó por los aviones del 11 de septiembre.

⁵⁴ Hasta antes de los acontecimientos del 11 de septiembre, el ALCA parecía ser la mayor prioridad de la política exterior norteamericana pero los objetivos se han redirigido, que no cambiado.

2005) Así, no puede haber principio de reciprocidad que concilie intereses de participantes tan desiguales.

Aparte de la oposición de Brasil a sus designios imperiales, el ALCA del gobierno norteamericano se topó con el rechazo de varias agrupaciones que organizaron la Cumbre del Pueblo de forma paralela al ALCA. Bajo el lema de “No al ALCA; otra América es posible” maestros, estudiantes, ecologistas, sindicatos, artistas, mujeres, indígenas, etc. hicieron un llamado a buscar alternativas con un trasfondo más social y humano. La Cumbre de Quebec, a la que se le llamó “la cumbre amurallada” por la valla de 4 metros de altura y 4 km. de extensión que protegía a los mandatarios, se convirtió así en la primera reunión de alto nivel sobre el ALCA, donde las protestas al proyecto de libre comercio fueron tan importantes como la reunión misma.

Más allá de las cumbres para hablar sobre el ALCA, nos podemos dar cuenta de su carácter expansionista que va de acuerdo a las necesidades estadounidenses de ofrecer acuerdos comerciales preferenciales a los países de América Latina para mantenerlos atados económica, financiera y políticamente. El ALCA ofrece a los Estados Unidos la transformación total de la geografía del continente en detrimento de los intereses de los pobladores de la región latinoamericana. Algunos estudiosos como John Saxe manejan incluso que tras el planteamiento del ALCA subyace una especie de neomonroísmo, aunque más bien se trata de una expresión de monroísmo puro, sin el *neo*, porque en realidad desde que se proclamó la Doctrina Monroe, los Estados Unidos nunca han tenido la intención de dejar el control del continente.

El ALCA se inscribe así dentro del plan de los Estados Unidos para recuperar el espacio perdido a manos de otras potencias capitalistas a costa de su economía interna, pues el libre comercio propuesto ni siquiera beneficia a su propia población, como lo demuestra la ausencia de apoyo popular al proyecto. Sin embargo, más que asombrarse por la forma en que el Estado norteamericano promueve los intereses del capital transnacional, lo que más sorprende de esta situación es la disposición de casi todos los regímenes políticos latinoamericanos para establecer vínculos tan estrechos con el gobierno norteamericano y la afinidad de las metas entre el gobierno de la potencia hegemónica en la región y los gobiernos latinoamericanos, que parecen ignorar que con el establecimiento del ALCA la dinámica económica de América Latina quedaría sujeta a las estrategias de las corporaciones transnacionales y que en este momento de vulnerabilidad estratégica, los Estados Unidos están utilizando al libre comercio como un instrumento intervencionista.

El libre comercio —que en realidad ni es tan libre porque los Estados Unidos subsidian a las empresas con fondos públicos y protegen a varias industrias cobrando altos aranceles— va mucho más allá de lo económico. En realidad, América Latina, a excepción de México, es un mercado secundario

pues representa sólo el 1% del comercio con ese país. (ILDIS, 2003) Esto lleva a pensar que bajo el establecimiento del ALCA hay otro tipo de intenciones de corte geopolítico y geoestratégico. Para nadie es un secreto que tras el fin de la guerra fría los problemas comerciales entre las grandes potencias capitalistas se trasladaron a las esferas políticas y de seguridad: lo económico se trasladó a lo militar. Las evidencias materiales indican que para competir con otras potencias, los gobiernos de la Unión Americana se han inclinado a favor del uso de una combinación de instrumentos comerciales y financieros subsumidos a los fines de la seguridad nacional.

Desde 1994, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos William Perry y otros militares y funcionarios civiles como Richard Cheney, han insistido en la necesidad de complementar los tratados de libre comercio con una integración militar para América del Norte y el hemisferio occidental. Todo apunta, pues, a pensar que Washington ha decidido usar una combinación de instrumentos comerciales y financieros y militares para no perder su hegemonía en el continente, para hacerse más fácilmente de recursos naturales estratégicos y para proyectar su poder hacia todo el globo. Así, aunque propiamente el documento que institucionaliza el ALCA aún no ha sido acabado y se sigue discutiendo, lo cierto es que en la realidad los mecanismos necesarios para la implantación del acuerdo —legislaciones flexibles, privatización de sectores estratégicos, políticas económicas tanto fiscales como comerciales afines, construcción y *acondicionamiento de la infraestructura existente en la región*, entre otros— *ya han sido establecidos y se encuentran funcionando.*

c) EL PAPEL DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES EN EL LIBRE COMERCIO

En las últimas décadas, las corporaciones transnacionales se han vuelto el centro de múltiples estudios ya que han tenido un papel vital en la internacionalización del capital, en el proceso de extensión e intensificación de las relaciones de producción capitalistas en todo el mundo en el cual se inscribe el libre comercio. Esto no significa que carecieran de importancia en el pasado pero sí que tras la expansión del capitalismo hacia Europa Central y la ex URSS, los mercados de las transnacionales se han ampliado y se ha agudizado la competencia intercapitalista, en la que han sobresalido los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Ante este panorama, el paradigma dominante de la globalización ha dado tal importancia a la gestión de las empresas en el mundo y ha subrayado tanto su eficiencia en contraste con la corrupción e ineptitud del Estado, que ha hecho creer que la actividad de las primeras está desligada e incluso se contrapone a la acción del segundo. Pero, como se podrá apreciar, esto no es así.

Si bien es cierto que las corporaciones transnacionales se han convertido en el principal agente de despliegue económico de las naciones y concentran buena parte de la actividad económica tanto en el comercio y finanzas como en la inversión foránea, no lo es menos que estas transnacionales se concentran geográficamente en las zonas de mayor desarrollo económico, lo que ha conducido a que las relaciones económicas internacionales estén bajo el control de un reducido número de grupos empresariales y financieros. Este hecho desmiente uno de los mitos de la globalización que afirma que cualquier economía puede “insertarse” gracias al acceso a medios de comunicación baratos y eficaces y a un variado espectro de nuevas tecnologías. Como afirma Jorge Beinstein

“(…) visto desde una perspectiva mundial lo que se detecta es un doble movimiento (gradual en el centro, exacerbado en la periferia) de polarización del poder económico y de mutación de sus élites hacia los negocios financieros que definen la cultura de las estrategias empresariales”. (*Op. Cit.*:35)

Este conjunto de empresas globales maneja casi toda la estructura productiva de tecnología de punta, ha conseguido adueñarse de la mejor parte de las que fueron empresas públicas en los países no desarrollados, dirige el comercio y las comunicaciones y ha convertido a la especulación financiera en el centro de su dinámica de negocios. De las 100 economías más grandes en el mundo, 51 son corporaciones y sólo 49 son países (O’ Tuathail, *Op. Cit.*:306). Según cifras del Banco Mundial y Fortune, 35 000 empresas globales participan con 65% del Producto Bruto Mundial (PBM); las primeras 500 empresas globales participan con el 42% del PBM y las primeras 50 empresas globales, participan con el 25% del PBM. (Beinstein, *Op. Cit.*:36)

El accionar de estas corporaciones transnacionales, cuyas oficinas centrales se asientan en el territorio de los países desarrollados⁵⁵, se ha expandido en dos sentidos: primero, en el de las ganancias. La apertura de fronteras obligada por el ajuste estructural del FMI en detrimento de la mediana y pequeña empresa de los países no desarrollados⁵⁶ y la capacidad monetaria para el desarrollo de alta tecnología han elevado considerablemente el margen de ganancias de las corporaciones transnacionales. A este respecto cabe agregar que el desarrollo tecnológico ha permitido un intercambio más grande y más rápido de capital financiero en todo el mundo beneficiando a un muy reducido grupo de accionistas y especuladores cuya nación de origen es la mayoría de las veces, uno de los países del

⁵⁵ Según Atilio Borón, 96% de las 200 transnacionales más grandes del mundo, tienen sus casas matrices en ocho países, están legalmente inscritas en los registros de sociedades anónimas de ocho países y sus directorios tienen sede en ocho países del capitalismo metropolitano. Menos del 2% de los miembros de sus directorios son extranjeros mientras que más de 85% de todos los desarrollos tecnológicos de las firmas se originan dentro de sus “fronteras nacionales”. (2003:48)

⁵⁶La descapitalización de las economías de los países menos desarrollados ha servido para financiar el desarrollo económico e industrial de los países más ricos. Esta desnacionalización de la industria local afecta de manera significativa en las economías nacionales, que son incapaces de sobrevivir en mercados acaparados por las grandes empresas.

G-7.⁵⁷ En segundo lugar, en el del espacio, pues la ampliación de los mercados permitió su mayor y mejor colocación en territorios que durante la guerra fría no pudieron ser completamente penetrados.

Se les llama transnacionales⁵⁸ porque sus distintas ramas productivas se han transnacionalizado tanto en la obtención de recursos para la producción como en la venta de sus productos elaborados, dando lugar a la existencia de grandes redes transnacionales distribuidas en varias partes del mundo, en dinámica circulación de recursos y productos. Como afirman Andrew Glyn y Bob Sutcliffe, las corporaciones son más globales ahora en cuanto a la ubicación de sus activos o sus mercados, o en cuanto al personal y a la gestión, hallándose de esta manera menos enraizada en algún Estado Nacional; (además) dichas corporaciones, aplican una división más global del trabajo al colocar distintas partes de sus procesos manufactureros en diferentes países. (1999:106).

Sin embargo, no es la acción de todas las corporaciones transnacionales las que interesan a este trabajo sino sólo aquellas que operan en las actividades estratégicas de los Estados y cuyas actividades son vitales para el despliegue de la política exterior de las grandes potencias. Para esclarecer el papel de las transnacionales en el mercado mundial y en la producción estratégica particularmente, se acude a dos niveles de análisis. El primero se refiere a la organización de las transnacionales en las actividades estratégicas como la base de las estrategias competitivas; el segundo se centra en la relación entre los Estados y las corporaciones transnacionales en tanto factor vital para entender el problema de la importancia de ciertos territorios que sirven como base de origen a los capitales transnacionales.

Las empresas muestran una diversidad de estrategias en función de su necesidad de consolidación y expansión. La lógica de acción de las corporaciones es el control de las bases del liderazgo económico internacional y por ello su acción se ha venido ubicando dentro de la producción estratégica, sobre todo tras la agudización de la rivalidad intercapitalista. Según Raúl Ornelas, las estrategias de las transnacionales se despliegan frente a dos imperativos: las necesidades de producción y las presiones derivadas de la competencia y lucha de clases. (1995:444)

⁵⁷ Ese enorme flujo de capitales que transitan con tanta rapidez de un país a otro no se puede explicar sin la SOBRECUMULACIÓN, la existencia de capitales excedentarios en busca de condiciones de generación de ganancias extraordinarias en territorios ajenos al suyo. Véase Raúl Ornelas, "*Las empresas transnacionales como agentes de la dominación mundial capitalista*" en Ceceña, Ana Esther, et. alli., *Producción estratégica y hegemonía mundial*, p. 400.

⁵⁸ No es la intención de este trabajo entrar en el debate entre las diferencias implícitas al denominarlas corporaciones *multinacionales* o corporaciones *transnacionales*. Algunos argumentan que la característica de multinacional o transnacional se otorga con base en el funcionamiento de la corporación en el mundo o de acuerdo a la conformación jurídica de la empresa, pues si tienen capital de distintas naciones y funciona en diversas partes del mundo es multinacional mientras que si el capital es de una sola nacionalidad se le denominará transnacional aunque también actúe fuera de las fronteras del país donde se originó. Sin embargo, las investigaciones han mostrado que las corporaciones actuales no son ni homogéneas en funciones ni inmutables en sus características a lo largo del tiempo, lo que dificulta su clasificación. Por ello se ha optado por denominarlas transnacionales en tanto que sus acciones van más allá del campo estatal pero la organización de sus actividades se planea en los países desarrollados, mientras que lo multinacional de la idea de una operación empresarial desde múltiples países, que puede incluir tanto a los desarrollados como a los no desarrollados.

En cuestiones de tecnología, las transnacionales han modificado la organización del trabajo al introducir la tecnología de punta en el proceso productivo y al incentivar la investigación en este rubro, por lo que se han flexibilizado las condiciones de la fuerza de trabajo, rompiendo el compromiso que la obligaba a otorgar ciertos beneficios sociales. En cuanto a cuestiones espaciales podemos hablar de la deslocalización productiva, buscando, primero, menores costos de mano de obra y de recursos naturales y segundo, nuevos espacios para el proceso productivo. Para ello, las corporaciones transnacionales buscan hacerse del control de los recursos naturales y de mercados abiertos donde la regulación estatal contemple el libre comercio, la desregulación de actividades prohibidas a la acción del capital extranjero y el libre movimiento de los capitales invertidos.

Pero este poderío de las empresas transnacionales estratégicas y el éxito de sus maniobras en el mundo no se puede entender sin el estudio de las relaciones que mantienen con sus Estados de origen. Aunque algunas tesis afirmen que los intereses de las corporaciones transnacionales se separan del Estado porque la maximización de las ganancias les lleva a actuar en otros países y así ya no crean empleos en los propios y los Estados no guían más el proceso económico internacional (*Ibid*:404 y 478), como actores no-estatales, las corporaciones transnacionales tienen limitaciones: no pueden utilizar ni el recurso de la violencia ni el del derecho internacional como instrumentos de defensa de sus intereses. Las corporaciones transnacionales necesitan de sus Estados porque dondequiera que se asienten, sus acciones en territorios distintos de los de su origen poseen consecuencias políticas.

La considerable participación de las transnacionales en la economía mundial y la importancia que han adquirido en las relaciones internacionales, pueden llevar a creer que su actuación es autónoma y que sus intereses están alejados de los intereses del grupo en el poder, conformado por representantes *populares* electos por medios *democráticos*. Sobre todo, el discurso de la globalización intenta convencer de que el Estado debe alejarse del proceso productivo y dejar que las fuerzas del mercado actúen de forma libre. Sin embargo, la creación de un libre mercado, es, primero que todo, una opción política, pues, como afirma John Gray, “la construcción de un libre mercado es un proyecto de ingeniería social” (*Op. Cit.*:26).

Ese discurso de la globalización que se ha materializado en la aplicación de las llamadas políticas *neoliberales* en todo el mundo ha construido la idea de la formación de un mercado mundial de bienes y servicios al que las fronteras y regulaciones nacionales le impiden su libre desarrollo. De esta forma, las corporaciones transnacionales aparecen como entes autónomos de unas relaciones económicas internacionales que se autorregulan sin la necesidad de la intervención estatal⁵⁹. Se dice

⁵⁹ John Saxe-Fernández afirma que el paradigma globalista esconde la naturaleza explotativa y asimétrica del imperialismo en el que ocurre la internacionalización económica; además, da como hecho que la posición de un actor en el sistema

que a medida que los poderes de los Estados soberanos se desvanecen, los de las transnacionales crecen, pero a pesar de todo lo afirmado, las estructuras nacionales desde las que operan las transnacionales más poderosas, permanecen.

El capital de las transnacionales no es un capital sin raíces que opere de manera ajena a la regulación del Estado Nacional y tampoco se puede dar como hecho que sus actividades comerciales y el desarrollo de la tecnología se hayan globalizado de alguna manera. La mayoría del comercio que se lleva a cabo es intrafirma y/o dentro del Estado de origen y su región inmediata. Sólo alrededor de 40 grandes empresas en el mundo generan al menos la mitad de sus beneficios en el extranjero, mientras que menos de veinte mantienen al menos la mitad de sus instalaciones productivas en el extranjero (*Ibid*:93). Según Saxe-Fernández, el 70% de las corporaciones transnacionales son *home based*: se mantienen fuertemente encajadas en su medio nacional (1999:32), lo que significa que no están fuera de la órbita de la regulación estatal. Esto da como resultado que el poder del Estado sea un elemento de gran peso para el éxito o fracaso de las empresas que buscan invertir o vender internacionalmente.

Es un hecho que sin fundamentos políticos los mercados se pueden colapsar. Por ello, ahora menos que nunca, las interacciones entre la corporación transnacional y el Estado norteamericano desde el cual opera forman parte de su óptimo funcionamiento. A diferencia de lo que opinan los teóricos del actual orden, el Estado norteamericano es más que un árbitro, pues entre sus funciones principales se encuentra la administración de los recursos naturales vitales para la reproducción económica sin la cual el propio Estado podría desaparecer o podría dejar de ser gran potencia. De este modo, las corporaciones transnacionales están dentro de la gran estrategia estatal; por eso, el éxito de las transnacionales estratégicas en el control de ciertos nichos del mercado mundial es el éxito del Estado y de la clase política que lo conforma.

En el actual contexto de inestabilidad política cuando ninguna gran potencia se puede considerar como líder de la sociedad internacional, la competencia económica se agudiza y los Estados Unidos han tendido a utilizar su fuerza militar y política y hasta sus aparatos de inteligencia desarrollados durante la guerra fría para sostener la internacionalización de las transnacionales, que sin subsidios estatales y el establecimiento de un mercado *ad hoc* a sus capacidades e intereses, no pueden sobrevivir.

interestatal está determinada por una dinámica derivada de una teorización del mercado, el cual tiende al equilibrio por medio de fuerzas automáticas o de autorregulación. Consúltese John Saxe Fernández, *Globalización e imperialismo en Globalización: crítica a un paradigma*, México, Plaza y Janés/UNAM, 1999, pp. 19 y 20.

La objetivación del dominio estadounidense en territorio latinoamericano, cuyos intereses geoeconómicos⁶⁰ y geopolíticos convergen en la preparación de un área de libre comercio, no puede llevarse a cabo sin la acción de vehículos de expansionismo que parezcan alejados de la connotación militar, aunque ciertamente no lo estén. Si bien los ejércitos son los medios ideales para la ocupación espacial, existen formas más sutiles y menos costosas aunque no menos eficaces para tener el control de los recursos naturales estratégicos de los países latinoamericanos. Por eso, la acción de las corporaciones transnacionales⁶¹ resulta de vital importancia para la implantación del ALCA y la consecución de los objetivos hegemónicos estadounidenses. Es justamente su acción como vehículos ideales del establishment norteamericano para la consecución de los objetivos estratégicos de la política comercial externa, parte integrante de la política exterior norteamericana para América Latina, que la acción de las corporaciones transnacionales en América Latina no se puede desligar de la acción estatal como pretenden hacer ver los planes para el desarrollo de la región que los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento presentan a los gobiernos latinoamericanos.

Si, como afirma Samuel Kim, las grandes potencias son Estados fuertes “con la capacidad de movilizar los recursos humanos y materiales del país en la consecución de objetivos globales” (1997:246), Estados Unidos, como gran potencia, necesita movilizar estos recursos y lo hace mediante las empresas transnacionales, que una vez ubicadas en el país receptor, aprovechan la legislación comercial y financiera favorable para extraer mayores excedentes de capital y recursos naturales

⁶⁰El término *geoeconomía* ha sido utilizado desde hace varios años —sobre todo por los estudiosos de la *geopolítica* clásica— para referirse a los recursos naturales que poseen un valor considerable en el intercambio comercial internacional y para la industria nacional. La *geoeconomía* era considerada una especie de apéndice de la Geopolítica que se relacionaba de forma más directa con la Geografía Económica que con la propia Geopolítica. Sin embargo, al igual que la Geopolítica, la Geoeconomía puede ser retomada desde una perspectiva muy distinta a la del discurso justificador del gobierno de los Estados Unidos. Por ello, en este trabajo la connotación de la Geoeconomía será más parecida a la que se viene utilizando en los últimos tiempos en los círculos críticos del análisis de las relaciones internacionales, que si bien aceptan que ocurrieron cambios en la economía mundial, también entienden que estas transformaciones son parte de un proceso que se viene gestando desde hace siglos. La Geoeconomía deberá entenderse en el presente trabajo como *una perspectiva de las relaciones internacionales cuyo análisis se centra en las acciones de política exterior de los gobiernos de las grandes potencias cuando en su búsqueda por la supremacía en la economía internacional se alían a actores no estatales (las corporaciones transnacionales) para proyectar y promover mejor sus intereses en el mundo*. Cabe agregar que las corporaciones transnacionales en las que hace hincapié la Geoeconomía son las que orientan sus acciones hacia la obtención de productos geoestratégicos y al posterior desarrollo del aparato productivo estratégico que se enfoca a los sectores de la tecnología de punta y mantenimiento de la industria actual y al relacionado con la reproducción de la fuerza de trabajo. Así, las transnacionales que incumben a la Geoeconomía se inscriben dentro de ciertas actividades como son la extracción y refinación de petróleo y gas, la automotriz, la electrónica, la química, la farmacéutica, la de los alimentos y la aeroespacial.

⁶¹ En este caso se entiende a la corporación transnacional como “la expresión más acabada de concentración y centralización del desarrollo capitalista por la acumulación y el control de una gran cantidad de recursos financieros, tecnológicos e incluso naturales e humanos que son además condición de la expansión territorial”. Léase Raúl Ornelas, *Las empresas transnacionales como agentes de la dominación mundial capitalista* en Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda, *Producción Estratégica y Hegemonía mundial*, Ed. Siglo XXI, México, 1995, p. 344.

estratégicos.⁶² Sin embargo, los cambios en los regímenes jurídicos de los países latinoamericanos no son suficientes para facilitar las actividades de las corporaciones transnacionales: resulta de capital importancia la construcción y el dominio de las vías terrestres, aéreas y fluviales tanto para agilizar el comercio como para penetrar en lugares geoestratégicos. La construcción de un sistema infraestructural para el control y dominio del espacio latinoamericano en general y sudamericano en particular en el que actúan las corporaciones transnacionales se convierte entonces en un imperativo.

C. LA IMPORTANCIA DE LA IMPERATIVA INTEGRACIÓN FÍSICA SURAMERICANA

Como se ha visto hasta ahora, la actual crisis de sucesión hegemónica, la competencia intercapitalista y la situación de vulnerabilidad estratégica han obligado a los artífices y ejecutores de la política exterior norteamericana a volcar la mayor parte de sus esfuerzos en las relaciones con América Latina, en organizar el libre comercio desde el ámbito estatal para beneficio privado. Sin embargo, es necesario conocer las razones por las cuales se planea construir justo en la subregión sudamericana una infraestructura que permita no sólo la posesión, el acceso y el control de los recursos naturales geoestratégicos de la cuenca amazónica y otros sitios de importancia geopolítica y geoeconómica sino, además y sobre todo, el dominio sobre posiciones militares estratégicas de varios de los países sudamericanos, hechos que amén de evidenciar la innegable lucha intercapitalista por la posesión de los mejores territorios en un contexto crítico para la definición de la hegemonía mundial, ofrecen una oportunidad para la intervención directa de los Estados Unidos, intromisión que no se circunscribe al ámbito de lo diplomático sino que se objetiva territorialmente e incide directamente sobre el destino de los pueblos que habitan esta particular región. Por ello, en este capítulo se hará un intento por explicar la relevancia del control espacial en las aspiraciones de dominio norteamericano en América del Sur a través de la construcción de un sistema infraestructural en ciertas zonas de la subregión donde es nulo u obsoleto, tratando, primero, la importancia de la objetivación del poder y después, los problemas territoriales en Sudamérica, la necesidad de una integración física y la importancia geoestratégica del arco andino y la cuenca amazónica.

⁶² El gobierno norteamericano mantiene una agencia que garantiza las inversiones en el extranjero. Se llama Overseas Private Investment Corporation (OPIC), la cual no sólo facilita créditos sino que apoya los reclamos de las corporaciones en territorio extranjero obligando a los gobiernos a acatar las leyes estadounidenses en términos de inversiones.

a) EL CONTROL DEL ESPACIO COMO OBJETIVACIÓN DEL PODER

Si se revisan cuidadosamente los análisis que desde la academia nacional e internacional se realizan sobre la realidad internacional y sobre todo los que se concentran en la política internacional, podemos observar que más allá de considerarlo como parte del paisaje, la problematización sobre el espacio y su relación directa con el ejercicio del poder están ausentes, sobre todo en los últimos años, donde libros tan consultados pero tan poco analizados y criticados como “Imperio” de Hardt y Negri, advierten que “... en contraste con el imperialismo, el imperio no establece ningún centro de poder y no se sustenta en fronteras.”(2002:14) Esta displicencia de los teóricos hacia lo espacial parte de un grave a priori: la consideración de este elemento como algo demasiado evidente para ser tomado en cuenta⁶³.

El espacio es tomado como una verdad externa, objetiva, inmutable y eterna, más aún que la categoría de tiempo. Sin embargo, los estudiosos parecen no percatarse de que las verdades construidas sobre la realidad son creaciones de los propios sujetos, los cuales les dan formas y características de acuerdo a las necesidades de la sociedad donde se desenvuelven como sujetos históricos y espaciales. Por eso, se puede afirmar que no hay un solo tipo de espacio y que aún cuando el espacio no sólo esté ahí sino que es, junto con el tiempo, el primer elemento que advertimos cuando tratamos de entender nuestro mundo, todo estudioso de lo social tiene que cuestionarse y aclararse el significado que tiene el espacio en su análisis: si es un simple recipiente de las actividades humanas; si es el escenario donde se desarrolla la competencia intercapitalista; o si es una creación social que, como diría Braudel, “puede... dar respuesta a muchas interrogantes” (Braudel, 1997:27), lo que convierte al espacio en un medio que nos ayuda a recrear las transformaciones sociales más que un objeto pasivo víctima de la apropiación humana.

Sin embargo, aunque una lectura de la mayoría de los autores de la escuela posibilista francesa de la geografía⁶⁴ y de los teóricos de la Geopolítica Crítica⁶⁵ nos lleve a la conclusión de la necesidad

⁶³ En la propia región latinoamericana, los paradigmas dominantes en la Geografía y los debates que promueve no dan lugar a la discusión del espacio en su sentido más dinámico, más revolucionario y por desgracia, los debates que no toman la postura de la discusión predominante tampoco tienen mucho que aportar. El geógrafo latinoamericano más reconocido, el brasileño Milton Santos, aunque reconoce la importancia de lo social en lo espacial, defiende sus afirmaciones con argumentos que parten de un estructural-funcionalismo muy caduco y superado que terminan por alejar su discurso de la realidad. A esta conclusión se llegó partiendo de la lectura de los siguientes libros: Milton Santos, Espacio y Método, Ed. Universidad de Barcelona, Barcelona, 1986; Milton Santos, Metamorfosis del espacio habitado, Ed. Oikos, Barcelona, 1996; y Milton Santos, La naturaleza del espacio, Ed. Ariel, Barcelona, 2000.

⁶⁴ Si se pretende hacer un seguimiento puntual de la concepción del espacio como creación social se puede leer al principal exponente de estas ideas, que el geógrafo francés Paul Vidal de la Blache (1845-1918), fundador de la tradición posibilista que veía a la geografía como una interacción entre los hombres y su medio. Con su término *géneros de vida*, dejaba claro el corazón de su teoría de la geografía humana, pues con él se refería al “ creativo juego de la civilización y su medio” (Parker, 2000:960). Vidal de la Blache reconoció la importancia del factor político para moldear el paisaje y afirmó que la geografía política debía ser estudiada dentro de la geografía humana entera, pues la nación se apoya tanto en sus bases físicas como

de pensar el espacio como creación social y viceversa, esta misma literatura no siempre deja muy claras las razones por las cuales esto debe ser así y menos al momento de abordar el conocimiento de un fenómeno de la política internacional. La ausencia de un debate mayor y mejor sobre este tema, sin embargo, no es un obstáculo para que se pueda afirmar que el espacio es una creación social no sólo por la interrelación entre el binomio naturaleza-humanidad, por la interacción entre las sociedades y el medio ambiente natural que permite la vida en este planeta sino por razones más profundas.

El espacio es una creación social porque a través del tiempo la humanidad ha modificado su medio y estas modificaciones pueden servir para explicar ciertas interrogantes de la historia. Lo es porque a fin de cuentas, el espacio es una expresión del pensamiento. Los deseos, planes y proyectos de los humanos se objetivan en el espacio, se hacen reales. El espacio es una creación social porque mujeres y hombres dividen el espacio de acuerdo a sus necesidades y éste hace su propio papel sobre la sociedad. Los humanos, que establecen relaciones de carácter político entre ellos al vivir en sociedad, le dan **sentido** al espacio porque no sólo lo utilizan sino que lo crean y lo modifican al mismo tiempo que son modificados por él. Así, el espacio se convierte en un referente empírico vital muy evidente, pues no hay sitio más claro donde colocar o evidenciar la acción humana que el sobre el espacio donde se desenvuelve.

Considerado como una creación social, el espacio se convierte, además, en herramienta para el análisis teórico de la sociedad. Aceptar esto significa eliminar el modelo simplista de las correspondencias puntuales, una a una, entre las acciones sociales y las situaciones geográficas, entre las funciones espaciales y las formas espaciales. Significa también dejar de lado las concepciones que presentan a los lugares donde vivimos como si no se tratasen de construcciones históricas sino como conjuntos espaciales engendrados por la naturaleza. Significa asimismo considerar al espacio y a la organización política del espacio como expresiones de las relaciones sociales que reaccionan entre ellas

humanas: el territorio y las fronteras no bastan para hacer una nación y la unidad de la misma se basa en el consentimiento de los seres humanos que se han visto unidos por la común experiencia. Además, puso de relieve la importancia de las relaciones, de los intercambios y de las comunicaciones en la vida de las regiones y países. Vidal no sólo consideró el ESPACIO y la POSICIÓN como los demás geógrafos de su tiempo: los relacionó con el TIEMPO, la historia. Acentuó también el papel del hombre como protagonista principal del hecho político, asignándole la posibilidad de modificar el medio a través de su inteligencia. También se puede leer a Henri Lefebvre, *The Production of Space*, Ed. Blackwell, Cambridge, 1991.

⁶⁵ Al grupo de autores que coinciden en que la geopolítica desde su nacimiento ha estado estrechamente ligada a la práctica política estatal y a los juegos de las grandes potencias, se les conoce como parte de la Geopolítica Crítica, que está detrás de la llamada "geopolítica vulgar" (Ó' Tuathail, *Op. Cit.*:3) de las grandes potencias y tiene el objetivo de entender las causas, consecuencias, métodos y creencias de la práctica de la geopolítica y de los geopolíticos. Se dividen en dos grupos de autores. El primero examina el lenguaje y el discurso analizando los discursos, documentos, tratados y memorias, pues según ellos, sólo analizándolos es posible interpretar sus características y ofrecer alternativas. Este grupo está conformado en su mayoría por geógrafos políticos británicos y norteamericanos enmarcados dentro de lo que se llama post-estructuralismo. El segundo grupo es de nacionalidad francesa. Considera que un término valioso, *geopolítica*, ha sido 'secuestrado' por la "seguridad nacional" y que una geopolítica de la izquierda puede construirse como una alternativa.

en tanto que los requerimientos de la sociedad se satisfacen en el espacio. El espacio, pues, no es algo abstracto y dado; es un proceso que está en constante cambio y construcción.

En este tenor, se puede afirmar que el conocimiento generado en torno al espacio sirve también como una herramienta de pensamiento y de acción, pues implica una forma de dominio y de uso del poder. Así, las funciones ideológicas⁶⁶ y políticas de la concepción espacial son considerables. A decir de Edward Soja, el estudio del espacio ha sido siempre político y estratégico. Si el espacio tiene un aire de neutralidad e indiferencia con respecto a su contenido y entonces parece ser puramente formal, es precisamente porque no siempre los resultados de su uso político son evidentes en el paisaje. Así, el proceso mediante el cual la construcción intelectual del espacio ha sido formada y moldeada con base en elementos históricos y naturales, ha sido un proceso político e ideológico (1989:80).

La consideración del espacio como creación de los sujetos en el tiempo considera la posibilidad de afectar de manera significativa al espacio, pues toda la ciencia social entraña una vasta interpretación y por consiguiente una manipulación de mismo. Atendiendo a ello, nuestra conceptualización del espacio puede tener un impacto crucial en nuestro futuro social colectivo. Por eso, el uso ideológico del conocimiento geográfico ha llevado a la consideración del espacio, uno de los parámetros más elementales de nuestra existencia, como una realidad objetiva cuyo cambio no puede ser efectuado por nosotros de manera significativa y ha conducido a que las ciencias sociales descuiden otros tipos de espacio “potencialmente subversivos” (Wallerstein, 1998:s/n).

El espacio ha de ser conceptualizado como un proceso dinámico, sin el cual la categoría de tiempo no tiene sentido. Tal como afirma Doreen Massey, “espacialidad y temporalidad son diferentes pero no se pueden conceptualizar de manera separada” (1993:126), pues al unirse con el tiempo, el espacio se abre paso a las consideraciones histórico-políticas. El espacio ha de definirse como el resultado de la construcción de relaciones, como la coexistencia simultánea de interrelaciones sociales e interacciones en todas las escalas espaciales, donde lo local y lo global se distinguen sólo artificialmente. Lo social necesariamente se construye espacialmente y lo social es inexorablemente espacial. El espacio no debe pensarse como una superficie plana porque las relaciones sociales que lo crean son dinámicas por sí mismas. Así, como resultado del hecho de que se conceptualiza como producto de las relaciones sociales, por su naturaleza el espacio forma parte de un tejido complejo de

⁶⁶ Ideología es entendida aquí no como cualquier conjunto de creencias destinadas a dirigir el comportamiento práctico sino como un conjunto de creencias que poseen dos características: primero, que no están suficientemente justificadas, es decir, son esas cuyos enunciados no se fundan en razones válidas; segundo, que cumplen la función social de promover el poder político del grupo que las respalda, o sea, cuando la aceptación de los enunciados en que se expresan esas creencias favorece el logro o la conservación en el poder de ese grupo. Como afirma Luis Villoro, “la ideología consiste en una operación mental por la que los valores subjetivos, propios de un grupo, se presentan como si fueran valores objetivos”. (Villoro, 1997:186)

relaciones que establecen los hombres, entre las que se incluyen primigenia e inexorablemente, las relaciones de poder.

La política no se maquina *ex nihilo*: se gesta en coyunturas históricas determinadas atendiendo a ciertas necesidades de los grupos hegemónicos. Por eso, la realidad internacional ni escapa ni es ajena a las anteriores consideraciones sobre el espacio. El establecimiento de las relaciones de poder y de fuerza⁶⁷ entre los distintos Estados, sobre todo en un contexto histórico de crisis de sucesión hegemónica, lleva implícita una delimitación espacial que va más allá de lo meramente territorial y un control verdadero sobre el espacio.⁶⁸ Si tenemos que el poder es “la fuerza que hace que las cosas sean, la capacidad que hace posible que el deseo se objetive, pero, más que cualquier otra cosa, la forma en que la vida se afirma”, (Ayala Blanco, 2003:9) la construcción de la realidad humana y las relaciones que se establecen entre los humanos a partir del deseo no pueden entenderse sin un espacio que las cree, condicione y transforme. El poder de las grandes potencias tiene que objetivarse pues en las relaciones internacionales el poder es directamente proporcional al control de los espacios más ricos en recursos naturales y de las zonas geoestratégicas más importantes de la Tierra.

Por lo anterior no se piense, sin embargo, que se está afirmando que la relación entre poder y posesión de un gran territorio es directa y casi mecánica. Lo que se intenta decir es que no se puede ser una gran potencia y mucho menos disputar la hegemonía mundial si no se tiene el control del espacio. Aunque se intente aducir que tanto los países de Europa Occidental como Japón son grandes potencias que no poseen grandes territorios, no se puede afirmar con referentes empíricos en la mano que no controlaron o controlan territorios que fueron parte importante para la creación de su riqueza actual. Ya sea para colocar mercancías, capitales o bien extraer excedentes de capital o recursos necesarios para la producción capitalista como el petróleo⁶⁹, el dominio sobre grandes porciones del planeta ha sido necesaria. Volvemos a lo afirmado: el poder ni se gesta ni se ejerce en la Nada; tiene que objetivarse para seguir existiendo y esa objetivación pasa por el conocimiento exhaustivo del espacio.

⁶⁷ Hay que recordar que ambas cosas son distintas. A decir de Elias Canetti, “con fuerza se asocia la idea de algo que está próximo y presente. Es más coercitiva e inmediata que el poder. Se habla, con mayor énfasis, de fuerza física. (Pero) cuando la fuerza dura más tiempo, se convierte en poder. Pero en el instante crítico, que llega de pronto, en el instante de la decisión y de lo irrevocable, es otra vez fuerza pura. El poder es más general y más vasto que la fuerza, contiene mucho más y no es tan dinámico. Es más complicado e implica incluso una cierta medida de paciencia. La palabra, *Macht*, poder, deriva de una vieja raíz gótica, *magan*, que quiere decir “poder, ser capaz”, y no está relacionada en absoluto con la raíz *machen*, “hacer”. (Canetti, 1982:277)

⁶⁸ Este espacio al que se hace referencia no se reduce sólo a la solidez del suelo; está constituido también por el agua dentro y fuera de los continentes y por el aire. Al enunciar el vocablo “geografía”, la mayoría de las veces se piensa automáticamente en su etimología (“descripción de la tierra”) y se deja fuera de la percepción lo *insólido*, conformado por las masas de agua y el aire que cubre lo visible.

⁶⁹ Tan sólo de las naciones de la región del Golfo Pérsico, para sus requerimientos energéticos de petróleo los países de Europa Occidental importan el 43 por ciento y Japón el 68 por ciento. (Klare, 2004) No resulta fortuito el hecho de que

Aunque parezca *demodé* acudir a cuerpos teóricos que contradigan los paradigmas vigentes donde el espacio no es el “factor” determinante del poder en estos “complejos tiempos de la globalización”, al tratar de explicar el fenómeno del imperialismo, Lenin apeló al control del territorio por parte de las grandes potencias como una forma de aumentar la tasa de ganancia, deprimida por la creciente competencia capitalista, y de extraer mayores excedentes. Advertía que dada la organización de la producción a escala mundial, la actividad de los monopolios no podía quedar limitada por los confines del Estado y que el capital financiero –combinación del capital industrial y del capital bancario en la teoría marxista– trataba de asegurarse el control de las materias primas y de los mercados en todo el mundo.⁷⁰ En el mismo tenor, el geógrafo francés Ives Lacoste afirmaba en la década del setenta que el imperialismo no era únicamente un fenómeno histórico, un estadio en el desarrollo de las contradicciones del capitalismo sino también un sistema de dominación del espacio y de los hombres, que determina una diferenciación cada vez mayor y más compleja de las situaciones económicas, sociales y políticas y un fenómeno geográfico cada vez más diferenciado. (1977:147).

A final de cuentas, el imperialismo, amén de ser el conjunto de fenómenos de explotación y exfoliación económica de un Estado por parte de otro más poderoso así como de las correspondientes manifestaciones de violencia a que da paso, es también el conjunto de mecanismos de control del espacio, del territorio y de las actividades de los otros Estados para imponer las condiciones de las grandes potencias así como la expansión violenta por parte de esos Estados en el ámbito espacial de su influjo o de su poder directo.

Dadas estas circunstancias, al hablar de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, no podemos decir que existe un repliegue del poder del hegemón regional cuando es evidente el afán de este país por seguir controlando la región de acuerdo a ciertos lineamientos de políticas exterior que no por años dejan de ser vigentes. En un documento denominado Defense Planning Guidance (DPG), donde se plasman líneas de acción para la planeación militar, elaborada para el periodo comprendido entre 1994 y 1999, establece que los Estados Unidos deben tomar en cuenta los intereses de las grandes naciones industrializadas a fin de “disuadirlas de retar nuestro liderazgo o de tratar de desmantelar el orden político y económico establecido” añadiendo que “debemos mantener los

hayamos sido estos países quienes colaboraran con el financiamiento de la primera invasión a Irak en 1991, la Tormenta del Desierto, en la búsqueda del control del golfo Pérsico, donde se localizan el 65% de las reservas petroleras mundiales.

⁷⁰Para mayor detalle de la teoría leninista sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, revítese Vladimir I. Lenin, *Imperialismo, fase superior del capitalismo*, Ed. Progreso, Moscú, 1966, 130 pp. Cabe agregar que este rescate de la noción de *Imperialismo* no debe ser entendida como una simple actualización o puesta al día de un concepto ya utilizado desde el siglo XIX para explicar complejos procesos económicos y políticos internacionales ligados a la evolución del capitalismo. No se trata de traer el discurso leninista al siglo XXI pretendiendo que nada ha pasado y que el capitalismo funciona de la misma forma en la que lo hacía hace ya más de 100 años sino de retomar un argumento en torno a la importancia del control espacial.

mecanismos para disuadir a cualquier competidor (que aspire) a jugar un papel regional mayor o uno de orden global” (Saxe, 1994:158). Esta disuasión se inscribe dentro de los tres elementos centrales de la geopolítica estadounidense hacia América Latina:

- a) que ninguna potencia externa la use como base para lanzar ataques al norte
- b) que debe evitarse el surgimiento de cualquier alianza entre las naciones latinoamericanas que pudiera retar el dominio hemisférico de los Estados Unidos
- c) que ninguna nación latina deba llegar a ser lo suficientemente fuerte para lograr ese fin. (Saxe, *Op.Cit.*:159).

☺ Dentro de la Gran Estrategia elaborada en los Estados Unidos para América Latina, donde el libre comercio ocupa un papel central, está incluida si no **la ocupación directa** del territorio latinoamericano por el ejército norteamericano, sí **la intervención directa** a través de las acciones de política económica de los gobiernos nacionales, de las actividades de las ubicuas corporaciones transnacionales y de las operaciones de las policías y ejércitos locales, engarzadas todas en la tarea de la integración comercial. Sin embargo aquéllas no se pueden desarrollar bien sin la construcción de caminos que conecten puntos estratégicos al interior de los países latinoamericanos, entre ellos y entre toda América Latina y la Unión Americana. El razonamiento geopolítico para la construcción de estas vías es diáfano aunque no por ello menos asombroso: construcción de caminos para movilizar bienes estratégicos como gas, petróleo, alimentos, etc., en tiempos de paz mientras se abona además a la integración energética mediante la construcción de ductos y se piensa al mismo tiempo en crear las vías para controlar el acceso a bienes estratégicos y a lugares importantes en caso de guerra. Sólo se logra el control político cuando se tiene control del espacio.

Por ello, junto con las propuestas de liberalizar el comercio van los planes de ayuda para el desarrollo de la infraestructura en una región donde ésta es inexistente o defectuosa o simplemente atiende más a las necesidades nacionales que a los imperativos del capital multinacional. A una integración comercial –que por sus características adquiere un halo de subordinación política– corresponde una integración física que termine por materializar los objetivos geopolíticos y geoeconómicos de la política exterior de los Estados Unidos y por trazar en un mapa –la evidencia por excelencia del control sobre el espacio– los ejes del poder en América Latina. No obstante, no todas las subregiones latinoamericanas poseen el particular interés que hoy se muestra por Sudamérica pues aunque tanto el Plan Puebla Panamá como la construcción de un sistema infraestructural en aquélla sean simultáneas, es Sudamérica la que por motivos específicos se encuentra ahora en el foco de los esfuerzos norteamericanos, que aun ocupados por resolver la crisis en Medio Oriente y estabilizar los mercados petroleros, no cejan en el empeño de lograr la integración física real de los países

sudamericanos, pues a los estrategas norteamericanos les queda claro que el dominio político es dominio espacial.

b) EL PROBLEMA DEL TERRITORIO EN SUDAMÉRICA

Aunque la tierra en Sudamérica es abundante en relación con la población —aproximadamente 350 millones de habitantes en un área de 17 768 100 Km²— ha habido muchas luchas entre los países de la región para ganar los más ricos territorios y los recursos mejor localizados así como para hacerse de los lugares más estratégicos y para expandir sus fronteras, en el entendido de que un país puede ganar muchas ventajas por tener un área más grande, pues si bien es cierto que el tamaño del territorio no *determina* la solidez y el poderío de un Estado, no lo es menos que sí los *condiciona*. El amplio espacio sudamericano ha sido un complejo escenario de luchas y conflictos desde los albores mismos de la construcción de los Estados nacionales. A las luchas por la independencia sucedió la lucha por la construcción de espacios territoriales y por la delimitación de fronteras y demarcación de límites; en fin: reivindicaciones territoriales que enfrentaron a las unidades que, por otra parte, alegaban a favor de una Confederación de naciones. Pero a pesar de que los siglos XIX y XX fueron testigos de una infinidad de conflictos limítrofes en América del sur que parecieron haber conformado el territorio que actualmente conocemos, éstos no han sido resueltos o lo han sido en apariencia.

Hasta donde se tiene noticia, éstos son los conflictos limítrofes más graves que han existido entre los países sudamericanos, algunos de los cuales continúan vigentes o aunque resueltos, tienen hasta el día de hoy repercusiones políticas considerables que obstaculizan la libre circulación de mercancías entre los países afectados.

□ DIFERENDO BOLIVIA-CHILE

A mediados del siglo XIX, el guano constituía uno de los recursos principales para las arcas peruanas, pero el excesivo consumo puso en crisis el recurso y el salitre desalojó el lugar preponderante del guano. La mirada, entonces se volvió hacia la costa boliviana. Esta situación devino conflicto bélico de tres repúblicas del Pacífico: Chile, Bolivia y Perú. El salitral se extendía a lo largo de la costa situada entre los 19 y 27 grados de latitud sur, entre la quebrada de Camarones y de Maricunga. Incluía a la provincia peruana de Tarapacá, la provincia boliviana de Antofagasta y una parte del Norte chileno. Sin embargo, había algo más en este escenario conflictivo: la disputa chileno- boliviana sobre una parte de Antofagasta, conflicto que se zanjó en 1866 cuando las partes acordaron fijar una zona

donde Chile pagaría a Bolivia la mitad de los derechos aduaneros que se originasen Por su parte, en la zona ubicada al sur Bolivia daría a Chile un beneficio similar.

En 1874 se revisó el acuerdo cuando ambos renunciaron a los beneficios. No obstante se mantuvo la unión para el aprovechamiento del guano, los metales y nitratos. Además, Bolivia se comprometió a no aumentar en esa zona las contribuciones pagadas por personas, capitales o industrias chilenas. Pero en 1878 la República de Bolivia impuso una contribución a las Compañía de Salitres de Antofagasta; Chile protestó y luego de serias discusiones Bolivia rescindió el contrato, lo que comenzó el conflicto bélico entre Chile y Bolivia. El 14 de febrero de 1879 Chile invadió Antofagasta, región que contaba con una mayoría de habitantes chilenos: de 6.000 habitantes, 5.000 eran chilenos y 600 bolivianos. Luego de meses de lucha, el 19 de enero de 1880, el triunfo de Chile puso fin a la guerra con Bolivia, pero esta nación quedó sin salida al mar, frontera vital para cualquier Estado del mundo. Cerrado el camino al Pacífico quedaban dos alternativas: el camino fluvial al Plata o al Amazonas, ambas con destino al Chaco.

En 1904, la situación boliviana quedó aparentemente solucionada a raíz de un Tratado de Paz y Amistad firmado entre ambos Estados. Bolivia reconoció el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios del Litoral y Chile se comprometió a construir un ferrocarril entre Arica y La Paz para permitir la salida al mar del estado boliviano, lo cual ha sido medianamente cumplido. El reclamo boliviano de una salida al mar se ha llevado a las diversas Cumbres y reuniones interamericanas e Iberoamericanas lo que coloca al problema en una constante de interés americano, entre los conflictos pendientes de solución.

La permanente reivindicación marítima de Bolivia ha sido motivo de constantes rupturas de relaciones con Chile. La última fue en 1978, tras el fracaso de la negociación iniciada en 1975 entre el dictador chileno general Augusto Pinochet y su par boliviano general Hugo Banzer, para conceder a La Paz un corredor territorial de acceso al Océano Pacífico. La iniciativa contemplaba la habilitación de una franja de 10 kilómetros al norte de Arica, el más septentrional de los puertos chilenos, casi en la frontera con Perú, lo cual hizo que Lima invocara el Tratado de 1929, según el cual Chile no puede ceder sin su acuerdo territorios que le pertenecieron hasta la Guerra del Pacífico. En 2003 el conflicto revivió. Los levantamientos populares en Bolivia que en octubre de ese año derribaron al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el rechazo a exportar gas natural por un puerto del norte de Chile entre los puntos centrales de la demanda, reactivaron el histórico resentimiento hacia este país, por lo que la demanda de una salida soberana hacia el océano Pacífico, se hizo nuevamente presente en la opinión pública nacional e internacional.

La crisis en Bolivia con la sustitución el 17 de octubre del derrocado Sánchez de Lozada por el, hasta ese momento, vicepresidente Mesa, canceló la posibilidad de que exportara su gas natural por un puerto de Chile y del mismo modo hizo que el nuevo gobierno cerrara la negociación para un tratado de libre comercio entre los dos países y al mismo tiempo dio renovados bríos a la proyección internacional del conflicto. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el ex presidente estadounidense James Carter y el canciller de Brasil, Celso Amorim, expresaron respaldo en diversos grados a la aspiración marítima boliviana. Por su parte, el presidente chileno Ricardo Lagos y su canciller Soledad Alvear rechazaron la "regionalización" del conflicto y la revisión del tratado de 1904. Ahora Bolivia orienta sus esfuerzos a obtener un enclave simbólico en el ahora derruido puerto de Cobija (en la actual región chilena de Antofagasta, a 1,560 kilómetros al norte de Santiago) que se halla entre los territorios perdidos por La Paz en la Guerra del Pacífico, pero esta solución resulta impensable para Chile, donde el único atisbo de cesión territorial pasa por antiguos territorios peruanos. Además, casi 80 por ciento de la población, es contraria, según encuestas, a ceder a la exigencia boliviana de un puerto soberano. Cabe agregar que también con Chile Bolivia tiene una disputa en torno a los derechos acuíferos sobre el Río Lauca, localizado en la línea de longitud 69°, en la frontera sureste de Chile con Bolivia.

□ DIFERENDO PERÚ CHILE

El conflicto chileno-peruano fue parte de la Guerra del Pacífico arriba mencionada. Cuando en 1978 Bolivia impone el impuesto de los 10 centavos, Perú se niega a declarar neutralidad frente al conflicto y toma partido por Bolivia. Este acontecimiento —aunado al hecho de que en 1873, por celos y desconfianzas ante Chile, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto mediante el cual Perú pretendía detener el avance chileno en la región— derivó en un rearme chileno. Las partes se acusaban mutuamente de querer monopolizar la explotación de nitratos. Según Chile, estando Perú en una situación hacendaria desesperada por la desvalorización del guano era necesario que el salitre de Tarapacá cubriese el déficit. Pero como el producto del guano entraba íntegramente en la caja de la nación, por ser del Estado, y el salitre, explotación privada, sólo rendía un derecho de exportación, se dio la Ley del Estanco, que limitaba la extracción del fertilizante y autorizaba al fisco para adquirir el artículo a un precio establecido. Los bancos peruanos estaban comprometidos con esta operación y para que no fuera ruinoso se necesitaba que el salitre boliviano quedase dentro de la influencia de Perú. Por su parte, los peruanos tenían en claro las ambiciones de ampliación territorial chilena hacia esa importante zona de depósito de salitre, lo que ameritaba una alianza con Bolivia, aunque a final de

cuentas ésta fue la más perjudicada en la Guerra del Salitre. Pero mientras Bolivia, aliada a Perú en el conflicto bélico, firmaba una tregua en 1880, chilenos y peruanos siguieron combatiendo hasta 1883.

De la Guerra del Pacífico, Chile, victorioso, logró hacerse con la Antofagasta boliviana y Tarapacá, Tacna y Arica de Perú, avanzando inclusive hasta Lima y el Callao. El Tratado de Ancón, concluido el 20 de octubre de 1883 y que sentó las bases de la nueva delimitación entre Perú y Chile, cede Tarapacá a Chile mientras que Tacna y Arica quedaban sujetas por diez años a las autoridades chilenas. Luego de eses plazo se sometería a un plebiscito para decidir su destino y el país favorecido debía abonar unos diez millones de pesos. Un protocolo adicional del 26 de enero de 1894 creó nuevas disputas que concluirían con el Tratado de 1929 por el que Tacna quedaría para Perú y Arica para Chile, pero retuvieron la provincia de Tarapacá, ambas ocupadas por fuerzas de Santiago al final de la Guerra del Pacífico. Este conflicto parece concluido pero en la zona fronteriza los resentimientos perviven.

□ DIFERENDO PERÚ ECUADOR

Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los conflictos limítrofes sudamericanos más conocidos de la historia reciente. Los conflictos fronterizos entre Ecuador y Perú se remontan al siglo XIX, a la época de las independencias de las colonias españolas en América. En 1830, los dos partes firmaron un Tratado que reconocía una frontera común, en el cual se establecía un territorio para el Ecuador de un tamaño doble que el actual. Este tratado, denominado “Protocolo Pedemonte-Mosquera” reivindicaba para Ecuador que su territorio, conforme al principio de *uti possidetis juris* —correspondencia entre las líneas fronterizas del tiempo de la colonia y las de los nuevos estados independientes—, debería extenderse a las fronteras que ostentaba cuando existía la Audiencia de Quito (1563). A causa de la política expansionista de Brasil, Colombia y sobre todo la del Perú, Ecuador ha pasado de tener más de 1 000 000 km² en 1740 a los 272 045 km² actuales. Sin embargo es importante notar que la Audiencia de Quito no tenía verdadera influencia en dichos territorios: el Perú era tres veces más potente y dinámico en materia de política amazónica. Esta indefinición entre líneas fronterizas tuvo una primera crisis de dimensiones considerables en los últimos meses de 1941, cuando Perú ocupó y se apropió del 55% de la frontera común establecida en el Tratado de 1830, principalmente en la zona amazónica. A decir de algunos especialistas en la región, la principal motivación por la cual Perú invadió ese territorio se encontraba en la pugna sostenida por dos compañías petroleras —la Shell y la Standard Oil, la primera holandesa y la segunda norteamericana— quienes utilizaron a los gobiernos de estos países latinoamericanos —especialmente al del Perú, más complaciente con los intereses petroleros ecuatorianos— para dirimir una disputa empresarial y geoestratégica.

Como corolario a este conflicto, el 29 de enero de 1942 fue firmado el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, documento donde se daba legitimidad a las reivindicaciones peruanas y se fijaba una nueva frontera. Para Ecuador fue muy difícil aceptar dicho Tratado, consecutivo a una derrota militar aplastante, ya que le amputó de la mitad de su territorio. Sin embargo, tuvo que ser firmado toda vez que el gobierno norteamericano apoyaba tanto militar como moralmente al gobierno peruano pues sus intereses petrolíferos estaban amenazados por Ecuador. En este crucial año, en pleno desarrollo de la II Guerra Mundial, los problemas fronterizos latinoamericanos debían ser resueltos rápidamente y con las mayores ventajas posibles, pues los Estados Unidos no se podían dar el lujo de tener problemas ‘domésticos’ que interfirieran en el planteamiento de su política hacia la guerra que se estaba llevando a cabo en Europa y que implicaba un abastecimiento amplio y seguro del preciado combustible.

Hasta 1942, Ecuador reclamaba una salida territorial directa al río Amazonas. Ese año, como consecuencia de perder la guerra con Perú, renunció a esa aspiración a cambio del derecho de libre navegación comercial por los canales fluviales que desembocan en el río. Pero una porción de 42 kilómetros de la frontera quedó sin delimitar, boquete aprovechado por Ecuador para mantener vigente el conflicto y por Perú como pretexto para oponerse a la navegación de embarcaciones ecuatorianas por los ríos Napo y Putumayo hasta el Amazonas. En 1945, ante el problema de la demarcación de la zona del Cóndor, el cartógrafo militar brasileño Braz Días de Aguiar realizó un estudio de la frontera en el marco del Protocolo para definir los lugares donde se colocarían los hitos de demarcación. Sin embargo, por las dificultades geográficas, no pudo demarcar una zona de 78 kilómetros de largo en el área de la Cordillera del Cóndor, limitándose a dar indicaciones generales sin conocimiento exacto de la zona. Nuevamente, un problema de desconocimiento del territorio provocaba una indefinición en los límites estatales, y más tarde daría lugar a una nueva confrontación.

Después de haber sido estudiada en un levantamiento aerofotogramétrico, la geografía de la zona no correspondió con lo descrito en el laudo del brasileño, ya que el Protocolo agregado establece como referencia demarcatoria de esta zona el *divortium aquarum* —división de aguas— entre los ríos Zamora y Santiago, pero en 1947 se comprobó que no existe tal referencia pues entre los dos ríos se interpone otro río, el Cenepa, cuya extensión era desconocida hasta entonces, que tiene su origen en la Cordillera del Cóndor y desemboca en el Marañón, afluente del Amazonas, zona que abarca unos 345 kilómetros cuadrados. Este descubrimiento geográfico era un hecho que no mencionaba el Tratado y que Ecuador juzgó decisivo, ya que el río Cenepa sería una apertura hacia el Amazonas, Brasil y Europa, por lo que en 1960 el presidente Velasco Ibarra declara inexecutable el Protocolo de Río. Sin embargo, la posición peruana desde entonces había sido el desconocimiento de este reclamo y argüía

que la línea limítrofe era inamovible y que por tanto no existe un problema fronterizo con Ecuador. De esta forma, Perú hacía valer su autoridad en la subregión, amparado como estaba en el apoyo militar norteamericano.

Así, de las falsas alarmas de guerra en 1978 y 1991, de la guerra en 1981, cuando se reavivó el conflicto que Perú ganó nuevamente y se creó un grupo garante del acuerdo final, conformado por Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, pasando por el descubrimiento de la existencia de minerales geoestratégicos en la zona del Cenepa y una propuesta de mediación del Vaticano, llegamos al último conflicto entre Perú y Ecuador que estalló a principios de 1995, renovando el litigio por la demarcación de la línea fronteriza de los 78 km. en plena selva amazónica.

Sorpresivamente, Ecuador reconoció el Protocolo de Río de Janeiro, al invocar la intermediación de los garantes de éste y por primera vez, un presidente ecuatoriano defendió la tesis fronteriza con el texto del Protocolo en mano. De esta forma, aunque las primeras negociaciones de cese del fuego en Brasilia fracasaron, el conflicto que provocó miles de bajas en tres guerras —en 1941, 1981, y 1995, esta última una de las más violentas de América Latina en los años más recientes a pesar de su corta duración (34 días, del 26 de enero al 28 de febrero de 1995) y de que nunca fue oficialmente declarada— se solucionó con la reunión del 26 de octubre de 1998 en Brasilia, donde los dos países concluyeron con 150 años de disputas territoriales. Finalmente Ecuador daba por definitivos sus límites, después de 168 años de vida republicana. Ecuador parecía haber recobrado la dignidad perdida, de manera tardía pero segura. Este acuerdo fue firmado, por el lado peruano, por el hoy ilustrísimo antiterrorista Alberto Fujimori y por el lado ecuatoriano por el no menos insigne Jamil Mahuad. En este documento Ecuador reconoce la vigencia del Protocolo de Río de Janeiro y Perú, el derecho ecuatoriano a navegar y comerciar en el río Amazonas, además de que cede un kilómetro cuadrado en la región conocida como Tiwintza. De esta forma, se suscribió el Acta para poner en marcha un amplio tratado de integración fronteriza, donde se establecía que de acuerdo al fallo de los garantes del Protocolo de Río sobre la "Oreja del Cenepa" se crearan dos parques nacionales, ecológicos y desmilitarizados, en ambos lados de la cordillera del Cóndor.

□ DISPUTA VENEZUELA COLOMBIA

Colombia y Venezuela tienen una disputa marítima en torno al Golfo de Venezuela y la Península de la Guajira. Los problemas se ubican al norte, en el límite de la cuenca caribeña, donde Venezuela continúa oponiéndose a Colombia por la delimitación de su frontera en la zona petrolífera de la Guajira en el Golfo de Maracaibo. Este conflicto perpetuo de límites de la zona territorial de este Golfo entre Caracas y Bogotá los ha puesto varias veces al borde de la guerra, pues desde hace ya

varios años se sabe que en este golfo hay ricos depósitos submarinos de petróleo. Venezuela se muestra bastante sensible en lo concerniente a cualquier reclamación territorial vinculada a esta zona, lo cual se debe a la convicción que existe entre muchos venezolanos de que en el pasado han sufrido pérdidas territoriales injustas que han beneficiado a Colombia y a Guyana.

En la mitad de los setenta, hubo una serie de conversaciones entre los negociadores de ambos países que pareció indicar que era inminente una resolución final a la disputa sobre el Golfo; sin embargo, nada ocurrió. A comienzos de los ochenta estuvo a punto de firmarse la llamada Hipótesis de Caraballeda que también pareció ser la definitiva solución a la controversia. Las reuniones entre negociadores venezolanos y colombianos condujeron a un proyecto de acuerdo que trataba de resolver las disputas por las áreas marinas y submarinas en el golfo. Este proyecto fue dado a conocer a los medios de comunicación y puede decirse que fue, de manera general, bien recibido en Colombia. No obstante, un grupo de nacionalistas venezolanos argumentó que con ese acuerdo se estaban haciendo muchas concesiones territoriales a Colombia y hubo una fuerte movilización negativa de la opinión pública, la cual se sensibilizó enormemente al respecto y la Hipótesis de Caraballeda no logró ir más allá de un proyecto.

Poco tiempo después la Corte Suprema de Justicia de Venezuela admitió una solicitud de nulidad del Tratado Santos-López Contreras de 1941, lo cual fue visto con mucha preocupación por los colombianos, quienes interpretaron que esta acción significaba que los venezolanos se estaban preparando para tomar una posición más dura en las negociaciones. Además la preocupación colombiana se incrementó con el conocimiento de que Venezuela había adquirido nuevos aviones de combate y con el surgimiento en el Cono Sur del conflicto por las Islas Malvinas, ya que el apoyo brindado por Venezuela a Argentina condujo a un grupo de colombianos a especular que Venezuela podía estar pensando en llevar a cabo una aventura militar similar. Todo esto llevó a que los colombianos mostraran signos de impaciencia con relación a la disputa y amenazaran con recurrir a tribunales internacionales para buscar una solución definitiva, lo cual no ocurrió, pero es una situación que siempre ha preocupado a los venezolanos dadas sus experiencias desfavorables ante instancias jurídicas internacionales.

La llegada de la ayuda antinarcóticos que el gobierno de los Estados Unidos ha venido incrementando desde 1998 hasta llegar hasta los 1 300 mdd con el Plan Colombia, con el lógico fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas ya que el personal ha sido entrenado para utilizar las armas y aparatos de guerra más sofisticados, ha alterado los ánimos para la resolución del conflicto pues este reforzamiento militar teóricamente pone en ventaja a Colombia sobre su vecino. Ya en marzo de 2001, hubo un disgusto entre Colombia y Venezuela por las maniobras militares Maremoto 2001

que realizaron en la segunda semana de marzo las fuerzas armadas de Venezuela en Castilletes, en la alta Guajira, muy cerca de la frontera con Colombia. Diversos analistas entre los que se encuentra Alfredo Jalife-Rhame afirman que sería muy factible que Colombia activara la guerra para quitarle el petróleo a Venezuela, tal como sucedió entre Irán e Irak, para quedarse de una vez con el petróleo del Golfo de Venezuela y del lago de Maracaibo. La hipótesis de una posible guerra entre estos dos países no parece estar muy lejana de la realidad: Venezuela es el mayor proveedor latinoamericano de petróleo de los Estados Unidos y ante un escenario de crisis de suministro de petróleo, sería más fácil para los Estados Unidos asegurar el control sobre los hidrocarburos de la región y tener a su entera disposición un ejército colombiano muy bien armado y entrenado en el caso de una confrontación por el petróleo del Golfo de Venezuela.

□ DISPUTA VENEZUELA GUYANA

Entre estos países existe un diferendo por un extenso territorio de nombre Esequibo, de 159.000 kilómetros cuadrados (dos terceras partes de la Republica Cooperativa de Guyana), que genera una costa de dimensiones importantes sobre el Océano Atlántico, lo que da lugar a su vez a una extensa plataforma continental que implica el derecho a la reivindicación de la soberanía terrestre y marítima sobre este territorio así como derechos sobre su uso y usufructo. Está comprobado que en esta porción costera se puede hallar petróleo y gas natural. Según Venezuela, tiene derecho como nación soberana, a una salida sin obstáculos del río Orinoco al Atlántico. Como se sabe, la región del Orinoco y su Delta es considerada como el próximo polo de desarrollo de ese país y de acuerdo con los venezolanos, la cesión territorial de Guyana para hacer ese corredor marítimo es mínima. Sin embargo, el problema no radica tanto en la construcción de un corredor fluvial como en la propiedad de Esequibo.

Al decretar Parque Nacional a Canaima —uno de los más extensos del mundo— lo que en la practica ha hecho el gobierno Venezolano es garantizar la propiedad a futuro de la cuenca del río Caroni, el más grande de los afluentes del Orinoco, lo que garantiza por muchos años la viabilidad de la represa Raul Leoni (Guri) y de su potencial hidroeléctrico, incluso con otras futuras represas y adicional generación eléctrica. Sin embargo, ese acuerdo para la construcción de un parque binacional se vio retrasado por lo que Venezuela considera una violación al Tratado de Ginebra de 1966, suscrito bajo la égida de la ONU, y una violación a su soberanía marítima, ya que entre julio y agosto de 2000, Guyana otorgó concesiones a empresas petroleras y madereras en la rica zona en litigio Además, en esta zona Guyana ha permitido la instalación de una base aeroespacial de misiles de la empresa estadounidense Beal.

La solución propuesta por Venezuela para salvar el diferendo —y de paso su soberanía sobre tan rica región—es, tal como la que se propuso para Perú y Ecuador, la construcción de un gigantesco Parque Nacional en ese territorio en reclamación, que vaya desde el Atlántico hasta el Roraima. Es decir, que sea una extensa zona que abarque toda la actual frontera con Guyana y buena parte de la hoya del río Cuyuni, comprendiendo cerca del 25% de la totalidad del área en reclamación. Ese Parque Nacional en territorio actualmente reivindicado por Venezuela tendría la particularidad de estar bajo la supervisión internacional y constituiría un territorio que no podría utilizarse para ningún otro fin que no sea pacífico. Si Guyana firmara un tratado definiendo ese destino a perpetuidad para esa parte de su territorio, Venezuela se comprometería a suspender, que no a terminar, su reclamación territorial. Hasta ahora Guyana se ha resistido a firmar este acuerdo, apoyado en el poder de las corporaciones trasnacionales de la región.



Además de los diferendos territoriales explicados a detalle en tanto que son los que mayormente obstaculizan la integración física, existen otros de menor envergadura aunque no de fácil solución. Entre Argentina y Uruguay existe una disputa por una pequeña porción de una frontera mutua; entre Argentina y Chile existe un problema por un reducido segmento territorial en la frontera mutua que se encuentra indefinida; Brasil y Paraguay tienen una disputa por una pequeña sección de la frontera con Paraguay, al oeste de Salto das Sete Quedas (Cataratas de Guaira) en el Río Paraná; Brasil tiene un diferendo con las Guyanas y Suriname, por cuestiones de frontera; finalmente, aunque fue sangrientamente resuelta, la histórica disputa entre Bolivia y Paraguay en la Guerra del Chaco⁷¹,

⁷¹A mediados de 1932, comenzó uno de los mayores conflictos de nuestro continente, protagonizado por sus dos países más pobres, por supuestas riquezas petroleras. Al respecto, Eduardo Galeano escribió: “Están en guerra Bolivia y el Paraguay. Los dos pueblos más pobres de América del Sur, los que no tienen mar, los más vencidos y despojados, se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa. Escondidas entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco. Metidos en la guerra, paraguayos y bolivianos están obligados a odiarse en nombre de una tierra que no aman, que nadie ama: el Chaco es un desierto gris, habitado por espinas y serpientes, sin un pájaro cantor ni una huella de gente. Todo tiene sed en este mundo de espanto. Las mariposas se apiñan, desesperadas, sobre las pocas gotas de agua. Los bolivianos vienen de la heladera al horno: han sido arrancados de las cumbres de los Andes y arrojados a estos calcinados matorrales. Aquí mueren de bala, pero más mueren de sed. Nubes de moscas y mosquitos persiguen a los soldados, que agachan la cabeza y trotando embisten a través de la maraña, a marchas forzadas, contra las líneas enemigas. De un lado y del otro, el pueblo descalzo es la carne de cañón que paga los errores de los oficiales. Los esclavos del patrón feudal y del cura rural mueren de uniforme, al servicio de la imperial angurria. Habla uno de los soldados bolivianos que marcha hacia la muerte. No dice nada sobre la gloria, nada sobre la patria. Dice, resollando: —*Maldita sea la hora en que nací hombre*”. (1986:113-114)

A punto de librarse la mayor batalla de la guerra, el 14 de junio de 1935 se logró el cese del fuego. A los tres años de guerra siguieron otros tres años de negociaciones diplomáticas, que concluyeron con la firma de un Tratado de Paz en Buenos Aires el 21 de julio de 1938. En virtud de éste, el Paraguay obtuvo la mayoría del Chaco Boreal, aunque Bolivia retuvo los campos petrolíferos ya en explotación; la existencia de petróleo en otros sectores de esa zona probó ser mera especulación. Para mayores referencias sobre esta guerra, revisar Augusto Céspedes, *Crónicas heroicas de una guerra estúpida*, Ed. Juventud, La Paz, 1975, 164 pp., y *Sangre de mestizos: relatos de la Guerra del Chaco*, Ed. Ministerio de Educación y

continúa vigente en la presión paraguaya al interior del MERCOSUR para evitar la entrada de Bolivia al acuerdo.

Los enfrentamientos militares entre los países sudamericanos por ganar o defender su territorio que han prevalecido hasta este siglo pueden conducir a afirmar que uno de los mayores obstáculos para la integración de los países de esta región era la indefinición de la cuestión limítrofe, ya que impedía la posibilidad de crear mecanismos regulatorios y buenos caminos fronterizos que facilitaran y agilizaran el paso de las mercancías entre los países. Incluso se llegó a afirmar que el éxito del MERCOSUR estaba basado en la solución de los problemas territoriales que existían entre sus miembros. Sin embargo, la solución de la histórica problemática fronteriza entre los estados sudamericanos va más allá la simple definición de líneas que marquen el fin y el comienzo de un país.

Hay varios aspectos que dificultan el asunto pues en la necesidad de construir una Sudamérica integrada territorialmente van implícitos elementos básicos que pasan a traer la frágil estructura estatal que varios de los países de la región muestran en la actualidad, quienes no pueden pensar en una integración bajo una legislación supranacional cuando para la conformación de un Estado más o menos moderno, se necesita, además de la unificación de la población en torno a valores comunes llamados “nacionales”, un control efectivo del territorio nacional. Así, sólo en la medida en que el grupo hegemónico de una entidad política logre aglutinar a sus pobladores en torno a valores comunes puede tener fuerza suficiente para defenderse de las agresiones externas y para consolidar su poder al interior. Y de un poder hegemónico con presencia real que controle el territorio nacional adolecen varios de estos países.

Además, en pleno siglo XXI varias de las fronteras están poco exploradas; regiones y poblaciones de algunas de ellas ni siquiera están registradas en los mapas oficiales, como ocurre con varias regiones de la Amazonia peruana, ecuatoriana, colombiana, boliviana y venezolana.⁷² Estas fallas en el conocimiento del terreno han dificultado a los países sudamericanos, sobre todo a los andinos, extender el dominio estatal en todas las regiones, que ha devenido ausencia de proyectos de mejoramiento económico y de construcción de infraestructura para el intercambio de mercancías y personas hacia estas regiones, que son generalmente pobres. Pero, lo que es más grave, es que esta falta del control espacial por parte de los Estados sudamericanos, sobre todo de los que se cuentan entre el arco andino y que comparten la cuenca amazónica —Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y

Bellas Artes, 1962, 239 pp.; y Augusto Roa Bastos, Los conjurados del Quilombo de Gran Chaco, Ed. Alfaguara, Buenos Aires, 2001, 249 pp.

⁷² El conflicto peruano-ecuatoriano de 1995, por ejemplo, dejó claro el desconocimiento que los gobiernos tenían de la zona en disputa, pues ninguno de ellos pudo comprobar con cartas geográficas fidedignas la descripción del terreno.

Brasil⁷³— los hace susceptibles y vulnerables ante las ofertas del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos como la Corporación Andina de Fomento, para la construcción de un sistema infraestructural dentro de sus territorios.

Como se pudo observar a partir de la explicación de los principales conflictos fronterizos sudamericanos, los Estados con problemas de delimitación territorial asociada al despoblamiento de grandes zonas y la consiguiente ausencia de control y dominio sobre ese espacio, se ubican dentro de lo que los criterios geográficos convencionales denominan “Arco Andino”. Si se observan cuidadosamente en un mapa de Sudamérica las zonas con menor desarrollo infraestructural podemos concluir que son estos países andinos los que han desarrollado en menor grado la construcción de caminos que permita la libre movilidad a lo largo y ancho de sus territorios y la conexión con los demás países sudamericanos. Esta realidad de ausencia de vías que unan los principales puntos estratégicos de toda América del Sur se ha convertido en un problema para los actuales planes de integración económica en América Latina, impulsados no por los ideales bolivarianos sino por los criterios del capital. De esta forma, se vuelve una verdad inocultable el hecho de saber que para el funcionamiento de acuerdos comerciales como el ALCA —dirigidos a la satisfacción de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de la política exterior norteamericana en un momento de crisis de sucesión hegemónica y vulnerabilidad estratégica— se necesitan carreteras, ferrocarriles, hidrovías, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, etc. a través de los cuales puedan hacer circular los recursos extraídos y las mercancías. Así, en el marco preparatorio para el funcionamiento óptimo de dicho acuerdo en América del sur, se planea la construcción de una red de vías terrestres, fluviales y aéreas que conformen la IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional en Sur América), la cual concretaría la integración física sudamericana, ideal para el control del espacio de esta subregión.

⁷³ El caso de Brasil es particular, porque a diferencia de los otros, no forma parte del arco andino ni se concibe como un país débil dentro de la geopolítica regional; sin embargo, comparte una gran porción de la cuenca amazónica con los otros, por lo que no se puede quedar fuera de las consideraciones de este trabajo.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL SURAMERICANA (IIRSA)

A. LA HISTORIA DE LA IIRSA

Además de conocer el contexto histórico-político en el cual se inserta la necesidad norteamericana de construir una infraestructura regional en Sudamérica, contexto que se intentó explicar en el capítulo anterior, es necesario también intentar aclarar los orígenes de la IIRSA para mejor entender las implicaciones geopolíticas y geoeconómicas de su construcción. La explicación de la genealogía de la IIRSA, sin embargo, tiene un sentido: no tanto buscar sus antecedentes para dar con todos los proyectos que le precedieron sino más bien entender el papel de las instituciones que la propusieron así como esclarecer las intenciones que subyacen bajo los planes para su implantación. Para eso es necesario llevar a cabo dos tareas: primero, escudriñar la propuesta misma y las condiciones bajo las que fue planteada, aclarando al mismo tiempo el papel de los organismos internacionales que la promueven; segundo, observar y analizar las transformaciones y adecuaciones de diversos marcos jurídicos que regían, entre otras cosas, el comercio intrarregional, y que son la institucionalización de las nuevas reglas de la convivencia sudamericana.

a) RASTREANDO LOS ORÍGENES DE LA IIRSA

A pesar de que la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) fue presentada hace más de tres años, lo cierto es que hay un desconocimiento enorme del proyecto por parte tanto de los habitantes de la subregión sudamericana como por los latinoamericanos en general. A diferencia del Plan Puebla-Panamá, que fue expuesto públicamente y que ha sido difundido tanto por los medios de comunicación como por las oficinas de Comunicación Social de los gobiernos de los países involucrados, lo que ha permitido la pronunciación de los gobiernos mexicano y centroamericanos a favor y una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil en contra, los planes de la IIRSA, al ser ignorados por la mayoría de la población de América del Sur, no permiten un posicionamiento claro de los gobiernos y menos aún de las organizaciones políticas. Lo anterior no significa que sus líneas de acción, proyectos y planes de financiamiento no se encuentren en marcha

desde hace varios años, asociándose a proyectos de más larga data. Así en medio de todo el sigilo que caracteriza el proceso del establecimiento del ALCA, la banca regional junto con los gobiernos nacionales y los organismos internacionales adelantan obras en los diferentes países, sin que el ciudadano común se pueda percatar de los alcances de las mismas, que son percibidas como obras aisladas, locales o nacionales, o hasta parte de los planes regionales, cuando en realidad tienen un alcance continental y se insertan en la crisis de sucesión hegemónica.

Aunque los intentos por construir una infraestructura regional para unir los países sudamericanos no empieza propiamente con la IIRSA, lo cierto es que éste es el primer proyecto de envergadura regional en el que todos los gobiernos de los países que la conforman concuerdan con los objetivos planteados. Esta feliz coyuntura, sin embargo, no fue lograda por ningún país en particular ni construida a partir de una propuesta manada de un proyecto político de inspiración bolivariana o fraternidad sudamericana sino por organismos internacionales, los cuales si bien son regionales no parecen responder tanto a las necesidades más vehementes de los habitantes de la subregión como a las de la política exterior norteamericana, que busca mejor ubicarse en esta parte del continente y mantener y fortalecer su hegemonía sobre ella.

El plan para la construcción de la IIRSA fue redactado desde las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)⁷⁴, apoyado por la Corporación Andina de Fomento (CAF)⁷⁵ y el

⁷⁴ Oficialmente, el BID fue establecido en 1959 con el propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y en América Latina y el Caribe. No obstante, podemos cuestionarnos sobre los reales intereses que mueven sus acciones. Efectivamente, si el BID cuenta con 46 países miembros, no todos son del continente americano y el poder de voto de cada miembro se define por la suscripción de capital, como en las demás instituciones mal llamadas “multilaterales”, como si todos los miembros tuvieran el mismo peso político. Así, la división aproximada de suscripciones es la siguiente: América Latina y el Caribe: 50%, Estados Unidos: 30%; Japón: 5%; Canadá: 4%; otros países: 11%. Por otra parte, tal como lo señala Guilherme Carvalho, Brasil, Argentina y México disponen del mismo número de acciones que los Estados Unidos, por lo cual son sujetos activos en la orientación neoliberal del banco. (FOBOMADE, 2003a) A pesar de esta pequeña aclaración, se hablará con mayor amplitud de la acción de este banco y de sus nexos con el FMI y el BM en este mismo subcapítulo.

⁷⁵ La Corporación Andina de Fomento (CAF) se describe a sí misma como “una institución financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los gobiernos de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y privadas. En sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales e incluye en sus operaciones criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad. La CAF ha mantenido una presencia permanente en sus países accionistas, lo que le ha permitido consolidar su liderazgo regional en cuanto a la efectiva movilización de recursos. En la actualidad, es la principal fuente de financiamiento multilateral de los países de la Comunidad Andina, aportándoles entre 1997 y 2002, 55% de los recursos que les fueron otorgados por los *organismos multilaterales*.” (www.caf.org) En resumen, según su propia descripción, es una institución financiera reconocida internacionalmente por su trayectoria, eficiencia, solidez y profesionalismo que tiene como misión promover mediante una eficiente movilización de recursos financieros el desarrollo sostenible, equilibrado y armónico, la integración y la competitividad de la región latinoamericana.

Sus accionistas principales son los países que integran la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y, además, cuenta entre sus socios a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad & Tobago, Uruguay y 16 bancos privados de la región, cuyos capitales, cabe agregar, no son latinoamericanos. La mayor parte de los recursos captados actualmente por la CAF provienen de los mercados internacionales de capital. Su estrategia de financiamiento persigue captar recursos financieros eficiente y competitivamente basados en la diversificación

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA⁷⁶). El documento original fue presentado a los presidentes de Sudamérica durante la reunión de la Cumbre de Presidentes de América del Sur realizada en la ciudad de Brasilia, entre los días 30 de agosto y el 1º de septiembre de 2000 y convocada por invitación de Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil. Aquí, los presidentes suramericanos recibieron y adoptaron como anexo al comunicado presidencial un documento llamado “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Suramericana”. En esta reunión se encontraban los mandatarios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Guayana y Surinam, quienes aceptaron este plan, afirmando posteriormente que había sido elaborado por ellos. En esta Primera Reunión de Presidentes de América del Sur el objetivo primordial era estimular la organización y desarrollo del espacio sudamericano a partir de la contigüidad geográfica, la identidad cultural y los valores compartidos. Oficialmente, se considera que la iniciativa del IIRSA ‘surgió’ de este encuentro. No obstante, cabe subrayar que no fue una iniciativa de un gobierno de la región sino el BID junto con la CAF quienes presentaron una primera versión del Plan de Acción para la ampliación y modernización de la infraestructura en los próximos 10 años y que la Cumbre lo aprobó encargando una segunda versión a los miembros del Comité de Coordinación Técnica (CCT), formada por el BID, la CAF y el FONPLATA.

de fuentes y plazos, en la mitigación de los riesgos asociados a tasas de interés y monedas, así como en el mantenimiento de una adecuada relación entre los plazos de los activos y pasivos.

Según la página web de CAF, la institución alcanzó en el año 2003 la cifra récord de aprobaciones por US\$ 3.300 millones, la más alta de su historia, ratificando su condición de principal fuente de financiamiento de los países andinos. En el año 2003, la CAF logró captar un monto récord de US\$ 907 millones, de los cuales US\$ 1.500 millones corresponden a la colocación bonos y cerca de US\$ 600 millones, a papeles comerciales en los principales mercados mundiales. La CAF incrementó su capital autorizado a US\$ 209 millones. Cabe decir que la mayor parte de los préstamos autorizados están relacionados con la construcción de la IIRSA.

Como la propia organización lo menciona, entre sus “Productos y Servicios” encontramos préstamos a corto, mediano y largo plazo; estructuración y financiamiento de proyectos sin recurso o con garantías limitadas; cofinanciamiento con instituciones multilaterales y la banca internacional, incluyendo préstamos A/B; servicios de banca de inversión y asesoría financiera; garantías y avales; participaciones accionarias; servicios de tesorería; cooperación técnica y programas estratégicos, que son de alcance regional y abarcan desde el fortalecimiento de la integración, la dotación de infraestructura física y el incremento de la competitividad, hasta la formación de sociedades más equitativas, conscientes, humanas y participativas. (sic) Entre estos programas encontramos el Programa de Biodiversidad, el Programa de Desarrollo Cultural, el Programa de Fortalecimiento de la Gobernabilidad, la IIRSA, el Programa andino de competitividad, el Programa Latinoamericano del Carbono y el Proyecto Cóndor para la prevención y mitigación de riesgos.

Como se puede observar, la CAF es otro de los instrumentos del capital estadounidense para aprobar proyectos favorables a sus lineamientos de política exterior, pues ese mencionado “mercado de capitales internacional” no es uno en el que participan los capitales de todos los países sino el de las grandes potencias como Estados Unidos, interesados en fortalecer y mantener su hegemonía en América Latina a través del financiamiento de obras de carácter estratégico.

⁷⁶En 1968 se suscribió el Tratado de la Cuenca del Plata con el objeto de mancomunar esfuerzos para promover el desarrollo económico y la integración física de la Cuenca. El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) fue creado para actuar como órgano *financiero* del Tratado. Sus principales funciones son: conceder préstamos, otorgar fianzas y avales; gestionar recursos por encargo de sus miembros; apoyar financieramente la realización de estudios de preinversión y asistencia técnica identificando oportunidades de interés en la región. Cabe decir que el Fondo es un ente autónomo que no está obligado a obedecer las disposiciones de los dictámenes del Comité Intergubernamental, formado por los representantes gubernamentales de los países signantes.

El cuatro de diciembre, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, durante la Reunión de Ministros de Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Planificación y Desarrollo Económico, los miembros del CCT presentaron la segunda versión del Plan de Acción para el IIRSA que fue aprobada e identifica los 12 Ejes de Integración y Desarrollo en un documento llamado “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”. Se afirmó que el planteamiento de los ejes buscaba la densificación de la actividad económica, el desarrollo regional, la integración física y económica de los países suramericanos.⁷⁷ Este documento estaba signado por el tríptico BID-CAF-FONPLATA.

En la introducción de este plan afirman que el éxito económico de los pueblos —nótese que no hablan ya de desarrollo— se basa “cada vez *menos en la dependencia de la explotación de recursos naturales*” (IIRSA, 2001. El subrayado es mío) y que el progreso de la infraestructura regional adquiere especial relevancia en América del Sur porque se trata no sólo de mejorar la infraestructura en sí —vial, portuaria, aeroportuaria, fluvial, etc. — sino de “concebir un proceso logístico integral que incluya el mejoramiento de los sistemas y regulaciones aduanales, de telecomunicaciones, la tecnología de la información, los mercados de servicios, de logística (fletes, seguros, almacenamiento y procesamiento de permisos, entre otros), y el desarrollo sostenible a nivel local” (*Ibidem*).

Según el plan de acción del BID y CAF, reivindicado por los Presidentes de los países de la región, la premisa principal de la IIRSA es que la integración económica no puede tener lugar sin la integración física pues ésta “mediante obras de infraestructura para unir a países vecinos, es una pieza clave para construir la integración de América Latina” (BID, 2000). Para los funcionarios de este banco, la IIRSA ayudará a la articulación del territorio para facilitar el acceso a mercados en dos niveles: por un lado, acceso de materias primas e insumos a centros de producción dentro y fuera del subcontinente —incluyendo recursos naturales, energía, productos intermedios, información y servicios y *fuerza laboral*, que se convierte para este banco en otro insumo más para la producción de mercancías— y por otra parte, acceso de la producción a centros de consumos nacionales e internacionales.

Sin embargo, en la preparación de IIRSA se puede distinguir la acción de distintos organismos regionales, lo que da una idea de la magnitud de la iniciativa para la construcción de una infraestructura regional. Por un lado, encontramos que los gobiernos regionales han creado la Red de Transportes y el Inventario de Proyectos Prioritarios para la Integración de América del Sur, apoyados por la

⁷⁷ Durante la reunión se presentaron también los siguientes documentos: a) BID: “Un nuevo impulso a la integración de la infraestructura regional en América del Sur”; b) CAF: “Vías para la integración”; c) ALADI: “Diagnóstico del Transporte Internacional y su infraestructura en América del Sur” (DITIAS); d) CAF/CIER: “Energía sin fronteras”. En el sector de energía, OLADE presentó una propuesta para la integración de la infraestructura energética de América del Sur. (FOBOMADE, 2003a)

Conferencia de Ministros de Transportes, Comunicaciones y Obras públicas de América del Sur pero ideados en las oficinas de la CAF. Encontramos también las actividades del Grupo de Trabajo Multilateral sobre Corredores Terrestres Bioceánicos, conformado por especialistas de los países involucrados más consultores internacionales de CAF así como los grupos que formulan las adecuaciones al Tratado de la Cuenca del Plata y el Tratado de Cooperación Amazónica para incluir las nuevas disposiciones de IIRSA. Tenemos también que se ha retomado dentro de los diversos grupos de trabajo el documento denominado “Diagnóstico del Transporte Internacional y su Infraestructura en América del Sur” (DITIAS), elaborado en 1999 por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), la CAF, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Comité intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL). El principal objetivo del DITIAS consistió en poner a disposición de los países sudamericanos un instrumento destinado a coordinar y adoptar políticas de transporte con una óptica regional, eliminar o atenuar las trabas administrativas que afectan la fluidez del transporte, y proporcionar un marco apropiado para la coexistencia de los modos de transporte en sistemas intermodales. (IIRSA, 2003).

Dentro de la organización de las actividades para la implantación de IIRSA encontramos también las labores de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), el Comité de Integración Energética Regional (CIER), y las secretarías e instancias gubernamentales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del MERCOSUR e indudablemente las actividades del BID, CAF y FONPLATA, que de manera general, participan en las principales obras de integración física, y que son las que han venido invirtiendo millones de dólares en infraestructura, sectores de energía y transporte en los años más recientes en los países de la región. Además, se encuentran activas en las reformas económicas de la región así como en la promoción de la participación del sector privado.

La IIRSA se presenta como una iniciativa multinacional, multisectorial y multidisciplinaria que contempla mecanismos de coordinación entre los gobiernos, las instituciones financieras multilaterales y el **sector privado**. Así, la IIRSA se convierte en la primera iniciativa sudamericana **multinacional**, que a diferencia de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) o del MERCOSUR abarca a la totalidad de los países del subcontinente aunque en realidad esté siendo impulsada desde fuera; **multisectorial**, pues se plantea para dar soporte a cualquier clase de actividad económica, desde la producción agrícola y ganadera, pasando por la manufactura hasta el sector servicios, privilegiando el turismo, así como la producción de energía; y **multidisciplinaria**, característica que presenta una doble connotación: por un lado, es multidisciplinaria porque, en apariencia, su patrocinador principal dejaría de ser el Estado para dar cabida al financiamiento privado –cuyas pérdidas, si las hay, finalmente las asume el primero– y a

las iniciativas que rebasan el ámbito de lo nacional. Por otro lado, es multidisciplinaria porque no se limita a planear la construcción de una infraestructura en la región para agilizar los flujos comerciales sino que se plantea la integración de la totalidad de las actividades económicas —no sólo las comerciales— y la de los sectores más estratégicos como el energético y el de las telecomunicaciones. Además, la IIRSA se centra en el trabajo de realización de “procesos sectoriales” como la construcción de un transporte multimodal⁷⁸ que logre articular el transporte de una mercancía para que ésta pueda pasar de un tren, a un avión, a un camión o a un barco para llegar al lugar de destino; el desarrollo de la infraestructura aérea con el fin de mejorar los aeropuertos para el mejor traspaso de las mercancías; el mejoramiento de la infraestructura marítima —distinta de la fluvial, que es más bien intrarregional—, por lo que la totalidad de los puertos estratégicos de Sudamérica serán examinados y sus instalaciones mejoradas.

A decir del mencionado documento, el principal objetivo radica en la integración física de los países de Sudamérica, tomando en consideración su importancia “en términos de competitividad y sostenibilidad” (www.iadb.org, 2003), es decir, en términos de la geoestrategia del capital. De esa manera, no solamente se trata de mejorar la infraestructura en sí —vial, portuaria, aeroportuaria, fluvial, etc.— sino de concebir un proceso logístico integral que incluya la ruptura de las barreras aduaneras, vital para la aceleración de la movilización de las mercancías, la integración de las telecomunicaciones, la uniformidad de los mercados de servicios de logística (fletes, seguros, almacenamiento y procesamiento de permisos) y hasta el políticamente correcto “desarrollo sostenible” local.

Si bien es cierto que los esfuerzos de integración en América del Sur han existido desde la década de los sesenta en distintas iniciativas binacionales y multinacionales, acuerdos y tratados que pretendían unificar a los países⁷⁹, no lo es menos que la diferencia de esos acuerdos con propuestas

⁷⁸ Con este adjetivo se hace alusión a los complejos sistemas ferroviarios, carreteros y fluviales donde la carga de las mercancías se efectúan mediante contenedores para mayor seguridad y rapidez.

⁷⁹ Entre estos acuerdos no podemos dejar de mencionar la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), surgida en febrero de 1960 con el objetivo central de crear una zona de libre comercio entre sus miembros, que eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La crisis de este acuerdo, fincada sobre todo en la dificultad de los países involucrados para terminar con las barreras arancelarias derivadas del proteccionismo a las industrias locales, provocó una fragmentación en la asociación y a partir de ahí hizo su aparición el Pacto Andino, integrado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. El Pacto Andino forma parte de un esquema de regionalización muy ambicioso que es el Sistema Andino de Integración (SAI) integrado por el Consejo Consultivo Empresarial Andino, el Consejo Consultivo Laboral Andino, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas y la Universidad Andina Simón Bolívar. Esta escisión en ALALC propició su desaparición en 1980, pero ese mismo año los 11 miembros crearon la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Este nuevo ente, a diferencia de la ALALC, da cabida en su estructura jurídica a los acuerdos regionales, plurilaterales y bilaterales de integración que han ido surgiendo en el continente como la Comunidad Andina o el MERCOSUR. Este último, constituido en 1991, ha sido hasta ahora el mejor intento para la integración de los países sudamericanos pues si bien no los engloba a todos, si tiene vocación de integrarlos pero bajo la égida de las potencias regionales y no de los

como la de IIRSA radica en que esta última pretende basarse en la instauración de un “nuevo regionalismo⁸⁰”, óptica desarrollada y promovida abiertamente por el BID y la CAF, sustentada en las siguientes características: apertura a los mercados mundiales, asumiendo que todos los mercados nacionales puedan ofrecer las mismas garantías a los inversores, como si las relaciones internacionales ocurrieran entre Estados con simetría de poder y objetivos comunes; promoción de la iniciativa privada, en tanto que se le considera como el motor de las “nuevas” relaciones económicas internacionales, como si antes de la década de los noventa la acción del capital privado no hubiera existido en los países de la región; repliegue del Estado de la actividad económica directa a favor de su rol en materia de fiscalización, promoción y protección social, en el sentido de considerar al Estado como el ente garante y árbitro de la economía, como si no fueran éstos y las clases políticas que los conforman los que organizan la política comercial externa de acuerdo a intereses muy definidos que casi nunca coinciden con los intereses de la nación.

El BID y la CAF a través del Plan para la integración física de Sudamérica que goza del consentimiento entusiasta de los gobiernos locales, pretenden impulsar la explotación del potencial total de los mercados subregionales y continentales mediante distintas estrategias que terminan confluyendo en un mismo punto: la posibilidad de tener un mayor control del espacio sudamericano, de sus recursos naturales estratégicos y de sus puntos geoestratégicos. Entre esos objetivos marcados en el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur encontramos no sólo el desarrollo de la infraestructura regional. También se contempla la eliminación de las barreras no arancelarias⁸¹ dentro de los Estados y entre los convenios regionales; la búsqueda de compatibilidad de

Estados Unidos. Para una mejor y mayor explicación de los distintos acuerdos de integración surgidos tanto en América Latina como en América del Sur, consúltese el libro que la autora de este trabajo considera como el más logrado y mejor escrito en los últimos años sobre la regionalización e integración de América Latina: María Cristina Rosas, La economía internacional en el siglo XXI. OMC, Estados Unidos y América Latina, Ed. FCPyS/UNAM, México, 2001, 446 pp.

⁸⁰ En torno al concepto “nuevo regionalismo” se han manejado muchas definiciones. Entre las más acabadas encontramos las de Björn Hettne y la de Sergio Abreu Bonilla. El primero afirma que el nuevo regionalismo se caracteriza por conformarse en un orden mundial multipolar, por estar organizado desde el interior y desde abajo, no por las grandes potencias, y por ser un proceso con objetivos más amplios y multidimensionales (Hettne e Inotai, 1994:1 y 2). El segundo advierte que el comercio en la actualidad es más libre, más justo y menos asimétrico (Rosas, 2001:62). Estas definiciones, ampliamente cuestionables, no son a las que hace alusión este trabajo cuando habla de “nuevo regionalismo” sino, en esencia, a las formas que ha asumido la competencia intercapitalista en las dos últimas décadas, que han conducido a la formación de bloques o alianzas para mejor controlar los territorios y sus riquezas. Por otro lado, también alude al discurso de los organismos financieros internacionales que alienta el libre comercio y la libre circulación de la inversión extranjera basado en la implantación de los Programas de Ajuste Estructural y la firma de acuerdos comerciales.

⁸¹ Las barreras no arancelarias que utilizan los países en sus relaciones comerciales pueden ser aún más restrictivas que las relacionadas con el uso de cuotas y son utilizadas como salvaguardas para satisfacer las peticiones de grupos empresariales e industriales que desarrollan poderosos lobbies para proteger sus intereses frente a la competencia extranjera, no tanto en los países antaño considerados de Tercer Mundo como en los países autodenominados “desarrollados”. Entre las barreras no arancelarias encontramos las prácticas anti-dumping –estas prácticas tiene como objetivo desactivar las estrategias de dumping, que van orientadas a vender productos a precios más bajos que los del mercado internacional para ganar mercados locales, maximizar utilidades y liquidar a la competencia local–; las subvenciones –subsídios que los gobiernos otorgan

los marcos regulatorios para homogeneizar las reglas de la libre circulación de mercancías y servicios así como de recursos estratégicos; la ampliación de los convenios entre vecinos, propuesta que, entre otras cosas, está dirigida a mejorar las relaciones entre países vecinos para tratar de acabar con los históricos conflictos territoriales; la consolidación de un sistema basado en reglas transparentes en los convenios regionales, estimada esencial para la atracción de la inversión privada a largo plazo, para el mejor flujo de las exportaciones y el aumento de la actividad de comercialización regional. (*Ibidem*, 2004)

El Plan de Acción para IIRSA elaborado por BID y CAF incluso hasta contiene una declaración de principios. Para empezar advierten que su visión de la infraestructura no se limita al transporte, la energía y las telecomunicaciones, sino que comprende también la “interrelación con la infraestructura social, ambiental y de tecnologías de la información”. (*Ibidem*) En una parte del documento donde se mezclan las acciones con los principios, estos organismos advierten que no se pueden realizar los proyectos de la IIRSA si no se toma en consideración al medio ambiente y los aspectos sociales. Además, como parte de ese discurso propio de los organismos financieros internacionales que es tan políticamente correcto, hablan de generar un máximo de impactos locales de desarrollo evitando que los ejes de IIRSA sólo sean corredores entre los mercados principales de América del Sur y de América Latina y de incorporar mecanismos de consulta que incluyan no únicamente al sector privado interesado en el financiamiento, construcción y operación de los proyectos sino a las comunidades involucradas. Son estas comunidades, sin embargo, las que no fueron consultadas en la elaboración del Plan y, como se verá más adelante, las poblaciones cuyos derechos están siendo violados en la construcción de la infraestructura local y cuyas opiniones no han sido escuchadas.

A pesar de sus consideraciones filantrópicas, a diferencia de otros acuerdos regionales y de otros documentos fundamentales para los procesos de integración sudamericana, el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur es bastante claro y revelador de las acciones puntuales que se deben realizar para hacer operativa la IIRSA. No sólo plantea el desarrollo de nuevos mecanismos regionales para la programación, ejecución, gestión y financiamiento compartido de los proyectos de integración física, propone la identificación de los ejes de integración y

directa o indirectamente a productores, comercializadores o exportadores de mercancías para fortalecer la posición competitiva internacional de las empresas-; las legislaciones rígidas sobre inversión directa para restringir el acceso a los mercados; los argumentos de índole ecológico para evitar que una empresa desarrolle actividades en cierta industria o para bloquear sus ventas en el mercado local; la explotación de la fuerza laboral para abaratar costos y propiciar la inversión, entre otras. Como se puede observar, la eliminación de este tipo de barreras termina por fortalecer no al comercio internacional o a los mercados locales sino al capital de las corporaciones transnacionales que invierten en los países latinoamericanos, pues aunque se proponga la eliminación de las barreras no arancelarias en la región, las controversias recientes al interior de la OMC prueban que las grandes potencias no están dispuestas a eliminarlas al interior de sus Estados.

desarrollo regionales en el continente sudamericano y sugiere el avance en la armonización regulatoria y reglamentaria —particularmente en las fronteras, zonas históricamente problemáticas— que norma el uso de las infraestructuras nacionales, así como la armonización de los criterios de formulación y evaluación de los proyectos de infraestructura regionales; también habla de la necesidad de revisar y estructurar esquemas financieros adaptados a la configuración específica de riesgos de cada proyecto, pues, de acuerdo a su criterio de justicia en los negocios, las estrategias “deberán proveer una adecuada distribución de riesgos y beneficios entre los sectores público y privado”. (*Ibidem*)

Según se puede observar, las consideraciones del capital privado tanto en las inversiones como en las ganancias siempre está presente, hecho que representa una novedad en los acuerdos de integración latinoamericana, donde se establecían las reglas para la participación del capital no estatal pero no se hacía al Estado responsable de las pérdidas privadas. Así, se habla de que en lo referente al enfoque de los ejes de construcción planteados —enfoque que puede ser meramente comercial, energético o de telecomunicaciones— y a los procesos sectoriales propuestos se deberán tomar en cuenta ciertas consideraciones, como la “promoción activa de la participación del sector privado en el desarrollo, gestión y financiamiento de los proyectos”. (*Ibidem*). Esta promoción de la participación del sector privado en obras públicas implica concesiones de los gobiernos locales que otorguen seguridad al capital privado, como la armonización y compatibilización de los marcos regulatorios y reglamentarios “para lograr resultados concretos en el corto plazo” (*Ibidem*); la agilización de los trámites en los pasos de frontera; y, muy importante, se deben aprovechar las oportunidades que presentan los proyectos de inversión privada y otras iniciativas.

Con el objeto de mitigar los riesgos legales, cada proyecto de la IIRSA deberá estar regulado por un Convenio Bilateral Especial (Special Bilateral Treaty o SBT) firmado por todos los países participantes. El convenio acordaría la constitución de una Autoridad Concedente (Special Purpose Public Agency o SPPA) que actuaría como agencia ejecutora del proyecto. Dicha SPPA poseería personalidad jurídica propia y se regiría por sus estatutos y norma fundacional, (BID-Analistas Financieros internacionales, 2002: 4), lo cual compromete a los gobiernos a asegurar las ganancias establecidas en el contrato al mismo tiempo que restringe la capacidad legal de cada uno de los países de solucionar los conflictos con el capital privado y pone a éste por encima del Estado. El Plan advierte además de las restricciones de tipo presupuestario y de niveles de endeudamiento vigentes en muchos países de la región, que deben obligar a los gobiernos a encarar un proceso cuidadoso de priorización en materia de inversiones públicas, así como “promover en forma activa el interés y participación del sector privado en el desarrollo, gestión y financiamiento de los proyectos (seleccionados)”. (www.iadb.org, 2003)

Para agilizar la construcción de las obras necesarias para la consecución de sus objetivos, el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur toma en cuenta la creación de un mecanismo de seguimiento que defina las formas de trabajo, metas y cronogramas y un esquema de asignación de responsabilidades. Dicho mecanismo que, a decir del documento, debe contar con un perfil “*político*” (*Ibidem*) y fundamentarse en algunos preceptos básicos que dejan al descubierto la intención *política* del documento. En primer lugar, habla del aprovechamiento de las instituciones nacionales, regionales y multilaterales pre-existentes; es decir, se habla de aprovechar los acuerdos difícilmente alcanzados por los países de la región a lo largo de una historia de enfrentamientos bélicos para la definición de fronteras en beneficio del capital privado dispuesto a invertir en la construcción de la infraestructura. En segundo lugar se menciona la importancia de la **presencia cercana de las instituciones de financiamiento en el proceso decisorio** (*Ibidem*. El subrayado es mío). En tercer lugar se contempla la participación plena de todos los gobiernos en aras de mantener el proyecto de IIRSA como resultado de un consenso, lo que le da *legitimidad* al proyecto ante los ojos de los ciudadanos sudamericanos y del continente.

Finalmente, se habla de facilitar la toma de decisiones de los gobiernos mediante “la interacción *flexible*” (*Ibidem*. El subrayado es mío) entre ellos y las entidades regionales y multilaterales, que hablaría de una armonía y homogeneidad de objetivos nacionales, como si las necesidades entre los países andinos fueran las de Brasil, Argentina o Chile y viceversa, y de una disposición y convencimiento casi naturales a crear la infraestructura sudamericana. En este sentido se recomienda que los ministerios de relaciones exteriores, planeamiento, economía y hacienda de los países participantes se encuentren involucrados en el plano decisorio “para que las iniciativas que involucren decisiones ligadas a negociaciones internacionales con otros países, y referidas al financiamiento de proyectos y la implantación de marcos regulatorios y reglamentarios que **faciliten la participación del sector privado**, cuenten con el aval político integral” (*Ibidem*. El subrayado es mío). Asimismo, se hacen recomendaciones “respecto a la intervención del Estado para la mitigación de “*fallas de mercado*” y sus riesgos, (y para) la promoción de la participación del sector privado en la operación y financiamiento de proyectos” (*Ibidem*. El subrayado es mío).

En lo relacionado al núcleo central de IIRSA —los ejes y propuestas sectoriales de integración— el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur habla de los criterios de selección que se deben tener en cuenta para la construcción de obras: la cobertura geográfica de países y regiones; los flujos comerciales existentes; los flujos comerciales potenciales; el volumen de inversiones recientes, en ejecución y proyectadas en el corto plazo en las áreas de influencia de los ejes; el interés y grado de participación del sector privado; y el grado de

sustentabilidad ambiental y social de los proyectos. (*Ibidem*) Advirtiendo que lo hace con el fin de apoyar la tarea de los Gobiernos de América del Sur en materia de selección y priorización de los ejes, aunque más bien estableciendo las líneas generales a seguir por los gobiernos de la región, el Plan presentado en el año 2000⁸² menciona los Ejes de Integración y Desarrollo identificados por sus expertos:

- 1) Eje MERCOSUR (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Santiago)
- 2) Eje Andino (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La Paz): En este espacio convergen los dos grandes bloques comerciales: CAN y MERCOSUR.
- 3) Eje Interoceánico Brasil-Bolivia-Perú-Chile (San Pablo-Campo Grande-Santa Cruz-La Paz-Ilo-Matarani-Arica-Iquique), que permitiría la vinculación de los principales centros productivos brasileños con los puertos del Perú y Chile en el Pacífico, a través de territorios boliviano.
- 4) Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam
- 5) Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata
- 6) Eje Multimodal del Amazonas (Brasil-Colombia-Ecuador-Perú).
- 7) Marítimo del Atlántico
- 8) Marítimo del Pacífico
- 9) Eje Neuquen-Concepción
- 10) Eje Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta
- 11) Eje Bolivia-Paraguay-Brasil
- 12) Eje Perú-Brasil (Acre-Rondonia) (*Ibidem*)

En cuanto a los llamados “Procesos sectoriales de integración” tenemos los siguientes:

- 1) Sistemas operativos de Transporte Multimodal
- 2) Sistemas Operativos de Transporte Aéreo
- 3) Sistemas Operativos de Transporte Marítimo
- 4) Facilitación de Pasos de Frontera
- 5) Armonización de políticas regulatorias, de interconexión, de espectro, de estándares técnicos y de universalización de Internet
- 6) Instrumentos para el financiamiento de proyectos de integración física regional
- 7) Marcos normativos de mercados energéticos regionales (*Ibidem*)

⁸² De las adecuaciones y cambios en los ejes originales que ocurrieron en años posteriores se hablará más adelante.

La elección que el Banco Interamericano de Desarrollo en contubernio con la Corporación Andina de Fomento y el FONPLATA proponen para la constitución de los seis procesos no es fortuita: va desde las necesidades más apremiantes hacia las que requieren mayores inversiones y sobrepasan los objetivos comerciales. En primer lugar, para el desarrollo de los sistemas operativos de transporte multimodal, los países involucrados tendrían que construir y/o mejorar sus vías terrestres y fluviales para tener una mejor conexión interna y externa entre centros de producción y destino de mercancías, lo que permitiría la participación del capital privado en estas obras. En segundo lugar, se plantea mejorar los sistemas operativos de transporte aéreo tanto para ahorrar tiempo para el transporte de mercancías como para aumentar los volúmenes de mercancías, lo que finalmente beneficiaría a los grandes exportadores. En tercer lugar, en cuanto a la agilización o desaparición de los trámites en las fronteras, situación que hoy existe ya entre los países andinos, por un lado, y los del MERCOSUR por el otro, se plantea para hacer más eficiente los trámites y mejor utilizar la infraestructura creada en primer lugar. Después, con relación a la armonización de políticas regulatorias de interconexión, de espectro, de estándares técnicos y de universalización de Internet, estamos ante la posibilidad de mejorar las comunicaciones para el mejor flujo del capital y la creación de instrumentos para el financiamiento de proyectos de integración física regional desde organismos internacionales. Finalmente, como punto culminante de la novedosa integración, se propone crear marcos normativos de mercados energéticos regionales que permitan el libre flujo de energía eléctrica, petróleo y gas entre los países sudamericanos y entre éstos y otros países que no sean necesariamente de la subregión, como Estados Unidos.

Así, si se sigue cuidadosamente la actuación del BID en la subregión sudamericana a través de la planeación de la IIRSA, no podrán quedar dudas de la imbricación de sus objetivos con los de la política exterior estadounidense y de su papel como instrumento de proyección hegemónica de los Estados Unidos en Sudamérica.

Los intentos norteamericanos por reforzar su poder en el hemisferio occidental a través del manejo y control de un organismo financiero como el BID no es nuevo: durante la Primera Conferencia Interamericana de 1890 ya se tenía contemplado crear una institución de ‘desarrollo’ que hiciera frente a algunos de los problemas financieros que ya en esa época enfrentaban América Latina y el Caribe. Sin embargo fue hasta 1958 que se crea una institución de desarrollo regional, avalada por la OEA⁸³,

⁸³ La OEA, Organización de Estados Americanos, es el organismo internacional creado a instancias de los Estados Unidos y dirigido por él, primero, para contrarrestar los esfuerzos de la CEPAL por crear una alternativa para el desarrollo latinoamericano y segundo, para controlar las acciones de los países del hemisferio occidental en plena guerra fría. El objetivo primordial de la OEA era convertirse en el brazo de la diplomacia estadounidense en América del mismo modo que el TIAR era su brazo militar y el BID su brazo financiero.

desde donde se redactó el Convenio Constitutivo del BID. En la actualidad, este banco es el mayor de todos los bancos regionales de desarrollo del mundo y constituye la principal fuente de financiamiento multilateral para los proyectos gubernamentales de desarrollo económico, social e institucional, y los de comercio e integración regional en América Latina y el Caribe. Este banco otorga préstamos y asistencia técnica a sus 26 países miembros en la región⁸⁴ con capital proporcionado por los mismos países y recursos obtenidos con la emisión de bonos en los mercados internacionales de capital. Las principales funciones del Banco son las siguientes, a decir del propio organismo: usar los fondos provenientes de los mercados financieros, de su propio capital y de otros recursos para financiar los proyectos de desarrollo en sus países miembros; complementar las inversiones privadas cuando no haya disponibilidad de capital privado en términos y condiciones razonables; y otorgar asistencia técnica para preparar, financiar, e implementar (sic) proyectos de desarrollo. (BID, 2005)

Los recursos financieros del Banco proceden de los países miembros, de préstamos obtenidos en los mercados financieros, de fondos de administración que tiene la institución y reembolsos de los préstamos. El BID usa estos recursos para financiar préstamos, donaciones, garantías e inversiones. Pero aunque este organismo afirme que su objetivo principal no es obtener ganancias, la institución “se rige por principios financieros similares a los de la banca privada, ya que percibe intereses por los préstamos que otorga” (*Ibidem*), lo que lo convierte en un *poderoso y privilegiado enlace entre los gobiernos latinoamericanos y la banca privada internacional*, función en la que poco se repara. Además, los países latinoamericanos a los que el BID otorga préstamos se comprometen a admitir las condiciones financieras impuestas por el capital internacional y, más grave aún, a aceptar la vigilancia y control de los numerosos comités y mecanismos que el BID posee para garantizar a la banca internacional que los proyectos y la administración del dinero no se desvirtúen, por lo que las acciones gubernamentales se convierten en objeto de procesos de supervisión y auditoría que rayan en la intromisión y debilitan la soberanía de las naciones en tanto el banco tiene oficinas de representación y

⁸⁴ El Banco actualmente tiene 46 países miembros, de los cuales 26 son miembros prestatarios –con derecho a préstamos– en la región latinoamericana. Cuando se creó el BID como una asociación entre 19 países latinoamericanos y Estados Unidos sus miembros eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. El número de países miembros aumentó con el ingreso de Trinidad y Tobago en 1967, país al que pronto se unieron Barbados y Jamaica en 1969, Canadá en 1972, Guyana en 1976, Bahamas (1977) y Suriname en 1980. Entre 1976 y 1986, ingresaron al Banco los 18 países miembros no regionales, que incluyen a 16 países europeos, Israel y Japón. Belice ingresó en 1992 y, tras la desintegración de Yugoslavia, en 1993 se unieron Croacia y Eslovenia. Las restantes repúblicas ex integrantes de Yugoslavia optaron por no solicitar ingreso al Banco, con la excepción de Serbia-Montenegro, la cual aún mantiene abierta la opción de ingreso al BID. Cuba firmó pero no ratificó el convenio constitutivo del BID, los estatutos que dieron origen a la institución, y por lo tanto no es miembro de la misma. Todo país interesado en ingresar al BID como miembro regional debe ser miembro de la OEA. Los países que desean ser admitidos como miembros no regionales, deben ser miembros del FMI. En ambos casos, otro de los requisitos básicos consiste en la suscripción de acciones del capital ordinario y la contribución al fondo para operaciones especiales.

personal técnico en todos los países y gabinetes de los miembros prestatarios, que son los latinoamericanos.

Así, aunque el BID se autodefina como un organismo completamente independiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (mejor conocido como Banco Mundial, BM) ya que a diferencia de ellos concentra todos sus recursos en las economías de América Latina y el Caribe, lo que lo ha convertido en la mayor fuente de financiamiento multilateral en la región, lo cierto es que las actividades de este Banco no están desligadas de los objetivos estratégicos de aquéllos en lo que se refiere al seguimiento de ciertas líneas que implican, como se explicaba en el primer capítulo, la existencia en los países latinoamericanos de una especie de gobierno paralelo que toma decisiones de carácter estratégico. Aunque en apariencia el lenguaje utilizado por el BID haga parecer sus acciones como inocuas y hasta casi filantrópicas en tanto que no hace nada más que impulsar el desarrollo de la región, lo real es que en la práctica este banco regional está en consonancia con la estrategia económica impuesta desde los centros del poder mundial, basada en “la apertura de los mercados, la privatización a ultranza, especialmente de los activos estratégicos tanto convencionales como naturales (petróleo, gas natural, minerales, agua, biodiversidad) por medio de rigurosos programas de ajuste estructural que han provocado una baja histórica de la inversión pública y una transferencia de recursos del sector público al privado, nacional y extranjero”. (Saxe Fernández, 2004:8).

La forma en la que la IIRSA está planteada —desde su orientación hacia el financiamiento público y privado para usufructo del capital privado, pasando por su elección de lugares geoestratégicos para la realización de los proyectos, hasta la forma autoritaria de planeación y concreción de la Iniciativa que impide la realización de foros de discusión y debate sobre las bondades de la propuesta— sigue las formas impuestas desde hace varios años por los organismos financieros de Breton Woods. El BID impulsa la IIRSA, cuyo objetivo central es la construcción y mejoramiento de una infraestructura, mediante préstamos en campos tan diversos y aparentemente lejanos que van desde el apoyo al fortalecimiento de la política comercial y de exportaciones de los países sudamericanos, pasa por el control de los recursos minerales, de la biodiversidad y del agua, por la reorientación de los sectores energéticos (petróleo, gas natural y electricidad) y del transporte (ferrocarriles, puertos, aeropuertos y carreteras) hasta intervenir en las formas de producción agrícola e industrial. Todas estas acciones maquilladas en un discurso de corte mesiánico que dice buscar la incorporación de América Latina al desarrollo, deviene, primero, marginación de los gobiernos nacionales al momento de delinear políticas públicas pues se impone una lógica regional a la nacional amparada en el discurso de la integración; segundo, imposición de objetivos que poco corresponden a las necesidades de las

poblaciones sudamericanas y desviación de recursos públicos hacia obras para beneficio de las corporaciones transnacionales, instrumentos de poder para el ensanchamiento del *lebensraum* estadounidense; tercero, ocupación material tanto de los territorios geoestratégicos como de los recursos naturales estratégicos.

En sus propios documentos, este banco consigna que “el Banco Interamericano de Desarrollo colabora estrechamente con el FMI "caso por caso" a fin de consolidar la estabilidad macroeconómica en los países de América Latina y el Caribe. También con frecuencia aúna esfuerzos con el BM para cofinanciar las reformas de políticas nacionales, proyectos y programas, y cooperar en áreas técnicas. Asimismo, el Banco colabora con organismos de América Latina y el Caribe que financian el desarrollo, como la CAF” (BID, *Op. Cit.*). Este “cofinanciamiento” que lo liga al BM a través de los préstamos y asesorías en los sectores estratégicos que realiza en América Latina, lo relaciona ineluctablemente con la gran potencia del norte. Aunque *de jure* los propietarios del BID son los países miembros, *de facto* ellos delegan el gobierno del Banco en la Asamblea de Gobernadores, que constituye la máxima autoridad. El poder de votación de los países miembros depende del monto de recursos que suscriben al capital ordinario de la institución y la mayor parte de este capital es norteamericano.

Así, actualmente la composición del poder de votación es la siguiente: juntos, los 26 países miembros de América Latina y del Caribe cuentan con un 50.02% de los votos, que de ninguna manera es autónomo ya que los asesores del BM y el FMI, que son los mismos del BID, se encuentran siempre tras la orientación del voto de estos países, condicionados como están a la adopción de los programas de ajuste estructural si pretenden seguir teniendo crédito; Estados Unidos, por sí solo, posee el 30% de los votos, que aunado al de los países latinoamericanos, consigue mayoría absoluta; Canadá, 4%; los 16 países europeos miembros e Israel, 11% y Japón, 5% (*Ibidem*). De los recursos de capital ordinario que cubren la mayoría de los préstamos efectuados por el Banco, aproximadamente un 4.3% es aportado directamente por los países miembros, que no son precisamente los prestatarios sino los no prestatarios, los que no tienen acceso a préstamos y que son Estados Unidos, Japón y los países de Europa Occidental. El 95.7% restante está conformado por capital exigible, garantizado por los gobiernos de los países miembros y que proviene de la banca privada de los países mencionados (*Ibidem*). Este capital respalda, juntamente con la categoría de acreedor preferido otorgado al Banco por sus países integrantes, los bonos emitidos en los mercados financieros internacionales. Los Estados Unidos poseen el mayor número de acciones (2 512 529), votos (2 512 664) y porcentaje de votos del BID (30.008). (*Ibidem*) Ante estas evidencias es difícil decir que este país se mantiene al margen de la planeación de la IIRSA y lleva más bien a afirmar lo contrario: el BID se descubre como un organismo

financiero que sirve de instrumento de la política exterior norteamericana para la consecución de sus objetivos geoeconómicos y geopolíticos en Sudamérica en general y en el arco andino y la cuenca amazónica en particular.

A decir del propio BID, la IIRSA no es la única iniciativa que apoya en América Latina. Además y en consonancia con la misma, este banco apoya otras iniciativas a través del financiamiento de programas de cooperación técnica encaminados a fortalecer el objetivo principal: la integración regional. Así, la IIRSA no se puede entender sin las otras tres iniciativas: 1) Iniciativa para ampliar los Servicios de Información Económica del Banco, cuyo objetivo primordial es otorgar a los inversores mejor información sobre las condiciones económicas de los países que recibirán el capital así como sobre las posibilidades de negocios en los mismos; 2) Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales, que se perfila como el banco de información más detallado sobre las posibilidades para el capital privado estadounidense, europeo y asiático de hacerse de los sectores estratégicos que continúan en manos de los gobiernos locales, además de que realiza estudios sobre la factibilidad de la privatización de sectores estratégicos; y 3) Plan Puebla-Panamá, que es la versión de IIRSA para Centroamérica y México, con todas las implicaciones de corte geopolítico, geoeconómico y geoestratégico que este hecho posee.

Al impulsar la IIRSA, el BID no deja nunca de puntualizar las ventajas para la inversión del capital en Sudamérica y para el involucramiento de las corporaciones transnacionales en las obras de construcción de la infraestructura. En ese lenguaje empresarial tan presente en el discurso de los organismos internacionales, el BID ofrece a las empresas el territorio sudamericano como un producto: advierte que posee un PIB de 1, 153 millones de dólares; una enorme dotación de recursos naturales y energéticos; mercados de consumo en desarrollo y con potencial de crecimiento; procesos de integración regional avanzados (Mercosur y CAN); sistemas democráticos; población joven y con capacidad emprendedora; medio ambiente y paisajes que presentan bellezas únicas; y culturas dinámicas y creativas. (BID, 2004). Además se ofrece a financiar los estudios de factibilidad, de medio ambiente y de ingeniería para que los proyectos de IIRSA sean implantados de la mejor manera posible. (BID, *Op. Cit.*) De manera clara el BID muestra que ni es un organismo neutral ni un ente abstracto, impersonal, multilateral; el BID es un organismo financiero con objetivos bien delimitados y estrechamente vinculados al fortalecimiento de la hegemonía norteamericana en un contexto de crisis de sucesión hegemónica. La IIRSA, por tanto, tampoco puede ser una iniciativa alejada de este mismo propósito, como ya se irá mostrando en este escrito.

b) LOS AVANCES INSTITUCIONALES Y MATERIALES PARA LA CONCRECIÓN DE LA IIRSA

Como se afirmaba al principio del capítulo, las obras para la construcción de la IIRSA han ido avanzando, como bien lo demuestran las noticias que se tienen de las distintas reuniones de funcionarios de los países sudamericanos, encuentros que a decir de la prensa, nunca han integrado a sectores no ligados a los gobiernos. Además, los proyectos expuestos en un principio se han ido replanteando de acuerdo a las experiencias obtenidas en los tres años que han pasado desde que fue presentado. Entre los avances y cambios más significativos ocurridos en torno a la implantación de IIRSA podemos encontrar los siguientes, que nos ayudarán a rehacer el camino andado por esta integración *sui generis* al mismo tiempo que nos permitirán observar que la IIRSA y la integración física que supone se están construyendo.

Para marzo de 2001, 12 de los 13 países sudamericanos ya habían acordado la puesta en marcha de los mecanismos de funcionamiento de IIRSA y habían ratificado como primordiales los avances en la construcción de la infraestructura de los ejes MERCOSUR-Chile, Andino, Interoceánico, Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata y el eje Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam, así como la agilización para la simplificación de los trámites en los pasos de frontera y para la elaboración de los marcos normativos de mercados energéticos regionales, que hasta ese día no existían. Para la segunda mitad de ese año, ya se disponía de un listado actualizado de proyectos o intenciones de proyectos que abarcaba los planes nacionales en materia de infraestructura. En noviembre de ese mismo año, en la segunda reunión del Grupo de Técnico Ejecutivo para el eje Andino, se presentó un acuerdo suscrito por Colombia, Ecuador y Perú en materia de interconexión energética. Por su parte, el presidente del CAATEL⁸⁵ (Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones) presentó el Plan Estratégico de Desarrollo Andino de las Telecomunicaciones para el Periodo 2001-2006, en aquellos aspectos relevantes para el Eje Andino.

En dicho Plan se precisaba que el sector privado estaba ya desarrollando la instalación de fibra óptica por parte de ENTEL⁸⁶ en tanto que AES⁸⁷ se encontraba en proceso de tendido de fibra óptica

⁸⁵ CAATEL pertenece a la CAN (Comunidad Andina) y actualmente se encuentra presidido por Bolivia a través de la Dirección General de Comunicaciones. Se trata de un ente encargado de impulsar el desarrollo del sector para que las telecomunicaciones actúen como polos de desarrollo en los países de la región y promuevan la integración en América del Sur. Entre los acuerdos aprobados se encuentran las normas que regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la CAN, las normas comunes de interconexión y la autorización comunitaria a la Empresa ANDESAT para el establecimiento, operación y explotación del Sistema Satelital Andino Simón Bolívar.

⁸⁶ ENTEL es una empresa transnacional de telecomunicaciones cuyo capital mayoritario es chileno y británico, asentada en Sudamérica desde la década de los setenta.

para interconectar Perú, Bolivia, Brasil y Chile. (FOBOMADE, *Op. Cit.*) Además se definió la primera generación de proyectos de inversión en infraestructura que contribuyeran a la integración física del Eje Andino y pudieran ser adelantados en el corto plazo, sin necesidad de mayores reformas institucionales o de regulación en los países así como los proyectos de segunda generación, los de inversión en infraestructura de alto impacto de integración, ejecutables a mediano plazo. Se trataba de proyectos que presentan dificultades de tipo institucional o normativo que requieren un proceso de desarrollo más profundo o dependen de la ejecución de otros proyectos. Puede tratarse de proyectos identificados y no incluidos en la primera generación o nuevos proyectos.

De esa lista de proyectos, un primer grupo de 162 estudios y proyectos se propusieron como actividades de primera generación, sumando un monto total estimado de 23'500 millones de dólares. Algunos de los proyectos identificados fueron incorporados a la programación de financiamiento de las instituciones gubernamentales mientras que otros proyectos fueron canalizados hacia el sector privado para su financiamiento y ejecución. Todo el financiamiento se centraba en la construcción del Eje Andino mientras se programaba la instalación para el 2002 de otros dos Ejes: Perú-Brasil (Acre-Rondonia) y Multimodal del Amazonas.

Ya para el año 2002, se firmó un Memorando de Entendimiento sobre el Desarrollo de la Infraestructura de Conexiones para el Transporte entre Bolivia y Chile y se estableció el compromiso de los Ministros de Relaciones Exteriores de Guyana y Venezuela para instalar un comité técnico en vistas a la construcción de una carretera entre los dos países. En este año tuvo lugar la Segunda Cumbre de Presidentes de Sudamérica, donde se reafirmó la vigencia e importancia estratégica del IIRSA y se destacaron los progresos alcanzados que incluyen la identificación de 162 proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones. (*Ibidem*)

En agosto de este mismo año se reunió el Comité de Rutas de Integración de América del Sur y la CEPAL con el propósito de analizar los avances recientes en materia de integración física, especialmente en el sector del transporte y relacionarlos con las necesidades correspondientes, tomando en cuenta el desarrollo del comercio interarregional y la favorable (sic) coyuntura financiera. (*Ibidem*) En la reunión participaron autoridades gubernamentales y políticas, representantes de organismos transportistas, del sector privado y académicos. El Secretario Ejecutivo de CEPAL observó que los caminos pavimentados eran aún muy deficientes, considerando que mientras en los países de la OCDE hay 10 km de caminos pavimentados por 1000 habitantes, en América Latina oscila entre 0.5 y 2 km.

⁸⁷ AES se autodefine como una 'Compañía Global de Energía'. De origen norteamericano, se ha extendido a 27 países desde 1981. Entre los rubros que maneja se encuentra la producción de energía eléctrica y las exploraciones sobre gas y carbón.

Señaló también tres elementos críticos de la integración regional: el desarrollo de la infraestructura física y regulación conjunta de los servicios, la convergencia de *los procesos de integración regional previos al ALCA* (CAN y MERCOSUR) y la tendencia a la inestabilidad macroeconómica (volatilidad de las tasas de cambio bilaterales entre Brasil y Argentina y Colombia y Venezuela). Subrayó también que la reducción de costos al mejorar la infraestructura de transporte supera ampliamente lo que se puede lograr a través de las normas de comercio, lo que apura la construcción de la infraestructura y mencionó datos de la situación energética sudamericana: los avances más destacados en el comercio energético se dieron en el sector gasífero, puesto que el comercio regional del gas se incrementó 224% en los últimos 5 años: Brasil y Chile fueron los mayores importadores y Argentina y Bolivia los mayores exportadores. En lo que atañe a la electricidad, Paraguay fue el mayor exportador en el año 2000 y Brasil el mayor importador. (*Ibidem*)

Entre las conclusiones de la CEPAL se subrayaron los avances en la construcción de los tres ejes prioritarios (andino, interoceánico y amazónico) así como la importancia de buscar mecanismos de financiamiento de los proyectos que alivien las restricciones impuestas por el endeudamiento de los diferentes países con la banca internacional; se habló de la importancia de la desregulación del cabotaje marítimo para rebajar los costos de transporte en el comercio intrasubregional, siendo un modelo la experiencia de la Unión Europea; se llevó a discusión la necesidad del reforzamiento del ferrocarril como medio de transporte mediante un mayor uso de opciones multimodales, una normalización técnica y una mayor cooperación entre los actores privados, que curiosamente, están ahora encargados de la operación de casi todos los ferrocarriles de la región; y se manejó la posibilidad de considerar la creación de entidades regulatorias supranacionales parecidas a las europeas para el comercio del gas. (*Ibidem*) Así, aunque se diga que el ALCA está estancado a falta de acuerdos entre los países⁸⁸, las declaraciones oficiales de los funcionarios de la CEPAL no dejan lugar a dudas: la IIRSA forma parte de la preparación de terreno sudamericano para el establecimiento de los capitales trasnacionales, en especial del norteamericano, especialmente interesado en recobrar el espacio perdido a manos del capital de la Unión Europea.⁸⁹

Con relación al estratégico tema de la integración energética, encontramos que el grupo técnico ejecutivo encargado de su preparación inició desde el 2002 la elaboración de los Marcos Normativos de

⁸⁸ Durante la Reunión de Monterrey en Enero de 2004, no fueron los preparativos para el ALCA los más importantes de la agenda, como lo demuestran las noticias de la prensa nacional e internacional durante los días 12, 13, 14 y 15 de enero de 2004.

⁸⁹ Según estimaciones del IRELA (Instituto de Relaciones Latinoamericanas) y del FMI, la inversión extranjera directa en América Latina hasta 1997, año del que tienen las últimas referencias, provenía en su mayoría de la Unión Europea. Para mayor referencia consúltese María Cristina Rosas, La economía internacional en el siglo XXI. OMC, Estados Unidos y América Latina, Ed. UNAM/FCPyS, México, 2001, pp. 339-377.

Mercados Energéticos Regionales. De acuerdo con este grupo, en términos de una visión regional, las ventajas de eficiencias, amplitud del mercado y atracción de inversión privada que aporta la integración de los mercados de energía son de tal magnitud que hacen rentable la construcción de obras de infraestructura para esa integración. Por otra parte, el desarrollo de mercados energéticos regionales eficientes requiere de mercados nacionales que, por un lado, *permitan los intercambios internacionales*, promuevan la eficiencia, *respeten los contratos privados*, realicen el despacho económico incluyendo la oferta y demanda generada en las interconexiones internacionales, respeten los criterios generales de seguridad y calidad en las interconexiones y garanticen el acceso abierto al transporte e información. (www.olade.org, 2002. El resaltado es mío) En ese sentido, se considera que la seguridad jurídica es un elemento esencial para el éxito del proceso de integración energética.

Como la integración energética es de vital importancia para la integración física de Sudamérica, los esfuerzos para conseguirla se han acentuado en las regiones de menor desarrollo de la subregión, como es el caso de la región andina. Los países de esta región, apoyados por el financiamiento de la CAF, han realizado un importante avance hacia la integración a partir del “Acuerdo para la Interconexión Regional de Sistemas Eléctricos y el Intercambio Internacional de Energía Eléctrica”, suscrito en Cartagena en septiembre de 2001. A partir de este acuerdo, los especialistas de los Organismos Reguladores elaboraron una propuesta sobre armonización de marcos normativos que permite identificar los cambios que debe hacer cada país en su normativa interna. A su vez, los países del Cono Sur no se han planteado un acuerdo a nivel multilateral pero en los últimos meses han intentado avanzar hacia un escenario de integración regional.

En cuanto a los sistemas operativos de transporte aéreo, se han realizado estudios para identificar las limitaciones existentes y presentar propuestas de flexibilización del tráfico aéreo así como de armonización de los sistemas regulatorios, sobre todo en los países de la región andina. Para organizar los sistemas operativos de transporte marítimo se realizó un levantamiento de información respecto al funcionamiento de la cadena logística de los principales puertos de América del Sur para identificar puntos críticos en los sistemas operativos de éstos y proponer orientaciones para desarrollar sus infraestructuras de apoyo; en segundo lugar se evaluaron los marcos normativos de los países de la región referentes a los servicios de cabotaje marítimo, así como los flujos de transporte regional para establecer posibles esquemas de liberalización regional del cabotaje.

Para establecer los sistemas operativos de transporte multimodal se realizó al interior de los organismos encargados de la ejecución de IIRSA un análisis de la problemática legal para identificar acciones concretas que permitan avanzar en la creación de un marco regulatorio regional que facilite las operaciones de transporte multimodal de mercaderías, al igual que para la facilitación de pasos de

fronteras, para la cual se elaboró un estudio para definir las políticas y cursos de acción destinados a los gobiernos que puedan contribuir a facilitar el cruce en los pasos fronterizos y agilizar el transporte carretero entre los países de la región, que al menos en el caso de los países conosureños, no es tan problemático. Como todos los proyectos requieren financiamiento –incluso los estudios sobre la situación actual de la infraestructura sudamericana son llevados a cabo por empresas privadas, no por los gobiernos–, uno de los temas primordiales ha sido el de los instrumentos para el financiamiento de proyectos de integración física regional. Así, la tendencia ha sido el desarrollo de esquemas llamados “novedosos” entre los gobiernos y el sector privado para viabilizar el financiamiento de proyectos de la IIRSA.

En el periodo comprendido entre el año 2003 y lo que va de 2004, se ha avanzado considerablemente en la ejecución de los principales proyectos de Primera Generación y de los nuevos ejes de integración, para los cuales ya se ha contratado personal especializado para el análisis de la situación infraestructural entre Perú-Brasil y Bolivia, Venezuela, Brasil, Guyana y Suriname, en la cuenca del Amazonas y entre Porto Alegre, Asunción, Jujuy y Antofagasta. Asimismo, además de planearse la identificación de los proyectos de segunda generación, se está intentando el reconocimiento de nuevos proyectos que podrán salir a flote al detectar nuevos “cuellos de botella” o puntos críticos que pudieran presentarse en el futuro como producto del crecimiento natural de la demanda de infraestructura.

Como se puede observar en este recorrido a grandes rasgos de las principales acciones orientadas a la consolidación del proyecto planteado hace ya cuatro años, la mayoría de las acciones a futuro que contempla la implantación de la IIRSA pasan por homogeneizar los instrumentos jurídicos de los países involucrados. Sin embargo, al igual que la discusión de los contenidos de los acuerdos comerciales y la definición de los ejes de desarrollo e integración así como el de los procesos sectoriales, los cambios en los sistemas normativos de los países participantes tienen en el fondo un fuerte contenido político que termina por institucionalizar las relaciones de fuerza existentes en las relaciones internacionales.

c) EL CONTENIDO POLÍTICO DE LOS CAMBIOS JURÍDICOS

Cuando se habla del respeto irrestricto a la legislación internacional como una de las características necesarias para la mejor convivencia entre los Estados pocas veces se alude al momento en el que dicha legislación fue creada. Esas leyes que parecen necesarias e indispensables para dar

forma a los acuerdos entre los distintos países no son, sin embargo, fruto del consenso entre naciones y muchos menos están inspirados en los más caros ideales de los estados modernos —la libertad, la democracia y la igualdad. Las leyes se discuten pero finalmente las impone el más poderoso: las leyes no son más que la objetivación de un orden y están destinadas a mantener ese orden organizado por el Estado más poderoso del hemisferio Occidental, apoyado coyunturalmente por la potencia regional en Sudamérica y aceptado de buen grado por las clases políticas nacionales, que no siempre por los habitantes de la subregión. Por eso, en el momento de efectuar un análisis de la geopolítica sudamericana no se puede soslayar el contenido político que encierran los instrumentos jurídicos y menos cuando éstos están siendo modificados y adecuados a las nuevas exigencias de una gran potencia en decadencia y una potencia regional ascendente.

De esta forma, la concreción de la IIRSA no se puede entender sin un marco regulatorio que le de carácter obligatorio a la concreción de las directrices marcadas desde los organismos internacionales —como el BID y la CAF, tras las cuales se esconden las necesidades del capital— y que permita la permanencia de esas disposiciones independientemente del rasgo ideológico del gobierno que tengan los países sudamericanos. Por eso, tal como ha venido haciendo al interior de los países latinoamericanos desde que los programas de ajuste estructural necesitaron nuevos instrumentos jurídicos o reformas en los mismos, los ideólogos de la IIRSA han creado instrumentos legales regionales o bien han reorientado los objetivos de los acuerdos ya presentes con el fin de dar seguridad a su proyecto. De esta forma, se han valido de cuerpos legales existentes como el Tratado de la Cuenca del Plata y el Tratado de Cooperación Amazónica para acelerar el proceso de integración de las redes de transporte, pues además de englobar a la totalidad de los países sudamericanos involucrados en IIRSA, tienen la ventaja de ser legislaciones multifacéticas susceptibles de dar cabida a leyes sobre cualquier tópico, lo que facilita la institucionalización de los requerimientos legales del capital.

La cuenca del Plata comprende las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y La Plata, que abarca 3'200'000 km² en territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se trata de una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. El tratado que regula el uso de esta área es el Tratado de la Cuenca del Plata, que no es un acuerdo reciente. Creado sobre la base del Acta de Santa Cruz de la Sierra del 20 de mayo de 1968, signada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, sufrió serias modificaciones en febrero de 1997 cuando se realiza la Declaración Conjunta de Buenos Aires. El Tratado de la Cuenca del Plata fue acordado cuando los gobiernos nacionalistas de estos países tenían confianza —y una buena dosis de voluntad política— para construir una integración latinoamericana basada en los ideales *bolivariano-desarrollistas-cepalinos* pero como todos los acuerdos, su firma no estuvo exenta de problemas por las disputas históricas entre los países signantes.

La firma de este documento representó la aceptación de un criterio subregionalista, basado en la prioridad de la integración nacional y en un esquema regional basado en la coordinación y armonización de intereses conflictivos entre países vecinos. Representó, por oposición, el rechazo de los cinco países integrantes de la Cuenca del Plata al esquema impulsado por Estados Unidos y los países firmantes de la Declaración de Bogotá⁹⁰, propenso a una división del trabajo continental en donde la Argentina jugaría el papel de “país agrícola” y Brasil y Chile los roles de “países industriales”. El Acta de Santa Cruz de la Sierra estableció las siguientes prioridades: la apertura de un puerto para Bolivia sobre el río Paraguay, que concentraría la producción de hierro y manganeso de El Mutún para la exportación; la redacción del Tratado del Río de la Plata para solucionar las diferencias limítrofes pendientes entre la Argentina y Uruguay, en un plazo no mayor de 120 días; la planificación del proyecto energético de Salto Grande; el establecimiento de un servicio meteorológico e hidrográfico, con el fin de informar sobre lluvias y regímenes de aguas en las cuencas de los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay, de la Plata y afluentes principales; el desarrollo de conexiones viales y ferroviarias y de sistemas de comunicaciones entre los cinco países miembros de la Cuenca del Plata; y la modernización de los puertos de Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Santa Lucía (Uruguay) y Río Grande do Sul (Brasil). (FOBOMADE, 2002a)

Este tratado estuvo inscrito en el contexto de la rivalidad geopolítica argentino-brasileña, según el cual la Cuenca del Plata y los aprovechamientos hidroeléctricos eran medios de poder y de influencia geopolítica. Con la firma de este documento, la Cancillería argentina intentó forzar a la brasileña a negociar, pero Brasil continuó con sus proyectos hidroeléctricos. La postura argentina respecto de la Cuenca del Plata se basó en dos supuestos: primero, la producción argentina debía salir por el río de la Plata evitando que fuera transportada a través del Brasil, más allá de las razones de conveniencia por el costo de los fletes; segundo, el gobierno argentino podía entenderse más fácilmente e influir sobre los de Uruguay y Paraguay que sobre Brasil.

De acuerdo con esta óptica, Argentina intentó frenar el proyecto brasileño de Sete Quedas (localización primitiva de lo que fue luego la central Itaipú), utilizando el Derecho Internacional, sosteniendo el principio de que, en el caso de aprovechamiento hidroeléctrico en ríos internacionales de curso sucesivo como el Paraná, los estados ribereños que proyectaran una obra hidroeléctrica debían proceder a una “consulta previa”. En la resolución 23 del Acta, puntos 2 y 3, la diplomacia argentina obtuvo la aprobación del principio de “consulta previa”, en los siguientes términos: 1) En los ríos internacionales contiguos, siendo la soberanía compartida, cualquier aprovechamiento de sus aguas

⁹⁰ Esta declaración hecha en 1966 se hizo en el marco preparatorio del Acuerdo de Cartagena que daría lugar, primero, a la formación del Pacto Andino y después a la Comunidad Andina.

deberá ser precedido de un acuerdo bilateral entre los ribereños; y 2) En los ríos internacionales de curso sucesivo, no siendo la soberanía compartida, cada estado puede aprovechar las aguas en razón de sus necesidades siempre que no cause perjuicio sensible a otro estado de la Cuenca. (*Ibidem*)

No obstante, a pesar de lo que podría percibirse como un triunfo diplomático argentino, el gobierno de Brasil continuó con su programa de construir obras sobre los ríos de la Cuenca del Plata, haciendo caso omiso de lo acordado. Además, el Acta había introducido otro concepto: el de “soberanía compartida” de los ríos contiguos. Este ambiguo concepto, aparentemente congruente con el principio de “consulta previa”, en realidad otorgó ventajas a Brasil, que estaba haciendo obras⁹¹, mientras que la Argentina no tenía proyectos hidroeléctricos serios en el ámbito de la Cuenca del Plata. Dados los problemas entre estos dos países, el Tratado de la Cuenca del Plata entró en vigor hasta el 14 de agosto de 1970, y en términos de los intereses geopolíticos argentinos, el artículo clave era el 1º inciso b) que establecía la “utilización racional del recurso agua, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo”. (*Ibidem*) Sin embargo, aún con la entrada en vigencia del acuerdo, los sectores nacionalistas⁹² criticaron la firma del Tratado

⁹¹ Cabe aclarar que el proyecto hidroeléctrico de Sete Quedas generó discrepancias en el propio seno del gobierno brasileño. Mientras el ministro de Minas y Energía, subordinaba la puesta en marcha de este proyecto a estudios de factibilidad que comprobaran la conveniencia económica de la obra, la cancillería privilegiaba los argumentos geopolíticos por sobre los de la rentabilidad económica, sosteniendo que la pronta ejecución de Sete Quedas era un medio de atraer la voluntad del gobierno paraguayo hacia la órbita de influencia brasileña y de este modo evitar que la construcción de Yacyretá-Apipé, una represa argentina ubicada sobre el río Paraná, cuyo proyecto de construcción estaba más avanzado que el de Sete Quedas, alterase el equilibrio de poder subregional en detrimento de Brasil. Para mayores referencias consultar Francisco Rojas Aravena, *Argentina, Brasil y Chile: integración y seguridad*, Ed. Flacso, Caracas, 1999, 208 pp.

⁹² Brasil era un tema de agenda muy importante para los sectores nacionalistas argentinos pero en un sentido totalmente opuesto al otorgado por el General Onganía, presidente de la Argentina de 1966 a 1970 a partir de un golpe de Estado a Luis Domingo Perón. Mientras Onganía buscaba acercarse a Brasil en función de una eventual alianza militar tripartita entre Brasilia, Washington y Buenos Aires, con el objetivo último de derrotar la amenaza comunista, los nacionalistas, combinando la geopolítica con la teoría de la dependencia, los nacionalistas vieron a Brasil no como un aliado en la cruzada anticomunista, sino como una doble amenaza para los intereses nacionales argentinos. Para los nacionalistas, como el historiador José María Rosa, Brasil era el eterno vecino expansionista que, desde tiempos inmemoriales, buscó debilitar y aislar a la Argentina en la Cuenca del Plata y era el agente “imperialista” aliado a la Casa Blanca. En consecuencia, el peso de los argumentos geopolíticos, que se extendió no sólo durante el período de la Revolución Argentina sino también durante las gestiones peronistas, dificultó enormemente un eventual acercamiento entre Buenos Aires y Brasilia en esos años. Juan Enrique Guglielmelli, percibía la histórica competencia de poder entre la Argentina y Brasil como un factor clave en la Cuenca del Plata, en la medida que condicionaba las políticas exteriores de sus vecinos, y estimulaba una política pendular en las diplomacias uruguaya, paraguaya y boliviana. En la visión de Guglielmelli, los emprendimientos hidroeléctricos brasileños como Itaipú implicaban el “control” brasileño de los ríos pertenecientes a la Cuenca del Plata. La construcción de carreteras, la neutralización de los intentos argentinos de cooperar con Uruguay y con Bolivia, el establecimiento de vínculos de seguridad con Chile, entre otras jugadas de la estrategia brasileña, apuntaban a “aislar” a Argentina. A su vez, esta política brasileña estaba apoyada por Estados Unidos y las grandes corporaciones multinacionales que promovían la tesis de “desarrollo económico dependiente y selectivo” y destinaban a la Argentina el papel de país “granja” proveedor de productos agropecuarios e industrias derivadas de estos productos. Brasil buscaba esa “relación especial” con Washington para obtener inversiones o concesiones especiales, y ese favoritismo era percibido por Guglielmelli como promotor de un desequilibrio subregional en favor de Brasil. Ante este escenario y en sintonía con una situación mundial que mostraba la lucha de los países en vías de desarrollo contra el imperialismo, la receta que proponía Guglielmelli era la de superar alternativas “anacrónicas” como la rivalidad argentino-brasileña y la actitud imperial-hegemónica brasileña, y estimular la cooperación bilateral, única alternativa que permitiría a ambos países aumentar su capacidad de negociación frente a los

de la Cuenca del Plata, al que consideraban un ardid más de la diplomacia brasileña en su plan de expansión sobre la subregión.

Más allá de las pugnas argentino-brasileñas, se apunta en el Tratado que los signantes países están convencidos de la necesidad de mancomunar esfuerzos con el fin de “promover el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia directa y ponderable” (*Ibidem*) a fin de promover “en el ámbito de la Cuenca, la identificación de áreas de interés común y la realización de estudios, programas y obras, así como la formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos que estimen necesarios y que propendan” entre otras cosas “a la facilitación y asistencia en materia de navegación, a la utilización racional del recurso agua, especialmente a través de la regulación de los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo y al perfeccionamiento de las interconexiones viales, ferroviarias, fluviales, aéreas, eléctricas, y de telecomunicaciones”. (*Ibidem*)

Según se puede apreciar, por encima de sus pugnas binacionales, la preocupación de los países sudamericanos por el mejoramiento y control de las vías de comunicación ha estado siempre latente. Sin embargo, en los años en los que fue planteado originalmente y dada su orientación antiexpansionismo norteamericano, el acuerdo no fue apoyado desde instancias internacionales y no tuvo el financiamiento suficiente para concretarse. En 1992, después de la firma del MERCOSUR, se firma en Mendoza, Argentina, el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira) en el marco del Tratado para la Cuenca del Plata. Es hasta entonces que el BID, apoyado por inversionistas privados, empieza a interesarse en “apoyar” el financiamiento para la construcción de obras que faciliten la navegación y el transporte comercial-fluvial longitudinal en los cursos de agua de la Hidrovía y en que el FONPLATA empieza a tener mayor actividad. Es importante advertir que las condiciones políticas de esta década facilitaron las relaciones entre Argentina y Brasil –que decidieron establecer una alianza estratégica para salir de la crisis de la década perdida– y entre Bolivia y Paraguay, antiguos rivales de la guerra del Chaco.

Mediante el acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná los países signatarios se reconocen recíprocamente la libertad de navegación, de tránsito y de transferencia de carga, alije, transbordo y depósito con el fin de agilizar el flujo comercial y de **abolir impuestos**, que en aras del “libre comercio” dejan al Estado sin ingresos pero benefician al capital privado. Desde el año de la firma del nuevo acuerdo hasta ahora, el discurso de este banco rescata y reivindica siempre los

organismos económicos y financieros internacionales. Si se quiere tener más información cerca de la rivalidad entre Brasil y Argentina por el control de la Cuenca del Plata, consúltese Mario Rapoport y Amado Luiz Cervo, comps., El Cono Sur: una historia común, Ed. FCE, Buenos Aires, 2002, 368 pp.

objetivos del Tratado de la Cuenca del Plata como propios, tanto para dar *legitimidad* a los proyectos de construcción de infraestructura como para otorgar *legalidad* a las acciones del capital privado internacional en la región. Además, el Tratado de la Cuenca del Plata se ha vuelto un referente y acuerdo marco para la institucionalización de la IIRSA en tanto que deja abierta la posibilidad de integración por parte de cualquier miembro de la ALADI, lo que permitiría que otros países sudamericanos y las empresas trasnacionales allí asentadas utilizaran ventajosamente la vía.

Otro instrumento jurídico recuperado y enarbolado por los impulsores de la IIRSA para hacerla oficial y duradera y para que trascienda la orientación política del gobierno en turno es el Tratado de Cooperación Amazónica. Este tratado fue signado en Brasilia en 1978 por los representantes gubernamentales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, países que comprenden dentro de sus territorios nacionales la rica zona de la Cuenca del Amazonas⁹³. Ante la necesidad real de movilizar mercancías entre todos estos países aprovechando la corriente del Amazonas y sus afluentes, los países del acuerdo amazónico, al igual que los de la Cuenca del Plata, quería asegurarse mutuamente sobre la base de la reciprocidad la más amplia libertad de navegación comercial en el curso del Amazonas y demás ríos amazónicos internacionales sin por ello renunciar al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales en sus respectivos territorios, derecho inherente a la soberanía de cada Estado. Pero a diferencia de ese mismo acuerdo, la firma del de Cooperación Amazónica no contó con mayores conflictos entre signantes, pues siempre ha sido indudable la hegemonía de Brasil sobre los países con los que comparte la cuenca amazónica.

En el artículo VI del Tratado se advertía que “con el objeto de que los ríos amazónicos constituyan un vínculo eficaz de comunicación entre las Partes Contratantes y *con el Océano Atlántico*, los Estados ribereños interesados en un determinado problema que afecte la navegación expedita emprenderán, según el caso, acciones nacionales, bilaterales o multilaterales para el mejoramiento y habilitación de esas vías navegables”. (FOBOMADE, 2002b)

Mediante este acuerdo, los gobiernos involucrados pretendían crear una infraestructura física adecuada entre sus respectivos territorios, especialmente en los aspectos de transporte y comunicaciones. Por consiguiente, se comprometieron a estudiar las formas más convenientes de construir o perfeccionar las interconexiones viales, de transportes fluviales, aéreos y de telecomunicaciones, teniendo en cuenta los planes y programas de cada país para lograr el objetivo prioritario de incorporar plenamente esos territorios amazónicos a sus respectivas economías nacionales, en tanto que, como sigue sucediendo hasta ahora, ya por la inaccesibilidad a estas tierras

⁹³ Sobre las riquezas que posee esta región se hablará con mayor detenimiento más adelante.

debido a lo hostil del ecosistema selvático, ya por la propia ausencia de planes nacionales de incorporación de los habitantes indígenas de esta región, estas regiones están material y políticamente desvinculadas del gobierno central.

Sensibles a los problemas limítrofes entre algunos de sus miembros pero sobre todo conscientes de la importancia de la reivindicación de la soberanía nacional, los países del tratado establecieron enérgicamente que “ni la celebración del presente Tratado, ni su ejecución tendrán efecto alguno sobre cualesquiera otros Tratados o Actos Internacionales vigentes entre las Partes, ni sobre cualesquiera divergencias sobre límites o derechos territoriales que existan entre las Partes, ni podrá interpretarse o invocarse la celebración de este Tratado o su ejecución para alegar aceptación o renuncia, afirmación o modificación, directa o indirecta, expresa o tácita, de las posiciones e interpretaciones que sobre estos asuntos sostenga cada Parte Contratante” (*Ibidem*). Por eso, a diferencia del de la Cuenca del Plata, el tratado de Cooperación Amazónica no está ni abierto a adhesiones —es sólo para los amazónicos— ni es flexible en cuanto a su duración, pues ésta es ilimitada.

Para lograr sus objetivos —la salida al Atlántico, la construcción de una infraestructura terrestre y fluvial y la defensa de su soberanía sobre sus propios recursos eran, como se puede observar, algunos de los más importantes— planteaban desde entonces la eliminación de los obstáculos físicos que dificultaran o impidieran la navegación, así como las formas de solucionar los aspectos económicos y financieros correspondientes a los proyectos a fin de concretar los medios operativos más adecuados. Sin embargo, la posterior crisis de liquidez para hacer frente al endeudamiento externo así como la falta de interés de los organismos financieros regionales como el BID para apoyar estos proyectos, terminaron por abandonar el proyecto. Así, aunque el propio tratado comprendía que un proyecto de esta magnitud tendría que ser financiado por organismos externos, al afirmar que “las Partes Contratantes podrán, siempre que lo juzguen necesario y conveniente, solicitar la participación de organismos internacionales en la ejecución de estudios, programas y proyectos resultantes de las formas de cooperación técnica y científica” (*Ibidem*), tal financiamiento no llegaría sino hasta 1998, cuando la tecnocracia del BID y la del CAF decide apoyar el proyecto con miras a legitimar lo que se conocería posteriormente como IIRSA.

De esta forma, en el marco del ya mencionado “nuevo regionalismo” y en los preparativos del ALCA, el 6 de abril del año 2000 se firma la Declaración de Caracas, donde Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela “coinciden” en ‘que la creación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, dotada de una secretaría permanente, incidirá positivamente en la aspiración de agilizar los procedimientos y de dinamizar la ejecución de las decisiones’ (SELA, 2000:3). La Declaración de Caracas constituye así la incorporación del Tratado de Cooperación

Amazónica al IIRSA. Además, en esa declaración, los Ministros de Relaciones Exteriores se comprometen a continuar prestando su apoyo político a las gestiones de la Secretaría Pro Tempore que permitan continuar movilizando recursos internacionales hacia el Tratado para el financiamiento de las acciones conjuntas de desarrollo sostenible decididas por los países parte. En este contexto, los países parte “reconocen **con profundo aprecio** la asistencia financiera y técnica puesta a la disposición por gobiernos como el Reino de los Países Bajos, el Reino de Finlandia y la República Federal de Alemania y por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Unión Europea (UE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial (BM), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros”. (*Ibidem*. El resaltado es mío)

Con la Declaración de Caracas, los gobiernos de los países de esta región empiezan a demostrar su interés por lo que más tarde será conocido como el eje de integración y desarrollo amazónico de IIRSA pues admiten que “es perentorio profundizar en la consideración de acciones para hacer realidad una de las mayores aspiraciones del Tratado, aún sin concretar, como es la de *establecer una infraestructura de transporte intermodal* a través de la Amazonia. El objetivo de desarrollo de la *infraestructura física, energética y de comunicaciones sigue siendo un reto primordial en toda la región amazónica*, así como en el contexto más amplio de América del Sur. En ese sentido, los Cancilleres se muestran complacidos con la inclusión del tema en la convocatoria del Gobierno del Brasil para la I Reunión de Presidentes de América del Sur, en el segundo semestre de 2000”. (*Ibidem*. El resaltado es mío)

Por si el pronunciamiento de Caracas resultara insuficiente para demostrar la adhesión de sus miembros a las intenciones de la IIRSA para construir una geoestratégica infraestructura en la región, haciendo expresa referencia a las previsiones del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, los Presidentes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú —sin los de Bolivia, Guyana, Suriname y Venezuela, entendible dada la situación política en el primero y último de ellos—, en una Declaración dada el 27 de julio de 2002 en Guayaquil, pusieron de relieve “la importancia del Eje Multimodal del Amazonas dentro de un esquema de cooperación en el ámbito de sus regiones fronterizas, según lo previsto en la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA)”. (www.iirsa.org, 2003)

Además de rescatar estos instrumentos jurídicos regionales que regulan actividades comerciales en zonas de alto tráfico comercial y de potencial desarrollo, en la Reunión de Ministros del 2000 se establecieron las pautas para la realización de las actividades del Grupo de Trabajo Multilateral sobre

Corredores Terrestres Bioceánicos, que ya trabajaba a partir de la legislación mencionada. Es decir, se vinculó el trabajo que ya se venía haciendo entre la casi totalidad de los países sudamericanos en pos de su integración, con los planes del BID, que junto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo del Tratado de la Cuenca del Plata (FONPLATA) han sido muy activos en su apoyo a las reformas económicas en la región —las ya famosas reformas estructurales que devinieron privatización de los sectores estratégicos que hasta ese momento eran propiedad de las naciones—, que son elementos clave para entender el aumento de demanda para la construcción de la infraestructura física, así como para la incorporación del sector privado a este proyecto.

De acuerdo a lo afirmado en diversos documentos del BID y de otros organismos como la CEPAL, la INTAL, la CAN y la OLADE, entre otros, como la integración de la infraestructura de América del Sur apunta más allá del mero intercambio de mercancías y mano de obra y contempla también la integración energética, resulta necesaria la incorporación de este tema a los marcos jurídicos existentes —el Tratado de la Cuenca del Plata y el Tratado de Cooperación Amazónica— con el fin de lograr la armonización de políticas para el intercambio complementario de los recursos energéticos del subcontinente suramericano, tales como el petróleo, el gas y la hidroelectricidad, pues según los funcionarios del BID, este sector ha comenzado a desarrollarse como un elemento clave para la auténtica “aproximación sinérgica” entre los países de la región, por lo que “estos complejos energéticos deben ampliarse y mejorarse paralelamente a la preservación del medio ambiente y la eliminación de barreras injustificables”. (BID, *Op. Cit.*) Así, una vez organizado el despliegue de recursos para la construcción de los ejes de desarrollo e integración y legalizado a través de su incorporación en los instrumentos jurídicos de mayor alcance, la IIRSA no enfrenta mayores obstáculos para su construcción.

B. ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO DE LOS EJES DE DESARROLLO DE LA IIRSA

Si se pretende elaborar un análisis desde la geopolítica y la geoeconomía de los ejes de la IIRSA para después vincular su planeación con las motivaciones de los principales objetivos de la política exterior estadounidense en la región andina y en la cuenca amazónica —a saber, la necesidad interna de las élites político-empresariales de la Unión Americana de mantener su hegemonía en la región y la necesidad del capitalismo norteamericano de hacer frente a una situación de vulnerabilidad estratégica que lo deja en desventaja en la crisis de sucesión hegemónica actual— resulta fundamental la ubicación

de los *puntos geoestratégicos*⁹⁴ *del espacio andino y amazónico* donde se planea mejorar o construir alguna obra de infraestructura. Por eso, la forma de abordar el análisis de los ejes de la IIRSA partirá, primero, de la exposición de los planes y obras oficiales donde sea posible apreciar el conjunto de focos de acción de la iniciativa. En segundo lugar, se hará una revisión de las obras y espacios propuestos con la finalidad de establecer las razones por las que esos *lugares* mencionados son importantes para el planteamiento geoestratégico de un programa de política exterior —sea el de los Estados Unidos, gran potencia, el de Brasil, potencia regional, o el de los propios países andinos— y se analizará la importancia geopolítica que posee la construcción de las obras de infraestructura de cada uno de los ejes para el control del espacio sudamericano en general y andino y amazónico en particular.



Como se estableció con anterioridad, el Plan de acción que fue resultado de la reunión de septiembre de 2000 donde los Presidentes sudamericanos ratificaron su adhesión a la IIRSA, estableció acciones urgentes en tres planos. En primer lugar, el relacionado con la coordinación entre los gobiernos para establecer los planes de construcción o mejoramiento de infraestructura que fueran prioritarios y para coordinar la inversión gubernamental; es decir, que no haya dispersión ni entre planes ni entre inversiones a fin de agilizar la concreción de los ejes fundamentales de la IIRSA. En segundo lugar, el relacionado con la compatibilización y armonización de los aspectos regulatorios e institucionales para que no haya legislaciones comerciales que se contradigan entre los distintos países y para que este plan supraestatal se imponga sobre lo nacional de manera legal. Finalmente, se habló del financiamiento al proyecto, el cual no tiene que ser necesariamente público, por lo que se hizo un llamado a los distintos gobiernos para que alienten la concurrencia del capital privado “mediante estrategias comunes y soluciones e instrumentos creativos”. (www.iirsa.org, 2004)

En cuanto al primer plano, el de la coordinación intergubernamental, se establecieron claramente los criterios para la selección y priorización de ejes y propuestas sectoriales de integración. Así, se estableció que para la construcción de la infraestructura en la región se privilegiarían las

⁹⁴ Para los fines de este trabajo, se calificará de esta forma a los elementos de la geografía que sean vitales en el planteamiento de las estrategias de política exterior de un gobierno. Son *geoestratégicos* tanto los factores geográficos más o menos estables como los istmos, los litorales, los estrechos, las islas, los mares, los ríos, los lagos, etc., como los recursos naturales que se puedan obtener del medio natural. Por ejemplo, los estrechos de Bósforo y Dardanelos —líneas de comunicación importantes tanto para la paz o para la guerra— o el petróleo son geoestratégicos porque son muy importantes para la consecución de alguna línea estratégica inscrita dentro de lo económico, lo político y lo militar. Este calificativo proviene de *Geoestrategia*, parte de la geopolítica que al estudiar un fenómeno de las relaciones internacionales hace especial énfasis en la relación de las características físicas de la Tierra (factores geográficos) con las estrategias (o Grandes Estrategias) desplegadas por las grandes potencias en la búsqueda de la supremacía mundial. Al igual que la geopolítica, la geoestrategia ve en el espacio un referente importante para el análisis de lo histórico-social. Asimismo, la geoestrategia como herramienta teórica es válida para estudiar fenómenos que van más allá de los límites estatales pues está estrechamente ligada a las proyecciones de la política exterior de los países inmersos en la lucha por el poder mundial.

necesidades logísticas de las empresas exportadoras sobre las necesidades de los habitantes de cada uno de los países y de cada una de las zonas económicas que los conforman. De esta forma, un proyecto será priorizado mientras demuestre la posibilidad de una mayor cobertura geográfica de países y regiones; de un mayor flujo existente; de un mayor flujo potencial; de un mayor volumen de inversiones públicas ya en ejecución o proyectadas en el corto plazo en las áreas de influencia del eje a mejorar y construir; del interés y grado de participación del sector privado pero no de las exigencias de las poblaciones que habitan el territorio sudamericano.

En este sentido, de acuerdo a los anteriores criterios, los ministros de las áreas más estratégicas de cada una de las naciones sudamericanas junto con los asesores del BID, CAF y FONPLATA identificaron los ya mencionados diez focos denominados “Ejes de Integración y Desarrollo”: Eje MERCOSUR (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Santiago); Eje Talcahuano-Concepción-Neuquén-Bahía Blanca; Eje Andino (Caracas- Bogotá- Quito- Lima-La Paz); Eje Interoceánico (Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú); Eje Perú-Brasil-Bolivia; Eje Brasil-Guyana-Surinam-Venezuela; Eje Porto Alegre-Asunción-Jujuy-Antofagasta; Eje Multimodal del Amazonas; Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata; Eje Bolivia-Paraguay-Brasil. Cabe agregar que poco tiempo después, los documentos oficiales de la IIRSA agregaron como ejes el de la Logística Integral del Pacífico y el de la Logística Integral del Atlántico, pero estos pronto se retiraron de la página web oficial de la IIRSA.

Los anteriores ejes, que funcionaron durante poco menos de tres años, fueron súbitamente cambiados en enero de 2004. Aparentemente, los ejes previos –sobre los que trabajaron y discutieron investigadores y organizaciones políticas, quienes fueron los primeros en advertir la geoestrategia de la IIRSA y la vincularon al ALCA– dejaron de tener vigencia para dar lugar a nuevos ejes con nombres casi poéticos pero mucho menos reveladores geográficamente hablando que los anteriores. Tenemos así al **Eje de Capricornio**, que va de Brasilia a Chile pasando por Argentina y Uruguay, y que vino a sustituir al eje Porto Alegre-Asunción-Jujuy-Antofagasta; **Eje Andino**, cuya importancia geoestratégica lo hace permanecer; al **Eje Andino del sur**, que es nuevo y va de Perú y Bolivia a lo largo de Chile y Argentina hasta la Tierra de Fuego; **Eje del Amazonas**, antes llamado “Eje Multimodal del Amazonas” y que abarcaba a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú; **Eje del Escudo Guayanés**, que sustituye al Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Surinam; **Eje del Sur**, que sustituye al eje Talcahuano-Concepción-Neuquén-Bahía Blanca; **Eje Hidrovía Paraguay-Paraná**, que no existía; **Eje Interoceánico Central**, antes Eje Interoceánico (Brasil-Bolivia-Paraguay-Chile-Perú); **Eje MERCOSUR-Chile**, antes Eje MERCOSUR (San Pablo-Montevideo-Buenos Aires-Santiago); y el **Eje Perú-Brasil-Bolivia**, que antes era el eje **Eje Perú-Brasil (Acre-Rondonia)**.

Como podemos percatarnos, desaparecieron dos de los ejes geopolíticamente más importantes: el Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata y el Eje Bolivia-Paraguay-Brasil. Se puede decir, sin embargo, que mientras el segundo fue absorbido por el Eje Interocéánico, el Eje Perú-Brasil-Bolivia, el Eje del Amazonas y el Eje Andino, el primero, que plantea la bioceanidad a través de la conexión de los tres ríos más importantes de Sudamérica, no parece haber sido integrado completamente a algún otro. Por eso, tomando en cuenta que la nueva ordenación de los ejes sólo reorganiza la primera pero no la niega y más bien esconde objetivos de carácter geoestratégico que se reconocían en la primera, y que la organización actual describe con mayor detalle pero pierde la visión de conjunto, el análisis geopolítico y geoeconómico de los ejes a estudiar se realizará con base en los ejes del Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Suramericana del 2000 que modificados y todo, permanecen.

Tal como lo deja ver el planteamiento de los ejes de IIRSA, si bien es cierto que la infraestructura de los países conosureños es la más moderna de todo Sudamérica —incluso la argentina y la chilena puede ser comparada en algunos puntos con la de los países más ricos— no lo es menos que ésta no alcanza a cubrir ni los requerimientos de una gran potencia norteña en crisis ávida de poseer territorios y recursos naturales geoestratégicos ni los de otra potencia regional cuyas pretensiones implican el control de una rica área especialmente codiciada en la actualidad. Por eso son los países con menor desarrollo de infraestructura sobre los que la IIRSA pretende intervenir con mayor amplitud. De esta forma, los países andinos —Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia— y los que participan territorialmente de la cuenca amazónica —los anteriores más Perú, Guyana y Suriname— se convierten en el blanco sobre el cual existe el mayor interés ya por su posición geoestratégica, ya por los valiosos recursos de los que son depositarios. Es pues sobre los Ejes Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname, Interocéánico, Amazónico, Andino y Perú-Brasil-Bolivia, que fija su atención este trabajo.⁹⁵ Además, aunque los ejes de integración en América del Sur están planeados como un sistema complejo en los que no se puede entender ninguno fuera de la totalidad y, la mayoría de las veces, imbricándose unos y otros, para los fines de explicación de la importancia geopolítica y geoestratégica de estos ejes, se analizarán de acuerdo a la forma en que son divididos por la propia IIRSA.

(ver Mapa 1 en el Anexo de Mapas, p.278)

⁹⁵ Con lo anterior no se pretende afirmar que los ejes a desarrollar en el cono sur son menos importantes en términos de planeación estratégica; lo que se pretende decir es que en términos de los objetivos planteados en la introducción de este trabajo y de los objetivos de investigación de la autora del mismo, ambos girando en torno a los intereses geopolíticos y geoestratégicos de la política exterior de los Estados Unidos en el Arco Andino, donde se comprende la cuenca amazónica, el foco de atención recaerá sobre los países que forman parte de esta región.

a) EJE VENEZUELA-BRASIL-GUYANA-SURINAME (Eje del Escudo Guayanés) (Mapa 2, p.279)

De acuerdo a la información oficial, se pensó en la constitución de este eje porque actualmente el territorio que ocupan los países que lo conforman no se encuentra articulado como un polo de desarrollo, sino que se encuentra dividido en regiones relativamente aisladas unas de otras y con patrones muy distintos de desarrollo —la Región Oriental de Venezuela, por un lado y Guyana-Surinam, el estado de Amapá, Brasil, y el corredor Manaus-Boa Vista en los estados de Roraima y Amazonas, Brasil por el otro. Este Eje cuenta con una población aproximada de 7.1 millones de habitantes y con una densidad demográfica. es de 7,3 habitantes por km². El 77 % de la población se concentra en zonas urbanas con un 63 % en el rango de la actividad productiva. La actividad productiva dominante corresponde a la industria, que representa el 89 % de la producción. El 90% de las actividades industriales se desarrollan en la región oriental de Venezuela y en la SUFRAMA⁹⁶ en la ciudad de Manaus, lo que las constituye como centros de producción donde predominan las manufacturas de aluminio, acero, alimentos y bebidas, artículos domésticos y electrodomésticos. (www.iirsa.org, 2004)

Según los expertos de IIRSA, esta desarticulación del Eje se refleja en la considerable carencia de infraestructura que permita el acceso a los amplios territorios existentes y la interconexión entre los principales centros de concentración y actividad económica y afirman que el desarrollo de la infraestructura se dificulta por la gran cantidad de ríos que atraviesan el territorio. En la actualidad, la principal infraestructura de integración existente es la conexión carretera entre Manaus (Brasil) y Puerto Ordaz (Venezuela), que va acompañada de una línea de transmisión eléctrica desde Macagua, Venezuela hasta Boa Vista, Brasil. Actualmente no existen conexiones terrestres consolidadas entre Brasil y Guyana ni entre Venezuela y Guyana. La carretera que conecta Macapá —ciudad a la altura del Ecuador ubicada en el Estado de Amapá, Brasil— con la frontera de Brasil y la Guayana Francesa y luego, a través de ésta, se conecta a Surinam, presenta diversos cuellos de botella que incluyen cruces de ríos y tramos aislados en malas condiciones. Salvo el caso de Venezuela y Brasil, los pasos de frontera son deficientes o inexistentes. Por otra parte, las conexiones aéreas a las principales ciudades del Eje son escasas y difíciles desde fuera y, más aún, entre ciudades del Eje. En general, los niveles de cobertura de servicios de telecomunicaciones e informática en son bajos y costosos, lo cual contribuye al aislamiento de las poblaciones.

⁹⁶ SUFRAMA es la Superintendencia de la Zona Franca de Manaus.

La formulación y análisis de los proyectos de estructuración de infraestructura necesarios para la IIRSA en el Eje están supeditados, según los expertos, a la planificación de largo plazo del desarrollo del territorio, de modo que se pueda definir en primer término los niveles de servicios básicos que se desean establecer en las distintas áreas y luego dimensionar y diseñar la infraestructura según corresponda. Asimismo, a decir de los propios organizadores del eje, resulta estratégico el planteamiento de proyectos transnacionales que vinculen las inversiones en infraestructura de integración con el desarrollo de unidades productivas, por lo que, afirman, este el tipo de propuestas es particularmente propicio para la utilización de instrumentos de asociación público-privada, que “sirven para movilizar capital privado en apoyo a las inversiones productivas y mejorar la racionalidad económica de las inversiones en infraestructura” (*Ibidem*).

El desarrollo de este Eje supone la construcción de cuatro grupos de proyectos. El primero de ellos implica la interconexión entre Venezuela y Brasil. La función estratégica de esta conexión consiste en que, de construirse, desarrollaría tanto los sectores potenciales económicos como las industrias de bienes pesados y durables, minería, joyas, agronegocios y turismo (ecoturismo y playa y jungla caribeña) (*Ibidem*), tomando en consideración la existente ruta pavimentada de Manaus-Caracas y la línea de transmisión entre Guri y Boa Vista. El llamado ‘Proyecto Ancla’⁹⁷ de este primer proyecto es la carretera Caracas-Manaus, que ya existe. Los otros proyectos del grupo contemplan la construcción de un Canal de Navegación en Brasil entre los Ríos Negro y Branco, que conectarían a Manaus con Boa Vista; el mejoramiento del Puerto de Guanta, en Venezuela; la construcción de una vía férrea que conecte al Puerto de Guanta con el Puerto de Ordaz; la edificación de un Puente Bimodal sobre el Río Orinoco; la construcción de un sistema de soporte de la navegación por el Río Orinoco; la expansión de la línea de transmisión Guri-BoaVista-Manaus, en Brasil; el tendido de una línea de fibra óptica u otra tecnología que conecte Caracas con el Norte de Brasil a través de una línea existente (Boa Vista) a la propuesta (Manaus). (*Ibidem*)

El segundo grupo de proyectos contempla la interconexión de Brasil y Guyana. La función estratégica de este proyecto es apoyar la integración entre los estados brasileños de Amazonas y Roraima con Guyana a través de la consolidación de un sistema infraestructural que una ambos países. El Proyecto Ancla es la construcción de la carretera Boa Vista-Bonfín-Lethem-Linden-Georgetown. Los otros proyectos del grupo implican la construcción de un puente sobre el Río Itakutu, en la frontera de Brasil y Guyana; la edificación de un puerto de aguas profundas en Guyana; la construcción de una planta de energía hidroeléctrica y una línea de transmisión a Georgetown, capital de Guyana; la

⁹⁷ Un *Proyecto Ancla* es el proyecto en torno al que se supedita la construcción de los demás. Sin ir más lejos: es el proyecto principal del grupo de proyectos.

construcción de una planta de energía hidroeléctrica y una línea de transmisión a Boa Vista y Manaus; el tendido de una línea de fibra óptica u otra tecnología que logre interconectar a través del sistema de cableado internacional submarino las ciudades de Boa Vista y Manaus; la promoción de inversiones industriales en Boa Vista dirigidas a la construcción de una planta de celulosa, una procesadora de soya y una planta de empaquetar café instantáneo y carne. (*Ibidem*)

El tercer grupo de proyectos está relacionados con la interconexión entre Venezuela, Guyana y Suriname. Su función estratégica es lograr la integración de los territorios que van a todo lo largo de la Costa del Caribe, en el extremo norte de Suramérica. El Proyecto Ancla tiene que ver con la conexión entre Ciudad Guyana (Venezuela), Georgetown (Guyana) y Paramaribo (Surinam). Otros proyectos del grupo son la construcción del puente o el mejoramiento del cruce sobre el Río Cuyuní, en Guyana; la edificación de un puente o el mejoramiento del cruce sobre el Río Mazaruni, ubicado también en Guyana; la construcción de un puente o el mejoramiento del cruce sobre el Río Essequibo, el más grande e importante de Guyana; la construcción de un puente o el mejoramiento del cruce sobre el Río Demerara en Surinam; la edificación de un puente o el mejoramiento del cruce sobre el Río Berbice en el este de Guyana; la construcción de un puente o el mejoramiento del cruce sobre el Río Corentine en la frontera de Guyana y Surinam; y finalmente, la construcción de un puente o mejoramiento del cruce sobre el Río Coppename. (*Ibidem*)

El último grupo de proyectos incluye la interconexión Guyana-Surinam-Guyana Francesa-Brasil. La función estratégica de estos proyectos es la consolidación de una conexión física internacional que integre a Guyana y a Surinam con los estados brasileños de Amapá y Parán a través de la Guyana Francesa, la cual, por cierto, no ha sido consultada. El Proyecto Ancla de este grupo es el mejoramiento de la carretera Georgetown-Albina. Los otros proyectos del grupo incluyen mejoras al cruce del Río Berbice; la construcción de un puente o mejoras al cruce al Río Corentine; mejoras a la conexión Apura hasta Niew Nickerie; la construcción de una planta de energía hidroeléctrica; la construcción de una línea de transmisión de Alto Voltaje desde Paramaribo que pase por Niew Nickerie y termine en Guyana (Corriverton); la conexión eléctrica entre Surinam y la Guyana Francesa; mejoras al cruce del río Marowynen entre Albina y St. Laurent; la construcción de un puente sobre el Río Oiapoque (Guyana Francesa-Brasil); la construcción de una planta de energía hidroeléctrica de en Tapanahony y de líneas de transmisión a Guyana Francesa y Amapa; finalmente, mejoras a la carretera Oiapoque-Macapá y al Puerto Santana en el Río Amazonas. (*Ibidem*)



Independientemente de lo afirmado en el discurso oficial, es posible decir que este eje pretende ser una gran arteria terrestre y fluvial que empiece en la costa norte caribeña de Venezuela, en Puerto

Cabello, vaya hacia la capital Caracas, continúe hacia Barcelona, pase por Ciudad Bolívar –que es una de las ciudades principales atravesada por el Orinoco, río que desemboca en el Atlántico– recorra toda la Gran Sabana y pase hasta Santa Elena del Uairén, frontera con Brasil, y de ahí vaya hasta Boa Vista y desde aquí hasta Manaus, importante puerto amazónico desde donde se puede acceder al Atlántico vía el río Amazonas. La segunda arteria iría de Georgetown, Guyana, hacia la capital de Suriname, Paramaribo y de ahí a Cayenne, capital de la Guayana Francesa. La principal intención de construir este eje multimodal es unir las carreteras ya construidas en Venezuela, Guyana, Suriname y Guyana Francesa con la carretera que parte de Manaus en Brasil a fin de dar salida a las mercancías de este puerto brasileño hacia el Caribe, ya sea vía Venezuela o vía Guyana, y también permitir que las mercancías de los países con costa en el Caribe salgan al Atlántico vía Brasil.

Si se mira con atención el mapa del eje, podemos percatarnos que el énfasis de la vía propuesta está al interior de Venezuela, país donde se plantea la construcción y/o ampliación de un mayor número de carreteras que vayan desde el Zulia, lugar donde actualmente se extrae la mayor cantidad de petróleo y donde existen reservas de carbón mineral, en el occidente del país, desde el Táchira, frontera con Colombia y del estado de Falcón hacia el centro para unirse con el eje principal, marcado en rojo. La región priorizada es el oriente del país, región donde se planea el mejoramiento de las carreteras que confluyen en el Delta del Orinoco, la actual región con mayores reservas de petróleo y gas. El afán de construir una vía férrea que vaya de Guanta a Puerto Ordaz, además de conectar mejor a esta región con una posible salida al Atlántico vía Brasil, implica el aumento en las posibilidades de extracción de petróleo, carbón y gas del Delta orinoqueño.⁹⁸ Además, es bien sabido que más del 90% de la electricidad venezolana se produce a través de hidroeléctricas en la región del Guri, Estado de Bolívar, contemplada en la construcción del eje. (Corpozulia, 2002:25)

Por eso, el BID y la Corporación Andina de Fomento (CAF), en plena colaboración con el bolivariano y antiimperialista gobierno de Hugo Chávez, ha empezado ya la construcción de los tres ejes interiores en Venezuela: el eje de desarrollo occidental; el eje de desarrollo oriental y el eje fluvial

⁹⁸ El 11 de noviembre de 2003, la prensa venezolana dio a conocer que representantes de las compañías trasnacionales Shell y Exxon Mobil manifestaron su disposición en participar en los proyectos de explotación y exploración de crudos pesados que se encuentran en la Faja Petrolífera del Orinoco donde se existe la mayor concentración de recursos del hemisferio, donde se estiman reservas de 275 mil millones de barriles y donde ya se encuentra trabajando Chevron y Texaco. Así lo expresó el viceministro de Hidrocarburos, Luis Vierma quien destacó que en reuniones sostenidas con representantes de dichas empresas, encuentros que formaron parte de la agenda que realizó la delegación venezolana que viajó a Estados Unidos, las compañías manifestaron la posibilidad de participar en los negocios que próximamente Petróleos de Venezuela (Pdvs) anunciará sobre la Faja Petrolífera venezolana. El ministro aprovechó la oportunidad para informar que Venezuela no era sólo petróleo sino también el país con las mayores reservas de gas que existen en el hemisferio. Según sus declaraciones, Venezuela es el octavo país con mayores reservas probadas de gas que alcanzan 147 TCF.

Orinoco-Apure-Guasualito.⁹⁹ Así, Venezuela resulta ser el punto de unión de tres de los ejes del IIRSA: el eje andino, que continúa en Venezuela en el eje de desarrollo occidental; el ya mencionado eje Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname en el eje de desarrollo oriental; y el eje multimodal Orinoco-Amazonas-Plata —aparentemente desaparecido en los nuevos ejes de IIRSA— en el eje Orinoco-Apure-Guasualito. Los ejes internos se convierten así en la continuación territorial de Colombia y Brasil a través de Venezuela hacia al mar Caribe.

La lógica de construcción del Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname no se puede entender si no se atiende a la magnitud de recursos naturales estratégicos que se encuentran a lo largo del territorio venezolano y que ni siquiera están vinculados por una buena red infraestructural al interior del país. Por eso resulta necesario ahondar en los mencionados ejes internos.

El eje Orinoco-Apure está ubicado en la franja media de Venezuela y la recorre de Occidente a Oriente, a lo largo del Río Apure que corre desde el Estado de Barinas y Apure hasta que encuentra al Orinoco justo en el extremo noroccidental del Estado de Bolívar, el más grande Venezuela. Su área de influencia inmediata —denominada estrictamente en términos geográficos ‘cuenca’— ocupa una superficie superior a los 300.000 km², que representa algo más del 30% del territorio nacional y aloja aproximadamente el 13% de la población nacional. (CAF, 2003:24) Así, este eje se extiende desde San Cristóbal del Táchira, frontera con Colombia, hasta Tucupita, en el Delta del Orinoco y abarca total o parcialmente trece estados y sus municipios. El eje Orinoco-Apure es el eje fluvial más importante para este país caribeño-sudamericano. La cuenca orinoquense constituye para Venezuela un gigantesco volumen de agua que fluye hacia el Atlántico, con todas las implicaciones geoeconómicas y geopolíticas que esto representa, pues permite además un mayor control de los territorios amazónicos, ricos en biodiversidad, que en la actualidad se encuentran poblados por grupos indígenas.

El gobierno nacional venezolano ha establecido dentro de sus planes de desarrollo como una prioridad la puesta en marcha del proyecto Orinoco-Apure aunque, como todo plan gubernamental aunque sea de un gobierno que se dice bolivariano y antiyanqui, no necesariamente apunte al bienestar de las poblaciones afectadas por este proyecto que intenta vincular a los ríos con planes de desarrollo regional en la cuenca y con planes de reordenamiento territorial. Además, su planeación no es de corta data. Según apunta un documento de CAF, los estudios hidrológicos del Río Apure fueron organizados en 1986, contribuyendo a los mismos el US Geological Survey, la Universidad de Colorado, investigadores de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y personal del Ministerio de Transporte

⁹⁹ Es necesario decir que hasta ahora sólo se tienen referencias del eje Orinoco-Apure y del eje de desarrollo Occidental. El oriental, donde se encuentran la mayor parte de las reservas petroleras venezolanas o no ha sido hasta ahora tan desarrollada como los anteriores o la información sobre el proyecto se encuentra reservada.

venezolano (CAF, 1998:68), que unieron esfuerzos para estudiar la posibilidad de activar el comercio a través del desarrollo de esta vía fluvial.

Sin embargo, este proyecto va más allá de la activación económica de la cuenca del Orinoco. Entre las intenciones del gobierno venezolano, apoyado por las fuerzas armadas quienes llevan a cabo la mayor parte de la investigación geográfica, están, primero, contrarrestar una vieja pero sostenida intención colombiana de buscar salida al Atlántico a través de la cuenca del Orinoco invocando derechos de libre navegación sobre la misma. Después, pretende aprovechar el financiamiento que los organismos internacionales como BID y CAF le proporcionan para utilizar el enorme potencial de recursos naturales y mineros de las regiones que comprende las cuales se podrían transportar con mayor facilidad y agilidad por esta vía con salida al Atlántico. Se habla de que la zona de la cuenca del Orinoco posee una potencial de producción de capacidad de producción de 200 000 000 barriles de petróleo pesado; 25 000 000 has. de bosque; 90% de los recursos hídricos del país y 95% de los hidroeléctricos; 1 200 000 de suelos aptos para cultivos; importantes recursos pesqueros; y minerales metálicos y no metálicos. (MPD, 2000)

La construcción de este eje resulta prioritaria para los planes estratégicos de la propia Venezuela en el sentido en que éste le permite diversificar sus exportaciones petroleras y fortalecer sus alianzas con la mayor potencia regional. Es de todos conocido que el gobierno estadounidense no mira con buenos ojos que Venezuela y Brasil hayan firmado ya acuerdos para crear empresas conjuntas de distribución y comercialización de gasolinas y derivados petroleros venezolanos en Brasil. Una de las futuras compañías del esfuerzo conjunto entre PDVSA y Petrobrás de Brasil tendrá como objetivo crear en el norte y en el nordeste de Brasil una red de estaciones de servicios cuyas ganancias por venta de gasolina y diesel cuyas ganancias serán compartidas entre las dos empresas. Además, está planeado que en un futuro cercano, Venezuela y Brasil se unan para la producción de campos ya descubiertos y también para exploración conjunta y quizá para la producción en la plataforma deltana (del Delta del Orinoco) en el noroeste de Venezuela.

El Eje de desarrollo Orinoco-Apure conecta además al eje de desarrollo occidental con el eje de desarrollo oriental. El primero de ellos es un boquete abierto al Caribe y Colombia, con posibilidad de conexión con el océano Atlántico, a través del eje Orinoco-Apure. El eje occidental se extiende desde Maracaibo hasta el río Guasualito, y coincide con la región occidental ubicada entre la cordillera de Perijá y la Cordillera de los Andes, que encierran la cuenca del Lago de Maracaibo. Este eje abarca una superficie de 92.900 km², que representa el 10. 14% del territorio nacional. Está habitado por una población estimada de casi 6 millones de habitantes que representa el 23% de la población nacional comprende los estados Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia, con todos sus municipios.

Según las propias apreciaciones del gobierno nacional, los territorios geográficos del occidente del país tienen indudables ventajas comparativas a escala nacional e internacional por su potencial en explotación de materias primas de hidrocarburos, hidroelectricidad, carbón, fosfatos y otros minerales metálicos y no metálicos, a lo cual se agregan variados recursos agropecuarios y enorme potencial industrial y de mano de obra abundante y barata. Ya que existen importantes reservas de minerales de barita y cobre en la sierra de Perijá, que permanecen inexploradas, así como los abundantes yacimientos carboníferos de Tokuko-Aricuaizá y de Río de Oro, el desarrollo de esta región resulta de importancia vital no sólo para el gobierno venezolano sino para varias de las corporaciones transnacionales de las grandes potencias que ya se encuentran apostadas en la región explotando el petróleo del Lago de Maracaibo.

Para el eje de desarrollo occidental están programados proyectos que incluyen la recuperación del Lago de Maracaibo, la construcción de un Puerto de Aguas Profundas¹⁰⁰, el crecimiento de una empresa local llamada “Carbones del Guasare”, la ampliación y mejoramiento del Ferrocarril de Occidente, planes de desarrollo agropecuario, integración física binacional con Colombia, desarrollo mayor de la petroquímica y de la industria petrolera. No es pues fortuito que desde el año 2002 el revolucionario gobierno chavista reciba los recursos de la CAF y el BID para financiar el desarrollo del eje occidental, al cual se le han inyectado más de 10 millones de dólares sólo en preinversión para realizar estudios de la región. Notas del periódico oficial del gobierno venezolano afirman que el costo de los estudios para iniciar la realización del eje se ha estimado en 17 millones de dólares de los cuales la CAF pagará el 60% y el resto se financiará con aportes del ejecutivo nacional y del regional. (ALIDE, 2002). La conexión de los ejes occidental, oriental y Orinoco-Apure con el eje Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname se presenta así como la oportunidad idónea para que las corporaciones transnacionales controlen y movilicen con mayor facilidad recursos naturales estratégicos como biodiversidad, energía, agua, y minerales.

b) EJE INTEROCÉANICO BRASIL-BOLIVIA-PARAGUAY-PERÚ-CHILE (Eje Interoceánico Central) (Mapa 3, p. 280)

Según la información oficial de IIRSA, el Eje Interoceánico Central es un eje transversal del cual forman parte cinco países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. La superficie total

¹⁰⁰ Este proyecto es uno de los de mayor envergadura para construir a corto plazo en Venezuela es el denominado PUERTO AMÉRICA dado que no sólo sustituiría al Puerto de Maracaibo sino que permitiría extraer con mayor facilidad y agilidad el

de estos cinco países es de 12 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al 68% de la superficie total de América del Sur que es de 17,7 millones de kilómetros cuadrados. El Eje Interocéánico abarca ocho de los nueve Departamentos de Bolivia, con la excepción de Pando; cinco de los veintisiete estados de Brasil: Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Paraná, Río de Janeiro y San Pablo; la primera región de Chile; todo el Paraguay y las Provincias de Arequipa, Moquegua y Tacna del Perú. La superficie del Eje Interocéánico es de 3.3 millones de kilómetros cuadrados que es equivalente al 28% de la superficie de los cinco países que hacen parte del Eje y al 19% de la superficie total de América del Sur. Las distancias Este-Oeste en línea recta entre los Puertos del Pacífico y del Atlántico que hacen parte del Eje, son un poco menores a 3 mil kilómetros aunque las distancias por carretera son un poco mayores a los 3 mil kilómetros. La distancia Norte-Sur en línea recta entre Cuiabá y Asunción del Paraguay es de un poco más de mil kilómetros. Por vía terrestre, es de más de dos mil kilómetros. (IIRSA, *Op. Cit.*)

El territorio abarcado por el Eje posee los más diversos climas. El mapa de la pluviosidad de Suramérica muestra que forman parte del Eje las zonas con más rango de pluviosidad en el continente. Sin embargo, el área ocupada por este Eje tiene zonas desérticas con índices de pluviosidad de los más bajos en el mundo, que no alcanzan los 250 milímetros de precipitación al año. Tiene también áreas con los índices de pluviosidad más altos, que superan los dos mil milímetros al año. El suelo del territorio muestra una diversidad semejante: el único tipo de suelo que no se encuentra extendida en el eje es el de glaciario, aunque hacen parte de aquél importantes nevados de la Cordillera de los Andes que superan los cinco mil metros de altura. (*Ibidem*)

Para la construcción de este eje se tienen programados cinco grupos de proyectos. El primero de los proyectos planea la conexión Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil. La función estratégica de este grupo de proyectos es la interconexión de zonas productivas regionales. Se trata de la vinculación de que llaman 'hinterland' con el Pacífico, articulando territorios aislados. El Proyecto Ancla es la pavimentación del camino Carmelo Peralta-Loma de Plata. Los otros proyectos del grupo son la conexión de fibra óptica Porto Murtinho-Loma de Plata; la construcción del Paso de Frontera Carmelo Peralta-Porto Murtinho; el proyecto Gasífero-Termoeléctrico Bolivia-Paraguay; la construcción de los Pasos de Frontera Infante Rivarola-Cañada Oruro; la construcción de la carretera Cañada Oruro-Villamontes-Tarija-Estación Abaroa; la edificación del Paso de Frontera Ollague-Estación Abaroa; la construcción de la carretera Ollague-Collahiasi 22; el mejoramiento de la carretera Santa Cruz-Villamontes; y la pavimentación del camino Potosí-Tupiza-Villazón.

carbón mineral abundante en la región, recurso natural muy efectivo para la producción de electricidad y que en la actualidad representa la mayor fuente de energía calorífica para producir electricidad en el mundo.

El segundo proyecto abarca la optimización del corredor Corumbá-São Paulo-Santos-Río de Janeiro. Su función estratégica es reducir significativamente los costos de transporte para cargas brasileñas, bolivianas y paraguayas que tienen como destino el Atlántico y los propios países, así como, a decir de los planeadores, aumentar la complementaridad económica entre los países, aumentar el componente ferroviario en la matriz de transporte regional y apoyar al sector turismo en la región andina y en el Pantanal, zona que comparten Bolivia y Brasil. (*Ibidem*) El Proyecto Ancla es la construcción de un anillo ferroviario en São Paulo (Norte y Sur). Los otros proyectos del grupo son: la modernización del ferrocarril Corumbá-Campo Grande; la renovación del ferrocarril Campo Grande-Barurú-Santos; la construcción del anillo ferroviario de Campo Grande; la construcción de la circunvalación vial de Campo Grande y de Corumbá; la modernización del Puerto de Santos; la construcción de la vía perimetral del Puerto de Santos; la construcción del acceso vial del Puerto de Sepetiba; la transformación del Anillo de circunvalación vial de São Paulo; y modificaciones en el anillo de circunvalación vial de Río de Janeiro.

El tercer grupo de proyectos incluye la conexión Santa Cruz-Puerto Suárez. Su función estratégica consiste en completar la conexión vial y ferroviaria a lo largo del Eje, así como la reducción significativa de costos de transporte para cargas brasileñas, bolivianas, chilenas y paraguayas, hacia el Atlántico, el Pacífico y entre los países mismos, el aumento de complementaridad económica entre los países, el apoyo al sector turismo en la región andina y en el Pantanal y la conexión con las hidrovías Ichilo-Mamoré y Paraná-Paraguay. El Proyecto Ancla es la construcción de la carretera Pailón-San José-Puerto Suárez. Los otros proyectos del grupo son la instalación de fibra óptica a lo largo de esta carretera; la construcción de un paso de frontera entre Puerto Suárez y Corumbá; y la privatización del Ferrocarril / Carretera Motacucito-Puerto Bush, con operación portuaria.

El cuarto grupo de proyectos comprende la conexión Santa Cruz-Cuiabá. Su función estratégica es el desarrollo del potencial agrícola de la región oriental de Bolivia y del Mato Grosso, además de la intensificación en la Integración del Pacífico con la región de Centro Oeste de Brasil (Mato Grosso) y viceversa y el aumento de tráficos comerciales en ambos sentidos. El Proyecto Ancla es la construcción de la carretera San Matías-Concepción. Los otros proyectos del grupo son la construcción del Paso de Frontera Porto Liamao-San Matías; la construcción de un Puente en Banegas; la pavimentación del puente Banegas-Okinawa; y la pavimentación de la vía Porto Limao-San Matías.

El último grupo prioriza las conexiones del Eje al Pacífico: Ilo/Matarani-Desaguadero-La Paz, Arica-La Paz e Iquique-Oruro-Cochabamba-Santa Cruz. La función estratégica de este grupo de proyectos es el aumento del intercambio comercial entre los países del eje hacia los mercados internacionales, la reducción de costos de transporte del Eje hacia el Pacífico, la reducción de costos de

importación desde el Pacífico, el aumento de la actividad conjunta entre los grupos de proyectos, el aumento de confiabilidad en el corredor al reducir los riesgos, el impulso al desarrollo fronterizo y consolidación de mercados locales y la integración física de países asociados con el MERCOSUR. (*Ibidem*) El Proyecto Ancla es la Rehabilitación del tramo El Sillar. Los otros proyectos del grupo son: el mejoramiento de los Puertos de Ilo y Matarani; la rehabilitación del Puerto Ilo-Matarani (Costanera Sur); el mejoramiento del aeropuerto de Ilo; la pavimentación de la vía Tacna-Mazocruz (Ruta Desaguadero); el mejoramiento de servicios en Puerto de Arica; la privatización del aeropuerto de Arica; la construcción de un Paso de Frontera entre Pisiga-Colchane; la rehabilitación de la carretera Iquique-Colchane; la pavimentación de la carretera Antigua Santa Cruz-Cochabamba; la rehabilitación del Puente La Amistad; la construcción del ferrocarril Aiquile-Santa Cruz; la rehabilitación de varios tramos de Carretera Arica-Tambo Quemado; y la reconstrucción de la carretera Oruro-Pisiga. (*Ibidem*)



El Eje Interoceánico planteado por los documentos oficiales de la IIRSA es el famoso ‘corredor biocéánico’ tan anhelado por los estrategas brasileños y norteamericanos, el cual vincula el Océano Atlántico (las costas del Brasil) con el Océano Pacífico (las costas de Chile y Perú) atravesando Bolivia por el medio. Se trata de poder circular entre los puertos brasileños y los puertos peruanos y chilenos pasando por Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

En este Eje Bolivia se convierte en el punto nodal porque queda justo en el centro de Sudamérica y en el camino de Brasil hacia las costas del Pacífico. Se pretende que este eje una Río de Janeiro, Sao Sebastiao, el puerto de Santos, Sao Paulo y Campo Grande en Brasil y parte de Paraguay vía el río del mismo nombre, con las ciudades económicamente más importantes bolivianas como Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con Desaguadero y Tacna en Perú y finalmente con Arica camino a Antofagasta en Chile. Si se observa con atención, este eje se presenta como una vía carretera y ferroviaria que implica varias privatizaciones.

Si Brasil pretendiera evitar el paso por Bolivia, los costos serían mayúsculos porque implicaría la construcción de carreteras sobre terreno selvático que ni siquiera está explorado. Como la red carretera brasileña está prácticamente construida y en pleno funcionamiento, al igual que las carreteras chilenas, la mayor parte de la inversión tendría que hacerse en Bolivia, país conocido en Sudamérica por tener las carreteras en peores condiciones, pues muchas de ellas ni siquiera están asfaltadas.

Así, cuatro proyectos de carretera en Bolivia son fundamentales para el Eje Interoceánico: La carretera Toledo-Pisiga, que forma parte del tramo Oruro-Pisiga. Entre Oruro y Toledo, ya se ha terminado la carretera pero la parte entre Toledo y Pisiga se encuentra en búsqueda de financiamiento aunque las autoridades municipales mencionan que ya cuenta con todos los estudios de preinversión.

(FOBOMADE, 2003b:19) El segundo proyecto es el de El Sillar, sitio que se encuentra sobre la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, la ciudad más activa económicamente de Bolivia. El principal estudio cuenta para su financiamiento con un crédito del BID y aunque hacía años que se necesitaba mejorar este tramo, se prioriza su construcción solamente cuando aparece como parte vital para los Ejes de la IIRSA pues constituye una importante alternativa para la exportación de la producción agrícola brasileña hacia el Océano Pacífico.

El tercer proyecto, el de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez se presenta como la más importante para la IIRSA y para los bancos que lo financian. La ejecución del proyecto Santa Cruz-Puerto Suárez es financiado por el BID, Unión Europea, Gobierno del Japón, CAF, Banco Mundial, Cooperación para el Desarrollo Económico de Corea, Gobierno de Bolivia y Prefectura de Santa Cruz. El presupuesto previsto para la construcción del proyecto es de aproximadamente 390 millones de dólares y se tenía previsto iniciar la ejecución del mismo empezando por el tramo San José-Roboré financiado por la CAF en el año 2003; sin embargo, problemas en la licitación mantienen indefinida la fecha de inicio de obras. (*Ibid.*:20)

La carretera Santa Cruz-Puerto Suárez pretende que Bolivia cuente con dos sistemas de transporte (carretero y ferroviario) para obtener importantes beneficios sociales y económicos mediante el impulso a la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas para mejorar la competitividad de varias cadenas productivas establecidas en Santa Cruz (la de la soya, madera, carne y otros productos agroindustriales) mediante la reducción de costos de transporte, y la facilitación del acceso a las zonas de producción. Asimismo, con el ramal Santa Cruz-Concepción- San Matías se pretende lograr una conexión a través del eje principal del corredor, con la población de Cuiabá y de esta alcanzar mayor vinculación con otras regiones del Brasil, ejerciendo una importante influencia en la zona del Pantanal de San Matías y zonas de explotación y exploración minera.

Sin embargo, la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez es la más polémica dado que su construcción traería los mayores efectos sociales y ambientales para el país andino. De concretarse, este proyecto atravesaría la región conocida como El Pantanal¹⁰¹, que forma parte de la Amazonía y donde

¹⁰¹ El Pantanal Boliviano es un sistema altamente complejo y dinámico que forma parte del gran Sistema Pantanal, uno de los humedales de agua dulce más grande e importante del mundo, situado en Bolivia, Brasil y Paraguay. Es además uno de los ecosistemas más conservados de todo el Pantanal Sudamericano. Las regiones del Pantanal Boliviano establecen un ambiente fragmentado compuesto por comunidades vegetales del Bosque Seco Chiquitano (ecoregión limitada al territorio boliviano que se supone es un reducto de bosques secos de épocas climatológicamente anteriores distintas a las actuales), intercalado con Sabanas del Cerrado (sabana arbolada), parte de la región del Gran Chaco al sur, caracterizada por bosques y matorrales bajos y densos, y al interior la presencia de la llanura de inundación con variedad de tierras húmedas, pantanos, lagos, lagunas de diferentes dimensiones y ritmos estacionales, además de unidades transicionales. Estas unidades, conforman en su conjunto ecosistemas, hábitats y micro hábitats distintos, sujetos durante el año a procesos permanentes de cambio producidos por las fluctuaciones en los niveles de inundación. Los diferentes aspectos físicos de esta inundación, como la profundidad y duración, erosión, sedimentación y las características químicas del agua, además de la geología,

se puede encontrar una de las mayores porciones de selva virgen de la cuenca del Amazonas que resguarda una gran variedad de especies animales y vegetales como aves, jaguares, osos meleros, venados, monos, etc., que están consideradas como especies vulnerables. Además, esta carretera pasaría sobre el territorio de los pueblos indígenas Chiquitano y Ayoreo, que hasta ahora han conservado muy bien los bosques en los que se asientan. Este camino avanzaría también muy cerca de las áreas protegidas como la Kaya-Iya y el Parque Nacional Otuquis que se encuentra cerca de Puerto Suárez.

Los principales impactos sociales generados por el proyecto Santa Cruz-Puerto Suárez se relacionan con el área de influencia del mismo. La Constitución del Derecho de Vía, que significa la intervención directa en una franja de 565.9 km de largo por 100 m de ancho (5.659 Ha) para la implantación de la carretera, implica la afectación a la tenencia y propiedad de la tierra en una región donde existen problemas de inseguridad jurídica sobre la propiedad de la misma, agravados por un lento proceso de saneamiento y por la especulación inmobiliaria en función de las perspectivas de valorización de la tierra por efecto de la carretera. La afectación a la propiedad de la tierra significa a su vez afectación a la producción agrícola, ganadera y recursos naturales; daño a viviendas e instalaciones; segmentación del territorio de las comunidades indígenas y campesinas; riesgo de invasión y ocupación ilegal; presión sobre tierras indígenas y comunitarias, lo que tendería a desplazar a comunidades. (*Ibid*: 21)

El cuarto proyecto es de la carretera Concepción-San Matías, que es otro tramo importante para el Eje Interoceánico y forma parte del trecho entre Santa Cruz y San Matías, que integra un corredor entre Cuiabá (Brasil) y el puerto chileno de Arica, lo que daría la anhelada salida a las exportaciones brasileñas hacia el Pacífico.

Sin embargo, Bolivia no sólo es importante por su estratégica ubicación para los planes de la IIRSA. También lo es porque es el único país de Sudamérica que tiene un gas “puro” y muchas reservas y si bien es cierto que Venezuela tiene mayor cantidad de reservas, también lo es que su gas está mezclado con líquidos y que los costos de la separación son elevados. Con el descubrimiento de grandes yacimientos de hidrocarburos, Bolivia se define como el corazón energético de la región y es considerado actualmente un gran exportador de gas al Brasil, su mercado principal (único en las actuales condiciones) gracias a la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil. Además, debemos tener

geomorfología y clima son los factores principales en el desarrollo de hábitats y del mosaico de formaciones vegetales: bosques altos, bosques de galería, sabanas inundadas, matorrales, pastizales naturales, vegetación hidrófila de ambientes acuáticos, que determinan la disponibilidad de recursos como agua, alimento y refugio para la distribución y abundancia de especies de fauna, permitiendo la posibilidad de desplazamiento de los animales hacia los distintos hábitats. (FOBOMADE, 2003c:5-7)

en cuenta que el gas se presenta en la actualidad como el sustituto ideal del petróleo como fuente de energía, pues las mismas corporaciones transnacionales que controlan el segundo manejan también el primero. Por ello, como se vio en la primera parte de este capítulo, la IIRSA tiene intenciones de crear la infraestructura para avanzar en la integración energética.

Esta integración energética —que necesita obligatoriamente concretarse territorialmente— implica la construcción de una red de gasoductos y oleoductos que recorran Sudamérica borrando fronteras entre países y zonas de gran riqueza en términos de biodiversidad, como el gasoducto que ya existe entre Bolivia y Brasil. Este gasoducto opera desde 1999; tiene 32 pulgadas de diámetro y mide un total de 3'000 kilómetros (557 kilómetros en Bolivia) (Mariaca, 2002a). Se trata del proyecto de infraestructura *privada* más importante hasta ahora de toda Sudamérica y sirve para llevar el gas a la ciudad de Sao Paulo y tiene una extensión hasta Porto Alegre. El costo total de su construcción ha sido de 2,500 millones de dólares con cargo al erario público ya que es financiado con los préstamos del Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco de los Andes, el Banco Europeo de Inversión y por Agencias Bolivianas de Crédito a la Exportación pero en realidad quien lo explota es la empresa Gas TrasnBoliviano (GTB), que ni siquiera es boliviana. En ella participan las siguientes empresas transnacionales: TRANSREDES (controlada mayoritariamente por ENRON y SHELL), que controla el 51%; ENRON, que participa con el 17%; SHELL, que tiene el 17%; GASPETRO, posee el 9%; British Gas tiene el 2%; BHP posee el mismo porcentaje, al igual que la empresa El Paso Energy. (Mariaca, 2002b:236)

En torno al Gasoducto Bolivia-Brasil existen tres proyectos paralelos: la ampliación del Gasoducto Bolivia-Brasil, para que llegue a un largo total de 187 km. Las ampliaciones se ubicarían en Río Grande, Izozog, Chiquitos, Roboré, Yacuse. En segundo lugar se encuentra el mejoramiento del Gasoducto San Miguel Cuiabá, en Brasil, que ya se encuentra en funcionamiento, mide 32 pulgadas de diámetro y se trata de un proyecto de ENRON y SHELL. El gasoducto a Cuiabá que actualmente se encuentra concluido, se origina en el gasoducto Bolivia-Brasil. Es un ducto de 32 pulgadas que se está ubicado a 18°32' de latitud sur y 60°39' de longitud oeste. Recorre hacia el noreste en una longitud de 360 km pasando por la ciudad de San Matías, Bolivia. Overseas Private Investment Corporation (OPIC) financió el proyecto de ENRON y Shell que tuvo un costo de \$120 millones de dolares.

El tendido de este gasoducto tiene como principal objetivo el transporte de 2.5 millones de m³/día de gas natural a una planta energética de Cuiabá en el suroeste del Brasil. Sin embargo, a decir

de FOBOMADE¹⁰², los impactos socio-ambientales de la construcción del gasoducto se relacionan con la destrucción del Bosque Chiquitano, pues la construcción del gasoducto San Miguel-Cuiabá pasando por San Matías cruza el bosque chiquitano afectando una gran superficie de bosque para la implantación del derecho de vía y de los accesos a la región. Según advierten, la destrucción del bosque chiquitano no sólo es irreversible y con efectos negativos sobre la biodiversidad, sino que produce consecuencias en la escala ecológica global. El mayor impacto ambiental negativo provocado durante la ejecución del proyecto, ha sido el retiro de la vegetación y movimiento de tierra para la implantación del derecho de vía y los caminos de acceso; la apertura de nuevos caminos de acceso que ha facilitado el asentamiento y explotación de zonas que no fueron ocupadas ni explotadas anteriormente, con el consecuente daño ocasionado por el asentamiento en lugares no previstos y/o prohibidos; y la invasión sobre el territorio para actividades como ganadería, agropecuaria, tala de árboles y caza. (FOBOMADE, *Op. Cit.*:15)

La destrucción del bosque chiquitano ha significado pérdida de biodiversidad, deforestación, contaminación y reducción de poblaciones de vegetación; mayor presión de caza sobre especies amenazadas y destrucción de hábitats naturales; y degradación de los recursos por la ampliación de la frontera agrícola y extracción forestal que origina facilidad de penetración al bosque y promueve la destrucción de hábitats, amenazando a muchas especies e invasión de comunidades, apropiación de la tierra y migración. Además, el proyecto ha generado migración hacia la región de pobladores de otras regiones, así como movilización de intereses económicos, que incrementan aún más los problemas no resueltos de tenencia de la tierra pues esta presencia de personas ajenas al lugar incrementa la presión sobre los recursos naturales por el crecimiento de centros poblados, construcción de carreteras de acceso y creación de formas productivas. (*Ibidem*)

Finalmente está el Gasoducto Yacuiba-Río Grande o GASYRG, que mide 431 kilómetros y fue inaugurado en abril del año 2003. Para construir y operar el ducto en los próximos 40 años, Petrobras, Andina y Total Fina Elf han conformado la empresa TRANSIERRA S.A. (Mariaca, *Op. Cit.*:239)

Sin embargo, la intención no es sólo transportar el gas boliviano al interior de Sudamérica; también se planea desde hace ya varios años la exportación de gas a los Estados Unidos vía México. Este es otro proyecto de "integración energética" contemplado en la IIRSA, el cual consistiría en exportar gas licuado a los Estados Unidos y México a partir de un puerto en el Pacífico. Se trataría de gas extraído del Bloque Kaipependi, especialmente del Campo Margarita, uno de los más importantes

¹⁰² FOBOMADE son las siglas del Foro Boliviano Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, organismo que en los últimos diez años ha venido haciendo la mayor parte de la investigación en Bolivia sobre las consecuencias de la realización de proyectos gubernamentales y privados en el geoestratégico suelo boliviano.

de Bolivia —sus reservas de gas son 15.3 trillones de pies cúbicos. Según Enrique Mariaca las fases de este proceso de exportación serían las siguientes: primero, extraer el gas, lo que implica el desarrollo de 15 pozos; segundo, transportar el gas al puerto y someterlo a licuefacción, pues así ocupa menos espacio; tercero, transportarlo por mar a México; cuarto, regasificarlo ahí; quinto, introducirlo a la red de gasoductos de Estados Unidos, México y las plantas de energía.

Además, se tienen pruebas de que hay un precontrato para la exportación de gas que ha sido suscrito por SEMPR Energy, un conjunto de empresas que controla gran parte del mercado del sudoeste de Estados Unidos. (Mariaca, *Op. Cit.*)

Así, como se sostiene desde el principio de este trabajo, la ejecución de los proyectos del eje Interocéánico, como la de los otros ejes de IIRSA, está enmarcado en la necesidad norteamericana de apropiación de recursos naturales estratégicos y de control del territorio andino así como el de la cuenca amazónica.

Para terminar el análisis de este Eje cabe agregar que a él se integraron, al menos en apariencia, los trabajos contemplados para la construcción de llamado anteriormente Eje Bolivia-Paraguay-Brasil. Este Eje, que es uno de los desaparecidos, no es era tan espectacular en términos de alcance geográfico y de hecho parecería ya cubierto por el Eje Interocéánico de la primera versión, pero si se observa cuidadosamente esta vía contempla la construcción de carreteras alternas a las del mencionado Eje. El Eje Bolivia-Paraguay-Brasil, que pasaba por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en Bolivia; luego iba por todo el Chaco paraguayo para terminar en las costas de Brasil, se centraba nuevamente en Bolivia.

Los proyectos importantes que contemplaba y que fueron incorporados al nuevo Eje interocéánico, son la construcción del tramo Abapó-Camiri, que se encuentra actualmente ya en obras y la construcción del tramo Boyuibe-Hito Villazón. Esta carretera se ubicaría entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca y llegaría a la frontera con el Paraguay. Su situación geográfica interesa particularmente a la porque permitiría la vinculación con de los países andinos con Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Los estudios para la construcción de esta segunda carretera serán financiados por FONPLATA y costarán 34 millones de dólares. Cabe agregar que el alzamiento de ambos proyectos impacta directamente sobre el territorio del Pueblo Guarani y también implican riesgos la proximidad del Río Grande y de áreas naturales frágiles. Además, según expertos ecologistas, aumentan los riesgos de erosión debido a los desvíos de los ríos y al cambio en las direcciones de los vientos. (FOBOMADE, *Op. Cit.*:35)

c) EJE MULTIMODAL DEL AMAZONAS (BRASIL-COLOMBIA-ECUADOR-PERÚ) (Eje del Amazonas) (Mapa 4, p.281)

Según se advierte en la información oficial, como configuración de partida el eje puede ser mirado como un 'buffer' (sic) de un par de cientos de kilómetros a lo largo del sistema multimodal de transporte que podría interconectar de forma regular y eficiente algunos puertos del Pacífico —Tumaco en Colombia, Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú— con los puertos brasileños de Manaus, Belém y Macapá. En las diferentes alternativas de esta unión bioceánica participan los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas en Perú; Putumayo en Colombia e Iça, Solimões y Amazonas en Brasil, con sus más de seis mil kilómetros de vías navegables; y los puertos fluviales de El Carmen, en la frontera entre Ecuador y Colombia, Gueppi en Colombia y Sarameriza y Yurimaguas en Perú, de manera que estas terminales de transbordo se interconectarían a los ya mencionados puertos del Pacífico por un sistema de vías terrestres todavía no totalmente consolidado. Como centros de interés logístico o urbano se destacan en la configuración inicial en **Colombia**, Tumaco, Pasto, Mocoa, Gueppi, El Encanto, Arica y Leticia; en **Ecuador**, Esmeraldas, Quito y Puerto El Carmen; en **Perú**, Paita, Piura, Olmos, Corral Quemado, Sarameriza, Tarapoto, Yurimaguas, Nauta e Iquitos; y en **Brasil**, Tabatinga, Manaus, Itacoatiara, Santarém, Macapá y Belém. (www.iirsa.org, 2004)

El medio ambiente representa en este Eje una característica de singular importancia, ya que su cobertura vegetal logra una extensión de tres millones de kilómetros cuadrados y conforma una inmensa cuenca geográfica. Su clima húmedo llega a presentar altas precipitaciones anuales de hasta 3600 mm; las mayores ocurren al noroeste de Manaus y áreas de los departamentos de Vaupés y Guainia en el sudeste de Colombia. Dentro de los aspectos a destacar del Eje, tenemos sus puntos de mayor fuerza en la diversidad ecológica, biológica, edafológica, hidrológica, climática, cultural, social y económica conjugadas en distintos escenarios y reunidos en sus tres grandes sistemas: costa, relieve y selva. La relevancia que tiene esta zona a nivel global es que representa 1/3 de la biodiversidad, 1/5 del agua dulce y 2/5 de las selvas tropicales sobrevivientes de todo el planeta, así como su sistema fluvial de 20.000 km de vías navegables. También cuenta con el potencial del bioma amazónico con sus servicios ambientales, el ecoturismo, los recursos genéticos y los productos certificados de la selva (madereros y no madereros). (*Ibidem*)

En lugar de centrarse en explicar la enorme importancia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de este lugar, los burócratas de la IIRSA se centran en otro aspecto: el Ecoturismo, que, dicen “representa en la actualidad el sector más dinámico del Eje, (pues) aunque (actualmente) se encuentre bajo su nivel de potencial, existe sin embargo una gran cantidad de programas turísticos no

convencionales que están empezando a ser explorados internacionalmente. El mayor impacto del ecoturismo se da en los sistemas de telecomunicaciones, básicamente vía satélite y en la reglamentación de los sistemas de transporte aéreo”. (*Ibidem*)

Dentro de este Eje encontramos en un lugar privilegiado a la ciudad de Manaus, en Brasil que con casi dos millones de habitantes y una zona franca industrial y creciente, actúa en mercados dinámicos como el del sector electrónico. La capital del Estado del Amazonas importa una gran parte de sus necesidades de consumo, particularmente alimentos y materiales de construcción, del centro y sur del país en condiciones logísticas poco competitivas. Además, tenemos que en esta región el cultivo de la soja, el manejo forestal y la pesca y piscicultura constituyen una porción importante en el desarrollo del Eje tal como los productos no-madereros, cosméticos y fito-terapéuticos, que representan segmentos de mercados con las mayores perspectivas a corto plazo.

El primer grupo de proyectos comprende el acceso a la Hidrovía del Putumayo. Su función estratégica, a decir de los documentos oficiales, es mejorar la logística de integración nacional entre áreas productivas del sur de Colombia, Departamento de Nariño, con los Departamentos amazónicos del Putumayo y Amazonas. Pretende además incluir las zonas del norte ecuatoriano —en especial la Provincia de Sucumbios— a la dinámica del grupo y potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico. El Proyecto Ancla es mejorar la vía Pasto–Mocoa. Otros proyectos del grupo son la adecuación del Puerto Tumaco; el mejoramiento de la vía perimetral de Tuquerres; la adecuación del Puerto Asís y de sus muelles en el Putumayo; llevar a cabo el proyecto de electrificación para interconectar Leticia y Tabatinga; la adecuación del Puerto San Lorenzo; la Rehabilitación y pavimentación de dos tramos en el trecho San Lorenzo–El Carmen; y la adecuación del Puerto El Carmen. (*Ibidem*)

El segundo grupo de proyectos incluye el acceso a la hidrovía del Napo. Su función estratégica es fortalecer la integración nacional ecuatoriana de carácter amazónico, es decir, unir las provincias del Napo y Orellana con la sierra y la costa, el centro y norte del país y consolidar la oportunidad de una vía fluvial ecuatoriana de integración amazónica internacional hacia Manaus, además de potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico. El Proyecto Ancla consiste en mejorar el Puerto Francisco Orellana. Los otros proyectos del grupo son el mejoramiento de Puerto Esmeraldas; el desarrollo del Puerto de Manta; la expansión del aeropuerto de carga Nuevo Rocafuerte; la expansión del aeropuerto de carga El Tena; el mejoramiento de la vía CEBAF (Centro Binacional de Atención de Frontera) Nuevo Rocafuerte-Cabo Pantoja. (*Ibidem*)

El tercer grupo de proyectos contempla la habilitación de la Hidrovía Huallaga–Marañón. Su función estratégica consiste en mejorar la logística de acceso a las hidrovías del Huallaga y Marañón y

sus puertos para consolidar el corredor de integración costa–sierra–selva de la región norte del Perú y su complementariedad regional con el Estado de Amazonas de Brasil así como permitir la articulación de esta zona con la región sur y sureste del Ecuador y potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico. El Proyecto Ancla es la construcción de la carretera Tarapoto–Yurimaguas y Puerto Yurimaguas. Los otros proyectos del grupo son la construcción de la carretera El Reposo–Sarameriza; la construcción de la carretera Bagua–Rioja; la construcción del aeropuerto de Piura, de Yurimaguas y de Tarapoto; la construcción del Puerto Paita; el mejoramiento de Puerto Bayovar y del Puerto Sarameriza; la construcción de un centro logístico en Paita; y la edificación del centro logístico Yurimaguas. (*Ibidem*)

El cuarto grupo de proyectos incluye la preparación de la hidrovía del Ucayali. La función estratégica de este grupo de proyectos es incrementar la competitividad de la vía de integración costa-sierra-selva en el corredor central del territorio peruano, interconectando el principal centro urbano industrial del país, su zona central y los estados de Acre y Amazonas del Brasil, así como potenciar la interconexión del interior del continente con la Cuenca del Pacífico. El Proyecto Ancla es el mejoramiento de la carretera Tingo María–Pucallpa. Los otros proyectos del grupo son la modernización del Puerto El Callao; el mejoramiento del aeropuerto de Pucallpa; la modernización del Puerto de Pucallpa; la construcción de un centro logístico intermodal de Pucallpa; la interconexión energética de Pucallpa y Cruzeiro do Sul; y la interconexión vial de Pucallpa y Cruzeiro do Sul. (*Ibidem*)

El quinto grupo de proyectos comprende el acceso por la hidrovía Solimões–Amazonas. Su función estratégica es consolidar una vía pavimentada para mejorar la logística de transporte que se dirija hacia el norte de Mato Grosso a través de los puertos fluviales en los Ríos Tapajós y/o Amazonas que tenga capacidad para realizar operaciones logísticas de larga distancia hacia el Océano Atlántico y Pacífico. El Proyecto Ancla es la construcción de la carretera Cuiabá–Santarém. El otro proyecto del grupo es la construcción de dos puertos en Santarém e Itaituba. (*Ibidem*)

El último grupo de proyectos contempla la construcción de una red de hidrovías amazónicas. Su función estratégica consiste en mejorar las condiciones de navegabilidad de los ríos de la cuenca amazónica para facilitar el enlace bioceánico y promover el desarrollo sostenible de la industria, el comercio y el turismo de la Amazonia. El Proyecto Ancla es conseguir y/o agilizar la navegación del Solimões–Amazonas así como mejorar los aspectos ambientales y sociales de las Cuencas de los Ríos Amazónicos. Los otros proyectos del grupo son: mejorar la navegación del Río Morona; conseguir la ágil navegación del Río Napo; agilizar la navegación del Río Putumayo; acelerar la navegación del Río Ica; activar la navegación del Río Marañón; agilizar la navegación del Río Huallagua; acelerar la

navegación del Río Ucayali; y la construcción de un puerto y un centro logístico en Iquitos, Perú. (*Ibidem*)



Sin lugar a dudas este es uno de los ejes más importantes de la IIRSA porque su realización significa nada menos que el control de la una de las zonas más ricas del planeta, como apenas lo esboza la presentación oficial del Eje, que, con o sin intención, deja de lado la relevancia y las implicaciones geopolíticas de la habilitación de la red hidroviaria más ambiciosa que se ha pensado para unir por medios fluviales los países de la Cuenca Amazónica. La Cuenca del Amazonas o Amazonia es la región que comprende los territorios bañados por el río Amazonas, el más caudaloso del mundo, y sus afluentes. El río Amazonas nace en los Andes de Perú y atraviesa Brasil. Tiene unos 6 500 km de largo y su anchura algunas veces sobrepasa los 6 km. y cuenta con más 7 mil ríos tributarios que corren más de 6 mil billones de metros cúbicos de agua por segundo. Así, su caudal lleva más agua que el Nilo, el Mississipi y el Río Amarillo. En su primer tramo, el Amazonas recibe el nombre de Marañón y cerca de su desembocadura en el Atlántico, se abre en numerosos brazos, entre los cuales forma diversas islas.

En esta región que comparten Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Guyana, Surinam y Colombia, existen cuatro de las materias principales para la economía —y la vida— del tercer milenio: el oxígeno (la Amazonia produce más del 40% del oxígeno del mundo); la biodiversidad; el petróleo y el agua dulce (casi el 30% del agua dulce renovable está en América Latina y la mayor parte en la Amazonia)¹⁰³. Además, esta zona tiene 365 días de sol que garantizan fotosíntesis perenne, ideal para cultivos de largo ciclo, aprovechamiento de fuentes alternativas de energía y para variadas expresiones agrícolas. La naturaleza plana de la Isla Continental Brasileña es fundamental para desarrollar industrias agrícolas y pecuarias intensivas en capital y tecnología y poco intensivas en mano de obra.

Aunque la Cuenca Amazónica ocupa varios países, el eje amazónico está enfocado en la región amazónica de un país en especial: Brasil. Ninguna discusión de geopolítica en Sudamérica puede estar completa sin una mención a ese país, que ha sido el más exitoso en extender su territorio y que controla casi 4/5 de la Cuenca amazónica. En los años más recientes y aun con un gobierno como el de Fernando Henrique Cardoso, el Estado brasileño ha desafiado frontalmente los lineamientos de política exterior norteamericana. Este país no sólo ha encabezado y promovido la formación de un bloque comercial exitoso dentro del hemisferio occidental; también ha impulsado la idea de crear

¹⁰³ Sobre la importancia geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de la cuenca amazónica para los planes de la política exterior estadounidense se hablará en el siguiente capítulo; por ahora nos limitaremos a hablar más de la importancia geopolítica y geoeconómica de las obras del eje.

Petroamérica, una eventual fusión de las petroleras sudamericanas, y más aún, se ha atrevido a plantear la integración energética en América del Sur, tanto en la parte del petróleo como la del gas y la energía eléctrica (recordar lo acordado con Venezuela). Cabe decir que el MERCOSUR es el único acuerdo latinoamericano que tiene el mérito de haberse planteado no sólo como una iniciativa comercial común sino dentro de un razonamiento más amplio: el de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de los países participantes, especialmente de Brasil y Argentina (y Chile, aunque sólo sea observador). Este acuerdo involucra a los países que tienen acceso a la Cuenca del Río de la Plata, punto de salida de las exportaciones hacia Europa Occidental, América del Norte y África. Además, aspira mediante la incorporación plena de Chile, a extender un corredor que le permita el acceso bioceánico tan anhelado por Brasil¹⁰⁴, que le posibilitaría ir más allá de los mercados tradicionales y llegar hasta Asia. Además ha apoyado la IIRSA en la medida en que varios de los ejes son muy convenientes para sus planes de política comercial externa.

De este modo, el eje Amazónico de la IIRSA, que contempla la integración física de una parte considerable del territorio sudamericano pues incluye a Ecuador, Perú y el sur de Colombia, tiene en Brasil su centro de acción ya que es el Amazonas la vía para entrar hacia el Pacífico vía Ecuador y Perú. Atendiendo a sus políticas expansionistas hegemónicas y a la búsqueda de bioceanidad, el gobierno brasileño ha encontrado la forma de aprovechar los recursos otorgados por organismos internacionales como el BID y la OEA, a Ecuador y a Perú por la firma de sus acuerdos de paz en el marco de un Plan Binacional de Desarrollo, y desde hace casi dos años, ha impulsado de forma entusiasta la construcción de una vía interoceánica Brasil-Ecuador-Peru. El Plan Binacional de Desarrollo fue parte integral de los acuerdos de paz firmados entre Ecuador y Perú en 1998 para terminar con el antiguo conflicto fronterizo. Este Plan demanda importantes inversiones para la depauperada y abandonada región fronteriza durante un período de diez años que finaliza en 2009; para el desarrollo y financiamiento de cinco corredores de caminos; para el desarrollo de los recursos de agua de Cuenca Puyango-Tumbes y para atraer inversión del sector privado bajo el marco de agencias establecidas por el propio Plan.

Así, el gobierno brasileño se las ha ingeniado para que los proyectos de integración fronteriza para consolidar la paz acordada por Ecuador y Perú en 1998 lo incluyan en la construcción de una vía entre los océanos Atlántico y Pacífico que comprenderá carreteras, ríos y transporte por ferrocarril. El presidente de Perú, Alejandro Toledo, encargó al Ministerio de Transporte la elaboración del proyecto para presentarlo ante el Comité Asesor Internacional que, bajo la conducción del BID, promueve el

¹⁰⁴ Históricamente, los territorios cercanos a la Cuenca del Amazonas, lugar donde existen las mayores reservas de agua

financiamiento de obras de integración fronteriza con Ecuador a través del trazado de una ruta que incluiría tramos ferroviarios, carreteros y fluviales —‘multimodal’, lo llamarían— y cuyas cargas se efectuarían mediante contenedores para mayor seguridad y rapidez.

Si se consolida este proyecto que integrará la cuenca del Pacífico con la cuenca del Atlántico, habría tres países directamente beneficiados: Ecuador, con costas sobre el océano Pacífico, que pretende hacer realidad su viejo sueño de que el río Amazonas le abra una salida al océano Atlántico, propósito frustrado hasta ahora por el conflicto fronterizo con Perú, que causó tres guerras entre 1941 y 1995. De este modo, Ecuador se conectará con el río Amazonas a través de tres vías, una de las cuales nacerá en Ibarra, en el norte, y llegará a Brasil a través del río Putumayo, fronterizo entre Perú y Colombia; otra ruta partirá de Quito e ingresará en territorio peruano a través del río Napo para proseguir por el Marañón, afluente del río Amazonas; la tercera vía se iniciará en el puerto de Guayaquil, principal centro comercial ecuatoriano y pasará por las localidades costeras peruanas de Tumbes, Piura, Chiclayo y Bayovar, punto final de un oleoducto y futuro centro petroquímico, para luego remontar la cordillera de los Andes hasta acceder al río Marañón y luego al Amazonas.

El otro favorecido será Perú, a cuyo gobierno le interesa abrir rutas fluviales y terrestres hacia Brasil para dinamizar el comercio y la economía de áreas del norte de su territorio hoy deprimidas. Finalmente, Brasil, que aunque no forma parte del Plan Binacional mueve sus cartas para abrir vías hacia el océano Pacífico que sean alternativas a la ruta marítima actual, que bordea la costa del océano Atlántico hasta el extremo austral de América. Si logra unir los puertos de Paita y Bayóvar en el Pacífico peruano con los puertos brasileños en el Atlántico de Belem y Macapá, comportando posibilidades de conexión con Porto Velho, Estado de Rondonia, a través de la hidrovía del Río Madera, tendrá mayores posibilidades de incrementar su actividad económica debido a la viabilidad de exportación de productos regionales del norte peruano a los estados brasileños del Amazonas y de los fosfatos de Bayóvar para fertilizar los cultivos de soja y granos en el centro-oeste brasileño, sin mencionar las oportunidades de nuevos mercados para la producción de la Zona Franca de Manaus. Esta ruta, además, tendría un componente terrestre, que es la carretera que conduce al puerto fluvial de Saramiriza en Loreto, Brasil y un componente fluvial, desde Saramiriza, a través del Río Marañón, hasta alcanzar el Río Amazonas.

Brasil tiene también la promesa de que Quito le permitirá unir el puerto amazónico de Manaus con Ecuador y con la costa norte de Perú. Este puerto, que se encuentra en el corazón de la Amazonia brasileña, posee un especial significado geoestratégico para Brasil, pues a partir del control de esta

dulce en el planeta, han sido una fuente de conflictos y ambiciones.

ciudad-isla enclavada en el Amazonas pudo extender sus fronteras quitando territorio a Colombia, Ecuador y Perú y pudo tener un mayor control de sus fronteras con estos países. Sin embargo esta vía que podría parecer tan estratégica para Brasil en tiempos de paz se puede convertir en un problema en tiempos de guerra, ya que si en un escenario futuro las tropas norteamericanas entraran en Colombia y ocuparan la zona y controlaran el río Putumayo bien podrían utilizar el Amazonas para avanzar hacia Manaus y tomar el control de esa rica porción del territorio amazónico. No resulta fortuito que todas las vías planteadas en el eje desemboquen en este importante puerto amazónico que a decir de los investigadores del INPA¹⁰⁵, cada vez año concentra un mayor número de militares prestos a defender la entrada desde el Pacífico más importante para Brasil, sobre todo en los últimos meses, cuando la guerra declarada de Álvaro Uribe contra la guerrilla en la zona del Putumayo colombiano amenaza con extenderse más allá de las fronteras de ese país.

d) EJE ANDINO (Caracas-Bogotá-Quito-Lima-La Paz) (Mapa 5, p.282)

Como se ha podido observar hasta ahora, la preparación de los trabajos para construir los ejes ha sido cuidadosa, lo que refleja la importancia asignada al proyecto. Sin embargo, ninguno ha sido tan minuciosamente planeado como el Eje andino. Este hecho no es casual: son justamente los países de esta región —Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia— los que tienen mayores problemas de integración infraestructural entre ellos ya sea por ausencia de vías adecuadas o por falta de control estatal sobre las mismas. De esta manera, las dificultades socio-políticas que implica la construcción de la infraestructura en esta región, lo convierten en el eje más detallado y mejor preparado, como lo deja ver la cantidad de proyectos programados para su ejecución, y sobre todo y en el eje principal de IIRSA, ya que en él convergen todos los demás.

De acuerdo a la información oficial, el Eje Andino está constituido por cinco países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Estos países, que además conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), agrupan a 117 millones de habitantes a lo largo de una superficie de 4 728 975 Km². El área de influencia del eje abarca una superficie de 2 871 947 Km², que es equivalente al 60.7% del total de la superficie de los países. Asimismo, la población en el área de influencia del eje equivale a 92 millones de habitantes, lo que da cuenta del 80.5% de la población total. (www.iirsa.org, 2004)

¹⁰⁵Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas.

En líneas generales, el Andino es un eje maduro (sic) que atraviesa los principales centros urbanos de los países y se establece en territorios que han logrado una significativa dotación de infraestructura. Además, el Eje Andino articula los principales aeropuertos internacionales y los puertos marítimos de los cinco países. Las vías longitudinales que configuran el Eje Andino están alimentadas por importantes carreteras y ríos que constituyen ejes transversales y lo vinculan con el Eje del Escudo Guayanés, el Eje del Amazonas, el Eje Perú-Brasil-Bolivia y el Eje Interoceánico. El desarrollo del Eje Andino enfrenta importantes obstáculos geográficos: la cordillera de los Andes, ríos caudalosos y divagantes, extensas zonas despobladas y selváticas y una fuerte vulnerabilidad sísmica y meteorológica. En contraste, también cuenta con grandes recursos naturales—agua, hidrocarburos, minerales, pesqueros, biodiversidad, etc.— y una amplia variedad de pisos ecológicos. Sus principales centros urbanos lo componen las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba en Bolivia; Bogotá, Cartagena de Indias, Barranquilla, Cali y Medellín en Colombia; Quito y Guayaquil en Ecuador; Lima y Arequipa en Perú; y Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barcelona, Ciudad Guayana y San Cristóbal del Táchira en Venezuela.

Aunque su modelo productivo y su crecimiento económico sigue siendo fluctuante y vulnerable a factores externos, continúan exportando gran cantidad de materias primas y pocos productos transformados. Los países andinos presentan una actividad comercial que representa entre el 16 y el 22 por ciento del PIB de cada país pero el 62 por ciento de las exportaciones y el 55 por ciento de las importaciones de la CAN tienen como origen o destino América del Norte o Europa. En cuanto al comercio intrarregional, en los flujos internos dentro de la CAN destacan los que tienen origen o destino a Venezuela o Colombia (importaciones) o Perú (exportaciones). (*Ibidem*)

El primero de los 11 grupos de proyectos plantea la conexión entre Venezuela (Eje Norte Llanero) y Colombia (Zona Norte). Su función estratégica es consolidar la integración económica de la zona norte Atlántica de Colombia y la zona norte llanera de Venezuela por una vía terrestre pavimentada existente.

El segundo grupo contempla la conexión Venezuela (Caracas)–Colombia (Bogotá)–Ecuador (Quito) a través del mejoramiento de la ruta actual incluyendo la construcción de los CEBAFs en los pasos de frontera (Cúcuta–San Antonio–Ureña e Ipiales–Tulcán). La función estratégica del eje es potenciar las relaciones económicas entre los centros urbanos más dinámicos de Ecuador, Colombia y Venezuela a través de vías pavimentadas existentes que requieren mejorar el funcionamiento de sus pasos de frontera y resolver cuellos de botella específicos. El Proyecto Ancla es la puesta en funcionamiento de los CEBAFs en los pasos de frontera (Cúcuta–San Antonio–Ureña e Ipiales–Tulcán). Los otros proyectos del grupo son la construcción del Corredor Periférico de Bogotá; la

rehabilitación de la vía Popayán–Pasto–Tulcán–Quito; la construcción de un paso por Pasto; la rehabilitación de la vía Cúcuta-Bucaramanga; el mejoramiento de la vía Bogotá-Girardot-Ibague; la construcción de una conexión Cúcuta-Maracaibo (Agua Clara–Puente Gurumito–La Fría).

El tercer grupo planea la conexión Venezuela (Eje Orinoco-Apure–Colombia (Bogotá) (Corredor de Baja Altura) con el fin de agilizar el paso de frontera por Saravena y sus accesos. Su función estratégica es desarrollar un corredor internacional para carga de larga distancia con costos de operación y tiempos de desplazamientos significativamente menores al corredor actual Caracas-Bogotá. Este corredor permitirá incorporar nuevas regiones de Colombia (Arauca) y Venezuela (Eje Orinoco Apure) al comercio internacional. El Proyecto Ancla es la construcción del Paso de frontera de Saravena y sus accesos. Los otros proyectos son la construcción del proyecto Vial El Piñal–Saravena; el mejoramiento vial del paso Saravena–El Nula; la habilitación del paso de frontera en Arauca; el mejoramiento vial del tramo Tame–Arauca; la reconstrucción del Puente José Antonio Páez y sus accesos; la culminación de la pavimentación del tramo Tame-Villavicencio. (*Ibidem*)

El cuarto grupo de proyectos incluye la conexión Pacífico-Bogotá-Meta-Orinoco-Atlántico a través de la rehabilitación de la navegabilidad del río Meta. La función estratégica de este proyecto es desarrollar un corredor bioceánico Pacífico-Bogotá-Meta-Orinoco-Atlántico para incentivar intercambios comerciales entre regiones de Colombia (Orinoquia, Andina, Pacífico) y Venezuela (Llanos-incluyendo los estados de Anzoátegui y Monagas—Guayana y Delta del Orinoco) y para proyectar estas regiones hacia mercados internacionales. El Proyecto Ancla es la rehabilitación de la navegabilidad del Río Meta. Los otros proyectos del grupo son la construcción de los tramos faltantes de pavimentación entre Villavicencio y Puerto López; el mejoramiento del paso de frontera en Puerto Carreño; la construcción del Corredor Buenaventura–Bogotá; la vinculación de estos proyectos con el Eje Orinoco–Apure.¹⁰⁶ (*Ibidem*)

El quinto grupo de proyectos abarca la conexión Colombia (Puerto Tucumaco)–Ecuador (Puerto Esmeraldas-Guayaquil)–Perú (Lima) a través de la construcción de una vía CEBAF-Aguas Verdes-Huaquillas. La función estratégica del proyecto, a decir de los documentos oficiales, es potenciar las relaciones comerciales y turísticas (playas y ecoturismo) de importantes zonas costeras del norte peruano, el Ecuador y las zonas del Pacífico-Sur colombiano, tan poco visitado en estos días. El Proyecto Ancla es la construcción del camino CEBAF-Huaquillas-Aguas Verdes. Los otros proyectos del grupo son la pavimentación de la vía Espirella-Mataje y la pavimentación de Mataje hasta San Lorenzo; el mejoramiento del puente sobre el Río Mataje; la concesión de las redes viales N° 1, 2, 3, 4

¹⁰⁶ Este eje localizado al interior de Venezuela, que une al este con el oeste ya fue explicado cuando se habló del Eje del Escudo Guayanés.

y 5 de Perú y la conexión con las ciudades peruanas de Piura, Chiclayo, Trujillo y Chimbote; la construcción de un CEBAF en Río Mataje; el mejoramiento de Puerto Inca–Huaquillas y la construcción de un puente internacional en Huaquillas–Aguas Verdes; la construcción de un paso lateral en Huaquillas; la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Rosa; el mejoramiento de Puerto Esmeralda. (*Ibidem*)

El sexto grupo de proyectos contempla la conexión Colombia- Ecuador II (Bogotá-Mocoa-Tena-Zamora-Palanda-Loja) y la construcción de los pasos de frontera de San Miguel (mejorar el CEBAF existente) y sus accesos. La función estratégica de este grupo es desarrollar un corredor que articularía en esquemas de comercio internacional a zonas del centro y sur de Colombia con provincias amazónicas del norte y centro de Ecuador (Tena y Puyo) y áreas en el sur de Ecuador (Loja). El Proyecto Ancla es la construcción de un Paso de Frontera de San Miguel (un CEBAF) y sus accesos. Otros Proyectos del Grupo son la habilitación de la conexión Bella Unión–Plan de Milagro–Gualaquiza; la ampliación del aeropuerto Zamora; la construcción de la vía Mocoa–Santa Ana-San Miguel; el mejoramiento del tramo Narupa–Guamaniyacu; la construcción de la carretera Zamora Palanda. (*Ibidem*)

El séptimo grupo de proyectos comprende la conexión Perú—Ecuador II (Quito-Puente de Integración-Tingo María) mediante la pavimentación del tramo Vilcamba-Puente de Integración-Jaén. Su función estratégica es desarrollar un corredor internacional de comercio nuevo a partir del mejoramiento de las vías que unen las ciudades de Loja, Tarapoto y Tingo María en Ecuador. Este corredor integraría el sur andino del Ecuador (Loja y Cuenca) con la selva norte y central del Perú (San Ignacio, Moyobamba, Rioja, Tarapoto y Tingo María). El Proyecto Ancla es la Pavimentación del tramo Vilcamba–Puente de Integración–Jaén. Los otros proyectos del grupo son la construcción de un CEBAF y en Puente de Integración; la pavimentación del tramo Tarapoto–Tingo María; el mejoramiento del Aeropuerto de Tarapoto; el mejoramiento del Aeropuerto de Huánuco. (*Ibidem*)

El octavo grupo de proyectos planea la conexión entre Perú y Bolivia (Huancayo-Ayacucho-Tarija-Bermejo), en el paso de frontera de Desaguadero. La función estratégica de este grupo de proyectos es potenciar las relaciones económicas entre las regiones andinas del Perú y Bolivia que funcionan a través de vías pavimentadas existentes y ampliarlas hacia la zona andina central del Perú y noroeste andino argentino. El Proyecto Ancla es el mejoramiento del paso de frontera en Desaguadero. Los otros proyectos del grupo son la culminación de la pavimentación de la vía Huancayo–Ayacucho; la culminación del pavimento del camino Ayacucho-Abancay; la rehabilitación del paso Juliaca-Puno-Desaguadero; la culminación del pavimento Potosí–Tarija; la construcción del tramo carretero y ferroviario Potosí-Sucre. (*Ibidem*)

El noveno grupo de proyectos abarca el mejoramiento de las conexiones Lima-Arequipa-Tacna, Arequipa-Juliaca, Ilo-Desaguadero y Desaguadero-La Paz, así como la conexión Ferroviaria Arequipa-Puno y Puno-La Paz. La función estratégica de estos proyectos es potenciar y consolidar las relaciones económicas de las dos ciudades andinas más importantes del Perú (Arequipa) y Bolivia (El Alto-La Paz), lo que permitirá consolidar intercambios entre la costa sur del Perú, la sierra peruana y el área andina de Bolivia en el área de influencia del Lago Titicaca. El Proyecto Ancla es la conexión ferroviaria Arequipa-Puno y Puno-La Paz. Los otros proyectos del grupo son el mejoramiento de la Red vial N° 6 en Perú; la construcción de una vía alterna en Ica; la rehabilitación de la carretera Panamericana Sur; el mejoramiento del aeropuerto de Arequipa; el mejoramiento del aeropuerto de Juliaca; el mejoramiento del aeropuerto de Tacna.

El penúltimo grupo de proyectos está relacionado con la creación de un Sistema de Integración energética en los Andes cuyo fin es la armonización regulatoria eléctrica, gasífera y petrolera. (*Ibidem*) La función estratégica de este proyecto es integrar los sistemas energéticos para mejorar la eficiencia y la confiabilidad en la generación, transmisión, y distribución de la energía a fin de impulsar el desarrollo de sectores de alto valor agregado. Aunado a este proyecto encontramos el último proyecto: la creación de un sistema de comunicación y conectividad, cuya función estratégica es incorporar centros poblados –urbanos y rurales– a las conexiones de telecomunicaciones eliminando los déficits de cobertura telefónica y permitiendo la expansión de los servicios de valor agregado, incorporándolos al gobierno, al comercio electrónico, a la teleeducación, a la telesalud, etc., como herramienta para desarrollar áreas aisladas, incrementar la calidad de vida y la integración cultural. Además, la idea es expandir el uso de los servicios de comunicaciones en beneficio del comercio y la integración regional. El Proyecto Ancla consiste en el aprovechamiento de infraestructura existente y las nuevas conexiones viales para aumentar infraestructura de comunicaciones.



Como se pudo observar, mientras el eje amazónico privilegiaba las vías fluviales, el plan con el eje andino es construir una red carretera que una los países en cuyo territorio se asiente la Cordillera de los Andes. Este eje iría de Venezuela, partiendo de Caracas y atravesando por la región andina hasta llegar a San Cristóbal del Táchira; hacia Colombia, entrando por Cúcuta; de ahí iría a Bogotá sin pasar por Medellín desviándose hacia la región del macizo del Cauca, donde nacen las tres cordilleras andinas, para penetrar en Ecuador vía Ipiales y Tulcán hasta llegar a Quito, donde haría una bifurcación desde la cual se pasaría por la costa ecuatoriana (donde importa Gauyaquil) y por el centro del país (para acceder a la región amazónica ecuatoriana) y de ahí llegar a la costa peruana y chilena, por un lado y por el otro hacia La Paz, Bolivia. Este eje aprovecharía la infraestructura de la carretera

panamericana ya existente, aunque la ampliaría y mejoraría, ya que las carreteras de Ecuador y Bolivia necesitan ampliarse si se intenta transportar un número considerable de mercancía o tropas.

Las razones por las cuales este complejo carretero que aparentemente ya está funcionando se presenta como novedoso, radican en dos cuestiones: primero, que es un eje de conexión vial que amplía sus fronteras al ligarse hacia el sur con Chile y hacia el este con Brasil, lo que lo une con todos los demás ejes de IIRSA; segundo, porque por primera vez se contempla en Colombia la ocupación para transporte comercial de vías de comunicación que durante muchos años han estado bajo control de grupos ajenos al gobierno colombiano —la guerrilla colombiana— y de grupos afines al gobierno —el de los paramilitares—, como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, bajo actual control paramilitar, y el macizo caucano, que desde hace ya mucho tiempo ha estado bajo poder de las FARC y ELN. No resulta extraño pues que haya sido justo con la entrada de Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia y su declaración de guerra cuando se ha decidido incorporar abiertamente a Colombia en un plan de integración físico sin necesidad de hacer advertencias sobre la seguridad de avanzar dentro del territorio de este país.

Es justamente Colombia el lugar más geoestratégico del arco andino. No solamente es la entrada vía terrestre hacia los ejes occidental y Orinoco Apure venezolanos, lugares ya señalados como poseedores de grandes reservas de petróleo, gas y carbón sino que representa la posibilidad para Brasil de acceder de manera más rápida hacia el canal de Panamá y hacia el hasta ahora poco mencionado 'Canal Seco', cuya construcción está proyectada a corto plazo. Este canal sustituiría al de Panamá, lo que convierte a Colombia en un importante sitio desde donde se movilizarían los recursos naturales venezolanos para llegar a la costa este de los Estados Unidos. Colombia se convertiría además en un ejemplo exitoso en el combate de grupos guerrilleros y de movimientos sociales para los gobiernos ecuatoriano, peruano y boliviano, que en estos últimos años se han visto asediados por sus poblaciones, especialmente las indígenas, para dar explicaciones sobre la pauperización que han provocado las medidas de ajuste estructural y la privatización de los sectores estratégicos.

Aunque no se menciona en los documentos oficiales de IIRSA, grandes son los esfuerzos realizados al interior de Colombia para lograr la construcción de las obras planeadas, trabajos que implican el uso excesivo de la fuerza para acceder a los lugares más estratégicos dentro de la geografía colombiana.

En Colombia podemos ubicar varias regiones de importancia geopolítica: en primer término, tenemos a la ya mencionada Sierra Nevada de Santa Marta ubicada en el norte del país casi haciendo frontera con Venezuela. Aquí podemos encontrar uno de los parques naturales mejor conservados de

Sudamérica, el Parque Tayrona, que se encuentra actualmente bajo control paramilitar,¹⁰⁷ lo que lo ha convertido en el mayor centro de operaciones del narcotráfico en este país. Esta región colinda con la rica Península de la Guajira, desde donde se exporta carbón mineral hacia los Estados Unidos y vecina del Lago de Maracaibo. Hacia el noroeste del país encontramos la región del Urabá, colindante con el Canal de Panamá y la única biocénica de todos los países sudamericanos. En tercer término tenemos al Valle del Cauca, importante cuenca hidrológica de donde nacen las tres cordilleras principales del país. Finalmente tenemos a la región del Putumayo, que es la parte amazónica colombiana.

El problema para la construcción de infraestructura en las zonas mencionadas, sin embargo, no está relacionada tanto con la falta de recursos para construir los proyectos como en el hecho de que varias de las zonas mencionadas en Colombia no están completamente bajo el control estatal, lo que dificulta la ejecución de los trabajos. Por eso, la consecución de los objetivos de la IIRSA —y de la política exterior norteamericana— en Colombia tiene que pasar necesariamente por la solución de los conflictos políticos internos o por la imposición de la fuerza. Esta última opción es la que ha tomado el actual presidente colombiano. Cuando llegó a la Presidencia de Colombia, Álvaro Uribe¹⁰⁸ advirtió que no había conflicto político en Colombia sino *terrorismo* (El Espectador, 2002) con lo que cerró toda posibilidad de salida política y abrió la puerta a la opción única: la victoria militar. Pero su llegada a la presidencia coincidió no sólo con el endurecimiento del discurso sino con el recrudecimiento del uso de la fuerza estatal contra los opositores —guerrilleros o no— y con el impulso a los llamados ‘Megaproyectos’, que no son otros que los que contempla la IIRSA para la realización del eje andino.

La mejor manera de desocupar las zonas estratégicas colombianas por donde pasan los ejes de la IIRSA ha sido la implantación de la llamada ‘Política de la Seguridad Democrática’, que consiste en realizar detenciones masivas en los poblados asentados en las mencionadas zonas estratégicas a cargo tanto del Departamento de administración y Seguridad (la temida DAS) como del Ministerio de

¹⁰⁷En enero de 2004, la directora del Parque Tayrona, Marta Lucía Hernández Urriago, fue asesinada por las AUC; el grupo paramilitar más fuerte de Colombia. A la funcionaria, según fuentes cercanas al proceso de investigación, la asesinaron por el conflicto que empieza en la Sierra y termina en las 15.000 hectáreas del Parque Tayrona, donde la funcionaria se opuso a que esta reserva natural fuera utilizada por narcotraficantes, invasores y otros grupos al margen de la ley que continuamente la citaban a entregar cuentas. La violencia cotidiana en Santa Marta se incrementó desde diciembre de 2001 con la llegada de 200 hombres de las AUC a la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, escenario de cruentos combates entre esta facción de Carlos Castaño y las Autodefensas de Magdalena y Guajira, de Hernán Giraldo. Así, el asesinato de la directora del Parque Nacional Tayrona, el crimen de dos turistas a finales del 2003 en esa misma región y la muerte de dos activistas de Derechos Humanos que laboraban para la ONU, son hechos conectados.

¹⁰⁸Álvaro Uribe es un político con un largo y negro historial. Siendo gobernador de Antioquia, el primer presidente colombiano que no perteneció ni al partido conservador ni al liberal y educado en Oxford y Harvard, organizó las CONVIVIR, fuerzas paramilitares, en su región. Dejó así la imagen de que la mano dura la sabía ejercer él, aunque cuando dejó de ser gobernador su Departamento era uno de los más inestables y donde se registraba mayor violencia. Cabe decir, además, que una vez roto el diálogo y siendo aún candidato, Uribe instó a Pastrana a permitir la entrada de tropas extranjeras en el marco de un plan antiterrorismo. Así, su triunfo en las urnas lo convirtió en un jefe de gobierno que por

Defensa, cuyo fin es atemorizar a los pobladores y condicionar su permanencia en el territorio donde viven amenazándolos con fabricarles un historial de guerrilleros. Se dice que son ‘detenciones preventivas’ donde se deja en libertad a las personas de manera gradual, para aumentar la tensión, pues los últimos liberados son después los más sospechosos. Esta política va acompañada de un programa denominado SAT (Sistema de Alerta Temprana) bajo el cual se empadrona a hombres y mujeres, a quienes se compromete a denunciar cualquier actividad ilegal so pena de ser acusados de complicidad, lo que les convierte en soldados campesinos que cobran por los servicios que prestan. Así, este programa de espionaje sobre la vida colectiva se convierte en una nueva modalidad de control territorial dirigido a evitar la pérdida de poder estatal que ha prevalecido tantos años en Colombia.

Pero al mismo tiempo que se refuerza el dominio sobre el colectivo también se ha intensificado la preparación del ejército a través del CTI, programa de la Fiscalía federal apoyado por la DEA para organizar mejor a la armada, a la fuerza aérea y a la infantería con el propósito de actualizar la base de datos sobre el territorio —las llamadas *georreferencias*— y sistematizar la información para combatir a los grupos guerrilleros y para acabar con los cultivos ilícitos, pues cabe recordar que la lucha contra el narcotráfico ha sido la puerta de entrada para la penetración militar estadounidense en el ejército colombiano.¹⁰⁹ Entre los programas que más destacan dentro del entrenamiento militar se encuentra el de los Batallones de Alta Montaña, dirigidos a la búsqueda de guerrilleros y narcotraficantes en las zonas donde la presencia ficticia del Estado es casi nula, como algunas de las zonas contempladas en la IIRSA.

Lo anterior se acompaña además de la llamada Estrategia Ecoandina del Ministerio del Medio Ambiente colombiano, que en los últimos meses ha dirigido todos sus esfuerzos hacia el cambio del uso agrícola de los suelos de las zonas estratégicas¹¹⁰ con el fin de convertirlos en reservas bajo el argumento del respeto a la conservación del medio ambiente. Esta iniciativa ha implicado también un esfuerzo por ‘limpiar’ de cultivos ilícitos los Parques Nacionales, acción cuyo objetivo ha sido acabar con la producción de estupefacientes en ese país andino. Sin embargo, diversas agrupaciones medioambientales han alertado sobre las sustancias nocivas que se fumigan en los estos ricos territorios

primera vez en muchos años tuvo como cometido fue desde un principio lanzar a gran escala una guerra para exterminar la enemiga guerrilla interna y todos los opositores.

¹⁰⁹ Para mejor entender la relación entre la lucha contra el narcotráfico en Colombia y el posicionamiento militar estadounidense en ese país a través del Plan Colombia, se puede acudir a la tesis de licenciatura de la autora del presente trabajo, titulada “Proyección hegemónica de los Estados Unidos de América en América Latina. Análisis geopolítico y geoeconómico del Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado en Colombia (Plan Colombia)”

¹¹⁰ Es necesario recordar que en realidad las tierras de uso agrícola en Colombia son escasas dado que nunca ha habido una reforma agraria. Como las mejores tierras quedaron en manos de hacendados, los desplazados tuvieron que marcharse hacia zonas inhóspitas, que como ahora resultan de un gran valor geopolítico y geoeconómico dada la riqueza que suponen, de donde ahora se les quiere desplazar.

y sobre la posibilidad de realizar estas prácticas con el fin de desalojar a los pobladores nativos para después rehabilitar las zonas y concesionarlas, como ya ha ocurrido en varias zonas del Urabá.¹¹¹

No resulta así fortuito que sean las zonas de mayor importancia geoestratégica en Colombia donde se vean con mayor frecuencia las prácticas de la política de Seguridad Democrática. La zona del Cauca se ha convertido en los últimos meses en un blanco de las más agresivas acciones de paramilitares y del ejército colombiano. La zona del macizo caucano ha cobrado particular importancia geoestratégica porque es el punto de convergencia de los principales ríos colombianos. La zona del Cauca es llamada la Estrella Fluvial porque ahí confluyen los ríos Caquetá, Magdalena, Patía y Cauca, hecho que la puede convertir en el punto de encuentro de un corredor fluvial y carretero que recorra Colombia desde el Norte hasta el Sur, como el que tiene contemplado la IIRSA en el cuarto grupo de proyectos para la construcción del Eje Andino, que planea la unión Atlántico-Pacífico a través de la navegación del río Meta. Pero la situación política de esta rica zona es muy complicada: no sólo aloja a una rica zona en recursos hídricos sino que ha sido desde hace ya varios años terreno controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por los grupos indígenas locales.

Si se hace una revisión exhaustiva de los lugares donde se están llevando a cabo los combates más encarnizados entre la guerrilla, los paramilitares y el ejército, no se puede dejar de notar que los esfuerzos estatales están volcados a “limpiar” la zona de opositores, pues no sólo desaparecen guerrilleros sino civiles (periodistas, académicos, activistas, indígenas, entre otros) que denuncian las arbitrariedades del gobierno de Uribe. No obstante, la región de macizo caucano no es el único objetivo de limpieza social para desalojar un territorio estratégico. Tenemos también el caso de la región natal de Álvaro Uribe, el Urabá, donde se planea la construcción de un canal alternativo al de Panamá.

Aprovechando la ventaja de ser el único país sudamericano con salida al Pacífico y al Atlántico, desde hace más de 10 años se viene preparando el terreno en la zona de Chocó, colindante con Panamá, para construir el denominado Canal Seco que sea una alternativa para el transporte de mercancías y armas desde el Atlántico al Pacífico y viceversa sin necesidad de utilizar el Canal de Panamá. El proyecto contempla la construcción de un sistema infraestructural que una los ríos Atrato y Truandó para lograr un paso de los llamados multimodales.

La idea de realizar una vía acuática que una el Mar Caribe y el Océano Pacífico mediante el Río Atrato es una idea vieja, originada en el pasado. Se suponía que los españoles –quienes ya habían fundado la ciudad de Santa María la Antigua– utilizaban una interconexión del Río Atrato con el Río

¹¹¹ Entre estas agrupaciones ambientalistas reconocidas por su trabajo en contra del Plan Colombia y de las acciones contaminantes de las grandes petroleras podemos encontrar a Acción Ecológica, ONG ecuatoriana cuyo serio trabajo puede ser encontrado en la dirección electrónica www.accionecologica.org.

San Juan para llegar del Caribe al Pacífico. El primero que mencionó la posibilidad de construcción de un canal entre estos dos ríos fue el Arzobispo Antonio Caballero y Góngora, en 1789, por lo cual se le denominó desde entonces como Canal del Cura. Más tarde, en 1793, otro hombre de apellido Fidalgo indicaba la existencia de un posible puerto –el arrastradero de San Pablo– entre el Río Atrato y el Río San Juan. En octubre de 1982, el Ministerio de Obras Públicas de Colombia propuso un debate público sobre la posibilidad y la conveniencia de construir una vía acuática, permanente y de gran calado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. A tal fin se proponía profundizar los ríos Atrato y Truandó, su afluente, y luego debía comunicarlos por un canal con el Océano Pacífico. Esta interconexión se debía extender sobre una distancia de 152 km. En el proyecto se había previsto que esta vía acuática permitiera el paso de 190 buques por día, es decir, un tráfico cuatro veces mayor que el del Canal de Panamá. Sin embargo el enorme volumen de trabajo que la naturaleza del terreno impuso para realizar las obras de esta nueva vía del Pacífico al Caribe hizo que el costo del proyecto alcanzara unos 12 mil millones de dólares y, por esto, todo quedó en planes. (CAF, 1998:86)

La zona que ocuparía este canal alternativo al de Panamá está ocupada actualmente por grupos indígenas y guerrilleros, por lo que las acciones para desalojarlos se han recrudecido, tal como en la región amazónica del Putumayo, zona incluida en el primer grupo de proyectos de la IIRSA para la construcción del Eje multimodal del Amazonas; en la región de la Sierra de Santa Marta, donde el grupo indígena kankuamo está siendo gradualmente desplazado de la zona considerada como Parque Nacional; y en la zona petrolera del noreste del país ocupada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La construcción de los ejes de IIRSA en Colombia no puede desligarse de ninguna forma de la aplicación de una política violatoria de los derechos más fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, la construcción de los megaproyectos colombianos contemplados en la IIRSA no se circunscribe a las zonas rurales o más apartadas del centro del país. La propia ciudad de Bogotá es el foco de atención de uno de los proyectos del Eje Andino, que aunque habla tangencialmente de la creación de un corredor periférico en Bogotá para conectarlo con las hidrovías, no deja de incluirlo. La idea de construir una red de integración multimodal que pase por Bogotá no es nueva. Según lo apunta Hernando Gómez Serrano, el megaproyecto denominado SARS-IFSA (South American Riverway System–Integración Fluvial Suramericana) fue presentado por el Doctor Mariano Ospina Hernández en 1995, en la Academia de Artes y Ciencias, Cambridge, Estados Unidos, ante diversos especialistas de Harvard, del MIT y delegados de Gobiernos y Universidades suramericanas. La propuesta de 24 páginas llamó la atención por ser novedosa y el consorcio Harvard-MIT se encargó de continuar con los estudios económicos, geofísicos, ambientales, culturales y de sustentabilidad, necesarios para su ulterior desarrollo. Este documento se caracteriza por ser una versión actualizada de la propuesta del

General Rafael Reyes presentada en 1901 en la Conferencia Panamericana. El texto original resumía en dos idiomas, francés y español, los viajes del General con el gran investigador del Amazonas, Demetrio Salamanca. (2003:30)

Entre los proyectos complementarios contemplados en el SARS-IFSA, existe uno relacionado con la hidrovía del río Orinoco unido al río Meta, que tendría como punto final la ciudad de Bogotá, con importantes avances de obra civil en el trayecto vial hacia los Llanos Orientales. Este proyecto busca establecer una red intermodal que vaya por el río Orinoco, pase por el río Meta, llegue al pie de monte llanero y vincule la ciudad de Bogotá a través de túneles que reducen el trayecto. En documento confidencial del Departamento Administrativo de Planeación del Distrito Capital del año 2001, aparece la propuesta de convertir a Bogotá en una megaciudad que se extienda desde Girardot –puerto fluvial en el Magdalena– hasta Sogamoso –futura zona industrial– y se vincule con Villavicencio y los municipios del pie de monte llanero. Esta megaciudad tendría una red intermodal donde el río Bogotá, proyectado como puerto seco, actuaría como punto internodal que, conectado con el río Magdalena en Girardot facilite la salida de mercancías hacia el Atlántico. (*Ibidem*)

Por otra parte, se podría convertir a Buga en el puerto seco intermodal de la zona Pacífica, lo que lo convertiría en uno de los más importantes de América del Sur por su estratégica posición. La construcción de este controvertido túnel pone en evidencia la magnitud de las inversiones pensadas para la construcción de una infraestructura vial para esta zona, que dicho sea de paso, es una de las más activas políticamente hablando y donde se encuentra el mayor número de opositores al gobierno de Uribe. La construcción del Eje Andino se convierte así en una afrenta para los colombianos, pues su construcción pasa ineluctablemente por la aniquilación de los grupos guerrilleros, de los opositores al régimen, de cambios a la Carta Magna y quizá, por la reelección del actual presidente.

e) EJE PERÚ-BRASIL (Eje Perú-Brasil-Bolivia) (Mapa 6, p. 283)

Según se dice en la información oficial, se trata de un Eje emergente, transversal a Suramérica. En su recorrido engloba diferentes pisos ecológicos y atraviesa un amplio sector de los Andes, con 500 kilómetros de longitud de carretera a través de altitudes que van de los 2000 y 4500 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente, el uno por ciento de la superficie del área de influencia se localiza en la región Costa; el 5.3 por ciento, en la región de la Sierra y el 93.7 por ciento, en la Selva o llanos amazónicos. Esta zona abarca siete departamentos de la macro región sur del Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Cuzco, Puno y Madre de Dios); dos departamentos amazónicos de Bolivia (Pando

y Beni) y cuatro estados del noroeste del Brasil (Acre, Rondônia, Amazonas y Mato Grosso). En total suman 13 demarcaciones políticas que están ubicadas en tres países. El Eje cubre 3.5 millones de km² y 12.3 millones de habitantes. Tiene una densidad poblacional de 3.53 habitantes por kilómetro cuadrado y el 68 por ciento de su población es urbana. El 82 por ciento y el 59 por ciento de la superficie y población del área de influencia, respectivamente, están circunscritas al sector brasileño, mientras que el diez por ciento y 37 por ciento de la población y superficie, corresponde al lado peruano; el resto, 8.3%, a la zona boliviana. (www.iirsa.org, 2004)

El potencial del Eje Perú–Brasil–Bolivia está relacionado con tres factores principales: la posibilidad del Eje de constituirse en una zona de tránsito para las exportaciones brasileñas —que saldrían de Cuiabá, Manaus, Porto Velho y Río Branco— hacia el océano Pacífico; las complementariedades de los diferentes pisos ecológicos a lo largo del Eje; y la oportunidad de mejorar la competitividad de los productos principales de la Región MAP (Madre de Dios, Acre y Pando). Las conexiones entre Perú, Brasil y Bolivia son principalmente carreteras y ríos con capacidad precaria para el transporte. En el Eje, Bolivia y Perú sólo están enlazados mediante el transporte fluvial a través de Puerto Heath. Las carreteras de acceso desde Perú atraviesan el altiplano andino en las regiones de Cusco y Puno y descienden por las frágiles y biodiversas vertientes orientales de la cordillera hacia los llanos amazónicos por grandes extensiones de bosques húmedos, lo cual presenta importantes consideraciones ambientales. Los pasos de fronteras son deficientes o inexistentes y existe muy poco o nulo intercambio formal. El transporte aéreo hacia la región es sumamente limitado, especialmente desde Perú y Bolivia (Río Branco y Porto Velho tienen un servicio periódico en un circuito con Manaus, Sao Paulo y Brasilia). Los servicios de telecomunicaciones tienen muy bajos niveles de cobertura y altos costos, contribuyendo al aislamiento de la región. (*Ibidem*)

Dentro de los aspectos económicos, el sector brasileño registra el 67.9 por ciento del PIB del Eje; sus equivalentes peruano y boliviano, añaden 30.9 por ciento y 1.2 por ciento, respectivamente. El ingreso per cápita se encuentra relativamente mejor distribuido entre los cuatro estados brasileños del Eje (rango de variación de 2 a 1). Algo muy diferente se aprecia en el sector peruano, donde se puede valorar un mayor ingreso en los departamentos que están localizados en la región costa con relación a los ubicados en la sierra (rango de 14 a 1). Finalmente, Pando logra un 50 por ciento más de ingreso per cápita que el Beni. Los ingresos per cápita en el Eje son menores que el promedio nacional de sus respectivos países. Así, los sectores de Brasil, Bolivia y Perú representaron el 81, 97 y 98 por ciento respectivamente, de los valores promedios nacionales alcanzados en sus respectivos países. (*Ibidem*)

El primer grupo de proyectos está enfocado a la construcción del corredor Porto Velho–Río Branco–Puerto Assis–Puerto Maldonado–Cusco / Juliaca–Puertos Marítimos del Pacífico. La función

estratégica de este eje es abrir nuevas posibilidades para el desarrollo socioeconómico de la macroregión Sur del Perú y los estados de Acre y Rondonia del Brasil a través de su vinculación conjunta, y facilitar el acceso de dichos estados brasileños así como de la sierra y amazonía peruanas hacia los mercados internacionales, en especial de la Cuenca del Pacífico, impulsando así el proceso de integración regional. El Proyecto Ancla es la pavimentación del tramo carretero Iñapari–Puerto Maldonado–Inambari y del trecho Inambari–Juliaca / Inambari–Cusco. Los otros proyectos del grupo son la construcción del puente sobre el Río Acre; la ampliación del aeropuerto Puerto Maldonado; la edificación del Paso de Frontera y la construcción de un CEBAF en la frontera entre Perú y Brasil. (*Ibidem*)

El segundo grupo está enfocado a la construcción del corredor Río Branco–Cobija–Riberalta–Yucumo–La Paz. Su función estratégica es proporcionar una alternativa de integración biocénica a través de Brasileia/Cobija hasta La Paz por Riberalta y Yucumo. Desde estas últimas ciudades se articularía hasta los puertos del Pacífico, conectando en su trayecto vastas porciones poco desarrolladas del territorio noroeste brasileño con el noreste boliviano. El Proyecto Ancla es la construcción de la carretera Guayaramerín–Riberalta–Yucumo–La Paz. Los otros proyectos del grupo son la construcción del Paso Fronterizo Río Branco–Cobija; el mejoramiento de la carretera Cobija–El Choro–Riberalta; la rehabilitación de la carretera Yucumo–Trinidad y Cobija–Extrema; y la construcción de un Paso de Frontera entre Perú y Bolivia en Extrema. (*Ibidem*)

El tercer grupo de proyectos está orientado a la construcción del corredor Porto Velho–Madeira–Guayaramerín. La función estratégica de este grupo de proyectos es consolidar una vía de integración internacional fluvial que afectaría principalmente la logística de transporte y el desarrollo socio-económico de las regiones de Madre de Dios en Perú, Rondonia en Brasil y Pando y Beni en Bolivia. El Proyecto Ancla de este grupo es la navegación del Río Madeira entre Porto Velho, Brasil y Guayaramerín, Bolivia. Los otros proyectos del grupo son la construcción del Complejo Hidroeléctrico Río Madeira con esclusas para navegación; la construcción de la Hidroeléctrica Binacional Bolivia–Brasil; la construcción de la Hidroeléctrica Cachuera-Esperanza (Río Madre de Dios); el tendido de las líneas de transmisión entre las dos hidroeléctricas del río Madeira y el sistema central; la habilitación de la Hidrovía Madre de Dios y la construcción de un Puerto Fluvial, si es factible tras un estudio de navegabilidad, batimetría, identificación de puntos críticos y requerimientos de dragado; y la habilitación de la Hidrovía Ichilo-Mamoré. (*Ibidem*)



Este eje que es uno de los más cortos une la zona sureste de Perú con la importante ciudad de Porto Velho, puerto ubicado en el río Madeira, que es la única entrada posible hacia Manaus. Este eje

carretero y ferroviario que vincula Porto Velho con los puertos peruanos de Ilo y Matarani, pasando por Puerto Maldonado, Perú, intenta fortalecer esta región peruana famosa por las malas condiciones de sus caminos y por la pobreza de sus habitantes (como en la mayoría de todo Perú). Debido a que hablamos de un terreno difícil por el cual cruzan los Andes, no se ha podido establecer claramente cuáles serían las vías exactas por las que se construiría. Lo único que se tiene claro es que diversifica las salidas de Brasil hacia el Pacífico, pero la dificulta. Sin embargo, como se afirmaba cuando se habló del eje Brasil-Bolivia-Paraguay-Perú-Chile, el Eje Interoceánico, Brasil tiene que pasar necesariamente por Bolivia para acceder al anhelado océano porque aunque no pasa oficialmente por este pequeño país, el mapa muestra que lo bordea por Pando. Se cree que esta es una de las razones por las cuales se incorporó a Bolivia al Eje cuando en un principio no estaba contemplado.

El Eje Perú-Brasil-Bolivia tendrá dos importantes implicaciones para los bolivianos, cuyo territorio se está volviendo una pieza clave del ajedrez sudamericano. Primero, para ahorrarse 100 km entre Porto Velho y Puerto Maldonado se proyecta hacer una vía rápida por que pase por Pando, lo que implica construir la carretera que va del Km19 a Nareuda y de ahí a Extrema, la cual tiene la ventaja de ser menos costosa con relación a las otras carreteras bolivianas. Segundo, se pretende que Bolivia se vincule con este eje mediante un corredor de integración que comprende la carretera La Paz-Guayaramerín y la carretera El Choro-Porvenir. Por ello ha venido hablando recientemente en el discurso gubernamental boliviano de la integración entre el norte del país y La Paz.

La primera carretera, la Km19-Nareuda-Extrema no se tiende sobre una parte con mucha población, por lo que puede llegar a la fácil conclusión de que no se construirá para transportar tanto a las personas sino que servirá para las empresas que puedan hacer pasar sus mercancías en camiones entre Brasil y Perú pasando por Bolivia. Además, se trata de un área muy delicada puesto que comprende a cientos de especies diferentes de mamíferos y aves de la Reserva Manuripi. La segunda carretera, la del corredor La Paz-Guayaramerín se conectaría con el Eje Perú-Brasil por dos partes: por la carretera El Choro-Porvenir que se vincularía con la carretera Km19-Nareuda-Extrema y por la conexión entre Guayaramerín y Porto Velho, Brasil. Se habla de que el tramo El Choro-Porvenir costaría 164 millones de dólares y serían un préstamo gubernamental hecho por la CAF a costa del erario y de la ruina de la Reserva Nacional Amazónica Manuripi. (FOBOMADE, *Op. Cit.*:55)

Este eje también tiene prevista la construcción de una carretera que una Ilo con Iñapari (Perú), que se interconectará con todo el sistema de vías fluviales del Brasil. Con esta carretera, se prevé abastecer de productos frescos y cemento, principalmente a la zona de Acre y Mato Grosso en Brasil. En ese sentido, se destaca la actual construcción de la carretera BR-317 (110 km) que une Brasileia con Assis Brasil (frontera con el Perú), conocida como “Carretera del Pacífico”, cuya construcción y

pavimentación fueron financiadas por el gobierno federal brasileño y en menor medida por el Gobierno de Acre.

Como se mencionaba al inicio de este subcapítulo, cuando se hablaba de la desaparición de dos ejes, podemos observar que dentro del Eje Perú-Brasil-Bolivia podemos encontrar proyectos antes contemplados en el eje Orinoco-Amazonas-Plata. Sorpresivamente, este vital eje planteado originalmente en el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Suramericana desapareció de los documentos oficiales sin explicación de la lógica seguida para suprimirlo. No se conocen las razones oficiales de esta eliminación; quizá se piensa que este eje resulta redundante si la integración del río Orinoco al río Amazonas ya está contemplada en el Eje Amazónico. Sin embargo, aunque ausente de los documentos oficiales más actuales, los planes para la construcción del eje Orinoco-Amazonas-Plata siguen en marcha, contemplados en el tercer grupo de proyectos del Eje Perú-Brasil-Bolivia —que incluye a Bolivia cuando originalmente no lo hacía— por lo que no se descarta del análisis sobre la IIRSA. (Ver Mapa 7, p. 284)

Históricamente, los territorios cercanos a la Cuenca del Amazonas, lugar donde existen las mayores reservas de agua dulce en el planeta, han sido una fuente de conflictos y ambiciones en torno a dos asuntos principales: primero, la fluvialidad es decir, el control de los ríos y de sus cuencas con sus afluentes y en segundo lugar, la *bioceanidad* la capacidad de tener acceso a dos océanos. A lo largo de los siglos XIX y XX, el río Amazonas y el Orinoco han sido objeto de disputa entre Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Francia. Intentando terminar con los conflictos y vendiendo la idea de un aprovechamiento homogéneo para todos los países de las grandes corrientes de estos tres ríos, la IIRSA ve a las vías fluviales como otro medio para hacer circular la mercancía pero también como una importante fuente de energía. Así, se proyecta la construcción de hidrovías —que son como autopistas dentro de un río— y de represas hidroeléctricas. En el mapa anterior se puede ver otro de los Ejes de la IIRSA que conecta de norte a sur y de este a oeste el subcontinente sudamericano: el Eje Orinoco-Amazonas-Plata. El proyecto de esta unión fluvial planea hacer circular cargas de insumos, mercancías y personas entre Venezuela y Argentina únicamente pasando por los ríos de la cuenca amazónica, una de las cuencas más ricas del mundo en biodiversidad.

Esta hidrovía que parte del delta del Orinoco y termina en el río de La Plata es un trayecto de más de 8.000 km que integrará, en términos verticales, el sur del continente. Cuando asumió la Presidencia del Brasil, el Presidente Fernando Henrique Cardoso prometió que antes de entregar su cargo la vía fluvial que comunica a São Paulo con Buenos Aires estaría terminada. En aquel momento faltaban 18 km de conexión en los ríos Titie-Paraná, en las cataratas de Iguazú. Actualmente sólo faltan

2.5 km para completar esta hidrovía. Así, la promesa presidencial parece ya una realidad. (Almeida, 2004)

Actualmente, las mercancías y las personas ya se pueden movilizar a través de la navegación entre las costas del norte de Brasil —especialmente Belém— y la ciudad de Porto Velho (Brasil) a través de los ríos Amazonas y Madeira, en lo que constituye la transitada hidrovía del Madeira. Pero los artífices del proyecto de la IIRSA advierten que es posible aumentar el tráfico en otras vías y que se podría navegar entre la ciudad del Cáceres —Brasil— y los puertos argentinos a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, sólo que en este Eje se presentan dos obstáculos mayores debido a que, en primer lugar no se puede navegar entre el Río Madeira de Brasil y el Río Mamoré de Bolivia debido a la existencia de una zona de cachuelas o pequeñas cascadas entre Porto Velho (Brasil) y Guajara-Mirín, Brasil, ciudad que se encuentra frente a Guayaramerín en Bolivia. La solución ofrecida para salvar este obstáculo es el aprovechamiento de esas vías fluviales proyectando la construcción de represas hidroeléctricas y un sistema de esclusas.

En segundo lugar nos enfrentamos a la ausencia de conexión entre el Río Guaporé y el Río Paraguay para conectar los Ríos del Norte con la Hidrovía Paraguay-Paraná. El Río Guaporé forma la línea divisoria entre Brasil y Bolivia y presenta condiciones de navegación para embarcaciones de pequeño y medio porte en la época de crecida. Uno de los afluentes del Guaporé, el Río Alegre, se acerca a pocos kilómetros del Río Aguapei, el cual se vincula con el Río Paraguay pero no lo alcanza completamente. La solución para salvar este obstáculo es el proyecto para conectar los Ríos Alegre y Aguapei mediante un sistema de canales artificiales y esclusas para poder conectar el Río Guaporé y el Río Paraguay, las cuales serían financiadas por el BID y FONPLATA.

Tal como se destacó antes, con el objetivo de navegar entre el Río Madeira y el Río Mamoré, se proyecta inundar las cachuelas que se encuentran entre Porto Velho y Guajara-Mirim y aprovechar el desnivel del río para construir dos represas gigantescas: una en Santo Antonio, que generaría 3'580 MW y otra en Jirau, municipio de Abuña (3'900 MW) (CAF, 1998:126). Las dos plantas exigirían una inversión de 4'000 millones de dólares y generarían el equivalente del 10% de la actual capacidad hidroeléctrica de todo Brasil. Para generar esa cantidad de energía, se requieren represas que, según los expertos, deben medir 17 metros de alto y tener una capacidad de 21,000 metros cúbicos por segundo. Además se están planteando una asociación entre Brasil y Bolivia para construir una represa en Cachuela Esperanza, Bolivia que generaría 3'000 MW. Las dos represas proyectadas, Santo Antonio y Cachuela Esperanza, se integran además dentro del mismo paquete de negociaciones entre Brasil y Bolivia por la construcción de los gasoductos. (FOBOMADE, *Op. Cit.*:62)

El Eje Orinoco-Amazonas-Plata consideraba además la unión con la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, reimpulsada a partir de la reestructuración del Tratado de la Cuenca del Plata. Hay un proyecto común de los gobiernos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay para agrandarla. Así, se contempla modificar artificialmente los cursos naturales de los ríos Paraguay, Paraná y Plata en un tramo que mide 3,420 kilómetros. Con ello se busca disponer de un sistema de transporte de materias primas y bienes comerciales con costos más bajos. Los trabajos consistirían en obras de dragado, derrocamiento de montes, obras destinadas a permitir el paso de convoyes de 4 metros por 5 y de barcazas de 4 metros por 4. La construcción de esta obra costaría 1.2 millones de dólares y su operación y mantenimiento durante 25 años representaría un costo de 3'000 millones de dólares. (CAF, *Op. Cit:128*) Los estudios han sido financiados por el BID, CAF, las Naciones Unidas (PNUD) y los diferentes gobiernos nacionales.

Como en Argentina los trabajos de dragado ya están avanzados, las obras del proyecto se concentrarían principalmente en Brasil. Los impactos inmediatos serían sobre los ríos y la cuenca, en especial sobre la región del Pantanal, que es la mayor llanura de inundación del mundo. El Pantanal, sobre todo en el área boliviana, es un ecosistema muy preservado y rico, como se vio anteriormente. Sin embargo, el mejoramiento de la Hidrovía ocasionaría no solamente que su superficie disminuya, sino también la pérdida de la biodiversidad y degradación de ecosistemas acuáticos y terrestres, de bosques y humedales. También se producirían cambios climáticos en la región y un deterioro de la calidad de las aguas debido al aumento de las actividades agrícolas, industriales, etc. Además, en muchos casos, la población local se vería obligada a migrar al perder sus medios tradicionales de subsistencia, pesca y caza, aumentaría la pobreza y se perderían conocimientos ancestrales del uso del bosque.

Así, aunque la hidrovía no pase propiamente por Bolivia, se planean dos medios de vinculación, que se articulan con el Eje Interoceánico y que son proyectos complementarios de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. En primer lugar, el Canal Tamengo, curso de agua que sale de la Laguna Cáceres en Puerto Suárez y desemboca en el Río Paraguay en Corumbá, Brasil. El proyecto sería ensanchar el Canal a 90 metros de ancho. En segundo lugar se intentaría construir un puerto, Puerto Busch, ubicado sobre el Río Paraguay en el Corredor Man Césped que permitiera la salida de la mercancía por la Hidrovía. Además, para vincular Puerto Busch con Puerto Suárez, se proyecta la construcción de un ferrocarril entre Motacucito y Puerto Busch. Es importante señalar que este ferrocarril interesa además porque permitiría transportar los minerales del Mutún, rico en hierro y manganeso. Se trata de una zona muy frágil debido a la presencia de las Cavernas de Motacucito y a la proximidad del Parque Nacional Otuquis.



No obstante que la anterior revisión de la importancia geoestratégica de los proyectos incluidos en la construcción de los ejes de la IIRSA nos permite conocer los puntos y referencias geográficas vitales para el planteamiento geopolítico de una gran potencia en la búsqueda del fortalecimiento de su hegemonía en Sudamérica en general y en la región del arco andino y la cuenca amazónica en particular, es necesario exponer con mayor detalle la relación entre la construcción de esta infraestructura y la estrategia de política exterior norteamericana dirigida a satisfacer sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en la región andina y la cuenca amazónica. De igual manera, resulta importante esclarecer la forma en la que las acciones estadounidenses por el control del espacio alteran la geopolítica regional. Ambos tópicos serán objeto de disquisición en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO III

LA IIRSA EN LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA Y LA GEOPOLÍTICA REGIONAL

A. EL ARCO ANDINO Y LA CUENCA AMAZÓNICA EN EL PLANTEAMIENTO GEOPOLÍTICO Y GEOECONÓMICO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Si bien es cierto que este trabajo está orientado hacia la revisión y análisis de los ejes de desarrollo planteados por la IIRSA, no lo es menos que dichos proyectos para la construcción y mejoramiento de la infraestructura en dicha subregión están íntimamente ligados a los planes de política exterior de los Estados Unidos para América Latina en general y para el arco andino y la cuenca amazónica en particular. Por eso, además de hacer referencia a la importancia geoestratégica y geoeconómica que *per se* poseen los ejes al estar planteados en lugares de evidente relevancia política y económica, resulta imperativo explicar los nexos existentes entre la necesidad interna de las élites político-empresariales de la Unión Americana de mantener su hegemonía en la región y la necesidad del capitalismo norteamericano de hacer frente a una situación de vulnerabilidad estratégica que lo deja en desventaja en la crisis de sucesión hegemónica actual y que sólo mejoraría satisfaciendo sus intereses geopolíticos y geoeconómicos, con la actual propuesta de la IIRSA, que como ya se vio, vuelca sus mayores esfuerzos hacia ciertos países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, países que comparten la posesión de la cuenca amazónica.

De esta manera, el esclarecimiento de las relaciones establecidas entre la construcción de la IIRSA en los países señalados y los objetivos geopolíticos y geoeconómicos norteamericanos busca evidenciar que el acondicionamiento de una red infraestructural en la zona es la forma de instrumentar el dominio sobre este espacio. A riesgo de caer en la redundancia, es necesario reafirmar que puesto que las relaciones de poder y fuerza también y sobre todo son relaciones espaciales, la política exterior de los Estados Unidos en la región andina y en la cuenca amazónica no se puede entender sin recurrir a los planos de la geopolítica, la geoestrategia y la geoeconomía, pues las relaciones internacionales no se gestan ex-nihilo.

La posesión de recursos básicos para la existencia y reproducción de esta gran potencia capitalista implica la ocupación *real* del territorio de una geoestratégica región, lo que significa la realización de proyectos que hagan efectivo el transporte y comercio de los bienes por tierra y agua, el desarrollo de la agroindustria, el estímulo de zonas de turismo controladas por corporaciones

transnacionales y que, sobre todo, logren la privatización de los sectores más estratégicos. Para poder controlar estos nuevos enclaves del siglo XXI no se necesita solamente el despliegue militar: es necesario contar con medios de transporte y vías eficientes para el traslado de las mercancías; con fuentes de energía que hagan funcional el transporte y los sistemas de producción —petróleo, gas y electricidad, lo que implica la construcción de plantas hidroeléctricas, gasoductos y oleoductos además de la interconexión eléctrica; con agua para actividades productivas —esto incluye la edificación de presas, acueductos, sistemas de riego y de bombeo, entre otras; y con un buen sistema de telecomunicaciones. Además del evidente impacto en la geografía económica de la región, estos proyectos —o *megaproyectos*, según se les llama ahora— poseen singular importancia política porque están reorganizando el territorio en tanto sus objetivos traspasan los límites fronterizos nacionales y establecen nuevas fronteras tanto dentro de la escala local como en la nacional y la internacional.

Así, la IIRSA posee un fuerte referente espacial que convierte a la ocupación y dominio del territorio en la esencia del proyecto, pues, como ya se vio, comprende la construcción de autopistas, vías férreas, hidrovías, puertos fluviales y marítimos, zonas francas, oleoductos, gasoductos y redes eléctricas y de telecomunicaciones ahora inexistentes o poco adecuadas para la imperiosa necesidad norteamericana de, por un lado, realizar la extracción intensiva de recursos naturales estratégicos y, por el otro, poseer el control militar de la subregión. De esta forma, para mejor explicar la manera en que los Estados Unidos trabajan para conseguir sus objetivos, en los siguientes apartados se explicará la relación entre el acondicionamiento de la infraestructura en los países andinos y la cuenca amazónica y la política exterior norteamericana en los siguientes rubros: la importancia geoestratégica de la IIRSA; el dominio de los ríos; el control del gas, del petróleo y del carbón; las riquezas de la Amazonia; la militarización de la región andina y la cuenca amazónica; y el libre comercio regional.

a) LA IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA DE LA IIRSA

Si se considera que los esfuerzos por el control de los puntos geoestratégicos en América del Sur han sido una constante de la política exterior norteamericana, se puede ver que la IIRSA establece una especie de continuidad en las intenciones de los gobiernos de la Unión Americana. Los intereses y el dinero de Estados Unidos en América Latina se ha concentrado en los últimos años en los países Caribe del norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela, y en los del arco andino. Los primeros —junto con América Central y la cadena de islas que se extienden desde el este de Venezuela hasta la punta occidental de Cuba— forman parte de una zona de gran importancia tanto porque colindan con la zona

mediterránea y por sus exportaciones tropicales como por su riqueza en minerales y por su situación estratégica entre dos océanos. Históricamente, dentro de la visión geopolítica de los Estados Unidos, Colombia y Venezuela, que pertenecen geográficamente al continente sudamericano, han sido consideradas como parte de un mundo intermedio entre el norte y el sur y han trabajado para que esas naciones establezcan un contacto más próximo con los Estados Unidos que con América del Sur. Por eso, estos países, a diferencia de los del Cono Sur, poseen mayores lazos comerciales y diplomáticos con la potencia del norte que con otras potencias europeas o asiáticas, como Brasil.

Si bien hay las razones sociopolíticas y económicas que explican la construcción de obras de infraestructura en zonas de actividad guerrillera o de población indígena, es importante decir que también hay fuertes razones de índole geoestratégica en los planteamientos de la política exterior norteamericana para controlar el espacio de Colombia y empezar por aquí la ocupación más o menos directa hacia la región andina y la cuenca amazónica. Colombia posee fronteras terrestres con Panamá —sede del único canal interoceánico en el hemisferio occidental—, Ecuador, Perú, Brasil —potencia regional y economía líder en América Latina— y Venezuela —el mayor exportador de petróleo de América Latina y segundo proveedor para Estados Unidos. Además, es el único país sudamericano bañado por el Mar Caribe, que le da paso al Océano Atlántico, y por el Océano Pacífico. No resulta fortuito que uno de proyectos más importantes para la IIRSA sea la construcción de denominado Canal Seco, que uniendo los ríos Atrato y Truandó, se convierte en la mejor alternativa para el transporte de mercancías y armas desde el Atlántico al Pacífico y viceversa sin necesidad de utilizar el Canal de Panamá.

Según lo visto, las ventajas en la posición de Colombia y de sus características geográficas son varias: los cerca de 3 000 km de costas repartidas casi por igual en los océanos y su acceso a ambos; el dominio de costas en ambos océanos, lo que lo hace propicio para el comercio con otros continentes: por un lado, el Atlántico pone a Colombia en comunicación directa con los mercados de Europa y el resto de América; por el otro, el Pacífico le abre los centros consumidores de Asia, Oceanía y América. Colombia tiene además a su favor la posesión de zonas interoceánicas como Napipí, Cacarica y Truandó y su parte en la cuenca del Amazonas, que tiene una extensión de 406 mil km² correspondientes al 35.56 % del total del territorio nacional y que es casi el 6% de la totalidad del territorio amazónico.

Aunque otras regiones de Colombia son muy apetecibles como el piedemonte de la cordillera oriental, reserva inmensa de hidrocarburos y la zona de Urabá rica en todo tipo de minerales y por su biodiversidad y las reservas de carbón en la Guajira, sin lugar a dudas una de las importantes ventajas de la geografía colombiana es su posición para el comercio internacional —nunca explotada por los

gobiernos colombianos, que dirigen sus la mayor parte de sus exportaciones hacia un solo país— por la cercanía con el Canal de Panamá, que se encuentra en una zona geográfica que alguna vez le perteneció a Colombia.

El Canal de Panamá es una vía acuática interoceánica de aproximadamente 75 km de largo. Su construcción conllevó una guerra de secesión: el Estado de Panamá fue una pura invención de los intereses geopolíticos estadounidenses dentro de las propuestas de construir un canal interoceánico que permitiera el transporte ya de mercancías, ya de pertrechos militares, de un océano a otro sin necesidad de bajar hasta el Cabo de Hornos, en la Patagonia. Con Nicaragua descartado, debido a la falsa propaganda de que pronto tendría lugar ahí la erupción del volcán Momotombo, Theodore Roosevelt empezó a estructurar y financiar un movimiento local secesionista en Colombia y en 1903 apoyó a un gobierno separado en la base del istmo de Centroamérica¹¹². Colombia recibió 25 millones de dólares en compensación y el canal fue abierto en 1914.

La creación de Panamá estaba ligada a los intereses geopolíticos y comerciales de los Estados Unidos: le proveyó de una línea estratégica entre los océanos Atlántico y Pacífico desde los cuales pudiera monitorear la actividad europea en el hemisferio —especialmente la alemana¹¹³— y también de una vía más corta para el comercio con Asia y una ruta marítima de la Costa Este hacia la costa Oeste. Para mantener su categoría de naciente poder mundial careciendo del canal, los Estados Unidos estaban obligados a tener dos flotas equivalentes, una en el Atlántico y otra en el Pacífico. Sin embargo, con el paso del tiempo, la seguridad del Canal llegó a ser la consecuencia lógica para la reafirmación de los intereses regionales de Washington, desde la garantía de las concesiones petroleras en Colombia en 1917, pasando por el adiestramiento de un gran número de militares latinoamericanos en la escuela de la zona del Canal, en la Escuela de las Américas, hasta la intervención de la CIA en Guatemala en 1954, entre otras.

No se sabe si fue la fuerza de los movimientos nacionalistas panameños o el hecho de que la zona del Canal se volviera menos importante en la planeación de la gran estrategia estadounidense pero en noviembre de 1977 se firman los acuerdos Torrijos-Carter para regresar la administración del Canal a Panamá en el año 2000. Sin embargo, en diciembre de 1989, el gobierno de George Bush decidió intervenir militarmente en Panamá con el pretexto de atrapar al General Manuel Antonio Noriega, presidente en ese momento, teniendo como principal motivación la participación de éste en asuntos del

¹¹² Considerando la urgencia que tenía para los intereses geopolíticos estadounidenses, Roosevelt no se esperó a que le fuera autorizado el apoyo a un nuevo gobierno. Se dice que pronunció estas palabras: "I took the Canal Zone and let Congress debate" ("Yo tomo la Zona del Canal y dejo que el Congreso debata") (Smith, 1994:210)

¹¹³ Los Estados Unidos sufrieron un susto mayúsculo al enterarse de las pretensiones alemanas de aliarse con México para, desde este país, invadirlos.

narcotráfico. Tras esta intervención, denominada “Causa Justa”, los Estados Unidos disolvieron las fuerzas armadas panameñas. Muchos analistas hablaron de que la intervención se debió en realidad al destino que tendría ese Canal en diez años, pues dentro de los tratados firmados en la década de los setenta había una cláusula que hablaba de la imposibilidad de entregar el Canal si Panamá estaba sumida en la inestabilidad.

Desde 1995 las maniobras militares en Panamá se multiplicaron con pretexto de la lucha antidrogas y ya no hubo duda de que los Estados Unidos trataban de asegurar la permanencia de sus bases en Panamá. Como los intentos de establecer un Centro Multilateral Antidrogas fracasaron, y como en virtud del Tratado de Neutralidad, parte integrante de los Acuerdos Torrijos-Carter, Washington puede intervenir unilateralmente en Panamá sin la autorización del gobierno de este país si la vía interoceánica se encontraba amenazada, desde 1998, los voceros oficiales del gobierno estadounidense, especialmente los de las agencias implicadas en la lucha contra las drogas, empezaron a manejar un excelente pretexto: la posible infiltración de las guerrillas colombianas en Panamá, junto con los peligros de desestabilización que representa, siendo el más importante la interrupción del comercio internacional pues se sabe que si se toma el Canal se puede cortar el flujo comercial mundial.

Los intentos de los Estados Unidos por no desalojar la zona del Canal o en todo caso construir un canal alternativo, muestran que Panamá y Colombia continuarán teniendo importancia geopolítica por su posición geográfica, por el Canal y por los puestos de avanzada en la región que se ha traducido en la presencia militar de los estadounidenses. La entrega física del Canal no dio por terminada la presencia estadounidense en ese particular sitio: a lo largo de un siglo construyó un sistema de comunicaciones y de seguridad que bordea todo el mar interior del Caribe, cuyo puesto receptor NO se ha desmantelado. Es mentira que toda la capacidad operativa que existía en Panamá se fue para Miami o Puerto Rico; ésta se ha distribuido por Colombia, Ecuador, Perú y otros países, como se explicará más tarde.

Pero si en un primer momento el Canal de Panamá fue importante para asegurar el comercio y para monitorear a Europa, en estos tiempos su importancia es más bien militar pero orientada hacia el hemisferio y radica más bien en la posibilidad de asentar sus bases militares cerca de los países sudamericanos, en especial los de la región andina y la cuenca amazónica, donde tiene tantos intereses estratégicos. Prueba de ello es que sólo 12% del comercio marítimo estadounidense —bienes pesados de bajo costos como granos, fertilizantes, productos químicos y madera— transita por el canal, por origen o destino de la carga. (Martínez, 1999) Aunque Estados Unidos es el principal usuario de la vía interoceánica panameña —seguido por Japón, Canadá, China y Chile— y aunque los buques que usan esta ruta sólo tienen como alternativa bajar hasta el Cabo de Hornos o Buena Esperanza, Panamá no es

el único país con la posibilidad de tener una vía de este tipo. No resulta fortuito que uno de proyectos más importantes para la IIRSA sea la construcción de denominado Canal Seco, que uniendo los ríos Atrato y Truandó en la región del Urabá, se convierte en la mejor alternativa para el transporte de mercancías y armas desde el Atlántico al Pacífico y viceversa sin necesidad de utilizar el Canal de Panamá. Además, el control de esta región sería más interesante para los Estados Unidos porque posee petróleo, cobre, carbón, agua, madera, oxígeno y biodiversidad¹¹⁴.

No se puede mencionar el Canal de Panamá sin hablar del papel del Comando Sur o Southcom. Este comando tiene su origen en 1903, cuando los primeros marines estadounidenses llegaron a Panamá para proteger el istmo. En 1917, las fuerzas armadas estadounidenses activaron un Departamento del Canal de Panamá como un comando geográfico. La importancia de este paso se hizo tan evidente en este periodo de guerras mundiales que para diciembre de 1946, el presidente Harry Truman aprobó el establecimiento de un sistema de comandos militares enlazados que colocaran a las todas fuerzas armadas dentro de una región geográfica bajo un comando unificado al mando de un solo general. Uno de estos comandos, el Comando de Caribe (Caribbean Command), tenía la responsabilidad del área caribeña, de América Central y de Sudamérica. En junio de 1963, el Secretario de Defensa rediseñó el Caribbean Command y lo convirtió en el Southern Command (Southcom), que en enero de 1996 amplió su área de responsabilidades (Area of Operational Responsibility, AOR), con lo que se hacía cargo del control militar de la región del Caribe, del Golfo de México y de algunas porciones de los océanos Atlántico y Pacífico. El número de países de su AOR aumentó de 19 a 32 y en 1997 su sede se movió de Panamá a Miami, con una subsede en Puerto Rico¹¹⁵.

El traslado del Southcom cambia la estrategia militar del gobierno estadounidense. Por ello, el gobierno estadounidense negoció el asentamiento de nuevas bases militares en los países cercanos a Panamá: en Manta, en Ecuador, en la Isla de Curazao en las Antillas holandesas y, de manera más oculta, en Comalapa, en El Salvador y la de Soto Cano, Honduras. Así, aunque haya abandonado Panamá, estas bases le permiten introducirse tanto en el espacio aéreo de la mayor parte de los países de América Latina como en sus aguas territoriales y su espacio terrestre. La facilidad con que los militares estadounidenses pudieron construir esa red de bases se debió principalmente al apoyo y entrenamiento de oficiales ofrecido por el Southcom en América Latina, dentro de la Escuela de las

¹¹⁴ En agosto de 1999 el general Charles Wilhelm, jefe del Comando Sur, fortaleció con armamento el Puesto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina en Matantugo. De la base de Vieques en Puerto Rico a Urabá sólo hay un asalto en la madrugada.

¹¹⁵ Después de los sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, los comandos regionales sufrieron una transformación. Ante la necesidad, a decir del Pentágono, de cuidar mejor las fronteras estadounidenses, se creó el Northcom (Comando del Norte), el cual empezará a operar en octubre 1 de 2002 en la Base Peterson de la Fuerza Aérea, en

Américas. Esta escuela, establecida en 1946 en la zona estadounidense del Canal de Panamá, fue el centro de información más importante de que permitió a los Estados Unidos entrenar y formar ideológicamente más de 60 mil militares.¹¹⁶

Además de estar cerca de la zona del Canal, tanto Colombia como Venezuela forman parte de la denominada *Cuenca del Caribe* (Caribbean Basin), conocida popularmente en los medios militares estadounidenses como el “Lago Americano” (American Lake) y desde donde sale el carbón mineral de la Guajira y el petróleo de Maracaibo. Desde recién conformados los Estados Unidos, esta área estuvo en el foco de su expansionismo. Ya para 1898, con motivo de la guerra hispano-americana, este país había reafirmado su presencia hegemónica en el Hemisferio Occidental al controlar la Cuenca Caribeña, que abarca desde el territorio de Florida, alrededor de las orillas del Golfo de México, hasta las tierras costeras del norte de Sudamérica, incluyendo las islas-Estado del Mar Caribe. El número de bases apostadas en esa zona expresa de forma patente, en términos geográficos, la ambición política de Washington en América Latina.

Al estallar la II Guerra Mundial, Washington mostró gran interés en completar su sistema defensivo en el Caribe y es así que tuvo lugar en los primeros días de 1940, aún antes de la entrada de los Estados Unidos a la guerra, una transacción única en la historia: este país logró el alquiler durante un periodo de 99 años de todas las bases inglesas del Mar Caribe. Muy pronto, el ejército estadounidense se estableció en Mayaguena, en las Bahamas, en Jamaica, en Antigua, en Santa Lucía, en Puerto España, en Trinidad y en Suddie y Georgetown, en las Guyanas británicas, todas ellas bases inglesas que Londres cedía a Washington para que éste completara el círculo defensivo exterior del Canal de Panamá.

Hasta la actualidad, Estados Unidos ha buscado prevalecer en el Caribe, zona que es vital para su seguridad, tanto desde el punto de vista militar-estratégico como de las comunicaciones marítimas, aéreas y por supuesto, las telecomunicaciones en tiempos de paz. William Perry, secretario de Defensa de William Clinton, afirmaba que un porcentaje cuantioso del respaldo logístico para cualquier refuerzo de emergencia a la posición estadounidense en Europa y el Medio Oriente debía originarse o pasar a través del área del Caribe, tal como las transferencias de recursos a Asia requerirían el movimiento de unidades de combate y abastecimientos a través de canal de Panamá. A decir de Saxe Fernández,

Colo. Este nuevo comando quita al Southcom la responsabilidad de cuidar las aguas del Golfo de México, lo que corresponde al territorio cubano y una parte del Océano Atlántico, a la misma altura de Cuba.

¹¹⁶Después de 1984, esta escuela fue transferida a Fort Benning (Georgia). En los noventa, en parte gracias al escándalo de los contras en Nicaragua, el gobierno norteamericano cerró la Escuela de las Américas y lo convirtió en un instituto militar bajo el mando del Departamento de Estado y no del Pentágono, denominado Instituto de Defensa para la Cooperación de la Seguridad Hemisférica.

El Caribe es una pieza central de la estrategia oceánica de Estados Unidos ya que es el vínculo entre este país y el teatro de operaciones militares en el Atlántico. El envío de combustibles, materiales estratégicos y bélicos en tiempos de paz y el tránsito de las fuerzas estadounidenses hacia Europa en tiempos de guerra hacen que el dominio sobre las líneas de comunicación marítima del Caribe, el golfo de México y el Canal de Panamá y, eventualmente, el istmo de Tehuantepec, resulten vitales en la planeación oceánica de Estados Unidos. (1997:21)

Además y por si fuera poco, de la región caribeña los Estados Unidos obtienen el 85% de la bauxita que importa y por esta misma región, circula gran parte del petróleo que viene de América del sur.

Si bien el control del Canal de Panamá y la construcción de uno alternativo que se promueve dentro de los planes de la IIRSA así como el dominio sobre el Mar Caribe son prioridades de la política exterior norteamericana, no se puede dejar de lado que no sólo el control del mar y sus accesos forman parte de la Gran Estrategia norteamericana en la parte norte de América del Sur. Tal como se orquesta el despliegue de elementos militares en esas importantes áreas mencionadas, la planeación de un sistema terrestre que una los puntos geoestratégicos más importantes de las naciones andinas y de la cuenca amazónica —la unión de puertos y aeropuertos con los sitios de producción del carbón, el petróleo y el gas, entre otros minerales y recursos naturales estratégicos y con las zonas de mejor acceso a las fuentes de agua y energía más importantes— es uno de los objetivos centrales de la IIRSA que se allegan muy bien a los objetivos geopolíticos y geoeconómicos de los Estados Unidos.

La idea de crear una red carretera y ferroviaria apoyada por los Estados Unidos que permita la movilización de mercancías y tropas en América Latina en general y en la región estudiada en particular no es nueva. La consideración de los caminos como rutas de acceso a lugares estratégicos así como instrumentos de dominio sobre la naturaleza y puentes de comunicación entre varios lugares han sido una constante tanto en la política interna como en la externa de la Unión Americana. En 1880, David Davis propuso en el Congreso estadounidense la unión de los países latinoamericanos mediante un ferrocarril troncal panamericano que hiciera efectiva “la comunicación ferroviaria entre sí y con los Estados Unidos” (March, 1960:77). En la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington en 1889, el proyecto del ferrocarril fue muy discutido. Sin embargo, la incapacidad financiera de los Estados Unidos para apoyar un proyecto de tal envergadura y la aparición y popularización del automóvil unos pocos años más tarde llevaron abandonar la idea de la construcción de una vía férrea panamericana y a sustituirla por un proyecto para construir una Carretera Panamericana.

Durante la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos en 1923, las repúblicas americanas reconocen junto con los Estados Unidos, que el transporte automotor y las obras de vialidad son imprescindibles para el “progreso” económico. Desde entonces se empezaron a esbozar los planes

para la construcción de una Carretera Panamericana, un camino continuo que corra los 25,750 km (16,000 millas) que hay desde Alaska hasta el fondo de Chile. La Unión Panamericana, órgano consultivo de las Conferencias Panamericanas, se reúne con la Junta de Educación Vial de Estados Unidos, en cuyo seno se congregan desde ingenieros hasta hombres de negocios, y realizan una propuesta que se presenta en 1925 en el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, donde los Estados Unidos reiteran su apoyo para los países latinoamericanos en cuanto a la planeación, construcción y financiamiento del sistema carretero. En marzo de 1929, el Congreso de este país asigna 50 000 dólares para sufragar los gastos de una gira de reconocimiento preliminar y un estudio del trazado. Los Congresos siguientes se realizan con miras a planear mejor el sistema y facilitar el movimiento del tráfico internacional y es tanto el apuro de los funcionarios norteamericanos que para finales de la década de los 50 estaba ya casi terminado el tramo que va de México a Centroamérica y Panamá y en Sudamérica, el sector que va a lo largo de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina se consolida.

La Carretera Panamericana fue modelada a partir del sistema utilizado en los Estados Unidos. En la actualidad, a excepción de los 88 km del estrecho del Darién, están cubiertos los 25 570 km, por lo que es posible manejar desde el Círculo Ártico hasta Puerto Montt, cerca de 1000 km (600 mi) al sur de Santiago, Chile. La sección norteña de la carretera —que empieza en Fairbanks, Alaska, y continúa en la ciudad Dawson Creek, en British Columbia, Canadá— es llamada *Carretera de Alaska*. En México y Centroamérica, el segmento conocido como *Carretera Interamericana* corre de Laredo, Texas, hasta la Ciudad de Panamá en Panamá. Ambas carreteras están conectadas por otras carreteras tanto en Estados Unidos como en Canadá. La sección de la Carretera Panamericana que termina en la provincia más austral de Panamá empieza otra vez a lo largo de la frontera en Colombia.

El notable estrecho que evita que la carretera esté completamente conectada es una sección de tierra que se extiende entre el Canal de Panamá y el noroeste de Colombia llamado Estrecho de Darién, que tiene 87 km de jungla espesa y montañosa. Muchos se han opuesto a la construcción de la porción faltante de la carretera en el Darién con razones tan variadas que van desde el deseo de proteger esta zona rica en biodiversidad, pasando por el deseo de contener la expansión de enfermedades tropicales, la protección de las formas de vida de los indígenas de la zona, la contención de la uncinariasis (la llamada *foot and mouth disease*) para evitar que entre a Norte América, hasta la creación de una suerte de obstáculo natural para el potencial tráfico de drogas desde Colombia.

En Sudamérica la carretera sigue la costa oeste del subcontinente hasta Santiago, Chile, doblando al este a través de los Andes hasta Buenos Aires, Argentina. La ruta Simón Bolívar forma un importante brazo del Sistema Panamericano pues conecta el Puerto de La Guaira en el Atlántico, cerca

de Caracas, Venezuela, con Bogotá, Colombia. Desde Buenos Aires, la principal carretera se extiende por encima de la costa este de Sudamérica a través de Montevideo, Uruguay, hacia Río de Janeiro, Brasil. Una rama central se dirige desde Buenos Aires hasta Asunción, Paraguay, donde la carretera se junta con una ruta transversal que hace posible la conexión de Paranaguá, Brasil, vía Asunción y La Paz, Bolivia, hacia Lima, Perú. Otra ruta transversal conecta Lima y Brasilia, la capital de Brasil. La carretera Bolivariana se extiende desde Maracaibo, Venezuela y se liga con regiones al interior de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Otra carretera nueva alcanzará Punta Arenas, Chile, en el Estrecho de Magallanes y Ushuaia, Argentina, cerca de la Tierra del Fuego, punto final de Sudamérica.

Así, la Carretera Panamericana termina siendo la objetivación del sueño Panamericano impulsado por los Estados Unidos, que ha perdurado en el discurso oficial —no hay que olvidar que cuando George Bush lanzó la Iniciativa de las Américas a principio de la década de los noventa habló de la creación de una zona de libre comercio que se extendiera “desde el puerto de Anchorage, en Alaska, hasta la Tierra del Fuego”— y que permite la unión por vía terrestre de todos los países latinoamericanos entre ellos y con Estados Unidos. De esta forma, la Carretera Panamericana pasa en Estados Unidos, por Alaska, Washington, Oregon, California y Arizona; en Canadá atraviesa el territorio Yukón y British Columbia; en México pasa por Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. En Centroamérica pasa por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Finalmente en Sudamérica pasa por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

El Sistema Carretero Panamericano ha probado su efectividad a lo largo de los años ya que ha permitido ligar ciudades importantes y activar el comercio, además de permitir la agilización en la movilidad de las personas. Concebido desde la lógica imperialista norteamericana de control espacial presente ya desde la famosa Primera Conferencia Internacional Americana de 1889, se presenta como el antecedente más lejano en el tiempo de construcción de infraestructura para consolidar la estrategia librecambista e integracionista de los Estados Unidos en nuestro continente. Tanto en el siglo XIX como en el XXI, la balanza de pagos desfavorable aunada a la necesidad de consolidar su hegemonía en el continente han llevado a la Gran Potencia del norte a elaborar estrategias que incluyeran la posibilidad de integrar físicamente a los países del continente a través de vías terrestres. La motivación principal que impulsa la construcción de carreteras no deja de tener un carácter evidentemente geopolítico que se manifiesta de manera clara en el caso sudamericano.

Según puede observarse a la luz de la red Panamericana actual, las regiones más desarrolladas en términos de vías terrestre son la del norte del hemisferio y la del cono sur. En el resto del subcontinente sudamericano sólo existen buenas vías de comunicación carretera en la región noroeste, que comprende una porción de los territorios de Venezuela y Colombia; entre Brasil y algunos de sus vecinos como Bolivia y Perú, donde se encuentra parte de lo que se ha realizado en el marco del programa de las carreteras transamazónicas cuyo funcionamiento hace ya varios años se ha reconsiderado para reducir el impacto de los automotores sobre el sistema ambiental de esta vasta región; y hacia el oeste del arco andino, donde se cuenta con la carretera Panamericana y tramos de la carretera marginal de la selva. El resto del subcontinente tiene comunicaciones todavía insuficientes. Debido a esta inadecuada red de transportes el desarrollo de las distintas regiones presenta marcadas diferencias y los intercambios económicos se mantienen en niveles muy por debajo de las posibilidades, lo que retarda el proceso de integración física que se necesita para la integración comercial.

La situación de las carreteras en los países andinos es heterogénea pero confluye en un mismo punto: es insuficiente para el transporte de mercancías que exigen las nuevas condiciones del comercio intrarregional e intrahemisférico y no acaba de cubrir las rutas más estratégicas surgidas de los nuevos planes para el desarrollo de la región. En términos generales, la situación de las carreteras colombianas es aceptable: conecta los principales centros políticos y comerciales y están en buenas condiciones aunque los caminos empiezan a ser insuficientes para conectar la región amazónica con el resto del país, zona que en los últimos años ha adquirido importancia gracias a los recursos hídricos y de biodiversidad que en ella se encuentran. Sin embargo, el principal problema de los caminos en Colombia radica en que se han convertido en parte del botín de los tres grupos armados que disputan el poder en ese país: por un lado, el grupo armado oficial —el Ejército de Colombia— en alianza con los paramilitares; por otro lado, el de las FARC; finalmente y aunque las zonas que están bajo su control son menos extensas pero no menos importantes ya que controlan las zonas aledañas al Caño Limón, fuente de las mayores reservas petroleras del país, se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Dada esta situación, el gobierno del ex líder de un grupo de guardias blancas en su natal Antioquia, Álvaro Uribe, se ha esforzado por militarizar las carreteras a fin de recuperar el control del gobierno sobre estas importantes vías de comunicación.

En el caso de Venezuela, el complejo carretero está muy desarrollado a excepción, igual que en el caso de Colombia, de la parte Amazónica y el de la zona del Parque Nacional Canaima, donde más bien se plantea el desarrollo de hidrovías. En términos de infraestructura carretera, se podría decir que Ecuador posee caminos que unen los principales centros comerciales y políticos pero que no siempre se

encuentran en buenas condiciones. Además, como en Colombia, las vías de comunicación terrestres se ven constantemente interrumpidas en su funcionamiento por los reclamos de varios movimientos sociales entre los que destaca el movimiento indígena, y como en Colombia y Venezuela, la parte amazónica es de las más descuidadas.

El caso de la situación de las carreteras en Perú y en Bolivia merece una mención especial. A excepción de la carretera que recorre Perú de norte a sur por la costa, los caminos que conectan las principales ciudades peruanas no sólo están en malas condiciones o ni siquiera pavimentados sino que son muy peligrosos tanto para el transporte de pasajeros como para las mercancías, ya que su trazado se hace especialmente complicado dadas las condiciones geográficas de los Andes y la ausencia de planes y financiamiento gubernamentales. No es fortuito que el grupo guerrillero Sendero Luminoso haya tenido un control considerable del territorio peruano dado que los caminos gubernamentales no llegaban a todos los confines del país. No lo es tampoco que una de las principales acciones del gobierno de Fujimori haya sido la apertura y el mejoramiento de los caminos en las regiones amazónica y serrana. En Bolivia la situación no es muy distinta: caminos malos y transporte pésimo, además de ausencia de vías pavimentadas que unan a los principales centros comerciales y políticos del país. Además, como en el caso de Ecuador, la disponibilidad de las vías existentes es incierta dados los constantes bloqueos de grupos opositores al gobierno central.

Los planes para construir los caminos en esos países de Sudamérica tampoco son nuevos ni ajenos a los intereses norteamericanos. El 30 de diciembre de 1901, ante la Segunda Conferencia Internacional Americana en la Ciudad de México, se presentó una relación de los viajes de exploración hechos por el general Rafael Reyes titulado "A través de la América del Sur", financiados por el Tesoro norteamericano. Allí quedaron destacadas la riqueza hídrica y su red natural de interconexión fluvial como uno de los potenciales principales de Suramérica. La realización del Ferrocarril Intercontinental junto con algunos nodos de unión de carreteras y las hidrovías, harían posible el sueño de la red suramericana para el intercambio comercial de la región con el Pacífico (Asia) y el Atlántico (Caribe, Estados Unidos y Europa). Desde entonces, se constató que existen varias redes y rutas de intercambio que puede interconectar y avanzar sobre la región que baña el río Putumayo en Colombia hasta llegar a Río de Janeiro, en Brasil. El carbón, el oro, las esmeraldas, los productos agrícolas y pecuarios, la riqueza y variedad biogenéticas, las riquezas energéticas e hídricas y, obviamente, la posición geoestratégica fueron la base fundamental de esa anticipada y ambiciosa propuesta política y comercial.

Esta propuesta fue retomada de manera total en los planes de la IIRSA. En 1997, en una reunión de consultores de alto nivel en el seno de la Comunidad Andina se proyectó la creación de una red que interconectara a los cinco países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) entre sí y a

los cinco en conjunto con sus países vecinos de fuera de la región andina. En el estudio se determinaron los corredores viales que tuvieran significado de interconexión binacional y se identificaron los tramos faltantes para completarlos. Un elemento fundamental fue la definición de los ejes de la interconexión con criterios geoeconómicos y geopolíticos por lo que la futura vía de intercambio “comercial” más importante que se identificó fue la que sale de Venezuela y avanza por los llanos, interconecta el Nula (Venezuela) con Saravena (Colombia), atraviesa Colombia de Saravena a Villavicencio y de allí llega a Florencia, Mocoa y al Puente sobre el Río San Miguel, en la frontera con Ecuador. De allí la vía continúa por el territorio ecuatoriano, sigue un trecho de la llamada Carretera Marginal de la Selva, ingresa a Perú y atraviesa la cordillera en el tramo Bagua-Olmos para continuar por la carretera Panamericana a lo largo de la costa del Perú hasta Ilo. Desde este punto asciende al Altiplano por la Ilo-Desaguadero para empalmar con la red vial boliviana. Además se identificaron 45 proyectos individuales que completaban los eslabones faltantes para la creación de la red andina de comunicaciones terrestres. (CAF, *Op. Cit.*:15-16)

Resulta muy curioso observar que en apariencia Brasil más que los propios Estados Unidos se ha preocupado por invertir en este proyecto que fue incorporado a la IIRSA. No sólo se convirtió en accionista de la CAF sino que logró que los planes se reorientaran hacia la construcción de caminos que apoyaran las vías multimodales de transporte entre los dos océanos, es decir, que en la planeación de las futuras carreteras prevaleciera el criterio de la bioceanidad con ventajas para Brasil aunque esto implicara la desviación del proyecto original. Sin embargo, la esencia del mismo sigue intacta: la construcción de vías en los países andinos que permitan la penetración, el control y la colonización en los territorios de la cuenca amazónica, hasta ahora poco comunicados, por un lado, y la posibilidad de agilizar el traslado de los productos geoestratégicos hacia los principales puertos cuyo destino final son los Estados Unidos, como el carbón de la Península de la Guajira en Colombia y Venezuela y el petróleo ecuatoriano.

Sin embargo, el control del espacio mediante el aseguramiento de los pasos comerciales más importantes como el Canal de Panamá y la Cuenca Del Caribe y a través de la apertura de caminos no sólo implica el conocimiento y control de los territorios. Implica además la construcción de un sistema integral de telecomunicaciones, que es un megaproyecto de incalculables dimensiones, del cual se encuentran pocas referencias. Se habla de que en la década del cincuenta del gobierno de los Estados Unidos instaló alrededor de 44 observatorios electromagnéticos en el sur de Perú donde se tiene noticia de que se encuentra uno de los grandes centros de magnetismo y energía del continente suramericano. (Gómez, 2003:25)

Estos observatorios se encuentran relativamente próximos al Monte Sahama en Bolivia, considerado por los expertos el nuevo centro magnético del planeta. Dicho centro magnético está interconectado con la ciudad de Curitiba, Brasil, y una zona localizada al noroccidente del departamento de Arauca, Colombia. Al unir estos tres puntos, se forma un triángulo que, al proyectarse en un punto orbital (fuera del planeta), a la altura de los satélites de telecomunicaciones que están en esa órbita geoestacionaria, forma una pirámide regular, definiendo así el territorio con mayor limpieza natural de telecomunicaciones del planeta. En el centro de esta pirámide se encuentra la Sabana de Bogotá con su epicentro Chocontá. Este mismo valor geoestratégico presenta la ciudad de Curitiba, hoy con grandes equipamientos de telecomunicaciones, como su aeropuerto 'inteligente', entre otros. Jaime Lerner, ex alcalde de Curitiba y ex gobernador del Paraná, Brasil, explica que ésta es una ciudad peaje, que por su ubicación geográfica —se encuentra a seis horas de São Paulo, polo industrial y financiero del Brasil; a siete horas de Río de Janeiro, emporio turístico comercial y financiero; a once horas de Asunción y a catorce horas de Buenos Aires— se convierte en un eje central, que a manera de estrella, articula el sistema intermodal del sur del continente. Esta integración a partir del sistema de telecomunicaciones se complementa con otras grandes redes terrestres y marítimas de cableado óptico subterráneo o submarino. (*Ibid*: 25)

b) LA IIRSA Y EL DOMINIO DE LOS RÍOS

Una estrategia norteamericana de dominio del espacio no puede dejar a un lado el control de los ríos, que en el caso de Sudamérica no sólo representan la posibilidad de agilizar el transporte de bienes y personas sino que garantiza también la producción de energía barata y la consecución de una manera poco costosa y natural de la anhelada bioceanidad. Para alcanzar estos objetivos resulta imperativa la vinculación artificial entre los principales ríos de los países andinos y entre éstos y el principal del cono sur.

Ya desde principios de siglo XX, el General Rafael Reyes propuso ante la Segunda Conferencia Interamericana, celebrada en México, la conformación de una red fluvial que comunicara el Río de la Plata y el Orinoco e hiciera de América del Sur un continente con una infraestructura básica de transporte fluvial que permitiera el libre comercio en toda la región. La idea del colombiano fue considerada apenas obvia, por la enorme cantidad de ríos que constituyen la red fluvial de Suramérica y pudo habersele ocurrido a cualquiera que observara con un poco de atención el mapa del continente. Sin embargo, la falta de visión geopolítica de los colonizadores de este continente, primero, y de las

repúblicas independientes, después, impidieron una temprana integración fluvial: España y Portugal, principales colonizadores de esta parte del Nuevo Mundo, firmaron en 1494, dos años después del descubrimiento, el Tratado de Tordesillas, por el cual cada uno se concentraría en su área de influencia y se mantendría tan alejado del otro como le fuera posible. Luego, cuando se independizaron de los imperios, las antiguas colonias no mostraron interés en unirse a través de los ríos.

La propuesta del General Reyes se basó en sus exploraciones de la Amazonia, las cuales lo habían llevado desde Bogotá a Río de Janeiro. El informe del General Reyes a la Conferencia ya citada, incluyó las siguientes cifras aproximadas para el sistema fluvial, partiendo desde el Orinoco, en el norte, hasta el Río de la Plata en el sur. Como muchos otros planes de integración latinoamericana, el de los ríos sudamericanos fue inviable por la falta de financiamiento. Pero, según se explicaba en el anterior capítulo, el proyecto del General fue retomado por el Doctor Mariano Ospina Hernández en 1995, que presentó en la Academia de Artes y Ciencias, Cambridge, Estados Unidos, ante diversos especialistas de Harvard, del MIT y delegados de Gobiernos y Universidades suramericanas, el ‘megaproyecto’ denominado SARS-IFSA (South American Riverway System—Integración Fluvial Suramericana), que atrajo la atención en los círculos políticos y empresariales norteamericanos y provocó que el consorcio Harvard-MIT se encargara de continuar con los estudios económicos, geofísicos, ambientales, culturales y de sustentabilidad, necesarios para su ulterior desarrollo. Por esta razón no resulta ser una sorpresa el hecho de que tres años después la Corporación Andina de Fomento hiciera suyo este proyecto de manufactura norteamericana, lo bautizara como IFA —Integración Fluvial Suramericana¹¹⁷— y posteriormente lo incorporara a la IIRSA.

El dominio del tejido fluvial de los países andinos que comparten la cuenca amazónica con Brasil resulta crucial para los intereses geopolíticos y geoeconómicos norteamericanos pues no sólo permite el acceso a lugares de inimaginable riqueza en términos de recursos naturales estratégicos; también permitiría las correlaciones directas entre ríos a través de ejercicios de integración intermodal y significaría la conexión e integración directa a nivel físico, con las implicaciones socioeconómicas que esto trae. La integración fluvial suramericana va más allá de una pretensión de orden técnico, científico, de ingeniería naval y transporte: se convierte fundamentalmente en un corredor geopolítico que facilitaría y agilizaría la integración de manufactura norteamericana. Si se echa un vistazo a la situación ventajosa de los ríos de los países del arco andino y la cuenca amazónica se entenderá más claramente lo anterior.

¹¹⁷ Si se llegara a tener alguna duda sobre la validez de esta afirmación se puede acudir al documento denominado “Los ríos nos unen”, editado por la CAF en 1998 y compararlo con los planes enunciados en la página oficial de IIRSA, relacionados con la integración de los principales ríos y el acondicionamiento de hidrovías en el territorio de la cuenca amazónica.

El transporte fluvial, tanto o más que el terrestre, constituye un poderoso elemento de integración física y además resulta altamente conveniente desde el punto de vista económico y según el discurso oficial, hasta ecológico, pues en teoría perjudica en menor medida el medio ambiente. Dadas las peculiares características de la geografía de los países andinos que comparten la cuenca amazónica con Brasil, grandes extensiones de esta región son en su mayoría difícilmente penetrables y sujetas a inundaciones estacionales. Esta realidad física y la existencia de vastas zonas de accidentado relieve ha hecho que el desarrollo de las comunicaciones terrestres sea muy reducido, lo que convierte a la integración fluvial en la mejor opción para el control del territorio mencionado.

Así, para el caso de Sudamérica los beneficios del transporte fluvial son aún más evidentes si se toma en cuenta la gran disponibilidad de vías acuáticas en su territorio. Con sus casi 18 millones de kilómetros cuadrados, el subcontinente representa solamente la octava parte (12%) de la superficie total de las partes firmes de la Tierra. Sin embargo, su capacidad fluvial supera el cuarto del valor mundial (25.5%) y el volumen del agua de sus ríos representa casi la mitad (47%) de la sumatoria de todos los cursos de agua del planeta. Esto se debe a la inmensidad de sus principales cuencas hidrográficas, que cubren más de dos tercios del territorio del continente (66.9%), y a la gran densidad de vegetación. Todo esto favorece un intenso régimen pluvial de estas zonas las cuales representan una descarga específica promedio de 21 l/seg/km² cifra sobrepasada en el mundo sólo por las islas de Oceanía. (CAF, *Op.Cit.*:35).

Por todos estos factores los ríos del subcontinente se sitúan entre los más caudalosos del mundo y forman una gigantesca red fluvial. Gran parte de estos cursos de agua están desde ahora disponibles para la navegación de manera que es posible organizar con relativa facilidad el anhelado Sistema Interamericano de Navegación Fluvial que, según expertos, a mediano plazo podría sobrepasar la impresionante longitud de 50 000 km, casi el doble de la medida de la Carretera Panamericana, y dado que el medio fluvial de transporte es muy flexible y resulta muy económico, se pueden mover grandes volúmenes de carga generalmente superiores a 500 000 toneladas por año a distancias mayores o iguales a 500 km. (*Ibid*:24) Sin embargo, con excepción de Venezuela, Brasil y parcialmente Colombia, la navegación fluvial es bastante incipiente en Sudamérica. A pesar de existir la posibilidad de navegar alrededor de 50 000 kilómetros al interconectar las cuencas del Amazonas, Orinoco y el Río de la Plata, en realidad hasta antes de la década de los noventa se había hecho poco para identificar de manera detallada y sistemática las dificultades de implantación de este proyecto, proponer las soluciones técnicas necesarias, así como cuantificar los montos de inversión requeridos.

Entre las ventajas que posee el acondicionamiento de hidrovías sobre la construcción de ferrovías o carreteras, podemos considerar las siguientes: el transporte fluvial racionaliza la utilización

de la potencia de los motores; reduce sensiblemente el número de operaciones de carga-descarga, lo que se traduce en costos globales más reducidos para el transporte fluvial; y, además, provoca una contaminación mínima del aire. Otras ventajas de la navegación fluvial son, primero, que hace factible económicamente la realización de otras obras para el aprovechamiento y la utilización integral de los ríos, como la construcción de presas, pues al combinar las obras para los aprovechamientos hidroeléctricos —que se traducen en energía más barata— con las obras para la navegación se obtiene una más rápida recuperación de las inversiones, punto de vital importancia para los accionistas de las obras que al mismo tiempo, ayudan a controlar las inundaciones y favorecen el riego, los abastecimientos de agua y el turismo; propicia las actividades económicas de todo tipo por cuanto las regiones se ven intercomunicadas por la navegación fluvial utilitaria de sus ríos, lo que colocaría a las hidrovías en el mismo papel que jugaron las vías férreas y las carreteras en la expansión del este hacia el oeste en los Estados Unidos; y finalmente, que agilizaría el proceso de integración física y comercial que prepara a los países andinos y de la cuenca amazónica para el establecimiento del ALCA, puesto que dado que la instrumentación y el desarrollo de la navegación fluvial requieren obras de cierta magnitud que generalmente se efectúan por etapas con el concurso de varias regiones y países y que ahora se realizarían de una vez dado el acuerdo existente entre los países de la región.

En Sudamérica, las principales cuencas hidrográficas son las siguientes:

1. Las cuencas de los ríos **Amazonas y Tocantins**, las cuales forman un solo río conocido como Amazonas cuya cuenca ocupa una gigantesca área de más de 7 millones de km². En su mayor parte esta área está recubierta de bosque húmedo tropical y una vegetación de cerrado¹¹⁸ en una parte de la cuenca del Tocantins-Araguaia. La del Amazonas es una cuenca de carácter internacional y pertenece a siete países (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Guayana, o sea los andinos más dos). El Amazonas, el río más grande del mundo, tiene una longitud de 6 762 km y un caudal¹¹⁹ promedio anual de 226 000 m³/seg, lo que corresponde al 15% del total del volumen total de las aguas continentales del globo vertidas en todos los océanos. Los especialistas han observado que algunos de los ecosistemas específicos de la Cuenca Amazónica se extienden en algunas partes situadas fuera del área de la cuenca del río. Esta gran superficie, todavía mayor que la misma cuenca, conforma el denominado *Territorio Amazónico* que pertenece a nueve países (los anteriores más Suriname y Paraguay)

¹¹⁸ *Cerrado* es el nombre regional dado a las sabanas brasileñas. Cerca del 85% de la gran extensión que ocupa el Brasil Central estaba originariamente dominado por el paisaje de este tipo, representando aproximadamente 1,5 a 2 millones de km², o cerca del 20% de la superficie del país. El clima típico de la región de los cerrados es cálido, semihúmedo y notablemente estacional, con veranos lluviosos e inviernos secos. La pluviosidad anual se sitúa entre 800 y 1.600 mm. Los suelos son generalmente muy antiguos, químicamente pobres y profundos.

2. La Cuenca del **Río de la Plata**, que cubre más de 3.1 millones de km². Sólo el Río de la Plata tiene un caudal medio anual de 28 000 m³/seg. A esta cuenca pertenecen los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. En la actualidad, por medio de organismos especializados los países del MERCOSUR están desarrollando la Hidrovía Paraguay-Paraná, y hasta hace poco tiempo, con apoyo financiero de la IIRSA, que le dedica uno de sus ejes de desarrollo.
3. La Cuenca del **Río Orinoco**, que tiene un área de 1.015 millones de km² y está dividida entre Venezuela (70%) y Colombia (30%). La vegetación específica es de tipo sabana con bosques de galería a lo largo de los márgenes de los ríos de zonas llaneras. Una reducida porción de esta cuenca hace parte del Territorio Amazónico y aquí la cobertura vegetal principal es del tipo de bosque húmedo tropical. El Orinoco es el tercer río más caudalosos del mundo, con una descarga media anual de más de 36 000 m³/seg y con una longitud de unos 2 140 km.
4. La Cuenca del **Río São Francisco**, de Brasil, que es de casi 640 000 km². Por encontrarse en una zona de menor pluviosidad, este río tiene un caudal promedio anual de 3 800 m³/seg y una longitud de 2 750 km.
5. La Cuenca del **Río Magdalena**, que pertenece a Colombia y cubre un área de 266 000 km². El río más importante es el Río Magdalena que tiene una longitud de 1 540 km y un caudal medio de unos 7 000 m³/seg. (CAF, *Op. Cit.*:45)

Como extensión total, estas cuencas hidrográficas representan alrededor de dos tercios de la superficie de Suramérica. Los ríos que unidos correrían desde el Caribe, partiendo del Delta de Orinoco, hasta Uruguay en el Atlántico, son el Orinoco, Casiquiare, Río Negro, Amazonas, Madeira, Mamoré, Guaporé, Paraguay y Paraná. Este se podría llamar Eje Fluvial Norte-Sur. (*Ibid*:46) De esta forma, para los propósitos de la integración fluvial suramericana interesan de especial manera las cuencas de los ríos Amazonas, Plata y Orinoco, que se pueden interconectar a través del eje fluvial Norte-Sur. Cabe agregar que dos de estas cuencas se encuentran en el territorio que interesa a esta investigación.

Si se analiza la situación de los ríos sudamericanos se puede observar que de todos los países involucrados en la integración fluvial suramericana Brasil ocupa un lugar muy especial. Eso se debe a su ubicación en el centro del continente y a la gran área que utiliza su territorio, pues este país ocupa la mayor parte de las Cuencas del Amazonas y toda la cuenca del río Tocantins. Con referencia a los países de la región andina y Brasil, es interesante agregar dos hechos: si se superponen los trazados de los ríos de las tres principales cuencas hidrográficas y los contornos de los países andinos y de Brasil a los contornos de la Cuenca del Amazonas y del Territorio Amazónico, se observa cómo una gran

¹¹⁹ Cantidad de agua que transporta un río o curso de agua. Se expresa en volumen por unidad de tiempo.

porción de las superficies de estos países forman parte de esta cuenca y su territorio (9 873 569 km²). Además, las ricas coberturas ecológicas de este grupo de países están representadas por cuatro principales formaciones: tropical húmedo, específico para el Territorio Amazónico; las zonas de los llanos de Colombia y Venezuela; los cerrados que son extensos en Brasil; y las fértiles zonas de Pie de Monte Andino, de los países andinos. Al comparar el área total de estas cuatro coberturas ecológicas con el área total de los seis países que estamos considerando ahora aparece que las mencionadas formaciones ecológicas representan el 75% de sus territorios (13 212 000 km²).

De estos dos hechos resulta interesante observar que tanto Brasil como los países de la región andina son países amazónicos y comparten un 75% de las coberturas ecológicas de esta gran cuenca. Finalmente, se puede ver que la mayor superficie de la Cuenca del Plata pertenece a Brasil. Este país comparte con los demás de esta cuenca las coberturas ecológicas de Pantanal con Bolivia, de Chaco y Foresta Nacional y la formación no compartida con Brasil la constituye la cobertura ecológica de tipo Pampa. De esta forma, una revisión directa del territorio mencionado podría llegar a la conclusión de que la falta de vías terrestres de comunicación y transporte ha sido compensada por la especial situación geo-hidro-ecológica de Sudamérica, determinada por la excepcional situación de la red de los ríos, lo que favorece los transportes fluviales.

Al crearse una infraestructura para asegurar condiciones adecuadas al tránsito de embarcaciones se apunta hacia la agilización del transporte, el comercio y las comunicaciones en general. Además, con la penetración en el corazón del subcontinente se permitirá el acceso a vastos recursos naturales en tanto en esta estratégica zona se encuentran la tercera parte de los bosques latifoliados, ingentes potenciales piscícolas, agrícolas y pecuarios, yacimientos de minerales, casi la mitad del volumen de las aguas de los ríos de todo el mundo, un cuarto de la capacidad fluvial, un inigualable potencial hidroeléctrico y las más alta biodiversidad del mundo, pues sólo en la Amazonia se estima que se encuentran unas 60 mil especies de plantas superiores, millones de especies de artrópodos, dos mil especies de peces así como miles de especies de aves, reptiles, anfibios, mariposas y unas 300 especies de mamíferos.

La integración fluvial de los países Andinos y Brasil y la correspondiente puesta en marcha de un Sistema Suramericano de Navegación Fluvial impulsada por la IIRSA a través de los diversos proyectos incluidos en los ejes de desarrollo explicados en el capítulo anterior, se va a realizar mediante la interconexión de los ríos de las cuencas hidrográficas del Orinoco, Amazonas y del Plata, de las cuales se analizarán las dos primeras de acuerdo a los países involucrados que son, para la cuenca del Orinoco, Venezuela y Colombia y para la cuenca del Amazonas, Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Cabe aclarar que el hecho de que se explique de manera detallada el estado actual de los ríos

de los países involucrados va más allá de ofrecer información sobre características que podrían parecer técnicas o meramente hidrográficas, en el sentido literal de la palabra (descripción de las aguas). Algunos de los análisis sobre la situación andina y amazónica que parten de la geopolítica acentúan la condición de 'estratégico' para ciertos lugares pero no terminan de explicar las causas por las que ciertos sitios lo son. Así, al mostrar el panorama completo de los ríos involucrados en el proyecto de la IIRSA para los países andinos, lo que se intenta es que el lector tenga mejores herramientas para entender lo geoestratégico del lugar y para que tenga una mejor imagen de la inmensa capacidad fluvial del terreno y lo susceptible que la hace ante los intentos de control espacial de los Estados Unidos en la región.

Para la Cuenca del Orinoco se tiene planeada la integración fluvial de Venezuela y Colombia. Colombia y Venezuela tienen una frontera común de unos 2 320 km. de longitud. De ésta casi dos tercios, 1 500 km, está formada por ríos comunes de los cuales seis —Arauca, Meta, Orinoco, Atabapo, Guainía y Negro— pueden ser navegados. Existen posibilidades de realizar una mejor integración fluvial con Colombia, especialmente si se mantiene la existente Hidrovía Orinoco-Meta pero también podría realizarse una integración multimodal binacional al utilizarse mejor los ríos Atabapo y Guainía-Río Negro.

Debido a su posición geográfica, el único país de la región andina con el que se puede comunicar Venezuela de manera directa es Colombia. Venezuela tiene también una zona fronteriza con Brasil donde se espera lograr una adecuada interconexión de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas probablemente mediante los ríos Casiquiare y Negro. Venezuela, como todos los países de la cuenca amazónica, posee una gran cantidad de ríos. Su principal cuenca hidrográfica es la del Orinoco seguida por las del Mar Caribe y Lago de Maracaibo. Sin considerar los cursos más cortos de 30 km solamente para la cuenca del Orinoco existe una longitud total de más de 50 000 kilómetros de ríos. Gran parte de ellos pueden ser navegados por pequeñas embarcaciones muchos meses del año pero no todos funcionan para la navegación comercial de grandes unidades. En este país la navegación fluvial utilitaria se está desarrollando alrededor del eje representado por el Orinoco que desde el punto de vista del caudal de sus aguas es uno de los ríos más grandes del mundo. Por esto, a pesar de que en la hidrografía del país predominan los ríos de poca longitud, la navegación fluvial se ha desarrollado relativamente bien.

El río Orinoco nace en Venezuela entre las sierras de Parima y Tapirapeco en la cumbre Delgado Chalbaud. Tiene una longitud de 2 140 km y su cuenca cubre 1 015 000 km²; de éstos Venezuela posee 685 000 km² y Colombia 330 000 km². Se estima que el caudal promedio del río al llegar a su delta alcanza de 36 000 a 38 000 m³/seg y en las crecientes se aproxima a unos 100 000

m³/seg. Desde este punto de vista el Orinoco es el tercer río más caudaloso del mundo, sobrepasado sólo por el Amazonas y el Congo-Zaire. Cada año el río Orinoco descarga en el Atlántico un billón doscientos mil millones de metros cúbicos de agua. (1 200 000 000 000 m³/seg). Como tributarios el Orinoco recibe más de 2 000 ríos, riachuelos y quebradas. De éstos los más importantes son 194: 95 por la orilla derecha y 99 por el margen izquierdo. (IGM, 2003:25)

El recorrido del río se puede dividir en tres partes: **Bajo Orinoco**, que va desde el Atlántico hasta la boca del río Apure y mide aproximadamente 880 km. En esta parte hay condiciones adecuadas para una buena navegación fluvial que por un trecho de 360 km es también marítima; **Orinoco Medio**, que mide unos 550 km y se tiende entre la boca del río Apure y San Fernando de Atabapo. En este tramo están ubicados los raudales de Atures y Maipures. Las condiciones de navegación son muy difíciles por la reducción del caudal del agua, el incremento de las pendientes del lecho del río y el hecho de que en el cauce aparecen más obstáculos; **Alto Orinoco**, que mide unos 710 km y va desde San Fernando de Atabapo hasta sus fuentes. En este tramo la navegación es todavía más difícil y en los últimos 250 metros es casi imposible. (*Ibidem*)

Las principales afluentes navegables del Orinoco son los ríos Caroni, Apure, Meta, Atabapo y Casiquiare. El río Caroni desemboca en la orilla derecha del Orinoco, muy cerca de Ciudad Guayana. Permite la navegación en su boca por un corto trecho donde está instalado el muelle de la Ferrominera Orinoco para cargar mineral de hierro, lo que lo convierte en una vía estratégica. Es el más importante afluente del Orinoco debido al gran potencial hidroenergético que posee. Con una longitud de 925 km y una cuenca de casi 95 000 km², este río tiene su fuente en las montañas de Roraima y recibe su nombre definitivo después de unirse con el Río Surucún. En su curso superior forma varios saltos importantes como el Eritobarima y también la caída de agua más alta del mundo, el Salto Ángel, de 972 m de altura. En este río se localiza la central hidroeléctrica Raúl Leoni de Gurí, la segunda más grande del mundo.

El río Apure se forma por la unión de los ríos Uribante y Nula y desde Guasdalito se conoce con el nombre de Apure. Tiene 960 km de longitud de los que sólo 660 son navegables. El Apure es un río con un curso muy inestable que muchas veces inunda las poblaciones de sus orillas. A pesar de ser un río de llano con abundante agua presenta unos pequeños raudales que para los casos de caudales reducidos son muy incómodos para la navegación, pero es una de las hidrovías más importantes en los planes de la IIRSA según se vio al hablar del eje de desarrollo del Escudo Guayanés. A su vez, al río Meta es uno de los más importantes afluentes del Orinoco que desemboca en él en el kilómetro 1 110 por la orilla izquierda. El Meta tiene unos 1 000 km de longitud de los cuales 780 son navegables. En sus últimos 252 km forma parte de la frontera con Colombia.

El río Atabapo, afluente del Orinoco por la parte izquierda y de una longitud de 130 km, tiene su fuente en una laguna de donde viene con el nombre de Río Atacaví. Cerca del poblado de Santa Cruz, el Atabapo recibe las aguas del Río Guascavi que por la izquierda viene desde Colombia. En este punto también converge el Río Temi. Debido a la gran pluviosidad de la zona, el Atabapo tiene casi todo el año un caudal suficiente para la navegación y siempre ha sido considerado como una conexión idónea entre el Río Orinoco y el Río Negro. Es un río de agua negra y ácida. Frente al Puerto de San Fernando de Atabapo este río recibe las aguas de los caudalosos ríos colombianos Guaviare e Inírida. Finalmente, el río Casiquiare es singular en la geografía del planeta por ser el único curso natural de importancia que comunica dos ríos de dos grandes cuencas hidrográficas, pues tiene su afluente en el río Orinoco y vierte sus aguas en la Cuenca del Amazonas. De la confluencia del Casiquiare con el Guainía resulta el río Negro.

Dentro de los planes que hay para la integración fluvial de Venezuela, se tiene el Proyecto Orinoco-Apure, ya mencionado en el capítulo anterior y que contempla la construcción de cuatro tramos distintos: Desembocadura en el río Orinoco-San Fernando de Apure; San Fernando de Apure-Apurito; Apurito-Bruzual; y Bruzual-Guasdálito. También se planea la construcción del Proyecto Orinoco-Meta, la vía interoceánica Delta Amacuro-Buenaventura para mejorar la comunicación fluvial entre Venezuela y Brasil, así como hacer navegable el Río Casiquiare (CAF, *Op. Cit:*71). Asimismo se proyecta la construcción de una central hidroeléctrica en la zona de raudales de Atures y Maipures, pues además de acondicionar hidrovías uno de los principales objetivos de la IIRSA es construir plantas de producción de energía eléctrica para aprovechar la fuerza de caída del caudal de los ríos de la región, lo que abarata los costos de producción.

En el caso de Colombia, la navegación fluvial es tradicional y hasta la mitad del siglo XIX fue el principal medio de comunicación y transporte. En este país andino los cursos de agua han sido importantes para el desarrollo y fomento de otros medios de comunicación que han logrado unir a la mayoría de los poblados. Los grandes ríos colombianos que parten de la Estrella Hidrográfica del Planalto de Pasto, dirigen sus cursos hacia el Pacífico, el Mar Caribe, el río Orinoco y el río Amazonas. En realidad son cuatro grandes redes fluviales alimentadas por otras cuencas hidrográficas que cubren casi el 90% de la superficie del país. En total son 24 500 km de ríos que prácticamente en un estado natural, en periodos convenientes y con embarcaciones adecuadas, pueden ser utilizados para la navegación sobre una longitud que suma casi 18 500 km.

La Dirección de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras Públicas de Colombia ha organizado cuatro zonas o intendencias fluviales que se corresponden con importantes ríos colombianos: 1) Magdalena; 2) Atrato; 3) Orinoco; 4) Amazonas. (IGAC, 2003:45) La primera es la del

Magdalena, que es la más importante y está ubicada en la parte norte-centro del país. Su área de acción alcanza 256 622 km² e incluye los departamentos de Huila, Tolima, Valle, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Bolívar, César, Córdoba, Magdalena, Atlántico y Guajira, 13 de los 32 departamentos del país. Es la principal cuenca de Colombia: aloja un 80% de la población colombiana y el 60% de la tierra de uso agrícola que se explota en su mayoría con maquinaria moderna. Además, en esta región se practica el levante y engorde extensivo de ganado y se genera el 75% de la hidroelectricidad. (*Ibidem*)

El Río Magdalena es una arteria fluvial principal con una longitud de 1 550 km. Es el más largo y caudaloso río sudamericano que vierte sus aguas en el Mar Caribe. Su más importante tributario es el largo y tumultuoso Río Cauca de 1 024 km. El Magdalena tiene las cabeceras en el Páramo de las Papas; después de unirse con el Cauca, debido al relieve y a las grandes cantidades de sedimentos que ambos ríos acarrearán, en la parte baja de su curso se ha formado una amplia zona cienegosa, especie de delta interior, bordeada por el brazo de Mompo y que se extiende también en las subcuencas de los ríos César y San Jorge. Con el paso de los años el material sólido transportado por sus aguas ha formado una barrera a la salida del río al Mar Caribe, lo que fue un obstáculo infranqueable hasta hace medio siglo cuando se abrió el canal marítimo de Barranquilla, denominado Boca de Ceniza. Entre los más antiguos e importantes puertos del Magdalena se encuentran Barranquilla, Magangué, Gamarra, Barrancabermeja y Puerto Berrío, que se deben rehabilitar. Actualmente están en construcción o se completan algunas de las instalaciones de Magangué y Gamarra. Los Ríos Cauca y Nechí, afluentes del Magdalena, son menos navegables. Cabe decir que las acciones de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, apoyado con el dinero del Plan Colombia, se están centrando en esta región, al igual que los planes de la IIRSA.

La intendencia del río Atrato tiene su sede en la ciudad y puerto de Quibdó. Se encuentra ubicada en la parte extrema del noroeste colombiano y cubre un área de aproximadamente 48 000 km² e incluye los departamentos de Valle, Chocó y Antioquia. El río Atrato es el más importante de la zona y tiene una longitud de 720 km. De éstos 510 km son navegables por embarcaciones mayores y 560 km se adaptan a la navegación menor todo el año. Este río tiene un caudal medio de 4 155 m³/seg porque en esta región las precipitaciones superan los 10 000 mm/año. Es esta extrema pluviosidad lo que explica el gran caudal del Atrato. Por eso, tomando en cuenta su reducida longitud y el área de su cuenca, el Atrato puede ser considerado el río más imponente del mundo. El transporte fluvial es bastante reducido aunque la longitud de las vías de permanente utilización alcanza los 1 235 km para la navegación mayor y algo más de 3 000 para la menor. Lo anterior se debe a las paupérrimas instalaciones portuarias existentes en los ríos, a la reducida densidad de la población y a las escasas

actividades económicas de la región, resultado de la confrontación entre los diferentes grupos armados. Es justo en esta intendencia que se habla de la construcción de una nueva vía acuática entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico mediante el río Atrato, que se mencionó en el apartado anterior.

La zona del Orinoco está localizada en el oriente colombiano esta intendencia abarca los departamentos de Boyacá y Meta, las intendencias de Casanare y Arauca y las comisarias de Guainía, Vaupés, Vichada y Guaviare. Su extenso territorio de 320 000 km² representa aproximadamente la tercera parte del país. Exceptuando el río Orinoco, el principal curso de agua de esta intendencia es el río Meta. Este río nace en los Andes de manera que sus aguas, con un caudal de 6 500 m³/seg, están muy cargadas de suspensiones y aportan anualmente al Orinoco unos 75 millones de toneladas de sedimentos. Por esto en la desembocadura del Río Meta se producen importantes depósitos aluvionales que dificultan la navegación. A lo largo de sus 1 000 km el Meta recibe varios afluentes de los que, de este a oeste, los más importantes son el Casanare, el Pauto, Cravo Sur, Cusiana y Upim. Es navegable por unos 780 km entre Puerto López y su misma desembocadura, donde se encuentran los Puertos Páez, de Venezuela y Carreño de Colombia, ambos del Orinoco. Los más importantes puertos de este trayecto son Puerto Gaitán, San Pedro de Arimeña, El Bodeguero, Primavera y Nueva Antioquia, que se encuentra al inicio del tramo internacional del río, situado entre Colombia y Venezuela.

En esta región el transporte fluvial está centrado en el ganado. Los otros rubros se transportan en cantidades limitadas. Para esta intendencia se proyecta el acondicionamiento de una vía fluvial entre el Meta y el Orinoco, que puede asegurar la navegación sobre una distancia de casi 1 890 km entre la Boca Grande del Delta Amacuro, que es la desembocadura del Orinoco en el Atlántico y Puerto López que es la terminal de la navegación en el Meta. También se planea la construcción de una vía multimodal que incluya el funcionamiento de la vía interoceánica Delta Amacuro-Buenaventura. Tras implantar la vía Orinoco-Meta, el transporte se haría a continuación por las carreteras ya existentes desde Puerto López a Bogotá. De aquí se utilizarían las vías terrestres que existen entre esa capital y Puerto Buenaventura o el de Tibagué, del Pacífico. Hay que agregar que existe también la alternativa del ferrocarril instalado entre Bogotá y Buenaventura, que actualmente se está restructurando.

La interoceánica Delta Amacuro-Buenaventura facilitaría la comunicación directa de los llanos de Colombia y Venezuela con el Pacífico. No sólo se acortarían distancias de transporte; se reducirían además costos y se darían mejores garantías geopolíticas para toda la región en cuanto no se continuaría dependiendo exclusivamente del Canal de Panamá. Al acondicionarse la vía fluvial Orinoco-Meta existiría una magnífica oportunidad para dirigir mercancías provenientes de las zonas de los Llanos de Colombia y Venezuela hacia otros puertos del Pacífico como los de Ecuador y Perú o más allá aún, hacia Estados Unidos y Asia.

La intendencia del Amazonas, con su área de aproximadamente 406 000 km², es la más grande de las intendencias fluviales de Colombia. Su sede se encuentra en Puerto Asís en el Putumayo y tiene nueve inspecciones fluviales. En esta intendencia se encuentra el tramo que posee Colombia en la orilla izquierda del Río Amazonas-Solimoes y uno de los trechos de los ríos Guainía, Negro, Vaupés, Caquetá-Japurá y Putumayo-Içá, entre otros. En la comisaría de Vaupés nace el río Guainía. A más de la mitad de su longitud empieza a formar la frontera con Venezuela frente al pueblo venezolano Victorino. En el punto llamado Las Tres Vías, Guainía confluye con el Río Casiquiare con el cual forma el río Negro. El Negro es un gran río del cual Colombia posee un tramo de algo más de 500 km de longitud, en la orilla derecha. A su vez, el río Vaupés es muy importante para Colombia. Es tributario del Río Negro y corre unos 1 000 km por la intendencia fluvial del Amazonas. Un 60% de este recorrido es navegable por embarcaciones mayores. Otro río importante, el Caquetá, posee una longitud de 2 100 km de los cuales Colombia posee 1 350 km. Es un gran curso de agua que desemboca en el Amazonas-Solimoes. Los brasileños lo denominan Japurá y su caudal medio anual es de 13 180 m³/seg. (IGAC, *Ibid*:67)

Otro de los principales ríos navegables de esta intendencia fluvial es el río Putumayo, Içá de Brasil. En Colombia este río tiene 1 500 km navegables todo el año. Es un río internacional muy importante para las comunicaciones de toda la región y cuyas riberas pertenecen a cuatro países (Venezuela, Colombia, Brasil y Perú). En Colombia, además de Puerto Asís, se pueden mencionar los puertos Ospina, Leguízamo y Tarapacá. Como esta intendencia fluvial administra un tramo de 116 km de longitud de la orilla izquierda del Amazonas. Sobre esta corta porción del río Amazonas, situado en un margen alto cerca de la frontera con Brasil, están ubicados el Puerto y la ciudad de Leticia, donde se encuentra un comando militar del ejército peruano financiado y entrenado por oficiales del ejército norteamericano, que tiene todos los servicios de una urbe moderna. Posee un aeropuerto y una base naval bien implantada cuyas instalaciones portuarias se están mejorando. Leticia es un importante centro que mantiene un comercio activo tanto con Brasil como con Perú.

Hasta una fecha bastante reciente, Leticia disponía de una elemental comunicación terrestre de unos 165 km de longitud que la unía con la ciudad de Tarapacá, puerto del río Putumayo, cerca de la frontera con Brasil. Esta carretera, aunque ahorraba centenares de kilómetros que evitaban un largo recorrido por las aguas del Putumayo y del Amazonas, ha sido abandonada debido a los constantes enfrentamientos entre el ejército y las FARC, que tenían en esta región uno de sus bastiones más importantes. En esta intendencia fluvial el transporte de pasajeros se efectúa normalmente con unidades pequeñas en función de las necesidades inmediatas. Los volúmenes de carga más importantes son alimentos e hidrocarburos. Para esta intendencia se planea la construcción de varias interconexiones:

las vías multimodales Caquetá-Putumayo y la interconexión fluvial de Amacá-Yacu y Cotohué, pues en el Trapecio de Leticia se ha propuesto interconectar por medio de un canal, al corto río Amaca-Yacu (52km), afluente del Amazonas de Colombia, con el Cotohué (152 km), tributario del Putumayo. El propósito del canal sería evitar los grandes desvíos que se deben hacer para navegar de un río al otro, lo que impondría la navegación por tramos de aguas brasileñas, de los ríos Solimoes-Amazonas e Içá-Putumayo. Estos esfuerzos para acondicionar las hidrovías de la región apuntan hacia retomar el control estatal en esta zona, pues según palabras del documento de la CAF “es necesario proceder a recuperar esta importante cuenca” (CAF, *Op. Cit:*95), actual tierra de nadie.

De esta forma, la integración fluvial de Colombia con Venezuela puede estrecharse mediante los ríos Orinoco, Meta, Atabapo, Guainía y Negro. Por el río Putumayo Colombia puede mejorar su integración con Ecuador. Además, a través de este río, pero también con el Amazonas, puede ser ampliada la integración fluvial con Perú. En el caso de Brasil, los principales ríos de la integración fluvial con Colombia serían el Negro, el Vaupés, el Solimoes-Amazonas, el Caquetá-Japurá y el Putumayo-Içá.

Dentro de la Cuenca del Amazonas, Brasil es el país más importante para la IIRSA, pues su territorio ocupa la mayor parte de esa cuenca, la más grande del mundo. La enorme e intrincada red de ríos que cubre el territorio de Brasil solamente en la Amazonia y en la cuenca del Tocantins tiene una longitud potencialmente navegable estimada de manera conservadora en más de 30 000 km de los que 20 000 pueden ser ya aprovechados como vías adecuadas para la navegación utilitaria. Además, si a la longitud de los ríos potencialmente navegables de esta cuenca se suma la de las otras cuencas del Nordeste, São Francisco, Leste, Sudeste, Sul y Paraná, Paraguai y Uruguai se puede llegar a un total de 50 000 km. Esta situación es única en el globo terráqueo. (CAF, *Op. Cit:*78) Recientemente los descubrimientos de importantes yacimientos de minerales y la apertura de grandes áreas dedicadas a la agricultura han reactivado estas vías fluviales, lo que ha permitido transportar por los ríos de Brasil grandes cantidades de mercancías que se acercan a los 15 millones de toneladas por año. Por medio de una gran red hidrográfica de su región amazónica, Brasil se puede comunicar con todos los países de la región andina. Estas comunicaciones o transportes pueden ser unimodales, sólo por los ríos, o cuando resultan convenientes por criterios técnicos y económicos se pueden combinar con los transportes por carretera y/o ferrocarriles, transformándose en multimodales.

El río brasileño más importante es el Río Amazonas-Solimoes. Las cabeceras de este río se encuentran en los Andes del Perú, lo que asegura a sus aguas una longitud estimada en casi 6 780 km: es el río más largo del mundo. También es el más grande desde el punto de vista del caudal de sus aguas, cuyo valor promedio anual llega a unos 226 000 m³/seg. De este modo el Amazonas vierte en el

Océano Atlántico en un día la misma cantidad de agua que el Támesis en un año. En la sección de Puerto Óbidos el caudal de una sola a venida ha sido estimado en 330 000 m³/seg. (*Ibid*:80) En el tramo comprendido entre el Puerto Benjamín Constant, situado en la entrada el gran río en Brasil y la boca del río Negro, al lado de la ciudad de Manaus, el río Amazonas se conoce también como Solimoes.

En su recorrido por Brasil, a lo largo de los 3 128 km que separan el Puerto Benjamín Constant del Océano Atlántico, el Amazonas-Solimoes baja un total de 65 m. Antes de llegar al Atlántico el Amazonas forma un amplio y ramificado estuario que de manera bastante inusual, en un tramo de 400 km presenta grandes islas como Ilha Grande de Gurupá, Quemada, Caviana, Mexiana, Bailique, etc, con una superficie total de caso 50 mil metros cuadrados. Entre estas islas y el continente se halla un verdadero caos de canales de varias longitudes. De éstos el más importante es el Canal do Norte, seguido por el Canal do Sul. Pero además de estos canales norteños una parte de las aguas del Amazonas llega al Atlántico por el sur de la gran Isla Marajó —que mide más de 32 600 km² y es mayor que Bélgica— por el llamado Río do Pará o Bahía de Marajó. El río do Pará está conectado con el curso principal del Amazonas por el Furo o Estrecho de Breves y por el Furo dos Macacos, ambos angostos pero de gran profundidad e manera que permiten el tránsito de grandes barcos de alta mar.

En lo que a la navegabilidad de su cuerpo principal de aguas se refiere, entre su salida al Océano Atlántico y el punto donde recibe por primera vez su nombre de Amazonas, cerca del Puerto Nauta en Perú, este río se puede dividir en cuatro tramos: 1) De Belém do Pará a Manaus, que tiene una distancia de casi 1 650 km donde el río amazonas es perfectamente navegable por grandes barcos a pesar de que en ciertos puntos el canal navegable puede ser bastante sinuoso; 2) Entre Manaus y Tabatinga, tramo que cubre una distancia algo mayor a 1 600 km, y considerablemente navegable; 3) Entre Tabatinga e Iquitos, donde el río se denomina nuevamente Amazonas y donde la navegación es buena; 4) Desde Iquitos hasta cerca de la confluencia del Ucayali son el río Marañón en el Perú, en cuya unión se forma el río Amazonas y pueden navegar siempre grandes barcazas.

Con relación a esta conexión fluvial Perú–Brasil se debe hacer una observación: esta hidrovía tiene un gran valor geopolítico y geoestratégico tanto para los Estados Unidos como para Brasil porque por aquí se puede entrar a la amazonia brasileña con relativa facilidad. En este punto, en las épocas de aguas altas es posible que grandes embarcaciones lleguen desde Manaus hasta el Puerto Pucallpa del Río Ucayali. Eso significaría que desde el Atlántico hasta Pucallpa existe una importante ruta fluvio-marítima de casi 5 000 km. Las ciudades ribereñas más importantes de este último tramo del Amazonas son Belém do Pará, Macapá, Santarém, Óbidos, Parintins, Urucurituba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Codajás, Coari, Tefé, Fonte Boa y Benjamín Constant. El puerto más importante es el Puerto Óbidos, ubicado en la orilla izquierda del Amazonas. (INPA, 2000:25) Los planes de la IIRSA para

este tramo incluyen la movilización por esta vía de las grandes exportaciones de granos de los estados de Rondonia y Matto Grosso así como minerales de la región, como la bauxita hacia el Pacífico.

Los afluentes más importantes de Amazonas-Solimoes en la parte norte son más cortos que los de la orilla derecha debido a la situación geográfica y a la naturaleza de las formaciones geológicas de los territorios donde pasan sus cursos. Algunos de esos afluentes consolidan la integración fluvial de Brasil con Colombia (los ríos Içá-Putumayo y Japurá-Caquetá) y permiten la integración con Ecuador (río Putumayo-Içá) y con Venezuela (ríos Negro-Casiquire y Guainía). Desde Tabatinga hacia el Atlántico los afluentes más importantes son los siguientes: el Río Içá, navegable en el territorio brasileño desde su boca hasta la frontera con Colombia. Aguas arriba las riberas del río pertenecen a Colombia, Perú y Ecuador; el Río Japurá, que es navegable en el territorio brasileño por caso 750 km desde su boca hasta la frontera con Colombia; el Río Negro, cuyo formador es el Guainía que nace en los Andes de Colombia y mide cerca de 1 700 km. Se forma en el punto denominado Las Tres Vías, después de que las aguas del Guainía se encuentran con las del Casiquire; luego este río forma la frontera de Colombia con Venezuela. En el tramo del Casiquire-Negro que pasa por Venezuela se proyecta la Interconexión de la cuenca del Orinoco con la del Amazonas que es esencial para la integración fluvial de la región y la del continente. Las ciudades ribereñas más importantes de este río son Manaus, Moura, Barcelos, Tupurucua y Sao Gabriel do Cachoeira.

El importante puerto de Manaus, ya mencionada su importancia geoestratégica en Sudamérica, está ubicado sobre la orilla izquierda del Río Negro, cerca de su boca. Para darse una idea de las dimensiones de este puerto basta ver que tiene un canal de acceso de 500 m de ancho y una profundidad de 35 m, lo que permite el acceso al puerto para buques de cualquier calado. Sus muelles son flotantes para acomodarse a las enormes fluctuaciones de nivel de las aguas del río y está provisto con instalaciones modernas entre las que destaca un patio de 22 000 m² para contenedores. Sobre la línea de Manaus la privada Empresa de Navegação da Amazonia S.A. utiliza empujadores con receptáculos con capacidades de carga de 500 a 1000 toneladas. Tiene también varias terminales privadas especializadas para cereales, productos inflamables, minerales, carga general y ferry así como astilleros para asistencia técnica a las naves completan este puerto. En el tramo desde su boca hasta la ciudad de Tauapeçu en el río Negro pueden navegar barcos de alta mar y de esta localidad hasta Içana pueden navegar convoyes de hasta 32 m de ancho. (*Ibid*:48)

Los otros ríos importantes son el Río Branco, principal afluente del Río Negro, donde se tiene planeada la construcción de una hidrocentral en la Cachoeira de Bem Querer, lo que regularizaría el curso del río y permitiría la navegación sin problemas hasta Boa Vista; el Río Uatamã, donde está construida la central hidroeléctrica de Balbina; y el Río Trombetas, cuyos formadores son Anacuru y

Porua, que nacen en la Serra do Acaraí, la cual separa a Brasil de su vecino Surinam y tiene una cuenca de 125 000 km².

Los afluentes del Amazonas-Solimoes en la parte sur son de mayor longitud en comparación con los afluentes del norte. Algunos de los afluentes del sur amplían la integración fluvial entre Brasil y Perú, como en el caso de los ríos Javari-Yavari y Jurua-Yurua, mientras que otros favorecen las comunicaciones con Bolivia por los ríos Madeira, Mamoré y Gauporé-Itenez. Los tributarios del sur son los siguientes: Río Jurua, que es navegable por 2 460 km desde su boca hasta la ciudad de Cruzeiro do Sul; Río Purus, totalmente navegable en un trecho de 2 450 km. En este río la navegación comercial se efectúa desde la boca del río en el Amazonas-Solimoes hasta el Puerto la Boca do Acre; Río Acre, cuya navegación se realiza como si fuera una continuación del Purus y su finalidad principal es la de llegar a la ciudad de Río Branco; Río Madeira, que es un río que comienza desde el punto donde los ríos Beni y Mamoré de Bolivia juntan sus aguas. La parte superior del río, que abarca unos 400 km, no se puede navegar. El río se puede navegar desde su boca hasta la ciudad de Porto Velho en un trecho de 1 060 km. Debido a la magnitud de este río y a la importancia de su potencial interconexión con los ríos de Bolivia y de la Cuenca del Paraguay-Paraná-Plata, Brasil considera de una especial prioridad las obras para hacer navegable el tramo del Alto Madeira.

Porto Velho, con sus instalaciones portuarias modernas en los últimos años constituye una nueva y segura entrada y salida en la Amazonia, lo que le da un carácter geoestratégico pues puede ser la entrada hacia la Amazonia brasileña tanto de mercancías extranjeras como de tropas extranjeras que no sean necesariamente del continente. Tiene muelles fijos y uno fluctuante, con un calado mínimo de 12 metros. Además, este puerto está provisto con todas las instalaciones necesarias, inclusive una draga destinada a la manutención de un muelle para las operaciones del tipo ro-ro.¹²⁰

Otros ríos importantes son el Mamoré y el Guaporé, donde desde la frontera con Bolivia, Brasil ejerce la soberanía de las riberas derechas del Guaporé y Mamoré. Si se une a la carretera Federal construida a la orilla del río Madeira, entre las ciudades de Guajará-Mirim, Abuná y Porto Velho, permite una salida de Bolivia hacia el Atlántico; el Río Tapajós, que debido a su favorable ubicación y orientación y a la cercanía de sus fuentes con las del Río Paraguai, su curso ha sido considerado adecuado para que por su intermedio se realice la interconexión de las cuencas del Amazonas y del río de la Plata; el Río Xingú, que nace en la Serra del Roncador, es medianamente navegable y se une con el río Madeira.

¹²⁰ Ro-ro es un sistema de transportación de contenedores a través de una especie de rampa con ruedas que permite pasarlos en menor tiempo de los barcos hacia los camiones sin utilizar grúas.

Finalmente está el Río Tocantins. La Cuenca del Tocantins, constituida por los ríos Tocantins, Araguaia y unos pocos afluentes es contigua a la del Amazonas. El sistema fluvial Tocantins-Araguaia atraviesa la parte centro-este de Brasil, desde la boca del Tocantins en el río Pará y se acerca hasta sólo unos 60 km de Brasilia. Alcanza una longitud de 2 690 km de los cuales 1 710 km van desde el punto donde este río recibe el nombre de Tocantins. Este río posee una cuenca de algo más de 812 000 km² y se divide en tres tramos: Alto Tocantins, de un poco más de 1 00 km, desde sus fuentes hasta los rápidos conocidos como Lajeado; Medio Tocantins, desde Lejeado al rápido Itaboca, sobre unos 990 km.; Bajo Tocantins, desde Itaboca hasta su desembocadura en el Río Pará, por una longitud de casi 700 km. (*Ibid:62*) En este río se planea la construcción de la cuarta mayor hidrocentral del mundo. En conjunto se considera que en la Cuenca del Tocantins se va a desarrollar una red fluvial de 5 800 km de los cuales un 60% se podrá utilizar inmediatamente mientras que el 40% restante se puede desarrollar. Además, el Tocantins junto con el Araguaia formarán parte de un importante sistema multimodal donde los transportes por ríos, carreteras y ferrocarriles se han combinado para conectar algunos puntos de producción situados en el interior de los estados de Mato Grosso, Tocantins, Paraná y Maranhão con el Puerto de São Luis.

Con relación a Bolivia dentro de la cuenca amazónica se puede decir que el hecho de estar enclaustrado en áreas continentales le ha generado muchas consecuencias negativas de orden socioeconómico. Este país del Altiplano está aislado porque existe una crónica falta de vías terrestres y sólo unas reducidas comunicaciones aéreas. La carencia de carreteras en el noreste de Bolivia, su Amazonia, y en el Altiplano aunado al hecho de que las pocas vías existentes se pueden utilizar solamente en el verano de modo que el resto del año esta parte del país se queda sin comunicaciones terrestres, deviene gran interés para que Bolivia utilice sus ríos como vías de transporte y comunicación para el interior de su territorio. Si se toma en cuenta que la construcción de carreteras resulta más cara que el acondicionamiento de hidrovías, la manera más rápida de solucionar los problemas de comunicación de Bolivia con el exterior es, a decir de los funcionarios de la CAF que planearon la IIRSA, el adecuado aprovechamiento de sus ríos y la integración fluvial con Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, sus vecinos.

Para integrar fluvialmente a Bolivia con los demás países de la cuenca amazónica es imprescindible la utilización de los ríos de la Amazonia boliviana y el reducido litoral fluvial que este país tiene en el Río Paraguai frente a Brasil. La extensión territorial de la Amazonia boliviana tiene unos 702 000 km² y representa el 68% del área del país y cubre en totalidad los departamentos de Beni y Pando y parte de los de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. (IGM, 2004a) A esta región pertenece la mayoría de los ríos de Bolivia como Ichilo-Mamoré, Beni y Madre de Dios, Itenez o Guaporé y sus

afluentes. Se estima que todos estos ríos suman unos 10 000 km que en gran parte se pueden navegar. Dentro de los ríos más importantes de Bolivia están los siguientes: el Ichilo-Mamoré, cuya cuenca cubre 240 000 km², inicia su curso en el punto donde confluyen los ríos Guapay, denominado también Río Grande, y el Río Mamorecito o Ichilo. Después de esta confluencia, el Ichilo Mamoré corre hacia el noroeste. A unos 50 km aguas debajo de estos puertos frente al poblado boliviano Villa Bella, el río Mamoré se une con el Beni y los dos forma el río brasileño Madeira; y los ríos Beni y Madre de Dios.

Las fuentes del Beni se encuentran en los Andes, cerca de la ciudad de La Paz, en la montaña de Chacaltaya, a una altitud de 3 650 m y con una cuenca de unos 112 000 km². El Beni es un río con orillas bajas y anegadizas; su corriente es bastante fuerte y lleva enormes cantidades de troncos y alimentos. Desde Puerto Linares, punto donde llega al río la carretera que se inicia en La Paz, hasta la confluencia con el Mamoré, el río Beni tiene 1053 km. De éstos es navegable una longitud de 883 km entre el Puerto de Rurrenabaque y el poblado que se queda al lado de la cachuela¹²¹ de La Esperanza. En ciertas zonas el río corre muy rápido entre cerros de rocas duras muy altos y estrechos, como un desfiladero. Toda esta zona está cubierta por selvas vírgenes y se ha creado un valle muy profundo mientras que en el lecho aparecen afloramientos dispersos de piedras muy peligrosas para la navegación. Se habla de la posibilidad de construir una represa que podría formar un lago artificial que por un lado almacenaría el agua y por el otro crearía energía eléctrica. Dadas sus características, a excepción de algunas naves pertenecientes a la Armada Boliviana, en este inmenso río navegan muy pocas embarcaciones. El río Madre de Dios es el principal afluente del río Beni y se forma en Perú. Su curso tiene una longitud de 1 150 km, de los cuales 65 km están en Perú.

Los expertos de la geografía boliviana mencionan que el curso inferior del Beni está obstaculizado por la cachuela de La Esperanza, por lo que este río no se puede navegar hasta la confluencia con el río Mamoré. Tampoco es posible una navegación segura por el Mamoré, entre Guayamerín y la boca del río Beni debido a una zona de rápidos. Esta situación contraria a la navegación utilitaria se mantiene también en la parte alta del río Madeira formada por la unión de los dos ríos bolivianos, lo que impide el acceso de las embarcaciones de Bolivia a los ríos Madeira y Amazonas, que integraría Bolivia a Brasil. Sin embargo, dada la importancia que tiene la integración física para el control de los ríos de todo el subcontinente se han hecho varios esfuerzos para hacerlos navegables. Así, para Bolivia la IIRSA contempla varios proyectos entre los que destaca el denominado *Interconexión Bolivariana* representado por la unión de los ríos Urubamba–Manú y Madre de Dios–Beni; el de la *Interconexión fluvial Madidi-Heath* que planea la excavación de un canal corto y el

¹²¹ Tanto en Bolivia como en Perú se le llama 'cachuela' a los escollos donde rompen las corrientes de los ríos, que pueden ser muy peligrosos para la navegación.

mejoramiento del cauce de esos ríos; y la *Interconexión fluvial-lacustre Mamoré-Beni* que recortaría por lo menos 1 000 km de las distancias que hoy se deben recorrer entre el Alto Mamoré y el Alto Beni y permitiría evitar los raudales que impiden la navegación utilitaria entre el Mamoré y el Beni. Este proyecto se revela como de importancia capital en tanto que aseguraría la interconexión de las cuencas del Amazonas y del Plata y el acceso de Bolivia a la hidrovía Paraguay-Paraná.

Asimismo, se tiene planeado trabajar sobre la parte boliviana del Lago Titicaca. El Lago Titicaca es el mayor y más alto de Sudamérica. Está compartido por Bolivia y Perú y es administrado por una autoridad autónoma binacional. Es un lago del Altiplano cuyas aguas están situadas a un promedio de 3 810 m sobre el nivel del mar. Cubre una superficie media de casi 8 400 km² su ancho máximo es de 176 km y el mínimo de 70 km y su profundidad máxima es de 288 m. La superficie de su cuenca hidrográfica es de 56 300 km². Sin embargo el área de su cuenca puede llegar a 110 900 km² si se le suman las cuencas del río Desaguadero y el lago Poopó. (IGN, 2002:469) El río Desaguadero, de casi 400 km, tiene a este lago como fuente y descarga las aguas sobrantes que llegan al Titicaca en el lago boliviano Poopó. El lago Titicaca tiene costas recortadas y sus aguas tibias nunca se congelan a pesar de la gran altura donde se encuentran. Tiene una abundante y variada pesca, es navegable y varias líneas de pequeños vapores le dan servicio, por lo que se le contempla como posibilidad de formar parte de un eje multimodal que una al lago con Puno, desde donde una línea de ferrocarril llegará hasta Puerto Matarani en el Pacífico, hecho que acentúa la búsqueda de la bioceanidad por parte de la IIRSA.

El caso de Ecuador dentro de la cuenca amazónica resulta peculiar. Este país andino tiene pocos ríos navegables que se presten a la integración fluvial a pesar de que su ubicación le asegure un régimen de lluvias muy favorable. Sin embargo el relieve montañoso determina pendientes acentuadas que resultan profundidades pequeñas que imposibilitan la navegación utilitaria. Debido a su orografía y a la disposición espacial de su cordillera andina, los cursos de agua existentes en el Ecuador se dirigen hacia las cuencas del Pacífico y Amazónica, lo que subraya que el país tiene dos principales regiones: la Costa y la Oriental o Amazónica, separadas por la región Interandina. Para la navegación utilitaria la mayor importancia la presentan los ríos de la costa que tienen una cuenca de 104 000 km² y cada año transportan al Pacífico unos 52 000 millones de metros cúbicos de agua. En esta parte del país se encuentran los mejores puertos fluviales, el número más grande de embarcaciones y los principales talleres y astilleros. Los ríos de la región oriental de Ecuador, cuyas cuencas se extienden sobre 136 000 km² y vierten anualmente al Amazonas 140 000 millones de metros cúbicos de agua pero debido al relieve del país, la mayor parte de estos ríos son de un interés reducido para los transportes fluviales. (IGM, 2004b:267)

El río que mejor puede favorecer la integración fluvial de Ecuador con sus vecinos Brasil, Colombia y Perú es el Putumayo, río internacional de estos cuatro países. En una medida bastante reducida, para los intercambios fluviales con Perú pueden contribuir el Río Napo y algunos de los afluentes del Marañón. Como la integración fluvial de Ecuador se realiza mayormente por el río Putumayo, la misma debe ser reforzada con vías terrestres y paralelamente se deben desarrollar también los puertos de este río. En su mayoría los ríos que se dirigen hacia el Pacífico son de montaña, torrentosos y con grandes pendientes pero en sus partes más bajas tienen cortos tramos navegables que pueden ser aprovechados para la navegación menor. Entre estos ríos encontramos el Río Guayas, el Río Esmeraldas, el Mataje y los ríos Cayapas y Santiago. Por el lado del oriente Amazónico, esta región es de reducida densidad poblacional y por sus características sus ríos no son muy aptos para la navegación. Sin embargo las dificultades de comunicación por esta región muy selvática muestran que el desarrollo del medio de transporte fluvial, aunque es de una extensión algo limitada, puede ser vital.

Entre los ríos que deben ser habilitados para el transporte fluvial están el Putumayo, río internacional, el Río San Miguel, el Morona, el Pastaza y el Río San Miguel. Además se tiene pactada entre Ecuador y Brasil la construcción de la Vía Interoceánica Multimodal Manaus-San Lorenzo, puerto ecuatoriano en el Pacífico. La parte fluvial corresponde a la navegación desde Manaus por los ríos Amazonas-Solimoes y Putumayo-Iça hasta el Puerto El Carmen de Putumayo. Desde este puerto fluvial se llega por una carretera a la capital Quito y desde aquí se continúa el recorrido por ferrocarril hasta Puerto San Lorenzo situado en la orilla del Océano Pacífico.

Con relación al papel de Perú en la cuenca amazónica, se puede decir que la gran mayoría de los ríos navegables de este país que pertenecen a dicha cuenca forman un área de 670 000 km², la cual abarca un poco más de 52% del área del país. (IGN, *Op. Cit.*:523) Como consecuencia la integración fluvial peruana tiene como eje rectos al río Amazonas y algunos de sus afluentes. La longitud total de estos ríos es de 14 000 km. Una parte significativa de los mismos puede ser navegado más de la mitad del año por embarcaciones fluviales de importancia y hasta oceánicas. Como Colombia, además de la gran capacidad de sus ríos para facilitar el desarrollo de la navegación utilitaria, Perú presenta la ventaja de tener fronteras comunes con tres de sus socios de la región andina y con Brasil. Así, como estos cinco países forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica, resulta relativamente fácil una integración fluvial.

Entre los ríos más importantes de Perú encontramos los siguientes: el Amazonas peruano, que se forma por la confluencia de los ríos Ucayali y Marañón, cerca del puerto Nauta, a una distancia de 3 800 km del Océano Atlántico si se considera la salida por el canal norteño de Macapá. Este río no presenta problemas para la navegación de grandes embarcaciones. Iquitos, principal puerto amazónico,

dispone de un muelle flotante donde pueden atracar barcos oceánicos, lo que lo convierte en un lugar de gran importancia geoestratégica, pues como ya se observó con anterioridad, representa una buena opción de entrada hacia la Amazonia brasileña y un punto desde donde se puede realizar una intervención militar de medianas proporciones dada la posibilidad de transportar un buen número de tropas. Cerca de la ciudad de Iquitos, sobre un pequeño afluente llamado Nanay, se encuentra la base militar peruana Santa María de Nanay del Amazonas, que está provista de un muelle flotante metálico, con talleres mecánicos y varios edificios para el personal. A unos 30 km aguas debajo de Iquitos se encuentra el pueblo Indiana, desde donde se puede construir un atajo terrestre que ahorraría diez horas de navegación yendo de Perú hacia Brasil. No lejos de este pueblo se encuentra Pijuayal, fundado sobre una altura que domina el río. Aquí está ubicada la base de una guarnición militar y de la misma sale un camino que es un atajo bien mantenido que va hasta el pueblo Puca Urco, sobre el río Napo.

El Marañón es otro importante río peruano. Es el mayor colector de las aguas que vienen de los Andes centrales y orientales, lo que la convierte en una magnífica vía de penetración hacia la selva. Tiene unos 1 800 km de longitud y su cuenca ocupa 350 000 km². El curso del río está dividido en dos secciones: Alto Marañón, impropio en ciertas partes para todo tipo de navegación pero apropiado para la construcción de una hidrocentral que de ninguna forma obstruiría la navegación en los tramos navegables, pues el río Marañón forma parte de la Vía Biocénica de Interconexión Multimodal Atlántico-Pacífico planteada por la IIRSA; y el Bajo Marañón, más caudaloso, más ancho y más apto para la navegación.

El río Napo, afluente del Amazonas, tiene sus fuentes en Ecuador y es navegable, al igual que el Ucayali, que es un río de importancia vital para Perú por constituir la vía principal que une la selva con la costa por el intermedio de la carretera Lima-Pucallpa. Así, desde el punto de vista económico, este río asegura una vía de transporte para los productos y materiales de la costa a la selva y al revés, lo que permite la explotación de estas ricas regiones de la selva amazónica peruana donde entre otras cosas existe petróleo y gas natural. El Ucayali se forma por la confluencia de dos importantes ríos: el Urubamba y el Tambo. El Ucayali tiene una longitud de 1 360 km y su cuenca alcanza 375 000 km². Es un río caudaloso y navegable todo el año (*Ibidem*). Según algunos cálculos, el potencial hidroeléctrico integrado de las cuencas de los ríos Marañón, Huallaga y Ucayali podría llegar a una potencia combinada de cerca de 18 mil megavatios, lo que puede dar una idea de las posibilidades de creación de energía de este tipo. Finalmente, están los ríos Yavarí, Yuruá y Purús, que son los tres ríos del este de la amazonia peruana, localizados en la zona fronteriza de este país y Brasil. Uniendo estos ríos es posible establecer una conexión con el Madeira brasileño mediante una carretera.



Conforme se vaya completando el sistema de navegación fluvial propuesto por la IIRSA quedará más claro el panorama de la región unida por hidrovías que además se irán integrando con el sistema de carreteras que está en proceso de construcción y cuya urgente conclusión ha sido dispuesta por la CAF y es ya visible si se visitan los países involucrados. Igualmente, donde sea posible, estos dos sistemas quedarán interconectados con el sistema ferroviario, tal como está realizando Brasil en la creación de sus ejes Norte-Sur. En la medida en que se vaya integrando todo este conjunto de vías multimodales que constituirá el sistema logístico suramericano, los países andinos y Brasil quedarán listos para la integración no sólo comercial sino política del hemisferio norte orquestada desde la Unión Americana. Esta última consideración no es sólo afirmación hueca o interpretación libre de quien escribe este texto. En el documento oficial de la CAF de 1998, pre-IIRSA, que explica a detalle la integración fluvial suramericana se concluye diciendo que “la infraestructura (es) fundamental para el desarrollo sostenible, base para poder alcanzar la integración comercial que permitirá crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)” (CAF, *Op. Cit.*:239). Quizá en el discurso oficial del gobierno norteamericano no se hable del ALCA más que durante las reuniones oficiales con los países del continente pero, al menos en los países que comparten la cuenca amazónica, la preparación del terreno para insertarlos de manera efectiva en la lógica de la satisfacción de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de la política exterior norteamericana se realiza diariamente.

c) EL CONTROL SOBRE LOS ENERGÉTICOS: EL PETRÓLEO, EL GAS Y EL CARBÓN

De la totalidad de los recursos naturales disponibles en el mercado, el petróleo, el gas y el carbón mineral más que cualquier otra mercancía evidencian un hecho: la importancia y mistificación de los recursos naturales en el llamado mundo desarrollado, a diferencia de lo que opinan los pregoneros del fin de la geografía (y de la historia). La economía global está dirigida por los hidrocarburos —gas y petróleo—, que son los motores de la producción, del transporte y del consumo y por el carbón mineral que genera en los Estados Unidos más del 80% de la energía eléctrica, vital para la producción capitalista. (Corpozulia, *Op. Cit.*:5) El 89% del consumo energético mundial se basa en combustibles fósiles y sólo los hidrocarburos (petróleo y gas natural) representan el 64% de la demanda total. (Giusti, 2001:113) De este modo, los hidrocarburos y el carbón no sólo constituyen la fuerza energética dominante en nuestro tiempo sino que por muchos años más el mundo continuará dependiendo del consumo masivo de combustibles fósiles.

Indudablemente, una las economías que más resentiría una crisis energética sería la de los Estados Unidos pues sus reservas probadas sólo le aseguran la satisfacción de la demanda durante 7 u 8 años¹²², razón por la cual esta gran potencia se ve obligada a adoptar alguna de las siguientes líneas estratégicas: reforzar su política de perforación y descubrimientos de nuevos campos petroleros y de gas en su territorio; asegurar su dominio sobre otros yacimientos importantes de Medio oriente y Asia; *o ampliar las posibilidades de explotar conjuntamente, ya no sólo por acción militar directa sino mediante convenios establecidos entre gobiernos con otros países que pudieran disponer de mayores cantidades de reservas petroleras y de gas.* (Martínez Corbalá, 2001. El subrayado es mío) Esta última opción parece ser la elegida con relación a los recursos energéticos de los países latinoamericanos en general y del arco andino en particular.

América Latina y el Caribe cuentan con el 10.6% de las reservas mundiales de petróleo (86% concentradas en Venezuela y México); produce el 14.4% del crudo; cuenta con el 4.7% de las reservas internacionales probadas de gas natural; con el 2.3% de las de carbón mineral —suficiente para 288 años— y con el 21.7% de la producción de hidroelectricidad en el mundo, de acuerdo a datos de finales del 2002 (Rivera, 2004:35). El consumo de energía que se requiere para el funcionamiento de la gran potencia del norte es muy alto. Si a esto aunamos la intención de crear un área de libre comercio hemisférica con tipo y niveles de producción a imagen y semejanza de los del mundo desarrollado que implicarían altos niveles de producción de energía para el funcionamiento de la infraestructura y de las zonas industriales programadas, las necesidades energéticas aumentan. Además, dadas las circunstancias de vulnerabilidad estratégica y de crisis de sucesión hegemónica por las que atraviesa, para los Estados Unidos el control sobre los recursos energéticos en el hemisferio occidental es un asunto de seguridad nacional y los países de la zona andina no escapan a las acciones del gobierno norteamericano, aliado de las más importantes transnacionales de la energía.

De acuerdo al experto venezolano Víctor Poleo, las tres grandes cuencas con reservas de hidrocarburos en el mundo son las del Golfo Pérsico, las del Asia Central y las del cinturón bolivariano. El cinturón bolivariano está constituido por los depósitos de crudos livianos y pesados y de gas, que van desde la costa nororiental de Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, donde hay reservas de gas en todos ellos, de crudos convencionales (livianos) en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y de crudos no convencionales (pesados, extrapesados y bitumen) en Venezuela y Ecuador. Además, en Colombia y Venezuela encontramos los mayores depósitos de carbón mineral en la región.

¹²² De acuerdo con el Departamento de Energía, tan solo el consumo de petróleo en Estados Unidos creció en 15% entre 1990 y 1999 pasando del 17 a 19.5 millones de barriles por día. (Klare, 2002)

Tal cantidad de recursos energéticos disponibles en los países andinos no ha pasado desapercibido para los ideólogos de la IIRSA, por lo que el desarrollo del sector energético está incluido en los planes de integración subregional. De acuerdo al informe “Proyectos energéticos de integración andina” de la CAF, principal promotora de la IIRSA, resulta imprescindible la modernización a corto plazo de este sector si se pretende hacerlo más efectivo. En la cuestión del petróleo e hidrocarburos líquidos hay tres áreas en las que la CAF encuentra posibilidades de integración: la primera se refiere a la unificación de esfuerzos para los efectos de la logística con el fin de optimizar los costos y los resultados de las operaciones, de la exploración y la explotación petrolera en las áreas fronterizas; la segunda es la posibilidad de interconectar oleoductos para optimizar su utilización, como en el caso del oleoducto transecuatoriano y el oleoducto colombiano, así como la consideración de la misma posibilidad para la explotación de los campos de la zona sur del oriente ecuatoriano que se encuentran más cercanos al oleoducto norperuano que está subutilizado; la tercera área de colaboración se refiera a los programas de compra a largo plazo. Se trata de crear los mecanismos financieros que ayuden a establecer programas de compras de hidrocarburos líquidos a largo plazo, triangulando las operaciones con terceros países.¹²³

En lo que se refiere al carbón mineral, se dice que es un recurso natural muy poco explotado en la región —sobre todo porque la mayor parte de la energía eléctrica se produce mediante plantas hidroeléctricas que aprovechan las caídas naturales de agua— lo cual no significa que sea escaso. Venezuela y sobre todo Colombia, los mayores poseedores de reservas de carbón, tienen los mayores programas de desarrollo. De acuerdo a la CAF, es importante iniciar una política de investigación y desarrollo del potencial carbonífero de la región, la cual, afirman, debería tener una participación mucho mayor en la generación de energía de los países andinos. Sin embargo, no toman en cuenta que la actual generación de electricidad en la región muchas veces está por encima de la demanda real,¹²⁴ hecho que pone en duda el desarrollo de una industria que en apariencia no es necesaria. Se afirma que Colombia y Venezuela pueden ser exportadoras importantes de carbón hacia la región del Puerto de San Luis en Brasil para generación de energía termoeléctrica. Brasil, a su vez, usando los mismos

¹²³ Un caso típico de esta situación es la venta de hidrocarburos líquidos a Colombia por parte de Venezuela. Un tercer país que necesite productos colombianos puede asegurar el pago de los hidrocarburos líquidos venezolanos. Así se triangula la operación permitiendo un abastecimiento seguro sin afectar la balanza comercial entre los dos países. Con el mismo criterio se podrían analizar las ventas de crudo que realizan Ecuador y Colombia hacia Perú.

¹²⁴ Un ejemplo de esto se puede observar con Venezuela, que produce 18 500 MW mientras que la demanda no sobrepasa los 9 000 MW. (CAF, 2000:34)

barcos de retorno podrá exportar mineral de hierro a Colombia, lo que posibilitaría la ampliación de la industria siderúrgica en Colombia.¹²⁵

Con relación al gas en los planes de integración energética regional, encontramos que el caso más relevante es el del contrato celebrado entre Brasil y Bolivia por el cual este país le suministrará a Brasil 16 millones de m³ de gas diarios y se hará responsable del tendido del gasoducto desde los campos de producción cercanos a Santa Cruz hasta la frontera de Brasil en Corumbá. Los hallazgos recientes de gas en Colombia en los yacimientos de Cusiana aparentemente hacen innecesaria la interconexión de los gasoductos entre Colombia y Venezuela ya que en ambos casos se trata de cuantiosas reservas. Otro caso importante que es objeto de atención de la IIRSA el de la explotación de los yacimientos de la región de Camisea en Perú. Se piensa en evaluar la posibilidad de interconectar a Camisea con un gasoducto que sin tocar la cordillera lleve el gas directamente a la zona de Santa Cruz, Bolivia para poder completar el suministro que requerirá Brasil en el futuro.

Más allá de los planes oficiales de la IIRSA pero en consonancia con ella, la situación del sector energético en el arco andino con relación a los intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos es el siguiente:

Estados Unidos fue durante mucho tiempo el principal productor y consumidor de petróleo. Sin embargo sus reservas se han ido agotando y en la actualidad posee tan solo el 2% de las reservas mundiales. Con el 5% de la población mundial, Estados Unidos consume el 26% del petróleo que se extrae en todo el mundo y produce sólo el 11.5% (Cabezas, 2004), lo que lo convierte en un país deficitario. Aunado al hecho de ser un país ampliamente deficitario, Estados Unidos padece el severo problema del agotamiento de la mayor parte de sus reservas probadas y potenciales tanto de petróleo como de gas que no se compensa con los nuevos descubrimientos de Alaska y el Golfo de México. La necesidad estadounidense de organizar sus compras en diversos mercados, junto con el daño económico que le ocasiona la organización internacional de los grandes productores (OPEP), le impulsan a desarrollar diversos métodos de control de todas las zonas del mundo que cuentan con reservas energéticas, especialmente las más seguras y accesibles militar y políticamente, que son los complejos industriales y las áreas de yacimientos petroleros y gasíferos de Canadá, México y el resto de América Latina. Para los Estados Unidos es fundamental tener un acceso sin obstáculos a los yacimientos de petróleo en el hemisferio occidental y para ello ha venido recurriendo a diferentes instrumentos que van desde la ocupación militar hasta la intervención indirecta para forzar los procesos de desnacionalización del petróleo, pues el 70% de las principales reservas de petróleo en el mundo

¹²⁵ Cabe aclarar que el carbón mineral se utiliza para la laminación del acero, cuya materia prima es el hierro que aunado al carbón se vuelve duro y elástico.

entero están en manos de los Estados Nacionales, no de las corporaciones transnacionales¹²⁶. De las 20 principales empresas petroleras en el mundo, 13 son estatales y sólo 7 pertenecen al sector privado.¹²⁷

Las privatizaciones del sector petrolero en América Latina van desde la adquisición de las divisiones de exploración, transportación, y producción de petroquímica básica y plantas de generación eléctrica, pasando por las compañías de gas y sus redes de distribución y llegando hasta las divisiones de refinación de las empresas petroleras y sus proyectos de mejoramiento y desarrollo. Este virtual asalto aprovecha la burocratización de las grandes empresas nacionales, que fomenta su desorganización, su fragmentación y la venta paulatina de sus sectores. Después del debilitamiento deliberado de la estructura operativa de las empresas públicas mediante el retiro de los subsidios, se crea una red de filiales de las grandes transnacionales que se alían a los gobiernos locales mediante conversiones en empresas de riesgo pero también la venta de la participación del Estado en las empresas públicas, la venta de la totalidad de la empresa, o el concesionamiento de la explotación del recurso.

Debido a las grandes inversiones necesarias para movilizar los gigantescos volúmenes de petróleo que necesita el capitalismo para funcionar, la industria petrolera mundial adoptó como patrón de trabajo que las finanzas generadas por el negocio debían reinyectarse a la actividad petrolera, retroalimentando la industria. Según ese patrón, de los dos billones de dólares que genera al año el negocio petrolero, más de la mitad va para Estados industriales consumidores, una cuarta parte se reinvierte en la industria y el resto, pero cada vez menos, a los Estados productores.

¹²⁶ Las principales empresas multinacionales que hoy dominan los mercados petroleros son, por orden de importancia: Royal Dutch-Shell (angloholandesa); Exxon (norteamericana, dueña de lo que fue Esso, así como de gran parte de Imperial Oil, la empresa más importante de petróleo y gas de Canadá); British Petroleum (inglesa) y Amoco -recientemente fusionadas-; Mobil Oil y Texaco (estadounidenses); Chevron, dueña de lo que anteriormente fue Standard Oil of California y Gulf Oil (estadounidense); ENI (italiana); Atlantic Richfield Company (estadounidense); Elf Aquitaine (francesa); Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF hoy fusionada con Repsol (argentino-española); Philips Petroleum y Conoco (norteamericanas). La Occidental -también llamada OXY (norteamericana) no es una gran empresa, pero a partir del yacimiento encontrado en Caño Limón (Colombia) inicia un despegue importante en este bloque de empresas, de las que conserva los mismos modos de comportamiento.

¹²⁷ Esta es la lista de las principales empresas productoras de petróleo en el mundo y está ordenada de esta forma: primero el nombre seguido de la Nacionalidad, el tipo de propiedad y, al final, la producción en miles de barriles de petróleo. 1. Aranco, Arabia Saudita, Estatal, 7.915 mbp (miles de barriles de petróleo); 2. National Iranian Oil Co. (NIOC), Irán, Estatal, 3.660 mbp; 3. **Petróleos Mexicanos (PEMEX), México, Estatal, 3.460 mbp;** 4. **Petróleos de Venezuela (PDVSA), Venezuela, Estatal, 3.252 mbp;** 5. Irak National Oil Co. (INOC), Irak, Estatal, 2.573 mbp; 6. Exxon Mobil, USA, Privada, 2.501 mbp; 7. Royal Dutch / Shell, Reino U./ Holanda, Privada, 2.279 mbp; 8. PetroChina, R. P. China, Estatal, 2.096mbp; 9. Nigerian National Petroleum Corp., Nigeria, Estatal, 2.038 mbp; 10. Chevron Texaco, USA, Privada, 1.962 mbp; 11. Abu Dhabi National Oil Co., Emiratos Arabes, Estatal, 1.904 mbp; 12. BP Amoco, Reino Unido, Privada, 1.890 mbp; 13. Kuwait Petroleum Co. (KPC), Kuwait, Estatal, 1.633 mbp; 14. OAO Lukoil, Rusia, Privada, 1.553 mbp 15. Total Fina Elf, Francia/ Bélgica, Privada 1.433 mbp; 16. Libian National Oil Corp. (Libia NOC), Libia, Estatal, 1.416 mbp; 17. **Petróleo Brasileiro (Petrobras), Brasil, Estatal, 1.274 mbp;** 18. Pertamina, Indonesia, Estatal, 1.268 mbp; 19. OAO Yukos, Rusia, Privada, 992 mbp; 20. Petroleum Development Oman, Omán, Estatal, 841 mbp. (Oilwatch, 2003a)

Así, mientras los organismos financieros internacionales proponen a los países latinoamericanos acabar con los subsidios a las empresas paraestatales y privatizar el estratégico sector petrolero para hacer frente a sus obligaciones con la banca internacional, lo que obligaría a importar los derivados del petróleo a precios del mercado internacional, en los Estados Unidos hay un subsidio de alrededor de 32 mil millones de dólares anuales a los combustibles fósiles. En ese país no solamente están subsidiados el gas y la electricidad sino que toda la actividad ligada a los combustibles fósiles tiene subsidios.¹²⁸ Así, las estrategias estadounidenses para la disminución de su propia vulnerabilidad en el campo energético —en 1997 consume 846,500 toneladas, una cantidad superior al doble de su producción de 320,000 toneladas— no se restringen exclusivamente a un intenso desarrollo tecnológico de los métodos de exploración, explotación, refinamiento, petroquímica, transporte y almacenamiento por medio del mayor sistema mundial de tanques, complementado por un sistema de grutas subterráneas para el almacenamiento, sino que también recurren a las alianzas estratégicas con las empresas petroleras. Además, las empresas se han con los principales grupos financieros de su país, siendo el Chase Manhattan Bank el principal accionista de Exxon, Chevron, y Mobil Oil; Morgan Guarantee es el principal accionista de Mobil Oil, así como el segundo más importante de Exxon y de la parte de

¹²⁸ Algunos de los Subsidios en EE.UU. relacionados con los combustibles fósiles son: **Fondos Inmediatos para Gastos de Exploración y Producción** mediante el que los productores de petróleo, gas y carbón pueden solicitar casi todos los fondos para su producción; **Permiso de Reducción de Porcentajes para Petróleo y Gas**, con el que las compañías de petróleo y gas pueden descontar un 15% de sus ingresos por ventas utilizando un permiso especial de reducción y pagar menos impuestos; **Apoyo empresarial para el Fondo Pulmón Negro**, que son fondos de apoyo gubernamental para pagar las discapacidades laborales de los mineros del carbón; **Costos Intangibles de Perforación**, por el que las compañías petroleras y de gas pueden descontar inmediatamente un 70% de los costos "intangibles" de perforación; **Pérdida de Pasivos para Petróleo y Gas**, que es una fórmula para recuperar el dinero de las pérdidas de las empresas; **Crédito no-Convencional para la Producción de combustibles**, que es un fondo que en sus inicios tenía el fin de dar incentivos para el desarrollo de fuentes alternativas al petróleo, pero hoy la mayoría de créditos han ido a parar a la producción de petróleo y gas; **No pago de Impuestos para recuperar la producción de petróleo**, subsidio para promover la producción y recuperación del petróleo difícil de extraer y de yacimientos altamente costosos; **Programa de Producción Limpia del Carbón**, programa de subsidios que ayuda a financiar a las compañías privadas para que desarrollen tecnologías más limpias en la quema de carbón otorgándoles hasta un 50% en fondos federales mixtos; **Coal R&D**, que son los subsidios del Departamento de Energía que apoyan la investigación en programas tecnológicos para la producción, refinamiento y combustión de productos con carbón; **Otros R&D de Energías Fósiles**, mediante el que el gobierno federal otorga subsidios para investigación y desarrollo de petróleo y gas natural; **Préstamos de Bancos de Desarrollo Multilaterales para Combustibles Fósiles**, con los que el gobierno federal de Estados Unidos apoya a bancos de desarrollo multilaterales, los cuales dan préstamos para la extracción de combustibles fósiles en otros países; **Garantías bancarias para la Exportación Importación de Combustibles fósiles**, con el que el Banco de Exportaciones e Importaciones otorga garantías de préstamos bancarios para inversiones en países inestables. Una porción de estos préstamos son utilizados para el desarrollo de combustibles fósiles; **Tratamiento de Ganancias de Capital provenientes de regalías sobre Carbón**, por el cual los dueños individuales (al contrario que las corporaciones), que arriendan sus derechos de minería de carbón pueden pagar impuestos a la renta sobre estas regalías en vez del nivel más alto de ganancia individual; **Exoneración de impuesto a la Renta para Utilidades Públicas**, con el que las utilidades y cooperativas públicas que utilizan combustibles fósiles no están sujetas al impuesto sobre la renta; **Servicio de Préstamos para Utilidades Rurales**, con el que el Gobierno Federal otorga préstamos a bajo interés para cooperativas de electrificación rural. Estas cooperativas han invertido fuertemente en plantas energéticas que funcionan con combustibles fósiles; **Exoneración de Impuestos para Bonos de Utilidades Públicas**, mediante el que las Utilidades Públicas pueden usar bonos exentos de impuestos. Una porción significativa de estas utilidades han invertido en fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles. (Oilwatch, 2003b)

Chevron que pertenecía a Gulf Oil y Union Oil of California. Citibank es el principal accionista de Arco Philips Petroleum, Conoco, Getty Oil y Exxon. (Martínez, 2003b:25)

Estados Unidos se apoya en las fusiones de las empresas para la reestructuración de los mercados regionales y la apropiación de las reservas naturales e industrias energéticas. El gobierno de los Estados Unidos y sus empresas no concuerdan con la reactivación de la OPEP, organismo al cual ya habían debilitado desde los años ochenta, cuando la producción masiva de los pozos del Mar del Norte y de México hizo echar atrás su unidad y rebajar los precios y cuando los préstamos condicionados del FMI comprometieron el petróleo de los países latinoamericanos. La debilidad de la OPEP es la fortaleza de las petroleras del mundo industrializado: en estos últimos años de cuasi inactividad del único organismo petrolero internacional, Shell surgió como la empresa rectora, seguida por la British Petroleum, pues Texaco y Amoco cayeron bajo la influencia de estas dos; la estadounidense Exxon adquirió Mobil rehaciendo la antigua Standard Oil. Las siete hermanas del dominio del petróleo en el mundo (Exxon, Mobil, Texaco, Gulf, Chevron, British Petroleum y Shell-Royal Dutch) se redujeron en la práctica a cuatro, rodeadas de empresas menores que hoy trabajan en todo el mundo bajo la hegemonía de las cuatro poderosas. Esta es la principal estrategia de los Estados Unidos en América Latina a la que considera como el único bloque seguro económica y militarmente hablando y a la que de unos años para acá ha presionado para aumentar la producción petrolera.

La riqueza petrolera latinoamericana está ubicada principalmente en el sureste terrestre y marítimo de México, en la cuenca del Orinoco, el Golfo de Venezuela y el norte de Colombia, aunque a estas zonas habría que añadir cinco grandes complejos petroleros ubicados en Ecuador, Bolivia, (desde el centro del país hasta la frontera sur con Argentina), y las regiones del Neuquén, Negro y la Patagonia en Argentina, así como los yacimientos conocidos y subexplorados de la cuenca del Amazonas y los yacimientos conocidos del sur de Brasil en la cuenca de Campos, desde Salvador hasta cerca de Recife, y la región que va desde Natal hasta Fortaleza. Finalmente habría que tener en cuenta las enormes cuencas brasileñas subexploradas y de frontera en la cuenca del río Paraná, la cuenca del Maranhao (Parnaíba) en el nordeste brasileño y la cuenca Falkland en las disputadas islas Malvinas (Márquez, 2003:15).

Una década después de la Guerra del Golfo, el 40% de las importaciones de petróleo para los Estados Unidos proceden de América Latina, y de Sudamérica, de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela es el primer productor latinoamericano de crudo, con 3,1 millones de barriles diarios y consiguió desplazar en 1997 a Arabia Saudita como el primer proveedor de crudo a los Estados Unidos, con 1.3 millones de barriles diarios, equivalente a un 42% de sus exportaciones. La producción colombiana de hidrocarburos era, en 1997, de unos 700.000 b/d. En 1999 casi se alcanzaron los

800.000 bdp y para 2005 se espera llegar hasta los 1,5 millones de bdp. De esta producción, el 65% se exporta para los Estados Unidos. En 1997 las reservas de crudo colombiano ascendían a 3 500 millones, pero Ecopetrol hace todos los esfuerzos por alcanzar, en 2001, unas reservas por valor de 13.500 millones de barriles. Se calcula que los Estados Unidos importa más petróleo desde Colombia, Ecuador y Venezuela que desde los países del Golfo Pérsico unidos. (Poleo, 2003:58)

A decir de los expertos, se espera que el consumo de petróleo en los Estados Unidos crezca otros cinco millones de barriles por día en los próximos 20 años por lo que más de la mitad de ese petróleo tendrá que venir de fuentes extranjeras. (Klare, *Op. Cit.*:59) Esas cantidades fácilmente podrían obtenerse en los países del Golfo Pérsico pero los estrategas estadounidenses se resisten a que crezca la dependencia de su país hacia esa región. Así, buscan vendedores más accesibles y Venezuela, Colombia y Ecuador entran en ese marco pues, en cuanto al control de petróleo en Sudamérica, las pinzas del gobierno estadounidense se cierran en tres frentes:

- 1) Del Golfo de Guayaquil en Ecuador hasta el Golfo de Panamá
- 2) Del Golfo de Venezuela (incluido el lago de Maracaibo y el petróleo llevado hasta ahí desde el noreste venezolano) hasta el Golfo de Darién, en las cercanías del Canal de Panamá y el proyecto del Canal del Golfo de Urabá.
- 3) Del Mar Caribe hasta el Golfo de México. (Jalife, 2000:46)

El petróleo de América del Sur ha cobrado mayor relevancia desde que Venezuela se ha posicionado como el principal abastecedor de Estados Unidos en la región. Mientras las reservas declaradas en el mundo alcanzan a 1.05 billones de barriles de petróleo convencional, 65% de los cuales están en el Medio Oriente, en la llamada Faja de Orinoco en Venezuela contiene 1.2 billones de barriles de crudos no convencionales. De ese total venezolano son posibles de extraer con métodos ya conocidos (reservas probables) 270 000 millones de barriles, un volumen semejante a las reservas sauditas de crudos livianos. (Márquez, *Ibidem*). Además de poseer reservas masivas de petróleo crudo en el cinturón petrolero del Orinoco, Venezuela tiene también petróleo en la cuenca del Maracaibo, depresión geográfica que se conecta con el Golfo de Venezuela en las cercanías de la frontera con Colombia. Venezuela se ha convertido convierte en la mayor y más probable exportadora de petróleo en el siglo XXI. El Departamento de Energía de Estados Unidos ha planteado en sus estimaciones que para el año 2025 Venezuela suministrará el 20 por ciento de las necesidades de petróleo que tiene esa sociedad. (Robles, 2003a:18) En la actualidad, el 60% de las exportaciones de crudo venezolano va dirigido a Estados Unidos, que a su vez, en cabeza la lista de inversión extranjera en Venezuela, con 85% del capital. (Martínez, 2004:57)

Antes de la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, la administración de William Clinton cerró un acuerdo por 30 billones de dólares para obtener una producción de 7 millones de barriles diarios a fin de depender menos de México y Medio Oriente y controlar más petróleo global a expensas del debilitamiento energético de sus enemigos Japón y Alemania. Ese acuerdo se ratificó hace pocos meses, unos días antes del referéndum para revocar a Hugo Chávez, con lo que se acordó llevar a cabo un ambicioso programa que subiría la producción a 6 millones de barriles diarios en el año 2006, apoyándose en contratos que estimularían la inversión privada en campos marginales y nuevas áreas de exploración y explotación, y asociaciones estratégicas. El gobierno chavista, bolivariano y todo, aceptó las condiciones de las petroleras estadounidenses.¹²⁹ De esta manera, la Faja del Orinoco fue dividida en cuatro zonas: Zuata, donde participa Conoco; Cerro Negro, donde está presente Exxon-Mobil; Machete, que Petróleos de Venezuela (PDVSA) comparte con Total-Fina-Elf y Statoil; y Hamaca, con Chevron-Texaco y Phillips. Para la exploración y explotación del gas, la llamada Plataforma Deltana fue dividida en cuatro bloques. El cuarto de ellos, con un estimado de producción de 38 mil millones de pies cúbicos, es explotado por PDVSA en alianza con Chevron-texaco y Statoil. (*Ibidem*)

El doble discurso de Hugo Chávez tampoco es una novedad: en mayo de 2003 junto con Álvaro Uribe, el presidente colombiano de la mano dura y el corazón abierto, anunció que se harían gestiones para impulsar proyectos de integración física entre ambos países financiados por la CAF y el BID y planeados en el marco de la IIRSA. Uno de los proyectos más ambiciosos incluye un gasoducto que conectaría a Colombia y Venezuela con Centroamérica y México, desde donde correría hasta los Estados Unidos. (Robles, 2003b:22)

En vista de la necesidad de recurrir a nuevos abastecedores de petróleo, una victoria militar en Colombia que elimine a los grupos guerrilleros y a la oposición nacionalista podría significarle a los Estados Unidos el control de una zona petrolera todavía no suficientemente explotada por esta presencia guerrillera. El petróleo colombiano está también en la mira del Plan Colombia¹³⁰. Colombia

¹²⁹ La revista mexicana Proceso publicó en agosto de 2004 en un reportaje denominado "Negocios Inconfesables" los nexos entre el gobierno venezolano y las petroleras estadounidenses con motivo del referéndum del 15 de agosto. En él se puede leer que Petróleos de Venezuela (PDVSA) mantiene asociaciones estratégicas con más de 200 compañías extranjeras entre las que destacan Exxon, Enron, Amoco, Conoco y Chevron-Texaco, todas norteamericanas y que el gobierno de Chávez, a través de PDVSA, advierte que "la presencia de Chevron Texaco en Venezuela indica que nuestra relación con los Estados Unidos es histórica y profunda. Aspiramos a que nuestra relación comercial con Estados Unidos tenga la misma dinámica positiva en lo político, en lo social y en todos los demás órdenes" (Martínez, *Op. Cit.*:57)

¹³⁰ El Plan Colombia, un plan de intervención militar en ese país andino financiado con dinero norteamericano, no sería el primero de injerencia estadounidense en Colombia. Privado por los Estados Unidos del territorio que actualmente se llama Panamá, Colombia consistentemente se opuso a hacer concesiones petroleras hasta después de la muerte de T. Roosevelt en 1919. El país fue entonces un blanco clásico de la diplomacia del dólar. En 1924 el gobierno nacionalista logró restringir el control de los estadounidenses sobre la economía retractándose del título de la Gulf Oil para explotar ricos campos petroleros concedido bajo la Concesión Barco. La potencia norteaña amenazó a Colombia y el Departamento de Comercio empezó a hacer publicidad contra los préstamos a Colombia. Presionado para negociar, el gobierno colombiano se ablandó,

es un enorme campo para la búsqueda de hidrocarburos. Las zonas de petróleo ocupan una superficie aproximada de 65 mil km². Además, la zona a la que el Plan Colombia está llevando la guerra —los departamentos de Caquetá y Putumayo, colindantes con Ecuador, otro país productor de petróleo— tiene otro interés: según los cálculos aquí se encuentran las mayores reservas petroleras y desde hace ya varios años existen proyectos de explotación petrolífera para esa región que no han podido realizarse porque ese territorio ha estado en control de las FARC en las últimas décadas. Tanto el avance de los paramilitares de Carlos Castaño —claramente implicados en el negocio del narcotráfico y muy curiosamente no contemplados en las acciones militares del Plan Colombia— como el del ejército nacional colombiano ha tenido aquí desde la llegada a la presidencia del ideólogo de la legalización de los cuerpos civiles armados en Colombia, el presidente Álvaro Uribe.

Además del sur de Colombia, también hay petróleo en Arauca, departamento selvático y lejano de los puertos, cercano a la frontera con Venezuela, donde está instalada la Occidental Petroleum y donde se encuentra el prolífico Caño Limón¹³¹; en Saravena, donde opera Intercol, filial de la EXXON; en Cusiaga y Cusiana en el departamento de Casanare, cercano también a Venezuela donde se dice que están algunas de las más grandes reservas de petróleo en el hemisferio occidental y donde la fase de intensa exploración ha llevado a considerar los descubrimientos en estos campos como los más importantes desde el descubrimiento de los pozos de Alaska; en Villaviga donde junto con ECOPETROL¹³² han trabajado Exxon, Occidental Petroleum, Houston Oil, ELF Aquitaine Colombie y Shell; en la región del Golfo de Urabá, donde Occidental Petroleum tiene un contrato para explorar un millón de hectáreas; en Samoré, en el Norte de Santander, donde los una reservación de los indígenas U'wa se oponen a las operaciones de la OXYCOL en lo que ellos consideran su tierra ancestral.¹³³

llegó a un acuerdo favorable con Gulf y rápidamente recibió un préstamo del National City Bank. Desde entonces no ha vuelto a haber oposición a los diseños de las petroleras norteamericanas.

¹³¹ En febrero de 2002, el presidente George Bush solicitó al Congreso de su país 98 mdd para entrenar y dotar una fuerza militar colombiana que protegiera el oleoducto Caño Limón-Coveñas que sólo en el 2001 fue blanco de 170 ataques rebeldes con explosivos.

¹³² Colombia ofrece condiciones atractivas a la inversión foránea mediante el sistema de asociación entre ECOPETROL, compañía estatal y las compañías privadas. El contrato de asociación estipula que cuando la empresa asociada ha corrido el riesgo de exploración y el yacimiento ha sido declarado comercialmente explotable, la empresa estatal participa con el 50% de la inversión. Así, en la etapa de desarrollo, el Estado empieza a percibir el 60% del crudo extraído. Si el pozo o el campo no es productivo o la empresa asociada no encuentra crudo, asume sola los gastos.

¹³³ Un conflicto potencial para la industria del petróleo se desarrolla alrededor de la actividad que Occidental Petroleum Corp. pretende realizar en las llanuras colombianas. La exploración en Samoré ha enfrentado fuertes resistencias desde 1991, cuando OXYCOL adquirió los derechos. Los U'wa temen los efectos sociales y ambientales adversos similares a los que ellos ven en Caño Limón, donde también hay un megaproyecto de la OXY, en el Departamento de Arauca, donde los blancos de ataque de la guerrilla (los pozos) son algo común. Este territorio de los U'wa fue finalmente concesionado a la Occidental Petroleum, de la cual es socio Al Gore, Vicepresidente estadounidense en funciones cuando se elaboró y aprobó el Plan Colombia. Las acciones de Al Gore pertenecieron primero a su padre, el senador Gore, quien hace años compró un paquete de acciones con valor de 500 mil dólares de la compañía petrolera en cuestión.

Así pues, uno de los objetivos previstos en la intervención norteamericana en Colombia a través del Plan Colombia es proteger a uno de los más extensos yacimientos de petróleo en el hemisferio occidental. En los últimos cinco años, la producción de petróleo en Colombia creció aproximadamente un 78% y la mayor parte va a los Estados Unidos. (Klare, 2000) Este país sudamericano es el séptimo suministrador más grande de petróleo al país del norte. Las reservas petroleras de Colombia no son comparables a las de Venezuela pero son muy importantes y hasta ahora han sido cuidadosamente reservadas para un mejor momento que parece haber llegado en la medida en que los últimos gobiernos —desde Samper hasta Uribe— han acabado con todas las defensas legales del país frente al saqueo transnacional¹³⁴. Entre 1999 y 2000 ECOPEPETROL repartió el territorio colombiano entre transnacionales como la Chevron y la Occidental estadounidenses, la inglesa British Petroleum, algunas canadienses, la española Repsol y la Hocol.

Puesto que sus intereses económicos estaban en juego, las petroleras estadounidenses, especialmente la Occidental Petroleum y la BP Amoco, estuvieron muy activas en la elaboración y aprobación del Plan Colombia. Uno de sus mayores logros fue una enmienda en dicho plan que da prioridad en Colombia a la inversión extranjera y que a la letra dice “el gobierno colombiano debe completar las reformas urgentes destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y al comercio exterior, particularmente a la industria petrolera” (Vaicius, 2003:12) De Wine, el mismo senador que ideó el Plan Colombia, fue muy enfático al afirmar que la necesidad de proteger los intereses petroleros en Venezuela y Colombia justificaba la ayuda a Colombia, con cual concordó con la visión del vicepresidente de la Occidental Petroleum quien afirmó que necesitaba duplicar la acción del Plan Colombia en el Norte de Santander —frontera con Venezuela— donde está la explotación petrolera del Catatumbo y la perforación de Gibraltar, en territorio U’wa. (Poruban, 1999:21)

Las diez primeras empresas petroleras privadas a nivel mundial están presentes en Colombia. Algunas de estas empresas han estado involucradas en graves violaciones a los derechos humanos y en actividades paramilitares, a través del pago de servicios de seguridad privados, que los países de sus matrices han ya tomado medidas¹³⁵. Muchas compañías petroleras plantean de manera formal que el Estado pueda solicitar que los actores privados aumenten o reembolsen los costos de seguridad o pueda

¹³⁴ En Colombia se eliminó la norma que estaba en las dos últimas constituciones y que fue ratificada en 1991, la cual permitía la expropiación sin indemnización por razones de equidad cuando el país hubiera sido estafado. Con el gobierno de Samper, las transnacionales Texas y Shell lograron que un contrato de hidrocarburos no se revirtiera a ECOPEPETROL en la fecha fijada y se prorrogara. Así, se ha ido modificando el sistema de contratación, cambiando el sistema de asociación 50 y que eleva la participación de las transnacionales, autorizando disminuciones de regalías y modificando contratos ya firmados a favor de las empresas extranjeras.

¹³⁵ Es el caso de la British Petroleum, compañía inglesa que se fusionó con la AMOCO norteamericana para dar paso a la tercera empresa petrolera en el mundo, que cuenta con el respaldo de los gobiernos de los Estados Unidos y Reino Unido en sus actividades en Colombia.

solicitar que guardias privados de seguridad estén armados y asuman la primera responsabilidad en cuanto a seguridad. Al contratar seguridad privada las empresas petroleras estadounidenses, su gobierno mata tres pájaros de un solo tiro: suministra seguridad a la empresa, combate a los grupos guerrilleros y al mismo tiempo introduce entrenadores militares privados para el gobierno del país receptor.

El caso de Ecuador no es tan diferente al de Colombia y Venezuela con relación a la participación de las transnacionales del petróleo. En este pequeño territorio de tan solo 286 560 km², explotan el petróleo y el gas de diez empresas además de la estatal Petroecuador: AEC, PERENCO, AGIP, CNPC AMAZON, Occidental, Repsol YPF, PETROBRAS, CGC, Burlington, Encana-Ecuador, Tripetrol y Texaco. (Tirado, 2004:57) En este país andino el 74% de las reservas petroleras están en campos manejados por Petroecuador, la empresa estatal en alianza con transnacionales. El porcentaje restante, que es el del petróleo menos comercial, lo explota sólo Petroecuador. (*Ibidem*) A diferencia de algunas de las mayores empresas petroleras estatales, aquélla surge mediante la llamada “Ley 45” de 1989, con un organigrama más bien corporativo basado en la existencia de una matriz, tres empresas filiales permanentes llamados Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial, y tres filiales temporales (Oleoducto, Petroamazonas y Petropenínsula). (Gordillo, 2003:244).

La apertura petrolera a las inversiones extranjeras en el petróleo manejado por Petroecuador en esta nación amazónica que venía de 1985, cuando el sector se abrió a las corporaciones transnacionales en sectores estratégicos, continúa en 1992, cuando la compañía estatal fue despojada de su status de autonomía, lo que configuró el primer paso para su desmantelamiento gradual. El gobierno de Ecuador dispuso que Petroecuador entregara al Ministerio de Finanzas todas sus ganancias, siendo éste el que le asigna los recursos para mantenimiento, operaciones y demás gastos. Como ya no se asignaban recursos, la empresa empezaba a ser asfixiada; en cambio, se estableció que las transnacionales sólo pagaran un porcentaje al Estado por sus actividades de comercialización en el país que no llegaba al 18% de sus ganancias. En 1994 se crearon los contratos de participación donde se establecía que el Estado tomaría un porcentaje neto definido del total de la producción establecida en el contrato. Así, la participación del Estado fluctúa hasta la actualidad entre el 12 y el 30% de las ganancias. Este mismo año el Congreso aprobó una reforma mediante la cual se podía sacar a licitación los campos petroleros más grandes de Petroecuador, ubicados en la región amazónica.

El tiro de gracia a esta compañía estatal ocurrió desde el interior de la empresa, cuando en mayo del 2000, sin ninguna base jurídica que pudiera darle soporte legal, creó un nuevo modelo contractual llamado “Alianzas Operativas” y entregó sin licitación y en forma directa cuatro campos petroleros de oriente al sector privado. El conflicto petrolero fue muy sintomático de la forma de hacer

privatizaciones en América Latina; la táctica gubernamental fue hábilmente ejecutada: promovió la salida de Petroecuador del sector nacionalista del ejército y del sindicato petrolero y de esa manera precipitó la reacción de un gremio que se había caracterizado por su tenaz defensa de los intereses ecuatorianos frente a las corporaciones transnacionales. Contribuyó además, en alianza con los sectores empresariales y los medios de comunicación, a crear una imagen falsa muy negativa de la huelga y logró derrotarla. Más aún, desactivó el Paro de la Unión Nacional de Educadores y dio marcha atrás en el anuncio del alza del precio del gas para de esa manera aislar a los trabajadores petroleros. (Moreano, 2003:2). Al final, consiguió privatizar los prolíficos campos de Oriente.

Pocos años después, en el 2000, el gobierno ecuatoriano autorizó la construcción del OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) como vía para privatizar el transporte de crudo, idea que, por cierto, está contemplada en los planes de la IIRSA para ejecutar en otros países. Este oleoducto ecuatoriano nos puede dar una idea más o menos clara de que la participación privada en obras de este tipo no siempre es lo más conveniente para el Estado. La construcción del OCP para transportar crudo pesado fue el primero de los proyectos bipartitas en concretarse en Ecuador. Para hacer realidad este proyecto fue necesario realizar reformas jurídicas que se concretaron en la emisión de las denominadas leyes Trole 1 y Trole 2, que a través de varias modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, legalizó el transporte de un recurso estratégico como es el petróleo en manos privadas. El camino para consolidar la construcción del OCP en el año 2000 ya estaba preparándose un año antes cuando el entonces Ministro de Energía y Minas, Ing. René Ortiz, sin capacidad legal firmó en marzo un memorando de entendimiento para la construcción de un nuevo oleoducto junto con cinco transnacionales petroleras que son ahora miembros del consorcio que operará el OCP por 20 años.

Para convencer a la opinión pública de la necesidad de construir esta gran obra de más de 1100 millones de dólares¹³⁶ que corre 503 km paralelos al antiguo ducto y lleva el petróleo de Sucumbíos, Nueva Loja al Puerto de Esmeraldas en el Pacífico, se utilizaron varios argumentos. Los más fuertes y convincentes fueron que el país contaba con grandes reservas de crudo pesado y que estaba perdiendo mucho dinero en las mezclas de crudo. A cuatro años de estos acontecimientos y una vez terminada la construcción del OCP se revela que no existe la suficiente cantidad de crudo pesado en el país y que la mezcla de crudos no es exclusiva de la fase de transporte, por lo que será necesario otro tipo de tubería desde el SOTE, el viejo Oleoducto transecuatoriano construido hace más de 30 años por la Gulf y Texaco, a la Estación Amazonas, donde inicia el OCP. La construcción del OCP implicó nuevas

¹³⁶ Estudiosos del petróleo en Ecuador afirman que calculando un precio exagerado, el tubo no hubiera costado más de 700 millones de dólares, por lo que se sospecha que el resto —400 millones de dólares— era el sobreprecio a ser recuperado por

asignaciones para las concesiones petroleras; la exploración de nuevos bloques y de nuevos campos dentro de los bloques; la sobreexplotación de los pozos petroleros existentes; nuevas exploraciones financiadas exclusivamente por Petroecuador; y nuevos contratos con la empresa estatal.

Ahora que ya está construido el oleoducto y que se han percatado de que no se cuenta con el volumen necesario de crudo pesado para llenarlo, los funcionarios de gobierno del ya depuesto Lucio Gutiérrez, el autonominado ‘General del cambio’, acudieron a los mismos argumentos para convencer a la opinión pública de la necesidad de abrir la frontera petrolera, que implica más concesiones, para llenar el flamante tubo vacío. De acuerdo a esa lógica, ahora se pretende privatizar los campos manejados por la empresa nacional. A decir de Esperanza Martínez, en el Ecuador, la apertura petrolera, la construcción del OCP, el estrangulamiento de la empresa nacional, son caminos que se han construido para garantizar la fuga de los recursos naturales a grandes ritmos y cantidades. (Martínez, 2002:6), pues la propuesta de la construcción del OCP estuvo acompañada de una política petrolera aplicada en el Ecuador desde el año 2000 que tenía como objetivo duplicar la producción petrolera de 400,000 a 800,000 barriles por día, hasta el año 2005.

Amén de estas proposiciones, el gobierno lanzó en 2003 la propuesta de privatización de los campos petroleros de Shushufindi, Auca, Lago Agrio y Culebra-Yulebra, que se presenta cuando dos eventos importantes en materia petrolera en Ecuador eran noticia: la revuelta contra el plan oficial de exportar gas a Estados Unidos vía transnacionales en Bolivia y el juicio a la Chevron Texaco¹³⁷. Como si eso no fuera suficiente y dado que las empresas petroleras que operan en Ecuador gozan de una serie de preferencias y exoneraciones —reciben del 81.5 al 87.5% de la producción diaria de los yacimientos de petróleo mientras el Estado recibe una parte residual; no pagan regalías al Estado; no pagan primas de entrada ni aportes en obras de compensación; no pagan aranceles en las importaciones de bienes de capital; no pagan aranceles en las exportaciones de petróleo; no pagan impuestos por el movimiento de capitales; y pagan el 15% del impuesto sobre la renta y no el 25%—, el ex Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, tomó la decisión de que el Estado ecuatoriano asumiera los “pasivos ambientales” de

los constructores por la vía de las tarifas de transporte de su propio crudo sobre los cuales no pagan IVA por utilizar un transporte terrestre. (Acosta, 2001:23)

¹³⁷ El caso del juicio de la Texaco en Ecuador ha sido uno de los más sonados de los últimos años. Se acusa a esa compañía norteamericana de haber provocado perjuicios en sus zonas de exploración y producción en las actuales provincias de Sucumbios, Orellana y Pastaza en la Amazonia. Además, ha afectado en el trayecto de sus tuberías, que van de la Amazonia a la costa atravesando los Andes, por los continuos derrames. Desde el inicio de sus actividades en 1964 y a través de sus 28 años de presencia en el Ecuador, Texaco produjo aproximadamente 1 500 millones de barriles, perforó 339 pozos, desechó 5 millones de galones de aguas contaminadas cada día, quemó 10 millones de pies cúbicos de gas diarios, derramó 16.8 millones de galones de petróleo. Como es de suponerse, la demanda se interpuso en Estados Unidos, no en Ecuador, en la Corte Federal de NW York en noviembre de 2003 y exigen 1 500 millones de dólares por reposición de daños. El tipo de juicio es una de los llamados “Acción de Clase”, donde los 19 demandantes nombrados y los 62 adicionales representan a una clase de pobladores no nombrados que se encuentran afectados de forma similar. (Alerta Verde, 1999:2)

los campos petroleros que opera ahora Petroecuador pero que estuvieron en manos de la Texaco hasta 1992, con el fin de que esos campos se entregaran a la empresa privada limpios de problemas.

No es fortuito que esas decisiones presidenciales ocurrieran cuando se iniciaban las negociaciones con los Estados Unidos para eliminar para la firma del Tratado de Libre Comercio bilateral Estados Unidos–Ecuador. Manifestando su intención de hacerse cargo de toda la remediación de los campos contaminados por Texaco, el gobierno debilitó la demanda legal, le quitó responsabilidad a Texaco y contribuyó a la impunidad ambiental. Mientras tanto, en el noreste de Ecuador, Texaco Petroleum sigue operando y opinando a través de los voceros gubernamentales estadounidense, quienes están seriamente preocupados por las insurgencias regionales y el desorden social que priva en Ecuador. Además, esta compañía petrolera está muy preocupada y temerosa por la ruptura del orden social de la región sureña de Colombia que colinda con Ecuador.¹³⁸

El caso del gas natural no es muy distinto al del petróleo y también está incluido tanto en los planes de Estados Unidos como en los de la IIRSA. Considerado menos contaminante que el petróleo pero sin dejar de ser un hidrocarburo, el gas natural es otro de los energéticos más codiciados en la actualidad. El gas natural está definido como la porción de petróleo que existe en los yacimientos en fase gaseosa o en solución en el aceite y que en condiciones atmosféricas permanece en fase gaseosa. Puede incluir algunas impurezas que no son hidrocarburos como ácido sulfhídrico (SO³), nitrógeno o dióxido de carbono pero entre más puro es mejor. (Secretaría de Energía, 2002:9)

Estados Unidos produce el 24.5% del gas mundial pero consume el 28.7%. Ante la posibilidad de una crisis en la extracción de petróleo barato¹³⁹ y ante la alternativa que ofrece el gas natural, este país se ha esforzado por acaparar este recurso. En América del Sur las mayores reservas de gas natural se encuentran en Bolivia y Venezuela, pero es este primer país el que mayor importancia ha adquirido por la cantidad de gas que posee, por un lado, y por los recientes acontecimientos que impidieron la exportación de gas boliviano hacia Chile, por el otro. Resulta así imperativo controlar este recurso

¹³⁸ Esta preocupación no es nueva; ya desde 1999 un reporte de la Junta Militar ecuatoriana recomendó medidas especiales para proteger las inversiones petroleras estadounidenses contra las guerrillas colombianas.

¹³⁹ Según un dossier publicado en 1998 en la Revista Scientific America, la producción global de petróleo empezará a declinar más pronto de lo que mucha gente cree; probablemente dentro de los próximos 10 años. La publicación afirma que mientras la experiencia de la crisis energética de los setenta concientizó al mundo industrial de su dependencia de petróleo crudo barato —en 1973 el mundo había consumido sólo alrededor de un octavo de su monto de petróleo crudo de fácil acceso—, la guerra del Golfo recordó la dependencia de la producción de petróleo de una sola región: el Medio oriente. Sin embargo, dicen, la próxima crisis petrolera no será tan temporal pues mediante distintos tipos análisis del descubrimiento y producción de los campos petroleros en el mundo, han llegado a la conclusión de que dentro de la próxima década el suministro de petróleo convencional será incapaz de soportar la demanda. Sus analistas sugieren que desde una perspectiva económica no es tan relevante que el petróleo se agote sino el momento en el que la producción empiece a disminuir pues los precios se van a disparar a menos que la demanda decline, lo cual parece poco probable. Concluyen así que la caída empezará antes del 2010, pues alrededor del 80% del petróleo producido actualmente fluye de los campos que fueron encontrados antes de 1973 y la producción de la mayoría de ellos está decayendo. (Campbell y Laherrère, 1998:65)

antes de que la situación política se vuelva más convulsa y la IIRSA, según vimos en el capítulo anterior, tiene puestas sus mayores expectativas en los gasoductos bolivianos, que además de permitir el suministro a Brasil, mediante una triangulación con México hagan posible la llegada del combustible a los Estados Unidos.

Históricamente los combustibles fósiles bolivianos han tenido como principal destinatario a Brasil. Los convenios con este país se remiten al año 1938, ocasión en que Brasil logra la firma de un tratado de concesiones petroleras, criticadas como peligrosas porque abrían la puerta para favorecer el retorno de la Standard Oil norteamericana con el camuflaje de los capitales privados brasileños. Más aún, en ese momento Brasil es acusado de instigar el separatismo del departamento de Santa Cruz, donde se encuentran los hidrocarburos, ardid de que se valieron las trasnacionales para evitar las concesiones petroleras de competidores en Bolivia. Sin embargo, años después Brasil se desliga del negocio con las trasnacionales y consolida su empresa paraestatal PETROBRAS, mientras que Bolivia deja la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB) en manos de la Gulf en el año 1957. (Orgaz, 2004:146)

De esta forma se inicia un conflicto entre la petrolera estadounidense y la brasileña por la reivindicación de los acuerdos de 1938. Este conflicto terminó en 1958 con la firma de los acuerdos de Raboré, donde se establece la disminución del 60% del área de trabajo de PETROBRAS y con el compromiso de Bolivia de vender a Brasil el gas natural que se descubra en el área B de las concesiones, así como autorizar la construcción de un gasoducto cuando los niveles de producción y reservas así lo justifiquen. Ese Acuerdo constituye el primer intento de vender el gas sin cuantificar las reservas ni planificar su utilización al interior de Bolivia. Por esa misma época, la poderosa empresa norteamericana Bechtel¹⁴⁰ encomienda a la Tenesse Gas el estudio del primer gasoducto al Brasil, que tendría una capacidad transporte de 500 millones de pies cúbicos al día.

El primer contrato de venta de gas natural a Brasil se firmó en 1993. El segundo y más importante se firmó en 1994. Sin embargo fueron muchos los cambios introducidos en desmedro de los intereses del país boliviano siendo uno de los más negativos la inclusión de la empresa norteamericana

¹⁴⁰ Bechtel es una compañía de ingeniería y construcción que tiene más de un siglo de experiencia trabajando en la construcción de infraestructura. Sus oficinas centrales están en San Francisco. En 1993 tuvieron ganancias por más de 16.3 mil millones de dólares y han sido el contratista número uno seis años seguidos en los Estados Unidos. Construyen carreteras y sistemas de rieles, puertos y aeropuertos, plantas de energía nuclear y de combustibles fósiles, refinerías y plantas petroquímicas, minas y fundidoras, bases militares e instalaciones espaciales, proyectos de limpieza del medio ambiente, redes de telecomunicaciones, gasoductos y oleoductos e instalaciones para campos petroleros y de gas. En 106 años de existencia han construido 22 000 proyectos en más de 140 países; 85 mil km de oleoductos y gasoductos, 420 plantas de combustibles fósiles, 27,500 km de carreteras, 150 plantas nucleares, 10,000 km de ferrovías, 375 proyectos de petroquímica y petroquímica, 350 minas y proyectos con metales y 50,000 sitios de telecomunicación. Cabe decir que en los países andinos esta empresa goza de una gran presencia.

ENRON en el negocio, incluida bajo el argumento de la necesidad de recapitalización de la YPFB. Después vino la rebaja de precios acordada por el gobierno de Banzer a favor de Brasil. El presidente brasileño Henrique Cardoso llegó a Bolivia en julio de 2001 para firmar un acuerdo económico de 23 puntos que significaba más gas a menor precio. En este convenio Brasil logra una rebaja del precio del gas en un 10% y a cambio demanda diez millones de pies cúbicos diarios adicionales a los 30 millones contratados, a partir del año de 2003. Banzer se compromete a bajar los precios del gas a cambio de mayores volúmenes de venta y de la apertura de mercados brasileños a productos energéticos con valor agregado. Además, se acuerda el financiamiento de la carretera asfaltada Santa Cruz-Puerto Suárez-Corumbá, la construcción de una petroquímica y una hidroeléctrica para vender energía eléctrica a Brasil y el compromiso de Brasil y Bolivia para la consolidación del área de Libre Comercio entre el Mercosur y la CAN. (Orgaz, *Op. Cit*:213)

TRANSREDES, empresa controlada por ENRON y Shell, logró un beneficio neto del convenio al firmar un millonario contrato de transporte de gas a Brasil que ampliaría el ducto de forma paralela al gasoducto existente para conectarlo con el Pozo San Alberto en Bolivia. Por su lado, PETROBRAS consiguió un acuerdo para la construcción de un ducto que conectaría los pozos San Alberto y San Antonio con Río Grande para aumentar el volumen de exportación al vecino país. De este modo, PETROBRAS monopolizó la industria energética integrada del gas en Bolivia y acaparó el mercado brasileño. Es decir, PETROBRAS produce gas, lo transporta, lo comercializa y lo compra en la frontera. Sin embargo, no es una empresa brasileña la que construye los ductos sino una norteamericana. Sin embargo, no es el único negocio relacionado con el gas donde las empresas estadounidenses están presentes. En julio de 2001 se informa oficialmente en Bolivia que el consorcio Pacific LNG está listo para vender gas a los Estados Unidos a través de territorio chileno y mexicano. Este consorcio lo integrarían las petroleras más importantes del mundo: Repsol-YPF, British Gas, British Petroleum y Total Fina Elf. Durante la presentación del mega-proyecto se anunció la exportación de gas y la inversión de cerca de 5 000 millones de dólares en la instalación de una planta de licuefacción y en la construcción de un gasoducto para unir los campos de Tarija y el Puerto chileno. (Mariaca, *Op. Cit*)

De acuerdo con Enrique Mariaca, que es ex presidente de YPFB y ex Ministro de Hidrocarburos además de ser el Presidente del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional en Bolivia, el desabastecimiento de energía eléctrica que se produjo a mediados de 2001 en California, Estados Unidos, se atribuye a fallas en el suministro del gas natural que alimenta las generadoras termoeléctricas que llevaron al aumento en el precio de este combustible. A raíz de la quiebra fraudulenta de ENRON en diciembre de 2001, se descubrió que una de sus operaciones corruptas

consistió en urdir la crisis de suministro eléctrico en California. ENRON compró energía eléctrica a 23 dólares el MW para trasladar al estado de Oregon mientras que de regreso a California vendía la energía en 137 dólares. De esta forma, estafó con 71 000 millones de dólares al estado de California.

En conocimiento de la crisis energética en California, que alertó sobre el caos que se podría producir en caso de que fallara el suministro, el consorcio Repsol YPF, British Petroleum y British Gas se interesó en resolver la crisis por lo que elaboró un proyecto basado en el suministro de gas natural boliviano del Campo Margarita en Tarija utilizando la tecnología LNG (Liquid Natural Gas). Cabe decir que ese proyecto sirvió de base para firmar un pre acuerdo de suministro de hasta 22 millones de metros cúbicos de gas con la empresa Sempra Energy de California.

A su vez, PEMEX de México manifestó su deseo de adquirir en Bolivia determinados volúmenes de gas natural. De esta manera, el proyecto de ingeniería para transportar el gas boliviano a Estados Unidos, que además está contemplado en los planes de financiamiento de la IIRSA, queda de la siguiente manera: primero, se construiría un gasoducto de 42 pulgadas entre el Campo Margarita y el puerto marítimo de Mejillones en Chile, que en total mediría 720 km de longitud; después, se construiría una Planta de Licuefacción en dicho puerto; el tercer paso sería el transporte del gas en los barcos denominados ‘metaneros’ hasta un puerto mexicano cerca de Ensenada, Baja California, hasta donde se recorrerían 6 720 km; en cuarto lugar se construiría una planta de regasificación en el puerto de arribo, en México; finalmente, se construirán gasoductos para transportarlo hacia el mercauo mexicano y el estadounidense. Se estima que el proyecto total costaría 7 mil millones de dólares. (*Ibid*:13)

El embajador norteamericano en Bolivia expresó en julio de 2003 que la exportación del recurso a California dependerá del precio y las garantías para cubrir las necesidades del mercado energético californiano pues Estados Unidos “tiene mucho que escoger”. (*Orgaz, Op. Cit*:216) Sin embargo, el embajador no decía la verdad pues su país no tiene mucho de donde escoger, por lo menos en América Latina: Venezuela, su principal fuente de petróleo no puede venderle gas porque sólo tiene 20 Tpc¹⁴¹ de gas libre no asociado al petróleo; México, estado petrolero, también necesita gas¹⁴²; Perú sólo tiene 12 Tpc y Argentina apenas lo suficiente para su mercado interno.(*Poleo, 2001*:38) Si bienes estos países cuentan con grandes reservas de gas, en unos casos la exportación de crudo y en otros sus requerimientos internos los descartan como exportadores netos.

¹⁴¹Tpc significa Trillón de pies cúbicos. 1 metro cúbico es igual a 35.32 pies cúbicos.

¹⁴²México empieza a sufrir un déficit en el suministro propio y se habla de que para dentro de 10 años tendría que importar alrededor de 3 000 MMpcd (millón de pies cúbicos). (*Mariaca, Op. Cit*)

Por otra parte el tiempo de vida medio de los yacimientos hidrocarburíferos de los Estados Unidos es de 10 años, cuando en el mundo es de 62 años para el gas natural —Rusia tiene las mayores reservas—y 41 años para el petróleo. (*Ibidem*) Es decir, los Estados Unidos tendrán en los próximos años necesidades energéticas insalvables con su propia producción. No es casual que sea el país importador más grande del mundo y la crisis energética que padece resulta insostenible para muchos de sus estados, sobre todo los que aplican las más estrictas regulaciones respecto al mercado y al uso de energía, lo que restringe notablemente las formas de importación de los distintos tipos de energía. El volumen que actualmente el consorcio citado pretende exportar sólo cubriría el 4% de lo que California proyecta importar en los próximos años. (Mariaca, *Op. Cit.*) O sea, sólo California necesita una fabulosa cantidad de recursos energéticos de países como Bolivia.

Los problemas que tienen los Estados Unidos en Bolivia son PETROBRAS, propiedad de Brasil, que es la empresa estatal más importante de Sudamérica, y las empresas británicas que operan en la región actualmente. PETROBRAS negocia constantemente con todas las empresas que operan en Bolivia y sus influencias se sienten a escala regional y continental. En Bolivia controla directa e indirectamente la mayor cantidad de reservas de gas del país y proyecta la construcción de otro gasoducto vía Paraguay para alimentar la energía gasífera al sur de Brasil. Las otras empresas transnacionales como la española Repsol YPF y las británicas British Gas y Petroleum y Total, han conformado Pacific LNG, consorcio que, como se vio, gestiona la exportación del gas al mercado norteamericano bajo el esquema de la capitalización. De este modo, el gas boliviano se convirtió en parte de las reservas del Cartel Petrolero Mundial, lo que significa que Pacific LNG irá regulando precios, producción y comercialización conforme a las contrataciones económicas y necesidades sistémicas del capitalismo mundial, de las cuotas de producción asignadas por los intereses petroleros mundiales y las demandas energéticas de los Estados Unidos, que probablemente tenga el suministro asegurado pero a final de cuentas no participa en gran medida del negocio.

Pero hay más combustibles estratégicos en la región andina y amazónica, además del petróleo y el gas. Un combustible fósil que pasa inadvertido en la mayor parte de los análisis sobre geopolítica de la energía es el carbón mineral. Este tipo de carbón es un combustible sólido de color marrón o negro que contiene esencialmente carbono y en pequeñas cantidades hidrógeno, oxígeno, azufre y otros. Proviene de la degradación durante un largo periodo de organismos vegetales y su importancia radica en su capacidad calorífica, que es muy alta, y en su costo, que es muy bajo con relación al del petróleo y el del gas.

El carbón cubre alrededor del 25% de la demanda energética mundial, situándose todavía como la segunda fuente primaria, solamente despuntada por el petróleo, pero sobrepasando al gas natural, a la

energía nuclear y a la hidroelectricidad. El consumo mundial del carbón aumentó en un 6.9% en el 2003; para 2004 hubo un incremento motivado por la intensificación de la demanda china, que subió en más del 15%. Los mayores depósitos de carbón están en América del Norte, Rusia y China. Sin embargo, el problema para las compañías que utilizan carbón en sus plantas generadoras de energía es que los costos ambientales en los países desarrollados por la explotación del carbón son muy altos, sumado a las restricciones de la utilización de determinados químicos. Son conocidos los casos de empresas multadas por las emisiones anuales de óxido de nitrógeno y de dióxido sulfúrico, debido a que ambas sustancias pueden causar enfermedades respiratorias graves. Al quemar el carbón se liberan grandes cantidades de gases responsables de efectos tan nocivos como la lluvia ácida, el calentamiento global y la formación de smog.

Hay que tener en cuenta que sólo en los Estados Unidos el 56% de la energía comercial generada se produce con base en el carbón mineral (Appenzeller, 2004a:94) aun cuando este combustible es altamente contaminante y cuando otros países desarrollados están intentando crear energía limpia para cumplir las condiciones del Protocolo de Kyoto, el cual Estados Unidos se niega a firmar¹⁴³. El uso indiscriminado del carbón en Estados Unidos se basa en un criterio meramente económico: a diferencia del petróleo y el gas, el carbón es abundante en su territorio, lo cual lo convierte en la opción más barata para generar energía eléctrica. Sin embargo, aunque sea un combustible no deficitario, tanto en los planes de la política exterior norteamericana como en los de la IIRSA, el control sobre la propiedad y la comercialización del carbón mineral resulta prioritario, sobre todo en el caso de Venezuela, donde se piensa desarrollar el complejo carbonífero del noroeste.

Según CORPOZULIA, empresa estatal venezolana dentro de las que funcionan CARBOZULIA y CARBONES DEL GUASARE empresas del carbón, el 92% del carbón mineral de este país va hacia Estados Unidos (57%) y Europa (35%). (Corpozulia, *Op. Cit:*3) A diferencia de Colombia, su más cercano competidor, que obtiene 24 millones de toneladas de carbón al año, si en Venezuela se explotara al máximo nivel este recurso, se podrían obtener 70 millones de toneladas al año sólo de la región del Guasare, cuenca situada al oeste del lago de Maracaibo, donde hay cálculos que hablan de producir más de 2 100 millones de toneladas durante 30 años en las minas a cielo abierto. Contando las reservas de las minas profundas se aseguraría la producción hasta por 200 años. (*Ibidem*) .

Como las regulaciones ambientales son más estrictas en los países desarrollados, resulta más fácil y barato extraerlo de fuentes externas como Venezuela, donde sólo en el Guasare están 96% de las

¹⁴³ Estados Unidos ha venido desdeñando la firma de este Protocolo argumentando un problema de costos. Sin embargo, aun cuando se siguiera al pie de la letra lo acordado en Kyoto, apenas si se retrasaría en mínima medida el aumento de los gases

reservas nacionales del carbón. En este país las empresas trasnacionales que ahí operan no pagan daños ambientales, tienen mano de obra barata y se llevan un carbón de excelente calidad, sin tantos residuos de azufre. Los estrategas de los Estados Unidos están particularmente interesados en el carbón de esta región de Venezuela —también hay depósitos de carbón en el nororiente venezolano pero ni son tan abundantes y de buena calidad ni quedan tan cerca— por una razón económica y de logística: el carbón producido en el oeste de ese país es más barato que el producido en el este, donde además las restricciones de azufre, el costo de producción más elevado y las decisiones legales para reducir la creación de energía eléctrica con base en el carbón mineral han reducido el incentivo para incrementar capacidad de producción de ese combustible. Este hecho le da ventajas a los productores de carbón de Colombia y Venezuela por la cercanía que tienen con la costa este de los Estados Unidos y por la calidad de su carbón. Además, si la legislación federal, los estados de la Costa Atlántica de los Estados Unidos tendrían que aumentar sus importaciones de carbón provenientes de esos países sudamericanos.

Pero para lograr el incremento en la producción de carbón en Venezuela que permitiría el aumento de las exportaciones, el gobierno bolivariano asegura que es necesario el desarrollo de un sistema ferrocarril-puerto que se localice en el Golfo de Venezuela, ya que permitiría “una mayor competitividad al disminuir sustancialmente los costos de transporte y embarque y a la vez, un menor flete para el transporte del carbón hacia puertos en el exterior” (*Ibid*:53). Por eso, el macro-proyecto del eje de desarrollo occidental, inscrito en la IIRSA según se vio en el capítulo anterior cuando se habló del eje del Escudo Guayanés, incluye la construcción de Puerto América y el desarrollo de puertos gabarreros que además deberán ser complementados con carreteras adecuadas.

Según la CAF, sólo se aprobarían a Venezuela los créditos para la ampliación y mejoramiento de las vías carreteras “si se desarrolla un puerto de aguas profundas en el Golfo de Venezuela (para) el establecimiento de un intenso desarrollo minero a lo largo del piedemonte de la Sierra de Perijá, o (para) la intensificación de la explotación de minerales localizados en el estado Táchira, de Venezuela, y en el departamento del norte de Santander, de Colombia”. (CAF, 2000:25) A decir de esta corporación, un puerto en el Golfo de Venezuela propiciaría también la construcción de ferrocarriles que “partiendo de la población de Cúcuta, en Colombia, y pasando por la población de la Fría, en Venezuela, se dirijan hacia puertos en el sur del lago de Maracaibo o puertos localizados en el Golfo de Venezuela”. (*Ibidem*) Es evidente que los créditos para la construcción de vías más útiles para los pobladores de esa región de Venezuela están condicionados a la construcción del Puerto América.

de efecto invernadero, que son producidos por la ignición de los combustibles fósiles y que aumentan el volumen del carbono en la atmósfera.

Puerto América ha sido concebido como un puerto multimodal ubicado en la Bahía de San Carlos¹⁴⁴, en la Isla de San Bernardo situada e la boca del Lago de Maracaibo, que incluye una terminal carbonera construida en tres emplazamientos de 12, 24 y 34 millones de toneladas de capacidad de embarque de carbón y que daría lugar al acceso de buques de gran capacidad, lo cual permitiría, a decir de sus promotores gubernamentales, que Venezuela pueda participar activamente en el comercio internacional del carbón. Sin embargo, de construirse este Puerto, las compañías estatales venezolanas no serían las únicas que explotarían el carbón ni las únicas beneficiadas de la construcción de un complejo sistema infraestructural a cuenta del Estado venezolano y sus contribuyentes, que son quienes a final de cuentas pagan los créditos que otorgan la CAF y el BID. Ante lo que se presenta como uno de los más grandes negocios después del petróleo en Venezuela, el ministerio del Medio Ambiente ya ha entregado permisos para la explotación carbonífera a las transnacionales del carbón Anglo American Coal, Rag Coal del Grupo Trapo; Inter. American Coal Holding, N.V/Trans-Coal, Excel, Tomen, Trans Mar Coal, KTK Minería y Carbonífera Caño Seco. (García, 2004)

Puerto América es un proyecto que tomó auge en el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez y que el gobierno bolivariano nacionalista ha retomado¹⁴⁵. A pesar de que los gobiernos nacional y estatal lo presentan como un proyecto esencial para el desarrollo, parece más bien un negocio redondo para las compañías trasnacionales de la construcción, primero, a quienes se concesionaría el proyecto dado que se trataría de un puerto equiparable a los más modernos del mundo, y a las del carbón, después, ya que sin ser partícipes de los costos que generaría la construcción de un complejo carbonífero en Venezuela que incluiría el mencionado puerto, vías de ferrocarril y carretera, sí serían partícipes de las ganancias.

Pero más allá de las significaciones geopolíticas de la construcción de Puerto América encontramos las implicaciones ecológicas y sociales. No sólo se acabaría con toda la flora y la fauna de la Bahía de San Carlos debido a la salinización de las aguas dulces del lago, sino que una mayor explotación del carbón en esta zona, mayor objetivo por el que se construiría el puerto, alteraría el equilibrio climático regional. Los territorios susceptibles de explotación dentro de las concesiones otorgadas están situados justamente al lado de los ríos Maché, Cachirí y Guasare que actualmente alimentan las represas de Manuelote y Tulé, de donde se lleva el agua potable a Maracaibo. Si los residuos industriales se desalojan en esos ríos, que es lo más probable, los perjuicios al agua serán irreversibles. Esta agua irá cargada de materiales muy tóxicos, como metales pesados y productos

¹⁴⁴ Esta bahía divide las aguas dulces del Golfo de Maracaibo de las aguas saladas del Golfo de Venezuela, lo que la convierte en un lugar geoestratégico.

químicos usados en la minería que no sólo resultan nocivos para la salud humana sino para todo el ecosistema, sin contar con el aumento en los desechos de bióxido de carbono que contribuirán al calentamiento global del planeta. Además de eso, a pesar de que los estudios gubernamentales afirmen que en la Isla de San Bernarndo no vive nadie, de construirse ese puerto, 40 mil personas perderían su empleo, asociado a la pesca. El desarrollo del carbón en la Sierra del Perijá también terminaría por exterminar al grupo indígena barí que desde hace décadas viene sufriendo la pérdida de su territorio y de su población ante el avance de las empresas carboneras.

Sin embargo, la construcción de Puerto América es prioritaria para la IIRSA pues está muy ligada a la geoestrategia estadounidense en América Latina: la explotación del carbón en el Guasare y la salida del producto por el Golfo de Venezuela se sumaría al hecho de que el noreste colombiano y su Guajira quedarían también vinculados al sureste de Estados Unidos por la Vía Alternativa al Puente sobre el Lago de Maracaibo y Puerto América. Además, los productos peruanos y ecuatorianos que salen por el Atlántico hacia la costa oeste de Estados Unidos bien podrían salir por esta vía, pasando por el Canal de Panamá o por un canal alternativo, hacia la costa este del país norteamericano. Y no sólo eso: sería factible también que las mercancías conosureñas y brasileñas que salen por el Pacífico pudieran salir desde Venezuela hacia la costa este norteamericana.

d) LAS RIQUEZAS DE LA AMAZONIA

La Cuenca del Amazonas o Amazonia¹⁴⁶ es la región que comprende los territorios bañados por el río Amazonas, el más caudaloso del mundo, y sus afluentes. Como ya se apuntó con anterioridad, el río Amazonas nace en los Andes de Perú y atraviesa Brasil. Tiene unos 6 500 km de largo, su anchura algunas veces sobrepasa los 6 km y cuenta con más 7 mil ríos tributarios por donde corren más de 6 mil billones de metros cúbicos de agua por segundo. Así, su caudal lleva más agua que el Nilo, el Mississippi y el Río Amarillo unidos. En su primer tramo, el Amazonas recibe el nombre de Marañón y cerca de su desembocadura en el Atlántico, se abre en numerosos brazos, entre los cuales forma diversas islas. La Amazonia recicla más de la mitad del agua que circula en el ecosistema regional, que

¹⁴⁵ Se tiene noticia de que antes de ser presidente, Hugo Chávez dijo que la construcción de Puerto América era una traición a la patria.

¹⁴⁶ Hay que distinguir entre *Amazonia* —denominación utilizada al interior de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que sirve para designar a los territorios de sus países que se localizan dentro de la cuenca amazónica— y *Amazonia*, —que fonéticamente equivaldría a “amazónia”— nombre de la cuenca del río Amazonas.

contiene más del 20% del agua dulce del planeta, capta más de 50 millones de toneladas de oxígeno y contiene buena parte de las especies conocidas en el mundo.

En la actualidad, la mayoría de las aéreas deshabitadas en esta región presentan aún algunas posibilidades para el descubrimiento y la explotación de petróleo, minerales y otros valiosos recursos naturales. En la hoya amazónica se pueden encontrar grandes depósitos de carbón, hierro, cobre, aluminio, estaño, plata, bauxita, berilio y tungsteno, todos ellos metales importantes para la producción industrial. En la parte de Bolivia hay también manganeso, mercurio, antimonio, cromo, níquel, zinc y molibdeno. Por eso se dice en esta región que comparten Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Guyana, Surinam y Colombia, existen cuatro de las materias principales para la economía —y la vida— del tercer milenio: el oxígeno (la amazonía produce más del 40% del oxígeno del mundo); la biodiversidad; los combustibles fósiles (el petróleo y el gas) y el agua dulce (casi el 30% del agua dulce renovable está en América Latina y la mayor parte en la Amazonia). (Cabieses, 2002:14) Así pues, otro objetivo geopolítico de los Estados Unidos en Sudamérica estratégico que subyace en los proyectos de la IIRSA es controlar la Amazonia, región con uno de los ecosistemas más ricos y diversos de la tierra, considerada en los medios científicos como el territorio donde está el futuro de la humanidad debido a sus grandes reservas de agua, flora, fauna, hidrocarburos y minerales.

Con sus con aproximadamente 7 millones 160 mil km², la grandeza del territorio amazónico no ha sido ignorada por los estrategas internacionales, especialmente por los de lo Estados Unidos, que tampoco dejan de advertir que de ese total de territorio más de la tercera parte (1'800.000 kilómetros cuadrados) es una gran extensión completamente plana fundamental para desarrollar industrias agrícolas y pecuarias intensivas en capital y tecnología y poco intensivas en mano de obra y muy rica en agua potable subterránea, hecho que facilitaría su extracción e interconexión a través de extensos ríos navegables que van del Pacífico al Atlántico. Reserva productora de oxígeno y con 365 días al año de producción continua de energía solar que garantizan fotosíntesis perenne, ideal para cultivos de largo ciclo, aprovechamiento de fuentes alternativas de energía y por tanto para variadas expresiones agrícolas, se proyecta además como un territorio estratégico para la producción de alimentos, principalmente frutas, peces y ganado y para la exploración biogenética ya que en la Amazonia se encuentran dos de los bancos naturales de reservas genéticas más biodiversos del planeta, los territorios del Pantanal Brasileño y el corredor “Chocó Bio-Pacífico”.

Los intentos estadounidenses por controlar el territorio amazónico no son inéditos ni recientes y si bien no estuvieron acompañados del elemento militar no fueron menos intervencionistas. Durante su gobierno, Theodore Roosevelt, revelando una amplia y profunda visión geopolítica, determinó en un decreto presidencial la creación de la *National Conservation Comission* (NCC), un organismo que tenía

la tarea de hacer una investigación de las reservas naturales norteamericanas necesarias para asegurar el pleno desarrollo económico del país y de estudiar las reservas de materias primas de los países vecinos, buscando asegurarse el control de las mismas. Uno de los principales objetivos de la NCC fue la Amazonia (Schilling, 1978:162). Entre 1904 y 1914, la Fundación Rockefeller proyectó la gran misión de conquista del que llamaban “exótico paraíso selvático” del Amazonas. (Gómez, *Op. Cit.*:7) que terminó con el establecimiento de la industria frutícola y del caucho en la zona. En la década del 30 del siglo XX hubo un intento más de avanzar en la ocupación del territorio: cientos de misiones evangelizadoras aparecieron en busca de la salvación de este centro de impiedad latinoamericano, inundando de extranjeros colonos los paganos campos amazónicos. En 1937 inicia una expedición a los Nascas, en el Tiahuanaco, que termina en 1939 con la propuesta por parte de la misión investigadora de crear la Compañía de Fomento Venezolana, antecesora de la CAF, dedicada a la exploración de la Amazonia para su posible explotación. Abastecedora de carbón, caucho y alimentos durante la Segunda Guerra Mundial, la Amazonia se convierte en objeto de grandes inversiones para la explotación de sus recursos.

El Instituto Nacional Indígena, la Fundación Interamericana de Educación, el Instituto Lingüístico de Verano y el Consejo de Investigaciones Sociales, todos financiados por los Estados Unidos, fueron unas de las tantas organizaciones que en la década del 40 continuaron la estrategia de expansión social y cultural de los intereses estadounidenses sobre este territorio. La inquietud por la superpoblación de los países andinos en los años 50 y 60, que inició una fuerte campaña de control natal tuvo por objeto reducir la población indígena amazónica pues el programa principal incluía la esterilización de hombres y mujeres de varios grupos indígenas. En los mismos años de la Alianza para el Progreso se realizó también la Operación Auca, que en la amazonía ecuatoriano-peruana inauguró la conquista por el petróleo en esas tierras, hoy extendida a los Llanos Orientales colombianos y el territorio venezolano¹⁴⁷.

Junto a todas estas acciones no se pueden olvidar los programas de investigación y extensión agrícola de financiamiento norteamericano como la Corporación Internacional de Economías Básicas (International Basic Economies Corporation, IBEC), que en 1954 inunda los campos de Minas Gerais, Goias, São Paulo y Paraná en Brasil para delimitar la hoy conocida Isla Continental Brasileña¹⁴⁸; el Centro Especializado de Investigaciones en Fruticultura en Petrolina (Brasil); el Instituto de la Hileia

¹⁴⁷ Sobre los intentos de ocupación de la Amazonia por parte de los Estados Unidos léase Jean Soublin, *Histoire de l'Amazonie*, Ed. Payot e Rivages, Paris, 2000, 338 pp. y Mariano Cuesta, *La Amazonia: primeras expediciones*, Ed. Banco Santander, Madrid, 1993, 337 pp.

Amazónica; el Centro de Investigaciones en Agricultura Tropical (CIAT, en Palmira, Colombia), especializado en estudios de maíz, algodón y yuca; los Centros de Estudios y Bancos de Semillas en el Tacna peruano; los Observatorios de Energía Electromagnética (cerca de 44 en los años 50), en el sur del Perú; y las intenciones norteamericanas para la construcción de Interconexiones Ferroviarias de Corumbá a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia en 1956.

En 1966 se registró una nueva tentativa de acaparar la Amazonia. Esta vez estuvo protagonizada por el Hudson Institute de Estados Unidos, dirigido por Hermann Kahn, el famoso futurólogo. Según él, casi 4/5 partes de América del Sur se encuadraban en la clasificación de “país C”, o sea, áreas poco aprovechadas económicamente, del tipo *frontera*, generalmente ocupadas sólo por guarniciones militares. Según Kahn, esos espacios vacíos deberían ser sometidos al control de organismos militares. El Hudson llegó a divulgar varias publicaciones con sus proyectos de ingeniería para el que llamaba “continente de reserva” entre los que se destacaban los relativos a los “grandes lagos”, que objetivaban la interconexión de las cuencas del Amazonas y del Plata. El lago del Amazonas, que debería cubrir una extensión de 240 000 km² de territorio brasileño y generar entre 60 y 70 millones de kW, potencial diez veces superior al de las grandes hidroeléctricas del mundo, fue planificado por los técnicos de este instituto. (Schilling, *Op. Cit.*:178) Otro de los grandes lagos estaba previsto para la provincia boliviana de Santa Cruz de la Sierra, con sus enormes yacimientos de hierro, petróleo y gas natural. Casualmente, los proyectos de Hudson se ubican en las áreas potencialmente más ricas del continente. Además, se contemplaba que las inversiones de esos proyectos fabulosos serían norteamericanas, siendo el capital de esta nacionalidad el beneficiario directo de la explotación. Finalmente, el plan fracasó.

A lo anterior se deben agregar los dos últimos intentos ‘pacíficos’ para acercarse a los recursos de los territorios amazónicos: la construcción de los corredores intermodales en el Centro, Norte y Noroeste del Brasil así como el montaje de una gran Red Fluvial Suramericana ya antes explicada a detalle, que uniría el Atlántico con el Pacífico desde la desembocadura del río Amazonas (Belém do Pará, Brasil) hasta Puerto Asís, en la parte navegable del río Putumayo (Colombia), para llegar finalmente por tierra al puerto de Tumaco en el Pacífico, junto con la hidrovía que conecta las costas venezolanas (Delta del Orinoco) con el río de La Plata (Argentina, Uruguay), ambos proyectos después incluidos en la IIRSA.

De mano de la construcción de un gran sistema infraestructural y fluvial a lo largo del Amazonas y el Orinoco y sus afluentes promovida por la IIRSA que permita la movilidad de

¹⁴⁸ La Isla Continental Brasileña es el territorio de aproximadamente 1 800 000 kilómetros cuadrados que ocupa gran parte del territorio amazónico brasileño y que se extiende desde el centro hacia el suroeste y noreste de este gran país sudamericano.

mercancías así como la generación de energía eléctrica, está también la necesidad de controlar una de las zonas con mayor cantidad de depósitos de agua potable en el mundo que posee gran riqueza como reservorio de aguas subterráneas. Si se considera que los grandes conflictos del futuro, al igual que las alianzas políticas e intereses compartidos, se expresarán en torno al control y posesión del agua, la propiedad e información biogenética y las telecomunicaciones, veremos la importancia y real dimensión de los grandes reservorios de agua de la Amazonia.

El agua dulce y potable es indispensable para una amplia variedad de actividades humanas pero existe en cantidad limitada. El agua es absolutamente esencial para la salud y la supervivencia humana: para beber, para la higiene y la salubridad y para la producción de alimentos. Según el Banco Mundial, la cantidad mínima diaria que necesita un ser humano para vivir en un buen estado de salud es de 100 a 200 litros pero si se suma esta fracción a la de la necesidad total que incluye el agua utilizada en la agricultura, la industria y la generación de energía, se llega a los 1 000 metros cúbicos por persona al año (The World Bank, 1994:11). Si vemos las cifras globales sobre el consumo de agua, en Estados Unidos un habitante promedio consume cada año 2 300 metros cúbicos; a su vez, la Unión Europea más Japón consumen 900 metros cúbicos, según datos calculados con base en el uso doméstico y consumo diario de productos industriales cuyo procesamiento demanda agua (papel, plásticos, alimentos, electricidad, refrigeración). En India, en cambio, el 93% del agua que se utiliza es destinada para regar los campos y producir alimentos. (*Ibidem*)

Aunque el 70% de la superficie terrestre esté ocupada por el agua, la mayoría es salada; la proporción de agua dulce es de sólo 3%. De ésta, aproximadamente las dos terceras partes se hallan inmobilizadas en los glaciares y en los casquetes de hielo de los polos y parte del resto está oculta en forma de humedad del suelo y acuíferos subterráneos. En consecuencia, la población humana accede a menos del 1% de la existencia del agua dulce o aproximadamente 0.01 % de toda la que contiene el planeta. Y de ésta sólo 12 500 km³ de los 110 000 km³ de agua dulce de las precipitaciones que caen en un año, son las que tenemos disponibles como recurso renovable para consumo humano, riego y otros usos esenciales. (Klare, 2001:143)

En marzo de 2003, en el III Foro Mundial del Agua en Kyoto, se dijo que para el 2025 dos tercios de la población mundial deberán enfrentar el déficit de agua limpia. (Chérrez, 2003:10) De acuerdo a Klare, en el 2050 la demanda de agua se acercaría al 100% del suministro disponible. Así, a medida que la escasez de materias primas cruciales aumente en frecuencia e intensidad será más fuerte la competencia por el acceso a los recursos restantes de esos bienes. (Klare, *Op. Cit.*:159-160) Sin embargo el agua no se va a acabar al mismo tiempo en todos los sitios del planeta. La cuenca amazónica no tendría problemas en el futuro próximo ya uno solo de sus ríos, el Amazonas, representa

aproximadamente un 16% de la escorrentía¹⁴⁹ anual del mundo mientras otras zonas tan sólo reciben el 2% de la misma pero constituyen el 40% de la superficie no sumergida y alojan aproximadamente la quinta parte de la población mundial. (*Ibid*:145)

Así, se puede afirmar que el agua será motivo de disputas, aunque se sepa bien que los grupos humanos siempre han tendido a asentarse cerca de lugares donde hay fuentes naturales de agua dulce y que las disputas por el agua no son una novedad en la historia. Durante siglos las guerras han estado unidas a la defensa y a la destrucción de los sistemas de conducción de agua pero ahora, a comienzos del siglo XXI, el conflicto por el aprovisionamiento hídrico es un peligro siempre latente. Además de los factores normales, intervienen otros para aumentar la exacerbación y frecuencia de las disputas alrededor del agua en años venideros pues la población aumenta y las sociedades necesitan más agua tanto para el consumo humano como para la producción de alimentos. La rápida urbanización y el creciente consumo de agua para los procesos industriales también disparan el crecimiento de la demanda. El cambio climático altera aún más la ecuación del abastecimiento del agua: a medida que se acumulan en la atmósfera los gases causantes del efecto invernadero, las temperaturas medias aumentarán en todo el mundo, lo que cambiará la frecuencia y la intensidad de las lluvias. Así, aunque no es forzoso que la escasez conduzca necesariamente al conflicto armado, sí lo hace más factible.

Como en los últimos años importantes voceros de la comunidad científica han dado a conocer a la opinión pública internacional que el agua dulce, proveedora del agua utilizada para uso doméstico e industrial se está acabando, el agua se ha vuelto un recurso natural altamente codiciado entre las grandes potencias. Puesto que en la Cuenca del Amazonas existen las mayores reservas de agua dulce en el planeta —almacena cerca del 25% del agua fresca mundial— ésta se ha convertido en un blanco ineludible de las estrategias de Estados Unidos.

Si bien es cierto que a lo largo de la historia ha sido una fuente de conflictos y ambiciones en torno a dos asuntos principales —la fluvialidad, es decir, el control de los ríos y de sus cuencas con sus afluentes y la bioceanidad la capacidad de tener acceso a dos océanos— y que durante los siglos XIX y XX, fue objeto de disputas entre Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Francia dejando bien claro su papel en la geopolítica regional, no lo es menos que este río y sus afluentes serán objeto de disputa geopolítica en los próximos años no sólo entre los países que posean territorio en la zona sino entre otros como Estados Unidos, Francia, y Rusia, que en fechas recientes soltaron la tesis de que la Amazonia, al ser el pulmón del mundo y patrimonio natural de la humanidad, y al estar mal

¹⁴⁹ La escorrentía es el agua que se origina como precipitación sobre la tierra y luego se escurre por la misma hasta llegar a los ríos, corrientes y lagos, llegando finalmente a los océanos, mares interiores o acuíferos, a menos que primero se evapore.

protegida por los latinos, debe ser controlada por sus fuerzas armadas. La gran cantidad de recursos hídricos que posee la cuenca amazónica de ninguna manera es desdeñada en los planes de política exterior de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos. Tan sólo el llamado 'Acuífero Guarani', el más importante de la región y que se reconoce como el acuífero más grande del mundo tiene una extensión de alrededor de 1,190,000 (más de la mitad de la superficie total de México, que es de 1 972 550 km²).¹⁵⁰ (CAF, *Op. Cit.*:13)

Sin embargo, aunque la IIRSA se presenta como el instrumento más factible para el control del reservorio más grande agua dulce en el mundo en el mediano plazo, lo cierto es que Estados Unidos y sus transnacionales intentan desde ahora que la crisis no es tan evidente, acaparar la propiedad sobre tan elemental recurso cuya escasez lo puede volver una mercancía muy cara. Las corporaciones transnacionales del agua están empezando a presionar para conseguir la privatización del líquido en los países latinoamericanos. Como una gran cantidad de agua dulce se destina a fines industriales, las transnacionales están interesadas en prestar el servicio de suministro a este sector en especial. Entre las industrias que más consumen en América Latina se encuentran la Coca Cola, las del sector de la minería metálica, la agroindustria, las plantaciones forestales, entre otras. (Chérrez, *Op. Cit.*:11)

Entre 1990 y 1995 el BM y el BID dieron 21 préstamos a países subdesarrollados en los que condicionaba la entrega del dinero a la privatización del agua. Entre 1996 y 2002 el número aumentó a 61. Ecuador es un ejemplo de esto: en julio de 1997 este país andino se endeudó con el BID con un préstamo de 40 millones de dólares para sentar las bases de la privatización del agua de Guayaquil, con la que se beneficiaría la empresa Interagua, subsidiaria de la International Water Group of Netherlands y Bechtel, empresa responsable de la guerra del agua en Bolivia y que recibió enormes beneficios de la invasión de Estados Unidos en Irak¹⁵¹, además de ser la empresa de agua más grande de Estados Unidos. Global Water Partnership, especie de organización que asocia a empresas que prestan el servicio privado de suministro de agua y alcantarillado, ha venido haciendo una campaña en los países

La porción de escorrentía de la cual puede dependerse año tras año y fácilmente aprovechada por el hombre se denomina escorrentía estable.

¹⁵⁰ El Acuífero Guarani, la mayor reserva mundial de agua dulce del planeta, ya comienza a ser privatizado. De acuerdo a información dada por el Movimiento de los Sin Tierra, Nestlé compró las fuentes en el municipio de Armazén, estado de Sta. Catarina, en Brasil y Coca Cola está posicionándose en Paraguay. Durante el régimen de Henrique Cardoso en Brasil se entregó al Banco Mundial la coordinación de los estudios sobre el Acuífero Guarani, el más grande del planeta, con el detalle de que las informaciones no estarán ni a disposición del gobierno brasileño ni de los ciudadanos de Brasil. (Chérrez, *Op. Cit.*:10)

¹⁵¹ En Cochabamba, Bolivia, después que la distribución del agua potable fue concesionada a Bechtel, la tarifa mensual de agua subió 400%, de 5 a 20. Bechtel tuvo que salir de Bolivia pero demandó por 25 millones de dólares a Cochabamba por las oportunidades de ganancias no percibidas. Un año y medio después, tras la invasión a Irak, la administración Bush le otorgó como un contrato de \$680 millones para participar en la reconstrucción de Irak. En el directorio de Bechtel está George Schultz, que fue Secretario de Estado en el tiempo de Reagan, y acaba de ser nombrado Jefe del Comité para la Liberación de Irak.

sudamericanos en la que impulsa la explotación de los mercados de agua superficial y subterránea, la transferencia del agua —desde los usos de menor valor a los de mayor valor o rentabilidad— y las subastas públicas para ofertar el agua. Además, considera que “las reformas impopulares pero necesarias como el aumento de tarifas, la recolección de cuentas no pagadas, la reducción de la fuerza laboral, entre otras, deben ser realizados por el sector privado internacional”. (www.gwp.org, 2002)

Pero no sólo la posesión y comercialización del agua dulce que posee la cuenca amazónica interesa a Estados Unidos y a sus corporaciones transnacionales. La Amazonia es la primera reserva biótica terrestre del planeta; es la depositaria de la mayor extensión de bosques tropicales del planeta —hay más 20 mil especies de árboles— y de una gran variedad biológica de ecosistemas, especies y recursos genéticos, lo que la hace presa fácil de las ambiciones de las empresas dedicadas al desarrollo de la biotecnología¹⁵², que patentan y comercializan muchos de estos recursos genéticos vegetales y animales obligando a la humanidad a pagar por el uso de recursos que a todos nos pertenecen, o en todo caso, a ninguno de nosotros sino a la propia naturaleza. Tan sólo cinco empresas de biotecnología vegetal en el mundo (AstraZeneca, DuPont, Monsanto, Novartis, y Aventis) obtienen más del 60% del mercado de pesticidas; 23% del mercado de semillas y 100% del mercado de semillas transgénicas. (GASETC, 2001:ii-iv)

Desde hace varias décadas las grandes multinacionales de la biotecnología tienen puestos sus ojos en el control de algo vital para la reproducción de los pueblos del planeta: los alimentos, a los cuales “mejoran” y hacen más resistentes a las plagas. Una de las industrias más importante en este ramo, la Monsanto, es la proveedora de los principales químicos rociados sobre los cultivos ilícitos en la región andina. Pero Monsanto, empresa estadounidense, no sólo fabrica herbicidas —últimamente ha entrado en el campo de la manipulación genética¹⁵³— ni ha sido lo único que ha producido en el pasado. En la década de los setenta, desarrolló el agente naranja (defoliante) y el napalm (gelificador abrasivo) que Estados Unidos usó amplia e indiscriminadamente contra Vietnam. Desde ahí, Monsanto, apoyada con dinero público, está entre las empresas que tienen una alta capacidad de modificar bacterias, virus, hongos y otros organismos y convertirlos, además, en armas y entre las compañías con representantes en el gabinete de George Bush: poca gente sabe que Donald Rumsfeld, Secretario de

¹⁵² En términos generales la biotecnología se puede definir como el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales o animales. Es la aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, la cual involucra la manipulación deliberada de sus moléculas de DNA. (Knight, 2001b:155)

¹⁵³ Monsanto ha llegado al límite de patentar una semilla que esteriliza las simientes que produce, por lo que éstas no sirven para poder plantar al año siguiente, lo que obliga a los productores a comprar nuevas semillas. Esta semilla es denominada por los ecologistas como "terminator". También ha modificado una mala hierba que ahora produce plástico flexible. (Valente, 2001:132)

Defensa, antes de ser designado en ese cargo fue presidente y director ejecutivo de GD Searle & Co., multinacional farmacéutica que se fusionó con Monsanto.

La Amazonia es el mayor banco genético del mundo, la mayor fábrica mundial de productos farmacéuticos, bioquímicos y agronómicos y es la mayor fuente para el conocimiento del funcionamiento de los sistemas vivos y para la combinación de los genes en ellos contenidos, base de la ingeniería genética. El dominio del banco genético amazónico asociado a la reorganización del planeta y grandes bloques bajo la hegemonía de algunas potencias es otra de las raíces básicas de la presión sobre la Amazonia. Las investigaciones desarrolladas en el seno de la IIRSA, esos estudios de campo apoyados con información gubernamental sobre los recursos de los países involucrados, contienen un componente de bioprospección en alguna medida encubierto en un proyecto de “controles biológicos” y “sistemas productivos” para el mejor aprovechamiento agrícola de la cuenca amazónica que, en manos del gobierno norteamericano, apuntan también a la biopiratería. Washington pretende tener, a través de sus empresas, el monopolio sobre la biodiversidad mediante el control de las patentes sobre los recursos fitogenéticos.

La biodiversidad es hoy un ámbito clave de apropiación de la riqueza universal y por ello las áreas de reserva natural y los parques nacionales se van transformando en terreno de disputa bajo las leyes del mercado. Otra vez Ecuador, la primera economía dolarizada de la cuenca amazónica, sirve de ejemplo. En enero de 2004, el Decreto Ejecutivo 1186 del Reglamento General de Aplicación de la Ley del Turismo quitó potestades al Ministerio del Ambiente en cuanto al turismo en las 33 áreas protegidas así como en las capacidades de control, lo que facilita la entrada a esas zonas a operadoras transnacionales que no tienen que dar cuenta de sus actividades en zonas antes restringidas. Poco tiempo después, la embajadora de Estados Unidos en Ecuador condiciona el Tratado de Libre Comercio que se negocia con este país a la aprobación de la Ley de Biodiversidad, en cuyo proyecto hay artículos como el 29 que permiten al Ministerio del Ambiente “constituir derechos de uso y manejo sustentable para las áreas y los bienes y servicios del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales a favor de entidades públicas, privadas o mixtas a través de concesión, delegación y otras figuras legales” (Coffey, 2003:7) con lo que se daría un paso más a la privatización de las Áreas Protegidas y la biodiversidad.

Como si eso no fuera suficiente, en marzo de ese año hubo un paro en las Islas Galápagos por la decisión del Ministro del Ambiente, hoy ya fuera del gobierno, que aceptó romper el marco legal y los acuerdos provinciales a través de órganos participativos para la regulación de la pesca en la Reserva Marina al permitir la pesca intensiva y la pesca industrial desde la isla aun cuando existe el riesgo de destruir una reserva única en el mundo. Esta acción que no responde a los intereses legítimos de los pescadores y pobladores de las islas sino a la de las empresas pisciexportadoras, se suma la propuesta

del Ministerio del Ambiente para concesionar servicios ambientales a empresas nacionales o transnacionales a través de tres corporaciones: CORDELIM, que se encargaría de la captura de dióxido de carbono en áreas protegidas; CORPOBIO, que garantizaría la protección de la biodiversidad para luego vender derechos de acceso a empresas privadas; y CORFURE, que haría lo mismo con los bosques. (*Ibid*:6)

Sin embargo, esta penetración de las transnacionales en el territorio amazónico no sólo está ligada a las presiones ejercidas por el gobierno estadounidense a través de instrumentos comerciales, financieros o hasta militares hacia los gobiernos latinoamericanos; también está relacionada con la ausencia de planes regionales para la ocupación real de esta parte del continente. Todos los países amazónicos convergen en una problemática básica: la vulnerabilidad histórica de la Amazonia sudamericana. Este territorio que representa 1/20 de la superficie terrestre, 2/5 de América del Sur y 3/5 de Brasil además de contener, como ya se vio, 1/5 de la disponibilidad mundial de agua dulce y 1/3 de las reservas mundiales de selvas, aloja solamente a 3.5 milésimos de la población mundial. (Becker, 1999:3) Mientras los ideólogos de la IIRSA entendieron que el espacio y la posición en torno de la Amazonia son extremadamente atractivos pero al mismo tiempo poco accesibles, por lo que era necesario crear una infraestructura que permitiera su comunicación, los gobiernos de los países de la cuenca amazónica, algunos más que otros, obviaron este hecho hasta hace pocas décadas, lo que deviene facilitación del despojo del control sobre la tierra.

Sin duda Brasil es el país más adelantado en llevar a cabo el proyecto geopolítico de ocupación de la región. En 1964, con la llegada de los regímenes militares, la ocupación de la Amazonia se volvió una prioridad nacional por razones geopolíticas de orden interno y externo referidas a los objetivos de acumulación y de seguridad. No se quería que los recursos de la Amazonia sudamericana que las compañías transnacionales ya estaban explorando en los países vecinos fuesen capturados hacia la órbita del Pacífico y del Caribe. Se consideró que la frontera¹⁵⁴ amazónica debía expandirse. Por eso, la estrategia del gobierno para promover la modernización en tiempo rápido se apoyó en la imposición de una malla de doble control, técnico y político, de todo el territorio nacional. Para empezar, se superpuso la autoridad de los territorios federales sobre los estatales donde se había perdido el control a través de una campaña de construcción de carreteras, de colocación de tendidos eléctricos y de telecomunicaciones y de edificación de hidroeléctricas, acompañada de una política de colonización

¹⁵⁴ Cualquier clásico de la geopolítica puede dar fe de que la frontera es un espacio social y político que puede ser definido como un espacio **no siempre plenamente estructurado** y potencialmente generador de realidades nuevas. La frontera es para una nación un símbolo y hecho político de primera magnitud como espacio de proyección para el futuro. Sin ir más lejos: la frontera es susceptible de reconstruirse, no es una realidad fija.

dirigida como forma de proceder a la ocupación de un área y como una estrategia de distribución controlada de la tierra.

Con estas acciones se retiraba el control de la tierra de los gobiernos estatales en beneficio del gobierno central, se poblaba la frontera en áreas estratégicas y al mismo tiempo se creaban zonas de mano de obra local. Es ya sabido que la urbanización es una estrategia de ocupación que apela a la movilidad, lo que permite la atracción de migrantes hacia zonas poco pobladas dándoles acceso a la propiedad de la tierra y el inicio de la articulación de los antiguos y nuevos núcleos urbanos entre sí y con el mundo exterior. El caso más representativo de Brasil es el de Manaus, que en la actualidad es ya el más importante de la amazonia. Manaus está estratégicamente situado al norte del cauce de los ríos Solimoes y del Amazonas a lo largo de la faja fronteriza de 150 km de longitud con Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname y la Guyana francesa y mientras su territorio correspondía al 14% de su territorio nacional sólo contaba con el 1.2% de la población brasileña. (*Ibid*:23) En Manaus y en áreas aledañas además fueron instaladas bases militares de alta tecnología que actuaban en seis polos apoyados en núcleos urbanos y aéreos cuya principal orientación ha sido desde entonces garantizar la presencia estratégica y la movilidad táctica de la Fuerzas Armadas en el control socio-económico-militar de una región tan importante para el control de la amazonia.

A semejanza de Brasil, no fue sino hasta la década de los sesenta que se desencadenó la rápida ocupación de los territorios de los demás países amazónicos. Sobre todo, fue a partir de los 70 que pasaron a valorarse como fronteras de recursos y fronteras geopolíticas. De esta forma, se dispusieron a ocupar la Amazonia, antes vista como espacio vacío.

Después de Brasil, Venezuela es el país que ha mostrado mayor preocupación y esfuerzo gubernamental en el sentido de ocupar su respectiva Amazonia, el denominado 'Territorio Federal de la Amazonas' que para efectos de planeación integra la macro región Guayana incluyendo también áreas bañadas por el río Orinoco. A diferencia de los demás países amazónicos la Amazonia venezolana está constituida en gran parte de rocas de basamento cristalino, ricas en minerales ferrosos. En el proyecto de recuperación de la Amazonia en este país destacaron los siguientes: la construcción de la carretera Caracas-Santa Elena del Uairén, frontera con Brasil, actualmente asfaltada y que representa un importante apoyo logístico para la instalación de polos de desarrollo¹⁵⁵; un programa de colonización; y una política de creación de parques y reservas indígenas que encubre una estrategia de ordenamiento

¹⁵⁵ Hay que recordar que esta carretera es altamente estratégica tanto para Venezuela como para Brasil pues es la única vía que permite la salida de las mercancías brasileñas de Manaus hacia el Caribe, pues hacia el este sólo las puede movilizar por el río Amazonas con destino al Atlántico y hacia el sur hasta Porto Velho vía el río Madeira. Esta vía terrestre se convierte en la más importante conexión con Venezuela y viceversa. No es fortuito que la IIRSA la tenga contemplada como una de las vías a agrandar y mejor aprovechar.

del desarrollo por etapas, congelando para el uso futuro las zonas ricas en recursos minerales, principalmente oro y uranio, entre otros como petróleo y gas natural. En este punto destaca el Parque Nacional Canaima, que como pudimos ver en el primer capítulo, una fracción del mismo es motivo de un litigio entre Venezuela y Guyana. Así, al decretar Parque Nacional a Canaima —uno de los más extensos del mundo— lo que en la práctica ha hecho el gobierno venezolano es garantizar la propiedad a futuro de la cuenca del río Caroni, el más grande de los afluentes del Orinoco, lo que garantiza por muchos años la viabilidad de la represa Raul Leóni (Guri) y de su potencial hidroeléctrico, incluso con otras futuras represas y adicional generación eléctrica.

En Ecuador el peso del gobierno en la región amazónica aumentó en la década de los sesenta. Desde la década de los cincuenta este país manifestó su interés por el aprovechamiento efectivo de su región amazónica, por lo que en 1958 firmó un tratado de cooperación bilateral amazónica con Brasil con vistas a desarrollar una vía interoceánica, que nunca se concretó, a saber, por los problemas del régimen militar brasileño con los gobiernos ecuatorianos, poco afectos al mismo. En las décadas de los 60 y 70 las actividades exploratorias del Estado y de las Empresas petroleras incentivaron la población de la Amazonia, siempre tenida en cuenta como una alternativa para la presión demográfica de la cordillera de los Andes. Así, la colonización fue reforzada como un imperativo de defensa y de integridad territorial.

La explotación del petróleo en la zona ha tenido un papel fundamental en la ocupación de la Amazonia ecuatoriana. Las empresas norteamericanas construyeron instalaciones petroleras que incluyeron campos de producción y el oleoducto transecuatoriano (SOTE) que ligaba a la Amazonia con el Pacífico, por donde pasa cerca del 70% de la producción nacional, con lo que incentivaron el poblamiento de las ciudades que atravesaba el ducto. Sin embargo, la llegada de las compañías petroleras a la Amazonia no logró una ocupación pacífica de la zona y estuvo muy lejos de propiciar el desarrollo de la región: la presencia de las petroleras es también conocida por los grandes daños sociales y ambientales que causaron a las poblaciones locales y es defendida como una de las principales causas de la guerra entre Ecuador y Perú en los inicios de los ochenta en la región de la cordillera del Cóndor¹⁵⁶, conflictos que justificaron la militarización de la zona, por lo que la ocupación de la amazonia más que económica y geopolítica tiene una fuerte y casi exclusiva connotación militar.

¹⁵⁶ Hay que recordar que en 1981 resurge la vieja disputa entre estos dos países por la Cordillera del Cóndor, donde entre los ríos Zamora y Santiago se interpone otro, el Cenepa, que desemboca en el Marañón, afluente del Amazonas, y que delimita una zona que abarca unos 345 kilómetros cuadrados, reivindicada por Ecuador, ya que el río Cenepa sería una apertura hacia el Amazonas, Brasil y Europa.

Por parte de Colombia su relativamente extensa región amazónica ha sufrido una verdadera reconversión en los últimos años. La mayor parte de la colonización de esta área es espontánea y está poblada por campesinos desplazados de las áreas más productivas y, hasta hace poco tiempo, por la guerrilla y los narcotraficantes. A diferencia de otros países latinoamericanos, en Colombia nunca se ha llevado a cabo una Reforma Agraria seria y la tierra se ha concentrado en unas pocas manos de manera escandalosa, lo que ha provocado su desplazamiento hacia los territorios desocupados. Así, mientras el 1.5% de los propietarios ostentan la propiedad del 80%, el 57% de los campesinos más pobres subsisten con el 3%.(Flórez, 2001:50). Así, los terratenientes tienen sus posesiones como señores semif feudales, aisladas unas de otras. Basta decir la región andina, con 23% del área total, alberga al 75% de la población y en ella se localizan tres de las más grandes ciudades, Bogotá, Medellín y Cali. El otro 77% del territorio está casi despoblado y los servicios no llegan ahí. (Rodas, 2004:23). Los grandes territorios amazónicos del sur y el este de Colombia carecen totalmente de vías de comunicación y ni qué decir de la presencia de escuelas y hospitales o de estaciones de policía¹⁵⁷; éstos son casi nulos. El Estado colombiano ni siquiera se puede jactar, como la mayoría de los países latinoamericanos, de tener el control militar de su territorio: tan sólo tiene dominio en 60% de él. (Ibid:24)

La actual guerra que se libra en Colombia parece apuntar a que en su parte de la Amazonia se repetirá el esquema peruano de los años ochenta. En Perú a finales de la década de los ochenta, el enfrentamiento final entre el gobierno y la subversión se desencadenó en el Amazonas peruano, zona geopolítica de gran importancia que cuenta con 700 000 km² —forma casi la mitad del territorio nacional—, alta potencialidad agrícola y grandes reservas de materias primas, petróleo en particular y con fronteras con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Al desplazar a los grupos subversivos de esta zona, los militares peruanos dieron el primer paso para penetrar en la región que había sido olvidada de los planes gubernamentales después de 1965, cuando en el marco de una estrategia de colonización se aprobó la Ley de la Selva Peruana, que garantizaba un sistema de incentivos fiscales especiales, facilidades de exportación e importación, que careció de éxito.

El caso de la amazonia boliviana es distinto en tanto que esta región, al estar ligada económicamente al Brasil, ha tenido un desarrollo histórico diferente al de la parte andina. La rica zona de Santa Cruz es un ejemplo de activación económica separado del resto del país que lo convierte en una especie de enclave. Baste decir que el aeropuerto internacional de Bolivia no se encuentra en La Paz sino en Santa Cruz. Sin embargo, la ocupación de la amazonia boliviana no es homogénea lo que

¹⁵⁷ El hecho de que por presiones estadounidenses la policía haya dedicado la práctica totalidad de sus esfuerzos a combatir “el flagelo” del narcotráfico, ha tenido como consecuencia el abandono del resto de sus tareas y deberes.

condena al aislamiento a gran parte de la población indígena que ocupa la zona, donde los planes gubernamentales están lejos de llegar, que no los de las grandes transnacionales del gas y la biogenética.

La más o menos débil ocupación del territorio amazónico por parte de los gobiernos nacionales fortalece los argumentos norteamericanos para apoderarse del control de esta estratégica región de gran potencial económico e impulsa las acciones que apuntan hacia una ocupación internacional de la región. Las intenciones estadounidenses de apropiarse de la Amazonia están lejos de ser parte de la imaginación de los críticos de la presencia norteamericana en la región. Desde poco menos de un año ha salido a luz pública sudamericana a través de una campaña de concientización de una ONG, uno de los libros escolares de geografía editados y utilizados en los Estados Unidos donde se muestra el mapa del Brasil amputado, sin el Amazonas y el Pantanal brasileño-boliviano. En las escuelas se está enseñando que estas áreas son internacionales, con lo cual se podría estar preparando a las nuevas generaciones para una eventual ofensiva contra ese territorio. Se trata del texto de Geografía de 6to. Grado, donde se señala que los norteamericanos tomaron el control del Amazonas para salvaguardar el agua y el oxígeno del planeta.

Por si llegara a existir alguna duda de que en los Estados Unidos existen mapas oficiales de Brasil sin el Amazonas, la campaña incluyó la página del libro, donde la Amazonia está marcada como bajo la responsabilidad de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. En el libro se menciona que esta región está localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo (que) es parte de ocho países diferentes y extraños, irresponsables, crueles y autoritarios que trafican drogas y además son tan incultos e ignorantes que podrían causar la muerte de todo el mundo dentro de pocos años. La página 76 del libro norteamericano "Introducción a la Geografía", del autor David Norman, utilizado en la Junior High School (equivalente al 6º grado de la primaria) afirma que la Amazonia se localiza "... al norte de América del Sur, (formando) una extensión de tierra con más de 3.000 millas cuadradas" (Acción Ecológica, 2004:3). En el apartado 3.5-5.- denominado 'Primera Reserva Internacional de la selva amazónica' se afirma que "desde mediados de los años 80, la más importante selva del mundo pasó a ser responsabilidad de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Se le denominó FIRAF (Former International Reserv of Amazon Forest, Primera Reserva Internacional de la Floresta Amazónica) y su fundación ocurrió debido al hecho de que la Amazonia está localizada en América del Sur, una de las regiones más pobres del mundo y cercada por países irresponsables, crueles y autoritarios. Formó parte de ocho países diferentes y extraños, los cuales son en la mayoría de los casos, reinos de la violencia, el tráfico de drogas y el analfabetismo y de pueblos sin inteligencia y primitivos". (*Ibidem*. La traducción es mía)

Prosigue diciendo que “la creación de la FIRAF fue apoyada por todas las naciones del G-23 y fue en realidad una misión especial para nuestro país y un regalo para todo el mundo, visto que la posesión de estas tierras tan valiosas en manos de pueblos y países tan primitivos condenarían los pulmones del mundo con la desaparición y la total destrucción en pocos años. Podemos considerar que esta área tiene la mayor biodiversidad del planeta, con una gran cantidad de especímenes de todos los tipos de animales y vegetales. El valor de esta área es incalculable, pero el planeta puede estar seguro de que los Estados Unidos no permitirán que estos países latinoamericanos exploten y destruyan esta verdadera propiedad de toda la humanidad. La FIRAF es como un parque internacional, con severas reglas para la explotación”. (*Ibidem*. La traducción es mía)

Al pie de un mapa donde se muestra la zona ocupada por la FIRAF, que abarca lo que en la actualidad se conoce como Cuenca Amazónica, se puede observar una leyenda que afirma que se puede ver “la localización de la reserva Internacional. Forma parte de 8 países de América del Sur: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa, algunos de los más pobres y miserables países del mundo” (*Ibidem*. La traducción es mía) Lo anterior podría explicar el apoyo al Plan Colombia, las intenciones de penetrar la Fuerza Aérea Brasileña, la intención de los Estados Unidos de colocar una oficina de la CIA en la triple frontera (Foz do Iguazú) y de implantar dos bases militares en la Argentina, una en la Patagonia y otra próxima a Buenos Aires, entre otras acciones.

La posibilidad de la internacionalización de la Amazonia puede parecer una mentira en la medida en que la ocupación militar no parece estar a la vista de la opinión pública internacional; sin embargo, la acción de las corporaciones transnacionales en la región y la intervención estadounidense en los ejércitos locales, así como las actividades de varias organizaciones filantrópicas y de agencias de organismos internacionales que se escudan en su preocupación por el cuidado del equilibrio ecológico¹⁵⁸ de la región descubre la perversidad política de una ocupación indirecta y no excluye la realidad de las presiones políticas de los gobiernos sobre los países de la región.

Esta presión norteamericana con relación a la Amazonia no evidencia sólo un proceso apresurado y perverso de su ocupación; descubre también el nuevo significado que la región alcanza en el escenario internacional en términos de su extensión y de su potencial y, simultáneamente, el débil control ejercido por los gobiernos nacionales. Los planes de investigación en la Amazonia así como los nuevos canales de financiamiento como la IIRSA que se enfocan hacia inversiones selectivas para el desarrollo de zonas estratégicas, pueden significar un nuevo instrumento para la perpetuación de las

¹⁵⁸ La conciencia ecológica planetaria puede ser real y activa pero esto no excluye la existencia de una ideología ecológica que favorece las formas de presión hacia los países más pobres, como muchas veces se hace a través del trabajo y los

relaciones asimétricas entre los países amazónicos y los Estados Unidos de América. La Amazonia, frontera nacional y mundial, asume una posición central como capital natural en la crisis de sucesión hegemónica y de reestructuración capitalista contemporánea y ya va quedando claro que no quedará intacta.

e) LA IIRSA Y LA MILITARIZACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS PAÍSES DE LA CUENCA AMAZÓNICA

Lejos de lo que pudiera pensarse, la IIRSA y sus proyectos por integrar físicamente la cuenca amazónica, controlando tanto las vías de comunicación (terrestres, fluviales y aéreas) como los recursos naturales estratégicos (energéticos, agua y biodiversidad) poseen una fuerte carga militar y contribuyen a la ocupación militar de los Estados Unidos en la región. Tal como se afirmaba en el primer capítulo cuando se hablaba de la vulnerabilidad estratégica, ese serio problema de abastecimiento de recursos naturales estratégicos, se decía que los Estados Unidos habían ideado algunas alternativas para reducirla: en primer lugar, intensificar el uso de los recursos domésticos internos, si es que los poseen; en segundo lugar, aumentar el intercambio comercial, con la implícita desigualdad entre las partes que comercian; en tercer lugar, ocupar materialmente los lugares fuera de sus fronteras donde se encuentran los recursos, ya sea por medios no militares como la privatización y militares, ya sea que estos medios militares sean directos (ocupación del ejército norteamericano) o indirectos (apoyo militar con entrenamiento, armas y asesorías a los gobiernos extranjeros).

Como las necesidades de recursos de los Estados Unidos sólo podían satisfacerse con depósitos localizados fuera de sus fronteras nacionales, la segunda y la tercera alternativas han guiado hasta ahora la política exterior norteamericana hacia América Latina de los últimos años. El avance militar es parte ineluctable de la estrategia comercial de los Estados Unidos en la cuenca amazónica y la integración física que propone la IIRSA y que implica el control sobre las vías de comunicación y sobre los recursos sostiene esta afirmación.

Aunque existen otros, el vínculo más evidente entre la IIRSA y el control militar sobre la región está representado por el Plan Colombia. La guerra sostenida por el gobierno colombiano al interior de este país andino-amazónico y financiada con dinero estadounidense con el fin de recuperar territorios geoestratégicos está fundamentada en un discurso que defiende la necesidad de construir un sistema infraestructural que contribuya al desarrollo del país, como lo ha expresado en diversos foros y

informes de las agencias internacionales que trabajan para la ONU, las cuales hablan de un 'futuro común' para la

reuniones internacionales. Además de los 3 mil 300 millones de dólares originalmente otorgados al gobierno colombiano para la puesta en marcha del Plan Colombia, en una visita de George Bush a Cartagena el 22 de noviembre de 2004, se anunció que el Ejecutivo de Estados Unidos gestionará la ampliación del Plan, que vence en diciembre de 2005, y lo dirigirá ahora a combatir al *narcoterrorismo*. Así aunque el Plan fue creado en 2000 para combatir el narcotráfico, se ha ampliado dos años para acabar con los grupos armados ilegales que operan en Colombia, quinto país en el mundo que más recibe ayuda militar de parte de Washington. (AFP, 2004)

El Plan Colombia es un instrumento de la política exterior estadounidense que busca aumentar la presencia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la región andina y otros países cercanos como Brasil y Panamá. Se podría asegurar que el control de esta región forma parte de una compleja estrategia encaminada al fortalecimiento del sistema de dominación capitalista en América Latina que bajo la dinámica del libre comercio tiene por objetivo reafirmar su hegemonía en el continente eliminando toda posibilidad de competencia con otros países o bloque de ellos y proyectar este poder hegemónico al mundo justo en un momento de crisis de sucesión hegemónica y de la lucha intercapitalista de las grandes potencias.

La guerra que los Estados Unidos han iniciado en Colombia y que le ha venido permitiendo asentar a su personal militar en la región es la continuación de una ya larga tradición de intervencionismo en la región, ahora disfrazada con la construcción de un sistema infraestructural, presenta una faz esencialmente militar que privilegia las relaciones de fuerza y la agresión para fortalecer la *dominación económica* a través de la imposición de un modelo económico que favorece a las empresas transnacionales que pretenden realizar grandes proyectos en la zona andina y la cuenca amazónica, en países donde las contradicciones sociales se agravan. El Plan Colombia, plan militar de avanzada en la región, le presenta a los Estados Unidos una oportunidad para reafirmar su primacía en los asuntos hemisféricos donde la línea que separa la seguridad regional y el orden interno de cada país se vuelve delgada y los convierte en una unidad.

La exacerbación de las relaciones de fuerza de los Estados Unidos hacia el espacio ocupado por la región andina y la cuenca amazónica, considerable ya desde la presidencia de Ronald Reagan, ha venido a acentuarse en la actual administración del hijo de George Bush y ha quedado plasmada muy claramente en el documento de Santa Fe IV¹⁵⁹, donde se aconseja enterrar las políticas permisivas y

humanidad cuando en la realidad no hay un presente común.

¹⁵⁹ Estos documentos son ya una tradición dentro de la política exterior norteamericana. Son realizados por miembros del Partido Republicano que pertenecen al Grupo de Santa Fe, que dictan los lineamientos que han de seguir las acciones realizadas fuera de su país. Son tan influyentes que muchas de esas líneas se convierten en objetivos políticos de la

liberales de Bill Clinton. Según el documento, entre los nuevos desafíos para los Estados Unidos se encuentran, a nivel continental, “los capitanes de la droga en América del Sur, especialmente las FARC y el ELN de Colombia, el castrista Chávez de Venezuela y el surgimiento de un militarismo izquierdista en los países andinos” (Bonasso, 2001) Además, identifica en América Latina las nueve “D”: defensa, drogas, demografía, democracia populista, desestabilización, deforestación y declinación de Estados Unidos, ésta última por culpa del abandono que se operó durante la administración Clinton, que privilegió las relaciones con Europa y China.

Según el Santa Fe IV, los principales elementos geoestratégicos que siguen siendo importantes para la seguridad nacional de los Estados Unidos en América Latina y que hay que preservar a través de cualquier medio, incluido el militar, son :

- 1) el control de los estrechos Atlánticos
- 2) el uso del Canal de Panamá, que fue devuelto en 1999 a Panamá, porque según los autores del documento estaría siendo operado por compañías de cobertura de los chinos
- 3) una ruta “comercial” sureña alrededor del cabo de Hornos
- 4) la seguridad de que los países del hemisferio no son hostiles a las preocupaciones de seguridad nacional de Washington. *Además que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a sus prioridades nacionales.* (Bonasso, *Op. Cit.* El subrayado es mío)

En una posible fase B del Plan Colombia —no descartada por el gobierno estadounidense y más bien preparada por el mismo para llevarse a cabo a largo plazo— el teatro de operaciones se ampliaría a la región andina, hacia Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, países que comparten la propiedad de la cuenca amazónica. Es decir, la guerra en Colombia se llevaría a cabo por aire desde las bases estadounidenses instaladas en países vecinos y desde el mar, donde los aviones y los misiles tengan un papel importante como indica la estrategia de la AirLand Battle¹⁶⁰. Aquí no sólo actuarían las fuerzas armadas sino un cuerpo militar multinacional, lo cual no es descartable. En una reunión de del Grupo de Río en marzo de 2003, se dio una declaración de los países miembros del Grupo de Río donde se insta al Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, “a que utilice sus buenos oficios para impulsar decididamente un proceso de paz en Colombia, exhortando a los movimientos guerrilleros que operan en dicho país a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y entrar a un diálogo abierto y transparente que, a través de un cronograma con plazos, discutido y aprobado por partes, permita llegar

administración en curso. El Santa Fe IV, elaborado por Gordon Summer Jr., Rachel Erenfeld, David Foster, Sol Sanders, y el geopolítico Lewis A. Tambs se dio a conocer recién empezaba la presidencia de George Bush hijo.

¹⁶⁰ Esta estrategia consiste básicamente en destruir a las tropas enemigas desde el aire, bombardeándolas con una gran cantidad de misiles a fin de limpiar el terreno para que cuando penetren las fuerzas terrestres tengan menores posibilidades de sufrir bajas. Este esquema ha sido probado, con mayor o menor éxito, en Irak, Yugoslavia y Afganistán.

a una solución pacífica y definitiva al conflicto colombiano, que cada vez afecta más a los países de la región. Si este proceso no tiene el éxito deseado, el Grupo de Río, junto al Secretario general de la ONU y en coordinación con el gobierno de Colombia, buscarán en una nueva consulta otras alternativas de solución” (Montúfar, 2003:10) Esta declaración que más bien parece un ultimátum a las FARC, abre las puertas para una eventual intervención militar internacional, cocinada por los Estados Unidos desde hace tiempo.

Pruebas que apuntan también hacia la preparación de esta intervención, son los esfuerzos de la administración Bush para que el Congreso estadounidense no sólo mantuviera su apoyo al Plan Colombia sino que aceptara financiar su “nuevo” programa para la lucha contra las drogas y el terrorismo en los Andes: la Iniciativa Regional Andina. En abril y mayo de 2001, la administración Bush propuso destinar 882.29 millones de dólares en asistencia económica y antinarcóticos, además de la extensión de medidas de comercio preferenciales y otras para Colombia y sus vecinos de la región. La iniciativa, nombrada ‘Andean Regional Initiative’ (ARI) se constituía en un intento por terminar con la mala fama del Plan Colombia, rechazado por la Unión Europea y los vecinos países de Colombia por hacer más énfasis en las cuestiones militares que en las sociales.

Según los promotores de este proyecto, hay una característica distinta de esta Iniciativa Regional Andina —como se le conoce en América Latina— comparada con el Plan Colombia: la asistencia para programas antinarcóticos y antiterrorismo está dirigido a los países de la región que están experimentando la expansión de los efectos de las actividades de los cultivos ilícitos y, sobre todo, de la insurgencia de movimientos sociales hostiles al libre comercio. Esta iniciativa incluye a los tres mayores productores de coca y amapola (Colombia, Perú y Bolivia) y a los dos mayores productores de petróleo (Venezuela y Ecuador), además de Panamá y Brasil. (Lucas, 2004:8)

Llama la atención que cuando habla de las fuerzas armadas de los países vecinos de Colombia, el último documento de presentación de la Iniciativa Regional Andina dice que éstas no están capacitadas para enfrentar los conflictos que causan los narcotraficantes y los posibles terroristas debido al deterioro y el envejecimiento de sus armamentos. Así, se abre la puerta para que las fuerzas armadas estadounidenses pudieran intervenir en un futuro no muy lejano bajo la figura de la coalición militar. La propaganda oficial atrae la atención hacia el hecho de que el conflicto colombiano ha crecido tanto que ya tiene la capacidad de desestabilizar a América Latina pero sobre todo al norte de Sudamérica, lo que no da lugar a dudar que a través de esta iniciativa Washington busca deliberadamente involucrar de manera creciente y directa a los países vecinos y por ello incrementa los presupuestos militares en la región andina.

Cuando el gobierno de George Bush hijo propuso su iniciativa andina, en realidad pocos legisladores y analistas se sorprendieron. Y es que sabían, de acuerdo a lo planeado en la propia ley que aprobó el Plan Colombia —que era muy minucioso en cuanto a los tiempos y las acciones que se llevarían a cabo en ellos— que para los meses de febrero y marzo de 2001 estaba contemplada otra petición para obtener otro monto de ayuda para la lucha contra las drogas.

Si analizamos cuidadosamente esa ley y los tiempos que marca para la ejecución del Plan Colombia, podemos observar ciertas “coincidencias” con los hechos que finalmente ocurrieron en Colombia. Según ese documento, para finales del año 2001 y principios del 2002, los primeros BlackHawk llegarían a Colombia para el apoyar el “Empuje hacia el Sur” (Push in Southern), justo cuando los batallones “antinarcóticos” entrenados por militares estadounidenses se presentaban como listos para la acción y precisamente cuando se empiezan a deteriorar aún más las pláticas de paz entre Pastrana y las FARC. No se debe olvidar que el 10 de enero de 2002, en lo que representó la primera crisis seria del diálogo, el ejecutivo colombiano da un ultimátum de 48 horas a la guerrilla para que reactivaran las negociaciones de paz o se atuvieran a las consecuencias.

Otra de las mayores pruebas de que el Plan Colombia no está circunscrito a Colombia y de que bajo la IIRSA subyace un objetivo militar, es el avance de la militarización de esta región y de las zonas cercanas, simultáneo a la puesta en marcha de la construcción de los ejes de desarrollo de la IIRSA, como en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esta virtual ocupación de América Latina es la que le permitirá a los Estados Unidos conseguir sus objetivos en la región, entre los que se cuentan los siguientes: conseguir recursos naturales estratégicos para su “seguridad nacional”; acabar con todo movimiento subversivo que se oponga a la “globalización” de las corporaciones trasnacionales; asegurar la concreción del ALCA, así sea a fuerza de intimidar a los países latinoamericanos renuentes a las condiciones de los capitales estadounidenses y de convertir al Pentágono en el brazo armado de los intereses del capital en América Latina; crear una fuerza militar unilateral con el mismo esquema de la OTAN para intervenir con mayor facilidad en los países latinoamericanos que reten su poder; y, por último, reforzar su hegemonía en el continente y proyectarla hacia sus rivales económicos y posibles sucesores hegemónicos.

El fin de la guerra fría y los cambios en la economía mundial hicieron necesario un reposicionamiento geopolítico de los Estados Unidos en Latinoamérica. En la actualidad ese país tiene más personal militar y de inteligencia desplegado en América Latina y el Caribe que durante la guerra fría. Los programas de adiestramiento militar y los programas de transferencia de tecnología militar de utilidad se acentuaron en la región con excusa de la lucha del narcotráfico y ahora contra el terrorismo, lo que evidencia el retorno de la Gunboat Policy (Diplomacia de las Cañoneras), donde se consigue

imponer la voluntad de una gran potencia a costa de la intimidación de un país. El Plan Colombia, como el mayor plan de ayuda “antidrogas” y “antiterrorismo” en la historia latinoamericana, es un indicador alarmante de la creciente y peligrosa militarización de esa lucha y el cambio en el papel de los ejércitos latinoamericanos en los nuevos tiempos, dentro de un esquema de subordinación bajo el ala del Pentágono, estrategia a la que Estados Unidos está apostando claramente, pues no sólo ha fortalecido sus vínculos con los altos mandos militares sudamericanos sino también con los de Centroamérica.

Más que para una intervención al estilo clásico, donde las fuerzas armadas estadounidenses ocupan el territorio y se estacionan en todo el país, el Plan Colombia está sirviendo como un instrumento militar para *focalizar* los conflictos de los países de la cresta andina y cuenca amazónica, evitar su propagación y eliminarlos conjuntamente con otros ejércitos. En este sentido, Colombia es como un escenario piloto de la aplicación de la estrategia que contempla una segunda fase con la participación de las fuerzas armadas de toda la región andina.¹⁶¹ Esta focalización ha llevado al Pentágono a colocar bases militares y radares en lugares estratégicos. Estos radares han sido colocados —todos ellos bajo la excusa de la interceptación de aviones cargados con drogas ilícitas— en la Guajira, en el centro en la base militar de Tolemaida y otro en Tres picos. El Plan Colombia incluye también la instalación de un tercer radar en Venezuela en la localidad de San Fernando de Atabapo, a 700 kilómetros al sur de Caracas, en la frontera con Colombia. Este radar se suma a los que ya están activos en la Península de Paraguaná, al norte y en la isla de Margarita. (Garrido, 2003:46)

En cuanto a las bases militares en Colombia donde hay personal estadounidense, existen en **Leticia** (frontera con Perú y Brasil), en **Apiay**, en **Tolemaida** y, sobre todo, en el sur del país, en el territorio amazónico. La llegada en agosto del 2000 de 88 asesores militares estadounidenses¹⁶² a la base del ejército colombiano en **Larandía**, Caquetá, en la amazonia, fue la señal de una cada vez más creciente injerencia de fuerzas especiales del Pentágono en ese país sudamericano. Esta localidad (Larandía) se encuentra a sólo 55 km de lo que fue la zona de despeje de la guerrilla. La presencia de estos boinas verdes, decía sin tapujos un oficial estadounidense, tienen la misión de realizar una “ofensiva contra el narcotráfico y las FARC”. (*Ibid*:43)

Sin embargo, quizá la base más importante es la Base Aérea de **Tres Esquinas**, que cuenta con 1 500 hectáreas sobre el margen izquierdo del río Orteguzza, en la que confluye el río Caquetá.

¹⁶¹Si el Plan Colombia no obtiene los resultados deseados, Estados Unidos podrá argumentar que las fuerzas armadas locales no sirven e intervendrán bajo la figura de coalición militar. Preparándose para ello, en septiembre de 2001 se realizó un ejercicio militar teórico de gran envergadura en Quito, con la presencia de 541 representantes de las fuerzas armadas estadounidenses y de varios países de América Latina e incluso representantes de la ONU. Ahí se analizaron varios temas, entre ellos, la participación de las fuerzas armadas en los procesos de paz en el mundo.

Resguardada por espesa selva, ríos y pantanos, es habitada por más de 100 mil efectivos del ejército y la policía antinarcóticos y da acogida a la más grande fuerza de élite del país: 8 000 hombres de la Fuerza Aérea Conjunta y el recién creado batallón antinarcóticos apoyado por otras fuerzas y la policía nacional. Cuenta con una pista de aterrizaje de más de 2000 m de longitud y posee equipos de inteligencia y tecnología de punta en comunicaciones para recibir imágenes satelitales e interceptar señales de radioteléfono en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. Controla además las estaciones de radar de Tres Esquinas, Marandúa, Araracuara, y Mecana. (*Ibid*:143) En esta base fueron instalados los receptores de señales que envían los satélites, los aviones y las tropas de élite de tierra con el fin de coordinar un comando de inteligencia que eventualmente proporcionaría información inmediata para y sobre el desarrollo de las operaciones.

Desde Tres Esquinas, Washington ofrece apoyo de alta tecnología en materia de información satelital y de aviones radar que han sido fundamentales para detectar grandes movimientos de tropa guerrillera y propinar a las FARC duros golpes, apoyados en los paramilitares¹⁶³. Para estos efectos, la base de Tres Esquinas se ha convertido en un verdadero centro de inteligencia tecnológica que pone a las fuerzas armadas colombianas entre las más modernas de Latinoamérica, lo que se comprobó una vez roto el diálogo con las FARC, pues los ataques a los guerrilleros se efectuaron desde aviones OV-10, AT-37, K-fir y helicópteros BlackHawk y UH-60, procedentes de la base de Tres Esquinas, donde Estados Unidos tiene tropas acantonadas.

Según se tenía planeado, cuando comenzara la ofensiva militar las fronteras se calentarían al máximo. Baste recordar que las grandes zonas de cultivo son fronterizas: una es el Putumayo, que colinda con Ecuador y la otra es el Catatumbo, que colinda con Venezuela. Ambas son amazónicas. Haciendo alusión al viejo efecto dominó, había necesidad de un plan andino para impedir la extensión de los efectos de la guerra, según los Estados Unidos, quien encontró la excusa ideal para incorporar de lleno a los países vecinos en el Plan Colombia. Así, la Iniciativa Regional Andina retomó la reestructuración de los ejércitos latinoamericanos y de sus relaciones con los mismos en el fortalecimiento de un esquema bilateral de los Estados Unidos con cada uno de estos ejércitos pero a la vez dentro de una coordinación multilateral para el control y seguridad de la región dirigida por el Comando Sur.

Siguiendo los dictados de la estrategia militar de la AirLand Battle, la estructura regional de seguridad controlada por el Southcom con la participación de otras agencias estadounidenses como la

¹⁶² Después creció hasta tener 97 instructores militares e incluso fue inaugurada por Peter Pace, el jefe del Comando Sur.

¹⁶³ Por ello, en su informe del 2001, Human Right Watch acusó a quienes dirigen esta base de entregar armas, uniformes y datos de inteligencia a un grupo paramilitar.

DEA, se afianzaría en las Forwards Operating Locations (FOLs) para el control aéreo. El papel de las FOLs es vital en la conformación de una estructura de seguridad aérea capaz de cubrir la región andina-amazónica del Caribe y Centroamérica. Por ello el Comando Sur ha establecido tres: la de Manta —que es la única con capacidad de cobertura sobre los países andinos y que es la base del sistema de alarma aerotransportado— y las de Reina Beatriz en Aruba y Hato en Curazao,¹⁶⁴ que monitorean todo el norte de las zonas fuente de narcotráfico —Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia—incluyendo la península de la Guajira y Venezuela, además de que controlan el Pacífico que bordea a Centroamérica y toda la región. A estas bases, colocadas a una prudente distancia del teatro de operaciones, se suman la de El Salvador.

El cubrimiento de las FOLs se vería acrecentado por las bases militares de Estados Unidos instaladas en Roosevelt Roads (Puerto Rico), Bahía de Guantánamo (Cuba) y Soto Cano (Honduras). Otro punto clave de esta estrategia es la base militar que Estados Unidos montó en Iquitos, en la Amazonia peruana, en los valles del Alto Huallaga y el Apurímac-Eme cerca del río Nanay, hacia donde fue desplazado parte del equipo que el Pentágono tenía instalado en la Base Howard, en Panamá.¹⁶⁵ Esta base peruana aporta el apoyo naval tan necesario para internarse en la selva, pues cuenta con lanchas rápidas donadas por el gobierno estadounidense. Bolivia, por supuesto, tampoco escapa a la ocupación militar estadounidense. Tres cuarteles diseñados por ingenieros militares bolivianos y técnicos estadounidenses del Southcom serán erigidos en el Chapare, en las localidades de Villa Tunari, Ichoa y Chimoré. Estos cuarteles permitirán reactivar la Novena División del Ejército boliviano, que tendrá a su cargo el fin de la erradicación de coca y que será entrenada por personal estadounidense de distintas agencias gubernamentales.¹⁶⁶

Debido a su importancia en el esquema militar regional y hasta mundial de los Estados Unidos, la base militar de Manta en Ecuador merece un análisis especial. Según especialistas latinoamericanos, Ecuador es un misterio para la geopolítica de América Latina: no debía existir pero fue un descuido de la corona española. Es un país sumamente estratégico que hasta antes del Plan Colombia era parte de la zona de comunicaciones de la guerrilla colombiana. Los guerrilleros utilizaban este territorio para

¹⁶⁴ Estas bases cumplirán la función de apoyo logístico según el convenio suscrito en abril de 1999 entre el Reino de Holanda y Washington. En ambas bases habrá una presencia constante de 300 militares de Estados Unidos de manera rotativa así como 5 aviones F-15 y F-16 y tres aeronaves de reconocimiento y un máximo de ocho aviones adicionales.

¹⁶⁵ Con el traspaso de la zona del Canal de Panamá a manos del gobierno panameño, a fines de 1999 la sede del Southcom fue trasladada a Miami. La clausura de la Base Howard, en mayo de ese año, había disminuido marcadamente las operaciones de recolección de información de inteligencia. Desde ahí operaban los aviones de reconocimiento Awacs y otras sofisticadas naves espías como los Havilland RC-7. Las bases de Manta, Aruba y Curazao vendrían a sustituir la función de la base Howard, donde los aviones espías que tenían que volar grandes distancias y necesitaban reabastecerse de combustible y alojar a la tripulación.

¹⁶⁶ Muy poca gente sabe que en este país se encuentran las dos estaciones más importantes de la CIA en América Latina con más de 1000 agentes. (Dieterich, 2002:15)

actividades logísticas y de descanso. Por lo tanto, si sus líneas de abastecimiento y comunicación son amenazadas, tiene que defenderlas, lo cual significa que Ecuador será zona de combate tarde o temprano. A decir de José Steinsleger, en el enfoque geopolítico del Pentágono el puerto de Manta, provincia de Manabí, situado en el litoral del pacífico ecuatoriano, es el componente clave del Plan Colombia. Como la invasión por tierra está momentáneamente descartada, la tendencia es a impulsar la intervención por aire, por lo que la base de Manta pinta para ser algo más que un punto de apoyo logístico. (Steinsleger, 2000)

En noviembre de 1999, Estados Unidos firmó con Ecuador el convenio para la instalación de una base de monitoreo electrónico y aéreo desde la ciudad costera de Manta a unos 800 km de Quito. Esta base, según el gobierno norteamericano, es para apoyar el Plan Colombia y su función es combatir el narcotráfico. El débil gobierno de Ecuador no opuso mucha resistencia para aceptar al personal y al equipo estadounidense: si no firmaba el acuerdo los países desarrollados podrían sospechar que no apoyaba en su lucha contra las drogas. En realidad Ecuador fue elegido por su **localización estratégica** y por la seguridad que ofrece pues este país no tiene problemas serios de producción de cultivos ilícitos.

Desde entonces, en Ecuador se realizan operaciones conjuntas de militares estadounidenses con militares ecuatorianos todos los días. Para ellos la Amazonia es territorio conocido debido a la Escuela de la Selva de Coca y Contrainsurgencia, cercana a la localidad de Coca, en la oriental provincia de Orellana, lugar donde los estadounidenses entrenan militares brasileños, colombianos y ecuatorianos en técnicas de guerra con tecnología de última generación. La prensa colombiana afirma que la base de Estados Unidos en el Ecuador está estrechamente acoplada con la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, compuesta por unos 13 mil militares colombianos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como de la policía. En esta misma escuela de la Selva se entrenan unos actores fundamentales de la seguridad en la frontera norte de Ecuador: los Tigres de la Selva, un grupo especial de las fuerzas armadas destacado en la región amazónica ecuatoriana para evitar la infiltración guerrillera. Cabe agregar que el conflicto, que lleva más de 40 años, nunca se trasladó al Ecuador.

Según el acuerdo de Manta, que autoriza el uso de la base aérea por 10 años, se permitirían 45 vuelos al mes de 3 tipos de aviones: El P3 Orión, el KC-135 —tanquero para reabastecimiento aéreo— y el ALR —aviones de alerta temprana, detección aérea y vigilancia. Se habla también de que podrán aterrizar aviones Galaxy, C-130 y C-140, que son aviones utilizados para el despliegue rápido de tropas. Un avión de esa naturaleza puede transportar 300 hombres armados completamente equipados y es el equivalente en peso de helicópteros, tanques y fuerzas de intervención rápida que fluctúan de 15

mil a 20 mil hombres. Esto puede dar una idea de que esos aviones son para montar una operación de ataque militar desde Manta¹⁶⁷. (Gallardo, 2002:8)

El acuerdo de la base de Manta le permite a Estados Unidos instalar sistemas de radio, TV y “otros”. Según René Vargas, general del ejército de Ecuador, la base de Manta también podría tener implicaciones con el programa antimisiles que lanzaron los Estados Unidos, sistema que en su primer ensayo falló y cuya intención es derribar cualquier misil hostil que apunte contra su territorio. Pero para una mayor eficacia del “Escudo Antimisiles” necesitan coordinar la programación de satélites con las estaciones terrenas que estén en el área ecuatorial, que son las más adecuadas porque la órbita geoestacionaria permite un control efectivo de las comunicaciones. (APDH, 2002b:17) Todas las ventajas adquiridas por Estados Unidos al ocupar la base de Manta llevan a la conclusión de que el traslado del equipo destacado en Panamá hacia Ecuador fue muy favorable para la estrategia militar estadounidense: desde la base aérea de Howard en Panamá, se podía llegar hasta Ecuador pero no más lejos hacia el sur. Ahora, desde Ecuador, los aviones pueden llegar hasta Perú, Colombia y el Océano Pacífico y como Manta también es un puerto, fuentes militares indican que, además de los aviones, pueden ingresar varios buques de bajo calado.

Todo esto, sin embargo, ha estado oculto para los propios ecuatorianos: en julio de 2002, Larry Palmers, que abandonaba su cargo de embajador estadounidense en Ecuador, en la evaluación de su trabajo aseguró que gracias a los operativos realizados desde Manta se habían capturado a 505 personas y confiscado 153 aviones y barcos. Aseguró que entre enero de 2000 y septiembre de 2002 llegaron a Manta 35 buques de guerra, totalmente armados, incluso con misiles Tomahawk que se encontraban en operaciones de interdicción. Este informe fue toda una revelación: ni el Departamento de Soberanía Nacional ni el Departamento de Soberanía Marítima de la Cancillería del Ecuador conocían las actividades de los buques estadounidenses ni de los incidentes que tuvieron con embarcaciones ecuatorianas¹⁶⁸. (Saavedra, 2002:8)

¹⁶⁷ Para ejecutar la AirLand Battle se requiere tener bien cercado el objetivo, en este caso, el sur de Colombia, pero también bien equipadas las líneas exteriores que rodean al blanco. En torno al objetivo —Colombia— las fuerzas armadas de los países vecinos se han desplazado para formar un cerco estratégico. La base de Manta y los equipos espías y aéreos de los Estados Unidos han mantenido la misión de obtener y desarrollar un gran banco de datos para que el momento en que se inicien las operaciones militares a escala, **que están planificados para después de octubre de 2001**, cuando ya la base de Manta tenga acabada la pista que está siendo reforzada y entre en condiciones de operar. Toda esa información de Inteligencia será transmitida en tiempo real a la Base Militar de Tres Esquinas en Colombia, donde ya están listos los tres batallones ‘antinarcóticos’ con helicópteros y tecnología de punta para operar directamente sobre los efectivos de la insurgencia. Es asombrosa la coincidencia en tiempos de lo planeado por el Departamento de Estado estadounidense y la ruptura unilateral del diálogo en Colombia, lo que refuerza la tesis de que el diálogo sólo sirvió para ganar tiempo en la planeación de la guerra.

¹⁶⁸ El 6 de junio de 2002 desapareció el barco pesquero “Jorge IV”, que zarpó un día antes desde Manta con 18 tripulantes y que hasta ahora permanece desaparecido. Antes, en marzo del mismo año, el barco pesquero Daiki Marú fue interceptado por una fragata misilera estadounidense que patrullaba en aguas ecuatorianas. La embarcación fue abordada y los soldados

Encima de las ventajas geopolíticas obtenidas con el reposicionamiento estratégico de sus bases militares en la región andina, en Centroamérica y en el Caribe, las empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos, apuntaladas por el establishment estadounidense, se mantienen como las mayores vendedoras de estos productos a nivel mundial gracias en gran parte a la cruzada antidrogas que ha emprendido su país, que es más bien una coartada para no responder a la opinión pública internacional por la masiva producción de instrumentos de guerra en un mundo que, supuestamente, con el fin de la guerra fría, había alcanzado la paz.

El enfrentamiento entre distintos grupos de poder en Colombia en general y el Plan Colombia en particular muestran con claridad lo jugoso del negocio de las armas. En este país, hay 40 mil efectivos armados de las guerrillas; 10 mil paramilitares; 180 mil de la fuerza pública y más de un millón de colombianos que poseen armas de alto poder. (Vélez, 2001:59) Puesto que hay grupos armados al margen de la ley, muchas de estas armas entran de forma ilegal, generando un amplio mercado negro que se abastece mediante un tráfico está asociado a las rutas de los narcotraficantes. Así el ingreso ilegal de las armas a Colombia es por vía aérea, por las mismas rutas que utilizan los mismos aviones en los que se envía cocaína; por vía marítima, por el Golfo de Urabá, frontera con Panamá ; por vía terrestre, por la ruta de Ecuador (frontera norte), Brasil, Venezuela (frontera oeste) y Perú, lugar por donde llegaron hace ya unos dos años los fusiles de tipo AK-47 que Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori, les vendió a las FARC en una transacción que costó 15 millones de dólares. (Basombrio, 2003:182)

Gracias a unas declaraciones de Carlos Castaño, jefe político de las AUC, se sabe que existe una red de traficantes de armas procedentes de Surinam y Brasil que canjean fusiles AK 47, ametralladoras M60 y lanzagranadas de mano y de mortero por kilos de cocaína en lugar de dinero. Eso lo contó tras confesar que las FARC le arrebataron un cargamento de armas que venía procedente de China y que hizo escala en Brasil. La mayoría de las armas ilegales tanto de las FARC y ELN como de las AUC vienen de lugares remotos: Jordania, Rusia, China, Bulgaria Corea del Norte, Rumania y también de Centroamérica. Sin embargo, ello no significa que estos países sean los fabricantes de las armas que inundan el mercado negro: buena parte de este armamento es de fabricación estadounidense e israelí, país que, por cierto, es el máximo receptor de ayuda de ayuda de Estados Unidos en el mundo.

Por el lado legal están las armas que entran como apoyo directo a la lucha antidrogas. Hasta antes de la ejecución del Plan Colombia, Colombia estaba entre los primeros tres clientes directos del

extranjeros destruyeron todo su equipo de navegación, desarmaron el caso y arrestaron a los tripulantes pese a no haber encontrado droga. El Convenio de la Base de Manta establece que las acciones de interdicción en aguas ecuatorianas sólo pueden hacerlas la Marina Nacional pues en caso contrario se estaría violando la soberanía marítima.

gobierno estadounidense y entre los primeros de las compañías estadounidenses de armamento. Si ya con esta situación las compañías fabricantes de armas se veían beneficiadas, con el Plan Colombia su situación se ve aún más favorecida.

En enero de 2000, la revista *Time*, no precisamente caracterizada por criticar al establishment estadounidense, publicaba que los helicópteros caza-droga (fumigadores) Bell—fabricados por Bell Helicopter Textron— y Sikorsky —fabricados por United Technologies— que la administración Clinton mandó a Colombia para erradicar la coca y la heroína son justo los helicópteros para quienes sus fabricantes estaban buscando clientes hacía ya un largo tiempo ante la inminente amenaza de quiebra. La cuestión era fácil de entender: unos los necesitaban y otros los vendían. La Administración Clinton contemplaba el envío de 30 nuevos Sikorsky UH-60 BlackHawk, helicópteros de 10 millones c/u y 33 Bell UH-1 Hueys de la era Vietnam, de 1.5 millones cada uno.¹⁶⁹ Estos helicópteros son ideales para la misión: son capaces de sobrevolar la jungla a más de 160 kph y pueden aterrizar donde sea, además de que pueden rociar herbicidas letales. (Moreano, 2002:5) El sector de las armas vio muy bien desde el principio la intervención estadounidense como una mayor oportunidad de crecimiento. Por ello, a nadie extrañó el fuerte cabildeo de United Technologies y Bell Textron, junto con las petroleras, para que el Congreso aceptara el paquete de ayuda del Plan Colombia.

El 70% de los 1 300 millones de dólares del Plan Colombia fueron de uso estrictamente militar y se destinaron a la compra de 60 helicópteros de combate, la formación y el equipamiento de batallones del ejército especializados en la lucha antidrogas y el suministro de materiales sofisticados. De este monto, alrededor de 900 mdd retornaron directamente a los Estados Unidos ya sea a los fabricantes de material de guerra, ya sea al Pentágono que garantiza la formación de los militares colombianos o bien a las sociedades encargadas de las operaciones de fumigación de las plantaciones afectadas. De esta forma, los helicópteros comprados con dinero de los contribuyentes estadounidenses ni siquiera son donados al gobierno colombiano. Son helicópteros que siguen siendo propiedad de los Estados Unidos, de una institución que se llama Agencia de Cooperación para la Seguridad y la Defensa. La erogación final será así: United Technologies ganará 234 mdd por la venta de 18 helicópteros BlackHawk; la empresa Bell Textron de Texas, obtendrá 84 mdd por la venta de 48 helicópteros Huey. Al grupo Lockheed Martin le tocarán 68 mdd por la venta de radares. (*Ibidem*)

Según el Plan Colombia, la intención de rociar los cultivos ilícitos es desaparecerlos y con ello “eliminar el negocio de las drogas que financia a la guerrilla”; sin embargo, como hasta ahora se ha

¹⁶⁹En los ochenta, el UH-60 BlackHawk comenzó a reemplazar a los UH-1H Huey como el principal medio de transporte táctico del Ejército de los Estados Unidos. Fabricado por Sikorsky Helicopter (una división de United Technologies), un

visto, los helicópteros fumigadores forman parte de un esquema de guerra que pretende, en un primer momento, sacar a la guerrilla del territorio ocupado, sobre todo en el sur de Colombia, donde existen cerca de 79 mil hectáreas de coca, y en un segundo momento, hacerse de los territorios más ricos en petróleo y otros recursos naturales utilizando también la fumigación, pues los paramilitares se encargan de sembrar de cultivos ilícitos las zonas estratégicas. Siguiendo esta lógica de guerra química, podemos entonces asegurar que los herbicidas utilizados por los caros helicópteros estadounidenses son también armas.

Entre noviembre de 2000 y mayo de 2001 se hizo el bombardeo químico en 44 mil hectáreas, pero el total de hectáreas perdidas es de por lo menos un millón si contamos las que se deforestaron primero para sembrar drogas, las que fueron envenenadas luego mediante la fumigación y finalmente abandonadas para llevar más lejos los cultivos y las nuevas hectáreas sembradas. El gobierno estadounidense pagó 33 mdd por el herbicida y otros 35 mdd por gastos de operación a Monsanto —a quien si no—, compañía que produce el Round Up y Round, donador de la campaña presidencial de George Bush. A final de cuentas, por medio del negocio legal de las armas, los Estados Unidos subsidian a las compañías productoras de material bélico amparados en la noción de que la guerra es un buen negocio, sobre todo cuando se tiene una balanza comercial deficitaria. El fortalecimiento de la hegemonía estadounidense en América Latina y en los Andes y la cuenca amazónica, cruza así con dos de los negocios ilegales más grandes —el narcotráfico y el tráfico de armas—, cuyos mayores frutos son recogidos por los bancos estadounidenses¹⁷⁰ y los fabricantes de armas de la misma nacionalidad.

Sin embargo, los intentos de control y ocupación de los territorios más estratégicos de Sudamérica a partir de la construcción de un sistema infraestructural y el palpable avance militar de los Estados Unidos en la región andina y amazónica por medio de la ofensiva en Colombia han terminado por alterar la geopolítica regional donde un país que históricamente ha sido la potencia regional empieza a responder.

B. LOS CAMBIOS EN LA GEOPOLÍTICA REGIONAL

La planeación cuidadosa de la IIRSA así como su concreción paulatina ha trastocado completamente la correlación de fuerzas en Sudamérica pues ha puesto en evidencia el enfrentamiento

BlackHawk cuesta aproximadamente de 12 a 16 mdd. Un Huey regular se puede convertir en un “super” Huey con el kit que vende su fabricante, Bell, que cuestan una séptima parte de lo que cuesta un BlackHawk.

¹⁷⁰ Es muy conocido que el dinero de las drogas ayudó a los Estados Unidos a salir de sus dificultades en los años ochenta. Desde bancos de Suiza, las Bahamas y Panamá, el dinero era lavado y reintroducido a Estados Unidos a través de inversiones legítimas. Se dice que un buen número de bancos en Miami no solamente facilitó estas transacciones sino que fueron comprados por los propios narcotraficantes.

entre dos potencias, una mundial, Estados Unidos, y una regional, Brasil. Aunque el principal beneficiario de la construcción y modernización de una red infraestructural en los estratégicos países andinos y de la cuenca amazónica sea aquel país norteamericano a través de la presencia de sus corporaciones transnacionales y de sus tropas, lo cierto es que no es el único país que resulta altamente beneficiado de la iniciativa. Brasil ha sido uno de los países más interesados en la propuesta de la IIRSA, pues según cálculos del gobierno de este país, un mayor y mejor sistema de comunicaciones que integre físicamente los países aumenta las posibilidades de promoción del poder y los intereses brasileños en la zona. Sin embargo, esta misma promoción hace al país amazónico más susceptible de recibir golpes políticos provenientes de la potencia del norte. La confrontación por el liderazgo de la región no es nueva pero se ha vuelto más clara desde que el gobierno de Brasil ha adoptado una posición muy firme respecto a las intenciones de Estados Unidos de establecer un área de libre comercio en las Américas, el ALCA.

Dado este contexto y aun cuando este trabajo se centra en las relaciones guardadas entre la ejecución de la IIRSA y la política exterior norteamericana en un contexto de crisis de sucesión hegemónica y de vulnerabilidad estratégica, resulta necesario e insoslayable explicar la forma en que esa iniciativa altera las relaciones de poder en la región y conjunta pero al mismo tiempo confronta los intereses de Brasil con los de Estados Unidos. De esta forma este capítulo tendrá por objeto, primero explicar la situación de Brasil con relación a los países andinos con los que comparte la cuenca amazónica y las históricas pugnas entre Brasil y Estados Unidos por el control de la Amazonia. En segundo lugar, se revisarán los problemas que impone a los intereses brasileños en la región el binomio ALCA-IIRSA, el cual ha venido minando su poder, así como la manera en que este problema de lucha de poder y cambio en la correlación de fuerzas se maneja en el plano del 'libre comercio', donde se hace más manifiesta esta lucha geopolítica regional en la que Brasil no está dispuesto a dejar de ser potencia regional pero tampoco a volverse enemigo de una poderosa gran potencia.

a) EL LUGAR DE BRASIL EN LA GEOPOLÍTICA REGIONAL

Sin lugar a dudas, Brasil puede ser caracterizado como una potencia media de la sociedad internacional y como la mayor potencia de la región sudamericana. De acuerdo a estudiosos como Cristina Rosas, Brasil es una potencia media, en primer término, por el tipo de influencia económica y militar que establece en la relación con sus vecinos; y porque entre sus prioridades geopolíticas, de expresión de poder al exterior se encuentra el desarrollo interno. Es la mayor potencia de Sudamérica

porque sus capacidades políticas y económicas —es la segunda economía en el continente americano después de Estados Unidos— generan el temor en los países vecinos, el temor al “expansionismo brasileño”. Brasil da una gran importancia al desarrollo tecnológico, que se relaciona con la fabricación de sistemas de armamento, esfera en que Brasil es líder entre los llamados países del Tercer Mundo y dirige sus exportaciones al Medio Oriente y África. Además, este país pone énfasis en la seguridad y la defensa basándose en las mejoras cualitativas en ámbitos como el armamento, las comunicaciones y la infraestructura militar. (Rosas, 2002a:79)

Hablando de Brasil, Harvey Summ, quien analiza el desenvolvimiento mostrado por el país sudamericano a partir de la década de los 60, advierte sobre los recursos de poder en posesión de los brasileños y subraya las aspiraciones de “grandeza” de esa nación, aunque lo cierto es que dichos deseos no han podido concretarse. En 1960 el presidente Juscelino Kubitschek de Brasil presidió el cambio de la capital del país de Río de Janeiro a la recién creada y moderna Brasilia. Él utilizó el eslogan “el progreso de 50 años en 5” (en referencia a la duración de su periodo presidencial) para concretar las aspiraciones largamente acariciadas por el país de colocar la capital en su meseta central. Los líderes militares que tomaron el poder en 1964 intentaron seguir el sueño de Kubitschek. Creían que a diferencia de la mayor parte de los países en desarrollo, el suyo era un candidato a la grandeza. Los hombres de negocios y los miembros de la clase media con los que los militares compartían éstas y otras ideas, consideraban que su país cumplía con todos los prerrequisitos —tamaño, población y ubicación geográfica— para convertirlo en la gran potencia capitalista del Atlántico Sur en 30 o 40 años. Ellos asumían a la segunda mitad del siglo XX como un periodo crucial en el que Brasil concretaría esa transformación a través de altas tasas de crecimiento. (Rosas, *Op. Cit*:89) Sin embargo, a pesar de que se lograron avances aceptables en el afianzamiento de su poder en la región, a falta de recursos económico-financieros, Brasil no ha terminado por consolidar su hegemonía en Sudamérica.

A pesar de que en la actualidad la diplomacia brasileña es reconocida internacionalmente por ser extremadamente profesional y cuidadosa en su discurso, las acciones de política exterior de Brasil en Sudamérica durante el gobierno de los militares golpistas no dejan de tener rasgos imperialistas, lo que explicaría la actual reticencia de los vecinos a aliarse a Brasil contra los intereses norteamericanos. Atendiendo a sus planes de expansión, durante las décadas de la dictadura, Brasil actuó basado en los que se consideran los fundamentos de la diplomacia de Itamaraty para América del Sur: la ‘Doctrina del Cerco’ y la tesis de la guerra ideológica preventiva. Una muestra de lo esto se puede encontrar en lo sucedido en Bolivia cuando en 1971 Brasil ayudó a los militares a llegar al poder.

Bolivia, estratégico territorio que permitía el avance de Brasil hacia el Pacífico, no podía estar gobernado por un régimen contrario al brasileño. No obstante, la única opción viable para evitar la

intervención directa y ostensible por parte de Brasil en Bolivia era que los propios bolivianos *demócratas*, con ayuda de Brasil, se librasen del régimen. De esta forma, el gobierno brasileño se puso en consonancia con las doctrinas del Pentágono, que justificaban el uso de las fuerzas armadas de los países más débiles para su propia ocupación. Los militares brasileños estaban convencidos de que el desarrollo, la estabilidad y la seguridad de Bolivia determinaba el progreso sus propias regiones fronterizas. Por eso, la intervención incluso directa y armada estaba plenamente justificada. Pero la injerencia de Brasil en Bolivia no terminó ahí: además de apoyar un golpe que finalmente triunfó, Brasil incentivaba el sentimiento separatista vigente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. A lo largo de la historia y hasta la actualidad esta región ha estado sometida a un intenso proceso de infiltración por parte de los colonos y hacendados brasileños, proceso idéntico al que ocurrió en la Amazonia Brasileña, cuyas tierras fueron compradas en forma masiva por empresarios norteamericanos.

El interés de Brasil en esa región era conseguir la venia del gobierno boliviano para la explotación conjunta de los recursos del Río Madeira, la investigación conjunta de los recursos minerales de la región de las lagunas Mandiore y Gaíba y varios proyectos industriales que estuvieran en consonancia con los planes de Brasil de ser una potencia capitalista, como el de la construcción de un gasoducto que llevara el combustible de Santa Cruz a Brasil, que no ocurrió dados los altos costos que generaba la obra y que Brasil no podía pagar. Cabe agregar que este gasoducto es el mismo de cuya ampliación se ha estado hablando en los planes de la IIRSA, aunque ahora se incluya no sólo aumentar el volumen de gas y la distancia hacia Brasil sino también el plan de exportarlo a Estados Unidos.

Aunque en los planes de los militares brasileños el control del Atlántico Sur y la presencia brasileña en el Río de la Plata tienen un carácter prioritario, la posibilidad de llegar al Pacífico ha sido siempre uno de los objetivos fundamentales. A decir de los militares brasileños, como una de las causas fundamentales de la influencia de los Estados Unidos como potencia mundial radicaba en el hecho de tener acceso a las costas de los dos grandes océanos, los teóricos del subimperialismo brasileño consideraban seriamente la hipótesis de una salida al Pacífico para Brasil: “Los Andes pueden significar una barrera física importante pero no significa que sean intransponibles (sic)” (Schilling, *Op. Cit.*:74). Con la conquista política de Bolivia surgía para Brasil la oportunidad de llegar al Pacífico, lo que se conjugaba con el viejo sueño boliviano sobre la construcción del ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz capaz de empalmar con los sistemas que llevan a Santos, en el Atlántico, y a Arica, en el Pacífico. Ese propósito estaba directamente vinculado a los propósitos de una salida al mar que Bolivia anhela desde que Chile lo venció en la guerra del Pacífico. Sin embargo, los brasileños sabían que aun cuando logran construir esa vía nada les aseguraba su presencia en Arica, el puerto anexado por Chile. Es

importante decir que la actual posibilidad de extenderse hasta el Pacífico a través de múltiples vías, no sólo la boliviana, es otra de las ventajas que la construcción de la IIRSA ofrece a Brasil.

Bolivia no era el único país sudamericano afectado por el intervencionismo brasileño ni el único trampolín para la consolidación de su hegemonía en la región. En 1973 Paraguay y Brasil firman el Tratado de Itaipú con el que comprometen a la construcción de la represa de Itaipú en el río Paraná, sobre la frontera de los dos países y cerca del límite con Argentina. Con la capacidad de 12.6 millones de kilowatts, estaba preparada para ser la más grande del mundo. (CAF, 2000:34) La construcción de esta presa tiene un trasfondo geopolítico de enorme significado, ya que trasciende los ámbitos nacionales de los dos países e involucra a los demás países de la Cuenca del Plata, especialmente a Argentina, aunque por constituir esta Cuenca uno de los más importantes y ricos “espacios vacíos” del mundo, su futuro interesa a toda Sudamérica. Con sus 3.5 millones de km², la cuenca del Río de la Plata es la sexta más grande del mundo y la tercera de América Latina después de la Amazónica y la del Orinoco. Sus principales ríos —Paraná, Paraguay, Uruguay y el Plata— y sus afluentes proporcionan a la economía de la región 15 mil kilómetros de vías navegables y constituyen *la única salida natural al mar para Bolivia* y Paraguay, países mediterráneos, y para importantes regiones de Brasil y la Argentina.

Considerando su inmensa riqueza natural —desde el potencial hidroeléctrico mencionado hasta las minas de hierro de Mutín y Urucum, calculado en 60 mil millones de toneladas, y el gas boliviano, pasando por la pampa húmeda argentina, por las reservas forestales de Paraguay y Mato Grosso y por el Pantanal de ese estado brasileño, que comparte con Bolivia— la región puede ser considerada junto con la amazónica y la del Orinoco, una de las más ricas del mundo. Los estrategas brasileños sabían que las posibilidades de desarrollo en esta región se potenciarían en caso de concretarse en el futuro la conexión de la cuenca con las del Amazonas y Orinoco, posibilidad que era absolutamente factible y relativamente económica. Con un sistema de grandes lagos, el continente sur sería cortado desde el Caribe hasta Montevideo, en el Atlántico, por una vía navegable para barcos de mediano calado. América del Sur tendría así un tercer litoral. Como se puede apreciar, los planes para la construcción de una vía Orinoco-Amazonas-Plata no son nuevos. Hace ya varias décadas que Brasil tiene planeado controlar las más importantes hidrovías del subcontinente pero la falta de dinero le ha venido impidiendo la concreción de sus planes, lo que se ha convertido ya en una constante en la historia de este país. Si Brasil, principal interesado en la conexión fluvial de Sudamérica, tampoco tiene capacidad ahora para hacer frente a proyectos de la envergadura de la IIRSA, no deja de llamar la atención que sea ahora, en plena crisis de sucesión hegemónica, y no hace años que este plan por fin pueda ver la luz.

Desde el punto de vista geopolítico, la región del Paraná presenta la siguiente situación: está integrada por dos países grandes, Brasil y Argentina, con no disimuladas tendencias expansionistas y tres países chicos: Uruguay, Bolivia y Paraguay. Estos dos últimos son países mediterráneos, sin salida al mar. Pero de todos los países de la región, el que menos depende de la cuenca para su desarrollo es Brasil. Teniendo en su territorio la parte mayor y más importante de la cuenca amazónica (4.5 millones de kilómetros cuadrados); un gran litoral de 7.4 mil kilómetros, muy bien ubicado en relación con Estados Unidos, Europa y África; un potencial hidroeléctrico que puede alcanzar, descartando el que le corresponde a la Cuenca de la Plata, 100 millones de kW; e incalculables recursos naturales, vegetales y minerales (*Ibidem*), Brasil podría darse el lujo de volver la espalda al río Paraná sin comprometer sus posibilidades de desarrollo pleno. Sin embargo, es Brasil quien tiene, en relación con el conjunto de ríos que forman la Cuenca de la Plata, la posición clave en la región, lo cual lo vuelve particularmente importante en la geopolítica sudamericana. El principal río, el Paraná nace en su territorio y aporta el mayor caudal de aguas. Brasil tiene en sus manos la posibilidad de obstaculizar o desviar el agua del río. Paraguay es el segundo país mejor ubicado en lo relativo al aprovechamiento de las aguas del Paraná, por lo que se dice que Paraguay dispone de la llave de paso. Bolivia posee el otro gran potencial económico de la región: los yacimientos de hierro de Mutún y las grandes reservas de gas. De la explotación conjugada de esos dos elementos podría resultar el mayor complejo siderúrgico del mundo.

En este contexto, Argentina es la que más riesgos corre con el aprovechamiento de las aguas de los ríos de la cuenca. La eventual ruptura de uno de los diques que ya represan, podría tener trágicas consecuencias para los este país de la desembocadura del Plata. Pero antes de los intereses de Argentina están los de Brasil, que tiene urgente necesidad de ampliar su capacidad energética si quiere cumplir sus ambiciosos planes de desarrollo. La solución para reducir el peligro de un déficit se encuentra en el aprovechamiento del enorme potencial eléctrico existente en primer lugar porque la energía así generada es mucho más barata; en segundo porque Brasil no ha conseguido desarrollar plenamente la explotación de sus reservas de hidrocarburos, ya que hasta el día de hoy importa una gran parte del petróleo que consume. Lo que es realmente discutible y cuestionable es la conveniencia de construir la presa de Itaipú cuando Brasil dispone en su vasto territorio de posibilidades de instalar otras presas. Además, la construcción de esta presa dificultó la navegación. Entre la navegabilidad del Paraná y la creación de energía eléctrica hasta cierto punto innecesaria, el gobierno brasileño escogió la segunda, lo que se tradujo, además, en un intercambio agresivo de notas diplomáticas entre este país y Argentina.

Amén de que se tenga el dato de que la empresa que ha venido operando Itaipú es privada y parte de su capital es norteamericano, la decisión tomada por los militares brasileños no deja de parecer extraña, sobre todo porque en el mediano plazo afectaba las posibilidades de la integración fluvial sudamericana y porque, en este litigio brasileño-argentino, los Estados Unidos apoyaron a Brasil. El gobierno de este país pareció olvidar que en el caso del Río Amazonas, mucho más importante que el Paraná, el control de las aguas está en manos de Perú otro país amazónico y que si los Estados Unidos controlan el nacimiento del Marañón peruano, afectarían toda la fluvialidad brasileña. Así, sólo existe una explicación para entender la lógica de los militares brasileños en el bloqueo a Argentino a través de la presa de Itaipú: la denominada 'Doctrina del cerco', según la cual las acciones de política exterior brasileña deben partir "de la tendencia del proceso histórico de encontrarse Brasil rodeado por regímenes hostiles, a los que tendrá que enfrentarse tarde o temprano". (Schilling, *Op. Cit.*:147)

Así como la consideración sobre el control de los ríos está presente en el planteamiento geopolítico brasileño de la posguerra, la planeación de los caminos en la cuenca amazónica así como el dominio sobre los mismos también se puede rastrear. Dentro de la estrategia brasileña, la integración vial —carretera y ferrocarrilera— ha tenido una importancia fundamental. Con la construcción de la carretera Transamazónica, la Cuiabá-Santarém, la Perimetral Amazónica y la Brasilia-Caracas, que en la actualidad ya están cortando la Amazonia brasileña en todos los sentidos, se procuró integrar toda la cuenca —la más grande del mundo— a la economía brasileña; llegar al Pacífico mediante la conexión con los sistemas viales de Perú y Ecuador; y establecer la presencia de Brasil en el Caribe con los sistemas viales de Venezuela y la Guyana. También, entre los proyectos que se manejaban ya en esos años encontramos la conexión de los dos sistemas ferroviarios bolivianos con la construcción del tramo de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba, que con sus 300 km establecerá la vinculación de Santos, en el Atlántico, con Arica en el Pacífico y la carretera La Paz-Brasilia.

Con la construcción de Brasilia y de la carretera Belém-Brasilia, Juscelino Kubitscheck inició una nueva etapa: la conquista de la Amazonia seca, la terrestre. El objetivo principal era colonizar el interior de Brasil, ocupando gradualmente las tierras en la dirección Oeste, asignando preferencia a la ocupación de tierras fronterizas. Para eso se planeó la construcción de tres carreteras: la Transamazónica, la Perimetral Norte y la Cuiabá-Santarém. La pionera de estas carreteras es la Brasilia-Acre, que se divide en tres tramos fundamentales: la Brasilia-Cuiabá, que va hasta Porto Velho y se sigue hasta la frontera con Bolivia, en Guajará Mirim. En Abuña, a 216 km de Porto Velho, la carretera se bifurca siguiendo el segundo tramo hasta Río Branco, capital del estado de Acre y de ahí hasta la frontera con Perú. Algunos conocedores del tema como Bertha M. Becker dicen que la intención principal de Brasil era penetrar en los mercados de los países andinos para integrarlos a la

economía brasileña. (Becker, *Op. Cit:*48) Durante largos años estas carreteras han promovido la integración de las regiones del oeste brasileño y la franja oriental de los Andes a la economía atlántica, como la Transamazónica, que partiendo del litoral del Nordeste brasileño, alcanza también la frontera peruana en la ciudad de Pucallpa, pretendiendo entroncar con el sistema del país andino que lleva al puerto de Callao en el Pacífico.¹⁷¹

La Perimetral Norte presentaba un carácter estratégico militar y económico todavía más evidente: partiendo del Amapá, el que fue mucho tiempo territorio de la transnacional Bethlehem Steel Co., corre a lo largo de las fronteras de la Guayana Francesa, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, llegando a una extensión de la misma hasta Cruzeiro do Sul, en la frontera con Perú. Como la principal vía para alcanzar el Caribe implicaba a Venezuela, en 1973 se firmaron los contratos para la construcción de la carretera Brasilia-Caracas. El objetivo de esta carretera era también transformar a Manaus en uno de los principales polos económicos del continente. Así, la carretera que parte de Manaus hacia Boa Vista, en el norte de Brasil, se bifurca: el primer tramo alcanza la frontera con Guyana con el objetivo de llegar a Georgetown; el segundo tramo llega a la frontera con Venezuela y lleva, a través de la carretera Santa Helena-Ciudad Bolívar-Caracas, a la capital venezolana.

Otra de las ventajas de la integración vial con sus vecinos andinos radica en que de esta forma, Brasil podría acercarse a la fuente de energéticos que representan Venezuela y Colombia. Uno de los principales objetivos brasileños en el norte de Sudamérica es el petróleo venezolano y el carbón colombiano. Brasil sufre de deficiencias energéticas específicas que constituyen serios obstáculos a su desarrollo como potencia industrial. La dependencia del petróleo es muy grande y la falta de carbón mineral constituye otra debilidad de la economía brasileña. No resulta fortuito que en su momento, tanto Colombia como Venezuela y Perú cerraran a Brasil las puertas del Pacto Andino, temiendo la firma de compromisos obligados por la presión militar brasileña tan cercana.

Pero para perfilarse como potencia regional Brasil no sólo ha tenido que impulsar la integración física imponiendo sus intereses o negociando con sus vecinos para conseguir sus objetivos geopolíticos y para lograr el control del geoestratégico espacio amazónico. A través del tiempo, Brasil ha tenido que enfrentarse a los intentos estadounidenses de ocupar la Amazonia brasileña, ya sea aliándose con el país norteamericano, como en el caso de los gobiernos militares, u oponiéndose, como en los gobiernos nacionalistas y en los actuales. En esos enfrentamientos donde la mano norteamericana se hizo patente,

¹⁷¹ El gobierno de Lima obstaculizó esta posibilidad brasileña de establecer su presencia en el Pacífico. La Transamazónica, con sus casi 5 500 kilómetros de extensión, tenía como objetivo fundamental alcanzar el Pacífico. Como los militares peruanos se negaron a conectarla con el sistema vial peruano en Pucallpa, la monumental obra terminaba en la selva. No se debe olvidar tampoco que al negociar la firma del Acuerdo de Cooperación Amazónica en 1978, la principal oposición fue

además, se redefinieron las fronteras amazónicas y, como ahora con la IIRSA, se alteró la correlación de fuerzas regional.

La primera tentativa norteamericana de “internacionalizar” la Amazonia de Brasil se registró en 1853. El teniente Mathew Fontaine Maury, jefe de los servicios hidrográficos de los Estados Unidos, decía que el estar Pará, uno de los estados Brasileños, más cerca de New York que de Río de Janeiro y por ser más fáciles los transportes hacia el Norte, se debería internacionalizar la navegación de toda la cuenca. La idea fue oficializada por Washington y el 31 de octubre de 1853 el embajador de ese país presentó a Brasil la reivindicación del Amazonas como vía internacional. La respuesta de Brasil fue negativa. (Moniz, 2003:72) El interés norteamericano para navegar por el Amazonas y sus afluentes por regiones prácticamente desiertas y sin ningún aparente atractivo comercial radicaba en la rentable explotación de la *hevea brasiliensis*, la *seringueira*, la planta productora de caucho.

En 1899 la cañonera Wilmington aparcó en Belem en aparente misión de amistosa y tomó rumbo a Tabatinga e Iquitos furtivamente, sin esperar el permiso del gobierno brasileño. El gobierno brasileño estaba seguro de que esta acción norteamericana estuvo animada por la facilidad con la cual se hicieron de Cuba frente a España. Se tenía la certeza de que las intenciones de los norteamericanos estaban basadas en un acuerdo hecho por el presidente William McKinley con Bolivia, cuyo ministro plenipotenciario había firmado un documento donde autorizaba a los Estados Unidos a defender sus derechos sobre el territorio de Acre, Purus y el Iaco en la Amazonia en caso de guerra con Brasil. Pocos meses antes del viaje de la cañonera, Bolivia envió una expedición para ocupar el territorio de Acre, poblado entonces por brasileños ya que los bolivianos nunca ocuparon efectivamente la parte que le correspondía de la Amazonia debido a las dificultades de acceso o al hecho de que la mayor parte de su población se asentaba en el Altiplano.¹⁷² Cuando llegó la cañonera, el ministro plenipotenciario de Bolivia pasó por Manaus y después de ondear en el Acre la bandera de su país estableció la navegación internacional por varios ríos, cuyos trechos navegables estaban de lado de Brasil. Esa medida enojó el gobierno brasileño, quien prohibió la navegación de barcos bolivianos en los ríos de su país.

protagonizada por los representantes de Perú y Bolivia, quienes objetaron especialmente la expresión “integración física” contenida en el proyecto de Itamaratí.

¹⁷² El Acre nunca fue habitado hasta que los brasileños comenzaron a poblar ese valle. El poblamiento de esta región tomó especial impulso después de la gran sequía de 1877 en el nordeste brasileño, región donde empezaron a reclutar campesinos como fuerza de trabajo disponible para emplearlos en la extracción de caucho, materia prima cuyo consumo por las industrias de Estados Unidos y Europa, en virtud de la técnica de la vulcanización, aumentaba rápidamente, volviéndose una de las principales fuentes de divisas brasileñas, dado que la *Hevea brasiliensis* sólo existía en las selvas de la Amazonia. En 1900 cerca de 60 000 brasileños habitaban el Acre y las exportaciones para Estados Unidos sumaron 16. 999, 345 mdd contra 7. 569.005 en 1889, transformando a Belém y a Manaus en dos grandes centros de comercio exterior de Brasil. (Moniz, *Op. Cit:*78)

Aunado a este problema encontramos que en el territorio del Acre Bolivia había otorgado privilegios a la compañía de caucho Bolivian Syndicate, que congregaba a las firmas Cary&Withridge, United States Rubber Company y Export Lumber, en cuyo consejo de administración se encontraba W.E. Roosevelt, primo de Theodore Roosevelt. Esta compañía tenía derechos soberanos sobre el territorio, como el de mantener a la Policía, equipar una fuerza armada propia o barcos de guerra para la defensa de los ríos y la conservación del orden interno. Esta situación no gustaba a Brasil, pues implicaba el control de una empresa transnacional sobre una vastísima área que dominaba gran parte del alto Amazonas y la ponía en manos de hombres de negocios de los Estados Unidos, tan sospechosos en la época en todo el continente por las tendencias imperialistas de su política de Big Stick,¹⁷³ de la diplomacia del dólar¹⁷⁴ y de la diplomacia de las Cañoneras.¹⁷⁵

Ante la posibilidad de iniciar hostilidades con Bolivia apoyada por Estados Unidos ya que el impedimento de navegación de las naves bolivianas por el Amazonas afectaba a la Bolivian Syndicate, Brasil propuso comprar el Acre para impedir definitivamente la tentativa de esa empresa para establecerse en esa región, aun cuando tuviera que indemnizar a la compañía. En un principio, Bolivia se resistió, lo cual agravó el problema. Sin embargo, la buena gestión de la diplomacia brasileña, que evitó la intervención norteamericana y un litigio con árbitros internacionales que hubieran involucrado la acción de otras potencias como Gran Bretaña en el conflicto, logró que se firmara el 18 de noviembre de 1903 el Tratado de Petrópolis, mediante el cual Brasil adquirió cerca de 170 mil km² cambiando por un área de 3 200 km² (cerca de 2 500 km² excluidos de agua) y dos millones de libras esterlinas. Sin embargo, todo esto no acabó con la cuestión del estado de Acre. Perú, que hacía menos de tres décadas había perdido a manos de Chile en la Guerra del Pacífico las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica, no se conformó con la reducción de su territorio y al reivindicar propiedad en la zona en conflicto de la Amazonia, pretendió participar en las negociaciones con Bolivia a fin de que hubiera un

¹⁷³ Se le denominó así por el famoso dicho de Theodore Roosevelt: "Habla suavemente y lleva un buen garrote y así llegarás muy lejos". Proclamado en 1904 como un enunciado de Estados Unidos para regular su dominio en el Hemisferio Occidental tras la guerra contra España en 1898, el corolario Roosevelt transformó la Doctrina Monroe en un enunciado de defensa contra la incursión de los europeos en América inspirado en las teorías "geopolíticas" de Alfred Mahan, pues como él, creía que el poder marítimo, antes que el poder terrestre, era la llave para el control político en el ámbito internacional. Así, inventó Panamá para quedarse con el Canal, se aseguró del establecimiento de la Enmienda Platt en Cuba y estableció bases navales a lo largo y ancho de Centroamérica y el Caribe amparado además en la llamada diplomacia del gran garrote ("Big Stick") otra de las joyas reservadas por Theodore Roosevelt para los países de América Latina.

¹⁷⁴ Otra muestra más de que desde el siglo XIX la política exterior de los Estados Unidos fue dirigida y estuvo orientada en función de los intereses de sus nacientes corporaciones es la denominada "Diplomacia del Dólar" (Dollar diplomacy), desarrollada en la presidencia de William Taft quien sucedió a Roosevelt como presidente en 1909 y cambió la política de los Estados Unidos hacia América Central.

¹⁷⁵ La Gunboat Diplomacy o diplomacia de las Cañoneras fue creada por los británicos para promover sus designios imperiales en todo el globo. Colocaban cañoneras en las costas de los países rebeldes y amenazaban siempre con intervenir militarmente a aquellos que se oponían a sus deseos. Este tipo de 'acciones diplomáticas' fue retomado por los Estados Unidos.

arreglo tripartita. Tras muchos problemas entre ambos países, al final Brasil formuló la propuesta en la que cedía a Perú un área triangular considerable formada por los ríos Curanja, Santa Rosa y Purus. El gobierno de Lima estuvo de acuerdo y en 1909 el ministro peruano firmó un Tratado que permitió a cambio a Brasil extender su soberanía sobre una superficie de 152 000 km², cinco veces mayor que Bélgica y un poco mayor que Inglaterra.

En las primeras tres décadas del siglo XX la invasión de la Amazonia brasileña por parte de empresas interesadas en sus inmensos recursos naturales fue una constante. La Standard Oil consiguió en 1922 con carácter de exclusividad la concesión de un área de 1 794 549 km² en el estado de Amazonas para sus subsidiarias. La Ford Motor Company obtuvo la concesión de un millón de hectáreas para que hiciera una plantación de hevea. En 1930, con excepción de la región de Roraima y de la ciudad de Manaus, la capital, todo el estado del Amazonas estaba en manos de empresas extranjeras. Esa etapa de ocupación de la Amazonia terminó con la victoria de la revolución nacionalista de 1930. La Amazonia pasó a concentrar de nuevo la atención durante la II Guerra Mundial, cuando se intentó recuperar la producción de caucho para abastecer a los países aliados, pero no se presionó al gobierno. Terminada la guerra, el gobierno y los monopolios norteamericanos volvieron a concentrar sus miras sobre la Amazonia.

La caída de Vargas y la ascensión del mariscal Eurico Gaspar puso las condiciones propicias para nuevas incursiones y otra tentativa de internacionalizar esta zona se verificó en 1948. Bajo el patrocinio de la UNESCO, en una reunión realizada en Iquitos, se aprobó la organización del Instituto de la Hileia Amazónica, un organismo multinacional constituido por diecisiete naciones, destinado a la investigación científica y a la explotación de los recursos naturales de la región. Este Plan significaba la enajenación gradual de la mitad del territorio brasileño y de partes considerables de otros países de la Cuenca. El regreso de Vargas al poder impidió la ejecución del Plan. En 1965, un acuerdo establecido por Roberto Campos, el Ministro de Planeación del gobierno de Castelo Branco, con la Academia Nacional de Ciencias de Washington, resucitó el proyecto de la internacionalización de la Amazonia. Ésta sería colocada bajo el control de un organismo internacional dirigido por una Junta Ejecutiva con sede en Puerto Rico y por un Consejo Deliberativo que sería instalado en Washington. La nueva tentativa fracasó porque el gobernador del Estado de Amazonas, César Ferreira, se negó a firmarlo. (Schilling, *Op. Cit:*35) Pero mientras fracasaban los proyectos de ocupación total y planificada de la Amazonia, prosperaban los planes más modestos, a nivel empresarial o individual, menos publicitados pero no menos eficientes en el sentido de conseguir el objetivo final: la ocupación de la Amazonia.

Por el acuerdo de aerofotogrametría firmada por Brasil y por Estados Unidos luego del golpe de 1964, los aviones de la Geographic Division of the United States Army pasaron a fotografiar todas las

áreas del territorio brasileño que interesaban, por uno u otro motivo, a las autoridades militares brasileñas o a los monopolios norteamericanos. Utilizando los más modernos procesos, los aviones consiguieron detectar la presencia de materiales radiactivos y otros minerales hasta cierta profundidad del subsuelo. En ese año el profesor Ovídio Gouveia da Cunha, de la Universidad Nacional Fluminense, denunciaba la colocación por parte de una ‘potencia occidental’ de un satélite fijo sobre la Amazonia para investigar las riquezas de la región y sus posibilidades como refugio en la eventualidad de un conflicto atómico. (Gómez, *Op. Cit.*:12) De esta forma, si inicialmente era el caucho el factor dominante de la codicia internacional por el Amazonas, tras este estudio los atractivos económicos que impulsaron las tentativas de ocupar la Amazonia brasileña fueron más amplios: los yacimientos minerales de hierro, de manganeso, de bauxita, de estaño, etc., que están entre los más grandes del mundo y muy bien ubicados con relación a Estados Unidos y Europa Occidental; la seguridad de la existencia de petróleo, ya descubierto y en vías de explotación en regiones de la Amazonia no brasileña; las maderas y otras esencias vegetales proporcionadas por la selva amazónica que representan el 20% de las reservas forestales del mundo¹⁷⁶; la posibilidad de transformar la Amazonia en la mayor región ganadera del mundo; y el potencial hidroeléctrico del río en Brasil.

Así, mientras los gobiernos nacionalistas hicieron lo posible para frenar los planes norteamericanos de ocupación de la región, los gobiernos militares establecieron una especie de alianza con el gobierno norteamericano para promover sus intereses en la región. Así, al mismo tiempo que los militares brasileños convirtieron a la Amazonia de su país en un área totalmente militarizada con una orientación hacia la ocupación efectiva y con igual criterio construían las grandes carreteras amazónicas, ejecutaban planes migratorios internos que proporcionan mano de obra barata a las compañías norteamericanas establecidas en la zona y planeaban controlar no sólo la parte brasileña de la Amazonia sino toda la cuenca. De esta forma, en las décadas siguientes al golpe militar, Brasil se transformó en el aliado preferido de Estados Unidos en el continente sur. Con el gobierno de Juscelino Kubitschek, la tentativa de establecer un condominio estadounidense-brasileño sobre América del Sur se cristalizó en el Proyecto de la “Operación Panamericana”, que convertía a Brasil en lo que la geopolítica clásica denomina “país subimperialista”. Así, durante la dictadura en este país, el subimperialismo se tornó la estrategia oficial de política exterior en parte gracias a que Estados Unidos incentivaba las ambiciones brasileñas de liderazgo en el continente sur.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Concluidos los trabajos de levantamiento aerofotogramétrico del estado de Pará, se verificó la existencia de maderas de ley y nobles por un total de 2.5 mil millones de pies cúbicos.

¹⁷⁷ El presidente Franklin Delano Roosevelt llegó a proponer a Brasil como sexto miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Como se puede ver, las relaciones establecidas entre Brasil y Estados Unidos han estado marcadas por el sello del gobierno que despache en el país amazónico. Así, mientras en la década de los 20 se permitió la penetración de la banca norteamericana y el hecho de que el estado de Amazonas fuera loteado en beneficio de las subsidiarias de la Standard Oil y la Ford consiguió enormes concesiones territoriales para sembrar el árbol del caucho, los años siguientes significaron un retroceso en el acercamiento con los norteamericanos pues el gobierno de Getulio Vargas se caracterizó por su nacionalismo, aunque no pudo evitar la firma de los ‘Acuerdos de Washington’, mediante los que Brasil se comprometía a proveer a los Estados Unidos de materiales estratégicos y alimentos por precios congelados así como a garantizar el abastecimiento de materias primas vitales como minerales, caucho y alimentos y la cesión de las estratégicas bases aeronavales del Nordeste brasileño, que permitieron un puente aéreo hacia África.

Sin embargo, esta situación de oposición de resistencia a las exigencias norteamericanas al interior del país cambió nuevamente con el regreso de los militares brasileños que fueron a la II Guerra Mundial, que una vez en Brasil derrocaron a Vargas. Desde entonces Brasil fue considerado un país clave de América Latina, con un régimen militar que se convirtió en un instrumento del imperialismo norteamericano. Sin embargo, los cambios estratégicos globales así como el fin de la dictadura en Brasil cambió considerablemente el escenario actual, donde la mayor parte de las iniciativas brasileñas en el exterior se sitúan en el plano de las negociaciones comerciales y en la búsqueda de una activa coordinación política con otros actores de la política mundial, dándole especial énfasis a sus vecinos sudamericanos.

b) LA IIRSA Y EL LIBRE COMERCIO REGIONAL

Una de los objetivos más importantes de la política exterior estadounidense a lo largo de su historia como nación y sobre todo ahora, cuando la gran potencia se enfrenta a una crisis de sucesión hegemónica, ha sido evitar el surgimiento de una nación latinoamericana o un conjunto de ellas que rete el liderazgo hemisférico de los Estados Unidos. Tras el fin de los regímenes militares, las relaciones entre ambos países cambiaron; Brasil dejó de ser el aliado incondicional y su política exterior empezó a perfilar un rasgo mantenido hasta ahora, en el gobierno de Luis Inacio da Silva: si bien los gobiernos brasileños desean tener una buena relación con los Estados Unidos, también buscan una política de afirmación concreta de la defensa de sus intereses nacionales. (De Almeyda, 2004) La diplomacia brasileña se reactivó y en el contexto regional buscó la complicidad de sus vecinos para

hacer frente a los cambios de la economía internacional organizando el MERCOSUR (Mercado Común del Cono Sur) mientras en el contexto mundial se ha convertido en un activista del multilateralismo que busca ser líder del llamado ‘mundo en desarrollo’ junto con países como la India y China.

Atendiendo a ello, los Estados Unidos están haciendo lo posible por destruir el esfuerzo que significa la organización del Mercosur, intento de integración económica subregional entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y por acabar con las pretensiones brasileñas de negociar la integración al ALCA no como país sino como líder de bloque comercial. No hay que dejar de lado, además, el hecho de que Brasil, líder indiscutible del Mercosur y economía más grande de América Latina, ha tendido los últimos años a activar su política comercial con la Unión Europea, acción que ha sido muy mal vista en Washington. La confrontación entre Brasil y los Estados Unidos por el liderazgo sudamericano es un hecho inocultable y la IIRSA no escapa a esta disputa.

Mientras se conformaban la Unión Europea y se hablaba de la firma de un acuerdo de libre comercio en América del Norte, hecho que consolidaba al comercio entre los países como un instrumento político básico para la proyección de los intereses nacionales en el exterior, Carlos Menem y Fernando Collor de Melo, presidentes de Argentina y Brasil respectivamente, acuerdan junto con Paraguay y Uruguay, la firma en marzo de 1991 del Tratado de Asunción, que apresuraba la conformación del Mercosur para eliminar antes de diciembre de 1994 los gravámenes y demás restricciones al comercio y el establecimiento de una tarifa externa común de modo que se posibilitara la libre circulación de bienes, servicios y factores de la producción —tierra, capital, trabajo y organización— entre los cuatro países signantes. Pero los esfuerzos de Brasil por unir a la región no terminaban ahí: cuando el Mercosur finalmente se conformó, Brasil ya trataba de negociar una red de acuerdos de libre comercio con las repúblicas sudamericanas del Pacífico, viendo hacia la creación, en diez años, de un Área de Libre Comercio de América del Sur (ALCSA).

Este proyecto, formulado por Itamaraty y anunciado por el presidente Itamar Franco en 1993, ampliaba la Iniciativa Amazónica que Brasil lanzara en 1992, luego de que los Estados Unidos, Canadá y México firmaran el NAFTA (North America Free Trade Agreement) en octubre de ese año. Como el gobierno brasileño sabía que México se opondría a su aceptación o a la de Argentina en el NAFTA, se tenía la perspectiva de realizar una desgravación tarifaria automática que siguiera los moldes del Mercosur, asegurando el libre comercio intrarregional en un plazo de 10 años. No podía haber dudas de que el objetivo de Brasil era *construir un contrapeso para el NAFTA mediante la formación de un espacio económico sudamericano*, teniendo como núcleo el Mercosur, al cual lideraba y al que Brasil daba la mayor prioridad. Al contrario de México y de Canadá, que en ese momento tenían más del 70% de su comercio con los Estados Unidos, las exportaciones brasileñas eran sólo de 20% hacia ese país

(De Almeyda, 2001:56). La intención de formar un espacio económico sudamericano, el ALCSA, en evidente contraposición al NAFTA, casualmente, ocurrió unos meses antes de la reactivación de la 'Enterprise for the Americas Initiative', Iniciativa de las Américas, propuesta por Bush en el 1990, a manos del presidente William Clinton.

La situación era diáfana: el establecimiento de esa área de libre comercio, teniendo al Mercosur como núcleo, no convenía a los Estados Unidos en la medida que se le presentaba un movimiento de resistencia a su predominio económico y político, lo que volvía necesario abortar ese proyecto que daría mayor poder de negociación a Brasil y a los demás países sudamericanos en las discusiones que se pudiesen tener con relación a su integración al NAFTA. Por eso, la mejor manera de incorporarlos sería ofrecer una perspectiva más atractiva que involucrara a todos los países del hemisferio. Así, el presidente Clinton convocó a los presidentes a la ya célebre reunión de Miami en 1994 donde se presentó el proyecto del ALCA. Algunos estudiosos de la política brasileña afirman que ni el presidente electo Cardoso ni Itamar Franco conocían el tema sobre el cual versaba esa reunión hasta que llegaron, cuando ya no podían evadir el compromiso. (Rattner, 2002:113)

A diferencia de los planes del ALCA, Brasil concebía presentar una configuración distinta para el mapa de las Américas: América del Norte, de Alaska a Panamá, pasando por México, integrado al NAFTA bajo la hegemonía de los Estados Unidos. La otra, América del Sur, que se extendía de Colombia a la Tierra del Fuego, integrada como espacio económico resultado de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur ampliado y la Comunidad Andina de Naciones. La posibilidad de que una América del Sur integrada emergiera con su propia identidad constituía un desafío a la hegemonía económica y política de los Estados Unidos, cuyos objetivos geopolíticos después de la guerra fría consistían en extender su dominio a Europa Oriental y los Balcanes, controlar Eurasia, las fuentes de energía de Medio Oriente, del Golfo Pérsico y de Asia Central, contener a China e intentar impedir el surgimiento de potencias locales en las subregiones, especialmente las contrarias a sus intereses.

La decisión norteamericana de crear el ALCA alteró los planes brasileños. Los estrategas de este país amazónico sabían que el futuro de Brasil en la región se decidiría en la negociación del ALCA, acuerdo que no ofrecía un modelo de mercado común en los términos del de la Unión Europea, para los cuales el Mercosur se proponía desarrollar promoviendo la compatibilización y armonización cada vez mayor de sus políticas macroeconómicas —monetaria, cambiaria, fiscal, industrial, comercial, entre otras— no obstante los problemas que pudieran existir en función de la asimetría económica y política que los cuatro países presentaban. Al contrario, el modelo del ALCA, configurado por el NAFTA, era el de una simple zona de libre comercio donde las mercancías y los factores de producción, sobre todo los capitales, podrían circular con la máxima libertad sin permitir el libre

movimiento de la fuerza de trabajo y sin adoptar una tarifa externa común para el resto del mundo. Además, el ALCA no implicaba el acceso amplio al mercado estadounidense, que podría levantar restricciones no tarifarias siempre que lo juzgaba necesario. Sin embargo, gracias a ella los Estados Unidos incrementarían sus exportaciones para compensar su déficit comercial con otras regiones a costa de América Latina, afectando a la Unión Europea, China y Japón con quienes los países del Mercosur tienen natural comercio. La situación de crisis económica en los Estados Unidos los obligaría a apoderarse de la mayor parte del mercado latinoamericano, de sus recursos naturales y de sus empresas. No habría más necesidad de transferir las subsidiarias hacia América Latina pues las corporaciones exportarían directamente de los Estados Unidos.

Frente a este panorama no se debe dejar de lado un importante detalle: los intereses de índole meramente económica para el establecimiento del libre comercio en todo el hemisferio eran difíciles de encontrar dado que el área cubierta por el NAFTA ya representaba el 87% del mercado de todo el hemisferio y los Estados Unidos eran el principal socio comercial de todos los demás países de la región. Si se analiza con cuidado, el mercado norteamericano era más importante para América Latina de lo que el mercado latinoamericano lo era para la Unión Americana, que absorbía 15% de las exportaciones del Mercosur y 38.5% de los demás países excepto México. (Baumann, 2001:463) Tales números evidenciaban que los intereses comerciales de los Estados Unidos en la constitución del ALCA escondían en realidad objetivos esencialmente *políticos y estratégicos*, ya que permitiría no sólo expandir el dominio sobre el mercado sudamericano sino además subordinar los países de la subregión a sus directrices político-militares mediante la reducción de los armamentos convencionales y la reformulación de las tareas de la Fuerzas Armadas, que se resumirían, según recomendación de Collin Powell, en lo siguiente: “to maintain only such military capabilities are necessary for selfdefense and alliances commitments counter-narcotrafic efforts, disaster relief, international peacekeeping forces and consistent with their laws and constitutions and other missions, with the principles of the Organization of American States and United Nations Charters”. (Moniz, *Op. Cit*:579)

En ese contexto, el desarrollo del Mercosur impulsado por Brasil no convenía a los propósitos estadounidenses. El Mercosur representa el 10% del comercio de la región y dentro del Mercosur a Brasil correspondían dos tercios. (Rattner, *Op. Cit*:67) A pesar de la gran asimetría de poder en los países del hemisferio occidental, Brasil es el único país en condiciones de rivalizar con los Estados Unidos debido a la extensión de su territorio (8 511 965 km²), al tamaño de su población (171 853 000 hab), al parque industrial diversificado que posee, el mayor del Tercer Mundo, al volumen de su PIB (1,375 billones de dólares) y a su posición estratégica en Sudamérica, donde tiene fronteras con todos los países excepto Ecuador y Chile. De ahí que desde un principio los brasileños encararan al ALCA

como un proyecto planteado esencialmente para las economías brasileña y estadounidense dada la existencia de vínculos económicos, políticos y jurídicos de Washington con los países de América Central y algunos de Sudamérica como Venezuela y Colombia, dependientes del mercado y de las inversiones norteamericanas. El Mercosur era un obstáculo para los designios económicos, políticos y militares de la gran potencia del norte toda vez que se planteaba como un mercado común.

El peso geopolítico de Brasil en el Mercosur no puede ser desdeñado: la población de los cuatro países miembros del Mercosur en 1994 sumaba 201 millones de habitantes de los cuales 79% eran brasileños, 17% argentinos y entre paraguayos y uruguayos no sumaban ni 4% del total. Brasil, con una extensión de 8.5 millones de km² ocupaba el 72% del área del Mercosur, que es del orden de 11.8 millones de km² mientras Argentina, con 2.8 millones de km² correspondía al 23% del área y los otros dos socios juntos sólo alcanzaban 583 000 km², o sea, cerca del 5% de todo el territorio integrado. Del comercio total (exportaciones + importaciones) de Brasil, correspondía 64% al comercio del Mercosur, a Argentina cerca de 30% y los otros dos socios, 6%. (*Ibidem*) El desequilibrio político está también inmenso en el Mercosur. Mientras Argentina hace frontera sólo con Brasil, Bolivia y Chile, además de Uruguay y Paraguay; el Paraguay sólo con Brasil, Bolivia y Argentina y Uruguay sólo con Brasil y Argentina, Brasil posee fronteras con más de siete países además de Argentina, Uruguay y Paraguay y proyecta sus intereses sobre el África austral.

La preocupación de Brasil de mantener y fortalecer el Mercosur teniendo en cuenta las negociaciones sobre el ALCA, ha sufrido serios reveses con las sucesivas manifestaciones de Argentina y Chile. Brasil puede negociar con ciertas ventajas frente a Estados Unidos porque sólo 20% de su comercio exterior depende de ese país, suerte que no tienen otros países de América Latina, como México. Brasil no está dispuesto a conceder a Estados Unidos ni las mismas exenciones de tarifas y otras prerrogativas establecidas entre los socios de Mercosur ni mayores ventajas que las negociadas con los países de la Unión Europea y otros de Asia. Ante esta situación los Estados Unidos han contraatacado en el mismo plano, en el del libre comercio, propiciando la crisis del Mercosur y atrayendo a los países andinos con tratados comerciales bilaterales. En el año 2000, Washington intentó evitar la entrada de Chile al Mercosur y empezó a hablar de un acuerdo bilateral de libre comercio. La adhesión de Chile económicamente significaba poco o nada para el NAFTA pero sí mucho para Brasil y esto lo sabían los estrategas norteamericanos. Por eso la decisión de Chile de negociar un acuerdo con Estados Unidos repercutió políticamente y estimuló las divergencias dentro del Mercosur.

Actualmente, la situación del Mercosur no es la mejor. Después de trece años de existencia oficial, la crisis financiera brasileña y el desastre económico argentino, este acuerdo está agonizando con los intercambios comerciales entre sus socios prácticamente estancados. Además, las discrepancias

internas del Mercosur se agravaron con las intenciones Argentina de buscar un acuerdo bilateral con los Estados Unidos siguiendo el ejemplo de Chile. La persistencia de la crisis financiera, fiscal y cambiaria en Argentina llevaron a negociar directamente con los Estados Unidos un acuerdo bilateral, al igual que Uruguay. Pero según las reglas del Mercosur, los países miembros no pueden negociar acuerdos bilaterales de libre comercio con otros gobiernos y los socios están obligados a respetar una tarifa común en las transacciones con el resto del mundo, así que el gobierno de Argentina, la segunda economía del Mercosur, tendrá que decidir entre Estados Unidos o Brasil.

En esta idea de aislar a Brasil a través de tratados de libre comercio bilaterales dado el retraso para establecer el ALCA, se inscribe también la Iniciativa Regional Andina, la cual planea el apoyo estadounidense para la extensión del Andean Trade Preferences Act (ATPA, Ley de Preferencias Arancelarias) que libra de impuestos o reduce las tasas impositivas para los productos de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. La desarticulación de la Comunidad Andina en tanto proceso económico-político y su metamorfosis en una alianza comercial dominada por Washington sería un fuerte golpe para los proyectos brasileños de la misma forma en que lo son los tratados de libre comercio que en estos momentos Estados Unidos negocia con Ecuador y con Colombia.

La propuesta del ALCA ataca profundamente el proyecto de integración de América del Sur presente en los planes del Mercosur y del gobierno de Brasil, cuyos lazos comerciales con la Unión Europea son tanto a más importantes de los que tiene con Estados Unidos. Según un estudio de la fundación Getúlio Vargas de 1997, una asociación más estrecha con la Unión Europea sería más ventajosa para los países del Mercosur, particularmente para Brasil, por ofrecer mayor complementariedad con la producción local. Visto desde un ángulo estrictamente comercial, las relaciones con el mercado europeo son para Brasil tanto o más esenciales que las relaciones con los Estados Unidos, además de que no es este país sino las naciones de ALADI las que constituyen, después de la Unión Europea, el principal mercado para los productos brasileños —23.6% contra 28.4% en 1999. (*Ibid*:156) Sin embargo, el gobierno brasileño está profundamente consciente de que aunque lo deseara, existen varios obstáculos para una aproximación más estrecha con la Unión Europea a fin de contrarrestar la influencia norteamericana. La apreciación del euro frente al dólar, la admisión de los países del Este y los compromisos con las antiguas colonias africanas, privilegiadas en sus relaciones comerciales con sus metrópolis, constituyen obstáculos en el camino para una mayor apertura del comercio con los países de América del sur y dificultan las negociaciones entre Brasil y Estados Unidos, pues este se presenta a final de cuentas, como el mayor mercado al que podría tener acceso Brasil.

Visto desde una perspectiva geopolítica, la reunión de los doce jefes de Estado convocada por el presidente de Brasil y realizada en Brasilia, del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2000, constituye una tentativa de fortalecer la estrategia de diplomacia brasileña en la búsqueda de su afirmación como una potencia en el escenario internacional. En la reunión Brasil volvió a insistir en una estrategia según la cual los países sudamericanos se organizaran en un bloque común reuniendo al Mercosur, el Pacto Andino y a Guyana y Suriname, para después tratar sobre la creación del ALCA. El gobierno brasileño tuvo la precaución de no indisponerse con los Estados Unidos rechazando la discusión de una profundización de la asociación mediante un proceso de integración política como propusieron los presidentes de Venezuela y Perú.

Otro de los temas preponderante fue el de la propuesta de integración energética¹⁷⁸ como un primer paso para un diálogo más intenso entre el MERCOSUR y los países del Pacto Andino. Esta asociación llevaría a la creación de un área de libre comercio y más tarde, con la entrada de Chile, Guyana y Suriname, en una especie de Federación de América del Sur. Sin embargo, persisten todavía las dudas sobre cuáles será las fuentes de donde saldrán los recursos para impulsar la integración del continente. Así, sin querer irritar a Estados Unidos, Brasil procura aglutinar fuerzas regionales en torno a sus intereses comerciales y estratégicos con miras hacia la construcción de una identidad regional que pueda fortalecer al país y a sus vecinos en las futuras negociaciones con los norteamericanos.

De esta forma, el rechazo a participar en las negociaciones sobre el ALCA podría llevar al aislamiento de Brasil en la propia América del Sur, particularmente después de la manifestación de Chile, que busca asociarse al NAFTA. También están Uruguay y Argentina, Colombia y los países centroamericanos, que han dejado claras sus intenciones de asociarse con los Estados Unidos. Por eso, las declaraciones del gobierno brasileño sobre la necesidad de realizar reformas internas a fin de asegurar ventajas competitivas en el momento de la apertura del mercado para los productos y servicios de los estadounidenses, hacen pensar que las decisiones ya fueron tomadas: el alineamiento al ALCA es inevitable; lo importante ahora es ver en qué condiciones entra Brasil. Las acciones que Brasil deberá tomar no son fáciles. Este país no puede darse el lujo de rechazar y confrontar abiertamente al

¹⁷⁸ En este sentido se inscribe la idea de Fernando Henrique Cardoso de crear Petroamérica, una eventual fusión de las petroleras sudamericanas, y más aún, de plantear la integración energética en América del Sur, tanto en la parte del petróleo como la del gas y la energía eléctrica. Los Estados Unidos están preocupados porque Venezuela y Brasil firmaron ya acuerdos para crear empresas conjuntas de distribución y comercialización de gasolinas y derivados petroleros venezolanos en Brasil. Una de las futuras compañías del esfuerzo conjunto entre PDVSA y Petrobrás de Brasil tendrá como objetivo crear en el norte y en el noreste de Brasil una red de estaciones de servicios cuyas ganancias por venta de gasolina y diesel cuyas ganancias serán compartidas entre las dos empresas. Además, está planeado que en un futuro cercano, Venezuela y Brasil se unan para la producción de campos ya descubiertos y también para exploración conjunta y quizá para la producción en la plataforma deltana (del Delta del Orinoco) en el noroeste de Venezuela.

gobierno norteamericano pero tampoco puede actuar como un adepto norteamericano y menos volver al lugar que alguna vez tuvo: el país aliado en la región.

Pero más allá del ALCA aunque de ninguna forma desvinculado de este acuerdo, el gobierno brasileño tiene una seria preocupación: el avance militar norteamericano en la región relacionado con la búsqueda de esa potencia de la preservación de su hegemonía en la región que de cierta forma podría limitar la capacidad de influencia de Brasil. Los esfuerzos estadounidenses para atacar al Mercosur mediante tratados de libre comercio con Chile y con Argentina, el más importante socio brasileño en la región, no terminan ahí. Los casos de Argentina y de Colombia ilustran la intención norteamericana de penetrar y controlar las fuerzas armadas de la región, lo que se traduce en una pérdida de poder de Brasil en Sudamérica.

Durante la presidencia de Carlos Menem Argentina, en 1997, se volvió un aliado extra OTAN y en 1999 pidió su incorporación total. En ese momento el gobierno brasileño declaró que si la vinculación de Argentina a la OTAN efectivamente ocurriera introduciría elementos extraños en el contexto de la seguridad regional sudamericana y produciría consecuencias palpables para Brasil que serían analizadas en todos sus aspectos de naturaleza política y militar. (De Almeyda, *Op. Cit.*) Los estrategas brasileños sabían que los militares argentinos buscaban mayor presupuesto para armas y entrenamiento y que esas oportunidades se incrementarían en el caso de que Argentina fuera admitida como miembro de la OTAN y se involucrara en operaciones de guerra, sobre todo en América del Sur, como se preveía. Además, todo indicaba que no era una casualidad que fuera justamente, el de 1999, cuando se pidiera la admisión de Argentina como miembro pleno de la OTAN, toda vez que fue el año en que más se habló de una intervención estadounidense armada en Colombia debido a la incapacidad del presidente Andrés Pastrana para contener el avance de las FARC, que en ese momento ya controlaban el 48% del territorio y dominaban cerca de 650 municipios, casi todos en las fronteras con otros países. El Departamento de Estado calificó ese avance del narcotráfico como un problema de seguridad para el resto de la región y el propio Clinton, en julio de 1999, declaró que la lucha armada en Colombia constituía “a national security issue” (Moniz, *Op. Cit.*:584) para su país y que haría lo posible para solucionarla.

Además 1999 fue el año en que cerca del 90% del dinero para la asistencia militar en América del Sur y 50% del entrenamiento se fuera hacia Bolivia, Ecuador, Perú y sobre todo, Colombia. Esa concentración de asistencia militar y policial en los cuatro países andinos reflejaba el recelo de que el conflicto en Colombia se expandiera y desestabilizara América del sur en el año en que los Estados Unidos se preparaban para devolver a Panamá el control del Canal y redistribuían por Florida, Puerto Rico (Vieques), Cuba (Guantánamo), Ecuador (Manta), Honduras así como las islas de Aruba y

Curazao las instalaciones militares que desde la primera década del siglo XX conformaran sus sistema de defensa y seguridad con respecto a América Latina. Ahora la Base Militar en Manta que sustituyó a la de Howard en Panamá permite a los Estados Unidos el dominio del arco andino, controlando no sólo las guerrillas en Colombia sino, a largo plazo, los corredores interoceánicos de toda América, como los de la IIRSA.

El asunto del Plan Colombia tiene mucho más que ver con la desestabilización de la geopolítica regional y la pérdida de poder de Brasil en la región de lo que normalmente se piensa. En una audiencia con el Senado norteamericano el general Charles Wilhelm, responsable del mando del Southcom advirtió que el enfrentamiento con los guerrilleros en Colombia ponía en peligro la seguridad del Canal de Panamá, agregando que las incursiones en el área fronteriza representaban un impulso vigoroso de los narcotraficantes que utilizaban la ruta del istmo, por lo que se podría requerir una intervención militar unilateral de tropas norteamericanas. Esta disposición era consistente con el principio estratégico de los Estados Unidos según el cual la decisión de usar la fuerza sería dictada primero y encima de todo por los intereses nacionales de ese país en áreas específicas, pues donde sus “vital interests are at stake, our use of force will be decisive and, if it necessary, unilateral” (*Ibid*:535), lo que empujó a Brasil a desarrollar el Plan Cobra (por ‘Colombia y Brasil’), plan cuya intención era militarizar la zona fronteriza, que se extiende en unos 1 644 km de jungla, colocando siete bases de control en localidades fronterizas. Este plan vendría a reforzar su sofisticado programa de defensa de la Amazonia, el STVAM (Sistema de Vigilancia de la Amazonia), de 1.4 billones de dólares.

Como se señaló con anterioridad, Urabá, en el departamento del Chocó en Colombia, es una zona de interés estratégico situada en la frontera de Panamá donde hay pozos petroleros explorados por compañías norteamericanas y británicas así como importantes reservas de gas y donde se planea ligar al Río Atrato con el Río San Juan para abrir un canal interoceánico que duplicaría el de Panamá. Como se sabe que si se ataca esa región se puede cortar el comercio mundial, Estados Unidos actuó en consecuencia; puesto que la guerrilla podría derrotar al ejército colombiano, había que reconquistar la legitimidad del gobierno colombiano y reestructurar dramáticamente sus Fuerzas Armadas. Por eso hubo que intervenir indirectamente en Colombia, donde antes del Plan Colombia ya había más de 200 asesores militares norteamericanos. Asimismo, como ya se apuntaba anteriormente, se contemplaba también una intervención multinacional en Colombia ejecutada por algunos Estados de Sudamérica, sin un involucramiento de los Estados Unidos, por lo menos en un primer momento. De ahí la importancia de tener buenas relaciones con el ejército argentino, que podía ser clave para los otros ejércitos de la región.

Es poco conocido el hecho de que pocas semanas después del viaje de Barry Mc Caffrey –fiscal contra las drogas en el gobierno de Clinton– a Brasil, Bolivia, Perú y Argentina en agosto de 1999, donde describió dramáticamente la situación colombiana, se urgió privadamente a los jefes de gobierno de los cuatro países a participar en una intervención multinacional contra las FARC.¹⁷⁹ Estaba planeado que el plazo para que las negociaciones con las FARC concluyesen en un acuerdo en enero de 2000, cuando Andrés Pastrana, no consiguiendo establecer la paz, *declararía el estado de guerra interna en Colombia y solicitaría asistencia de los países vecinos, en especial de Perú, Ecuador y Brasil, cuyas fuerzas se unirían a los cinco batallones entrenados por asesores norteamericanos* en tanto que los navíos de guerra de los Estados Unidos en las costas colombianas sustentarían la intervención con misiles y ataques aéreos. Desde la perspectiva militar esa intervención en Colombia realizada por una fuerza multinacional con control norteamericano permitiría a este país probar su capacidad de coordinación de las tres nuevas bases localizadas en Ecuador, Aruba-Curazao y El Salvador y posibilitaría el desarrollo de nuevas estrategias.

Esta propuesta de intervención multilateral contaba con la simpatía de Jamil Mahuad, presidente de Ecuador, así como de Alberto Fujimori, presidente de Perú, países beneficiados con el dinero de la asistencia militar estadounidense. El líder del Partido Liberal en Colombia, Horacio Serpa, acusó en su momento a los Estados Unidos de estar detrás de la militarización de las fronteras de Ecuador y Perú con Colombia por el supuesto temor de una incursión de guerrilleros y narcotraficantes. La colaboración entre los presidentes Mahuad y Fujimori en los preparativos para una eventual intervención en Colombia sólo fue posible después de la firma en 1998 de la Declaración de Brasilia, que daba solución definitiva a su antiguo litigio fronterizo.¹⁸⁰ Según informaciones de Vladimiro

¹⁷⁹ La idea de una intervención multilateral en Sudamérica no era una novedad de Clinton. En 1990 Diálogo Interamericano —organismo de élite creado en la administración Reagan cuyo propósito principal era esgrimir como objetivo la preservación de la democracia formal— ideó una estrategia para desestructurar las fuerzas militares latinoamericanas, porque la doctrina de seguridad nacional que había sido propiciada por los Estados Unidos como parte de la guerra fría empezaba a retornar como un boomerang en contra de sus intereses. Así, concluyó en un documento titulado “Manual Bush”, texto que lanza la estrategia específica de transformar las fuerzas armadas del continente y la tesis de involucrarlas en forma directa desde aquella época, en la lucha antidrogas estadounidense. Ese documento mencionaba que “*había que exacerbar los conflictos fronterizos e internos de los países*, con el propósito de crear la necesidad social de una fuerza multinacional que interviniera y demostrara que ese debía ser el único procedimiento asignado a las fuerzas armadas latinoamericanas” (Brito, 2001).

¹⁸⁰ Como se sabe, a finales de 1994 Ecuador y Perú reiniciaron el viejo conflicto por la zona del Alto Cenepa en la selva amazónica. A pesar de que se sabía que estos países eran muy desiguales en número de efectivos con ventaja para Perú pues la aviación militar de este país era mayor y mejor que la de Ecuador, ganó Ecuador. Tras este triunfo apoyado por Estados Unidos, las fuerzas armadas ecuatorianas se dirigieron hacia el norte con el fin de que se involucrarse en la lucha antidrogas en la frontera con Colombia. Desde ese momento, los cuerpos de élite de las fuerzas armadas ecuatorianas, más proclives a la negociación por su carencia histórica de personalidad guerrera, se convirtieron en una extensión de las fuerzas armadas estadounidenses en la región y aunque su país no estaba tan absorbido por el problema de la producción masiva de cultivos ilícitos, se involucró en esta lucha ajena permitiendo la entrada de asesores militares de Estados Unidos que entrenarían a ciertos batallones, lo que terminó de militarizar la lucha antidrogas en su país. En la actualidad tres batallones, un grupo de fuerzas especiales, una compañía de selva y otra de helicópteros, distribuidos en las provincias de Sucumbios y Napo, que

Montesinos, jefe del servicio de Inteligencia Nacional en el gobierno de Fujimori, Perú y Ecuador serían los protagonistas de una eventual operación en Colombia que se realizaría a pedido de Pastrana con forma de incursiones directas contra los campamentos de las FARC en las fronteras de los dos países y vigilancia de las zonas de donde el ejército colombiano hubiera expulsado a la guerrilla. En la operación participarían 120 mil hombres en un periodo de 45 a 60 días apoyados por dos divisiones aerotransportadas, dos fuerzas especiales del ejército, tres divisiones de Marines y 200 aviones C-5 y c-114. (Estrada, 2002:56)

De acuerdo con el diario El Espectador de Bogotá, el desmantelamiento de un bando peruano que contrabandeaba armas de Jordania para las FARC, denunciado por Fujimori, había sido fabricado con vistas a crear las condiciones para esa intervención militar en Colombia y fue el propio Montesinos quien dirigió la operación de compra de las armas, cerca de 10 000 fuzis AKM lanzados en paracaídas para las FARC en territorio colombiano. al mismo tiempo que él (Montesinos) difundía el rumor sobre la grave situación en Colombia e informaba al periodista Genaro Delgado y a tres generales que la intervención se consumaría en octubre. (*Ibid*:56) Este hecho no puede más que llevar a la suspicacia: al parecer, las FARC cayeron en una trampa orquestada por el gobierno estadounidense y apoyada por Montesinos, quien una vez más trabajó para la CIA a fin de crear el conflicto que necesitaban los Estados Unidos para invadir Colombia y penetrar América del Sur. La intervención aparentemente no se efectuó porque no hubo apoyo de todos los países de la región: Brasil se negó firmemente a participar en cualquier tipo de operación multinacional en Colombia con el objetivo de combatir a los traficantes y a las guerrillas de las FARC y ELN.

Brasil no sólo rechazó colaborar en la intervención sino que no aceptó la expansión de la presencia norteamericana con el pretexto estratégico-militar del combate al narcotráfico porque percibía la amenaza de los Estados Unidos, que visualizaba el control de toda la cuenca del Amazonas a través del establecimiento de sus instalaciones militares en Colombia mediante el reforzamiento de las bases en Caquetá (Florencia), en el Putumayo (Tres Esquinas, sede del batallón Anti drogas, Macao, La Tagua, Puerto Leguizamo) y en Ecuador (Puerto Manta), puerto de acceso a las fronteras de Perú-Colombia y Ecuador. Panamá se negó igualmente a apoyar una intervención multinacional en Colombia para evitar una amenaza en el Canal. También lo hizo Venezuela, cuyo gobierno tambaleante al interior y temeroso de una posible intervención en su territorio tomó la decisión de no permitir más que los aviones militares estadounidenses procedentes de Aruba y Curazao atravesaran el espacio aéreo

pertenecen a la Brigada de Selva Napo 19, participan en el control de línea de frontera con Colombia. Suman 5 mil efectivos. Esa frontera es estratégica: por allí se mueve no sólo el armamento, municiones y droga sino que es el puente para que líderes guerrilleros reingresen a Colombia.

de Venezuela con el pretexto del combate al narcotráfico sin su autorización explícita. Esa objeción reflejó además el recelo de las Fuerzas Armadas venezolanas dentro de las que fuertes sectores sospechaban que los barcos norteamericanos estacionados en Aruba y Curazao no se limitaban a las funciones de reconocimiento pues entre ellos había aviones de guerra F-16. (*Ibid*:57)

La respuesta de Brasil ante este Plan fue inmediata e inesperada: al día siguiente de la visita de Clinton a Colombia para dar por iniciado el Plan Colombia, se reunieron en Brasilia por iniciativa del presidente Cardoso los doce presidentes sudamericanos por primera vez en la historia. Brasil aprovechó el foro para mandar un mensaje a los estadounidenses: estaban ciertos de que el componente militar del Plan Colombia “tiene un potencial de generar una turbulencia política capaz de atrasar el proyecto común de la integración regional, un nuevo orden comercial que Brasil sueña dirigir.” (Fazio, 2000). El gobierno brasileño dejó claro también que estaba dispuesto a articular los intereses regionales a fin de dar a los países sudamericanos, e incluso a sí mismo, un mayor poder de negociación en foros multilaterales decisivos. En marzo de 2001, representantes de los organismos de inteligencia y seguridad de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela analizaron en Brasilia los alcances del Plan Colombia. En esta reunión, continuación del encuentro realizado en septiembre de 2000, Brasil dejó claro que no aceptará la presencia de fuerzas militares multinacionales en la región amazónica a consecuencia de la ejecución del Plan Colombia. Se dijo además que las acciones de lucha contra el narcotráfico podrían provocar una masiva fuga de narcotraficantes y terroristas a territorio brasileño lo que será impedido con las unidades de resguardo fronterizo. (Molano, 2002:48).

La actitud de Argentina fue muy distinta: el presidente Menem ofreció su apoyo para una eventual intervención en Colombia. Incluso antes de la visita de Mc Caffrey a Buenos Aires, Menem proclamó públicamente su disposición a ofrecer tropas para intervenir en Colombia si el presidente Pastrana se lo solicitaba. Argentina en realidad ya estaba colaborando estrechamente con los Estados Unidos, pues hacía más de un año que miembros de la Gendarmería Nacional y de la DEA habían ejecutado una operación llamada Operativo Área Frontera Norte en Salta donde policías argentinos trabajaron comandados por norteamericanos. Esta operación, realizada con el desconocimiento del gobernador de Salta, se decía, podía constituir el comienzo del proyecto para el establecimiento de una base operacional en Argentina.

De hecho, el 5 de septiembre de 1999 el periódico ‘El Clarín’ de Buenos Aires dio la noticia de que Menem había ofrecido la Escuela del Monte a los Estados Unidos para el entrenamiento en combate en la selva de sus unidades de contra insurgencia, los Boinas Verdes (Green Berets). Esta Escuela la poseía el ejército en la Provincia de Misiones, contaba con 10 000 hectáreas y estaba en una zona muy próxima con la frontera de Brasil. El ofrecimiento de Menem atendía a la demanda del

Pentágono, interesado en encontrar nuevos lugares de entrenamiento para sustituir al de Panamá y de estacionar los miles de soldados que se retirarían en diciembre de 1999 y que no retornarían a los Estados Unidos, pues el propio Clinton consideraba necesario fortalecer la presencia estadounidense en la región.

No se puede descartar el hecho de que en el fondo más que un ofrecimiento fuera el requisito pedido para la admisión de Argentina como miembro pleno de la OTAN, con el cual Menem quiso dar una demostración efectiva de su propósito de colaborar con los Estados Unidos, inclusive en una eventual intervención en Colombia. En su visita a Buenos Aires, Mc Caffrey se refirió al establecimiento de un contingente militar de los Estados Unidos en Misiones como una “army delegation” en lugar de “military base” (Estrada, *Op. Cit*:80) porque la Constitución de Argentina prohíbe la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. Estos hechos no tardaron en despertar las suspicacias del Ejército brasileño que consideraba que la idea era convertir en permanentes las acciones conjuntas de los Boinas Verdes y el ejército argentino, pues ya el Pentágono había ofrecido al ejército brasileño la realización de operaciones conjuntas de entrenamiento en la Amazonia y prometido en reciprocidad hacerlas en territorio norteamericano, lo que el alto mando rechazó con el argumento de que solamente se hacía entrenamiento en regiones donde se suponía que las tropas un día tuviesen que luchar y que Brasil jamás imaginaba combatir en territorio norteamericano.

La actitud de Menem, al ofertar a los Estados Unidos la Escuela del Monte, provocó protestas y aumentó el resentimiento de Brasil. “No se puede ser aliado estratégico de los Estados Unidos y de Brasil al mismo tiempo”, comentó el Coronel Geraldo Cavagnari, director del Núcleo de Estudios Estratégicos de la Universidad de Campinas. Y el Coronel Amerino Raposo, del Centro Brasileño de Estudios Estratégicos (CEBRES) advirtió que los campos de entrenamiento ofrecidos a los Estados Unidos por Argentina en la Provincia de Misiones, a 1 300 km de Buenos Aires —dentro de un área cubierta de selva— una vez más servían de alerta para ver que la intención de los norteamericanos era establecerse a lo largo de la frontera con Brasil. De la misma forma que el coronel Raposo, muchos otros militares brasileños interpretaron las maniobras militares que en 1995 los Estados Unidos hicieron en la Guyana como un ensayo para controlar la Amazonia y vieron con la misma desconfianza el entrenamiento de los norteamericanos en Misiones. Las Fuerzas Armadas brasileñas entendían que la instalación de las unidades de contra insurgencia (Boinas Verdes) de los Estados Unidos en Misiones afectaba en cierta medida la seguridad nacional sí como el desarrollo del Mercosur, minando su aspecto político por no establecer acuerdos de confianza y cooperación en los aspectos de Defensa.

Mientras tanto, el conflicto en Colombia se intensifica y el gobierno brasileño no desea que el narcotráfico se extienda a su territorio y que los guerrilleros o los militares colombianos los invadan o

que los hongos *Fusarium Oxisporum* u otras armas químicas o biológicas, eventualmente empleadas por los Estados Unidos para destruir las plantaciones de coca contaminen los ríos de la Amazonia. Al mismo tiempo, el gobierno brasileño considera que la vía militar que pugna el gobierno norteamericano apoyado por Álvaro Uribe no resolverá las crisis colombiana, por lo que se niega a permitir la utilización de cualquier base u otras instalaciones militares en su territorio para operaciones en Colombia, solicitada ya por la Secretaria de Estado, Madeleine Albright. En las Fuerzas Armadas, además, el Plan Colombia sigue siendo percibido por muchos militares como el Caballo de Troya de los Estados Unidos para dominar las nacientes del Río Amazonas, el que suscitó la coyuntura de que el combate al narcotráfico y a las guerrilleras pudiese servir como pretexto para la ocupación disimulada de la Amazonia con el argumento de que el Ejército brasileño no estaba en condiciones de controlar la región e impedir el tránsito de alimentos y armas para las Farc.

El lanzamiento y sostenimiento del Plan Colombia ha encadenado varios objetivos políticos y geopolíticos al formalizar una intervención ya en curso y al demostrar que los Estados Unidos se disponen a reprimir cualquier movimiento insurreccional y enfrentar otros desafíos. A estas alturas sigue existiendo la sospecha de que tras el Plan Colombia hay una estrategia que mira a rediseñar el mapa de América del Sur. El gobierno brasileño supone que al colocar militarmente a los norteamericanos en la Amazonia, el Plan Colombia representa el comienzo de su expansión en la zona, pues los Estados Unidos tienen un plan de ayuda militar para la Guyana y una red de monitoreo extendida desde Panamá. Además, la transformación de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú en Estados cliente, especies de protectorados o colonias informales se reviste de fundamental importancia estratégica para el control del Bloque Andino, al cual Brasil piensa aliarse en la búsqueda de una integración comercial sudamericana y de un mayor control de la Amazonia.

Sin embargo no es sólo el Plan Colombia, que se sigue ejecutando en la actualidad, el mayor desafío de intervención norteamericana que enfrenta Brasil en América el Sur sino la IIRSA. En consonancia con el discurso del libre comercio, la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana se presenta como la oportunidad dada a los países de esa subregión para avanzar en una integración física que les permita disminuir las asimetrías comerciales entre sí y entre ellas y sus socios comerciales fuera de la subregión, aunque en realidad el objetivo final sea muy distinto: preparar al territorio sudamericano para la implantación del ALCA. El ALCA no es sólo el instrumento del cual se vale los Estados Unidos para promover el aumento del comercio en la región; es también el medio por el cual se dispone a fortalecer su hegemonía en la región con el fin de proyectarla al exterior.

La IIRSA, parte indisociable del ALCA, está ligada a la consecución de los objetivos geopolíticos y geoeconómicos de la política exterior norteamericana en América del sur que parten del

dominio del espacio: planea el control de los puntos más estratégicos; el control sobre las principales hidrovías; la propiedad sobre los energéticos, el agua y la biodiversidad; la militarización de la región andina y de la cuenca amazónica; y el bloqueo a los planes brasileños de una integración comercial sudamericana que oponga resistencia a las decisiones norteamericanas. Sin embargo, lo que complica la situación de Brasil en Sudamérica y su oposición a los planes norteamericanos es que en amplia medida los planes y proyectos de la IIRSA le pueden beneficiar para su propia proyección hegemónica al mismo tiempo que le plantean la intervención norteamericana en la estratégica Amazonia. Brasil no puede desligarse fácilmente de la planeación y ejecución de la IIRSA.

Como hemos podido ver, algunos de los proyectos que ahora enarbora la IIRSA ya los había venido planteando Brasil desde hace décadas pero no los había podido completar por la falta de dinero. En los hechos fue justamente en Brasilia en septiembre de 2000 cuando surge la propuesta de la IIRSA, lo cual implica de inicio un apoyo de Brasil al proyecto. Queda claro que este importante país amazónico tiene un panorama difícil ante la IIRSA: si la apoya, se beneficia al mismo tiempo que asiente a los planes norteamericanos en la región; si la rechaza, pierde la posibilidad de ver cristalizados varios de sus proyectos geopolíticos de control de la región así como de expansión de sus intereses comerciales, que son políticos, con sus vecinos. Las decisiones de política exterior que tome Brasil ante esta disyuntiva pueden marcar el destino de la subregión y, también y sobre todo, el de América Latina.

CONCLUSIONES

Die Klarheit: stetes Martyrium, unvorstellbare Heldentat.
E.M. Cioran

A lo largo de este estudio se ha querido dejar constancia de que la planeación y ejecución de la IIRSA trasciende los límites geográficos impuestos en su denominación y se relaciona estrechamente con los objetivos geopolíticos y geoeconómicos de la gran potencia del norte del hemisferio. Después de tan larga exposición es posible concluir que la IIRSA, ya directa, ya indirectamente, es un instrumento de la política exterior norteamericana cuya principal intención se orienta hacia la apropiación de recursos naturales estratégicos, la ocupación de territorios geoestratégicos y el fortalecimiento de la hegemonía norteamericana en América Latina. Como en los últimos años la política exterior de los Estados Unidos está siendo dirigida hacia la recuperación de espacios perdidos y el fortalecimiento de su presencia en el continente en plena crisis de sucesión hegemónica mundial, estos objetivos se engarzan plenamente con la construcción de un sistema infraestructural que por un lado permite la unión de física de esta subregión y por otro facilita el dominio sobre el geoestratégico espacio andino y amazónico.

Una de las primeras herramientas de la que se ha valido la política exterior norteamericana para conseguir sus objetivos ha sido la redefinición e impulso de su política comercial externa que encabezan los tratados de libre comercio. Así, aunque en la actualidad el discurso gubernamental tanto de los países latinoamericanos como de los Estados Unidos hable de los acuerdos de libre comercio como convenios en materia puramente comercial y/o económica, lo cierto es que la historia demuestra que el comercio entre los países es un instrumento político básico para la proyección de los intereses nacionales en el exterior, que las negociaciones comerciales entre dos o más países se resuelven de acuerdo a los intereses del grupo que este momento detenta el poder en el país más fuerte —Estados Unidos, en este caso— y que los más recientes acuerdos de libre comercio van más allá de meros convenios de intercambio de bienes y servicios y se convierten en estrategias claramente dirigidas a recuperar y fortalecer la hegemonía estadounidense en la región, la cual pasa obligatoriamente por el control de territorios y de recursos naturales estratégicos.

Pero la política comercial externa de los Estados Unidos de las dos últimas décadas, herramienta básica de su política exterior, no se circunscribe al ámbito de lo comercial y mucho menos ha sido planteada y ejecutada para satisfacer necesidades internas de la población de la propia Unión Americana como la creación de empleos y la reducción del enorme déficit presupuestal que hasta ahora

sólo se ha compensado con los flujos de capital financiero, pues después de quince años de acuerdos comerciales bilaterales ni la balanza comercial ha llegado a ser positiva ni se han creado mejores empleos para los norteamericanos. La política comercial ha sido pensada en los términos de los grupos gobernantes y de los intereses económicos que representan, por lo que la promoción del libre comercio fuera de sus fronteras está directamente relacionada con su pérdida de poder mundial y con la necesidad de reposicionarse en el esquema capitalista global, empezando por redefinir las relaciones políticas con América Latina, el área natural de influencia de la política exterior estadounidense desde la evocación de la célebre Doctrina Monroe en los primeros años del siglo XIX. Por esto, es claro que otro objetivo subyace a la promoción del libre comercio en el continente: la apropiación, de manera más o menos pacífica, de los recursos naturales estratégicos y la ocupación en términos espaciales de territorios geoestratégicos, vitales para la preservación de los términos de dominación actuales, para su reposicionamiento global y para el mantenimiento del presente esquema de funcionamiento del capitalismo.

So riesgo de parecer adepto a las explicaciones fáciles y tautológicas que vinculan las acciones norteamericanas con todas los males latinoamericanos, este trabajo no duda en afirmar que existe una estrecha relación entre la IIRSA y los mencionados objetivos geopolíticos y geoeconómicos de la política exterior norteamericana aunque a primera vista no lo parezca. Dadas las conocidas ambiciones y necesidades de Estados Unidos no es difícil observar que éstas y los proyectos de la IIRSA embonan muy bien. A pesar del hecho de que la intervención norteamericana en el caso de la IIRSA no ha implicado un involucramiento directo, a nivel gubernamental, de ese país en las reuniones de planeación y discusión de los proyectos, no significa que no haya una intervención directa, un interés notorio en la zona que evidencia una vinculación palpable con ese proyecto desde el momento en que lo apoya, no lo obstaculiza, lo deja prosperar y lo financia a través de organismos como CAF y BID, de fachada latinoamericana pero de capital probadamente estadounidense, que involucra a las corporaciones transnacionales de aquél país tanto en la construcción de las obras como en el usufructo de las mismas.

El discurso y las acciones de ambos organismos no dejan de estar en consonancia con otros como el Banco Mundial, desde donde se financia y planea la construcción de ejes multimodales que facilitan el transporte de las mercancías estratégicas y constituyen verdaderos proyectos de control político y financiero sobre territorios estratégicos, que si bien no son nuevos —el ejemplo de la privatización de los ferrocarriles, puertos, aeropuertos y carreteras es nuestro país con miras a la implantación del ALCA es paradigmático y se constituye como el primer ensayo de eje multimodal

controlado por el capital estadounidense en el continente— no son menos desventajosos para los países andinos y de la cuenca amazónica.

Las formas en que se plantea llegar a la integración física a través de la IIRSA tienen el sello estadounidense y siguen siendo las mismas maneras autoritarias que son ya una constante en la historia de esta región: pobladores de regiones estratégicas que no son consultados al momento de elaborar proyectos; países que se endeudan involuntariamente; privilegio de la ganancia privada sobre la conservación del medio ambiente; en fin, imposición espacial de un modelo económico que ha probado su capacidad de destrucción y contaminación del medio ambiente para responder a las demandas del mercado global. Nuevamente, tal como ocurrió en la década de los ochenta con los créditos para hacer frente al endeudamiento externo y como sucedió en la década de los noventa con el financiamiento para apoyar la implantación de las medidas de ajuste estructural, la IIRSA presenta la opción del endeudamiento público para empezar ahora sí el auténtico desarrollo, donde el sector privado resulta beneficiado con la construcción, financiamiento y operación de tales proyectos.

Sin embargo, de nuevo los empréstitos tanto de la banca internacional como de las corporaciones transnacionales, cuya acción claman los gerenciales y revolucionarios gobiernos latinoamericanos en los nuevos tiempos de la “globalización”, continúan con la lógica de hacer pagar a los depauperados contribuyentes de cada país la infraestructura que las corporaciones transnacionales aprovecharán para su beneficio. Así, aunque los propios gobiernos nacionales se jacten de planear por su cuenta la IIRSA en colaboración con el sector privado, lo cierto es que existen pruebas contundentes de que en el impulso y financiamiento de la IIRSA participan activamente los dineros del capital transnacional.

De acuerdo al examen de los ejes priorizados por la IIRSA, donde se destaca siempre como objetivo último de su construcción la agilización del transporte de mercancías y recursos naturales estratégicos y la creación de una red energética, es posible afirmar que se está dejando a un lado la necesidad real de movilidad de las personas y se está imponiendo un sistema de enclaves que mucho se parece al de los tiempos de la colonia. Así, si durante un buen tiempo del siglo XX los gobiernos nacionales tendieron a planificar las carreteras, las hidrovías, los aeropuertos, los ferrocarriles, etc., el planteamiento actual de la IIRSA pretende que sean las empresas quienes planifiquen y decidan ya no en función de proporcionar servicios a la población sino en función de las ganancias futuras, tanto económicas como estratégicas. Por eso, si una carretera o hidrovía no representa un interés económico para estas empresas, no será considerada como prioritaria ahora que las empresas transnacionales —las nacionales tienen serias limitaciones para competir— concreten los proyectos de transporte de petróleo, gas, agua, etc., operen los ferrocarriles y las hidrovías, controlen las carreteras y cobren los peajes.

Si bien es cierto que los razonamientos anteriores son ya lugares comunes que a fuerza de repetirse rayan en el panfletismo, no lo es menos que tanto los gobiernos como los gobernados en América Latina se han convertido ya en clichés. En esta carrera por apropiarse del discurso de una modernidad que los discriminó desde el principio y dando continuidad a malas experiencias inmediatas en el tiempo, podemos observar la obcecación de los gobiernos sudamericanos, sea cual sea su orientación política, por *modernizar* y *actualizar* los sistemas regulatorios e institucionales nacionales que norman el uso de la infraestructura para alcanzar el fin último de cambiar las leyes para adaptarlas a las necesidades del capital transnacional, sobre todo en lo relacionado con la propiedad de las vías y con figuras como la potestad o concesión para su uso por parte de las empresas transnacionales.

Esta continuidad en la tendencia privatizadora de un sector estratégico y vital para el ‘desarrollo’ del país y para el fortalecimiento del Estado, en el permanente privilegio del beneficio transnacional sobre el bien público y en la homogeneización de las políticas, planes y marcos regulatorios e institucionales entre los Estados como si los distintos países no tuvieran diferentes necesidades o como si todos fueran beneficiarios con la integración de la misma, no sólo se explica atendiendo a la falta de visión, compromiso y voluntad política de los gobiernos en turno: indudablemente hay que tomar en cuenta el contexto internacional en el que se toman estas decisiones, contexto que no obliga pero sí presiona.

Ante la hostilidad que supone la lucha intercapitalista en el mundo, el imperio redefine sus líneas de acción externa y reelabora las formas de intervención en los territorios más ricos y mejor dotados por la naturaleza. Pero si bien no se habla de la novedad de la presencia norteamericana en el arco andino y en la cuenca amazónica con el propósito de apropiarse de los recursos de la región y de ocupar los terrenos geoestratégicos, sí se quiere hacer énfasis en la forma en que los argumentos para ejecutar las directrices políticas han cambiado. La transformación de la tradicional política exterior norteamericana que ahora parece ser sólo política comercial externa, caracterizada por la fusión de los intereses del capital privado con la clase política, ha complejizado las formas de intervención norteamericana en la región, alterando los conflictos ya existentes en los países sudamericanos y aprovechándolos para promover sus objetivos mientras perturba, acelera, e inhibe las acciones políticas de los países de este subcontinente. El libre comercio, que se ha convertido en la nueva panacea de la humanidad y en el receptáculo de las esperanzas de los gobiernos de los países más pobres, está mostrando en América Latina su papel destabilizador tanto al interior de los países como entre ellos, ante la actitud complaciente de los gobiernos de la región.

En un escenario de vulnerabilidad estratégica en el que el déficit en materias primas estratégicas y una desequilibrada balanza comercial alientan el libre comercio y lo convierten en la vertiente no

militar, que no pacífica, para el control político del hemisferio occidental, las corporaciones transnacionales norteamericanas se convierten en los mejores socios y aliados de su gobierno. Estos vehículos de la política comercial externa de su país requieren la implantación de un tratado comercial hemisférico que obligue a la eliminación o transformación de las legislaciones nacionales a fin de que sus gobiernos creen las mejores condiciones para las inversiones extranjeras, promuevan las exportaciones y aumenten su competitividad.

No obstante, esto tiene costos para los países de la región, pues la firma de un acuerdo del tipo del ALCA implica la reducción de la capacidad de los países para elaborar y ejecutar políticas económicas, la privatización y sobreexplotación de los recursos naturales, la transferencia del poder de decisión y gestión de los recursos naturales del ámbito público al privado, la reducción de las leyes nacionales y de la soberanía nacional sobre los territorios y el medio ambiente, la transferencia de industrias sucias, así como la destrucción de la biodiversidad, entre otras. Así, aunque no se haya signado todavía, los mecanismos necesarios para la implantación del ALCA —legislaciones flexibles, privatización de sectores estratégicos, políticas económicas tanto fiscales como comerciales afines, así como la construcción y el acondicionamiento de la infraestructura existente en la región— ya han sido establecidos y se encuentran funcionando: el ALCA ha trascendido ya el nivel de proyecto para colocarse en el de realidad, tal como la IIRSA.

Si bien es cierto que la IIRSA no está construida en su totalidad no es lo es menos que varios de los proyectos incluidos en el planteamiento general ya se están concretando mientras otros ya están en funcionamiento. Este hecho no es fortuito: la integración física de los países sudamericanos no ocurrió súbitamente ni está determinada únicamente por la geografía. La integración de estos países ha sido resultado de un largo proceso histórico en el que la definición de los límites territoriales ha sido una constante. La coyuntura actual de relativas buenas relaciones entre los países de la región que ahora aprovechan los ideólogos de la IIRSA para oficializar la integración física ha sido construida desde hace varios años. Como se pudo apreciar en la exposición del problema de estudio, varios de los proyectos planteados en la IIRSA han sido concebidos en décadas pasadas. De hecho, el punto nodal del asunto radica más bien en la factibilidad de unir los proyectos que varios de los países ya estaban desarrollando por su parte y que por carencia de recursos no habían concretado, aprovechando las necesidades crecientes del capitalismo norteamericano para fortalecer su presencia en la región al mismo tiempo que proyecta su poder fuera del hemisferio y deja fuera de la región a sus posibles retardadores hegemónicos.

Así, aunque los funcionarios promotores de la IIRSA programan finiquitar la que consideran históricamente postergada integración de las vías ferroviarias, carreteras, fluviales y aéreas del

subcontinente sudamericano que ha, a decir de ellos, ha obstaculizado la integración económica porque a pesar de que de manera natural los países sudamericanos mantienen una vecindad evidente ésta no se ha traducido en un mejor y mayor flujo de personas, insumos y mercancías debido a las condiciones actuales de las leyes fronterizas, los caminos y las políticas de intercambio comercial, lo cierto es que esta integración física real del subcontinente se ha convertido desde hace ya varios años en un imperativo para la concreción del ALCA, sueño dorado del panamericanismo estadounidense, y en una necesidad geoestratégica de la política exterior norteamericana en un contexto mundial de crisis de sucesión hegemónica.

Pero aunque en general el planteamiento de la IIRSA abarca todo el subcontinente sudamericano, lo cierto es que la mayor y mejor planeación de los ejes de esta iniciativa se centra en los países andinos que comparten la cuenca amazónica con Brasil, lo cual no es casual. Si bien se puede argumentar que estos países son el foco de atención de la IIRSA dados sus evidentes atrasos en la construcción de un buen sistema de comunicación al interior y entre ellos también se puede decir que estos países son los mejores dotados en términos de recursos naturales estratégicos ya que en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil se encuentran tanto las mayores reservas de energéticos como gas y petróleo en el continente; las mayores reservas de agua dulce del planeta; los sitios más geoestratégicos como el canal de Panamá; y las mayores posibilidades de telecomunicación, lo cual los convierte en espacios codiciados para la consecución de los objetivos geopolíticos —control sobre el Canal de Panamá, dominio sobre los ejércitos de la región, poder sobre la propiedad de los recursos naturales más importantes del capitalismo, que son los energéticos, propiedad sobre los recursos básicos para la supervivencia humana como el agua y la biodiversidad, entre otros— y geoeconómicos —posibilidad de hacer grandes negocios con los recursos naturales estratégicos a través de las corporaciones transnacionales— de la política exterior norteamericana.

Si se considera que los grandes conflictos del futuro, al igual que las alianzas políticas e intereses compartidos, se expresarán en torno al control y posesión del agua, la propiedad e información biogenética y las telecomunicaciones, se puede ver la importancia y real dimensión de la Amazonia. La Amazonia, frontera nacional y mundial, asume una posición central como capital natural en la crisis de sucesión hegemónica y de reestructuración capitalista contemporánea y parece que no quedará intacta.

Así, mientras en el ámbito comercial se promueve la integración física de los países andinos y amazónicos que ineluctablemente devendrá integración económica, la política exterior norteamericana en la región tiene un correspondiente militar para la IIRSA. Independientemente de que uno de los objetivos más importantes de la promoción para la edificación y acondicionamiento de vías que

permitan la agilización del transporte de las mercancías sea el incremento del comercio amén del control sobre los accesos a los lugares más estratégicos ya por su posición, ya por los recursos que guarde, la construcción de un sistema infraestructural resulta vital para una futura ocupación norteamericana del espacio amazónico en cuestión. Apegándose a la conocida máxima de que los caminos sirven en tiempos de paz para transportar mercancía y en tiempos de guerra para movilizar ejércitos, podemos tener certezas de que el esfuerzo financiero que implica la construcción de caminos multimodales apunta más allá del ágil traslado de bienes y se acerca más a la posibilidad no tan remota de la ocupación norteamericana o multinacional de la Amazonia.

De acuerdo a la magnitud de los planes contenidos en la IIRSA, no podemos dejar a un lado que un proyecto de estas características altera inevitablemente la geopolítica regional donde una potencia de intenciones imperialistas ve frustrados sus propios planes. Tanto en el discurso académico como en el periodístico se habla constantemente de la intromisión de los Estados Unidos en la vida interna de los países latinoamericanos. Se asume que son una gran potencia que busca consolidar su hegemonía en la región y que a partir de la declaración de la Doctrina Monroe han delineado ejes de política externa que incluyen la obstrucción de la acción política de otras potencias en nuestro continente.

A pesar de este hecho, muchos estudios de geopolítica de la región sudamericana excluyen de sus análisis el papel que ha jugado Brasil como potencia regional, país que no por ser latinoamericano está excluido de la responsabilidad de ejercer coerción sobre sus vecinos. Así, cuando se habla de las intenciones ocultas tras las intenciones de la integración física regional en la cual efectivamente las corporaciones transnacionales aliadas con el Departamento de Estado norteamericano son las beneficiadas, se deja de lado una situación que se hace más compleja por las aspiraciones brasileñas de impedir el avance del capital estadounidense en esta subregión donde el comercio internacional está más diversificado y donde las economías nacionales no muestran una dependencia tan evidente como la mexicana.

Por esto, si bien podemos decir que la IIRSA está planeada más que para hacer productiva a la región, para convertirla en una zona de fácil extracción y movilización de recursos y un mercado natural de la producción agrícola estadounidense, no podemos olvidar que una infraestructura de esta envergadura beneficia también a los intereses económico-militares del gobierno brasileño, que mediante los ejes proyectados podría acceder de manera más rápida y menos costosa hacia el Pacífico. Es cierto que ante la competencia intercapitalista, sobre todo la que le opone la Unión Europea y la que le plantean los países asiáticos, los mercados que más interesan a los Estados Unidos no se encuentran tanto en América Latina como en Asia, pero también es notable la forma en la que la política exterior

brasileña, que combina magistralmente la acción militar con la política externa, igualmente pretende acceder a esos mercados aunque con muchos menos recursos.

Si se hace una lectura cuidadosa de la correlación de fuerzas en la región sudamericana tomando en cuenta los avances militares estadounidenses en Ecuador, Perú y sobre todo en Colombia y la ocupación real de los espacios geoestratégicos, se puede observar que el funcionamiento pleno de un sistema de transporte como el que proyecta la IIRSA plantea varias ventajas para los brasileños pues justo porque queda claro que las mayores aportaciones financieras para el proyecto las otorga un banco con dinero estadounidense, por una parte las mayores aportaciones para el financiamiento de la IIRSA no provendrán del peculio del país amazónico y por la otra, la mayor parte de las carreteras, vías férreas e hidrovías programadas se concentran en la parte andina y en la cuenca amazónica, desde donde puede tener acceso al Pacífico. Esto no solamente es conveniente en términos de un aumento significativo en el flujo comercial; también lo es en el sentido de que podría movilizar sus tropas más fácilmente. Sin embargo, el rápido y fácil acceso a la propia cuenca amazónica plantean un desafío a las fuerzas armadas brasileñas sobre todo ante los crecientes rumores de las intenciones de los Estados Unidos de convertir a la cuenca Amazónica en la Primera Reserva Internacional de Agua y Oxígeno bajo control militar estadounidense.

La situación brasileña frente al avance estadounidense en los Andes y la Amazonia a través de la construcción de la IIRSA, preparación del ALCA, y de los asentamientos militares cerca de su territorio es complicada por varias razones. En primer lugar, la principal economía latinoamericana no puede permitir que el país del norte le arrebathe el mercado sudamericano, donde la actividad comercial brasileña es muy dinámica. Más allá del mejoramiento de la infraestructura sudamericana están los planes para la concreción de un ALCA donde Brasil tendría enormes desventajas pues aunque las vías funcionen de mejor manera para agilizar el comercio las mercancías que mejor circularían serían las norteamericanas. Además, en términos militares, la colocación estratégica de los militares estadounidenses le plantea al gobierno brasileño el derroche de recursos para el fortalecimiento de sus tropas y equipo bélico, lo que obligaría a destinar dinero hacia fines poco productivos.

Ante la amenaza que plantea la ocupación estadounidense de la región, el margen de acción brasileño se reduce. Además de la extensión del Mercosur, este país amazónico tiene poco que ofrecer a sus vecinos con miras a establecer una alianza frente al ALCA. La ya histórica incapacidad financiera brasileña para la promoción de sus intereses entre sus vecinos ha venido minando su poder en la región y su poder de convocatoria es mínimo frente al de los Estados Unidos. Aunque por un momento se tuvo la certeza de que el cambio de orientación política de los gobiernos andinos y la propia elección de Luiz Inácio Lula da Silva podría generar una alianza entre los países de esta importante zona, lo cierto

es que los criterios de pragmatismo político se impusieron: en la realidad podemos observar que la unión del Pacto Andino con el Mercosur no pasa del discurso y que Brasil en la realidad seguirá siendo una gran potencia frustrada incapaz de crear un bloque sudamericano por más pretensiones que tenga.

Aunque Brasil no está dispuesto a dejar de ser una potencia regional la verdad es que tampoco está en condiciones ni de increpar abiertamente al gobierno estadounidense ni de liderar un bloque andino-amazónico que imponga condiciones a la gran potencia. En términos de oposición al ALCA en particular y a las decisiones norteamericanas en la región en general, el panorama es desolador, al menos en términos de oposición a nivel gubernamental: el discurso bolivariano de Hugo Chávez en Venezuela ya no engaña a nadie y menos cuando es tan evidente la dependencia que se tiene con relación a las inversiones norteamericanas y cuando las principales petroleras norteamericanas hacen arreglos ventajosos para explotar el petróleo del país; la ultraderechización del gobierno colombiano dirigido por Álvaro Uribe aleja a Colombia de la posibilidad de crear un frente común ante el avance estadounidense; Lucio Gutiérrez en Ecuador logró para la gran potencia lo que ningún otro gobierno en la historia de ese país: la apertura de las Islas Galápagos a la ocupación militar estadounidense y aun cuando ya no es Presidente, el daño ya está hecho; en Perú, el gobierno de Alejandro Toledo tampoco se opondrá al avance, sobre todo militar, de Estados Unidos en su país; finalmente, el gobierno de Bolivia, será también incapaz de aliarse con Brasil en la búsqueda de frenar los intentos norteamericanos de apropiación de los recursos naturales estratégicos. Sin ir más lejos: la coyuntura política andina no es favorable para los intereses brasileños.

Pero más allá de desestabilizar la geopolítica regional aislando a Brasil u obligándolo a aceptar condiciones desventajosas, de facilitar la apropiación de recursos naturales estratégicos, de simplificar los esfuerzos para la ocupación de zonas geoestratégicas, de construir un sistema complejo de comunicaciones y de preparar el terreno para la implantación del ALCA, la IIRSA tiene un objetivo básico y fundamental: controlar el espacio andino y amazónico. Como ya se vio, tanto para la Ciencia Política Clásica como para la política exterior norteamericana, el imperialismo no puede separarse del control sobre el territorio lo cual implica su conocimiento amplio y detallado y su dominio en términos de posibilidad de transformarlo para los fines deseados. No es el espacio *per se* el que deviene fuerza y poder para un Estado, como bien lo ilustra el caso de la Amazonia, donde los países que conforman este territorio ni siquiera lo conocen en su totalidad; es más bien el control y el conocimiento sobre el espacio los que influyen en la capacidad de un Estado para objetivar sus deseos tanto al interior como en el exterior. Las relaciones espaciales, como ya se ha dicho *ad nauseam* en este trabajo, son una expresión más de las relaciones de fuerza que se ejercen en las relaciones internacionales y la idea de conseguir la integración física de los países andinos-amazónicos se inscribe en esta lógica.

Tanto la discusión sobre las intenciones estadounidenses de apropiarse de uno de los espacios geoestratégicos más codiciados —la zona andino-amazónica— y los esfuerzos brasileños por proteger los recursos naturales que esta zona aloja, así como las disquisiciones sobre la importancia del control del espacio y sus recursos en las relaciones internacionales, nos lleva a una cuestión muy básica pero muy olvidada cuando se habla de geopolítica: la posesión real del poder y la propiedad sobre los recursos naturales estratégicos. Ya sean los Estados Unidos, ya sea Brasil como potencia regional o ya sean los gobiernos nacionales los que impongan sus prioridades y proyectos de ocupación territorial o integración física como lo propone la IIRSA, finalmente es una clase, la que gobierna, la que se sigue decidiendo los destinos de millones que —ya sea por necesidad, ausencia de conciencia o quizá como lo plantea Étienne de la Boétie, hasta por placer— terminan por aceptar las imposiciones y el despojo de recursos vitales para la existencia humana. No importa que sea una gran potencia mundial o una potencia regional latinoamericana la que controle el espacio físico y sus riquezas: a final de cuentas, la apropiación, disposición y manejo de los recursos naturales y de sitios estratégicos es éticamente reprochable.

A donde se quiere llegar aquí es a afirmar que el punto sobre el que no pueden dejar de enfocarse los análisis que versan sobre la intervención de la política exterior norteamericana en América del Sur en general y del arco andino y la cuenca amazónica en particular para satisfacer sus intereses geopolíticos y geoeconómicos, no es tanto el de la cuestión de que sean unos —los gobiernos nacionales— y no otros — las superpotencias— los administradores y poseedores de los recursos naturales estratégicos sino a que éstos no pertenecen a nadie, no pueden seguir siendo considerados como objetos, como propiedad privada de unos u otros grupos de poder. Así que además de explicar las formas complejas de las que se vale la política exterior norteamericana para intervenir en esta región del hemisferio occidental, de la conveniencia del despliegue de una política exterior defensiva de las potencias regionales y de la defensa de los gobiernos nacionales de su derecho a aprovechar los recursos, debe empezarse por aclarar que el espacio y todo lo que acoge debe dejar de ser considerado como algo inerte y apropiable o susceptible de convertirse en propiedad para empezar a ser tratado de una vez y por todas no como un escenario sino como parte de un todo que permite la vida y establecimiento de relaciones sociales.

ANEXO DE MAPAS



MAPA 1



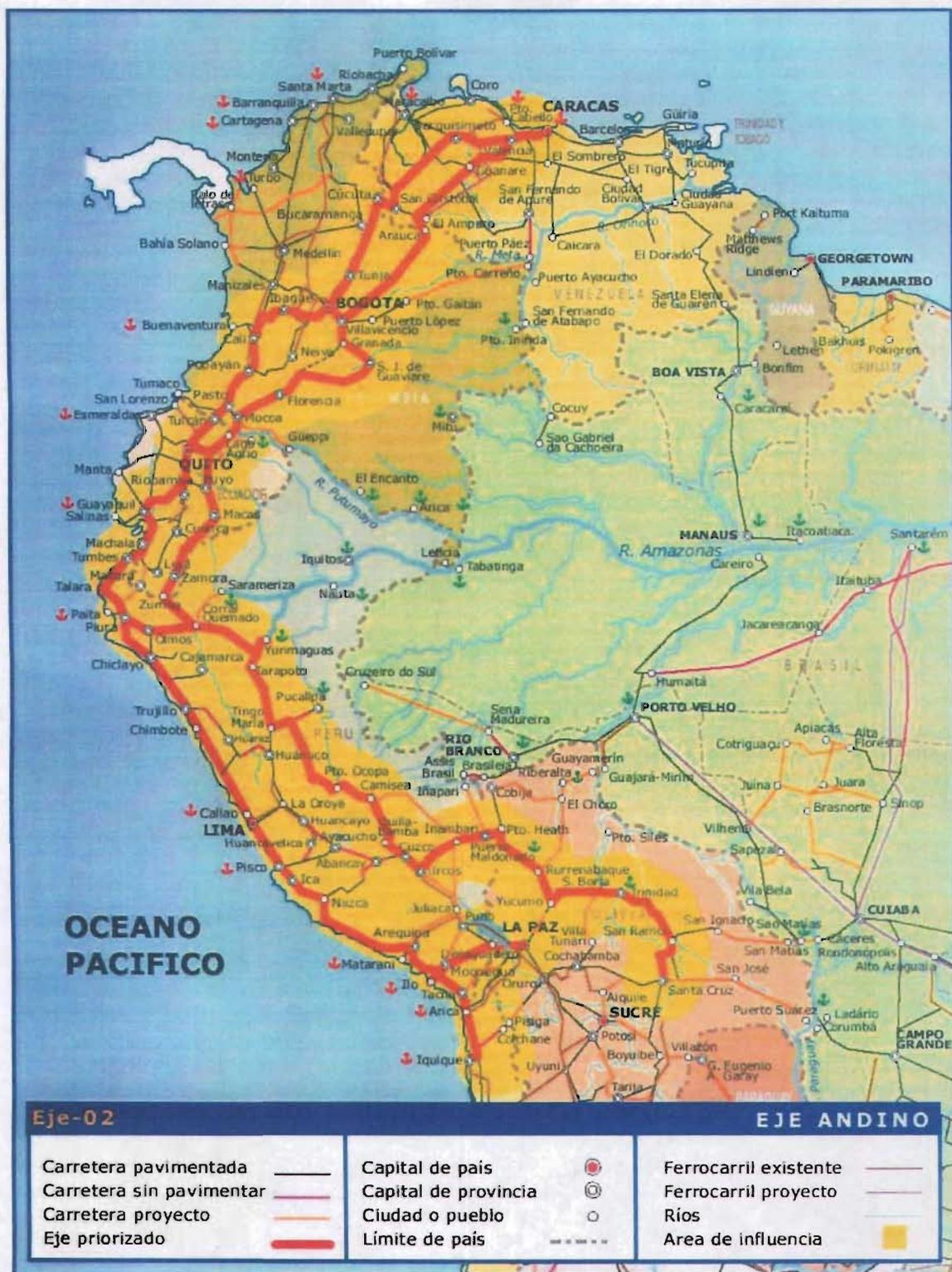
MAPA 2



MAPA 3



MAPA 4



MAPA 5



MAPA 6



MAPA 7

FUENTES DE INFORMACION

BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA

ACOSTA, Alberto, *Nuestro futuro apesta a petróleo* en Hoy, 21 de Febrero de 2001, p. 23.

-----, *Ecuador: entre la ilusión y la maldición del petróleo*, en Ecuador Debate, Quito, No. 58, 2003, pp. 77-100.

-----, *Breve historia económica del Ecuador*, Ed. Corporación Editora Nacional, 2ª. ed., Quito, 2003, 406 pp.

AGUIRRE, Mariano, *¿En las puertas de un nuevo mundo? Neoimperialismo y respuestas*, en Ecuador Debate, Quito, No. 60, 2003, pp. 39-50.

ALBORNOZ Peralta, Oswaldo, *Las compañías extranjeras en el Ecuador*, Ed. Abya-Yala/Universidad Central del Ecuador, Quito, 2001, 295 pp.

ALERTA VERDE, *Todos somos afectados por Texaco*, Ed. Acción Ecológica, Quito, 1999, 50 pp.

-----, *Comentarios de Acción Ecológica a los estudios ambientales del OCP*, Ed. Acción Ecológica, Quito, 2001, 50 pp.

-----, *El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)*, Ed. Acción Ecológica, Quito, 2001, 50 pp.

-----, *El TLC bilateral Ecuador-Estados Unidos oculta demasiado*, Ed. Acción Ecológica, Quito, 2004, 32 pp.

ALFARO, Eloy, *Bases de Manta y proceso de dolarización* en Mundo Ciudadano, Bogotá, Enero de 2004, p. 14.

ALOP, *Plan Colombia. ¿Seguridad nacional o amenaza regional?*, Ed. Centro Peruano de Estudios Sociales/ALOP, Lima, 2002, 154 pp.

ALTVATER, Elmer y MAHNKOPF, Birgit, *Las limitaciones de la globalización. Economía, ecología, y política de la globalización*, Ed. Siglo XXI/CEIICH/UNAM, México, 2002, 433 pp.

ÁLVAREZ, Carlos Guillermo, *¿Es competitiva la contratación petrolera colombiana?* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 4, No. 1, 1998, pp. 91-104.

ANDRADE, Pablo, *La seguridad en las relaciones Ecuador-Colombia* en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 77-88.

ANP, *Militarizada la Sierra del Perijá en el ramal de los Montes de Oca* en Qué pasa, Maracaibo, 23 de enero, 2004, p. 20.

AP, *Galápagos strike ends with pact*, en The Quito Sun, Quito, 11 de Marzo, 2004, p. 1.

APDH, *Base de Manta: las desventajas de un acuerdo desigual*, en Bandera Blanca, Quito, No. 1, 2002a, pp. 12-13.

-----, *Impactos en las bases militares ocupadas por los Estados Unidos* en Bandera Blanca, Quito, No. 1, 2002b, pp. 16-17.

APPENZELLER, Tim, *El caso del carbono perdido*, en National Geographic, México, Volumen 14, No. 2, 2004a, pp. 92-113.

APPENZELLER, Tim, et. alli., *Calentamiento Global. Informes de un planeta más caliente* en National Geographic, México, Volumen 15, No. 3, 2004b, pp. 2-75.

ARANÍBAR, Antonio, *Las relaciones internacionales de Bolivia al comienzo del siglo XXI* en Comentario Internacional, Quito, No. 3, 2002, pp. 159-195.

ARELLANES Jiménez, Paulino, *Las nuevas características de la empresa transnacional y su relación con el Estado en el proceso de globalización* en Economía Internacional, México, No. 52, 1996, pp. 38-52.

AYALA BLANCO, Luis Alberto, El poder frente a sí mismo, Ed. Sexto Piso, México, 2003, 115 pp.

AYALA Mora, Enrique, Resumen de Historia del Ecuador, Ed. Corporación Editora Nacional, 2ª. ed., Quito, 2003, 162 pp.

BAILES, Alyson, *A orillas del Imperio: ¿Un nuevo orden mundial?*, en Metapolítica, México, vol. 8, No. 35, 2004, pp. 69-79.

BANKO, Catalina, *Redefiniciones del papel del Estado en América Latina*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 3, 2003, pp. 37-55.

BARREIRO, Katalina, *La agenda de política exterior Ecuador-Estados* en Adrián Bonilla, (ed.), Orfeo en el Infierno. Una agenda de política exterior ecuatoriana, Ed. FLACSO, Quito, 2002, pp. 231-315.

BARREDA Marin, Andres Octavio, Atlas geoeconómico y geopolítico del estado de Chiapas, tesis doctoral, México, 1999, 182 pp.

BASOMBRÍO, Carlos, *El Plan Colombia y el Perú. Una primera aproximación a sus efectos en la política, el narcotráfico y la seguridad*, en César Montúfar et. alli., Turbulencia en los Andes y Plan Colombia, Ed. Corporación Editora Nacional, Quito, 2003, pp. 179-190.

BAUMANN, Renato, *A geopolítica da integração na América Latina. Uma perspectiva sul-americana*, en Marcos Costa Lima (org.), O lugar da América do sul na nova ordem mundial, Ed. Cortez Editora, São Paulo, 2001, pp. 455-471.

BECERRA Jiménez, Richard, *Douglas Bravo: Chávez negoció el referendo* en La Razón, Caracas, 06 de Junio, 2004, p. 23.

BECKER, Bertha, Estudo geopolítico contemporâneo da Amazônia. Macrocenários Amazonia 2010, Ed. SUDAM/BASA/SUFRAMA/PNUD, Manaus, 1999, 65 pp.

- BEINSTEIN, Jorge, La larga crisis de la economía global, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 2000, 199 pp.
- BEJARANO, Ana, *Buenas intenciones y efectos perversos. Los límites del reformismo institucional en Colombia y Venezuela*, en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 177-187.
- BENALCÁZAR, Patricio, Testimonios de frontera. Efectos del Plan Colombia en la frontera colombo-ecuatoriana, Ed. OIPAZ, Quito, 2002, 95 pp.
- BENCHIMOL, Samuel, Projeto geopolítico brasileiro de libertação e desenvolvimento: a formação e reorganização do espaço político, Ed. Comissão de Redivisão Territorial e Política Demográfica, Manaus, 1977, 135 pp.
- BERMAN, Morris, El crepúsculo de la cultura americana, Ed. Sexto Piso, México, 2003, 166 pp.
- BOBBIO, Norberto, ed., Dizionario di politica, Ed. UTET, Torino, 1976, 1097 pp.
- BONILLA, Adrian, (ed.), Orfeo en el Infierno. Una agenda de política exterior ecuatoriana, Ed. FLACSO, Quito, 2002, 712 pp.
- BORÓN, Atilio, Imperio e Imperialismo, Ed. Itaca/CLACSO, México, 2003, 157 pp.
- BOUE, Juan Carlos, *El programa de internacionalización en Pdvs: ¿triumfo estratégico o desastre fiscal?* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 8, No. 2, 2002, pp. 237-282.
- BRAUDEL, Fernand, La dinámica del capitalismo, Ed. FCE, México, 1986, 127 pp.
- BUSH, George, *Toward a New World Order* en O TUATHAIL, Gearóid, The Geopolitics Reader, Ed. Routledge, London, 1998, 327 pp. 131-135.
- CABEZAS Naranjo, Rodrigo, *Oleoducto salvador* en El Comercio, Quito, 25 de Febrero de 2001, p. 36.
- , *Objeciones a la ruta norte* en El Comercio, Quito, 25 de Marzo de 2001, p. 35.
- , *SOTE y OCP*, en El Comercio, Quito, 21 de Marzo de 2004, p. A5.
- CABIESES, Hugo, *Drogas. Plan Colombia y región andina*, en Plan Colombia. ¿Seguridad nacional o amenaza regional?, Ed. Centro Peruano de Estudios Sociales/ALOP, Lima, 2002, pp. 9-36.
- CALLE Quiñonez, Osvaldo, *Se impuso el poder petrolero* en El juguete rabioso, La Paz, No. 12, 2004, pp. 8-9.
- CAMPAÑA, Carlos, *Las reservas naturales no tienen recursos* en El Comercio, Quito, 19 de Marzo de 2004, p. 35.

CAMPBELL, Colin y LAHERRERE, Jean, *The End of cheap oil*, en Scientific American, Marzo, 1998, pp. 60-65.

CANETTI, Elías, Masa y poder, Ed. Alianza Editorial/Muchnik, Madrid, 1999, 496 pp.

CARRIÓN, César, *Un paso más para blindar la frontera entre Ecuador y Colombia. Más presencia militar conjunta*. en El Comercio, Quito, 19 de Marzo de 2004, p. A3.

CARRIT, E.F., "Liberty and Equality" en Political Philosophy, Ed. Oxford University Press, Oxford, 1967, 246 pp.

CASTELLANOS, Diego Luis, *Petróleo y recolonización*, en Nueva Economía, Caracas, No. 8, 1997, pp. D8-D9.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago, *El Plan Colombia o de cómo una historia local se convierte en diseño global* en Catherine Walsh et. alli., Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino, Ed. Abya-Yala/Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2002, pp. 61-71.

CECEÑA, Ana Esther, *Estados Unidos y la hegemonía económica mundial*, en Revista Latinoamericana de Economía, N0. 99, Octubre-Diciembre 1994, pp.127-142.

CECEÑA, Ana Esther, y BARREDA, Andrés, Producción estratégica y Hegemonía mundial, Ed. Siglo XXI, México, 1995, 544 pp.

-----, *La producción estratégica como sustento de la hegemonía mundial. Aproximación metodológica*, en Ceceña, Ana Esther, y Barreda, Andrés, Producción estratégica y Hegemonía mundial, Ed. Siglo XXI, México, 1995, pp. 15-51.

CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES, *El Plan Colombia. Aprobado por el Senado de Estados Unidos el viernes 23 de julio del 2000*, en Comentario Internacional, Quito, No. 1, 2001, pp. 161-166.

-----, *Comunicado de Brasilia. Reunión de Presidentes de América del Sur. Septiembre de 2000*, en Comentario Internacional, Quito, No. 1, 2001, pp. 177-193.

-----, *Diagnóstico de la frontera Ecuador-Colombia*, en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 189-240.

-----, *Compromiso de Lima. Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Comunidad Andina*, en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 253-261.

CINEP y JUSTICIA Y PAZ, *Otra versión de la guerra en Medellín* en Mundo Ciudadano, Bogotá, Enero de 2004, p. 25.

CLAIRMONT, Frederic, *Una deuda que amenaza al Imperio. Trastabilla la economía estadounidense*, en Le Monde Diplomatique, Bogotá, No. 11, Abril de 2003, pp. 18-19.

- CLAUSEWITZ, von Karl, De la guerra, Ed. Instituto de la Habana, Cuba, 1969, 620 pp.
- , De la guerra, Ed. Colofón, México, 1999, 611 pp.
- COFFEY, Gerard, *La naturaleza en venta. La biodiversidad, el agua y los bosques son codiciados por empresas internacionales*, en Tintají, Quito, No. 19, Mayo de 2003, pp. 6-7.
- , *El cuento de la concesión. Apagón en las empresas eléctricas*, en Tintají, Quito, No. 23, Junio de 2003, pp. 4-5.
- , *Chao Petroecuador...*, en Tintají, Quito, No. 23, Junio de 2003, p. 16.
- CORDOVÉZ, Diego, *La paz caliente* en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 15-46.
- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, Proyectos viales de integración andina, Ed. CAF, Bogotá, 1993, 230 pp.
- , Proyectos energéticos de integración andina, Ed. CAF, Bogotá, 1993, 325 pp.
- , Telecomunicaciones e informática andinas, Ed. CAF, Bogotá, 1995, 199 pp.
- , Los ríos nos unen. Integración fluvial suramericana, Ed. CAF, Bogotá, 1998, 244 pp.
- , Energía sin fronteras. Integración eléctrica suramericana, Ed. CAF, Bogotá, 2000, 195 pp.
- , Red fluvial de Venezuela. Orden de prioridades de los proyectos fluviales de integración andina, Ed. CAF, Caracas, 2003, 135 pp.
- CORPOZULIA, Hacia la minería del futuro, Ed. CORPOZULIA, Caracas, 2002, 75 pp.
- COSTA Lima, Marcos (org.), O lugar da América do sul na nova ordem mundial, Ed. Cortez Editora, São Paulo, 2001, 472 pp.
- CHÉRREZ, Cecilia, *Algo feo se cocina con el agua*, en Tintají, Quito, No. 25, Julio de 2003, pp. 10-11.
- CHOMSKY, Noam, La aldea global, Ed. Txalaparta, 5ª. ed., Tafalla, 2000, 203 pp.
- , La geopolítica del Plan Colombia, Ed. Ediciones Izquierda Viva, Bogotá, 2002, 36 pp. 54-62.
- DÁVILA Flores, Alejandro, *El Imperio herido: inteligencia y seguridad*, en Metapolítica, México, vol. 8, No. 35, 2004, pp.

- DE ALMEYDA, Paulo Roberto, *Mercosul e ALCA na perspectiva brasileira: alternativas excludentes?*, en Marcos Costa Lima (org.), O lugar da América do sul na nova ordem mundial, Ed. Cortez Editora, São Paulo, 2001, pp. 53-69.
- DE LA BOETIÉ, Étienne, Discurso de la servidumbre voluntaria, Ed. Sexto Piso, México, 2003, 103 pp.
- DE OLIVEIRA, Amancio, et. alli., *La política exterior brasileña y la seguridad hemisférica*, en María Cristina Rosas (coord.), Cooperación y conflicto en las Américas. Seguridad Hemisférica: un largo y sinuoso camino, Ed. FCPyS/UNAM/ Centro de Estudios de Defensa Hemisférica, México, 2003, pp. 183-206
- DIETERICH, Heinz, *Cáncer militar en América Latina. Tres bases estadounidenses cercan el continente*, en Tintají, Quito, No. 3, Junio de 2002, p. 15.
- EFE y EL TIEMPO, *Uribe pide cuatro años para el Plan Colombia* en El Comercio, Quito, 21 de marzo de 2004, p. A2-A3.
- , *Lucio Gutiérrez toma distancia del Plan Colombia. Firma un acuerdo de 44 puntos con Colombia pero no participará en el conflicto*, en El Comercio, Quito, 21 de Marzo de 2004, p. B3.
- EL COMERCIO, *Gutiérrez declares Petroecuador in emergency, restructures State Companies* en The Quito Sun, Quito, 11 de Marzo, 2004, p. 1.
- ESCUADERO, Hernán, *Ecuador y Perú: vecinos más cercanos* en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 89-96.
- ESCUELA DE POST GRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES, Inconstitucionalidad de la Base de Manta, Ed. Universidad Central del Ecuador, Quito, 2000, 60 pp.
- ESPINOSA, Carlos, *Relaciones Estados Unidos-Ecuador. A la sombra de septiembre 11* en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 73-76.
- ESPINOSA, Miriam Amparo, et. alli., El Cauca: alternativas de paz y gobernabilidad. Monografía del conflicto armado en el Cauca, Ed. UNDP/USAID/ARD, Bogotá, 2003, 104 pp.
- ESTAY, Jaime, *El ALCA: su avance y los contenidos de la negociación* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 99-116.
- ESTRADA, Jairo, Ensayos críticos. Plan Colombia, Ed. UN, Bogotá, 2002, 650 pp.
- (comp.), Plan Colombia y la intensificación de la guerra, Ed. UN, Bogotá, 2003, 732 pp.
- EVANS, Graham, et al., The Dictionary of World Politics, Ed. Simon&Schuster, Cambridge, 1990, 364 pp.

FLÓREZ, Sandra Bibiana, *Colombia: los mercenarios asesinos* en Proceso, No. 1274, 01 de abril, 2001, pp. 48-50.

FONTAINE, Guillaume, El precio del petróleo: conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica, Ed. FLACSO/IFEA, Quito, 2003, 255 pp.

-----, *Geopolítica del petróleo en América Latina*, en Ecuador Debate, Quito, No. 58, 2003, pp. 46-79.

GAETE Balboa, Pablo, *El ALCA ¿más allá del punto sin retorno?* En Comercio Exterior, México, Vol. 51, No. 8, agosto de 2001, pp. 724-731.

GALEANO, Eduardo, Memoria del fuego. III. El siglo del viento, Ed. Siglo XXI, México, 1986, 374 pp.

GALLARDO, Mauricio, *La toma de la base de Manta*, en Bandera Blanca, Quito, No. 5, 2002, pp. 8-9.

GAMARRA, Eduardo, Entre la droga y la democracia. La cooperación entre Estados Unidos-Bolivia y la lucha contra el narcotráfico, Ed. ILDIS/Friedrich Ebert Stiftung, La Paz, 1994, 222 pp.

GAMBINA, Julio C., *Experiencias y expectativas de resistencia al ALCA* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp.197-211.

GARCÍA Reyes, Miguel y OJEDA Fierro, Djalma, El nuevo orden petrolero global. El mercado en manos de los monopolios, Ed. COLMEX, México, 1999, 209 pp.

GARCÍA Gallegos, Bertha, *Petróleo, Estado y Proyecto Militar*, en Ecuador Debate, Quito, No. 58, 2003, 75-89 pp.

GARCÍA, Alberto, et. alli., La Guerra del Agua. Abril de 2000: la crisis de la política en Bolivia, Ed. Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, La Paz, 2003, 125 pp.

GARCÍA Larralde, Humberto, *Reflexiones en torno al comercio bilateral colombo-venezolano: desafíos de la integración económica* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 8, No. 2, 2002, pp. 127-180.

GARCÍA, María Isabel, *Gobierno no digiere la derrota. Colombia después del triunfo de Luis Garzón*, en Tintají, Quito, No. 33, Noviembre de 2003, p. 14.

GARRIDO, Alberto, Alimentos, nuevo poder de las trasnacionales, Ed. Corpoandes, Mérida, 1982, 153 pp.

-----, Guerra global. Plan Colombia y Revolución Bolivariana, Ed. Ediciones del autor, Caracas, 2003, 170 pp.

-----, Notas sobre la Revolución Bolivariana, Ed. Ediciones del autor, Caracas, 2003, 206 pp.

- GARZÓN, Estela, *¿Qué vendrá luego de las maniobras UNITAS?* en Tintají, Quito, No. 23, Junio de 2003, p. 8
- GASETC, *Globalización S.A.* en La Jornada, México, 26 de diciembre, 2001, pp i-iv.
- GAZCÓN, Felipe, *En la negociación del ALCA, Canadá y EU apuestan a la asimetría democrática en El Financiero*, México, 3 de abril de 2001, p. 14
- GEORGE, Susan, *Nadie quiere los Organismos Genéticamente Modificados, salvo los industriales*, en Le Monde Diplomatique, Bogotá, No. 11, Abril de 2003, pp. 30-31.
- GIUSTI, López, *El futuro del petróleo* en Foreign Affairs, México, Vol. 1, No. 1, primavera 2001, p.113.
- GLYN, Andrew y SUTCLIFFE, Bob, *El nuevo orden capitalista ¿global pero sin liderazgo?* en Globalización: crítica a un paradigma, Ed. UNAM-IIE-DGAPA-Plaza y Janés, México, 1999, 365 pp.
- GOLUB, Philip, *Del neo-wilsonianismo al militarismo: los patrones movedizos de la política norteamericana*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 1, 2003, pp. 13-28.
- GORDILLO, Ramiro, El oro del diablo. Ecuador: historia del petróleo, Ed. Corporación Editora Nacional, Quito, 2003, 330 pp.
- GRAY, John, Falso amanecer, Ed. Paidós, Barcelona, 2000, 301 pp.
- HARDT, Michael y NEGRI, Antonio, Imperio, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2002, 432 pp.
- HERNÁNDEZ Arvelo, Miguel Ángel, *"te odio y te quiero". Colombia y Venezuela: entre la tensión y la integración* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 4, No. 4, 1998, pp. 55-94.
- HERRERA, Washington, *Política del nuevo gobierno en la integración andina* en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 67-72.
- HETTNE, Björn y INOTAI, Andrés, The new regionalism. Implications for global development and international security, Ed. UNU/World Institute for Development Economics Research, Helsinki, 1994.
- IEPALA, Narcotráfico y política II, Ed. IEPALA, Cochabamba, 1985, 292 pp.
- INPA, O Amazonas, Ed. INPA, Manaus, 2000, 197 pp.
- INTER PRESS SERVICE, Transgénicos. La fase oculta, Ed. Abya-Yala, Quito, 2001, 196 pp.
- IRAEGUI Valenciaga, Aitor, *El ALCA. La gran pelea americana*, en Umbrales, La Paz, No. 10, 2001, pp. 183-201.
- ISCH, Edgar, *Áreas Naturales ¿protegidas?* en Tintají, Quito, No. 40, marzo de 2002, p. 3.

- JALIFE-RAHME, Alfredo, El lado oscuro de la globalización, Ed. Cadmo&Europa, México, 2000, 471 pp.
- KENNEDY, Paul, Grand strategies in war and peace, Ed. Yale University Press, New York, 1991, 228 pp.
- KIM, Samuel, *China as a great power* en Current History, Volumen 96, No. 611, 1997, p. 240-255.
- KLARE, MICHAEL, *La nueva geografía de los conflictos internacionales*, en Foreign Affairs, México, Volumen 1, No. 2, 2001, pp. 151-165.
- , Resource wars. The new landscape of global conflict, Ed. Metropolitan/Owl Books, New York, 2002, 289 pp.
- KNIGHT, Danielle, *Un monopolio de cinco transnacionales* en Inter Press Service, Transgénicos. La fase oculta, Ed. Abya-Yala, Quito, 2001a, pp. 89-92.
- , *Los transgénicos en la balanza* en Inter Press Service, Transgénicos. La fase oculta, Ed. Abya-Yala, Quito, 2001b, pp. 155-158.
- KRUGMAN, Paul, Strategic trade. Policy of the new International Economics, Ed. MIT, Cambridge, 1990, 313 pp.
- LACOSTE, Ives, La geografía: un arma para la guerra, Ed. Anagrama, Barcelona, 1977, 158 pp.
- LANDER, Edgardo, (ed.) La colonialidad del saber.: eurocentrismo y ciencias sociales. Ed. FACES/UCV/UNESCO, Caracas, 2000, 348 pp.
- , *La utopía del mercado total y el poder imperial*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 8, No. 2, 2002, pp. 51-79.
- , *Los derechos de la propiedad intelectual en la geopolítica del saber en la sociedad global*, en Catherine Walsh et. alli., Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino, Ed. Abya-Yala/Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2002, pp. 73-102
- LANDER, Luis. E., *La apertura petrolera en Venezuela: de la nacionalización a la privatización* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 4, No. 1, 1998, pp. 153-182.
- , *La reforma petrolera del gobierno de Chávez*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 8, No. 2, 2002, pp. 185-187.
- LANDER, Luis. E., ed., Poder y Petróleo en Venezuela, Ed. FACES-UCV, Pdvsa, Caracas, 2003, 205 pp.
- LARREA, Carlos y SÁNCHEZ, Jeannette, *Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador*, en Ecuador Debate, Quito, No. 60, 2003, pp. 7-24.

LEAL Buitrago, Francisco, La Seguridad Nacional a la deriva. Del Frente nacional a la Posguerra Fría, Ed. Alfaomega/Ceso-Uniandes, Bogotá, 2002, 247 pp.

LENIN, V.I., El Imperialismo, fase superior del capitalismo, Ed. Progreso, Moscú, 1966, 130 pp.

LIMA Esteves Alves, Cláudia, Formação do espaço amazônico e relações fronteiriças, Ed. Universidade Federal de Roraima/Centro de Ciências Sociais e Geociências/UFRR, Boa Vista, 1998, 247 pp.

LÓPEZ Maya, Margarita, EE.UU. en Venezuela: 1945-1948. (Revelaciones de los archivos estadounidenses), Ed. UCV/CDCH, Caracas, 1996, 397 pp.

LÓPEZ Maya, Alexander, *...liquidar a Emcali es tumbar a Cali*, en Desde Abajo, Bogotá, Abril de 2003, pp. 10-11.

LUCAS, Kintto, Plan Colombia. La paz armada, Ed. Planeta, Quito, 2000, 180 pp.

-----, La rebelión de los indios, Ed. Abya-Yala, Quito, 2000, 193 pp.

-----, Ecuador: de la paz con Perú a la guerra sucia en Colombia, Ed. Abya- Yala, Quito, 2000, 125 pp.

-----, *Un hongo amenaza la Amazonia* en Inter Press Service, Transgénicos. La fase oculta, Ed. Abya-Yala, Quito, 2001, pp. 187-190.

-----, *"Las FARC no realizarán ofensivas militares en Ecuador"*. Entrevista con Raúl Reyes, en Tintají, Quito, No. 32, Octubre de 2003, p. 15.

-----, *La segunda parte del Plan Colombia se inició en Quito* en Tintají, Quito, No. 36, Enero de 2004, pp. 8-9.

MACÍAS Cardone, Teresa, *Integración y desintegración de un mercado común de energía: México-Estados Unidos-Canadá* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 4, No. 1, 1998, pp. 105-122.

MAHAN, Alfred, El interés de Estados Unidos de América en el poderío marítimo. Presente y futuro, Ed. UN, Bogotá, 1995, 150 pp.

MANDEL, Robert, The changing face of the national security: a conceptual analysis, Ed. Greenwood, Westport, 1994, 155 pp.

MANRIQUE, Miguel, La seguridad en las Fuerzas Humanas venezolanas, Ed. Fondo Editoria Tropykos/Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas/Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1996, 242 pp.

MAÑÉ Estrada, Aurelia, *Transnacionalización y concentración del poder en la esceca petrolera actual*, en Ecuador Debate, Quito, No. 58, 2003, pp. 101-110.

MARCH, José, El mito del Darién, Ed. Argos, México, 1960, 299 pp.

- MARIACA Enrique, *El ALCA planteará plan regresivo y de subordinación energética*, en: Dinámica Económica, La Paz, No. 11, 2002b, pp. 233-240.
- MARÍN, Álvaro, *Colombia: botín de guerra en Desde Abajo*, Bogotá, Abril de 2003, p. 5.
- MÁRQUEZ, Ángel, El imperialismo petrolero y la revolución venezolana. las ganancias extraordinarias y la soberanía nacional, Tomo II, Ed. Ruptura, Caracas, 1977, 395 pp.
- MÁRQUEZ, Humberto, *Venezuela: batalla política nacional en guerra petrolera mundial. Entrevista con Victor Poleo* en Tintají, Quito, No. 16, Enero de 2003, p. 15.
- MARTÍNEZ, Esperanza, *Adicción al petróleo: el FMI, la deuda externa y el OCP*, en Tintají, Quito, No. 8, Agosto de 2002, pp. 4-5.
- , *Las preguntas y respuestas más frecuentes sobre Texaco*, en Tintají, Quito, No. 32, Octubre de 2003, p. 8.
- , *Petróleo Amargo*, en Tintají, Quito, No. 35, Diciembre de 2003b, p. 6.
- MARTÍNEZ, Sanjuana, *Negocios inconfesables*, en Proceso, México, No. 1451, 22 de Agosto, 2004, pp. 56-58.
- MASSEY, Doreen, *Política y Espacio/Tiempo* en Keith, M. Y S. Pile, eds., Place and the Politics of Identity, Ed. Routledge, New York, 1993, 350 pp.
- MENDIBLE Zurita, Alejandro, Venezuela-Brasil. La historia de sus relaciones desde sus inicios hasta el umbral del Mercosur (1500-1997), Ed. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1999, 322 pp.
- MENDOZA Potellá, Carlos, *Apertura petrolera, preámbulo de la privatización* en Nueva Economía, Caracas, No. 8, 1997, pp. 181-215.
- MIRES, Fernando, El fin de todas las guerras. Un estudio de filosofía política, Ed. LOM, Santiago, 2001, 259 pp.
- MOLANO Bravo, Alfredo, *El Plan Colombia y el conflicto armado*, en Plan Colombia. ¿Seguridad nacional o amenaza regional?, Ed. Centro Peruano de Estudios Sociales/ALOP, Lima, 2002, pp.43-53.
- MONIZ Bandeira, Luiz Alberto, Brasil, Argentina e Estados Unidos. Da Triple Alianza ao Mercosul, Ed. Revan, Rio de Janeiro, 2003, 676 pp.
- MONSIVÁIS, Carlos, *Que se lleven sus matanzas a otra parte, que no me dejan ver la telenovela en Ecuador* Debate, Quito, No. 60, 2003, pp. 159-170.
- MONTÚFAR, César y CORDOVÉZ, Diego, *La situación colombiana ante el mundo: entrevista con Álvaro Uribe Vélez* en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 47-52.
- MONTÚFAR, César, *El Ecuador y el Plan Colombia*, en Comentario Internacional, Quito, No. 1, 2001, pp. 103-111.

-----, *El Ecuador entre el Plan Colombia y la Iniciativa Andina: del enfoque de los "efectos" a una perspectiva de "regionalización"*, en César Montúfar et. alli., Turbulencia en los Andes y Plan Colombia, Ed. Corporación Editora Nacional, Quito, 2003, pp. 205-234.

MORALES, Salvador, Primera Conferencia Panamericana. Raíces del modelo hegemónico de integración, Ed. CICJT, México, 1994, 669 pp.

MORALES, Juan F., *El Ecuador y el ALCA: temas para la reflexión*, en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 139-149.

MORALES Olivera, Manuel, El referéndum sobre el gas, Ed. UPS, La Paz, 2004, 26 pp.

-----, et. alli., Análisis del Proyecto de Ley de Hidrocarburos, Ed. UPS, La Paz, 2004, 30 pp.

MORAN, Theodore, Las empresas multinacionales, Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1991, 262 pp.

MOREANO, Alejandro, *La privatización de la guerra*, en Tintají, Quito, No. 1, Mayo de 2002, p. 5.

-----, *La política de "navegar al gareté"*, en Tintají, Quito, No. 25, Julio de 2003, p. 2.

MÜLLER Rojas, Alberto, Relaciones peligrosas. Militares, Política y Estado, Ed. Fondo Editorial Tropykos/Fundación Gual y España, Caracas, 1992, 350 pp.

-----, *La nueva cara de la Fuerza Armada*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 3, 2003, pp. 179-204.

NARVÁEZ, Iván, Frontera violenta. Explosiones del SOTE e impactos socioambientales, Ed. Petroecuador, Quito, 2001, 165 pp.

NINA, Constitución Política de la República del Ecuador, Ed. Ediciones Jurídicas Lex, Quito, 2001, 164 pp.

NOVIS/KAIROS, Las nuevas rutas del saqueo, Ed. Acción Ecológica, Quito, 2003, 20 pp.

NÚÑEZ, Miguel Ángel, Propuesta de desarrollo rural sustentable, Ed. Parlatino, Caracas, 2002, 152 pp.

O' LOUGHLIN, John, ed., Dictionary of Geopolitics, Ed. Greenway Press, Connecticut, 1994, 281 pp.

O' TUATHAIL, Gearóid y DALBY, Simon, *American Exceptionalism* en O' LOUGHLIN, John, ed., Dictionary of Geopolitics, Ed. Greenway Press, Connecticut, 1994, pp.8-10.

O' TUATHAIL, Gearóid, et al., The Geopolitics Reader, Ed. Routledge, London, 1998, 327 pp.

OBANDO, Enrique, *Las relaciones civiles-militares en el Perú en la década del 90: lecciones para el futuro* en Las Fuerzas Armadas en la región andina ¿No deliberantes o actores políticos?, Ed. Comisión Andina de Juristas, Lima, 2001, pp. 248-304.

OJEDA, Francisco, Nueva Constitución Política de Perú, Ed. Ediciones Ojeda, Perú, 2004, 54 pp.

ORDÓÑEZ Espinosa, Hugo, La cuestión territorial ecuatoriana en el siglo XX. Del arbitraje español al enclave de Manta, Ed. Pudeleco, Quito, 2004, 232 pp.

ORGÁZ, Mirko, La guerra del gas. Fundamentos histórico-políticos para la tercera nacionalización de las transnacionales petroleras, Ed. C&C Editores, 3ª. ed., La Paz, 2004, 323 pp.

ORNELAS, Raúl, *Las empresas transnacionales como agentes de la dominación mundial capitalista* en Ceceña, Ana Esther, y Barreda, Andrés, Producción estratégica y Hegemonía mundial, Ed. Siglo XXI, México, 1995, pp. 398-479.

-----, *América Latina: territorio de construcción de la hegemonía*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 117-135.

OSAVA, Mario, *El sur de Brasil cierra el paso a la soja transgénica* en Inter Press Service, Transgénicos. La fase oculta, Ed. Abya-Yala, Quito, 2001, pp. 47-49.

-----, *Brasil camina hacia el futuro. Nueva oportunidad para ideas viejas* en Tintají, Quito, No. 16, Enero de 2003, p. 14.

PALACIOS Solano, Isaac, América Latina: el estigma del petróleo (México, Ecuador y Venezuela), Ed. Instituto de Investigaciones Económicas/UNAM/El Caballito, México, 1996, 194 pp.

PARELES, Pedro Miguel, *La globalización y el petróleo venezolano* en Nueva Economía, Caracas, No. 8, 1997, pp. 3-42.

PARKER, Geoffrey, *Hérodote* en O' Loughlin, John, ed., Dictionary of Geopolitics, Ed. Greenway Press, Connecticut, 1994, pp. 118-120.

PAZ, Juan y CEPEDA, Miño, Golpe y contragolpe. La rebelión de Quito del 21 de enero de 2000, Ed. Abya-Yala/Taller de Historia Económica, Quito, 2002, 90 pp.

PERRY, William, *La seguridad de los Estados Unidos y el Hemisferio Occidental* en Mc Michael, Daniel, ed. La estabilidad del hemisferio occidental: el enlace latinoamericano, México, Ed. Noema, 1985, 208 pp.

PETRAS, James y MORLEY, Morris, ¿Imperio o República? Poderío mundial y decadencia nacional de Estados Unidos, Ed. Siglo XXI/UNAM/CEIICH, México, 1998, 191 pp.

PETRAS, James, *¿Puede seguir W. Bush seguir los pasos de Bill Clinton?* en La Jornada, México, 21 de enero, 2001a, p.27.

-----, *La revolución informática, la globalización y otras fábulas imperiales* en John Saxe-Fernández y James Petras, Globalización, imperialismo y clase social, Ed. Lumen/Hvmanitas, Buenos Aires, 2001b, pp. 333-342 pp

-----, Los intelectuales y la globalización: de la retirada a la rendición, Ed. Abya-Yala, Quito, 2004, 301 pp.

PINTO, María Elena, *El Plan Colombia y los procesos de integración subregional andina: visión desde Venezuela*, en César Montúfar et. alli., Turbulencia en los Andes y Plan Colombia, Ed. Corporación Editora Nacional, Quito, 2003, pp. 235-268.

PORTELLI, Hugues, Gramsci y el bloque histórico, Ed. Siglo XXI, 19ª ed., México, 1997. 162 pp.

PORUBAN, Steven, *ECOPETROL seeks investment; unveils offering* en Oil & Gas Journal, 29 de Noviembre, 1999, pp. 20-34.

PUYANA, Alicia, Colombia: economía política de las expectativas petroleras. Ed. UN, Bogotá, 2001, 236 pp.

QUEREJAZU Calvo, Roberto, Guano, salitre, sangre. Historia de la Guerra del Pacífico. La participación de Bolivia, Ed. Juventud, 3ª. ed, La Paz, 1998, 652 pp.

-----, Historia de la Guerra del Chaco, Ed. Juventud, La Paz, 1998, 192 pp.

QUIJANO, Aníbal, *Notas sobre "raza" y democracia en los países andinos*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 1, 2003, pp. 53-59.

RAMÍREZ León, José Luis, *Colombia y Venezuela: acerca de cómo profundizar la vecindad sin permitir el conflicto* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 8, No. 2, 2002, pp. 95-125.

RAMOS Pablo, *Reflexiones sobre la cuestión del gas y su exportación a Estados Unidos*, en: Integración energética en el Cono Sur, La Paz, N° 11, 2003, pp. 9-35.

RATTNER, Henrique, MERCOSUL e ALCA, Ed. EDUSP, Sao Paulo, 2002, 228 pp.

REUTERS/AFP, *Otorga Brasil ayuda eléctrica temporal a Argentina* en El Economista, México, 31 de marzo, 2004, p.7.

RIVERA Vélez, Fredy, Ecuador: los bemoles de la guerra contra las drogas, mimeo., Quito, 2004, 44 pp.

ROBLES, Lisa, *Washington dicta su política petrolera en Venezuela*, en El Nacional, Caracas, Junio 6, 2003a, p. 18.

-----, *Casi lista la integración energética*, en El Nacional, Caracas, Mayo 13, 2003b, p. 22.

RODAS Chaves, Germán, El Plan Colombia. Análisis de una estrategia neoliberal, Ed. Abya-Yala, 2ª. ed., Quito, 2004, 189 pp.

RODRÍGUEZ, Alí, *La reforma petrolera venezolana de 2001* en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 8, No. 2, 2002, pp. 189-200.

- RONCKEN, Theo, La lucha contra las drogas y la proyección militar de Estados Unidos. Centros Operativos de Avanzada en América Latina y el Caribe, Ed. Abya-Yala/TNI, Quito, 2004.
- ROJAS Aravena, Francisco, *Latinoamérica y el terrorismo de Posguerra fría*, en Ecuador Debate, Quito, No. 60, 2003, pp. 127-145.
- ROSAS González, María Cristina, *El comercio mundial de armamento: el proceso de desnuclearización y el retorno a las armas convencionales* en Relaciones Internacionales, México, vol. XII. No. 51, 1991, pp. 35-45.
- , *Seguridad nacional y aspectos estratégico-militares inmersos en el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá*, en Relaciones Internacionales, México, vol. XIII. No. 52, 1991, pp. 88-95.
- , *Los cien días de Clinton* en Etcétera, México, 20 de mayo, 1993, pp.17-24.
- , *Las nuevas concepciones sobre la seguridad internacional* en Relaciones Internacionales, México, No. 53, 1993, pp. 19-25.
- , Crisis del multilateralismo clásico: política comercial externa estadounidense y zonas de libre comercio, Ed. UNAM/IE, México, 1995, 287 pp.
- , México ante los procesos de regionalización económica en el mundo, Ed. UNAM/IE, México, 1996, 232 pp.
- , *El Caribe en la agenda hemisférica de Estados Unidos* en Saxe-Fernández, John, comp., Geoeconomía y Geopolítica del Caribe, Ed. UNAM/IE, México, 1997, pp. 117-144.
- , México y la política comercial externa de las grandes potencias, Ed. UNAM-IE-Porrúa, México, 1999, 478 pp.
- , La economía internacional en el siglo XXI. OMC, Estados Unidos y América Latina, Ed. UNAM/FCPyS, México, 2001, 447 pp.
- , *El Mercado Común del Cono Sur en la integración latinoamericana* en Revista Mexicana de Política Exterior, México, No. 64, 2001, pp.101-145.
- , Australia y Canadá: ¿potencias medias o hegemonías frustradas? Una visión desde México, Ed. FCPyS-UNAM, México, 2002a, 759 pp.
- , *¿Cuánto cambió el mundo después del 11 de septiembre?*, en María Cristina Rosas, (coord.), Cuando el destino nos alcance: Terrorismo, democracia y seguridad, Ed. FCPyS/UNAM/Quimera/Australian National University, México, 2002b, pp.133-174.
- , Sanciones, zanahorias y garrotes, Ed. FCPyS/UNAM/SELA, México, 2003, 316 pp.

- , *¿Existe la seguridad hemisférica?* en María Cristina Rosas (coord.), Cooperación y conflicto en las Américas. Seguridad Hemisférica: un largo y sinuoso camino, Ed. FCPyS/UNAM/ Centro de Estudios de Defensa Hemisférica, México, 2003, pp. 30-73.
- , *¿Privatización o privación de la seguridad?*, en Metapolítica, México, vol. 8, No. 35, 2004, pp. 88-97.
- RUIZ Contardo, Eduardo, *La dominación en contradicción con la integración en América Latina en Configuraciones del Mundo Actual*, México, No. 2, 1993, pp. 25-34.
- SAAVEDRA, Luis Ángel, *Base de Manta: dolor e incertidumbre* en Tintají, Quito, No. 15, Diciembre de 2002, p. 8.
- SAID, Edward, *Perspectivas imperiales*, en La Jornada, México, Julio 28 de 2003, p. 30.
- SALGADO Tamayo, Manuel, *DynCorp: una transnacional de la guerra en Manta* en Tintají, Quito, No. 1, Mayo de 2002, pp. 4-5.
- SANTOS, Marlene, *Más corrupción el petróleo*, en Tintají, Quito, No. 16, Enero de 2003, p. 4
- SAXE-FERNÁNDEZ, John, La contrarreforma hemisférica, Ed. UNAM/CELA, México, s.f., 55 pp
- , Petróleo y estrategia, Ed. Siglo XXI, México, 1980, 177 pp.
- , *Seguridad nacional mexicana en la Posguerra Fría* en Sociológica, No. 25, mayo-agosto, 1994, pp. 149-169.
- , Nafta: los cruces de la geopolítica y geoconomía del capital, Ed. UNAM/CEIICH, México, 1994, 37 pp.
- , *las relaciones cubano-estadounidenses: su repercusión hemisférica* en Saxe-Fernández, John, comp., Geoconomía y Geopolítica del Caribe, Ed. UNAM/IIIE, México, 1997, pp. 73-116.
- , *Redefinición de vínculos con Estados Unidos* en González Souza, Luis, coord., Reconstruir la soberanía, Ed. La Jornada Ediciones/IERD, México, 1998, pp.105-121.
- , *Globalización e imperialismo*, en Saxe-Fernández, John, comp., Globalización: crítica a un paradigma, Ed. UNAM-IIIE-DGAPA-Plaza y Janés, México, 1999, 365 pp.
- , La compra-venta de México, Ed. Plaza Janés, México, 2002, 598 pp.
- , Banco Mundial y desnacionalización integral en México; Ed. UNAM/CEIICH, México, 2003, 156 pp.
- y DELGADO Ramos, Gian Carlo, Imperialismo y Banco Mundial en América Latina, Ed. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, Cuba, 2004, 151 pp.

SAXE-FERNÁNDEZ, John, y PETRAS, James, Globalización, imperialismo y clase social, Ed. Lumen/Hvmanitas, Buenos Aires, 2001, 342 pp.

SAXE-FERNÁNDEZ, Eduardo y BRÜGER, Christian, *La democracia en el globalismo neoliberal latinoamericana*, en Saxe-Fernández, John, comp., Globalización: crítica a un paradigma, Ed. UNAM-IIE-DGAPA-Plaza y Janés, México, 1999, pp. 289-348.

SCHATAN, Jacobo, El saqueo de América Latina. Deuda externa, Neoliberalismo, Globalización, Ed. LOM, Santiago, 1998, 201 pp.

SCHILLING, Paulo, El expansionismo brasileño, Ed. El Cid, México, 1978, 314 pp.

SECRETARÍA DE ENERGÍA, Balance Nacional de Energía, Ed. Secretaría de Energía, México, 2002, 199 p.

SELA, *Declaración de Caracas*, en Capítulos, Santiago, No. 58, 2000, p.3- ss.

SEOANE Flores, Alfredo, *Oportunidades y asimetrías del Area de Libre Comercio de las Américas*, en Umbrales, La Paz, No. 10, 2001, pp. 202-230.

SMITH, Neil, *Roosevelt Corollary* en O LOUGHLIN, John, ed., Dictionary of Geopolitics, Ed. Greenway Press, Connecticut, 1994, p. 210.

SOBERÓN Garrido, Ricardo, *Narcotráfico y Plan Colombia: Nuevo mapa, políticas, situación, naturaleza y tendencias en Plan Colombia. ¿Seguridad nacional o amenaza regional?*, Ed. Centro Peruano de Estudios Sociales/ALOP, Lima, 2002, pp. 97-109.

SOJA, Edward, Postmodern Geography, Ed. Vers, New York, 1989, 235 pp.

STEDILE, João Pedro, *Reforma Agraria brasileña en marcha*, en Tintají, Quito, No. 35, Diciembre de 2003, p. 11.

TANAKA, Martín, (dir.), Las Fuerzas Armadas en la región andina ¿No deliberantes o actores políticos?, Ed. Comisión Andina de Juristas, Lima, 2001, 368 pp.

THE WORLD BANK, A strategy for managing water in the Middle East and North Africa, Ed. World Bank, Washington D.C., 1994, 197 pp.

-----, World Development Indicators, Ed. World Bank, Washington D.C., 2004, 370 pp.

THOUMI, Francisco, *La economía política de las drogas ilegales en los Andes* en Comentario Internacional, Quito, No. 4, 2002, pp. 169-177.

TOKATLIAN, Juan Gabriel, (comp.), *Orden Mundial y Seguridad. Nuevos desafíos para Colombia y América Latina*, Ed. Tercer Mundo/SID/IEPRI, Bogotá, 1994, 256 pp.

-----, Estados Unidos, potencia y prepotencia. En el límite: la torpe norteamericanización de la guerra contra las drogas, Ed. UN, Bogotá, 1998, 210 pp.

- TORO, Marlene, *Un comedido abre las puertas de Colombia* en Tintají, Quito, No. 23, Junio de 2003, pp. 8-9.
- TORRES Armas, *Bolivia ante el reto de la integración hemisférica* en Umbrales, La Paz, No. 10, 2001, pp. 231-256.
- TORTOSA, José María, *La lucha estadounidense contra el terrorismo* en Ecuador Debate, Quito, No. 60, 2003, pp. 147-157.
- UCV, *Iniciativa para las Américas (Washington, Septiembre 1990)*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 215-217.
- , *Primera Cumbre de las Américas (Miami, Florida, 9 al 11 de diciembre de 1994)*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 219-222.
- , *Segunda Cumbre de las Américas. Declaración de Santiago de Chile (Abril de 1998)*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 223-226.
- , *Tercera Cumbre de las Américas. Declaración de Quebec, Canadá (Abril de 2001)*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 227-231.
- , *Declaración Ministerial de Quito. Séptima reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio. Ecuador, noviembre de 2002*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 233-245.
- , *Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 2, 2003, pp. 247-270.
- UGARTECHE, Óscar, Montesinos, la corrupción y las relaciones Perú-Estados Unidos, mimeo., México, 2001, 15 pp.
- UPS, Ley de Hidrocarburos (Ley 1689), Ed. SRL, La Paz, 2003, 53 pp.
- , Constitución Política del Estado (Bolivia), Ed. SRL, La Paz, 2003, 112 pp.
- URIBE, Diego, Los últimos derechos de Colombia en el Canal de Panamá, Ed. UN, Bogotá, 2000, 220 pp.
- VAICIUS, Ingrid e ISACSON, Adam, The "War on Drugs" meets the "War on Terror". The United States' military involvement in Colombia climbs to the next level, Ed. Center for International Policy, Washington, 2003, 20 pp.
- VALENTE, Marcela, *Un país transgénico* en Inter Press Service, Transgénicos. La fase oculta, Ed. Abya-Yala, Quito, 2001, pp. 131-133.
- VALENZUELA Feijóo, José C., *La firma capitalista: patrones de expansión, modos de la centralización y grupos supra-corporados* en Empresa, crisis y desarrollo, Ed. UAM, México, 1991, 219 pp.

- VALLENILLA, La nacionalización del petróleo venezolano (1975-1998), Tomo II, Ed. Porvenir, Caracas, 1998, 605 pp.
- VARGAS, Alejo, *El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina* *¿Nequívocada respuesta al problema insurgente y poca eficacia en la lucha contra el narcotráfico* en César Montúfar et. alli., Turbulencia en los Andes y Plan Colombia, Ed. Corporación Editora Nacional, Quito, 2003, pp. 141-178.
- VÉLEZ, Clara Isabel, *Vivir a la sombra de los paramilitares* en Milenio, México, 11 de junio, 2001, p.59.
- VERDESCO, Luis, y ARDAYA, Gloria, Entre la presión y el consenso: escenarios y previsiones para la relación Bolivia-Estados Unidos, Ed. ILDIS/UDAPE, La Paz, 1993, 369 pp.
- VIDAL, Gregorio, Privatizaciones, fusiones y adquisiciones: las grandes empresas en América Latina, Ed. UNAM/IIIE/Anthropos/UAM, México, 2001, 230 pp.
- VIERGUTZ, Alan, *La política energética de Venezuela y el sector privado*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 8, No. 2, 2002, pp. 209-218.
- VILAS, Carlos, *¿Populismos reciclados o neoliberalismo a secas? El mito del "neopopulismo" latinoamericano*, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Caracas, Volumen 9, No. 3, 2003, pp. 13-36.
- VILLEGAS Quiroga, Carlos, *De la crisis coyuntural a la crisis estructural*, en Umbrales, La Paz, No. 10, 2001, pp. 7-43.
- , Privatización de la industria petrolera en Bolivia. Trayectoria y proyectos tributarios, Ed. Postgrado en Ciencias del Desarrollo-UMSA, La Paz, 2002, 133 pp.
- VILLORO, Luis, El poder y el valor, Ed. FCE, México, 1997, 400 pp.
- WALLENSTEEN, Peter, *"El 11-s dividió al mundo". Entrevista realizada por María Cristina Rosas* en Metapolítica, México, vol. 8, No. 35, 2004, pp.45-49.
- WALLERSTEIN, Immanuel, *El tiempo del espacio y el espacio del tiempo: el futuro de la ciencia social* en Political Geography, No. 1, vol. 17, 1998, s/n.
- WALSH, Catherine, SCHIWY, Freya y CASTRO-GÓMEZ, Santiago (eds.), Indisciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Perspectivas desde lo andino, Ed. Abya-Yala/Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2002, 247 pp.
- ZAMBRANA Calvimonte, Humberto, *La crisis de Bolivia en el contexto de las crisis internacionales* en Umbrales, La Paz, No. 10, 2001, pp. 44-62.
- ZEA, Leopoldo (comp.), Geopolítica de América Latina y el Caribe, Ed. FCE/UNESCO, México, 1999, 225 pp.

ZIRNITE, Peter, Reluctant Recruits: the U.S. Military and the War on Drugs, Ed. WOLA, Washington, 1997, 51 pp.

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

ACCIÓN ECOLÓGICA, Sí a la vida. Otra América es posible. Geopolítica de la Energía en América Latina, 2002, presentación en power point.

-----, Defendamos la Amazonia, Quito, Julio, 2004, 25 pp., documento en archivo PDF.

AFP, Anuncia Bush la ampliación del Plan Colombia contra el narcoterror, en La Jornada, México, Noviembre 23, 2004, www.jornada.unam.mx/2004/nov2004/041123/mun4/html

ALIDE, Los ejes del desarrollo en Boletín ALIDE, Caracas, 2002, documento en archivo PDF.

BID, Plan de acción para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, www.bid.org

-----, Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, Ed. BID, 1996, documento en archivo PDF.

-----, y ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES, Financiación (sic) de proyectos transnacionales de infraestructuras en América del Sur (iniciativa IIRSA), Ed. BID, Madrid, 2002, 40 pp., documento en archivo PDF.

-----, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional sudamericana, Ed. BID, marzo de 2004, presentación en Power Point.

BONASSO, Miguel, La nueva guerra fría en La insignia, 19 de junio, 2001, www.lainsignia.org/2001/junio/polit-003.htm

BRITO, Jorge, El Plan Colombia y la geoestrategia para la región en Rebelión, 14 de octubre, 2001, www.belion.org/2001/brito/a240i/htm

CAF, Financiamiento Privado de Infraestructuras. Estudio de alternativas y experiencias en materia de proyectos de participación Público-Privada para América del Sur, Ed. CAF, 2002, 290 pp., documento en archivo PDF.

CAN, Iniciativa para la integración de la infraestructura regional suramericana. www.comunidadandina.org, 2004

CASON, Jim y BROOKS, David, EU, entre la gloria y la miseria en La Jornada, México, 28 de diciembre de 1999, www.jornada.unam.mx/1999/dic99/991228/mun4/html

-----, EU, a pasos agigantados hacia una sociedad opulenta y apolítica en La Jornada, 08 de noviembre de 2000, www.jornada.unam.mx/2000/nov00/001108/044a1mun.html

CIA, The World Factbook, 2005, www.cia.gov/cia/publications/factbook/index/html

-----, The World Factbook: Brazil, 2005, www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/br/html

----, The World Factbook: European Union, 2005, www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ee/html

-----, The World Factbook: United States, 2005, www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us/html

CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND, *Ecosistema forestal de Vilcabamba-Amboró del área prioritaria de conservación de la biodiversidad en los andes tropicales (Perú y Bolivia)*, ED. CEPF, 2001, 42 pp., documento en archivo PDF.

DE ALMEYDA, Paulo Roberto, *A diplomacia do governo Lula*, en La Insignia, 14 de junio, 2003, www.lainsignia.org/2004/junio/polit-014.htm

FAZIO, Carlos, *La cumbre de Brasilia, ante el expansionismo estadounidense en La Jornada*, México, 31 de agosto, 2000, www.jornada.unam.mx/2000/dic00/000831/mun4/html

FOBOMADE y Bank Information Center, Integración energética en el Cono Sur, Ed. FOBOMADE, La Paz, 2000, documento en archivo PDF.

FOBOMADE, Tratado de la Cuenca del Plata, La Paz, 2002a, documento en archivo PDF.

FOBOMADE, Tratado de Cooperación Amazónica, La Paz, 2002b, documento en archivo PDF.

FOBOMADE, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana, Ed. FOBOMADE, La Paz, 2003a, documento en archivo PDF.

FOBOMADE, Las venas del ALCA: integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Bolivia, un país de tránsito y de extracción de recursos, Ed. FOBOMADE/Ríos Vivos, La Paz, 2003b, 65 pp., documento en archivo PDF.

FOBOMADE, El Pantanal boliviano y los proyectos de desarrollos, Ed. FOBOMADE/Ríos Vivos/INR, La Paz, 2003c, 40 pp., documento en archivo PDF.

FORTUNE, *Who are the winners on war?*, 2003, www.fortune.com/2003/lists/warcompanies/html

GARCÍA, Leocenis, *Carbón barato en la revolución bolivariana en Verdades*, Caracas, No. 30, Octubre, 2004, Documento en archivo PDF.

GÓMEZ Serrano, Hernando, *América del sur: la gran mercancía. Geopolítica de la región amazónica*, en Perspectivas, Bogotá, No. 6, Enero de 2003, pp. 24-41, documento en archivo PDF.

HERNÁNDEZ Navarro, Luis, *Apuntes para comprender la guerra que llegó*, en La Jornada, México, 9 de octubre, 2001, www.jornada.unam.mx/035a2pol.html

IIRSA, Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur, en www.iirsa.org (2001)

ILDIS, El ABC del ALCA, 2003, La Paz, documento en archivo PDF.

KLARE, Michael, *Detrás del petróleo colombiano, intenciones ocultas* en Agencia Latinoamericana de Información, 20 de junio, 2000, www.alainet.org/klare/000620/html

KLARE, Michael, *Petropolítica global. Implicaciones del Plan Energético de Bush en el extranjero* en La Jornada, Julio 15 de 2002, www.jornada.unam.mx/2002/jul02/020715/035a1mun.html

-----, *Eventual crisis de energía amenaza mandato de Bush*, en La Jornada, Diciembre 18 de 2004, www.jornada.unam.mx/2004/dic04/041218/032a1mun.html

MARIACA, Enrique, *Proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos-México*, en: Política de hidrocarburos en Bolivia y observaciones al proyecto de venta de gas a México y Estados Unidos, Ed. FOBOMADE, La Paz, 2002a, documento en archivo PDF.

MARTÍNEZ, Fernando, *Estados Unidos, principal usuario de la vía; le sigue Japón* en La Jornada, México, 21 de diciembre, 1999, www.jornada.unam.mx/1999/dic21/991221/008a1eco.html

MARTÍNEZ Corbalá, Gonzalo, *Crisis energética y geopolítica del petróleo* en La Jornada, México, 13 de julio, 2001, www.jornada.unam.mx/2001/jul13/010713/005a1eco.html

MARTÍNEZ, Esperanza, *Transnacionales al asalto del petróleo ecuatoriano*, Ed. Acción Ecológica, Quito, 2002, documento en archivo PDF

MPD, Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001 – 2007, Caracas, 2000, documento en archivo PDF.

OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET, Department of Education, Febrero de 2005, www.ed.gov/index/html

OILWATCH, Globalización, transnacionales y petróleo, 2003a, documento en archivo PDF.

-----, Fuelling Global Warming: Federal Subsidies to Oil in the United States, 2003b, documento en archivo PDF.

POLEO, Víctor, *Washington dicta su política petrolera en Venezuela*, en Soberanía, Caracas, 2003, www.soberanía.info/may/2003/victor_poleo.htm

-----, *Argumentos y razones de una farsa trágica*, en Soberanía, Caracas, 2003, www.soberanía.info/may/2003/victor_poleo.htm

RÍOS, Claudia Patricia, Integración física fundamental para América Latina, Caracas, 2003, www.economiaenred.com

ROITMAN Rosemann, Marcos, *América Latina: entre los mitos y la utopía* en La Jornada, México, 7 de mayo de 2001, www.jornada.unam.mx/2001/may01/010507/008a1pol.html

STEINSLEGER, José, *Ecuador: ¿Portaviones del Pentágono?* en La Jornada, México, 27 de agosto, 2000, www.jornada.unam.mx/2000/ago27/000827/006a1opi.html

VARGAS Pazzos, René, *Componentes de la estrategia militar. El Plan Colombia y la base de EEUU en Manta* en La Insignia, Agosto 28, 2002, www.lainsignia.org/2002/agosto/mil-013.htm

VISCA, Paola, *Estados Unidos presiona, Brasil cede* en La Insignia, 12 de enero, 2004, www.lainsignia.org/2004/enero/econ-016.htm

WALLERSTEIN, Immanuel, *¿Superpotencia?* en La Jornada, México, 10 de noviembre, 2001, www.jornada.unam.mx/2001/nov01/011110/004a1mun.html

WAR RESISTERS LEAGUE, Cómo se utilizan tus impuestos federales. El presupuesto federal de los Estados Unidos en 2005, Enero 2005, www.warresisters.org

MAPAS Y ATLAS

DCL, *Mapa Político da República Federativa do Brasil*, Ed. Maia, Brasilia, 2004.

DIGSA, *Mapa físico de América del Sur*, Ed. Servicio Geográfico Militar de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, 200.

ECOPETROL, *Mapa del Sistema Nacional de Transporte de Hidrocarburos y Cuencas Sedimentarias*, Ed. Departamento de Asuntos Públicos, Bogotá, 2004.

IGAC, Atlas de Colombia, Ed. Ed. Instituto Geográfico Agustín Codazzi/Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá, 2003.

-----, *Mapa físico de la República de Colombia*, Ed. Instituto Geográfico Agustín Codazzi/Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá, 1992.

-----, *Mapa político administrativo de la República de Colombia*, Ed. Instituto Geográfico Agustín Codazzi/Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá, 1992.

-----, *Mapa político administrativo de la República de Colombia*, Ed. Instituto Geográfico Agustín Codazzi/Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá, 1992.

IGM, Atlas digital de Bolivia, Ed. Instituto Geográfico Militar Gral. Juan Mariano Mujía, La Paz, 2004a.

IGM, *Mapa físico y Político de América del Sur*, Ed. Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago, 1983.

IGM, *Mapa físico de la República del Ecuador*, Ed. Instituto Geográfico Militar de Ecuador, Quito, 2000.

-----, *Mapa político de la República del Ecuador*, Ed. Instituto Geográfico Militar de Ecuador, Quito, 2000.

- , Atlas de Ecuador, Ed. Instituto Geográfico Militar de Ecuador, Quito, 2004b., 1543 pp.
- IGM, *Mapa del Estado de Amazonas*, Ed. Instituto Geográfico Militar Simón Bolívar, Caracas, 1992.
- , *Mapa del Estado de Delta Amacuro*, Ed. Instituto Geográfico Militar Simón Bolívar, Caracas, 1992.
- , *Mapa del Estado de Zulia*, Ed. Instituto Geográfico Militar Simón Bolívar, Caracas, 1992.
- , *Mapa físico de la República Bolivariana de Venezuela*, Ed. Instituto Geográfico Militar Simón Bolívar, Caracas, 2003.
- , *Mapa político de la República Bolivariana de Venezuela*, Ed. Instituto Geográfico Militar Simón Bolívar, Caracas, 2003.
- , Atlas de Venezuela, Ed. Instituto Geográfico Militar Simón Bolívar, Caracas, 2003.
- IGN, *Frontera Perú-Bolivia*, Ed. Instituto Geográfico Nacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, 1991.
- , *Frontera Perú-Brasil*, Ed. Instituto Geográfico Nacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, 1991.
- , *Frontera Perú-Colombia*, Ed. Instituto Geográfico Nacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, 1991.
- , *Frontera Perú-Chile*, Ed. Instituto Geográfico Nacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, 1991.
- , *Frontera Perú-Ecuador*, Ed. Instituto Geográfico Nacional/ Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, 1991.
- , *Mapa Político de Perú*, Ed. Instituto Geográfico Nacional, Lima, 1999.
- , *Mapa Político Vial de Perú*, Ed. Instituto Geográfico Nacional, Lima, 1999.
- , *Perú Hidrográfico*, Ed. Instituto Geográfico Nacional, Lima, 1999.
- , Atlas de Perú, Ed. Instituto Geográfico Nacional, Lima, 2002, 1300 pp.
- ITMB, *International Map of Amazon Basin*, Ed. ITMB Publishing, Canadá, 2003.
- GÓMEZ, Nelson, Guía vial del Ecuador (Costa, Sierra, Región Amazónica y Galápagos), Ed. Ediguías, Quito, 2004, 69 pp.
- GRAN López, Pablo (dir.), Atlas Geográfico de Chile para la educación, Ed. Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1998, 143 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Apure, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Delta Amacuro, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Lara, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Mérida, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Monagas, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Sucre, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Táchira, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Trujillo, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Zulia, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MARNR, Atlas práctico de Venezuela. Dependencias Federales, Ed. El Nacional/Cartografía Nacional, Caracas, 2003, 10 pp.

MENA Nava, Romer, (coord.), Los espacios marinos bajo soberanía v/o jurisdicción de Venezuela en el Caribe y en el Atlántico, Ed. Instituto Geográfico Militar, Caracas, 2001, 30 pp.

TIRADO, Soria, Rodrigo, Ecuadorian Energy Directory. Oil, gas, power, mining and environment, Ed. DIEE, Quito, 2004, 250 pp.

-----, Mapa de la estructura petrolífera de Ecuador, Ed. DIEE, Quito, 2004.

PERIÓDICOS, REVISTAS, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, EMPRESAS TRASNACIONALES Y AGENCIAS INFORMATIVAS ELECTRÓNICAS

Banco Interamericano de Desarrollo, BID, www.iadb.org
www.iadb.org/aboutus/index.cfm?language=Spanish
www.iadb.org/aboutus/II/index.cfm?language=Spanish
www.iadb.org/aboutus/III/index.cfm?language=Spanish
www.iadb.org/aboutus/IV/index.cfm?language=Spanish

Cepal, www.eclac.org.
Cato Institute, www.elcato.org
Center for Strategy and International Studies, www.csis.org
Center for International Policy, www.ciponline.org
Central Intelligence Agency, www.cia.gov
Comando del Sur www.southcom.mil
Corporación, www.corpozulia
Department of Energy, www.bushenergy.com
Department of the State, www.usinfo.state.gov
Ejército de Liberación Nacional, www.eln-voces.com
El Comercio, www.elcomercio.com
El Espectador, www.elespectador.com.co
El Tiempo, www.eltiempo.terra.com.co
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, www.fobomade.org.bo
Global Water Partnership, www.gwp.org
www.gwp.org/aboutus/html
Grupo DuPont www.DuPont.com
IADB, www.iadb.org
IIRSA, www.iirsa.org
La Insignia, www.lainsignia.org
La Jornada, www.jornada.unam.mx
Le Monde Diplomatique, www.lemondediplomatique.fr
Milenio Diario www.mileniodiario.com.mx
Monsanto, www.monsanto.com
NACLA, Report of the Americas, www.nacla.org
Nizkor, www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan
OilWatch, www.oilwatch.org.ec
Policy, www.policy.com
Presidencia de Colombia, www.presidencia.gov.com
Rebelión, www.rebellion.org
Revista Cambio, www.cambio.com.co
Revista Letras Libres, www.letraslibres.com.mx
Revista Proceso, www.proceso.com.mx

School Of Americas Watch, www.soaw.org

Stockholm International Peace Research Institute, www.sipri.se

Tiempos del Sur, www.vientosdelsur.org

Transnational Institute, www.tni.org/drogas/andina/andina.htm

Venezuela Analítica, www.analitica.com/va/hispanica/hispanica_paz/default.asp